ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL

SUPLEMENTO AL Nº 113 VII LEGISLATURA 1 DE JUNIO DE 2010

SUPLEMENTO

SECCIÓN "J", DEFENSOR DEL PUEBLO

Informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente al año 2009.

ÍNDICE

Presentación 9

Capítulo I
Creación y marco normativo de la institución del Defensor del Pueblo. 13
I.1. Toma de posesión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia 15
I.2. Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, modificada por la Ley 9/2009, de 23 de noviembre 15
I.3. Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. 29

Capítulo II
Evolución de la institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. 45
II.1. Recursos humanos 47
II.1.1. Evolución de la plantilla del Defensor del Pueblo 47
II.1.2. Contenido y política del personal de la institución 50
II.1.3. Herramientas de Comunicación Interna 50
II.2. Recursos materiales 51
II.2.1. Necesidades presupuestarias. 51
II.2.2. Actividades realizadas y uso de los fondos recibidos. 53

Capítulo III
Supervisión de la actuación de la Administración Pública de la Región de Murcia 57
III.1. Introducción. 59
III.2. Agricultura y Agua. 61
III.3. Bienes Públicos. 63
III.4. Bienestar Social 66
III.5. Cultura. 74
III.6. Deportes 77
III.7. Derechos Sociales y Políticos 79
III.8. Educación 80
III.9. Empleo. 84
III.10. Hacienda Pública 87
III.11. Justicia 88
III.12. Medio Ambiente 90
III.13. Menores. 97
III.14. Procedimiento Administrativo 98
III.15. Salud 100
III.16. Seguridad Ciudadana 102
III.17. Servicios Públicos locales 103
III.18. Servicios Públicos esenciales, universales o de interés general 110
III.19. Urbanismo 111
III.20. Vivienda 117

Capítulo IV
Otras actuaciones 123
IV.1. Quejas no admitidas a trámite. 125
IV.2. Quejas derivadas 126
IV.3. Cumplimiento de resoluciones 127

Capítulo V
Administraciones hostiles, entorpecedoras o no colaboradoras 153
V.1. Introducción 155
V.2. Administraciones hostiles y entorpecedoras 155
V.3. Administraciones no colaboradoras 155
V.3.1. Administraciones a las que les es exigible una mejor colaboración en la contestación a las resoluciones de la institución 156
V.3.2. Administraciones que no motivan adecuadamente la no aceptación de nuestra resolución. 156

Capítulo VI
Difusión de la institución para su conocimiento por los ciudadanos 159
VI.1. Medios de comunicación 161
VI.1.1. Entrevistas con medios de comunicación 161
VI.1.2. Página WEB 162
VI.2. Colaboraciones con colectivos, asociaciones y agentes sociales 164
VI.2.1. Reuniones con colectivos sociales 164
VI.2.2. Reuniones con patronal y sindicatos 165
VI.3. Resoluciones del Defensor del Pueblo publicadas en prensa. 165

Capítulo VII
Relaciones con las instituciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 169
VII.1. Introducción 171
VII.2. Asamblea Regional. 171
VII.3. Comunidad Autónoma 172
VII.4. Órganos consultivos de la Comunidad Autónoma. 173
VII.5. Delegación del Gobierno y órganos dependientes de la Administración Estatal 173
VII.6. Federación de Municipios de la Región de Murcia 173
VII.7. Universidades y Órganos Académicos 174

Capítulo VIII
Relaciones institucionales con otras instituciones afines 177
VIII.1. Relaciones con el Defensor del Pueblo del Estado y Comisionados análogos de otras Comunidades Autónomas 179
VIII.2. Jornadas de Coordinación de Defensores: Sevilla 180
VIII.3. Relaciones Internacionales 184

Capítulo IX
Análisis estadístico de la actividad del Defensor del Pueblo en la Región de Murcia 187
IX.1. Datos generales 189
IX.2. Estadísticas de las quejas 192
IX.3. Estadísticas del procedimiento 194

Capítulo X
Recordatorios de Deberes Legales, Recomendaciones y Sugerencias 205
X.1. Agricultura y Agua 207
X.2. Bienes públicos 216
X.3. Bienestar social 223
X.4. Cultura 232
X.5. Deportes 243
X.6. Educación 246
X.6.1. Enseñanza no universitaria 246
X.6.2. Enseñanza universitaria 262
X.7. Empleo 272
X.8. Hacienda pública 283
X.9. Medio Ambiente 290
X.10. Procedimiento administrativo 337
X.11. Salud 340
X.12. Seguridad ciudadana 348
X.13. Servicios públicos locales 352
X.14. Servicios públicos, universales, esenciales y de interés general 367
X.15. Urbanismo 372
X.16. Vivienda 385

PRESENTACIÓN

Como mecanismo cualificado de defensa de los derechos y libertades fundamentales, el artículo 54 de la Carta Magna, configura al Defensor del Pueblo como "Alto Comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de los Derechos comprendidos en el Título Primero de la Constitución a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales". En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, desarrolla esta Institución, que actuará en colaboración con las figuras similares creadas en las Comunidades Autónomas al amparo de sus Estatutos de Autonomía o de las leyes que las desarrollen.

La posibilidad de existencia de órganos similares al Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas hizo que a partir de la promulgación del año 81 se fuera instituyendo, con ese u otros nombres, en diversas autonomías españolas. Así, en 1983 lo hizo Andalucía, en 1984 Cataluña y Galicia, en 1985 Aragón y Canarias, en 1988 la Comunidad Valenciana, en 1989 el País Vasco, en 1994 Castilla-León, en 2000 Navarra, en 2001 Castilla-La Mancha, en 2005 Asturias y en 2006 La Rioja.

En diciembre del año 2008 vio la luz en la Región de Murcia nuestra Institución, la más joven de las creadas hasta ahora, surgiendo con la gran fuerza que le daba la unanimidad, y el consenso de todos. En este sentido, quiero destacar el hecho de que cuando la Asamblea Regional aprobó el 20 de noviembre la Ley de creación de dicha Institución, lo hizo con el apoyo y acuerdo de todos los grupos políticos en ella representados, haciéndose realidad una vieja aspiración de nuestro sistema democrático. Como antecedentes hay que mencionar que la Proposición de Ley de Creación del Defensor del Pueblo de la Región había sido tratada en distintas sesiones de la Cámara Parlamentaria a lo largo de los últimos quince años.

Ese consenso en su inicio tiene una gran relevancia, ya que supone que esta Ley del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia nace con vocación y garantía de permanencia en el tiempo.

No es exagerado advertir que hemos asistido a un momento histórico en el desarrollo de la trayectoria democrática de la Región. Hace sólo un año, con mi nombramiento por unanimidad y posterior toma de posesión, dábamos un paso importante en la estructura legal del Estado Autonómico, un hito dentro de los 26 años de funcionamiento de las instituciones democráticas en nuestra tierra y la consolidación del marco legal de nuestra convivencia.

Las funciones reservadas a esta Institución eran ejercidas, hasta diciembre de 2008, por una Comisión parlamentaria de carácter permanente: la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. A esta comisión, que hasta ahora siempre ha funcionado por consenso, le corresponde conocer cuantos escritos dirijan los ciudadanos de la Región de Murcia a la Asamblea Regional para indicar la existencia de comportamientos lesivos a los derechos fundamentales, o señalar cualquier deficiencia en el funcionamiento de los organismos de la Administración Regional.

La misión fundamental del Defensor del Pueblo es velar por la protección de los derechos y libertades que asisten a los murcianos en el disfrute de la democracia y que están recogidos en el Título I de la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía con total independencia, imparcialidad y según su criterio.

En cuanto a las competencias que recoge la Ley 6/2008, hemos de decir que la de supervisión se extiende tanto a actos y resoluciones como a la omisión de las mismos, realizadas por el sector público autonómico, integrado por los organismos y empresas públicas, entidades y fundaciones. También a las entidades locales, incluidos sus organismos y cualquier otra Administración con sede y competencias en el ámbito territorial de la

Comunidad Autónoma. Una mención especial merece aquí señalar que las competencias del Defensor se extienden a las universidades públicas de la Comunidad Autónoma, los colegios profesionales radicados en la Región, los órganos institucionales de la Región en su actividad administrativa y los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas cuya titularidad competencial corresponda a las administraciones públicas de la Región de Murcia, aunque sean en régimen de concesión administrativa.

En este primer año de vida de la Institución, se ha ampliado la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y se ha mejorado el control de las instituciones.

El trabajo principal del Defensor del Pueblo ha ido encaminado a investigar aquellas denuncias de los ciudadanos relativas a actuaciones de las administraciones, y más concretamente a irregularidades, omisiones administrativas, negligencias, denegación de información, etc. Tras lo cual se han dirigido las recomendaciones o sugerencias a los organismos que puedan solucionar la denuncia y en su caso para lograr una mejora de los servicios de la administración.

Mi labor también ha sido de mediación entre los ciudadanos y los responsables de la administración, proponiendo a los organismos y autoridades competentes afectadas fórmulas de conciliación o de acuerdo, que han facilitado una resolución rápida de la queja.

En estos primeros doce meses de funcionamiento de la Institución, nuestra labor se ha centrado en tres áreas de trabajo: crear la infraestructura de la Oficina, atender las quejas de los ciudadanos e iniciar una red de relaciones institucionales con organismos y colectivos sociales.

Se han puesto todos los medios posibles para facilitar el acceso al Defensor del Pueblo a cualquier ciudadano, español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación y de manera individual o colectiva, que nos ha presentando sus denuncias o quejas, hasta un total de 645, cuando ha considerado que en su relación con las Administraciones Públicas se han visto vulnerados sus derechos reconocidos en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Además de la actuación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia por la presentación de quejas suscritas individual o colectivamente, también se han iniciado varios procedimientos de oficio, cuando ante una determinada realidad, este Defensor ha considerado que podían verse afectados derechos fundamentales, individuales o colectivos, de los ciudadanos.

Considero importante también hacer referencia a las relaciones entre el Defensor del Pueblo de España y los comisionados parlamentarios autonómicos. En la mayoría de los territorios autónomos existía ya la figura, con distintas denominaciones. No se puede perder de vista que estas figuras afines no están sujetas al principio de jerarquía; la legislación es extremadamente respetuosa en este sentido y estipula una fórmula de cooperación que, a nuestros efectos, quedó establecida por la Ley 36/1985, y que hemos desarrollado mediante un convenio de colaboración específico, que firmamos en Murcia el pasado 1 de junio de 2009 entre el Defensor del Pueblo de España y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Una cooperación que se detalla en el artículo 12.2 de la mencionada Ley Orgánica, respetando siempre lo establecido en la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Este informe general, pretende comprender todas las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia hasta finales del año 2009, dando así cumplimiento al deber de rendición de cuentas previsto en el Título III de nuestra ley reguladora, en cuya virtud:

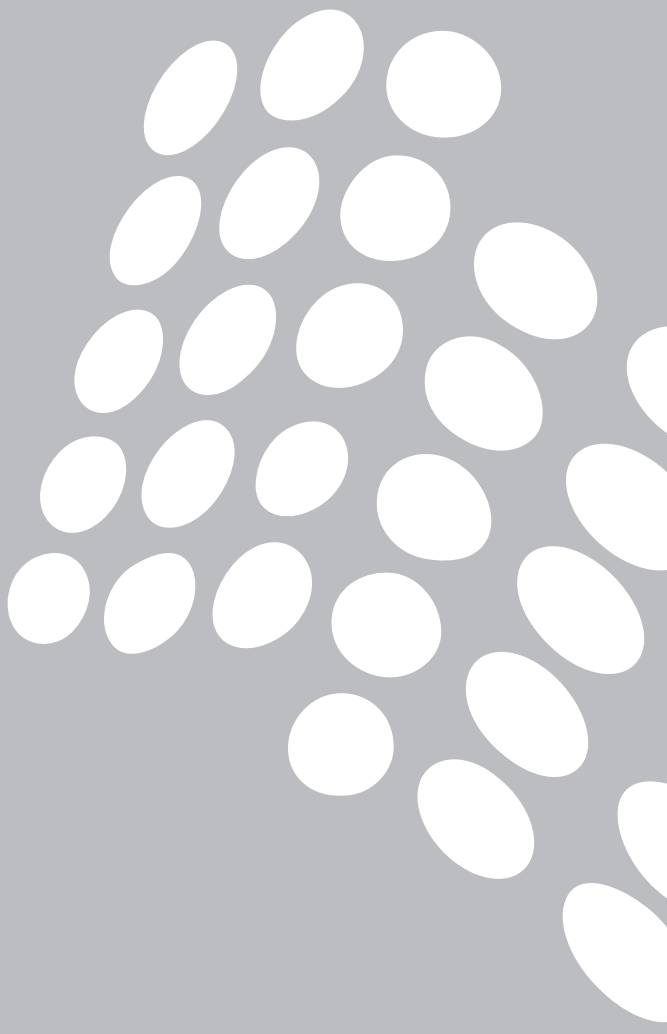
"Artículo 34.1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia presentará a la Asamblea Regional, en el primer trimestre de cada año, un informe de la gestión realizada en el año anterior, en el que figurarán el número y tipo de quejas presentadas y el de las que fueron rechazadas y sus causas, así como las cuestiones que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas, especificando las advertencias, sugerencias, recordatorios o recomendaciones admitidas por la Administración.

2. En el informe no constarán datos personales que pudieran permitir la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.

3. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ante el Pleno o la correspondiente Comisión de la Asamblea Regional".

En definitiva, proporcionar la información sobre nuestra actividad es la finalidad que pretende el presente volumen, el primer Informe Anual que se remite a la Cámara Parlamentaria, a los representantes elegidos de manera soberana por los ciudadanos de la Región de Murcia. Con la pretensión, también, de que se pueda valorar el esfuerzo realizado en el primer año de funcionamiento de la Institución, un periodo en el que se han sentado los cimientos y los pilares de la labor a realizar por el Defensor del Pueblo en el ámbito de la protección de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, incluidos en el Título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

José Pablo Ruiz Abellán



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo I

CREACIÓN Y MARCO NORMATIVO DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO



I.1. Toma de posesión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia

La referencia inicial del primer año de funcionamiento de la Institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia la encontramos en el debate y aprobación de la Ley de creación, el pasado 20 de noviembre de 2008, y en el nombramiento de la persona del Defensor del Pueblo seis días después, el 26 de noviembre, ambos con el apoyo de todos los grupos políticos.

Posteriormente, con la toma de posesión, el 2 de diciembre del mismo año, comienza el funcionamiento de la Institución, que como dice el Preámbulo de la ley, supervisa la actividad de la Administración para la defensa de los derechos de las personas como también en cuanto constituye un servicio a los intereses generales de la comunidad.

Son de un interés especial las intervenciones de los portavoces en el pleno que aprobó la Ley de creación del Defensor del Pueblo. Sus señorías expusieron un conjunto de valores fundamentales, definitorios de lo que sería el funcionamiento posterior de la Institución, sus pilares básicos. Se refirieron a la mejora de la calidad democrática, al consenso social, al fortalecimiento de las relaciones de convivencia, a la transparencia de la Administración Pública y a los derechos y libertades de los ciudadanos. La Institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha pretendido hacer suyos los valores que se adelantaron, (calidad democrática, consenso y convivencia, derechos y libertades de los ciudadanos).

I.2. Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, modificada por la Ley 9/2009, de 23 de noviembre

La figura del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia está reconocida en nuestra Comunidad Autónoma por la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, como una institución pública designada para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, y por tanto supervisa a este fin la actividad de la Administración, prestando de esta forma un servicio a los intereses generales de la Región de Murcia.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tiene por objetivo el velar por el funcionamiento transparente, eficaz, y sin merma de los derechos de los ciudadanos, de las administraciones públicas que prestan su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo es un colaborador crítico de las administraciones públicas; su actuación también está orientada a subsanar, mediante propuestas y sugerencias, las lagunas jurídicas u oscuridad de preceptos legales que puedan existir en el sistema de garantías de derechos de los ciudadanos e interesados en los diversos procedimientos de los que pudieran forman parte.

Antes de la aprobación de la Ley 6/2008, era la Comisión Parlamentaria de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional quien tramitaba las quejas de los ciudadanos, tratando así de resolver los conflictos que se suscitaban contra las distintas administraciones públicas.

La creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tiene su cobertura legal en la Constitución Española que establece la Institución del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en su título primero. También en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, de desarrollo de las funciones de dicha institución, que contempla la posibilidad de existencia de órganos similares en las comunidades autónomas.

Desde finales de noviembre de 2008 hasta diciembre de 2009 estuvo vigente la Ley 6/2008

en su redacción inicial, pero como consecuencia de su aplicación y de la experiencia práctica en la tramitación de las quejas presentadas en su primer año de funcionamiento, se consideró oportuno realizar un modificación en algunos de sus preceptos que culminó con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de origen en la experiencia derivada de la aplicación práctica de la Ley 6/2008, con carácter previo a su desarrollo reglamentario, y aconsejó la introducción de mejoras en la norma legal, de forma que ambos textos integrasen un corpus normativo más garantista de los derechos de los ciudadanos objeto de protección.

A la vista del informe razonado que el Defensor del Pueblo envío a la Asamblea Regional, los portavoces de los grupos parlamentarios consideraron adecuado proceder a la modificación de la Ley con el fin de ampliar la actuación del Defensor del Pueblo para proteger los derechos y libertades reconocidos en el título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, supervisando no sólo la actuación de la administración, sus entes, organismos o empresas, sino también la de prestadores de servicios públicos, servicios esenciales, universales o de interés general, así como a las corporaciones de derecho público de la Región de Murcia.

Se recoge a continuación el texto de la ley reguladora de la Institución, tal como quedó redactada como consecuencia de la modificación referenciada:

LEY 6/2008, DE 20 DE NOVIEMBRE, DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, MODIFICADA POR LA LEY 9/2009, DE 23 DE DICIEMBRE

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza y funciones del cargo

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia es el Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por esta para la protección y defensa de los derechos y libertades reconocidas en el Título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

2. Con esta finalidad podrá supervisar la actuación de la Administración, sus entes, organismos, empresas públicas y autoridades y personal que de ella dependan o estén afectos a un servicio público, esencial, universal o de interés general. Podrá supervisar también la actuación de las entidades locales de la Región de Murcia en las materias en las que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia atribuye competencia a la Comunidad Autónoma.

3. En el cumplimiento de su misión, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá dirigirse a autoridades, organismos, funcionarios y dependencias de cualquier Administración con sede en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y aquellas que ejerzan funciones delegadas o transferidas.

Artículo 2. Condiciones de elegibilidad

Podrá ser elegido Defensor del Pueblo de la Región de Murcia quien, de acuerdo con lo especificado en el artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, goce de la condición política de murciano, sea mayor de edad y se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 3. Procedimiento para la elección

1. Las candidaturas a Defensor del Pueblo de la Región de Murcia serán presentadas por los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, acompañadas de la aceptación del candidato y la correspondiente declaración de incompatibilidad ante la Mesa de la Asamblea Regional.

2. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia será elegido por mayoría de tres quintos de sus

miembros en sesión plenaria de la Asamblea Regional de Murcia convocada al efecto.

3. La elección será proclamada por la Presidencia de la Asamblea Regional de Murcia y de inmediato comunicada al Presidente de la Comunidad Autónoma, quien expedirá el Decreto de nombramiento, para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Artículo 4. Toma de posesión

El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante la Mesa de Asamblea Regional prestando juramento o promesa al fiel desempeño de su función, acatar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Artículo 5. Duración del mandato

La duración del mandato del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia será de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez, para el mismo periodo.

Artículo 6. Tratamiento protocolario y retribución

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tendrá el tratamiento protocolario acorde con su rango y función conforme a la normativa regional aplicable en esta materia, o en su defecto, por analogía, el establecido por la normativa estatal, así como la asignación económica que se fije en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 7. Cese

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia cesará por alguna de las causas siguientes:

- Fallecimiento.
- Expiración del mandato.
- Renuncia.
- Declaración judicial de incapacidad.
- Incumplimiento de los deberes del cargo.
- Incompatibilidad sobrevenida.
- Condena por delito doloso en sentencia firme.
- Inhabilitación judicial para el ejercicio de cargo público declarada en sentencia firme.
- Pérdida de la condición política de ciudadano de la Región de Murcia o del pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

2. Para que el cese se produzca por alguna de las causas previstas en los apartados e y f del punto 1 del presente artículo, la Asamblea Regional, previa audiencia del interesado en la comisión parlamentaria competente, emitirá dictamen para su ulterior votación en el Pleno siendo necesaria la mayoría de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara.

3. La vacante será declarada en todo caso por la Presidencia de la Asamblea Regional y comunicada al Presidente de la Comunidad Autónoma a los efectos de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

4. Declarada la vacante, se iniciará el procedimiento para la elección del nuevo Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en el plazo no superior a un mes.

5. Cuando el cese se produzca por la causa prevista en el apartado b del punto 1 de este artículo, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la nueva elección, limitándose al despacho ordinario de los asuntos.

En los demás casos, producida la vacante, desempeñará las funciones de Defensor del Pueblo el Adjunto al Defensor del Pueblo, por orden de prelación si lo hubiera, limitándose al despacho ordinario de los asuntos.

Artículo 8. Independencia

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones resolviendo los expedientes iniciados de oficio y las quejas formuladas a petición de parte con autonomía, independencia y según su criterio.

Artículo 9. Inviolabilidad

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, perseguido o juzgado en razón de las opiniones que formule o de los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo, ni aún después de cesar en el mismo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Artículo 10. Deber de auxilio

La Administración y, en general, todos los órganos y entes sujetos a la supervisión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia están obligados a auxiliarle, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones. Si alguna autoridad, funcionario o personal laboral contratado incumpliera esta labor de auxilio, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico de los mismos y, si procediere, del Ministerio Fiscal. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia incluirá estas actuaciones en su informe anual a la Asamblea Regional.

Artículo 11. Incompatibilidades

El cargo de Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se ejercerá en régimen de dedicación absoluta, siendo incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicas o privadas, y en particular con:

- Cualquier mandato representativo.
- La afiliación a partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales o entidades dependientes de los mismos.
- Cualquier cargo político o función administrativa del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales.
- Cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.
- El ejercicio de las carreras judicial, fiscal o militar.
- El desempeño de funciones directivas en colegios profesionales, asociaciones o fundaciones.
- El Defensor del Pueblo no podrá realizar actividad alguna de propaganda política.

Artículo 12. Declaración de bienes patrimoniales y de actividades

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia deberá efectuar, al inicio de su mandato, la correspondiente declaración de actividades, bienes e intereses.

2. La declaración de bienes estará referida a los que integran el patrimonio del interesado, con copia, en su caso, de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio que formulen durante el desempeño del cargo, conforme a la legislación tributaria.

3. Dependiente de la Presidencia de la Asamblea Regional de Murcia y bajo la custodia del Letrado-Secretario General, se habilitará un Registro de Intereses del Defensor del Pueblo, en el que se inscribirán las declaraciones sobre incompatibilidades, actividades y bienes del Defensor del Pueblo que deberán ser, en el caso de que se produzca cualquier modificación,

actualizadas por el Defensor del Pueblo dentro del mes siguiente a la aparición de la circunstancia modificativa.

TÍTULO II. COMPETENCIAS, INICIACIÓN DE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

CAPÍTULO I. COMPETENCIAS

Artículo 13. Ámbito competencial de actuación

La competencia de supervisión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se extenderá a la actuación de los siguientes sujetos:

- La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El sector público autonómico, integrado por los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas), empresas públicas y entes públicos, entidades y fundaciones, todos ellos con participación mayoritaria o dominio efectivo directo o indirecto de la Comunidad Autónoma, independientemente de que se rijan por el derecho público o por el privado y cualquiera que sea su denominación.
- Las entidades locales, incluidos sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria o dominio efectivo directo o indirecto de las corporaciones locales, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado y cualquiera que sea su denominación, en las materias en que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia a la Región de Murcia.
- Cualquier otra Administración con sede y competencias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Las universidades públicas de la Comunidad Autónoma, así como sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas, independientemente de que se rijan por el derecho público o por el privado y cualquiera que sea su denominación.
- Las corporaciones de derecho público radicadas en la Región de Murcia.
- Los órganos institucionales de la Región de Murcia en su actividad administrativa.
- Los órganos auxiliares de la Región de Murcia en su actividad administrativa.
- Los servicios públicos esenciales, universales o de interés general gestionados por personas físicas o jurídicas

Artículo 14. Competencias sobre actuaciones

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, para el ejercicio de sus funciones, tendrá las siguientes competencias:

- Iniciar y practicar una investigación para el esclarecimiento de actos, omisiones o conductas producidos por los sujetos a que se refiere el artículo 13 que afecten a una persona o a un grupo de personas.
- Dirigir recomendaciones, sugerencias o recordar los deberes legales a los órganos competentes y al personal al servicio de las administraciones públicas para procurar corregir actos ilegales o injustos o lograr una mejora de los servicios de la Administración. Asimismo podrá decidir la conclusión de la tramitación de una queja mediante su archivo, orientación al ciudadano o cualquier otra determinación que resulte procedente.
- Señalar las deficiencias de la legislación formulando recomendaciones al órgano correspondiente, a fin de dotar a la actuación administrativa y a los servicios públicos de la necesaria objetividad y eficacia en garantía de los derechos de los administrados.
- Emitir informes, en el área de su competencia, a solicitud de la Asamblea Regional o de cualquiera de las entidades públicas de la Región de Murcia.

– Divulgar, a través de todos los medios a su alcance y, en particular, a través de los medios de comunicación pública, la naturaleza de su trabajo, sus investigaciones y el informe anual. A tal efecto los medios de comunicación de titularidad de la Comunidad Autónoma deberán facilitar espacios al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia cuando éste lo estime conveniente para el mejor desarrollo de sus funciones y el conocimiento público de su actividad.
– Efectuar visitas de inspección a cualquier servicio o dependencia de los organismos y entidades a que se refiere el artículo 13, examinando o demandando documentos, oyendo a órganos, personal al servicio de las administraciones públicas y solicitando las informaciones que estime convenientes.
– Proceder a cuantas investigaciones estime convenientes, siempre que no colisionen con los derechos o intereses legítimos de las personas y de las entidades sujetas a control.
– Procurar, en colaboración con los órganos y servicios competentes, las soluciones más adecuadas en defensa de los intereses legítimos de las personas y la adecuación de los órganos administrativos a los principios de objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho.
– Solicitar mediante citación la comparecencia de cualquier persona que ostente la condición de personal al servicio de las administraciones objeto de supervisión por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia que razonablemente pueda dar información relacionada con el asunto a investigar.
– Dirigirse a la Administración periférica del Estado en la Comunidad Autónoma para que colabore o facilite documentación relacionada con la actuación del mismo.

CAPÍTULO II. INICIO DE LA ACTUACIONES

Artículo 15. Origen de las actuaciones

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, omisiones y resoluciones de cualquiera de las administraciones públicas a que se refiere el artículo 13 y de los agentes de éstas, en relación con las personas, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española y el respeto debido a los derechos y libertades proclamados en su título primero.

Artículo 16. Extensión de las actuaciones

Las atribuciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se extienden a la actividad administrativa de los miembros del Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 13.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE LA TRAMITACIÓN

Artículo 17. Solicitantes de una queja

1. Podrán dirigirse al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia para solicitarle que actúe en relación con la queja que se formule:

– Las personas físicas o jurídicas que manifiesten un interés legítimo relativo al objeto de la queja. No será impedimento la nacionalidad, la residencia, la minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión, ni en general cualquier relación de sujeción o dependencia especiales de una administración o de un poder público.
– Los diputados de la Asamblea Regional de Murcia, y también los diputados y senado-

res de las Cortes Generales elegidos por la circunscripción electoral de Murcia.
– Las comisiones parlamentarias de la Asamblea Regional de Murcia.
– Los miembros de las corporaciones locales de la Región de Murcia podrán solicitar la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en su ámbito territorial, excepto en las materias relacionadas con el funcionamiento de la corporación.

2. La correspondencia y las demás comunicaciones que las personas físicas privadas de libertad por el hecho de hallarse en centros de detención, de internamiento o de custodia, mantengan con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia gozan de las garantías que establece la legislación vigente.

3. No podrá presentar queja ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ninguna autoridad administrativa, en asuntos de su competencia.

4. No podrá presentar queja el personal adscrito a la oficina del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Artículo 18. Presentación de la queja

1. Las quejas o peticiones se presentarán, en escrito firmado por el interesado o su representante legal y con sus datos de identificación y domicilio, en el que se harán constar de forma razonada y con la debida claridad los hechos en que se basan, acompañando los documentos que puedan servir para la comprensión del caso y pudiendo solicitar su confidencialidad.

2. Igualmente se podrán presentar quejas por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o cualquier otro, siempre que estén garantizados los datos personales y la identidad del solicitante y todo ello en los términos que reglamentariamente se fijen al efecto.

3. Las quejas orales podrán ser presentadas en la oficina en que tenga su sede el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. Estas quejas serán transcritas y posteriormente leídas al afectado y firmadas por el mismo.

4. Las actuaciones de oficio podrán iniciarse sin limitación de plazo, y para el resto de las actuaciones se aplicarán los plazos al efecto establecidos reglamentariamente.

Artículo 19. Gratuidad

Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia serán gratuitas para la persona interesada y no será necesaria la asistencia de abogado ni de procurador.

Artículo 20. Registro de las quejas

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia deberá registrar y acusar recibo de todas las quejas que se le presenten, pudiendo tramitarlas o rechazarlas; en este último caso deberá notificárselo al interesado mediante escrito motivado en el que podrá informarle sobre las vías más oportunas para hacer valer su derecho.

2. Asimismo, se informará al interesado que la presentación del escrito de queja, ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, no suspenderá la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales que hayan podido dictarse al respecto, ni interrumpirá los plazos legales para recurrir, en su caso, contra ellos.

Artículo 21. Rechazo de las quejas

1. Todas las quejas recibidas serán objeto de una valoración preliminar encaminada a resolver sobre su admisibilidad.

2. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia no investigará las quejas cuyo objeto se encuentre pendiente de una resolución judicial, y podrá suspender su actuación si se interpusiera o formulase

por persona interesada demanda, denuncia o recurso ante los tribunales. Ello no impedirá, no obstante, la posibilidad de investigación sobre la problemática general que, en su caso, se deriva de la queja presentada. En cualquier caso velará porque las administraciones resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

3. Las quejas anónimas serán rechazadas.

4. Asimismo, podrán ser rechazadas aquellas quejas en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- No se aprecie interés legítimo.
- Se manifieste mala fe o un uso abusivo del procedimiento con el interés de perturbar o paralizar la Administración.
- Estén desprovistas de justificación o no se aporten los datos que se soliciten.
- No se relacionen con su ámbito de competencias.
- No exista actuación previa de la Administración.

5. Cuando se compruebe que la queja fue realizada con mala fe y aparezcan indicios de criminalidad, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

6. Las decisiones y resoluciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia referentes a las quejas no serán susceptibles de ningún tipo de recurso. Las quejas que se formulen tampoco interrumpirán los plazos previstos para el ejercicio de las acciones procedentes en vía administrativa o jurisdiccional.

Artículo 22. Inicio de la investigación

Una vez admitida la queja a trámite o iniciadas las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia acordará las medidas que considere oportunas para su aclaración, pudiendo ponerlo en conocimiento del órgano administrativo, entidad o corporación afectados para que se le informe por escrito sobre la cuestión planteada en el plazo máximo de un mes. Tal plazo será susceptible de modificación cuando concurran circunstancias que lo aconsejen, a juicio del Defensor del Pueblo.

Artículo 23. Quejas contra personas al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma

1. Si la queja a investigar afecta a la conducta de personas al servicio de la Administración en relación con la función que desempeñan, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia lo comunicará al afectado y al organismo del que dependa.

2. En el plazo de diez días el afectado o, en su caso, el órgano de que dependa, responderá por escrito sobre los hechos y las circunstancias objeto de la queja o que se deduzcan del expediente y aportará los documentos y testimonios que considere adecuados.

3. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a la vista de la contestación y de la documentación aportada, puede requerir a la persona afectada, o, en su caso, al responsable del órgano de quien dependa para que comparezca a informar.

Artículo 24. Limitación de auxilio

El superior jerárquico o la autoridad que prohíba al personal a su servicio responder a las requisitorias del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, deberá manifestárselo mediante escrito motivado dirigido al funcionario y al propio Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y, a partir de ese momento, asumirá la responsabilidad del expediente.

Artículo 25. Libertad de acceso y deber de colaboración

1. La institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tendrá libre acceso a los archivos

y registros administrativos, así como a los expedientes y documentación administrativa que se estimen relacionados con el objeto de la investigación.

2. Las autoridades, funcionarios y todo el personal dependiente de la Administración Pública a los que se refiere el artículo 1.3 de esta Ley deberán facilitar al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia o a la persona en quien delegue, las informaciones, asistencia y entrada en todas las dependencias, centros y organismos. Igualmente deberán poner a su disposición los datos, expedientes o cualquier clase de documentos que permitan llevar a cabo adecuadamente la actuación investigadora.

Artículo 26. Reserva

Las actuaciones que se llevaren a cabo en el curso de una investigación se realizarán con respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de incluir su contenido en los Informes a la Asamblea Regional, si el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia lo considera conveniente.

Artículo 27. Acción por responsabilidad

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá hacer público el nombre de las autoridades, de los funcionarios o de los organismos públicos que obstaculicen sus funciones. Igualmente podrá destacar este hecho en el informe anual a la Asamblea Regional de Murcia, y en el caso de que persistan en una actitud hostil o entorpecedora podrá ser objeto de un informe especial.

2. Los que impidan de cualquier forma la actuación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrán incurrir en responsabilidad penal. Para la aclaración de los hechos, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia deberá dar traslado de los antecedentes al Ministerio Fiscal.

3. Si el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia descubriera irregularidades en el funcionamiento de la Administración, lo pondrá en conocimiento del órgano competente o lo hará saber al Ministerio Fiscal.

Artículo 28. Resoluciones

En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales o decidir la conclusión del caso en la forma que estime procedente.

En ningún caso podrá modificar o anular actos o resoluciones administrativas; no obstante, podrá sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquellos.

En todos los casos, los afectados por las resoluciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia vendrán obligados a responder por escrito en el plazo de un mes. Tal plazo será susceptible de modificación cuando concurran circunstancias que lo aconsejen, a juicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Artículo 29. Fórmulas de conciliación

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia puede proponer a los organismos y autoridades afectados, en el marco de la legislación vigente, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas.

2. Si en la investigación de una queja o de un expediente estima que la aplicación de las disposiciones normativas conduce a un resultado injusto o perjudicial, podrá recomendar o sugerir a la institución, al departamento o a la entidad competentes las medidas o los criterios que considere adecuados para remediado o las modificaciones que le parezca oportuno introducir en los textos normativos.

Artículo 30. Deber de informar a los interesados

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia deberá informar del resultado de las investigaciones, gestión efectuada y de sus conclusiones, incluso en el caso de archivo de sus actuaciones, al autor de la queja, al Servicio de la Administración Pública afectada o que de ella dependa, y a la autoridad del organismo o de la entidad en relación con la que se hubiera formulado la queja o iniciado el expediente de oficio.

2. Cuando el inicio del expediente sea debido a una petición parlamentaria, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia informará del resultado al Presidente de la Asamblea Regional.

3. Contra las decisiones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia no cabrá recurso alguno.

Artículo 31. Indemnización a particulares

Los gastos efectuados o los perjuicios materiales causados a los particulares que no hayan promovido la queja, al ser llamados a informar por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, serán compensados con cargo a su presupuesto, una vez hayan sido debidamente justificados. En todo caso se regulará en el desarrollo reglamentario de la presente ley.

Artículo 32. Continuidad en sus funciones

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ejercerá sus competencias sin verse interrumpido por la discontinuidad de los períodos de sesiones de la Asamblea Regional ni por su disolución o expiración de mandato, manteniendo en tales casos sus relaciones con la Diputación Permanente.

2. La declaración de estados de excepción o de sitio no interrumpirán la actividad del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, ni el derecho de los ciudadanos a acceder al mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.

Artículo 33. Exigencia de responsabilidad, recursos de amparo e inconstitucionalidad

1. En los supuestos en que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en el ejercicio de su actividad, entendiere que procede la exigencia de responsabilidad a cualquier autoridad, agente o personal al servicio de cualquiera de las administraciones públicas de su ámbito competencial, iniciará acción de responsabilidad de oficio o se dirigirá al órgano o institución competente para que exija en su caso la responsabilidad que corresponda.

2. Cuando el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia considere que una ley o disposición con fuerza de ley contradice el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia o que una disposición, resolución o acto emanado de la Autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeten el orden competencial establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia o la ley correspondiente, se dirigirá al Gobierno de la Región de Murcia o a la Asamblea Regional, en su caso, instándoles a interponer el pertinente recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia.

3. La recomendación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que deberá ser motivada, se publicará en el *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, o en el de la Asamblea Regional, según proceda.

4. Si el Gobierno o la Asamblea Regional de Murcia no interponen recurso de inconstitucionalidad o no estuviesen legitimados para interponerlo, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá dirigirse al Defensor del Pueblo del Estado remitiéndole el expediente para su conocimiento.

5. El Defensor del Pueblo podrá dirigirse motivadamente al Defensor del Pueblo del Estado, solicitando que éste, en defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos y siempre que lo considere oportuno, interponga o ejercite recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

TÍTULO III. INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 34. Informe anual

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia presentará a la Asamblea Regional, en el primer trimestre de cada año, un informe de la gestión realizada en el año anterior, en el que figurarán el número y tipo de quejas presentadas y el de las que fueron rechazadas y sus causas, así como las cuestiones que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas, especificando las advertencias, sugerencias, recordatorios o recomendaciones admitidas por la Administración.

2. En el informe no constarán datos personales que pudieran permitir la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.

3. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ante el Pleno o la correspondiente Comisión de la Asamblea Regional.

Artículo 35. Otros informes

1. Cuando, a juicio del Defensor del Pueblo, las circunstancias lo aconsejen, podrá elaborar informes monográficos sobre cuestiones concretas, sean estas consecuencia de las quejas recibidas, de las actuaciones realizadas de oficio o resulten de interés general.

2. Igualmente, cuando la urgencia de los hechos lo aconseje, podrá elaborar informes especiales.

3. Unos y otros serán expuestos en comparecencia por el Defensor del Pueblo y debatidos ante el Pleno o en la correspondiente Comisión parlamentaria.

Artículo 36. Publicación

1. Los informes del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se publicarán en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y se anunciarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. La institución del Defensor del Pueblo contará con una web actualizada que sirva como canal de información y comunicación.

TÍTULO IV. RELACIONES INSTITUCIONALES

Artículo 37. Relaciones con el Defensor del Pueblo del Estado y comisionados análogos de otras comunidades autónomas

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, para cumplir con lo establecido en esta Ley, cooperará con el Defensor del Pueblo del Estado y coordinará con él sus funciones. En el marco de la legislación vigente, se podrán celebrar convenios de colaboración entre ambas instituciones, de los que se dará traslado a la Asamblea Regional y se publicarán en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional. Dichos convenios deberán fijar su duración, las administraciones a las que se refiere y las materias concretas a las que afectan, las facultades que podrá ejercer el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y el régimen de la relación con el Defensor del Pueblo del Estado.

2. En el ámbito de esta cooperación, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia dará traslado al Defensor del Pueblo del Estado de las quejas sobre la actuación de la Administración Pública del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia y deberá comunicarlo al autor de la queja.

3. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá también celebrar los convenios a los que se refiere este artículo con las instituciones análogas de otras comunidades autónomas, dando traslado de los mismos a la Asamblea Regional de Murcia, quien los publicará en el *Boletín Oficial de la Cámara*.

Artículo 38. Relaciones con la Asamblea Regional de Murcia

1. Las relaciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia con la Asamblea Regional se producirán a través de su Presidente.

2. El Defensor del Pueblo comparecerá ante la Comisión que determine el Reglamento de la Asamblea cuando sea convocado a los efectos de informar de sus actuaciones. Igualmente podrá comparecer a petición propia cuando lo estime oportuno.

Artículo 39. Relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

1. Las relaciones del Defensor del Pueblo con el Consejo de Gobierno y su Presidente se llevarán a cabo a través de este último.

2. Las relaciones del Defensor del Pueblo con el resto de la Administración de la Región de Murcia se llevarán a cabo por conducto de quien ostente la titularidad de las distintas consejerías.

Artículo 40. Relaciones con los demás sujetos sometidos a supervisión

Las relaciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia con los demás sujetos a que se hace referencia en el artículo 13 de esta Ley se harán a través del titular del órgano que ostente la representación de los mismos.

Artículo 41. Relaciones con instituciones afines

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá establecer relaciones de colaboración con instituciones españolas, europeas e internacionales cuyo ámbito de función se extienda a la protección de las libertades públicas y los derechos fundamentales.

Artículo 42. Relaciones con la Administración de Justicia

Cuando el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia reciba quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en la Región de Murcia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de hacer referencia expresa a ellas en el informe anual que deberá elevar a la Asamblea Regional de Murcia.

TÍTULO V. DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES AL SERVICIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA

CAPÍTULO I. ADJUNTO AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 43. Nombramiento y cese

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá estar auxiliado por un máximo de dos adjuntos, que serán nombrados o separados por la Asamblea Regional a propuesta del Defensor del Pueblo y cuya resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. Para ser designado Adjunto del Defensor del Pueblo serán precisas las condiciones establecidas para el Defensor del Pueblo en el artículo 2 de la presente Ley.

3. El Adjunto del Defensor del Pueblo cesará automáticamente en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo.

Artículo 44. Inviolabilidad e incompatibilidades

El Adjunto al Defensor del Pueblo esta sometido al mismo régimen de inviolabilidad e incompatibilidades que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Artículo 45. Declaración de intereses, actividades y bienes

El Adjunto deberá efectuar, tras su nombramiento, la correspondiente declaración de intereses, actividades y bienes en los términos establecidos en la presente Ley para el Defensor del Pueblo.

Artículo 46. Funciones de asistencia

1. En activo el Defensor del Pueblo, el Adjunto le asistirá en el ejercicio de sus funciones, y, sin perjuicio de su labor de asistencia, podrá recibir delegaciones para el ejercicio de las facultades previstas en esta Ley, excepto de las relativas a las relaciones con la Asamblea Regional de Murcia, el Gobierno o los Consejeros y la presentación de los correspondientes informes, en cuya preparación colaborará en su caso.

2. Cuando el Defensor del Pueblo tenga limitadas sus funciones al despacho ordinario de los asuntos por aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, la misma limitación se aplicará al Adjunto en sus labores de asistencia.

Artículo 47. Funciones por sustitución

1. El Adjunto sustituirá al Defensor del Pueblo en los supuestos de cese anticipado o de imposibilidad temporal por enfermedad o ausencia justificada.

2. La sustitución será comunicada al Presidente de la Asamblea Regional.

3. Cuando actúe por sustitución del titular del cargo, el Adjunto gozará de las mismas funciones, prerrogativas y garantías que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

4. En caso de haber dos Adjuntos, en su nombramiento se determinará su orden de prelación.

CAPÍTULO II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 48. Régimen jurídico

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia elaborará su reglamento de organización y funcionamiento y lo elevará a la Mesa de la Asamblea Regional para su tramitación y aprobación, dando cuenta al Pleno de la Cámara.

CAPÍTULO III. MEDIOS PERSONALES

Artículo 49. Normas generales

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia elaborará, dentro de los límites presupuestarios, la relación de puestos de trabajo de la institución. Dicha relación determinará los puestos que corresponden a personal funcionario, laboral y eventual, con expresión de las características y sistema de provisión de cada uno de ellos. La plantilla será remitida a la Mesa de la Asamblea Regional para su aprobación.

SECCIÓN I. LA SECRETARÍA GENERAL

Artículo 50. Nombramiento y cese del Secretario General

1. El Secretario General, con nivel orgánico de Secretario General de la Administración de la Comunidad Autónoma, será nombrado y cesado libremente por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia entre funcionarios de cualquier Administración Pública integrados en el Grupo de clasificación A1, que acrediten reconocida competencia y un mínimo de cinco años de experiencia.

2. Su mandato concluirá en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo, sin perjuicio de que pueda ser nuevamente designado.

Artículo 51. Funciones

Bajo la dirección y supervisión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, corresponden al Secretario General las siguientes funciones:

- Dirigir los servicios administrativos y la gestión del personal al servicio de la institución.
- Prestar asesoramiento al Defensor del Pueblo en las materias de su competencia.
- Elaborar las propuestas de proyecto de presupuestos y de reglamento de organización y funcionamiento, así como de la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo.
- Cualesquiera otras que sean inherentes a su condición o le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo.

SECCIÓN II. DE LOS MEDIOS PERSONALES

Artículo 52. Personal

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá designar y disponer el cese libremente de los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con su reglamento de organización y funcionamiento y dentro de los límites presupuestarios.

2. Los asesores cesarán en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo, sin perjuicio de que puedan ser nuevamente elegidos.

3. El personal asesor y administrativo que se encuentre al servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, mientras permanezca en el mismo, tendrá la consideración de personal de la Asamblea Regional de Murcia, correspondiéndole a aquél su asignación de destino, y siendo aplicable al mismo igual régimen jurídico que al personal de la Cámara.

Artículo 53. Régimen del personal

Los funcionarios procedentes de la Administración de la Comunidad Autónoma o de los entes locales que pasen a prestar servicios en la institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, serán declarados en situación de servicios especiales y tendrán derecho a la reserva de plaza y reserva de puesto de trabajo y destino que ocupasen con anterioridad y al cómputo, a todos los efectos, del tiempo transcurrido en esta situación. Cuando el personal provenga de otras administraciones públicas, o entidades distintas de las anteriores, se estará a lo dispuesto en la legislación que les sea aplicable.

CAPÍTULO IV. MEDIOS MATERIALES

Artículo 54. Presupuesto

1. La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia constituirá un programa específico en el presupuesto de la Asamblea Regional de Murcia. Su elaboración corresponde al propio Defensor, que lo remitirá antes del 30 de septiembre de cada año al Presidente de la Asamblea Regional para su incorporación al Presupuesto General de la Cámara y aprobación, en su caso.

2. El Defensor del Pueblo remitirá la liquidación de su Presupuesto a la Mesa de la Asamblea Regional antes de concluir el primer trimestre del ejercicio posterior al que se refiera la liquidación.

3. La autorización de los gastos y la ordenación de los pagos corresponderá al Defensor del Pueblo, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.

4. Los regímenes de contabilidad, intervención, autorización de gastos, contratación y adquisición de bienes y derechos serán los que rijan en la Asamblea Regional de Murcia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Defensor del Pueblo podrá proponer a la Asamblea Regional, mediante informe razonado, aquellas modificaciones de la presente Ley que considere que deban realizarse.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Asamblea Regional de la Región de Murcia iniciará el procedimiento para el nombramiento del primer Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Hasta tanto el Defensor del Pueblo disponga de medios personales y materiales, los servicios de la Asamblea Regional prestarán su colaboración para el desempeño de sus funciones.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Mientras el Defensor del Pueblo no tenga capacidad administrativa suficiente para el despacho de los asuntos, la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional de Murcia colaborará en la resolución de los mismos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan y a los Tribunales y autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

I.3. Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia

Con la publicación de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se produjo la entrada en funcionamiento de esta Institución y posteriormente era necesario establecer la norma reglamentaria por la que ha de regirse su organización y funcionamiento.

Este último acontecimiento tuvo lugar el 10 de diciembre de 2010 con la aprobación por la Mesa de la Asamblea Regional del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de 16 de diciembre de 2010 y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 14 de enero de 2010.

Así, atendiendo al artículo 51 de la Ley 6/1998, la Secretaría General elaboró la propuesta de reglamento de organización y funcionamiento cuyo contenido resumido fue el siguiente:

Titulo I. Disposiciones Generales

Este Título hace referencia al objeto del Reglamento con el fin de regular la organización y funcionamiento de la Institución.

Asimismo establece la naturaleza jurídica del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por ésta para la protección y defensa de los derechos y libertades reconocidos en el título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Para el cumplimiento de sus funciones regula el estatuto personal y la independencia de la persona del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Título II. Régimen de Organización y Funcionamiento

Está compuesto por dos Capítulos. En el Capítulo I, con seis secciones, engloba de los art. 5 al 16, donde hacen referencia a la estructura orgánica del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, así como a la elección, nombramiento, cese y funcio-

nes, tanto del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, como de los Adjuntos, el Secretario General, y Asesores. Se regula también como órgano la Junta de Coordinación y Régimen Interior, definiendo su naturaleza, composición y régimen de funcionamiento.

En el Capítulo II que consta de cinco secciones, englobando de los art. 17 al 31, se regula el régimen de funcionamiento de los expedientes de quejas que recibe la Institución, o aquellas actuaciones de oficio llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo.

Título III. **Medios personales.** Este Título está compuesto por los arts. 32 al 36. El personal al servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, estará constituido por los asesores y personal administrativo, pudiendo el propio Defensor del Pueblo, dentro de los límites presupuestarios, establecer la relación de puestos de trabajo de la Institución, remitiendo la plantilla a la Mesa de la Asamblea para su aprobación.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, podrá convocar procedimientos de selección para proveer las plazas descritas, asimismo podrá convocar becas o realizar convenios de colaboración entre universidades, u otros organismos, y la Institución.

Título IV. Régimen presupuestario, compuesto por los art. 37 al 41, en los cuales hace referencia a la dotación económica necesaria para el funcionamiento de la Institución.

Se realizará un anteproyecto de presupuesto, que se someterá a aprobación, antes de 20 de septiembre, por parte del Defensor del Pueblo; éste lo remitirá al Presidente de la Asamblea Regional, para su incorporación al Presupuesto General de la Cámara y posterior aprobación.

En relación al régimen de contabilidad, intervención, autorización y disposición de gastos, contratación y adquisición de bienes y derechos aplicables al Defensor del Pueblo de la Región, será el mismo que el dispuesto en la Asamblea.

Disposiciones Adicionales

- Primera. Se habilita al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a dictar cuantas resoluciones estime necesarias para la ejecución y desarrollo del presente reglamento.
- Segunda. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá proponer a lo órganos competentes de la Asamblea Regional, a través de su Presidente, la reforma, en su caso, del Reglamento.

Se recoge asimismo a continuación el texto del reglamento, tal como resultó aprobado y publicado en los respectivos boletines oficiales:

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en cumplimiento de las funciones asignadas por su ley reguladora, al amparo de lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.

Artículo 2. Naturaleza jurídica

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia es el Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por esta para la protección y defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Para cumplir con esta finalidad podrá supervisar la actuación de la Administración, sus entes, organismos, empresas públicas y autoridades y personal que de ella dependan. Al mismo tiempo podrá supervisar los servicios públicos, esenciales, universales o de interés general gestionados por personas físicas o jurídicas.

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá ser auxiliado por un máximo de dos Adjuntos, pudiendo asimismo dotarse de los medios materiales y personales para el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas, de acuerdo con la consignación presupuestaria designada al efecto.

Artículo 3. Estatuto personal

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, perseguido o juzgado en razón de las opiniones que formule o de los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo, ni aún después de cesar en el mismo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de fragante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

2. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, durante el ejercicio de su cargo, gozará del régimen jurídico de prerrogativas y garantías otorgado a los miembros de la Asamblea Regional de Murcia, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas.

3. La Asamblea Regional expedirá, para el ejercicio de sus funciones, un documento oficial acreditativo de su personalidad y de su cargo.

4. Las reglas establecidas en los apartados anteriores serán también de aplicación a los Adjuntos del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 4. Independencia

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia no estará sometido a mandato imperativo alguno, no pudiendo recibir instrucciones de ninguna autoridad, desempeñando sus funciones con autonomía, independencia, y según su criterio.

2. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia responderá de sus actuaciones en el ejercicio de su cargo ante la Asamblea Regional.

TÍTULO II. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN

Sección Primera. De la Oficina del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia

Artículo 5. Estructura orgánica

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se estructura en los siguientes órganos:

- Defensor del Pueblo de la Región de Murcia
- Adjuntos al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia
- Secretaría General
- Junta de Coordinación y Régimen Interior

2. Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá establecer cualquier otro órgano de asistencia que considere necesario para el ejercicio de sus funciones.

Sección Segunda. Del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia

Artículo 6. Elección, nombramiento y cese

1. La elección y nombramiento del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y en el Reglamento de 13 de junio de 2002 de la Asamblea Regional de la Región de Murcia. Si ostentara la condición de funcionario, pasará a la situación de servicios especiales según el cuerpo o escala de procedencia.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tendrá el tratamiento protocolario de Excelentísimo, y en cuanto al orden de prelación se estará conforme a lo establecido en la normativa regional aplicable en esta materia, o en su defecto, por analogía, el establecido en la normativa estatal.

2. El cese se producirá por las causas previstas en el artículo 7 de la ley 6/2008, de 20 de noviembre, si bien cuando éste se produzca por la causa recogida en la letra b) del apartado primero del citado artículo, continuará en el ejercicio de las funciones hasta la nueva elección, limitándose al despacho ordinario de los asuntos.

En los demás casos, producida la vacante, desempeñará las funciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, el Adjunto al Defensor del Pueblo, por orden de prelación si lo hubiera, limitándose al despacho ordinario de los asuntos.

3. La elección, nombramiento y cese será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Artículo 7. Funciones

Además de las competencias básicas establecidas en la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, corresponde al Defensor del Pueblo:

– Representar a la Institución.
– Proponer a la Asamblea Regional el nombramiento, cese y orden de prelación de los Adjuntos a la Asamblea Regional.
– Nombrar al titular de la Secretaría General y disponer su cese.
– Mantener relación directa con la Asamblea Regional a través de su Presidente.
– Mantener relación directa con el Presidente y demás miembros del Gobierno Regional, con el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia, así como con los presidentes o directores de las restantes administraciones y organismos incluidos en el artículo 13 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
– Dirigir y supervisar el funcionamiento interno de la Institución, aprobando las instrucciones para la mejor ordenación del servicio.
– Convocar y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior y dirigir sus deliberaciones.
– Decidir sobre las actuaciones de oficio, la admisión o inadmisión a trámite de las quejas y sobre la resolución última de las investigaciones.
– Dirigir la tramitación, comprobación e investigación de las quejas formuladas y de las actuaciones que se inicien de oficio.
– Decidir sobre los informes monográficos y especiales a realizar.
– Presentar ante la Asamblea Regional los informes anuales y, en su caso, los monográficos y especiales que prevé la ley.
– Respecto al personal:

1. Ejercer la superior autoridad sobre el personal de la Institución.
2. Aprobar la relación de puestos de trabajo en el marco de las disponibilidades presupuestarias, seleccionar y nombrar al personal al servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia confor-

me al régimen jurídico establecido para el personal de la Asamblea Regional.

3. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la Legislación de la Función Pública de la Región de Murcia.

– Ostentar la condición de órgano de contratación, ejerciendo las facultades correspondientes.
– Aprobar el proyecto de presupuesto de la Institución y acordar su remisión al Presidente de la Asamblea Regional, para su aprobación definitiva por la Mesa, e incorporación a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
– Autorizar y disponer los gastos, así como ordenar los pagos.
– Suscribir acuerdos o convenios de colaboración con organismos públicos o privados.
– Otorgar becas y ayudas para la realización de actividades que estime de interés.
– Divulgar su actividad, funciones e informes, así como cuanto redunde en un mejor conocimiento de su quehacer.
– Cualesquiera otras que no vengan expresamente atribuidas a otro órgano.

Sección Tercera. De los Adjuntos del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia

Artículo 8. Elección, nombramiento y cese

1. Los Adjuntos será nombrados y cesados por la Asamblea Regional a propuesta del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en los términos del artículo 43 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Si ostentara la condición de funcionario, pasará a la situación de servicios especiales según el cuerpo o escala de procedencia.

2. La toma de posesión de los Adjuntos tendrá lugar ante el Presidente de la Asamblea Regional y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, prestando juramento o promesa de cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y del resto del ordenamiento jurídico, así como del fiel desempeño de sus funciones. Los Adjuntos recibirán el tratamiento de Ilustrísimo.

3. El cese de los Adjuntos se producirá automáticamente con la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, así como por las mismas causas previstas para éste en el artículo 7 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El cese con motivo de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, no impedirá que pueda ser nuevamente nombrado.

4. La elección, nombramiento y cese será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Artículo 9. Funciones

1. Corresponde al Adjunto del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia:

– Sustituir al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En el caso de que haya dos Adjuntos, la suplencia se realizará conforme a su orden de prelación.
– Colaborar con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en las relaciones con la Asamblea Regional.
– Colaborar con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en las relaciones con las administraciones estatales, autonómicas, locales o supranacionales.
– Colaborar con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en la tramitación, com-

probación e investigación de las quejas formuladas y de las actuaciones que se inicien de oficio, proponiendo al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia cuantas actuaciones estime pertinentes.
- Colaborar con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en la preparación y elaboración del informe anual o los informes especiales o monográficos que deban elevarse a la Asamblea Regional.
- Cualesquiera otras funciones que les atribuyan la normativa vigente.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, compete a los Adjuntos aquellas funciones que expresamente les delegue o encomiende el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, si bien este último podrá avocar o recabar para sí dichas funciones o su conocimiento cuando estime oportuno.

Sección cuarta. De la Secretaría General

Artículo 10. Nombramiento, cese y régimen de suplencias

1. El Secretario General, con nivel orgánico de Secretario General de la Administración de la Comunidad Autónoma, será nombrado y cesado libremente por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en los términos del artículo 50 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, dando cuenta a la Asamblea Regional.

El cese con motivo de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, no impedirá que pueda ser nuevamente nombrado.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Secretaría General, será sustituido interinamente por el personal al servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia que este último designe.

Artículo 11. Funciones

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, corresponde al Secretario General, bajo la superior dirección del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia:

- La coordinación y gestión de la Institución.
- Desempeñar el gobierno del personal de la Institución, ejerciendo las competencias no atribuidas específicamente al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
- Elaborar los proyectos de planes generales de actuación y los programas de necesidades de la Institución.
- La gestión presupuestaria, y elaboración del informe relativo a la liquidación del presupuesto, proponiendo al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia su remisión a la Mesa de la Asamblea Regional, en los términos establecidos legalmente.
- La elaboración del informe anual a presentar a la Asamblea Regional, coordinando todos los recursos personales y materiales de la Institución.
- El asesoramiento al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en materias de su competencia.
- La coordinación y gestión del registro de entrada y salida de documentos, así como de la Oficina de Atención al ciudadano.
- Organizar y gestionar la protección de datos y los servicios de informática de la Institución.
- Cualesquiera otras funciones que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia le delegue o encomiende expresamente, si bien este último podrá avocar o recabar para sí dichas funciones o su conocimiento cuando estime oportuno.

Sección Quinta. De la Asesoría

Artículo 12. Nombramiento, cese y régimen de suplencias

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá designar y disponer el cese libremente de los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites presupuestarios.

Su cese se producirá automáticamente con la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, si bien podrán ser nuevamente nombrados.

2. Al frente de la Asesoría, existirá un Asesor Jefe que gestionará el funcionamiento de la misma, coordinando sus actuaciones con la Secretaría General, y bajo la dependencia orgánica de la misma.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Asesor Jefe, será sustituido interinamente por el personal al servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia que este último designe.

Artículo 13. Funciones

Corresponde al Asesor Jefe las siguientes funciones:

- La coordinación y gestión del área de asesoría.
- El impulso y asesoramiento de la tramitación, comprobación e investigación de las quejas formuladas y de las actuaciones que se inicien de oficio.
- Elaborar la propuesta de organización de la Asesoría, así como sus posibles modificaciones, para su consideración por la Junta de Coordinación y Régimen Interior y posterior aprobación por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
- Proponer al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a través de la Junta de Coordinación y Régimen Interior, los criterios uniformes para la resolución de las quejas.
- Asumir las demás funciones que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia le delegue o encomiende sin perjuicio de que éste pueda avocar o recabar para sí dichas funciones o su conocimiento cuando estime oportuno.

Sección sexta. De la Junta de Coordinación y Régimen Interior

Artículo 14. Naturaleza y composición

1. La Junta de Coordinación y Régimen Interior es el órgano de consulta y asesoramiento de la Institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia para el ejercicio de sus funciones y para la organización, administración y régimen interior.

2. La Junta de Coordinación y Régimen Interior estará integrada por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que la presidirá, el Adjunto o Adjuntos en su caso, que ejercerán la Vicepresidencia según su orden de prelación, por el Secretario General, que ostentará la condición de Secretario y por el Asesor Jefe.

3. A las sesiones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior podrán asistir, a efectos de información y previa convocatoria, cualquier otra persona que se estime oportuno.

Artículo 15. Régimen de funcionamiento

1. La Junta de Coordinación y Régimen Interior se reunirá al menos una vez al mes, y además siempre que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, estime conveniente convocarla.

2. Corresponde al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia su convocatoria y fijación del orden del día, a propuesta de los miembros de la Junta, o a iniciativa propia.

3. Corresponde al Secretario General la elaboración de las actas de la reunión, con reflejo expreso de los acuerdos adoptados.

Artículo 16. Atribuciones.

Corresponde a la Junta de Coordinación, bajo la superior dirección del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, las siguientes funciones:

- Asistir al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en el ejercicio de sus competencias en materia de personal y económico-financiera.
- Conocer sobre las cuestiones que afecten a la determinación de la plantilla del personal y de la relación de puestos de trabajo.
- Conocer sobre cuantas cuestiones correspondan a la elaboración de presupuestos su ejecución y liquidación, con carácter previo a su remisión a la Asamblea Regional.
- Cooperar con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en la labor de coordinación de la actividad de las distintas áreas y en la mejor ordenación de los servicios.
- Conocer sobre el informe anual, especiales o monográficos que se deban elevar a la Asamblea Regional.
- Conocer de las propuestas de obras, servicios y suministros, así como sobre las bases de contratación de los mismos.
- Conocer sobre la posibilidad de recomendar a los órganos legitimados para ello la interposición del recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo o el conflicto de competencia.
- Asistir al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en relación con las quejas o sugerencias presentadas por los ciudadanos.
- Cualesquiera otras funciones que, en el ámbito de sus competencias, le asigne el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Sección Primera. Aspectos generales

Artículo 17. Fases de tramitación

1. La tramitación de los expedientes se realizará en tres fases: admisión, instrucción y resolución.

2. La fase de admisión comprenderá la valoración preliminar de la queja y el acuerdo por el que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia decide la admisión o rechazo de su tramitación.

3. La fase de instrucción se llevará a cabo por el Asesor a quien se le asigne el expediente, mediante el estudio del asunto y la práctica de las gestiones e investigaciones necesarias, bajo la dirección del Asesor Jefe.

4. La fase de resolución corresponde al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que formulará a los organismos, autoridades o personal al servicio de las administraciones afectadas las advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales, o bien decidirá su archivo u otorgará información o acordará las fórmulas de conciliación que estime pertinentes.

Artículo 18. Deber de reserva y confidencialidad

1. Todo el personal al servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, guardará reserva y confidencialidad sobre las investigaciones o comprobaciones derivadas de la tramitación de una queja, de conformidad con el art. 26 de la Ley 6/2008, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

2. No podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan con motivo de la investigación de una queja.

Sección Segunda: Fase de admisión

Artículo 19. Incoación del expediente

1. Corresponde al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de oficio o a instancia de parte, iniciar las actuaciones necesarias sobre la posible vulneración por los sujetos referidos en el artículo 13 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución Española o en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

2. La presentación del escrito de queja o no suspenderá los procedimientos administrativos correspondientes.

Artículo 20. Requisitos de los escritos de quejas

1. La presentación de la queja podrá realizarse, en papel común, por cualquiera de los sujetos referidos en el artículo 17 de la ley reguladora, por escrito firmado por el interesado o su representante –siempre que se acredite la representación–, en el que se harán constar de forma clara y razonada los hechos en que se fundamenta la solicitud, acompañando los documentos necesarios para comprender el caso, en particular los que se hayan dirigido a la administración correspondiente –cuando existan–, pudiendo solicitar la confidencialidad.

Asimismo podrán presentarse las quejas por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o cualquier otro que permita el estado de la técnica, siempre que quede acreditada la identidad del solicitante. Cuando existan dudas sobre ésta última podrá solicitarse la ratificación personal del reclamante mediante personación en las Oficinas del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Las quejas expresadas oralmente se transcribirán por el personal adscrito a la Oficina del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, debiendo ser firmadas por el reclamante previa lectura de las mismas.

2. Las quejas y demás documentos dirigidos al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, podrán presentarse en el registro del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, o por cualquier otro medio de los establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Para la presentación de quejas se establece el plazo máximo de prescripción de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de las mismas.

Las actuaciones de oficio no tienen plazo de prescripción, pudiendo iniciarse en cualquier momento, por decisión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Sección Tercera: Fase de instrucción

Artículo 21. Principios informadores

La instrucción de quejas y, incoadas de oficio o a instancia de los ciudadanos, atenderán a los siguientes principios:

- Celeridad: Cuando sea posible, la Institución favorecerá la oralidad en la resolución de las quejas, dejando siempre constancia escrita de las gestiones realizadas.
- Libertad de Forma: se propiciará la subsanación de las faltas detectadas en el expediente, a favor del ciudadano.
- Acumulación de trámites: se podrán aunar aquellos trámites que por su naturaleza permitan una impulsión simultánea.
- Confidencialidad: el reclamante o peticionario podrá solicitar la confidencialidad del expediente, manteniéndose en este caso en secreto el nombre de las personas que formulen las quejas, salvo autorización expre-

sa de la parte para una mejor comprensión de la reclamación por la entidad a la que se solicite información.
– Gratuidad: la presentación de quejas al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia no supondrá coste alguno para los ciudadanos.

Artículo 22. Recepción de la queja.

1. El registro del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia entregará al reclamante personado en las oficinas, certificado justificativo de la presentación o copia con el registro de entrada si el ciudadano la hubiese aportado.

2. Una vez recibida la queja en la Oficina del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, esta le otorgará número de expediente, pudiendo alternativamente expedir acuse de recibo de esta o bien, en atención a los principios de celeridad y acumulación de trámites, someterla a valoración preliminar en los términos del artículo siguiente.

Artículo 23. Valoración preliminar

1. La valoración preliminar de las quejas se realizará por la Asesoría al Servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, siendo comprensiva de los siguientes extremos:

– Breve resumen de la queja o valoración.
– Análisis del precepto o preceptos constitucionales o estatutarios objeto de vulneración, y su incardinación en las competencias del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
– Determinación de la Administración u organismo afectado.
– Comprobación de la legitimación para actuar del reclamante en los términos de los artículos 17 y 18 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
– Propuesta de actuación conforme a los criterios reflejados en las letras anteriores, proponiendo la admisión o rechazo de la queja.

2. Corresponde al Asesor Jefe elevar la propuesta de valoración preliminar al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Artículo 24. Admisión o rechazo de la queja.

1. Compete al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia decidir sobre la admisión o inadmisión a trámite de las quejas planteadas, así como circunscribir la admisión a la actuación de conciliación o mediación, o de información o auxilio del reclamante en los términos de artículo 27.2 del presente reglamento.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia no entrará a examinar las quejas en las que esté pendiente o dictada resolución judicial sobre el objeto de que se trate, y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada recurso ante los órganos jurisdiccionales. Ello no impedirá la investigación de los problemas generales expuestos por las quejas presentadas.

2. Se podrá solicitar la subsanación de la queja, cuando del estudio de las mismas no sea posible determinar si existe algún derecho o libertad vulnerada, que administración u organismo ha intervenido, la legitimación del reclamante o su representante para actuar o cualquier extremo que se considere oportuno. A tales efectos se concederá al reclamante un plazo de diez días hábiles, prorrogables por cinco días hábiles más; contados desde la recepción de la notificación.

Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, se volverá a requerir nuevamente al reclamante, advirtiéndole que de no aportar la documentación solicitada, se le dará por desistido de su queja a los 3 meses desde la recepción del segundo requerimiento, sin perjuicio de las com-

probaciones, investigaciones o actuaciones que, de oficio, realice el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, cuando así lo estime conveniente.

3. La admisión de la queja se comunicará al reclamante con expresión de las actuaciones que se vayan a realizar a continuación para el mejor esclarecimiento de los hechos.

4. La inadmisión o rechazo de la queja, podrá proceder en los supuestos del artículo 21.3 y 4 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El acuerdo de inadmisión o rechazo será siempre motivado, informándose al ciudadano, si fuera posible, de la mejor forma de hacer valer su derecho.

5. Contra la decisión de admisión o inadmisión de la queja no cabrá recurso alguno, si bien el reclamante podrá reformular la queja si cambian los hechos de la misma.

Artículo 25. Obtención de información

1. Las solicitudes de información a las administraciones, organismos o entidades afectadas podrá realizarse por escrito u oralmente, dejando en éste último caso constancia de la actuación realizada. La información deberá prestarse con carácter preferente y urgente, y en todo caso en el plazo máximo de un mes, plazo éste que podrá ampliarse cuando así lo o autorice el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

2. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia o el personal a su servicio en quien éste delegue, podrá personarse en las dependencias de la entidad a la que se solicita información, consultando y obteniendo copias o certificados de expedientes, archivos o entrevistando al personal de la entidad, al objeto de obtener un mayor esclarecimiento de los hechos.

Cuando se trate de quejas contra personas al servicio de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el Art. 13 de la Ley 6/2008 del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, podrá –a la vista de la contestación y de la documentación aportada– citar a la persona afectada, o en su caso al titular del órgano de quien dependa para que comparezca a informar. La negativa a comparecer recibirá el tratamiento previsto en el artículo 27 y 33.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre.

3. El incumplimiento del deber de aportar la información a la que se refiere el apartado primero del presente artículo, se podrá calificar de actitud hostil o entorpecedora, haciéndose constar en el informe anual o especial presentado a la Asamblea Regional.

Los que impidan de cualquier forma la actuación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrán incurrir en responsabilidad penal.

Si el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia descubriera irregularidades en el funcionamiento de la Administración, lo pondrá en conocimiento del órgano competente o lo hará saber al Ministerio Fiscal, si se estimase que éstas fuesen constitutivas de delito.

Artículo 26. Propuesta de resolución

1. Una vez obtenida la información de las Administraciones, organismos y autoridades o demás personal a su servicio afectado por el objeto de la reclamación, el asesor encargado de la tramitación de la queja realizará un informe expresivo de la aplicación de la normativa en vigor a los hechos en cuestión, y las conclusiones derivadas del estudio de la queja.

2. Corresponde al Asesor Jefe elevar la propuesta de resolución al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a la vista del informe o informes evacuados por los asesores.

Sección Cuarta. Resolución de quejas

Artículo 27. Contenido de las resoluciones

1. De conformidad con el artículo 28 de la ley 6/2008, de 20 de noviembre, las resoluciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia adoptarán, según los casos, las siguientes formas:

- Advertencias: Son las resoluciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a través de las cuales se comunica a una administración, autoridad o funcionario, la necesidad de modificar un comportamiento entorpecedor de la facultades de investigación que ostenta la Institución, haciéndole saber las medidas que pueden adoptarse en contra de quien persiste en dicha actitud.
- Recomendaciones: Son las resoluciones dirigidas a manifestar a una administración, autoridad o funcionario, la conveniencia de efectuar determinadas actuaciones para rectificar un defecto o irregularidad.
- Recordatorios de deberes legales: Son las resoluciones encaminadas a recordar a una administración la obligación de ajustarse a un determinado precepto legal o disposición administrativa de carácter general.
- Sugerencias. Son las resoluciones a través de las cuales se aconseja a una administración, agente o autoridad la iniciación de alguna actividad o toma de alguna medida o la corrección de algún tipo de actuación o norma, en el marco de las funciones legalmente encomendadas a la Institución.
- Decisiones. Son las resoluciones por las que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia acuerda la realización de un acto de trámite o bien de un acto sobre el fondo del asunto que pone fin al procedimiento, pero de contenido distinto al reseñado en las letras anteriores.

2. Las resoluciones serán notificadas a las partes afectadas que vendrán obligados a responder por escrito en el plazo de un mes. Tal plazo será susceptible de modificación cuando concurran circunstancias que lo aconsejen, a juicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El silencio sobre la admisión o la no asunción motivada del contenido de la resolución podrá tener los efectos previstos en el Art.27.1 de la ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Artículo 28. Informaciones y fórmulas de conciliación

1. Cuando la queja planteada se limitase a consultar o solicitar información sobre alguna cuestión, el contenido de la resolución se ceñirá al citado extremo, pudiendo realizar cuantas consideraciones o actuaciones adicionales estime pertinente para satisfacer el contenido de la pretensión del reclamante o esclarecer los hechos objeto de investigación.

2. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá proponer a los organismos y autoridades afectados, en el marco de la legislación vigente, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas.

Artículo 29. Recursos

Las resoluciones, del art. 26 del presente reglamento, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, no serán susceptibles de recurso alguno.

Sección Quinta: De las investigaciones de oficio e informes

Artículo 30. Investigaciones de oficio

Las investigaciones que inicie el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia para documentar

posibles actuaciones de oficio, seguirán la misma tramitación que las quejas iniciadas a instancia de parte.

Artículo 31. Informes

1. Los informes que realice el defensor del Pueblo podrán ser:

- Informe anual: A presentar por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ante la Asamblea Regional, en el primer trimestre de cada año natural, con las características y régimen establecidas en el artículo 34 de su Ley reguladora.
- Informes monográficos: informes referidos a cuestiones concretas, que surjan como consecuencia de investigaciones de oficio, de quejas, o por razones de interés general.
- Informes especiales: Informes caracterizados por su urgencia, o por la naturaleza inaplazable de la cuestión a investigar.

2. Corresponde al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia la exposición de un resumen de los informes ante el pleno o comisión correspondiente de la Asamblea Regional.

En cumplimiento del art. 36.1 de la Ley 6/2008, todos los informes serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

TÍTULO III. MEDIOS PERSONALES

Artículo 32. Composición

El personal al servicio del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de acuerdo con el Capítulo III de su ley reguladora, estará constituido por los asesores y personal administrativo, que se encuentren al servicio de la misma.

Artículo 33. Relación y provisión de puestos de trabajo

1. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia elaborará, dentro de los límites presupuestarios, la relación de puestos de trabajo de la Institución. Dicha relación determinará los puestos que corresponden a personal funcionario, laboral y eventual, con expresión de las características y sistema de provisión de cada uno de ellos. La plantilla será remitida a la Mesa de la Asamblea Regional para su aprobación.

2. Cuando así se determine por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, podrán convocarse procedimientos de selección para proveer las plazas descritas.

3. Asimismo podrán convocarse becas o realizar convenios de colaboración en orden a favorecer la transferencia de conocimientos entre universidades, u otros organismos y la Institución.

Artículo 34. Régimen jurídico

1. Los funcionarios procedentes de la Administración de la Comunidad Autónoma o de los entes locales que pasen a prestar servicios en la institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, serán declarados en situación de servicios especiales y tendrán derecho a la reserva de plaza y reserva de puesto de trabajo y destino que ocupasen con anterioridad y al cómputo, a todos los efectos, del tiempo transcurrido en esta situación. Cuando el personal provenga de otras administraciones públicas, o entidades distintas de las anteriores, se estará a lo dispuesto en la legislación que les sea aplicable.

2. Corresponde al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia la asignación de destino al personal asesor y administrativo al servicio de la Institución, siéndole de aplicación el mismo régimen jurídico que el previsto para el personal de la Asamblea Regional.

3. El personal del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tendrá la dedicación que resulte de la correspondiente configuración del puesto en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 35. Acreditación

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia extenderá al personal a su servicio el documento acreditativo de dicha condición con carácter personal e intransferible. Este perderá su valor cuando se produzca el cese de la persona acreditada. La exhibición de dicho documento será título habilitante suficiente para personarse ante cualquier órgano o funcionario de las administraciones públicas sujeto a supervisión a los efectos previstos en la Ley 6/2008, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y en el presente reglamento.

Artículo 36. Régimen Disciplinario

El personal al servicio del Defensor del Pueblo podrá ser sancionado de acuerdo con lo previsto en la Legislación de la Función Pública de la Región de Murcia

TÍTULO IV. RÉGIMEN PRESUPUESTARIO

Artículo 37. Proyecto de Presupuesto

1. El Anteproyecto de Presupuestos será elaborado por la Secretaría General que lo someterá antes del 20 de septiembre de cada año a la aprobación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

2. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia remitirá el Proyecto de Presupuestos aprobado antes del 30 de septiembre al Presidente de la Asamblea Regional para su incorporación al Presupuesto General de la Cámara y aprobación, en su caso.

Artículo 38. Autorización de gastos y transferencias de créditos

1. El régimen de contabilidad, intervención, autorización y disposición de gastos, contratación y adquisición de bienes y derechos aplicable al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, será el mismo que el dispuesto para la Asamblea Regional.

2. Corresponde al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia la autorización y disposición de gastos, el reconocimiento de obligaciones y la ordenación de pagos sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.

3. Asimismo le corresponde aprobar las transferencias de créditos entre los distintos capítulos, artículos, conceptos y subconceptos presupuestarios, del programa presupuestario asignado dentro de la Sección de la Asamblea Regional, dando cuenta a la Mesa.

Artículo 39. Liquidación del presupuesto

Corresponde al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a propuesta del Secretario General, aprobar la liquidación del presupuesto de la Institución, que deberá remitirse a la Mesa de la Asamblea Regional en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley reguladora de la Institución.

Artículo 40. Control Interno

El control de la gestión económica-presupuestaria será el establecido por las Normas de Ejecución Presupuestaria de la Asamblea Regional.

Artículo 41. Compensación de gastos a particulares

1. En el presupuesto se contemplará una partida presupuestaria dirigida a compensar los gastos de aquellos particulares que, no habiendo insta-

do la queja, deban realizar a petición del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, alguna actuación que le suponga un coste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley reguladora.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se abonarán los gastos de desplazamiento en transportes públicos, debidamente justificados, y en transportes privados, con arreglo a las indemnizaciones por kilometraje que establezca el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. Los gastos derivados de alojamiento y compensación por pérdida de horas de trabajo, sólo se abonarán previa justificación de su imprescindible necesidad, así como los de los acompañantes de personas impedidas para desplazarse por sí mismas.

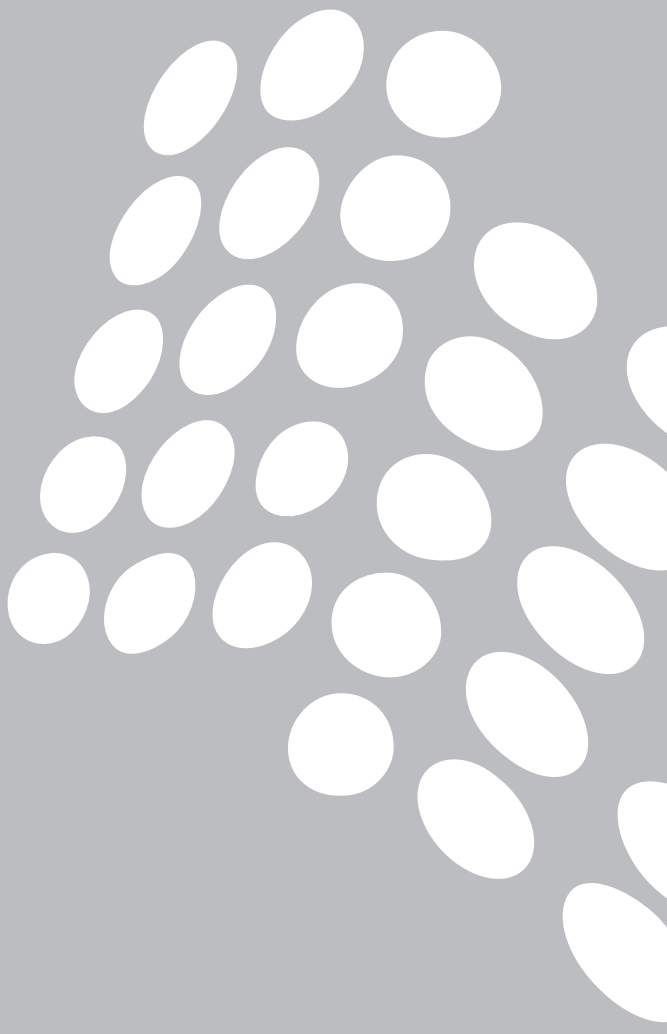
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Se habilita al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a dictar cuantas resoluciones estime necesarias para la ejecución y desarrollo del presente reglamento.

Segunda

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá proponer a lo órganos competentes de la Asamblea Regional, a través de su Presidente, la reforma, en su caso, del presente Reglamento.



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo II

EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA

II.1. Recursos humanos

II.1.1. Evolución de la Plantilla del Defensor del Pueblo

Con el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, recaido en José Pablo Ruiz Abellán, quién tomó posesión el 2 de diciembre de 2008, se inicia el funcionamiento de esta institución.

La Disposición Transitoria Segunda y Tercera de la Ley 6/2008, establecía que mientras el Defensor del Pueblo no tuviera capacidad administrativa suficiente para el despacho de los asuntos, la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional de Murcia colaboraría en la resolución de los mismos, así como que hasta tanto la Institución no dispusiera de medios personales y materiales, los servicios de la Asamblea Regional prestarían su colaboración para el desempeño de sus funciones.

Esta situación que preveía el precepto anteriormente citado tuvo un corto margen de vigencia en el tiempo, si bien es cierto que tras la publicación de la Ley 6/2008 ya fueron presentadas quejas por parte de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo, tras su toma de posesión, inició la gestión para la puesta en marcha de la infraestructura de recursos humanos suficientes para dar respuesta, no sólo a las quejas presentadas, sino al total de necesidades administrativas y de servicios generales que la Institución demandaba.

La Institución del Defensor del Pueblo se ubicó en Murcia en la calle Calderón de la Barca, nº 14 segunda planta y en un principio compartía los locales con la extinta Consejería de Desarrollo Sostenible.

El 12 de diciembre de 2008 se produjo el nombramiento para el puesto de Conductor-Ujier. Se pretendía de esta forma que el Defensor del Pueblo, no sólo tuviera la movilidad adecuada para el desarrollo de sus funciones, sino dar cobertura a las numerosas asistencias en Cartagena a la Asamblea Regional y a las múltiples visitas a Instituciones de la Región.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2008 se produjeron los nombramientos para los cargos de Secretario General, Secretaria Particular del Defensor del Pueblo y Jefe de Prensa.

El Secretario General, como dispone el artículo 50 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, tiene nivel orgánico de Secretario General de la Administración de la Comunidad Autónoma y es nombrado libremente por el Defensor del Pueblo entre funcionarios integrados en el Grupo A1.

Con este nombramiento se puso en marcha la intendencia administrativa necesaria para la Institución, así como la elaboración y tramitación de los presupuestos, reglamento de la organización, plantilla orgánica y gestión económica entre otras funciones.

Con el nombramiento de la Secretaria Particular y Jefe de Prensa se gestionaban la agenda del Defensor del Pueblo, las relaciones con los medios de comunicación, los actos de protocolo e incluso las primeras atenciones telefónicas y presenciales de los ciudadanos y autoridades.

Posteriormente y de conformidad con la previsión contenida en el artículo 49 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, fue remitida a la Mesa de la Asamblea Regional una propuesta de retribuciones iniciales y plantilla provisional para el año 2009.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, y con fecha 30 de diciembre de 2008 se aprobó la "Plantilla Provisional de la Institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia para el año 2009".

La citada plantilla incluía los siguientes puestos de trabajo:

ALTOS CARGOS

1. **Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.**
2. **Adjunto al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.**
3. **Secretario General.**

PERSONAL EVENTUAL

4. **Asesor Jurídico Jefe del Defensor del Pueblo.**
5. **Administrativo Servicios Generales.**
6. **Secretaria Particular Defensor del Pueblo.**
7. **Jefe de Prensa.**
8. **Coordinador Atención al Ciudadano.**
9. **Auxiliar de Atención al Ciudadano.**
10. **Conductor Ujier.**

Una vez aprobada la plantilla, y a la vista de las quejas que se iban presentado en la Institución y las necesidades que se iban generando de tipo económico administrativo y de personal, se puso en marcha la cobertura de los puestos que la plantilla provisional para 2009 había creado, y también dar cumplimiento al artículo 43 de la Ley 6/2008 que contempla la posibilidad que el Defensor del Pueblo pudiera estar auxiliado por un máximo de dos Adjuntos.

Así en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional nº 55 VII Legislatura de 30 de diciembre se publicó el nombramiento del Adjunto al Defensor del Pueblo, Raimundo Benzal Román.

Con los nombramientos del 12 de enero de 2009 de la Coordinadora de Atención al Ciudadano y del Administrativo de Servicios Generales se inicio la gestión de la tramitación de las quejas presentadas y de la tramitación de todos aquellos asuntos generales que precisaba la Institución como gestión económica, contratación, facturación, alquiler, nombramientos de personal, nóminas, seguridad social, etc.

Con la provisión del puesto de Coordinación de Atención al Ciudadano se comenzó, como ya se dijo, a la tramitación de las quejas, pero era necesario dar una respuesta al ciudadano y tramitar los procedimientos en todas sus fases y con la correspondiente resolución que finalizara el mismo, por ello se procedió al nombramiento de la Asesora Jurídica Jefe del Defensor del Pueblo el 1 de febrero de 2009.

A pocos meses del inicio de la Institución se valoró que, a la vista de las quejas que se iban presentando y de la demanda de necesidades económico-administrativas, no eran suficiente los recursos humanos previstos en la plantilla provisional, por ello el Defensor del Pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 6/2008 realizó una propuesta de modificación de la plantilla inicialmente aprobada.

Como consecuencia de lo anterior el 9 de febrero de 2009, la Mesa de la Asamblea Regional aprobó *"La Propuesta de Modificación de Plantilla del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia para el año 2009",* quedando de la forma siguiente:

PERSONAL EVENTUAL

1. **Asesor Jurídico Jefe.**
2. **Asesor Jurídico.**
3. **Jefe de Prensa.**
4. **Documentalista.**
5. **Secretaria Particular Defensor del Pueblo.**
6. **Secretaria Dirección.**
7. **Administrativo Servicios Generales.**
8. **Administrativos Servicios Generales.**
9. **Conductor Ujier.**
10. **Coordinador de Atención al Ciudadano.**
11. **Auxiliar de Atención al Ciudadano.**
12. **Auxiliar de Atención al Ciudadano.**

PERSONAL FUNCIONARIO

13. **Asesor Jurídico Económico.**

Conforme a la nueva plantilla, que recogía nuevos puestos, se hicieron los estudios económicos para poder hacer frente al coste del Capítulo 1 del estado de gastos "Gastos de Personal" ya que los créditos iniciales eran insuficientes.

Es por esto que mientras se tramitaba la correspondiente modificación presupuestaria, el resto de puestos fue cubriéndose conforme a las disponibilidades presupuestarias que se tenían. Así el 16 de febrero de 2009 se realizó el nombramiento de un Auxiliar de Atención al Ciudadano cuya misión era el registro de la quejas, atención telefónica, atención personalizada al ciudadano e inicio de tramitación de las expedientes de quejas.

De febrero hasta finales de julio de 2009 se estuvo trabajando con el personal nombrado hasta ahora citado, y a pesar de estar aprobados en plantilla otros puestos de trabajo no era posible su nombramiento por no tener crédito en el Capítulo 1 Gastos de Personal, situación ésta que se intentaba subsanar mediante una transferencia de crédito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Fueron estos meses un tiempo de precariedad en materia de recursos humanos. En el apartado de las quejas se trabajaba con una Asesora Jurídica Jefa, una Coordinadora de Atención al Ciudadano y un Auxiliar Administrativo que tenían que dar respuestas a un considerable volumen de quejas y de atención telefónica y presencial. Por lo que respecta a la Secretaría General, sólo se disponía de un Administrativo que tenía que responder de la facturación, gestión económica, contratación, presupuesto, nombramientos, nóminas y seguridad social.

Con la recepción de nuevos créditos se posibilitó un aumento en los recursos humanos del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. En concreto el 20 de julio se formalizaron los nombramientos de un Asesor Jurídico y un nuevo Administrativo de Servicios Generales. Con este nuevo personal se posibilitó descongestionar el área jurídica y la Secretaria General.

El 1 de agosto de 2009 se nombró a la Secretaría de Dirección con la misión de apoyo a la Secretaría General en temas de agenda, atención telefónica e inventario entre otros.

Por último el 1 de noviembre de 2009 se nombró un nuevo Auxiliar de Atención al Ciudadano para el apoyo en el registro de quejas, atención personal e inicio en la tramitación de las quejas.

Con este último nombramiento se finalizó el año en cuanto a recursos humanos en el Defensor del Pueblo, quedando pendiente de cubrir el puesto de Documentalista y Asesor Jurídico Económico. Por tanto al final del año 2009 la plantilla efectiva del Defensor estaba compuesta por:

ALTOS CARGOS

1. **Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.**
2. **Adjunto al Defensor del Pueblo.**
3. **Secretario General.**

PERSONAL EVENTUAL

4. **Asesor Jurídico Jefe.**
5. **Asesor Jurídico.**
6. **Administrativo Servicios Generales.**
7. **Administrativo Servicios Generales.**
8. **Secretaria Particular del Defensor del Pueblo.**
9. **Jefe de Prensa.**
10. **Coordinadora de Atención al Ciudadano.**
11. **Secretaría de Dirección.**
12. **Auxiliar de Atención al Ciudadano.**
13. **Auxiliar de Atención al Ciudadano.**
14. **Conductor Ujier.**

PUESTOS NO CUBIERTOS

15. **Documentalista.**
16. **Asesor Jurídico Económico.**

II.1.2. Contenido y Política del personal de la Institución

La gestión de los recursos humanos en el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia está adscrita a la Secretaría General. Durante los doce meses transcurridos desde la creación de la Institución ha sido intención que, sin perjuicio de las competencias de la Asamblea Regional, se dotara de una autonomía en la gestión. Es así que la elaboración, gestión y pago de la nómina y los trámites administrativos de Seguridad Social se realizan actualmente por el personal del Defensor del Pueblo. Para ello el personal ha seguido una formación en la Asamblea sobre todo para conocer el programa específico GESPER que permite la elaboración y pagos de recibos de salario y gestión de ficheros de cotización a la Seguridad Social.

Respecto a la procedencia del personal con la que se ha nutrido la Institución y sin tener en cuenta los Altos Cargos, en casi un cincuenta por ciento son funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pertenecientes a diversos Grupos y Cuerpos. El resto es personal al que le avala una reconocida trayectoria en ámbito laboral privado.

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la Secretaría General formalizó con Ibermutuamur la elaboración del Plan Inicial de Riesgos. Dicho plan se ha ultimado y se han llevado a la práctica las recomendaciones en él recogidas tales como señalizaciones, realización de acciones formativas al personal en materia de prevención, evaluaciones del estado de salud, etc.

Es de destacar que en materia formativa se acordó con la citada entidad que todo el personal realizará cursos on-line sobre prevención de riesgos, actuaciones en caso de incendios y riegos en trabajos de oficinas.

Respecto a la evaluaciones del estado de salud prácticamente la totalidad del personal de la Institución accedió a realizarla y con unos resultados satisfactorios.

Asimismo, y conforme con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y a la vista de la Evaluación de Riesgos, se notificó a las empresas contratistas que informara sobre los aspectos legales a los que les obliga la ley.

La Acción Social ha sido otro de los asuntos en el que la Institución ha estado sensibilizada y consecuencia de ello fue el que se dictara la Resolución 2009/34 por la que se aplicará el mismo régimen que el establecido por la Orden de 31 de mayo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia.

II.1.3. Herramientas de Comunicación Interna

Finalmente, el personal de la Institución se le ha dotado de las siguientes herramientas de trabajo:

- **Biblioteca.** Se ha creado el primer fondo documental de la Institución. Incluye la relación e índice de los volúmenes que han llegado al Defensor del Pueblo: informes anuales, informes monográficos, publicaciones específicas ordenados por número y materia. En la misma unidad también se pueden consultar varios documentos de interés para la Institución. En la actualidad compila a un total de 120 ejemplares.

- **Revista de prensa diaria.** Este dossier se realiza con los principales titulares de nuestra área de trabajo (la temática propia de las quejas), la del Defensor del Pueblo de España y de otras Defensorías Autonómicas. Los medios de los que se extractan las noticias son: La Verdad, La Opinión, La Razón, El Faro, El País, El Mundo, La Gaceta de los Negocios, Agencia Efe y Europa Press.

Esta herramienta de comunicación tiene que ser valorada en extremo, porque uno de los trabajos del Defensor del Pueblo es iniciar quejas de oficio sobre aquellos asuntos que considere que puedan afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos y los medios de comunicación social pueden ser transmisores de noticias y hechos que pongan de manifiesto una situación en la que se refleje una violación de dichos derechos.

– **Consulta de noticias y titulares en la Web:** Los contenidos de la Web se dividen en dos grandes apartados: el relativo a la Atención Ciudadana (Contacta con el Defensor) y a la Información que genera la propia Institución (Agenda del Defensor del Pueblo, notas de Prensa, actualidad y titulares del dossier Informativo).

– **Dossier de Prensa Interno:** Esta página es de acceso restringido para los técnicos que trabajan en la tramitación de quejas. Incluye los titulares de prensa referentes a denuncias de los ciudadanos, se trata de asuntos que si bien no han generado una reclamación ante el Defensor, son asuntos susceptibles de hacerlo. Para los técnicos resultará bastante útil conocer el estado de la cuestión sobre determinados asuntos o el impacto en la opinión pública de los mismos. También se incluyen noticias referentes a otras Defensorías del Pueblo, de manera que se puede conocer la resolución adoptada en casos similares por otros comisionados autonómicos.

– **Acceso a las resoluciones**. Se están incluyendo en la Web las distintas resoluciones producidas, de manera que cualquier ciudadano puede leer en ellas el asunto que originó una queja, el procedimiento que se ha llevado a cabo de petición de información sobre el caso y las recomendaciones que el Defensor del Pueblo hace a las administraciones implicadas.

II.2. Recursos materiales

II.2.1. Necesidades presupuestarias

Como ya se ha puesto de manifiesto la Ley de creación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia data del 20 de noviembre de 2008 –se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 24 del mismo mes– fecha ya tardía en el proceso de elaboración del presupuesto para el siguiente ejercicio.

No obstante nuestra Institución sí tuvo reflejo presupuestario en la Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009.

En este, sentido hay que indicar que los créditos destinados a la institución quedan encuadrados en el programa 111B, con la significación siguiente:

Grupo de función.
1. Servicios Generales.

Función.
1.1. Alta Dirección de la Comunidad Autónoma y del Gobierno.

Subfunción.
1.1.1. Alta Dirección de la Comunidad Autónoma.

Programa.
1.1.1.B. Defensor del Pueblo.

En lo relativo a la clasificación económica los créditos correspondientes están clasificados según el criterio:

Sección 01.
Asamblea Regional.

Servicio 02.
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Una vez aquí los importes por Capítulos de gasto son los siguientes:

Capítulo	Descripción	Importe
I	Gastos de Personal	562.727 €
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	26.672 €
IV	Transferencias corrientes	6.000 €
VI	Inversiones reales	4.501 €
VIII	Activos financieros	100 €
TOTAL		**600.000** €

A simple vista se aprecia la preponderancia del Capítulo I sobre los demás. Este hecho está explicado por la premura inevitable debida a la puesta en marcha de la Institución.

Habida cuenta de la situación de inicio, pronto se hizo evidente la necesidad de redistribuir los créditos concedidos, ya que en ese momento la institución no contaba con personal que justificara esa preponderancia, y por otra parte sí comenzaron a surgir necesidades imperiosas en gastos de bienes corrientes y servicios y en inversiones.

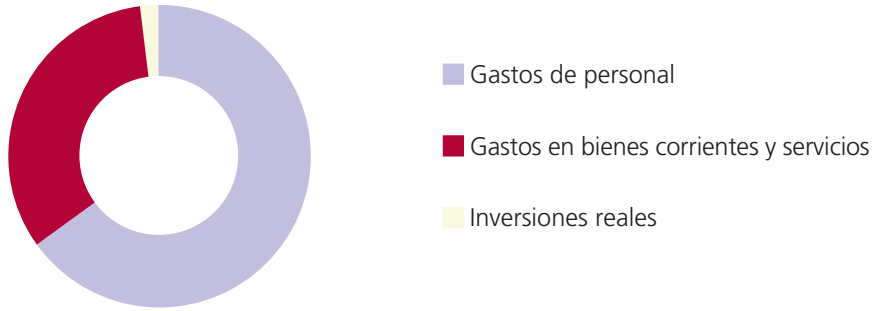
En este sentido comenzaron a proponerse a la Mesa de la Cámara, las correspondientes modificaciones presupuestarias por transferencias de crédito. Estos movimientos se han llevado a cabo mediante la realización de 11 expedientes de modificaciones de crédito por transferencia.

Estas transferencias estaban encaminadas a hacer frente al pago de los contratos corrientes en este caso –arrendamiento de locales, suministros, etc.–.

Así mismo se hizo necesario proceder a transferir crédito al Capítulo VI de inversiones para proceder a la adquisición de mobiliario y equipos que remediaran la situación de provisionalidad de los mismos.

De la misma forma, por el transcurso del tiempo y con la incorporación de nuevo personal a la Institución, se puso de relieve la insuficiencia del conjunto de créditos presupuestarios. Para paliar esta deficiencia se procedió a solicitar generaciones de créditos por importe de 221.000 €, dejando un presupuesto definitivo para el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia de 881.000 €, distribuidos de la siguiente forma:

Capítulo	Descripción	Importe
I	Gastos de Personal	631.650,74 €
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	244.266,40 €
IV	Transferencias corrientes	1,00 €
VI	Inversiones reales	5.080,86 €
VIII	Activos financieros	1,00 €
TOTAL		**881.000** €



Estos incrementos de crédito han permitido, tanto la contratación de personal –hecho que se analizó en otro apartado– para poder llevar a cabo las tareas necesarias de gestión, tanto de las consultas y quejas de los ciudadanos, como de los trámites ordinarios de funcionamiento.

II.2.2. Actividades realizadas y uso de los fondos recibidos

En cuanto al uso de los fondos recibidos, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

En el Capítulo I (gastos de personal) señalar que además de los gastos realizados en pago de nóminas, seguros sociales, etc. Se ha llevado a cabo la realización de los siguientes cursos:

- Curso de Internet básico, con una duración de 4 horas y la asistencia de 9 asistentes.
- Curso de Outlook y Gestión eficaz del tiempo, con una duración de 12 horas y 10 asistentes.
- Curso de Excel 2003 nivel básico/intermedio, con una duración de 12 horas y la asistencia de 10 asistentes.
- Curso de Windows XP nivel básico, con una duración de 4 horas y la asistencia de 5 asistentes.

En este aspecto señalar así mismo que entre las actividades relacionadas con de la puesta en marcha de la política de protección de datos de carácter personal, cuyo asesoramiento corrió a cargo de la empresa ACE & NIU CONSULTING, SL, ésta impartió un curso de 2 horas de formación a la totalidad del personal de la Institución.

En el Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios), es de destacar el esfuerzo realizado en dotar a la Asesoría Jurídica, de los instrumentos necesarios para la correcta realización de sus funciones, señalando la contratación de diversas bases de datos, como son: Tirant-on line, Aranzadi, El Consultor on-line, etc.

Así mismo, se ha realizado un doble esfuerzo presupuestario, que si bien tiene un aspecto formal en cuanto a la aplicación de la Ley de Protección de datos de carácter personal, tiene un aspecto material primario como es la necesaria independencia en la gestión informática.

En el primero de los sentidos, indicar que se han firmado los correspondientes contratos de confidencialidad con las empresas que prestan servicios en la Institución, así como con la CARM, a través de la Consejería de Hacienda. Estando en proceso de elaboración la cláusula a convenir con la Asamblea Regional.

En cuanto al esfuerzo de independencia en la gestión informática, se ha dado un primer paso con la contratación de un "Plan Director de Sistemas del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia", que en estos momentos está culminando su redacción, y que indicará las sucesivas fases en las que se irá realizando el desarrollo posterior, tanto a nivel de medios materiales como personales, conforme

vayan siendo aprobados por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El objetivo final tanto de los diferentes cursos realizados por el personal de la Institución, como el desarrollo del Plan Director de Sistemas, es conseguir el mayor aprovechamiento de los recursos informáticos y de comunicaciones que las diversas herramientas disponibles en este campo ponen a nuestra disposición y que redundarán en la mayor eficacia y eficiencia del funcionamiento de la Institución.

También, como consecuencia de la aplicación del artículo 19 de la Ley 6/2008, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se ha iniciado la tramitación de la contratación de una línea telefónica 900, de tal manera que aquellos ciudadanos que opten por realizar una consulta o presentar una queja por este medio tengan asegurada la gratuidad de la misma.

En el Capítulo VI (Inversiones reales), y en consonancia con lo expresado en el párrafo anterior, se ha procedido a la adquisición de 14 nuevos equipos informáticos personales, para comenzar con el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 6/2008, en cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos, a través de la dotación de medios materiales.

Señalar por último, el estado de ejecución del presupuesto presenta el siguiente balance:

Estado de Ejecución de Gastos al 31/12/2009

Sección 01 ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Sección 02 DEFENSOR DEL PUEBLO
Programa 111B DEFENSOR DEL PUEBLO

Cód	Denominación	A. Inicial	B. Modificac.	C. Definitivo	D. Retenido	E. Autorizado	F. Obligado	Dif.: C-D-E	% F/C
1	GASTOS DE PERSONAL	562.727,00	25.678,74	588.405,74	0,00	580.709,02	580.709,02	7.696,72	98,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.672,00	238.654,40	265.326,40	0,00	248.127,67	243.252,04	17.198,73	91,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	-5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	4.501,00	22.764,86	27.265,86	0,00	25.606,63	25.606,62	1.659,23	93,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		600.000,00	281.000,00	881.000,00	0,00	854.443,32	849.567,68	26.556,68	96,43



defensor del pueblo
de la región de murcia

Capítulo III

SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA



III.1. Introducción

Este capítulo del primer Informe Anual del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, aborda la clasificación sistemática y el análisis de nuestro objeto fundamental de trabajo: la queja ciudadana de quienes residiendo en nuestra Región se han visto afectados, de un modo u otro, por el funcionamiento de las distintas administraciones y organismos públicos a los que se extiende la competencia de supervisión de esta Defensoría.

Desde que esta Institución echó a andar, en los días finales de noviembre de 2008, hasta el pasado 31 de diciembre de 2009, ha transcurrido poco más de un año. En ese tiempo, de manera incesante y por las vías al efecto habilitadas, han ido llegando a nuestras dependencias quejas ciudadanas que finalmente alcanzan la cifra de 645. En ellas se describen problemas, se manifiestan necesidades, se formulan denuncias, se expresan reflexiones, se relacionan demandas, se enuncian peticiones de ayuda… En suma y en su conjunto, de esas quejas deriva una lectura social nada desdeñable para la tarea siempre inacabada de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas.

La mecánica de nuestro trabajo, viene determinada por el marco jurídico del que nos ha dotado la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y el Reglamento que la desarrolla. Recibida la queja del ciudadano se procede a realizar sobre su contenido una valoración preliminar encaminada a resolver sobre su admisibilidad; la ley recoge aquellos supuestos en los que, por la concurrencia en el caso de una serie de circunstancias taxativas, las quejas son rechazadas. Esa valoración realizada por la asesoría, y que consiste en un breve resumen de la queja que incluye un somero análisis de los derechos afectados, la legitimación del reclamante, la administración concernida, y la propuesta de actuación ante la misma, es estudiada en la Junta de Coordinación y Régimen Interior prevista en la Ley, adoptando el Defensor del Pueblo en última instancia una decisión sobre su admisión o inadmisión, que, en ese último caso, vendrá motivada.

Admitida a trámite se procede a requerir de la administración concernida el oportuno informe sobre el contenido de la queja, que una vez obtenido y analizado a la luz del ordenamiento jurídico, puede derivar en una resolución de esta Defensoría que adoptará cualquiera de las distintas formas contempladas en nuestro marco jurídico de aplicación: advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales, sugerencias o decisiones. De la lectura del informe y valoración del contenido global del expediente también podría derivarse el cierre y archivo de la queja, si no se aprecia irregularidad alguna en la actuación de la administración.

Analizada de manera muy concisa la mecánica con la que operamos sobre las quejas, pasamos a la parte sustantiva que es la esencial en este apartado. Como cabría esperar de una cifra de quejas como la referida, la temática es variada y la casuística dentro de la misma singulariza cada queja y también cada una de las respuestas que esta Institución proporciona a las mismas. Finalmente todas las quejas quedan ubicadas sistemáticamente en alguno de los diecisiete epígrafes que en su conjunto engloban toda la problemática que los ciudadanos han querido dirigir a esta Institución, aunque cabría hacer una salvedad, ya que 76 quejas –el 11,7% de las recibidas– son relativas a ámbitos privados, y por lo tanto no han sido admitidas a trámite por esta Institución, con lo que consecuentemente obviamos cualquier análisis sobre su contenido.

Si bien han sido los ciudadanos, a través del contenido y objeto de sus quejas, los que han acabado construyendo la estructura o armazón temático que desarrollamos a continuación, hemos podido constatar que éste no difiere en lo sustancial de los que habitualmente sirven en otras defensorías para sistematizar sus informes anuales. Tampoco se apartan en exceso los números que nos infor-

man sobre las distribuciones proporcionales de las quejas en los diversos temas. Medio ambiente con 61 quejas (9,5%), bienestar social con 52 quejas (8% del total), empleo con idénticas cifras absoluta y relativa, y la prestación de los servicios públicos con 46 quejas (7,1%) son los ámbitos temáticos donde han quedado residenciadas mayor número de quejas ciudadanas.

Medio ambiente es el ámbito temático más nutrido de quejas ciudadanas. La multiplicidad y complejidad de los factores externos que condicionan al medio ambiente ha hecho que hayan llegado a esta Institución 61 quejas (el 9,5% de las totales) relativas a los aspectos más variados que afectan a esta realidad. Sobresalen las referidas a la contaminación acústica derivada del ocio nocturno, sobre las que esta Institución ha adoptado diversas resoluciones cuyo contenido será analizado posteriormente, como también serán analizadas las que tienen por objeto la contaminación electromagnética, la de las aguas, la lumínica, o las que afectan a la calidad ambiental de los entornos urbanos. Hemos tramitado asimismo reclamaciones relacionadas con la biodiversidad, los espacios naturales, o la responsabilidad patrimonial de la administración ambiental.

A la abultada reclamación ciudadana relativa al bienestar social, contribuyen varios factores; dos parecen determinantes: la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y las incidencias que se están poniendo de relieve para hacer llegar a sus potenciales beneficiarios el catálogo de prestaciones, pero también, no se nos debe escapar, el efecto que la crisis económica actual tiene sobre la parte más vulnerable de la sociedad, factor éste que asimismo, no creemos preciso profundizar en el análisis, contribuye notablemente en el número de quejas relativas al empleo.

Por su parte, las quejas que se centran en los servicios públicos, en su mayoría atañen a la prestación de los mismos por las administraciones locales de la región, como se sabe comprometidas a proporcionar una variada gama de servicios relacionados con las competencias que obligatoriamente deben asumir en virtud de la normativa básica de régimen local. Otro tanto ocurre con las 10 quejas que hemos decidido clasificar bajo el epígrafe de "bienes públicos", buena parte relacionadas con el dominio público viario, casi siempre de titularidad municipal. Un tratamiento específico se ha dado a las quejas vinculadas a servicios públicos universales, esenciales o de interés general, en cuyo epígrafe hemos ubicado 16 quejas (un 2,4% del total).

También han sido numerosas las quejas referidas a ámbitos de actuación compartida entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos, tales como el urbanismo, con 25 quejas y la vivienda, con 17 quejas. La reclamación en materia urbanística ha afectado a las tres áreas en las que tradicionalmente se dividen las actuaciones públicas en ese ámbito: planeamiento, gestión y disciplina urbanísticos, si bien la gestión urbanística desplegada por los ayuntamientos es la que mayor número de quejas aporta. Por lo que hace al derecho a la vivienda, el motivo de la queja no es en exceso variado y son mayoría las referidas al reconocimiento y tramitación de ayudas para hacer frente a los gastos de alquiler, aunque también nos encontramos con reclamaciones que impugnan la gestión realizada por los organismos públicos en materia de vivienda, o incluso la fiscalidad que grava la transmisión de este bien. Por su parte, han sido 23 las quejas relacionadas con la Hacienda Pública, con una casuística muy variada que afecta a los tres ámbitos de la administración: local, autonómica y del Estado.

La reclamación atinente a ámbitos de actuación administrativa tales como la seguridad social, con 19 quejas o la extranjería con 16 quejas, han traído asuntos a esta Defensoría que, dadas las administraciones concernidas, hemos direccionado al Defensor del Pueblo de España. Lo mismo ha sucedido con un conjunto variado de 28 quejas que hemos dejado ubicadas bajo el epígrafe de "quejas relativas a otros ámbitos de actuación pública".

Sectores tradicionales de la actividad prestacional de la administración pública de gran trascendencia, como la educación y la sanidad, con entidad suficiente para ser abordados específicamente en el Informe, han aportado a esta Institución, respectivamente, 45 y 27 quejas. También han sido 45 las quejas relacionadas con la Justicia. Como tendremos ocasión de exponer más adelante, las cuestiones vinculadas con esas categorías temáticas han sido tramitadas por esta Institución con el carácter urgente y preferente al que nos obligaba la entidad de los derechos que habitualmente se ven afectados en esos ámbitos. En materia educativa, casi un 94% de las quejas versan sobre las distintas etapas de la educación no universitaria, y, poco más del 6% se refieren a la enseñanza superior. Las quejas llegadas a esta Defensoría atinentes al derecho a la salud han sido agrupadas sistemáticamente en torno a dos grandes aspectos: aquellas que atañen a la organización y el funcionamiento de la administración sanitaria, y las que tienen que ver con las relaciones, a veces conflictivas, que se entablan entre usuarios y profesionales de la sanidad. En materia de Justicia, sea por la litispendencia o por el carácter de cosa juzgada del asunto objeto de la queja, buena parte de ellas se ha saldado con la lógica inhibición de esta Institución, aunque sí hemos tenido ocasión de entrar en algunas reclamaciones relacionadas con dilaciones indebidas en los procedimientos judiciales o con el funcionamiento presuntamente irregular de la administración de Justicia. También hemos abierto un epígrafe temático para incluir 26 quejas relativas al "procedimiento administrativo", cuando hemos advertido que las mismas ponían de relieve incumplimientos básicos de las leyes de procedimiento, fundamentalmente de las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No han sido muy numerosas las quejas ciudadanas relacionadas con temáticas como la cultura y los deportes que, respectivamente, han traído a esta Institución 12 y 4 quejas. En el primer caso la reclamación tiene que ver básicamente con el patrimonio histórico. En materia de deportes las cuatro quejas recogen cuatro aspiraciones muy puntuales relacionadas con la práctica, organización, el fomento deportivos.

Asimismo otros epígrafes han sido abiertos para dar cobijo a un reducido número de quejas que tienen que ver con asuntos tan dispares como la agricultura y el agua, sobre todo con ésta última y fundamentalmente en lo que atañe a su gestión por parte de entidades y organismos con competencias en esa importante materia. Las quejas aquí ubicadas han sido 7. Los derechos de los consumidores con 6 quejas, los menores con 5 quejas, la seguridad ciudadana con 18 quejas, entre las que sobresalen por su contenido las que denuncian abusos de autoridad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y las ubicadas en un epígrafe que hemos denominado "derechos políticos y sociales", donde hemos incluido 9 reclamaciones relacionadas con ese grupo más o menos homogéneo de derechos, que cierran la compleja y diversa temática que vamos a abordar seguidamente y que ha sido objeto de nuestro trabajo durante este poco más de un año.

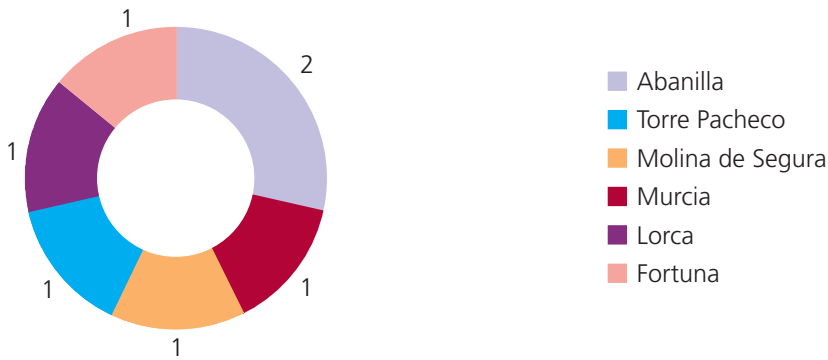
Un trabajo que, creemos, queda perfectamente compendiado en ese párrafo incluido en el preámbulo de nuestra Ley que nos impone el deber de velar por el funcionamiento transparente y eficaz de la administración pública al mismo tiempo que por la garantía de los derechos de las personas y la atención a las más débiles. Obligaciones esas que han estado presentes en la tramitación de todas y cada una de las quejas recibidas. En ello hemos puesto al menos todo nuestro empeño, ánimo y voluntad.

III.2. Agricultura y Agua

Siete quejas presentadas en esta Defensoría han quedado ubicadas sistemáticamente en este epígrafe. De ellas dos han acabado en sendas resoluciones adoptadas por esta Defensoría. Las quejas,

promovidas siempre a título individual, proceden de seis distintos municipios de la Región: Murcia, Lorca, Molina de Segura, Fortuna, Torre Pacheco y Abanilla, y en su mayoría expresan el desacuerdo del ciudadano con organismos y entes públicos vinculados a la agricultura y a la gestión del recurso agua: comunidades de regantes, Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural de la CARM, y Confederación Hidrográfica del Segura. Entes y organismos que bien nos pueden servir para la clasificación de las distintas quejas y la explicación muy sucinta del contenido material de las mismas.

Municipios de procedencia de las quejas



La mayoría de las quejas, bien impugnando de manera directa una decisión adoptada por la Confederación Hidrográfica del Segura, o bien de modo indirecto porque la reclamación traiga causa de la actuación de alguna comunidad de regantes, afectan al citado organismo de cuenca como ente público concernido. Ello ha dado lugar a que cuatro de las siete quejas se hayan remitido para su tramitación al Defensor del Pueblo de España. Es el caso de una queja llegada desde Lorca en la que se denuncian determinadas cuestiones relacionadas con la apertura y explotación de algunos pozos de sequía, cuyo caudal, así parece afirmarlo el promotor de la queja, es desviado a otras cuencas hidrográficas. El contenido sustantivo de la queja, necesariamente, nos llevó a remitirla para su conocimiento al Defensor del Pueblo de España. La misma suerte ha corrido una queja llegada desde el municipio de Fortuna. En esta ocasión se exponía que tras una expropiación realizada en aquella localidad, necesaria para realizar obras vinculadas al canal del trasvase, ha quedado cortado y desviado un camino de regadío dificultando el acceso a las labores agrícolas. El promotor de la queja persigue que la Confederación Hidrográfica del Segura certifique esa realidad. Su petición, y la cuestión suscitada en la queja, está en manos del Defensor del Pueblo de España, cuya Oficina nos ha comunicado que se ha procedido a solicitar el oportuno informe a la CHS.

También al Defensor del Pueblo de España fueron remitidas dos quejas procedentes de Abanilla. En la primera se pretendía la declaración de nulidad de determinados acuerdos adoptados por una Comunidad de Regantes de aquel municipio. La segunda trae causa de la rotura de determinadas infraestructuras propiedad de la Comunidad de Regantes citada, y de las consecuencias derivadas de ello para el arbolado del promotor de la queja.

Otra de las quejas, tramitada en nuestra Institución y cerrada en la actualidad, y cuyo traslado al Defensor del Pueblo de España no fue preciso tras analizar el informe que explicaba la actuación de los entes públicos concernidos, provino de Molina de Segura. El promotor de la misma afirmaba que un sindicato de regantes de Molina no admitía su solicitud de baja del mismo, solicitando que mediá-

semos ante la CHS para revocar esa resolución denegatoria. Requerida información a la comunidad de regantes nos comunican que no hay problema en dar de baja al reclamante, pero que ello necesariamente implica una renuncia expresa a los derechos de agua que posee, así como saldar todas las obligaciones contraídas con la mencionada comunidad.

También se tramitó en nuestra Institución una queja en la que su promotor denunciaba la imposición de un canon exigido por la Junta de Hacendados de Murcia, en concepto de cimbrado de una acequia que atravesaba la propiedad del ciudadano, y cuya cantidad era superior al satisfecho por otros afectados en idénticas circunstancias. La singularidad del caso, en muy buena media ajeno al ámbito de la agricultura y el agua, nos llevó a tramitar la queja, que acabó con la adopción de la **Resolución de la Q-0069/2009**, en la que, sobre la base del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, instábamos a esa Junta de Hacendados, como corporación de derecho público que es, a establecer un canon igual para todos aquellos que realicen labores de cimbrado de acequias.

La última queja que vamos a examinar, promovida por un agricultor de Torre Pacheco, tiene como administración concernida a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. El promotor de la queja explica el dilatado procedimiento de concentración parcelaria en el que se vieron inmersas sus propiedades agrícolas, y cómo tras dos décadas de procedimiento, con errores reconocidos por la propia administración, aún no se le han concedido de modo definitivo las correspondientes fincas de reemplazo. En la actualidad, el reclamante tiene en explotación unas parcelas de "propietario desconocido" cedidas en precario por la administración regional, que son reclamadas por la Delegación de Hacienda de Murcia. Analizada la queja y los informes de las diversas administraciones actuantes, se dictó por esta Defensoría la **Resolución de la Q-0159/2009**, que, en la línea de lo demandado por el ciudadano y de lo asimismo sugerido por la Delegación de Hacienda de Murcia, se recomendaba a la citada Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural que habida cuenta de los errores evidenciados en el procedimiento de concentración parcelaria, agravados por la excesiva dilación en la subsanación de los mismos, se procediera de manera inmediata a incoar el oportuno expediente de responsabilidad patrimonial a fin de indemnizar los daños y perjuicios causados al promotor de la queja.

III.3. Bienes Públicos

Si nos atenemos al específico objeto de las quejas clasificadas en este apartado debemos convenir que a diferencia de otros epígrafes abordados en este informe anual, mucho más ricos en contenidos y con mayor complejidad para su sistematización, aquí, de los diez expedientes que hemos tramitado, ocho de ellos versan, es verdad que por distintos motivos y con diferente objetivo por parte de sus promotores, sobre el dominio público viario, casi siempre de titularidad municipal.

El dominio público viario engloba todos los bienes de titularidad pública afectados al uso público que se destinan al tránsito terrestre de personas y vehículos, y que cumplen la función de comunicar lugares entre sí. Se trata, en suma, de un conjunto de infraestructuras de indudable importancia social y económica –y en ocasiones ambiental– imprescindibles para la circulación de personas y bienes, la prestación de los servicios públicos de transporte, el acceso al medio natural, o la realización de actividades de ocio. Tan importantes funciones justifican que estos bienes públicos gocen en nuestro ordenamiento jurídico de un especial régimen de tutela y protección.

Dentro del dominio público viario, con esos caracteres comunes que hemos explicitado, nos podemos encontrar con bienes muy heterogéneos, cada uno de ellos con su específico régimen jurídi-

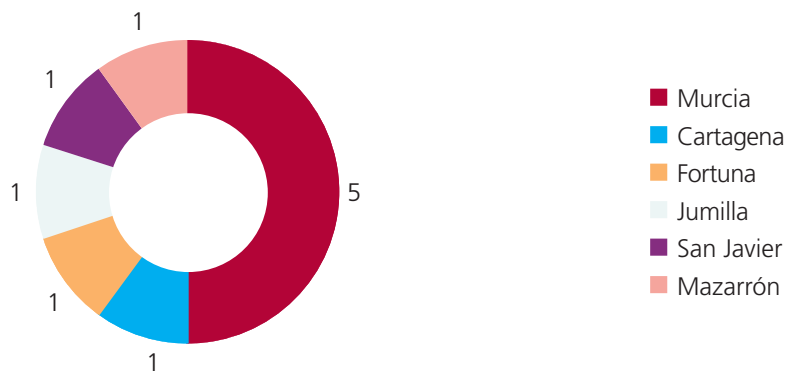
co: las carreteras (vías destinadas fundamentalmente para la circulación de vehículos); las vías urbanas (de titularidad municipal afectadas al tránsito peatonal y al tráfico de vehículos e integradas en el perímetro urbano de pueblos y ciudades); los caminos (destinados a la circulación de personas y animales y, más excepcionalmente, de vehículos); y las vías pecuarias (itinerarios tradicionalmente destinados al tránsito ganadero que, en la actualidad, cumplen una importante función ecológica). Pues bien, de las diez quejas tramitadas, una tiene que ver con carreteras, dos de ellas, prácticamente idénticas, con vías públicas, y las siete restantes con caminos públicos. Es cierto que en otros epígrafes de este informe hemos analizado otras quejas ciudadanas que también tienen por objeto algunos bienes integrantes del dominio público viario, no obstante la mayor relevancia de otros elementos de índole distinta que concurren en esas quejas nos ha llevado a ubicarlas sistemáticamente en otros apartados.

De esas diez quejas en materia de bienes públicos, dos han acabado en sendas resoluciones de esta Defensoría. El resto ha corrido diversa fortuna: el traslado al Defensor del Pueblo de España al tratarse de asuntos que competen a esa Institución, el archivo derivado de la pendencia de un procedimiento judicial o incluso del carácter de cosa juzgada, el cierre motivado por la falta de vulneración de derechos constatada tras la llegada, lectura y análisis de los informes remitidos por la administración; y, en un par de casos, hay quejas que siguen tramitándose a la espera de que esos informes nos sean remitidos por las administraciones requeridas.

Habida cuenta del escaso número de quejas relacionadas con esta temática, intentar obtener conclusiones de la naturaleza que sean, derivadas de la procedencia territorial de las mismas, es tarea inútil. En cualquier caso baste señalar que cinco de ellas proceden del municipio de Murcia y las otras cinco están repartidas en otros tantos municipios de la región: Cartagena, Fortuna, Jumilla, San Javier y Mazarrón. En otro orden de cosas, dos de las diez quejas están promovidas de manera colectiva por asociaciones vecinales, presentándose el resto a título individual, aunque en algún caso se argumente que el motivo del que traen causa incide en una pluralidad de personas.

La primera queja que analizamos tiene que ver con las carreteras, y trata de una desatendida aspiración de la Asociación de Vecinos de La Aljorra. Los representantes vecinales de esta pedanía del Campo de Cartagena llevan años reclamando del Ministerio de Fomento que proceda a señalizar las salidas a su núcleo de población desde la autovía Cartagena-Murcia y desde la autopista Cartagena-Vera, argumentando en su apoyo que se trata de una necesidad para comercios y empresas ubicadas en esa pedanía, por otro lado más poblada que otros núcleos de población próximos que sí cuentan con la oportuna señalización en las citadas infraestructuras. Las aspiraciones que están detrás de la petición dirigida a esta Defensoría

Municipios de procedencia de las quejas



exceden nuestro ámbito competencial, lo que nos ha llevado a adoptar la decisión de remitir la queja al Defensor del Pueblo de España, quien nos ha comunicado la admisión a trámite de la misma.

Aunque podríamos haber optado por una ubicación sistemática distinta, dada la singularidad de las dos quejas que comentamos a continuación, finalmente hemos procedido a incluirlas dentro de este epígrafe. Las dos quejas traen causa de las obras públicas que se realizan en el denominado Jardín de San Esteban, en pleno centro de la ciudad de Murcia, en cuyo transitado perímetro, como se sabe, se ha venido desarrollando durante años un mercadillo popular que en el pasado mes de julio hubo de ser trasladado a otro lugar de la ciudad ante el inminente comienzo de unas obras en principio orientadas a la construcción de un aparcamiento público subterráneo. La primera queja se produce ya en esos primeros momentos; la segunda, en el pasado noviembre, cuando con la experiencia de varios meses instalados en la nueva ubicación, los comerciantes afirman haber notado un sensible descenso de las ventas que hace inviable el mantenimiento de sus negocios. Ambas quejas no se pudieron tramitar en virtud de lo prevenido en el art. 21.2 de la Ley que regula esta Institución, precepto que impide que nuestra Defensoría pueda investigar quejas cuyo objeto, como es el caso, se encuentre pendiente de una resolución judicial.

El resto de las quejas, ya se ha adelantado, tienen como objeto el dominio público viario de varios municipios de la región. Las dos primeras que analizamos ahora se centran en un carril presumiblemente público de la pedanía murciana de Puente Tocinos. Se trata de quejas promovidas por dos ciudadanos distintos, con pretensiones, creemos, inicialmente distintas. En el primer caso el promotor de la queja nos ponía de relieve que el Ayuntamiento de Murcia se negaba a certificar que durante el mandato del actual pedáneo de Puente Tocinos no se había realizado con cargo a fondos públicos inversión alguna en el mencionado carril. De la lectura de tan singular petición, por otro lado no motivada, esta Defensoría no concluyó que existiese ninguna vulneración de derechos achacable a la administración citada, procediendo a archivar la misma. Distinta ha sido la respuesta a la queja en la que teniendo como objetivo ese mismo carril vecinal, se nos plantea que el Ayuntamiento no responde a la demanda de una certificación que acredite la titularidad pública o privada del precitado carril. En este caso, se ha requerido el oportuno informe al Ayuntamiento de Murcia, estando a la espera de que el mismo llegue a esta Defensoría. De otra pedanía de Murcia, concretamente de Rincón de Seca, procedía la queja en la que se exponía que unas obras de vallado de una propiedad no respetaban el necesario retranqueo a un camino público. Ello no obstante, el informe del Ayuntamiento de Murcia vino a determinar que el camino no sólo no figuraba entre los bienes de su inventario, sino que además había sido objeto de un procedimiento judicial ya concluido con una resolución firme y definitiva.

Otra de las quejas procede del municipio de San Javier. En ella su promotor expone que un particular ha cerrado y está imposibilitando el tránsito por un camino público sobre el que, afirma, existe constituido en su favor un derecho real de servidumbre de paso. Requerido, y remitido a esta Defensoría, el oportuno informe del Ayuntamiento de San Javier, allí se afirma que en la documentación catastral rústica que obra en aquella administración no existe el camino mencionado por el reclamante, por lo que finalmente procedemos al cierre de la queja.

Nos parece asimismo significativa la queja promovida por una asociación vecinal de Mazarrón en la que se denuncia el cambio de trazado operado en un camino público que discurre a pocos metros del mar, y que comunica el paraje costero lorquino de Puntas de Calnegre con el núcleo de población de Cañada de Gallego, ya en el municipio de Mazarrón. Ese desplazamiento del trazado del camino, que al parecer ha sido realizado por un

particular dentro del término municipal de Mazarrón, y en una zona muy próxima al mojón que delimita ese municipio con el de la vecina localidad de Lorca, ha supuesto, en opinión de los reclamantes, no sólo la formación de curvas que afectan negativamente a la seguridad vial, sino también la pérdida de parte del anterior trazado del camino público, e incluso, la invasión de parte del dominio público marítimo terrestre. En el momento de redacción de este Informe Anual estamos a la espera de recibir un informe que arroje luz sobre los extremos antes planteados, y que ha sido oportunamente requerido al Ayuntamiento de Mazarrón.

Hemos dejado para el final las dos únicas quejas ubicadas en este epígrafe que se han saldado con sendas resoluciones de esta Defensoría. La primera de ellas, que acabó con la **Resolución de la Q-0182/2009**, fue promovida por un vecino de la localidad de Fortuna. En esta queja se denunciaba el mal estado de un camino público de titularidad municipal, precisado de reparación y acondicionamiento, y cuyo trazado, en uno de sus tramos peligroso y casi impracticable, había sido afectado por unas obras públicas y por la ejecución de un proyecto urbanizador en la zona. Ese camino público era la única vía de acceso a una vivienda propiedad del ciudadano reclamante. Analizado el informe remitido por el Ayuntamiento y vista asimismo la numerosa documentación aportada por el promotor de la queja, esta Defensoría emitió una resolución en forma de recomendación dirigida a la citada administración local, instándole a garantizar el acceso a la propiedad del reclamante, eliminado el peligro creado en el camino público, y procediendo, conforme a las prioridades inversoras de aquel municipio y a su disponibilidad presupuestaria, al acondicionamiento del citado camino público.

La otra queja, remitida por un ciudadano de Jumilla, pone de relieve la ineficacia de su Ayuntamiento ante la apropiación indebida y el corte de un camino público por parte de una mercantil de aquel municipio del Altiplano murciano. El reclamante aporta copia de un acuerdo del Pleno Municipal Ordinario de Jumilla, en sesión celebrada en junio de 2008, en el que se constata y declara la naturaleza demanial del camino citado, y se requiere al particular que impide su paso que lo deje libre y expedito al tránsito, advirtiéndole que de lo contrario ese Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para la recuperación del camino. La queja se presenta ante esta Defensoría un año después de la celebración de la citada sesión plenaria, dada la falta de cumplimiento en ese tiempo de los requerimientos municipales practicados. La **Resolución de la Q-0241/2009,** adoptó la forma de recordatorio de deber legal dirigida al Ayuntamiento de Jumilla, indicándole que a esa administración local compete la potestad de recuperación posesoria de sus bienes de dominio público frente a ocupaciones indebidas, procediendo, en caso de que el usurpador no decida dejar el camino libre y expedito, a la ejecución subsidiaria y a costa del obligado, de aquellas medidas dirigidas a garantizar el tránsito por ese camino público.

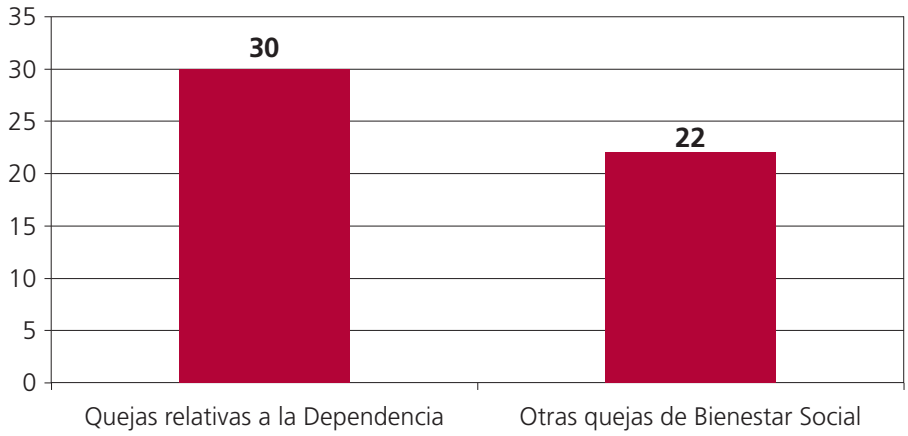
III.4. Bienestar Social

En este apartado hemos incluido todas aquellas quejas relacionadas con la implantación de la Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que abordaremos en primer lugar, pero también todo el conjunto de quejas vinculadas a la acción social que tradicionalmente han prestado las administraciones autonómica y local.

La publicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, –en adelante Ley de Dependencia– tiene su origen en el deseo del Estado Español de configurar un nuevo derecho de la ciudadanía, que tenga en cuenta las circunstancias de dependencia y atienda asimismo a la capacidad económica de los potenciales beneficiarios, debiendo ser completado por la normativa autonómica. Esta circunstancia no ha acontecido de forma igual en todas las comunidades autónomas, con las consiguientes

posibles diferencias en los derechos de los dependientes en función de su residencia, y la consiguiente expectación sobre cuál haya de ser su regulación en aquellas autonomías, como la nuestra, en la que el ejecutivo todavía no ha desarrollado el correspondiente Decreto.

ción residencial, consistentes en residencia de personas mayores en situación de dependencia o centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad; correspondiéndole a cada comunidad autónoma, en coordinación con los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos, el reconocimiento



Recordemos así, que esta ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español.

Al efecto, establece en su artículo 15 un catálogo de prestaciones constituido por los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal; servicios de teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, dentro de los que se encuentra la atención de las necesidades del hogar y de cuidados personales; servicios de centro de día y de noche, ya sea centro de día para mayores, centro de día para menores de 65 años, centro de día de atención especializada o centro de noche; o bien servicios de atención de la dependencia y, en su caso, el reconocimiento de la prestación, en atención a las circunstancias particulares del caso concreto, con los límites de las compatibilidades establecidas por la legislación básica del Estado, en tanto no se establezcan otras disposiciones normativas que amplíen el ámbito de la compatibilidad en cada Comunidad Autónoma.

De esta forma, durante el período de 2008 de funcionamiento de esta Institución y durante todo 2009, hemos recibido 30 quejas de atención a la dependencia, lo cuál representa un 4,65% frente al total analizadas.

Los primeros escollos que nos hemos en encontrado se originan por un desconocimiento generalizado de la ley, y es que la ciudadanía sólo intuye los nuevos derechos que le concede la nueva norma, lo que da lugar a que los servicios de atención a la dependencia existentes en la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración con carácter general, y la Oficina de Atención a la Dependencia en particular, y los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos, se hayan visto literalmente colap-

sados por decenas de miles de solicitudes de murcianos que piensan que podrían estar incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, lo que da lugar necesariamente a tener que tramitar cada una de las solicitudes presentadas, en primer lugar por los servicios sociales de los Ayuntamientos y posteriormente por las dependencias autonómicas, independientemente de que tengan o no derecho a las prestaciones respectivas, con el consiguiente demérito de aquellos expedientes que sí se encuentran fundados, y todo lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda producir un agravamiento del solicitante, promoviendo una revisión de grado, lo cual determinaría de nuevo el inicio del proceso, siendo éste un círculo vicioso que parece no tener final.

En este caso se encuentran las quejas 4/2008 o 38/2009, en las que se pide una "prestación graciable" o en las que el interesado muestra su disconformidad con la dependencia reconocida, confundiéndola con el grado de minusvalía.

Para comprensión del lector, y sin ánimo de exhaustividad, es necesario analizar el procedimiento actualmente seguido por la Oficina para la Dependencia. Procedimiento éste no regulado con carácter general, de naturaleza variable y en continuo proceso de mejora en atención a la experiencia generada.

En un primer momento, el posible dependiente se dirigirá directamente a los servicios sociales del Ayuntamiento de su residencia o bien directamente al Instituto de Mediación y Acción Social para solicitar el reconocimiento de su dependencia en solicitud normalizada al efecto. Se echa en falta una mayor información y coordinación de los servicios sociales con la Oficina Autonómica, pues en muchos casos canalizan solicitudes con documentación errónea o deficiente, lo que exige su subsanación. Una vez recibida y cumplimentada la solicitud, la Oficina para la Dependencia enviará un técnico de la Comunidad Autónoma al domicilio del posible dependiente a los efectos de valorar su dependencia. Ésta podrá oscilar entre grado III nivel 1 o 2, grado II nivel 1 o 2 y grado I nivel 1 o 2. Hasta la fecha, sólo tendrán derecho al catálogo de servicios aquéllos que al menos alcancen un grado II nivel 1.

Pues bien, esta solicitud ha de ir acompañada de DNI en vigor del dependiente, y certificado de empadronamiento continuo en España durante más de cinco años. Respecto al primer documento reclamado, la Oficina de la Dependencia ha tenido que prescindir del dato de que esté en vigor cuando el dependiente tiene más de 70 años, puesto que cuando una persona mayor no puede desplazarse a la Oficina de la Policía, son los cuerpos y fuerzas de seguridad los que tendrían que acudir a su domicilio, con la consiguiente carga burocrática y mayores dilaciones temporales; de esta forma, para la resolución de alguna queja presentada, se ha obviado este defecto con una diligencia administrativa en la que se haga constar que el dependiente tiene más de 70 años y no es necesario que el DNI esté en vigor.

Una vez emitido el dictamen médico sobre el grado de dependencia, se emite la resolución del grado de dependencia, contra la que cabe recurso, y si se presenta, habrá de resolverse en los plazos establecidos al efecto.

A partir de aquí se inicia el procedimiento de reconocimiento de la prestación, que si bien en la actualidad se practica de oficio, con anterioridad también debía ser instado por el dependiente, con la consecuente ineficacia administrativa contraria al principio de impulsión de oficio reconocido en el artículo 74 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ha de aclararse que la gran mayoría de quejas pertenecen a solicitudes presentadas en 2007, y por tanto están afectadas de algunos defectos que hoy se han eliminado del procedimiento por la Oficina de la Dependencia.

El inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación, se realiza por tanto de oficio, con informe de los servicios sociales del Ayuntamiento que se desplazan al domicilio del dependiente y que previo estudio de las condiciones familiares, residenciales, económicas y sociales del dependiente, determinan de acuerdo o no –según los casos– con las familias, qué tipo de prestación es más recomendable para el dependiente. Este informe es preceptivo pero no vinculante, pues corresponde a los trabajadores sociales de la Oficina de la Dependencia en el correspondiente "Plan Integral de Atención" determinar cuál será la prestación oportuna.

De nuevo aquí encontramos dos posibles deficiencias procedimentales, en primer lugar, según información aportada por la Oficina de la Dependencia, que algún Ayuntamiento de la Región no acepte la iniciación del procedimiento de reconocimiento de la prestación si no es previa intimación autonómica, esto es, que no admitan la práctica frecuente consistente en que las propias familias sean las que aporten la Resolución de dependencia para que se realice el oportuno informe social por el Ayuntamiento, sino que exigen la notificación autonómica, con el consiguiente desgaste administrativo y demora, pues se ha de esperar a que el acto administrativo, previo transcurso de los plazos para recurso –innecesario en el caso de que lo solicitaran las familias, demostrando su voluntad inequívoca de no recurrir–, sea firme. En segundo lugar, hemos de contar con las propias demoras de los servicios sociales de los ayuntamientos, que han visto incrementadas sus atribuciones, ya de por sí ahítas por las necesidades sociales consecuencia de la actual situación económica, sin que en algunos casos hayan visto incrementados los recursos humanos necesarios para ello.

Una vez realizado el informe social por el Ayuntamiento sobre la prestación que convenga al dependiente, y considerado éste suficiente por la Oficina para la Dependencia (de notar que desde el punto de vista de las instancias autonómicas estos informes municipales no se realizan siempre con todo el rigor deseable), se solicita – si no se ha presentado ya– la información necesaria en función del tipo de prestación; a saber, si se solicita cuidado en el entorno familiar (prestación económica más solicitada, consistente en subvenir los emolumentos del cuidador del dependiente), habrá de designarse un cuidador, que según sea familiar o no, deberá aportar certificado de empadronamiento en algún municipio de la Región, y si es profesional –léase no familiar– deberá aportar asimismo certificado de empadronamiento durante más de un determinado número de años en el "mismo" municipio del dependiente. De otro lado, si lo que se solicita es una residencia o centro de día, la familia podrá manifestar su preferencia por algún centro en concreto, y la Administración lo intentará respetar en la medida de sus posibilidades; y así sucesivamente con todo el catálogo de servicios.

Una vez reconocida la prestación, el dependiente o sus familiares podrán mostrar su desacuerdo con el correspondiente recurso, o incluso, estando inicialmente de acuerdo, podrán solicitar el cambio de la prestación por modificación de las circunstancias personales o familiares del dependiente, iniciándose de nuevo todo el procedimiento de reconocimiento de prestación.

En este sentido, señalar la **Resolución del Defensor del Pueblo de 7 de octubre de 2009 a la Queja 212/2009**, por la que se recomienda a la Oficina para la Dependencia de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración que no tenga por renunciada de su derecho a un servicio a una dependiente que pidió "renunciar a una prestación residencial, por otra prestación económica consistente en el entorno familiar", puesto que en opinión de la Defensoría no quedaba claro que la intención de la dependiente era "renunciar" a todos sus derechos, sino solamente solicitar un cambio en el servicio recibido. De esta forma se entendió que no era posible exigirle a la ciudadana un conocimiento de las consecuencias legales

del término administrativo "renuncia" por contraposición a "desistimiento" y por tanto, habría que estar a la verdadera intención del solicitante y no tanto a los términos en los que se pronunció.

También es de reseñar el número de quejas en las que los ciudadanos no están de acuerdo con el servicio concedido, prefiriendo una prestación de tipo económico, sin embargo la filosofía de la ley es que la prestación económica tendrá una carácter excepcional, cuando no sea posible la prestación del servicio, por lo que en estos casos se ha concluido que la actuación de la administración era adecuada a la norma.

Finalmente una vez reconocida la prestación, corresponde de nuevo a la Oficina de la Dependencia investigar otras ayudas incompatibles que pudieran ser recibidas de hecho por el solicitante, tales como prestaciones en centros de día, ayudas procedentes de la Dirección General de Personas Mayores o Dirección General de Pensiones, etc., que podrán motivar deducciones en la prestación concedida, en aplicación del artículo 14 del R.D. 727/2007, de 8 de junio, en cuya virtud en los supuestos en que el beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección social, del importe a reconocer, se deducirán en el caso de que se perciban: el complemento de gran invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona, previsto en el artículo 12.2.c, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, (LISMI). Como consecuencia del citado precepto, se presentó la queja 482/2009, por no conformidad con las deducciones practicadas, todavía pendiente de informar por la administración.

También es de reseñar las quejas presentadas, cuando el dependiente fallece antes de finalizar la tramitación del procedimiento, en cuyo caso los causahabientes se convierten en acreedores de la administración por el importe devengado desde que se solicitó la prestación o desde que se generó el derecho a la misma hasta la muerte del finado. En estos casos, a las molestias ocasionadas por la larga tramitación, hay que añadir el dolor de los familiares por la muerte del ser querido, y las complicaciones derivadas de la comunidad hereditaria. Aquí la Defensoría ha intervenido en la resolución de las quejas 79/2009, 86/2009, 338/2009 y 432/2009, habiéndose percibido por los familiares las prestaciones devengadas en la gran mayoría de los casos.

Pues bien, la descripción de este complejo y arduo procedimiento, pretende transmitir al lector la complejidad y penosidad del mismo, que se ve agravado seguramente si no existe en la administración gestora un control total de los trámites y una coordinación absoluta entre los diferentes centros gestores que intervienen en el procedimiento, articulando mecanismos de información para que ésta fluya entre los diferentes operadores y los propios usuarios, de forma que cualquier cambio que se acometa en el procedimiento sea inmediatamente procesado y asumido por todos los intervinientes.

Es por ello que desde esta Defensoría se considera conveniente que se abordara una regulación general del procedimiento establecido para el otorgamiento de la dependencia y el reconocimiento de la prestación, definitorio de las obligaciones de los ciudadanos y de las administraciones afectadas, con el consiguiente derecho reaccional de los ciudadanos. Así, a modo de ejemplo, del análisis de los expedientes afectados por las Quejas se desprende una posible descoordinación entre lo solicitado por el organismo y el modelo normalizado de solicitud que omite parte de los documentos que posteriormente serán requeridos al ciudadano; asimismo, se observa una deficiente praxis administrativa, pues se requiere a los ciudadanos en diferentes momentos la subsanación de documentos,

cuando pudieran haberse requerido todos éstos de forma simultánea.

Finalmente no sólo se echa en falta un procedimiento general regulador del procedimiento del reconocimiento de la dependencia y de la prestación, sino una regulación integral constituida por el Decreto relativo al régimen del copago, en el que el Gobierno regional regulará la participación del beneficiario en la cuantía de la prestación en función de sus necesidades económicas, tal como indica la legislación nacional; o el Decreto relativo a la compatibilidad entre prestaciones. En este sentido, la falta de regulación en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo, podría estar detrayendo recursos públicos hacia personas dependientes, posiblemente, con capacidades económicas más altas que las que podrán acceder a las prestaciones, una vez se apruebe el Decreto correspondiente.

Sobre el mencionado Decreto de compatibilidad, son numerosas las quejas recibidas en las que los peticionarios nos preguntan cuándo entrará en vigor el Decreto sobre compatibilidad, al respecto, explicar que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, es desarrollada en este punto, por el R.D. 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar la intensidad de cada uno de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, estableciendo una incompatibilidad general entre "El servicio de Atención Residencial Permanente [que] será incompatible con el servicio de teleasistencia, con el servicio de ayuda a domicilio y con el centro de noche. En los demás servicios se estará a lo dispuesto en la normativa de las comunidades autónomas o administración que, en su caso, tenga la competencia".

Al respecto, las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid han abordado ya el régimen de compatibilidades e intensidades de los distintos catálogos del servicio, al margen de la citada regulación estatal; por ello, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en **Resolución de 23 de noviembre de 2009** ha recomendado a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, que sea totalmente escrupulosa en el cumplimiento de plazos previstos para la tramitación del reglamento correspondiente, habida cuenta del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley estatal. En este sentido se emitieron las resoluciones a las quejas nº 40/2009, 55/2009, y 204/2009.

Una vez analizado todo lo tramitado en materia específica de dependencia, quedarían por examinar veintidós quejas ciudadanas, menos homogéneas que las anteriores, que abordan las distintas problemáticas que tradicionalmente, hasta la puesta en marcha del sistema de la dependencia, han centrado el campo de la acción social desplegada por las administraciones autonómica y local. Se trata de quejas en ocasiones relacionadas con situaciones de pobreza y exclusión social, con todas las derivaciones que ello tiene. Otras veces atañen a la escasez de recursos que la sociedad destina a la tercera edad más vulnerable, a colectivos surgidos en torno a problemáticas derivadas de enfermedades como el parkinson, o a las familias monoparentales. También han llegado quejas que ponen de relieve auténticos dramas personales y familiares relacionados con las toxicomanías o con la enfermedad mental. Otras nos hablan de la desestructuración familiar o de situaciones de vulnerabilidad ligadas a la inmigración.

El fundamento constitucional de nuestra actuación en esta materia es muy amplio y viene constituido por diversos preceptos de nuestra Ley Fundamental. Ya en los principios básicos que se recogen en el primer artículo de la Constitución se habla de España como un Estado social y democrático de Derecho. Pero ese sustento constitucional también lo encontramos en el artículo 9 cuando expresa la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; en el artículo 39 que pone de relieve la necesidad de

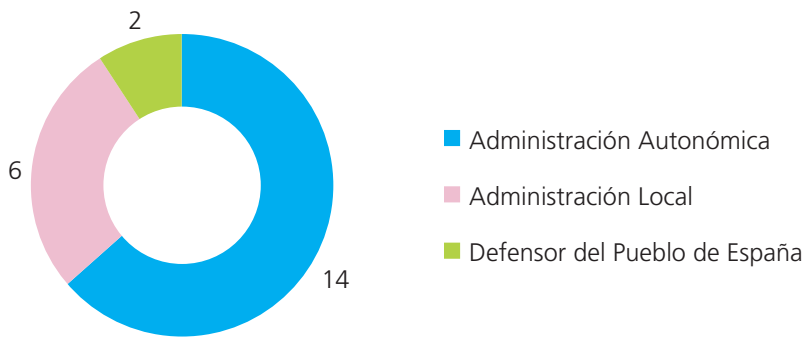
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia; en el artículo 41 que realiza un mandato a los poderes públicos para que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad; en el artículo 49 referido a la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos que deben realizar los poderes públicos mediante la prestación de la atención especializada que requieran; y, por último, en el artículo 50 que expresa la obligación de promover el bienestar de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atiendan a sus problemas específicos.

La mayoría de las quejas tramitadas en materia social proceden de Murcia y Cartagena. Otros municipios como Abanilla, Alguazas, Archena, Caravaca, La Unión, Mazarrón y Molina de Segura, aportan una queja por localidad. La competencia de la comunidad autónoma en materia de bienestar y servicios sociales, recogida en el artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía, hace que distintos órganos de esa administración sean los concernidos en catorce de las quejas tramitadas. En seis quejas lo es la administración local, y dos quejas han sido remitidas al Defensor del Pueblo de España, estimando que la competencia sobre el asunto para resolver correspondía a la administración del Estado. De nuevo las quejas son promovidas en su mayor parte por ciudadanos a título individual, y sólo en un par de casos, como veremos, se promueven colectivamente.

Vamos a abordar muy sucintamente el contenido sustantivo de las distintas quejas atendiendo a la administración afectada, comenzado por aquellas cuyo objeto es de competencia estatal y que por ello han sido derivadas al Defensor del Pueblo de España. La primera viene promovida por la asociación de enfermos de parkinson de Cartagena. En ella se expone el retraso en la ejecución de un proyecto del Gobierno de la Nación que tendría que haber concluido en 2006; se trata de la construcción y puesta en marcha del "Centro Nacional de Parkinson" en aquella localidad. El Defensor del Pueblo de España nos comunica que la queja fue tramitada y cerrada una vez recabado el informe de la administración en el que explica y justifica los pormenores que han dado lugar al retraso en la ejecución de ese proyecto. La otra queja trae causa de la denegación de determinadas prestaciones derivadas del desempleo que son tramitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Aquí el Defensor del Pueblo de España, tras analizar el caso a la luz del ordenamiento jurídico, sostiene que no se aprecia infracción del mismo por parte de la administración.

Algunas de las quejas de ámbito autonómico se centran en los recursos, y la gestión de los mismos, que se destinan a atender las necesidades

Administraciones afectadas por otras quejas de Bienestar Social



de la tercera edad. Precisamente la única resolución que esta Defensoría ha adoptado en esta materia (**Resolución de la Q-0039/2009**) tiene que ver con ese asunto, y está relacionada con las cuotas que abona el usuario de una residencia pública de mayores ubicada en Murcia, que se han visto acrecentadas como consecuencia del incremento de su pensión de jubilación. Además también expone en su queja que reúne las condiciones precisas para que se modifique su condición de "válido" por la de "asistido", de manera tal que quede reducida la cuota a satisfacer al centro. Esta Institución determinó recomendar que se procediese a la revisión solicitada, toda vez que la normativa de aplicación consultada permitía realizar nuevas valoraciones del estatus de los residentes cuando concurren circunstancias sobrevenidas.

La oferta de plazas en residencias para la tercera edad en la comarca de Cartagena, considerada insuficiente por su promotor, es motivo de una queja que finalmente quedó cerrada tras la lectura del informe remitido por la Dirección General de Personas Mayores. Allí se expone que en ese ámbito territorial hay suficiente oferta de plazas, públicas y concertadas, con idénticos requisitos de acceso. De Murcia nos llega una queja en la que se pide el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria pública a los usuarios de centros privados de la tercera edad. La queja se cierra al no estimar que de su contenido se deduzca alguna vulneración de derechos. Consta además que esa demanda se ha dirigido a la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia y a los distintos grupos parlamentarios, instando la oportuna tramitación legislativa. Otras infraestructuras destinadas al bienestar social de los mayores son los centros sociales de la tercera edad. De uno de ellos ubicado en Murcia proviene una queja, en tramitación a la espera del informe requerido al Instituto Murciano de Acción Social, que trae su causa de la denegación de subvenciones para la programación de actividades de gerontogimnasia que, se afirma, sí son concedidas a otros centros.

Una mención especial, por su singularidad, requiere una queja relacionada con la atención a las familias monoparentales. Su promotora, fundamentando su petición en las políticas implementadas en otras comunidades autónomas, sostiene que el apoyo que reciben las familias monoparentales debería ser similar al dado a las familias numerosas, habida cuenta de la carencia de uno de los progenitores. En el informe requerido a la Consejería de Política Social se expresa todo el conjunto de políticas y actuaciones que sobre este tipo de familias se llevan a cabo por parte de la Dirección General de Familia y Menor, informándose de las mismas a la interesada.

En otro ámbito de la administración social de nuestra autonomía, las ayudas económicas que gestiona el IMAS han sido objeto de diversas quejas y por motivos variados. En unos casos por que ese Instituto reclama la devolución de cantidades indebidamente pagadas a algún beneficiario; en algún supuesto la deuda con el IMAS procede del impago de cuotas por residencia que afecta a una pensionista con varios hijos aquejados de diversas enfermedades mentales, –queja ésta en trámite la espera del informe requerido al IMAS–. Otra queja expone la situación de una familia inmigrante a la que se le ha denegado por ese Instituto una ayuda no periódica de inserción y protección social. El IMAS también es destinatario de una queja, cerrada porque su peticionario no se dirigió previamente a la administración, en la que su promotor, aquejado de una enfermedad mental, manifiesta su disconformidad con la valoración del grado de minusvalía realizada por ese Instituto, en la que no intervino, según afirma, ningún especialista en psiquiatría.

Del resto de quejas concernientes a la administración regional destacan dos promovidas por los padres de una joven toxicómana, para la que solicitan plaza en un centro educativo terapéutico. La inhibición inicial de las dos Consejerías afectadas, a saber, las competentes en materia de sanidad y política social, ha ocasionado una intervención y seguimiento personal del Defensor del Pueblo de

la Región, en tanto no se adopten en relación con la menor las medidas necesarias para su rehabilitación.

Las quejas concernientes a la gestión municipal, muchas de ellas aún en trámite, como cabría esperar van dirigidas a los servicios sociales de los ayuntamientos. En unos casos tienen que ver con la falta de respuesta a la petición de ayudas económicas para la atención de necesidades sociales promovidas por ciudadanos en situación de desempleo, o por familias inmigrantes donde se perciben situaciones de desarraigo. Alguna se centra en el trato recibido por algún trabajador social, y un par de ellas se limitan a exponer situaciones de vulnerabilidad social, siendo esta Institución quien deriva a sus promotores a los servicios sociales de las localidades en las que residen.

III.5. Cultura

Bajo este epígrafe hemos reunido doce quejas de las que dos acabaron en resoluciones adoptadas por esta Institución, dos siguen tramitándose, y el resto, por distintos motivos que se explicitarán posteriormente, han sido cerradas.

Somos conscientes de que son pocos los conceptos manejados en este Informe Anual que tengan la complejidad del que nos ocupa, tan rico en matices y abordado desde distintas disciplinas propias de las ciencias sociales. De ahí que resulte complicado delimitar con cierta precisión qué contenido han de tener las quejas que aquí deben ubicarse. Pese a lo anterior, y aunque sea por exclusión, nos tranquiliza en cualquier caso el hecho de que las quejas que vamos a analizar a continuación, así nos lo parece a nosotros, no tienen mejor ubicación en otros epígrafes del Informe.

Nuestra Constitución alude a la cultura cuando en su artículo 44, como sabemos residenciado en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica, realiza un mandato a los poderes públicos para que promuevan y tutelen el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. El texto constitucional también habla de cultura a propósito de los jóvenes y de la tercera edad, cuando en los artículos 48 y 50 respectivamente, vuelve a dirigir un mandato a los poderes públicos para que en un caso promuevan las condiciones para participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo cultural, y en el otro promuevan el bienestar de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus específicos problemas, entre otros los relacionados con la cultura.

Parece clara, y en efecto ha sido el sustento constitucional fundamental de las dos resoluciones adoptadas en este epígrafe por la Institución, la importancia de lo prevenido en el artículo 46 del mismo texto constitucional, que, de nuevo, advierte a los poderes públicos de su obligación de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

Explicitado a grandes rasgos el fundamento constitucional en el que hemos apoyado nuestras actuaciones en materia de cultura, realizamos ahora unas breves pinceladas analíticas sobre las quejas, en la línea de lo ya realizado en otros epígrafes. Pocas conclusiones se pueden sacar del análisis de la procedencia territorial de las mismas. La capital de la región, como por otro lado podría resultar lógico, registra ocho de las once quejas. Debemos advertir no obstante que tres de ellas tienen que ver con una misma circunstancia muy puntual, como ha sido el descubrimiento del importante yacimiento arqueológico localizado en el subsuelo del Jardín de San Estaban. Las otras tres, que completan las reclamaciones que los ciudadanos han decidido encauzar a través de esta Institución en materia cultural, proceden de Jumilla, Lorca y La Unión.

Todas las quejas se han promovido individualmente, aunque en algunos casos su alcance vaya más

Municipios de procedencia de las quejas

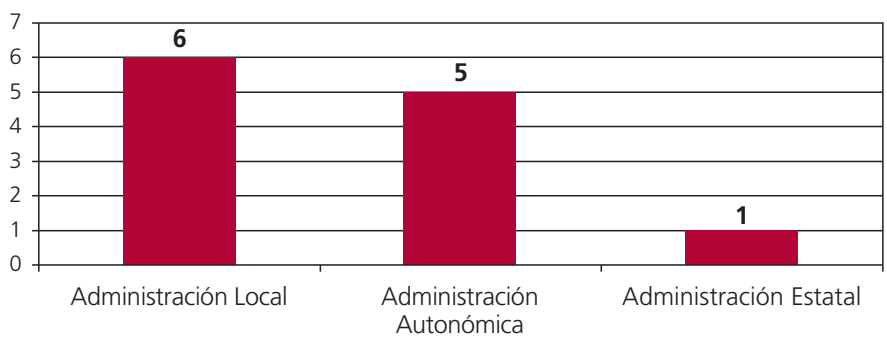


allá de lo meramente individual. Respecto a la administración concernida, en un caso nos hemos dirigido a la Delegación del Gobierno en nuestra región, en cinco quejas es la administración local el blanco de las mismas, y el contenido de las cinco restantes compete a la administración autonómica. Dado el número y el contenido de las quejas, cuya temática no es muy variada y no va más allá de puntuales problemas relacionados con la protección del patrimonio histórico y cultural, y en algún caso con asuntos muy específicos en los que en cierto modo se impugna la gestión cultural de las administraciones, parece preferible analizar el contenido sustantivo de éstas utilizando el criterio de la administración concernida en cada una de ellas.

La primera de las quejas, cerrada tras la lectura de un informe remitido por la Delegación del Gobierno en Murcia, nos viene de un barrio de la capital murciana, y quien la suscribe pretendía que un monolito conmemorativo de la construcción del denominado Camino Real de Murcia, en atención a una serie de consideraciones de carácter histórico, quedase ubicado en su barrio. Finalmente, la administración competente justifica la ubicación elegida para el monolito, no coincidente por otro lado con la aspiración del promotor de la queja.

Como ya se ha apuntado, son tres las quejas, registradas en las mismas fechas, relacionadas con el yacimiento arqueológico localizado en el Jardín de San Esteban. En ellas se abogaba por la paralización de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo que se ejecutaban en ese momento, y por la conservación y puesta en valor "in situ" del yacimiento. Inicialmente no se admitieron a trámite toda vez que su entrada en esta Institución se producía una vez que el asun-

Administraciones afectadas por las quejas



to ya estaba en manos de la administración de Justicia.

Las otras dos quejas que competen a la administración regional proceden igualmente del municipio de Murcia. En la primera de ellas se cuestiona una exacción a los usuarios de la Biblioteca Regional de Murcia por lo que se conoce como "préstamos interbibliotecarios de libros", que se producen cuando el ejemplar deseado no forma parte de los fondos existentes en las bibliotecas públicas de la región y se debe localizar y solicitar de otras bibliotecas ajenas a nuestra red. La gratuidad de los servicios que se prestan en las bibliotecas públicas queda excepcionada en este tipo de préstamos, y así se explica al promotor de la queja, cerrando la misma. La otra queja dirigida a la Consejería de Cultura procede de un vecino de Murcia que insta a la citada administración a que reconozca los méritos culturales de uno de sus ascendientes, letrista de diversas composiciones musicales. La queja se archiva al no apreciar esta Defensoría vulneración de derechos.

De Lorca llega a una queja, actualmente en tramitación, relacionada con la aparición de determinados restos arqueológicos en una zona del centro de aquella ciudad, que en opinión de la administración cultural merecen ser conservados y puestos en valor. Esa decisión ha implicado la paralización de la promoción inmobiliaria prevista en el solar en el que han aparecido los restos, con las consecuencias económicas que de ello pueden derivarse para la mercantil que la promueve. De La Unión llega una queja muy puntual que guarda relación con la celebración del Festival Internacional del Cante de las Minas. La pintura de un artista local, cedida temporalmente para el evento, fue taladrada en sus esquinas y sujetada mediante alambre se utilizó para la decoración de una caseta de feria instalada durante el desarrollo del citado evento cultural. Solicitado el oportuno informe al Ayuntamiento de aquella localidad se comunica que se está procediendo a la restauración de las esquinas taladradas y que en breve la obra será devuelta al autor, con lo que decidimos cerrar la queja.

Las tres quejas que quedan por analizar tienen relación con inmuebles históricos. La primera, promovida por una asociación de vecinos de Sangonera la Verde en Murcia, denuncia el incumplimiento de las normas de protección del patrimonio histórico por los promotores de unas obras de remodelación que afectan a una iglesia catalogada de la citada pedanía. El Ayuntamiento de Murcia, en su informe, afirma estar tramitando un expediente de disciplina urbanística frente a los promotores de esas actuaciones realizadas contra licencia, por lo que esta Institución procede al cierre de la queja.

Las otras dos quejas relacionadas con inmuebles históricos catalogados se saldaron con sendas resoluciones de esta Defensoría dirigidas a los dos ayuntamientos concernidos: Jumilla y Murcia. En la primera de ellas, procedente de la citada localidad del altiplano murciano, un vecino nos pone de relieve el mal estado de conservación arquitectónica de un inmueble ubicado dentro del perímetro de delimitación del conjunto histórico artístico de aquel municipio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Esa circunstancia ha generado problemas de accesibilidad a las viviendas cercanas, además del temor derivado del riesgo de derrumbe que presenta el inmueble, sobre el que el Ayuntamiento ha decretado la incoación de un expediente de ruina que no se ha concluido con la demolición debido a la intervención tutelante de la administración cultural de la Región de Murcia. La resolución adoptada por esta Defensoría (**Resolución de la Q-0146/2009**) contiene dos recordatorios de deberes legales y una recomendación. De un lado se recuerda al Ayuntamiento de Jumilla su obligación de ejecutar con carácter subsidiario y de manera inmediata las medidas necesarias para la consolidación arquitectónica del inmueble que impidan su desplome, garantizando la seguridad e integridad de

las personas y la accesibilidad y movilidad en el entorno del citado BIC. Se recuerda asimismo al Ayuntamiento de Jumilla que debe dar cumplimento al preceptivo mandato establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y dotarse en consecuencia de un Plan Especial de Protección de su conjunto histórico artístico. De otro lado se recomienda a la citada administración local que, recabando el apoyo de la Comunidad Autónoma, promueva la restauración del inmueble referido.

La otra queja tiene por objeto a un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y ubicado dentro del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad de Murcia. El promotor de la queja, a tenor del estado de conservación del inmueble, solicita la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Murcia de las necesarias obras de rehabilitación del mismo. En la **Resolución de la Q-0148/2009**, esta Defensoría recuerda al Ayuntamiento de Murcia que tanto la Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como el Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHA), imponen determinados deberes de protección a los propietarios y, subsidiariamente, a la administración. También se contiene en esa resolución una sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Murcia, y que se hace extensiva asimismo a la administración cultural de la CARM, para que instrumenten cauces para dar asistencia técnica y económica a los propietarios que deban afrontar obras de rehabilitación en bienes de interés cultural.

Ambas resoluciones son parcialmente aceptadas por los ayuntamientos concernidos.

III.6. Deportes

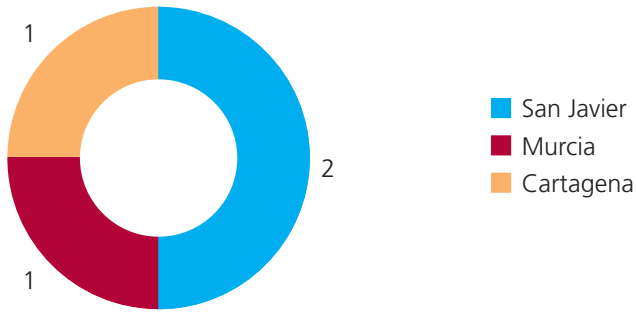
El reconocimiento del deporte en la Constitución Española se produce con el mandato que el artículo 43 de la misma dirige a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte y faciliten la adecuada utilización del tiempo de ocio. El marco de referencia del reconocimiento del deporte como derecho no es otro que el de un precepto de nuestra Ley Fundamental, el citado artículo 43, destinado de modo prioritario a reconocer el derecho ciudadano a la salud, que queda ubicado, como se sabe, en el Capítulo III del Título I en el que nuestra Ley Fundamental expone los Principios Rectores de la Política Social y Económica.

Son sólo cuatro las quejas llegadas a esta Institución que finalmente hemos decidido ubicar en este epígrafe. Conviene adelantar también que sólo hemos adoptado una única resolución, relacionada con las instalaciones deportivas para la práctica del fútbol sala entre los más jóvenes en el municipio de San Javier. Respecto a su procedencia, dos son promovidas por vecinos de San Javier, otra nos llega desde Cartagena y una última que lo hace desde Murcia. En todas ellas el deporte es el elemento central, pero no el único, y tras algunas de estas quejas son perceptibles otros intereses, siempre legítimos, de sus promotores.

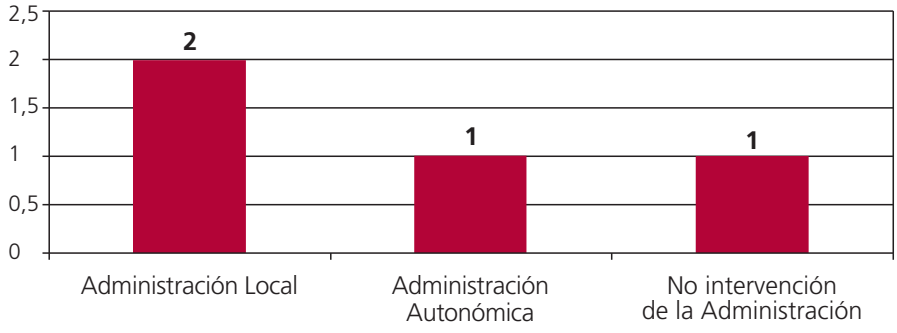
Las cuatro quejas han sido promovidas de manera individual, aunque en un caso, como veremos ahora, la realidad que describe la queja afecta a una pluralidad importante de personas. Respecto a las administraciones concernidas, en un caso es la autonómica, y a ella nos dirigimos desde esta Institución para requerirle la información que precisábamos. En otros dos supuestos son los ayuntamientos los implicados. Y, finalmente, la cuarta queja deriva de un problema en el que, así nos lo parece a nosotros, está ausente la intervención pública.

En la primera queja, llegada desde Murcia, su promotor nos ponía de relieve que el contenido de las subvenciones municipales en materia de fomento de la práctica deportiva no le posibilita acceder a una ayuda que cubra los gastos de la construcción de una sala para el aprendizaje de la escalada, a realizar dentro de un centro cultural ubicado en la pedanía murciana de Espinardo. Actividad que, por otro lado, habría de ser gestionada por su asociación. Esta Defensoría, no apreciando vulneración de

Municipios de origen de las quejas



Administraciones afectadas por las quejas



derechos fundamentales, procedió al archivo de la queja.

Otra de las quejas nos llega, vía e-mail, desde Cartagena, y versa sobre las condiciones sanitarias y de vigilancia existentes en piscinas de determinadas comunidades de propietarios de La Manga del Mar Menor. Su promotor entiende que esas instalaciones deberían ser vigiladas por socorristas titulados. La queja se cierra al considerar esta Institución que no existe en este caso intervención alguna de la administración pública que pueda ser censurable.

Otra de las quejas nos llega de San Javier, en este caso su promotor pregunta a esta Institución sobre la normativa que regula las condiciones y categoría que deben tener los establecimientos hoteleros que alojan a los participantes de los Juegos Regionales de Deporte Escolar. Realizadas las consultas oportunas a la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo, que confirma la inexistencia de normativa a ese respecto, se traslada la respuesta al ciudadano y se archiva la queja.

Del mismo municipio, San Javier, pero de mayor calado deportivo, llega la última queja que analizamos. Su promotor, en representación de un club deportivo de fútbol-sala que organiza en equipos federados a cerca de ochenta niños y jóvenes de su localidad, relata en su queja las carencias, agravadas con el paso del tiempo y el concurso de diversas circunstancias, de algunas de las infraestructuras deportivas precisas para el desarrollo en condiciones óptimas de ese deporte en el citado municipio. Finalmente, esta Institución adoptó la **Resolución de la Q-0166/2009**, en la que se acaba recomendando al Ayuntamiento de San Javier que habilite

unas pistas deportivas para la práctica del citado deporte en una pedanía de aquella localidad, estudiando asimismo la oportunidad de ceder el suelo necesario a la administración regional para la construcción de un pabellón deportivo en esa pedanía, y, entretanto, proceda a normalizar la limpieza de las pistas deportivas habitualmente utilizadas por los reclamantes para garantizar la práctica deportiva.

III.7. Derechos Sociales y Políticos

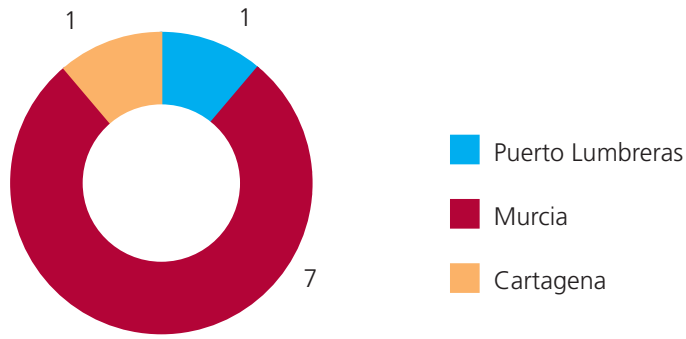
Son nueve las quejas que vamos a analizar a continuación. Todas, a excepción de una procedente de Cartagena y otra que nos llega desde Puerto Lumbreras, han sido promovidas por ciudadanos que residen en la capital de la Región. Ninguna de ellas ha acabado en resolución de esta Defensoría, y se han ido despachando de diferentes modos: en su mayoría se han cerrado al concluir que no se apreciaba en los casos expuestos vulneración de derecho alguno, en otras la tramitación se ha paralizado por la falta de formalización de la queja o porque la misma se estaba tramitando al mismo tiempo en la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. Un par de ellas se han remitido, para su conocimiento, al Defensor del Pueblo de España.

En la primera de las quejas, que escapa al ámbito de nuestras competencias, su promotor exige que se incrementen en la Región de Murcia las inversiones del actual Gobierno de la Nación. Esa petición va fundamentada en una serie de consideraciones de orden político que, por motivos obvios, no cabe reproducir. La demora en la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida ante la Asamblea Regional de Murcia por una asociación relacionada con la familia, y tendente a lograr una Ley por la que se establezca una red de apoyo a las mujeres embarazadas, es el objeto de una queja provisionalmente archivada dado que ese caso ya estaba en manos de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano del parlamento murciano.

De Cartagena nos llega una queja en la que un ciudadano exponía su deseo de poder ejercer el derecho de sufragio activo en cualquiera de las convocatorias electorales, introduciendo directamente en la urna, y sin la mediación del presidente de la correspondiente mesa electoral, el sobre con la papeleta electoral elegida, lo que contraviene las disposiciones que sobre mecánica de las votaciones se establecen en el articulado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Remitida la queja al Defensor del Pueblo de España, por considerarla de su competencia, éste nos comunica la no admisión a trámite de la misma, al no derivarse de su lectura ninguna irregularidad imputable a la administración electoral.

El acceso a determinada información relacionada con el patrimonio de los miembros del Consejo de Gobierno de la CARM, fue objeto de una queja finalmente no tramitada por esta Institución al no

Municipios de procedencia de las quejas



ser formalizada en plazo por su promotor. Un ciudadano de Murcia promueve en nombre de una asociación solidaria una queja en la que pone de manifiesto que el Ayuntamiento no les proporciona un local en el que desarrollar la actividad de la asociación. El informe de la administración municipal determina que la petición ha sido tramitada correctamente por la concejalía competente, pero que el Ayuntamiento no dispone en la actualidad de locales adecuados para atender esa demanda. Comunicada esa circunstancia al ciudadano promotor, la queja acaba archivándose.

El Ayuntamiento de Jumilla, a través de un oficio dirigido a esta Defensoría, nos adjunta certificado de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de aquel Ayuntamiento. En ese acuerdo se expresa la disconformidad de ese órgano político y representativo con el tratamiento informativo dado a su municipio por la televisión pública autonómica. El escrito es archivado por esta Defensoría y, sin entrar en el fondo del asunto, se sugiere a su promotor que lleve el caso previamente a la administración con competencias en la materia.

Otra de las quejas ubicadas en este apartado versa sobre la falta de reconocimiento público por parte de las instituciones políticas de un músico murciano que, según se afirma en el escrito remitido a nuestra Institución, sufrió represalias políticas durante el franquismo. La queja se concluye al no advertir vulneración de derechos fundamentales en la actuación de la administración.

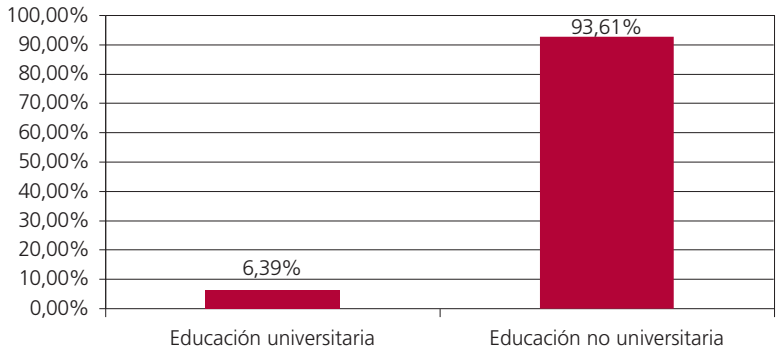
Al Defensor del Pueblo de España remitimos una queja llegada a nuestra Institución en la que un ciudadano, enjuiciando la constitucionalidad de un Decreto que regula un programa de ayuda al desempleo, estima que esa norma vulnera el principio esencial de igualdad, al considerar que excluye de la cobertura económica que arbitra a los mayores de 52 años. Por último, guarda cierta similitud con la anterior una queja promovida por un ciudadano de Puerto Lumbreras que denuncia un supuesto caso de discriminación, con relación a otros vecinos de su municipio, en la contratación de personal destinado a ciertos talleres de empleo de la citada localidad. Se trata de una queja aún no cerrada, a la espera de que su promotor acredite que se ha dirigido con carácter previo a la administración local.

III.8. Educación

El derecho a la educación configura uno de los ámbitos más prestacionales de la actividad administrativa, junto a la sanidad y a los servicios sociales. Precisamente por esta circunstancia, durante el año 2008 y 2009, se han analizado una gran cantidad de cuestiones en materia de educación, en todos sus ciclos y modalidades, a saber: educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, y universitaria. En concreto se han recibido 45 quejas, lo que representa un 6,98% del total, de las cuales un 93,61% se refieren a educación no universitaria y un 6,39% a educación universitaria.

El epígrafe de educación se configura como un apartado al que se ha conferido un tratamiento preferente en nuestra Institución, en primer lugar por la urgencia conferida para su resolución, pues se trata de cuestiones que, al estar normalmente relacionadas con estudiantes, entendemos preferente solventarlas de la forma más rápida posible, evitando esperas indeseadas. De otro lado, obedecen a problemáticas que suelen estar vinculadas al ciclo escolar, por lo que una solución fuera de plazo, convertiría en ineficaz nuestra actuación.

La educación se ha configurado tradicionalmente como un instrumento para el desarrollo de las sociedades avanzadas, a través de la realización personal de sus individuos. Su carácter gratuito en las etapas básicas, permite minimizar las diferencias entre las clases sociales y económicas, configurándose como un instrumento necesario, incorporado al actual texto constitucional en 1978, si bien encontramos antecedentes remo-



tos en la Constitución de 1812 a nivel nacional y en la Constitución jacobina de 1793 a nivel europeo.

En España, la primera referencia a la gratuidad de la enseñanza aparece en el Informe Quintana de 1814, haciendo especial hincapié en la importancia del nivel de instrucción de los ciudadanos como requisito previo para el ejercicio de los derechos individuales, aunque en los textos del siglo XIX sólo apareciese recogida la libertad para fundar centros docentes.

El carácter universal de la educación se preconiza así en el primer apartado del artículo 27 de la Constitución de 1978, cuando se declara que "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza". En semejantes términos se pronuncia la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, siendo extensible a españoles y extranjeros residentes en España.

Este derecho a la educación ha de entenderse en un sentido más amplio que el tradicional de la enseñanza, pues comprende no sólo los contenidos curriculares propios de cada una de las áreas lectivas, sino una formación integral en la convivencia de los alumnos, configuradora de nuestro modelo de sociedad.

Respecto al término "Todos", es claro que la Constitución subraya la pretensión universal de la misma, independientemente de la edad o de cualquier otra circunstancia personal, económica o social.

En este sentido, se han presentado 6 quejas relacionadas con el derecho de admisión en los centros docentes. En la gran mayoría se desistió por obtener finalmente el centro elegido; en otras por el contrario, se informó al ciudadano sobre el procedimiento establecido para la admisión, corroborando la actuación correcta de la administración.

Mención especial merece la **queja 336/2009**, donde el titular de la queja nos exponía su disconformidad con la inadmisión de su hija en un centro de infantil, a pesar de que habían sido admitidos al curso en cuestión una cantidad de alumnos inferior a la reglamentariamente prevista, con fundamento en la existencia en el citado curso de un niño con necesidades educativas especiales que, en virtud de una instrucción no publicada, debía de ocupar dos plazas.

En la **Resolución de esta Defensoría de 22 de septiembre de 2009**, se instó a la administración competente en materia de educación a que en próximos cursos se publicaran en la forma correcta las instrucciones que pudieran afectar a los ciudadanos; sin embargo, en este caso concreto, la ponderación de los bienes jurídicos implicados, a saber, el derecho de la niña a ser admitida por no haberse publicado la disposición en legal forma, y el derecho de los niños con necesidades educativas especiales y de sus restantes compañeros a recibir de sus profesores la atención necesaria, aconsejaban

apoyar la decisión adoptada por la administración, con las matizaciones antes expuestas.

Siguiendo con el precepto constitucional referido a la educación, proclama el apartado segundo del artículo 27, que "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

Este apartado sirvió de fundamento para emitir **la Resolución de 17 de septiembre de 2009**, relativa al expediente de **queja 395/2009**. En el mismo se exponía la situación de un escolar en 4º de primaria, al que se impidió la promoción a un curso superior, habiendo suspendido dos asignaturas, lengua y matemáticas. En este caso concreto, el alumno presentaba problemas de tipo psicológico, con grandes dificultades para hacer amigos y de adaptación, constando en el expediente un informe de un psicólogo clínico en el que se aconsejaba que siempre que fuera posible, el alumno promocionara.

Investigado por la Defensoría el caso, se advierten en el informe emitido por la inspección educativa, serias contradicciones derivadas del expediente abierto al alumno, de forma que se consideró que si el alumno hubiera sido apoyado desde el principio, sus resultados académicos habrían sido posiblemente satisfactorios, añadiendo que estas contradicciones deberían haber sido resueltas por la inspección educativa. Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el centro escolar no había dado pleno cumplimento al mandato constitucional de considerar la atención escolar, no sólo como enseñanza, sino como algo más amplio, esto es, como educación, en todos los aspectos de la personalidad, habida cuenta de los informes psicológicos obrantes en el expediente y del hecho de que este alumno no podría repetir por segunda vez en Primaria, aunque suspendiera todas las asignaturas en atención a la normativa vigente, desde esta Defensoría se entendió que el alumno debía promocionar. Esta resolución no fue aceptada por la administración, remitiéndose un informe en el que se justificaba la actuación de la inspección, pero sin referir las circunstancias individuales del alumno.

En la actualidad, el promotor de la queja ha acudido al Defensor del Pueblo de España, encontrándose allí en tramitación.

Sigue declarando el apartado tercero del artículo 27 de la Carta Magna que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Sobre este aspecto, se recibieron 7 quejas relacionadas con la negativa de los padres a que sus hijos cursaran la asignatura de educación para la ciudadanía tal como se configuraba por los respectivos centros, por entender que por los contenidos que integraban podrían suponer una vulneración del principio declarado en este apartado.

Puesto que el asunto estaba judicializado, al estar pendiente Sentencia del Tribunal Supremo, desde esta Oficina se comunicó a los promotores de la queja el respeto que debe imperar respecto a los pronunciamientos de jueces y tribunales, suspendiendo la tramitación de la queja, sin perjuicio de la posibilidad de estudiar la problemática general de la misma, tal como propugna el artículo 21.2 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

En este sentido, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia adquirió diferentes textos de la asignatura "Educación para la Ciudadanía" obteniendo información sobre los centros en que se utilizaban, concluyendo que en la mayoría de los casos, existía consenso sobre su impartición, sin perjuicio de opciones concretas que, tal como nos recordó el Tribunal Supremo en Sentencias de 11 de febrero de 2009, deberían ser dirimidas, en su caso, por los tribunales ordinarios.

En otro orden de cosas, y con fundamento en el derecho a la participación de todos los sectores

afectados en la programación general de la enseñanza y en particular de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos (vid. artículo 27.5 y 7 CE), se han recibido dos quejas relativas a la negativa del centro docente a permitir la participación de los sectores afectados en la gestión del centro escolar, y la disconformidad sobre el sistema de votación para elección del presidente de la Asociación de Madres y Padres de alumnos. Cuestiones ambas que, por no estar finalizada la primera, y por no haber sido ratificada por el interesado, la segunda, no permiten mayor comentario.

Especial relevancia merece el mandato dirigido a los poderes públicos en el apartado noveno del artículo 27 comentado. En él se dispone que "los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca". En este sentido han sido múltiples las quejas relativas a deficiencias en infraestructuras de los centros docentes. En concreto, por Resolución de 5 de octubre de 2009 y 2 de diciembre de 2009, relativas a las quejas 136/2009 y 258/2009, en las que se ponía de manifiesto el peligro en los accesos a dos centros escolares, uno de educación infantil y primaria en Cartagena, y otro de educación secundaria y bachillerato en Murcia, se atribuyen a los respectivos ayuntamientos la responsabilidad de poner de acuerdo a los agentes intervinientes en orden a garantizar la seguridad en los accesos, arbitrando al efecto todas las medidas legales existentes, incluso de adquisición del suelo necesario para los accesos por vía coactiva, si fuera necesario.

Asimismo se ha denunciado el mal estado de instalaciones escolares, en concreto, en dos casos sobre centros de educación infantil y primaria, constatando la ausencia de zonas comunes, o el mal estado de los patios de juego. En estos casos, el Defensor solicitó información a la Consejería competente, concluyendo que al tratarse de un problema de prioridades presupuestarias, no podía concluirse que existiera una actividad negligente de la administración.

También los comedores escolares han motivado el pronunciamiento de esta Defensoría. Así, en **Resolución de 12 de mayo de 2009 al expediente de queja 18/2008**, en el que se impedía a una niña intolerante a la leche de vaca, llevar al comedor sus menús preparados desde casa, tal como le había prescrito su médico, se recomendó desde esta Defensoría que se habilitara la forma para permitir esta posibilidad, instando a la aprobación del reglamento que regule los comedores escolares.

En otra de las quejas, se solicitaba por un padre la aprobación del reglamento que permitiera la alimentación en comedores escolares de niños celíacos. Solicitada información al centro en cuestión, se comprobó que el catering que servía la comida preparaba menús especializados en función de las necesidades alimenticias individuales de cada niño, concluyendo la queja en sentido favorable para la administración, si bien tomándose nota para futuras actuaciones para el supuesto de que no se apruebe por la Comunidad Autónoma la normativa prevista en materia de comedores escolares.

Finalmente, durante el año 2009, se han dirigido al Defensor del Pueblo, dos peticiones de colectivos que solicitaban que la administración no procediera al cierre de escuelas rurales o de pequeñas poblaciones, que por su escaso número de niños, no justificaba económicamente su mantenimiento (quejas 164/2009 y 383/2009). Al respecto, el Defensor del Pueblo propugnó la relevancia del mantenimiento de este tipo de centros, no atendiendo exclusivamente a los aspectos económicos, sino también a su configuración como referente social y cultural de los pequeños pueblos de la Región de Murcia. En ambos casos, las quejas finalizaron satisfactoriamente, por lo que no motivaron una resolución expresa.

Relacionado con el aislamiento de las poblaciones, en la queja 297/2009, el promotor de la queja soli-

citaba que se admitiera a su hija menor de 3 años al segundo ciclo de educación infantil en un centro de educación infantil y primaria por no tener medios, en atención a la lejanía de su residencia, para poder llevar a la menor a un centro de atención a la infancia o escuela infantil de 0 a 3 años. Consultada la normativa y pedida información a la administración, se cerró la queja por no permitir esta posibilidad la reglamentación aplicable, concluyendo que no existía vulneración por parte de la administración.

Con peculiaridades distintas a las quejas antes expuestas, pero incardinada en el derecho fundamental a la educación, se configura la educación universitaria, reconociendo la Constitución, "la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca" (art. 27.10 CE).

En este punto, destacar la **Resolución de 15 de junio de 2009, a la queja 110/2009**, relativa a la inadmisión de una alumna de Medicina en la Universidad de Murcia por el turno de estudiantes provenientes de universidades extranjeras a pesar de existir plazas vacantes. Los hechos denunciados partían de un traslado de expediente de una universidad del entorno europeo al 2º curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. En concreto, la alumna intentaba probar que no se habían cubierto las plazas de reserva para extranjeros, no habiendo sido además publicada la lista de extranjeros, con la consiguiente indefensión generada.

Las tardanzas en la contestación de la administración al recurso planteado contra la desestimación de su solicitud (en mayo de 2009, siendo la solicitud de septiembre de 2008) determinó que la alumna estuviera cursando de facto el segundo curso de medicina como oyente, a riesgo de que no se la admitiera finalmente. Al efecto desde esta Defensoría se solicitó información a la Universidad, contestándonos que la causa de la no admisión no era por no existir plazas vacantes, sino por no tener la alumna los créditos necesarios para acceder al segundo curso. Por todo lo anterior, esta Defensoría entendió que nos encontrábamos ante un claro caso de indefensión, solicitando la inmediata admisión de la chica en las plazas vacantes existentes. La Resolución no fue aceptada, utilizando argumentos no aplicables al caso concreto y que por tanto no desvirtuaban nuestra argumentación. A día de hoy la alumna se encuentra cursando segundo de Medicina, si bien, según el seguimiento realizado, todavía no ha practicado la debida convalidación.

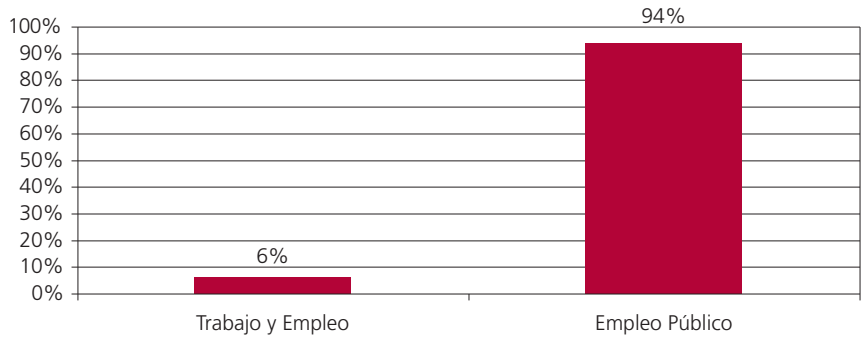
En esta materia, aún está pendiente una queja de los profesores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A de la Universidad de Murcia, sobre la que ya se está elaborando el informe a la contestación de la administración, procediéndose en breve a su resolución. Esta resolución será analizada en el informe anual 2010.

III.9. Empleo

El apartado del empleo, respecto del que se han presentado 52 quejas, lo que supone un 8,06% del total, se divide en dos subapartados.

El primero, especialmente agudizado por la situación de crisis económica en la que actualmente se encuentra nuestro país, comprende las quejas de los ciudadanos que se han quedado sin empleo, y acuden al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia buscando remedio a su situación, en muchas ocasiones desesperada. En estos supuestos, se ha intentado orientar a los individuos afectados sobre los mecanismos de ayuda que las diferentes administraciones ofrecen, tanto a nivel local, a través de los respectivos servicios sociales de cada ayuntamiento; como a nivel autonómico, mediante las ayudas que concede el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

El segundo subapartado, relativo al empleo público, se integra por 49 quejas, esto es un 94% del total de las quejas en materia de empleo, entre las que se aprecia a su vez una nueva clasificación,



constituida por las quejas del personal funcionario en materia de retribuciones; quejas de aspirantes a funcionarios con motivo de la realización de procesos selectivos, o referentes a las bolsas de trabajo y quejas de carácter general relativas a la ordenación de la función pública, y otras sectoriales no incardinables en ninguna otra subclasificación.

Respecto a las quejas relativas a incumplimientos de la administración en materia de retribuciones, hay que recordar que la relación funcionarial es una relación administrativa clasificada de especial sujeción, regulada no solamente por la normativa en materia de función pública (Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto del Empleado Público; Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Función Pública de la Región de Murcia y Ley 5/2001, de 5 de diciembre, por la que se regula el Personal Estatutario del Servicio), sino también por los convenios colectivos negociados y aprobados por la administración y los representantes sindicales de los funcionarios.

En este sentido resulta particularmente relevante el Acuerdo Administración-Sindicatos de 10 de julio de 2008, ratificado por el Consejo de Gobierno el 14 de noviembre de 2008, de homologación retributiva del personal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al Servicio Murciano de Salud.

Con motivo de la aplicación de este Convenio, se han tramitado tres quejas. El primer expediente con número 24/2009, se presentaba por el colectivo de delineantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, solicitando una modificación en sus complementos específicos por no haberse experimentado en sus salarios los mismos incrementos que otros compañeros de la administración. La contestación de la administración justificó que no existían cuerpos espejo de homologación con el servicio murciano de salud y por tanto se habían asimilado a otros colectivos. Por lo expuesto, independientemente de consideraciones sobre el mayor o menor acierto de esta contestación, pues se agrupaban en similares complementos colectivos que nada tenían que ver entre sí, entendimos que no se podía apreciar un incumplimiento de la administración.

Cuestión distinta fue la **queja 114/2009** que motivó la **Resolución de 1 de junio de 2009**, en la que un interventor delegado grupo B de la Comunidad Autónoma reclamaba cobrar el mismo complemento específico que sus compañeros interventores grupo A, con base a la disposición adicional sexta del Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia. Desde esta Defensoría se argumentó que si según esta disposición, los interventores del grupo B realizan las mismas funciones que los interventores del grupo A, deberían cobrar igual complemento específico. La administración no aceptó nuestra resolución por considerar que en el Acuerdo Administración-Sindicatos no era viable que dos

grupos distintos recibieran el mismo complemento específico. En nuestra opinión esta contestación no es de recibo puesto que un acuerdo Administración-Sindicatos no podría ir en contra de una ley, y, a mayor abundamiento, tampoco de este Acuerdo puede inferirse que dos mismos grupos no puedan tener igual complemento específico si realizan las mismas funciones.

Asimismo, se encuentra en fase de tramitación el expediente de queja 168/2009, en el que un colectivo de ingenieros técnicos reclama cobrar un determinado complemento de productividad, por no estar el suyo proporcionado respecto de otros grupos. La diferencia obedeció inicialmente a un motivo que con el tiempo ha quedado desfasado, y aunque la administración se comprometió a eliminar esta diferencia en virtud del acuerdo de homologación, no se ha procedido hasta la fecha a actuar en este sentido.

Finalmente se han presentado otras quejas relativas a nóminas de personal funcionario (vid. expediente 15/2008, 144/2009, 489/2009, 560/2009), que o bien se han resuelto satisfactoriamente al corregir la administración el error denunciado, o bien se han resuelto de forma favorable a la administración por no apreciar esta Defensoría incumplimiento legal o reglamentario.

En segundo lugar, han sido relativamente frecuentes las quejas de los aspirantes a procedimientos selectivos, mostrando su disconformidad en cuanto a la realización o valoración de las pruebas (expediente 608/2009 –aún en tramitación–), o bien solicitando la no coincidencia en las fechas de realización de pruebas selectivas a las que se opte en virtud de una misma titulación (expediente 215/2009, –finalizado satisfactoriamente para el ciudadano–), o incluso pidiendo la apreciación de circunstancias personales en el aspirante a la hora de realización de los exámenes.

En este último sentido, **las Resoluciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia de 10 de diciembre de 2009 (expedientes de queja 490/2009 y 507/2009),** abogan por la aprobación de una disposición de carácter general que regule la posibilidad de traslado de algún miembro del tribunal al domicilio o al hospital en que esté ingresada una aspirante embarazada cuando, por prescripción facultativa, haya de guardar reposo, o incluso que se prevea la posibilidad de un llamamiento excepcional.

Esta Resolución, novedosa y vanguardista, y plenamente coherente con la realización efectiva de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, intenta dar amparo a la situación de aquellas madres que se ven obligadas a renunciar a realizar un examen para el que se habían estado preparando, o bien porque acaban de tener un hijo, o bien porque tienen que guardar reposo y de acudir al mismo podrían poner en peligro la vida del feto.

También enraizada en la problemática de la realización de los procesos selectivos, se encuentra la valoración de los méritos del personal integrante de las bolsas de trabajo. En esta cuestión, la mayoría de las quejas se centran en errores o disconformidades con la valoración de los méritos (queja 327/2009) o en la solicitud de reunión del tribunal calificador para dar vigor a una bolsa de trabajo supletoria (queja 262/2009).

De igual manera se han presentado quejas sobre los concursos convocados por la administración regional y el Servicio Murciano de Salud (queja 198/2009), traslados (queja 373/2009) o sobre el cierre de los mismos a personal de determinadas Consejerías (aún en tramitación).

Singular atención merecen las quejas relativas al tratamiento de las personas con discapacidad en los procesos selectivos de la función pública regional y del Servicio Murciano de Salud (vid. **quejas 58/2009 y 62/2009**), que motivaron las **Resoluciones de 20 de julio de 2009**). En las mismas se solicita a la Dirección General de

Empleo Público y al Servicio Murciano de Salud, que en la provisión de empleo temporal a través de las correspondientes bolsas de trabajo, también cumplan el cupo del 5% establecido en la normativa de aplicación.

Con un carácter más residual, se han presentado quejas en materia de prolongación de edad de la jubilación –expediente 283/2009, relativo a una funcionaria eventual del servicio murciano de salud que deseaba prolongar su vida activa más allá de los 65 años pero cuando cumplía esta edad había sido ya cesada– (en este caso, esta Defensoría no detectó vulneración de los derechos fundamentales objeto de protección) o bien en relación con las pruebas de enfermero especialista en salud mental, que por tener su origen en la regulación practicada por un Real Decreto estatal, fueron enviadas al Defensor del Pueblo de España.

III.10. Hacienda Pública

En materia de hacienda pública se han presentado 23 quejas, lo que representa un 3,57% del total de esta sección.

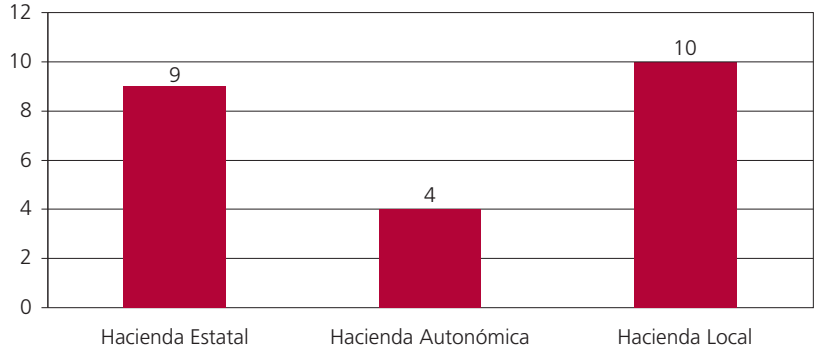
De estas 23 quejas, 9 pertenecen a cuestiones relacionadas con la hacienda estatal (lo que representa un 13%), que por ir referidas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al pago por nacimiento, acogimiento o adopción o embargos de entidades de ámbito estatal, han sido remitidas al Defensor del Pueblo de España, por ser de su competencia.

En el ámbito de la hacienda autonómica, se han presentado 4 quejas (17,39%). En el expediente 15/2009, el ciudadano denuncia la situación en la que se encuentra, originada por haber arrendado un local comercial a una empresa de juegos recreativos, estando afecto el mismo al pago de los tributos autonómicos sobre el juego aún habiendo finalizado la actividad. Esta queja fue cerrada al solucionarse satisfactoriamente el problema para el interesado, sin perjuicio de que al respecto se inicien en un futuro investigaciones de oficio para un mejor análisis del problema.

Por otra parte, en la queja 61/2009, el ciudadano muestra su disconformidad con una denegación de un reintegro de ingreso indebido por parte de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda. La queja se cerró por no apreciar esta Defensoría vulneración por la administración de los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, en la queja 480/2009, el promotor de la misma reclamaba contra la Agencia Regional de Recaudación por un embargo practicado por una liquidación complementaria a una autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En este caso, recomendamos al ciudadano que se dirigiera con carácter previo al organismo administrativo, a fin de no suplantar los cauces ordinarios de resolución de conflictos.

Finalmente, en la queja 559/2009 el interesado reclama contra un embargo practicado por la Agencia Regional de Recaudación desconociendo el objeto del mismo. Desde esta Defensoría se



recomendó al ciudadano que se dirigiera a las dependencias administrativas correspondientes al objeto de obtener información, dirigiéndose a esta Institución si no satisfacía su pretensión.

Es por tanto en el ámbito local, donde mayor número de quejas se ha registrado, en concreto, un total de 10, lo que representa un 43,47%.

Así, independientemente de quejas sectoriales como la 52/2009, referida a la tasa local de pasaderas del Ayuntamiento de Cartagena, que fue cerrada por no haberse dirigido el ciudadano previamente a la administración, o expedientes de apremio descontextualizados del hecho causante (vid. más adelante queja 19/2009), o disconformidades con las liquidaciones practicadas en determinados tributos (v.gr. 586/2009, aún en tramitación), descollan dos temas que se reproducen con cierta frecuencia.

En primer lugar, el que originó la **Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia de 29 de mayo de 2009**, en relación con la **queja 100/2009**, donde el interesado ponía de manifiesto que el Ayuntamiento de Murcia, a través de su organismo recaudador, embargaba las pagas extras en la medida en que el importe ingresado en ese mes excediera de la cuantía establecida para cada mes para el salario mínimo interprofesional.

Desde esta Defensoría, se recordó al Ayuntamiento de Murcia el mandato legal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impide el embargo de cuantías inferiores al salario mínimo interprofesional, independiente de su cómputo anual, mensual o diario.

Esta Resolución fue aceptada por el Ayuntamiento de Murcia, afirmando que el servicio municipal correspondiente procedía al alzamiento del embargo en cuanto detectaba haber embargado más cantidad de la legalmente permitida, sin embargo, en quejas posteriores, con idéntico objeto, tal como la 499/2009, se ha vuelto a recordar al Presidente de la Corporación Local el deber legal antes referido, o en la queja 586/2009, que también con el mismo contenido se encuentra en tramitación.

En segundo lugar, entre los temas más recurrentes se encuentran las quejas ciudadanas relativas al incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante IBI) sin que se aprecie por los obligados tributarios una mejora en las infraestructuras de servicios correlativas a la subida de ese impuesto.

Esta temática, tratada en las quejas número 19/2009, 214/2009, 475/2009, motivó la **Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia de 11 de agosto de 2009, referente a la queja 214/2009** donde se recomendó al Ayuntamiento de Lorca que se contemplara en la Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles la inclusión de bonificaciones en la cuota íntegra para los titulares de los terrenos en los que por concurrir características singulares, el nivel de servicios prestados fuera menor al de otras áreas urbanísticamente más consolidadas.

Esta resolución fue aceptada por el Ayuntamiento comprometiéndose a estudiar la posibilidad de introducir estas bonificaciones, en virtud de acuerdo municipal adoptado al efecto. Las demás quejas se encuentran aún en tramitación, estando en espera de los informes solicitados.

III.11. Justicia

Dispone el artículo 21 de la ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que el Defensor del Pueblo no investigará las quejas cuyo objeto se encuentre pendiente de una resolución judicial, y podrá suspender su actuación si se interpusiera o formulase por persona interesada demanda, denuncia o recurso ante los tribunales. Ello no impedirá, no obstante, la posibilidad de investigación sobre la problemática general que, en su caso, se deriva de la queja presentada. En cualquier caso velará porque las admi-

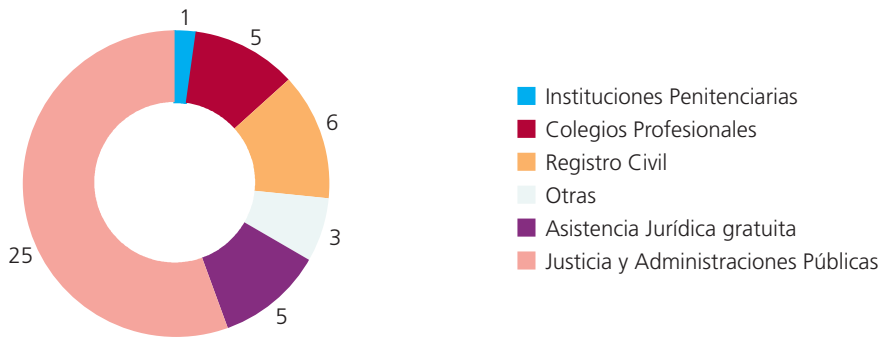
nistraciones resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados. De esta forma, –abunda el artículo 42 del citado texto legal–, "cuando el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia reciba quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en la Región de Murcia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de hacer referencia expresa a ellas en el informe anual que deberá elevar a la Asamblea Regional de Murcia".

Pues bien, durante los ejercicios 2008 y 2009, la Oficina del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha recibido 45 quejas relacionadas con el ámbito de la Justicia, lo que representa un 6,98% del total de quejas presentadas.

independencia y respeto a la actuación de jueces y tribunales, proclamada en el artículo 117 de la Constitución y que constituye uno de los principios basilares de nuestro Estado de Derecho.

Sin embargo, no está vedada la actuación del Defensor cuando las quejas vayan referidas a dilaciones indebidas o a un funcionamiento " presuntamente irregular" de la Administración de Justicia, en cuanto al tiempo o forma de la resolución; en este sentido destacan los requerimientos efectuados al Presidente del Tribunal Superior de Justicia sobre dilaciones en emisión de sentencias muy por encima del plazo legalmente establecido (v.gr. expediente 37/2009), en los que por la administración de justicia se ha procedido a una rápida solución del problema planteado.

Quejas de Justicia



De entre las mismas, podemos diferenciar aquéllas en las que la inhibición del Defensor obedecía a que se trataba de cuestiones ya resueltas por sentencia firme, y por tanto, cosa juzgada sobre las que no era posible un pronunciamiento adicional (28,20%). De otro lado, tampoco procede la actuación del Defensor en aquellos supuestos de litispendencia, esto es, aquéllos en los que está pendiente un pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales (10,25%). En todas estas quejas presentadas, es frecuente la alegación de la disconformidad con la resolución judicial, dirigiendo nuestras actuaciones a informar sobre la necesaria

Asimismo se han dirigido comunicaciones al Ministerio Fiscal en algunos casos que por haber indicios de peligro para la vida de las personas o integridad física o psíquica de menores, desde esta Institución se ha entendido conveniente poner en conocimiento los hechos ante la citada autoridad a los efectos que ésta entendiera oportunos. Citemos así a modo de ejemplo una queja en la que la interesada denunciaba amenazas contra su vida de unos inquilinos y vecinos de portal a los que estaba tramitando un procedimiento de desahucio, o el caso de una madre que temía por la integridad física de su hija si se la entregaba al

padre separado durante las vacaciones, estando pendiente de resolver un expediente de malos tratos sobre el mismo.

Incidiendo en este punto, llama la atención que la mayor conflictividad se centra en los casos de familia, separación, divorcio y custodia de menores, en los que nuestra actuación ha de ser especialmente cuidadosa por las afectividades que concurren en los mismos.

Subapartado diferenciado merecen los casos relacionados con la asistencia jurídica gratuita, regulada en la Ley 1/1996, de 10 de enero, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución, para aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional. En estos supuestos, que representan un 15,38% del total, las quejas se han polarizado en torno a la disconformidad sobre la denegación de la citada asistencia por no concurrencia de los requisitos legales, o la no satisfacción con los servicios jurídicos prestados, solicitando un segundo abogado de oficio.

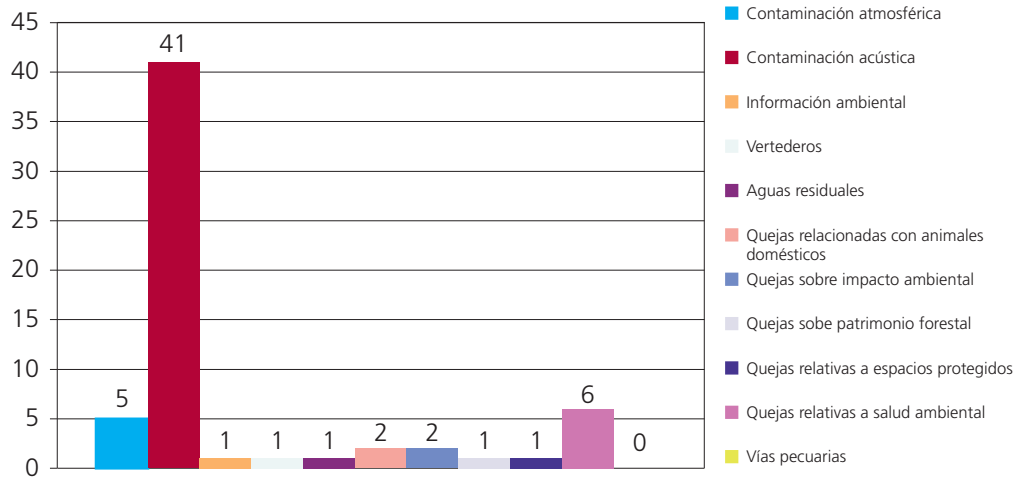
Finalmente, hemos de destacar aquellos supuestos (10,25%) en los que la actuación jurisdiccional está relacionada con una materia incluida dentro del ámbito competencial del Defensor del Pueblo de España (v.gr. fomento, extranjería, seguridad social, jurado provincial de expropiación), remitiéndose en estos casos al mismo, para la realización de las actuaciones que considere pertinentes.

III.12. Medio Ambiente

En esta Defensoría se ha registrado la entrada de sesenta y una quejas relacionadas con el derecho al medio ambiente. Las quejas en las que los ciudadanos estiman vulnerado este derecho suponen, por tanto, un 9,46% del conjunto de quejas tramitadas en este primer año de la Institución, lo que nos da una idea de la importancia que para los ciudadanos de nuestra región tiene este derecho, también es verdad que, fundamentalmente, por los efectos que un medio ambiente contaminado tiene sobre la salud humana, preocupación ésta que indefectiblemente aparece recogida en la práctica totalidad de los escritos de queja tramitados. Así pues los artículos 43 y 45 de nuestra Ley Fundamental, dentro de los Principios Rectores de la Política Económica y Social ubicados en el Capítulo III del Título Primero de la misma, han servido en la mayoría de las resoluciones adoptadas por esta Institución en el tema que nos ocupa como sustento constitucional en el que apoyar las decisiones que hemos venido tomando, siempre en interés de los ciudadanos afectados.

Como se sabe, y así es expuesto por la doctrina científica, desde una perspectiva comparada el derecho al medio ambiente forma parte de una nueva generación de derechos "post-sociales", que aparece por vez primera en las constituciones que se fueron aprobando en los años setenta del pasado siglo en el sur de Europa, entre ellas la nuestra, generalizándose posteriormente. Estamos ante una disciplina, la ambiental, que presenta un importante grado de indeterminación sobre el bien jurídico que va a ser objeto de tutela, siendo inevitable una labor de puesta al día constante que acomode ese bien jurídico a las necesidades que el desarrollo económico, social y tecnológico nos va poniendo delante, de ahí que haya que relativizar la importancia de centrar con perfiles muy definidos el objeto teórico del mismo.

En esa línea, no hemos tenido dificultades para la ubicación material en este apartado de las sesenta y una quejas que aquí hemos dejado clasificadas. La temática, además, no es excesivamente variada. Sólo las quejas asociadas a episodios de contaminación acústica, a veces vinculada a otras molestias, sufridos por los ciudadanos de nuestra región abarcan un 69,49% del total de las quejas que hemos clasificado dentro de la temática ambiental; nada menos que 41 de 61, y dentro de ellas el ruido generado en lugares y momentos de ocio



nocturno es, como cabría esperar, el que más quejas ciudadanas ha traído a esta Defensoría.

Otras formas de contaminación ambiental también han sido objeto de queja. A este respecto destaca un segundo grupo de quejas derivadas de los riesgos que se suelen asociar a la contaminación electromagnética. En su mayoría tienen que ver con la ubicación en las cercanías de los hogares de quienes las han promovido, de instalaciones de telefonía móvil, antenas de radioaficionado, e incluso de alguna línea de alta tensión. En definitiva quejas derivadas de infraestructuras diversas, muchas veces imprescindibles en las sociedades modernas, al tiempo que indeseables para los vecinos de sus entornos próximos, que dan lugar al conocido fenómeno "nimby", acrónimo de la expresión inglesa *not in my back yard* (no en mi patio trasero) con la que se sintetiza la oposición que surge en los entornos inmediatos a los lugares en los que se ubican actividades o infraestructuras molestas que pueden tener un interés general. La contaminación electromagnética, y los temores que suscita en orden a la producción de riesgos para la salud, ha sido objeto de seis quejas. Le sigue la contaminación atmosférica, bien es cierto que las quejas a este respecto obedecen en buena parte a episodios muy puntuales y localizados; unas veces derivados de actividades menores y pequeños negocios precisados de cierto control ambiental, que afectan a muy pocos ciudadanos, y, en algún caso, por la ubicación de empresas y actividades tales como vertederos o plantas de manejo y transformación de determinados residuos que, ahora sí, tienen mayores afecciones tanto cualitativas como cuantitativas. En cualquier caso, sólo han sido cuatro las quejas recibidas con ese objeto en esta Institución. Dos episodios muy localizados, uno de contaminación de aguas y otro de contaminación lumínica, cierran las quejas en materia de contaminación.

La degradación de los entornos urbanos y la ecología urbana han conllevado la entrada a esta Defensoría de sólo cuatro quejas. Nuestro patrimonio natural, en un caso referido a los espacios naturales protegidos y en otro a la biodiversidad representada por la fauna silvestre, ha generado asimismo dos quejas. Por último los animales domésticos y las molestias que generan y un caso aún no resuelto de responsabilidad patrimonial de la administración ambiental de la Región de Murcia, completan la totalidad de las quejas tramitadas en materia ambiental.

De ese conjunto de sesenta y una quejas, y continuando con los análisis cuantitativos, dieciséis han acabado en resolución, de las cuales siete han sido aceptadas por la administración implicada. Veinticuatro han sido archivadas por motivos diversos: unas veces porque de su análisis no derivaba la vulneración de ningún derecho fundamental

susceptible de tutela por nuestra parte, otras porque el promotor de la queja no ha aportado la documentación que se le requería, imprescindible para la admisión a trámite o para la continuación del procedimiento, y otras porque a resultas de las gestiones de esta Defensoría, se han adoptado acuerdos por las administraciones requeridas que no han hecho precisas ulteriores tramitaciones en esta institución. Son veintiuna las que aún se siguen tramitando en espera de los preceptivos informes que deben llegar a esta Institución provenientes de las administraciones públicas requeridas, y, por último, una de ellas fue remitida a nuestro homónimo de Castilla-La Mancha, ya que si bien la queja era promovida por ciudadanos residentes en la Región de Murcia, la actividad nociva de la que presumiblemente traía causa quedaba ubicada en el territorio de la vecina autonomía, en la provincia de Albacete.

Por último y antes de entrar en el contenido más detallado de aquellas quejas y resoluciones que creemos más relevantes, es oportuno hacer un somero análisis de la procedencia de las mismas, así como de sí éstas son promovidas de manera individual, o, por el contrario, su promoción se ha realizado a través de colectivos sociales organizados, lo que nos puede aportar datos relevantes para la mejor comprensión del quejoso ambiental. Así, de los 45 municipios que componen la Región de Murcia, han llegado a esta Institución quejas ambientales de 16 de ellos, correspondientes a todas las comarcas de la Región a excepción de la del noroeste. Como cabría esperar un número muy considerable de las mismas –25 de las 61– tienen como ámbito de procedencia el municipio de Murcia, su centro urbano y también algunas de sus pedanías. El segundo municipio con más quejas es el de Águilas, con 7 quejas, seguido de Cartagena con 5. El resto de municipios, se mueven entre una y tres quejas por localidad. Estos datos, analizados a la luz del extraordinario peso que sobre el conjunto de quejas representan las relacionadas con la contaminación acústica, nos advierten de que serán las administraciones de las grandes ciudades de la región, junto con las de algunos de los municipios litorales, quienes en mayor medida van a ser llamadas por esta Defensoría a adecuar sus actuaciones en materia ambiental al respeto debido a los derechos a la salud y al medio ambiente que garantiza la Constitución Española a nuestros ciudadanos.

Parece interesante dedicar unos instantes a conocer el carácter y la tipología del promotor de las quejas ambientales. Como asimismo cabría esperar, buena parte de las quejas son promovidas individualmente, por vecinos preocupados por las afecciones a la salud de las actividades que están en el origen de sus denuncias, y sólo 3 de las 61 quejas han sido promovidas por colectivos, unos creados al efecto, como es el caso de la queja que promueven los vecinos de una zona de la ciudad de Molina de Segura que planteaban la necesidad de preservar el arbolado urbano allí existente, finalmente eliminado por el Ayuntamiento de aquella localidad. Un colectivo vecinal organizado en la diputación lorquina de Aguaderas promovió la queja relativa a sus temores sobre la afección a su salud y sus propiedades que podría tener una proyectada línea de alta tensión que, con origen en la pedanía de El Hinojar y con destino en Águilas, cruzaba el territorio de Aguaderas, y por último, la organización ambiental "Ecologistas en Acción" nos advierte de la importancia de implementar las medidas contempladas en la ley, y en los plazos que ésta habilitó al efecto, para la protección de nuestra fauna silvestre más vulnerable.

Dentro de la tipología que antes avanzábamos parece obligado comenzar por referirnos a las quejas relacionadas con la contaminación acústica. Si ya ha quedado bosquejado el perfil del promotor de la queja, y el de los municipios que más quejas ciudadanas acumulan por ese motivo, no suele ser extraño a las mismas la concurrencia de otros elementos que las hacen comunes. Como ya hemos adelantado, en su mayoría, las quejas tienen su origen en la actividad nocturna de los bares, y, tal y como hemos expresado en la **Resolución de la**

Q-436/2009, en las quejas se subraya una prolongada vulneración de los mismos derechos fundamentales, suelen ir precedidas de un importante número de denuncias y escritos de los afectados dirigidos a la administración ambiental que, en el mejor de los casos, se saldan con la incoación de expedientes sancionadores que se eternizan en su resolución y que no suelen ir acompañados de medidas provisionales que garanticen la cesación del ruido, de otro lado, y muy frecuentemente, aparecen ligados a irregularidades de carácter urbanístico, y, casi siempre, les son de aplicación las mismas normas jurídicas: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; Ley 1/95, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia; Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido, y las ordenanzas municipales sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de las que, con parecida factura y a veces con idéntico articulado, se han ido dotando los municipios de nuestra región. A esas normas habría que sumar una jurisprudencia abundante que incluye además resoluciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

El ruido, como hemos expuesto (**Resolución de la Q-216/2009, Resolución de la Q-066/2009 y Resolución de la Q-0211/2009**) puede afectar a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el libre desarrollo de la personalidad (art. 10), la integridad física y moral (art. 15), la intimidad personal y familiar e inviolabilidad domiciliaria (art. 18), la libertad de elección de residencia (art. 19) y el derecho a la propiedad privada (art. 33). Dentro de los principios rectores de la política social y económica ya hemos citado el artículo 45 de nuestra Constitución, que al establecer el derecho de todos a un medio ambiente adecuado, implica, en el asunto que nos ocupa, el derecho a gozar de un medio ambiente acústicamente no contaminado, tal y como ha sido puesto de relieve por la jurisprudencia. El artículo 43 aborda el derecho a la salud, que puede asimismo verse seriamente afectada por el ruido. Finalmente, la contaminación acústica puede incidir en el derecho a una vivienda digna y adecuada que consagra en el artículo 47 de la Constitución Española.

En la línea expuesta por la **Resolución de la Q-211/2009**, teniendo presente que la problemática del ruido no es otra cosa que un conflicto entre derechos protegidos: medio ambiente, salud, intimidad personal y familiar, etc., frente a libertad de empresa, derecho al ocio, etc., es cierto, no obstante, que el interés jurídico prevalente o más digno de protección es el derecho ciudadano al descanso y a la no recepción de ruidos molestos. Y en la lógica de esa prevalencia esta Defensoría ha ido resolviendo las quejas ciudadanas que se sometían a su consideración, creando una doctrina que plasmamos en varias resoluciones (v.gr. **Resolución de la Q-436/2006**) a través de la que se insta a los ayuntamientos de esas localidades a que dicten resoluciones obligando a los infractores a ejecutar obras para la efectiva insonorización de sus locales, no permitiendo el funcionamiento de los mismos hasta tanto quede acreditado su sujeción a la norma. En otras ocasiones ha sido preciso realizar recordatorios de sus deberes legales en orden al acceso a la información ambiental (**Resolución de la Q-063/2009**), recomendar la realización de estudios acústicos para constatar en su caso la efectiva adecuación de las actividades ruidosas a la normativa, e incluso recomendar, como así hicimos a las autoridades locales de Abarán (**Resolución de la Q-063/2009**), la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal sobre ruidos.

Además del ruido derivado de locales con música, han llegado quejas a esta Defensoría con muy distintas fuentes de producción de este tipo de contaminación. La casuística es grande, y veces las resoluciones de esta Defensoría deben tener en cuenta otra serie de circunstancias concurrentes en los distintos casos que hemos analizado este año, que, obligadamente, nos llevan a singularizar la respuesta que damos a la queja. Así, la

Resolución de la Q-008/2009 trae causa de la incidencia que el ruido generado por productos pirotécnicos tiene sobre una persona con discapacidad psíquica en la población de Alumbres del municipio de Cartagena, creímos oportuno sugerir al ayuntamiento de esta localidad una regulación específica sobre utilización de la pirotecnia, que aquel Consistorio no aceptó argumentando que la actividad pirotécnica ya estaba sometida a procesos de autorización y que la misma estaba imbricada en los usos y costumbres del lugar.

El ruido provocado por la utilización de productos pirotécnicos también está en el origen de otra queja, pendiente de resolución por esta Defensoría, promovida por un ciudadano de una población ubicada en el municipio de Santomera, localidad ésta que en sus fiestas patronales viene programando tradicionalmente una "noche de carretillas".

Animales domésticos como perros e incluso pájaros, el sonido de las campanas de una Iglesia en La Alberca cuyo párroco adoptó las medidas oportunas para minimizar el problema, la apertura de nuevas vías de comunicación en el interior de las ciudades con la generación de ruido que se introduce en las viviendas muchas veces no acondicionadas acústicamente, las fiestas populares de diversos pueblos de la geografía regional, los festivales musicales al aire libre como el celebrado en el municipio de San Javier del que trae causa la **Resolución de la Q-0211/2009**, la utilización de máquinas de limpieza viaria en horario nocturno, los aparatos de aire acondicionado, los circuitos para la práctica de deportes de motor, las atracciones feriales de la localidad de Águilas muy próximas a las viviendas, los generadores eléctricos usados coyunturalmente para dar suministro a determinados locales, etc., han sido también objeto de quejas ciudadanas tramitadas en esta Defensoría. Algunas han acabado en resolución de forma favorable para el ciudadano, otras han sido archivadas toda vez que los ciudadanos perjudicados por las molestias decidieron hacer valer sus derechos en los tribunales de justicia, en otras seguimos pendientes de los oportunos informes que deben llegar de las administraciones requeridas.

En las quejas tramitadas con ocasión de otras modalidades de contaminación, son cinco las que cabría incluir en el subepígrafe de la contaminación atmosférica. La primera de ellas tiene por objeto los gases y humos que desprende la actividad formalmente clausurada de una panificadora en el municipio de La Unión, queja que quedó residenciada en su día en la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional; la contaminación del aire por los gases que desprende una actividad de almacenamiento y manipulación de lodos procedentes de depuradoras fue objeto de una queja que tuvimos que derivar al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, toda vez que aunque la merma de la calidad del aire, y con ello de la calidad de vida, era muy sensible en el municipio de Yecla, la actividad de la que traía causa estaba radicada en la vecina provincia de Albacete. La actividad de una granja porcina ubicada en el municipio costero de San Javier también fue objeto de una queja que decidimos archivar debido a que el Ayuntamiento de aquella localidad tenía en tramitación el oportuno expediente administrativo. Otra de las quejas incluidas en esta temática trae su causa de los humos que desprende un café-bar ubicado en Librilla; el Ayuntamiento de aquella localidad, a resultas del requerimiento de esta Institución, nos ha comunicado que a ese negocio se le ha incoado el correspondiente procedimiento sancionador e impuestas las oportunas medidas correctoras de naturaleza cautelar. Por último, el olor desprendido por un vertedero con afecciones en las pedanías murcianas de Los Jerónimos y Avileses, y en el que se mezclan y tratan diversos residuos con el objeto de producir abonos, es una de las últimas quejas que en materia ambiental han llegado a esta Defensoría promovida por las asociaciones vecinales de los núcleos de población afectados, y que aún seguimos tramitando al cierre de este informe.

Seis son las quejas relacionadas con lo que se conoce como contaminación por ondas electromagnéticas; un asunto en el que no es pacífico el parecer de los científicos en torno a las posibles afecciones a la salud de las actividades e infraestructuras generadoras de este tipo de ondas. Toda vez que esta Institución no puede, ni debe, entrar en este tipo de debates, hemos optado por fundamentar nuestras resoluciones en este ámbito en la estricta aplicación de las leyes urbanísticas y ambientales que rigen los criterios de ubicación, puesta en marcha y funcionamiento de estas instalaciones.

Por nuestra parte, de esas seis quejas recibidas tres han acabado en resolución. Dos de ellas (**Resolución de la Q-098/2009** y **Resolución de la Q-107/2009**) tienen origen en el municipio de San Javier, la identidad sustancial existente entre ambas, llevó a esta Defensoría a acumular ambos expedientes sobre los que acabamos emitiendo una única resolución. En ella se recordaba al Ayuntamiento de aquella localidad su deber legal de aplicar la ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas de aquel municipio, suspendiendo de manera inmediata el funcionamiento de aquellas infraestructuras, sin licencia y precisadas de ella, que eran objeto de queja, de manera tal que se impidiese la continuidad en la producción de un eventual riesgo hasta tanto concluyesen los expedientes administrativos de índole diversa relacionados con esas infraestructuras de comunicación que se tramitaban en el Ayuntamiento de San Javier.

Otras dos quejas con instalaciones base de telefonía por objeto procedían del municipio de Murcia. En la primera de ellas esta Institución consiguió encauzar la queja logrando que por parte de la administración implicada se realizase la oportuna medición técnica de las emisiones radioeléctricas. El estudio demostró que no existía una superación de los límites previstos en la normativa. La segunda queja, con un expediente pendiente de resolución por parte de los servicios de disciplina ambiental del Ayuntamiento de Murcia, acabó en una resolución (**Resolución de la Q-117/2990**) en la que se recordaba al Ayuntamiento de Murcia el deber legal de resolver sobre las licencias urbanísticas solicitadas en los plazos legalmente habilitados. Otra de las quejas relacionadas con las antenas de telefonía móvil tiene su origen en la concentración de varias infraestructuras de este tipo en una zona residencial del municipio de Librilla, queja aún pendiente de resolver en el momento en el que se elabora este informe anual, y a la espera de la información que ha sido requerida al Ayuntamiento de aquella localidad. Por último, la línea de alta tensión proyectada entre la pedanía lorquina de El Hinojar y el municipio de Águilas, a su paso por algunas pedanías del campo de Lorca, también fue objeto de una queja colectiva promovida por una asociación creada al efecto. Esta Institución decidió no admitir la queja en un primer momento, requiriendo a los promotores de la misma que la reformulasen de manera tal que quedara determinado con claridad y precisión qué concreta actuación de la administración actuante estaba en la base de la vulneración de derechos fundamentales que expresaban en su escrito.

También existe una queja que cabría encuadrar dentro de lo que ha venido a denominarse contaminación lumínica, definida como una alteración, en horas nocturnas y derivada de la luz artificial, de los niveles de luz ambiente; se trata de un tipo de contaminación que tiene su origen en los alumbrados públicos exteriores de diseño ineficiente, en la falta de regulación de los horarios de encendido y apagado de las iluminaciones publicitarias y monumentales, o en las proyecciones de luz a través de láser o proyectores. La queja en cuestión ponía de relieve las molestias causadas a su promotor por los carteles luminosos de un restaurante chino radicado en el municipio de San Javier. Acabó archivándose por esta Institución ante la falta de acreditación de su promotor de haberse dirigido previamente al Ayuntamiento de aquella localidad.

La contaminación de las aguas sólo ha traído a esta Institución una queja muy puntual. Un ciudadano de Molina de Segura ponía de manifiesto las molestias producidas por una supuesta filtración de aguas fecales en sus propiedades. No hubo lugar a más averiguaciones dado que el promotor de esta queja, tras el requerimiento realizado al efecto por esta Defensoría, no acreditó haberse dirigido con carácter previo a la administración local con competencias en la materia.

Los animales domésticos no sólo han sido objeto de diversas quejas relacionadas con el ruido que generan, las molestias también se extienden a sus efectos en las calles y vías públicas por la acumulación en determinadas zonas urbanas de excrementos de perros y gatos. A pesar de que este problema pueda parecer muy extendido, la actuación de las administraciones locales en orden a dotar a los municipios tanto de áreas urbanas destinadas a esos menesteres, como de ordenanzas que sancionan actuaciones incívicas de algunos dueños de estos animales, ha dado lugar a una creciente concienciación ciudadana al respecto. Así, sólo una queja ciudadana proveniente del municipio de Ricote, tiene este objeto.

La calidad ambiental de los entornos urbanos también ha sido objeto de tres quejas. En una de ellas, su promotor nos ponía de manifiesto la aparición en el núcleo de la pedanía murciana de Beniaján de pintadas en muros y paredes de corte xenófobo y racista que afeaban el paisaje urbano de la pedanía con mensajes intolerables en una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos. Esta Institución adoptó la **Resolución de la Q-081/2009**, en la que se recordaba al Ayuntamiento de Murcia el deber legal de aplicar la Ordenanza de Limpieza Viaria que residencia en el municipio la responsabilidad, subsidiaria en inmuebles de naturaleza privada, de esa limpieza y ornato públicos, al tiempo que se sugería la aprobación de una ordenanza que combata la degradación visual de los entornos urbanos fomentando la convivencia ciudadana y el civismo. La segunda queja procedía del municipio de Murcia, cerrada al no ampliar su promotor la información que se le requirió, ponía de manifiesto el impacto visual en el entorno urbano del cableado utilizado por determinados servicios. Otra queja recogía la preocupación de un colectivo de vecinos de Molina de Segura por la suerte de una arbolada urbana que finalmente fue eliminada por el Ayuntamiento de aquella localidad; el consistorio arguyó en su informe que se trataba de especies alóctonas, no adaptadas al entorno urbano y que afectaban de manera negativa a bienes y servicios públicos.

Cerramos este epígrafe haciendo alusión a tres quejas de muy distinto contenido y alcance, pero de algún modo relacionadas con nuestro patrimonio natural. La primera de ellas, que acabó en una de las últimas resoluciones del año 2009, fue promovida por la organización "Ecologistas en Acción de la Región de Murcia". En la misma se sostenía que tras catorce años desde la aprobación de la Ley 7/95 de Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, y la creación mediante esa norma de un catálogo de especies amenazadas de nuestra fauna silvestre que cabría ubicar en tres distintas categorías: en peligro de extinción, vulnerables y de interés especial, no se habían implementado en los plazos previstos los instrumentos de protección de la fauna que la ley contemplaba, consistentes en la aprobación de diversos planes de actuación sobre ese patrimonio faunístico amenazado. Dados los inexcusables mandatos contenidos en la norma citada, la resolución adoptada por esta Defensoría recordaba a la consejería con competencias en materia ambiental la obligación de remover todos los obstáculos existentes para proceder a la redacción y aprobación de los distintos planes citados de protección de la fauna silvestre.

Otra de las quejas abordadas en este ámbito, y concluidas tras la lectura del informe remitido por la administración, consistía en la petición que realizaba el promotor de la queja y vecino de la localidad de Archena de un cambio de usos en suelos no urbanizables de aquel municipio, de uso fores-

tal a uso agrícola, con el ánimo de poner determinadas tierras en aprovechamiento agrícola. El Informe de la administración competente reseñaba determinados pormenores relacionados con la titularidad de las tierras objeto de petición y advertía que las mismas estaban dentro del ámbito delimitado de un LIC y una ZEPA. Tras su lectura, esta Defensoría procedió al cierre de las actuaciones en este caso.

La última queja relacionada con el medio ambiente a la que vamos a referirnos tiene por objeto la demora de la administración ambiental en la tramitación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Consejería de Agricultura y Agua. Sin entrar en el fondo del asunto, y tras recabar la información de la administración actuante, consta que el expediente estaba en una fase muy avanzada de tramitación, pendiente de la resolución llamada a ponerle fin. Motivo por el cual esta Defensoría tomó la decisión de finalizar el expediente.

En definitiva sesenta y una quejas ambientales que recogen los más variados problemas que en este ámbito presentan las sociedades actuales. Son sesenta y un asuntos que han preocupado a otros tantos ciudadanos y colectivos. Como ya dijimos, y pese a que sólo trece de ellos han acabado en una resolución, en su conjunto son la constatación de que las distintas administraciones ambientales de nuestra región, cada una en su ámbito y con sus competencias, deben seguir haciendo esfuerzos para adecuar sus actuaciones al contenido de un derecho constitucional, cada día más demandado por la ciudadanía, como es el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

III.13. Menores

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989, supuso un notable avance en la consideración del menor como sujeto autónomo de derechos y como individuo especialmente protegido. La Convención, ratificada por la práctica totalidad de los países del mundo, establece como principio básico de actuación de cualquier institución, pública o privada, el interés superior del menor.

La preocupación de las instituciones públicas por la salvaguarda de los derechos de los menores se materializa en diferentes políticas e iniciativas.

En el caso de la Región de Murcia se ha configurado el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia como uno de los instrumentos para proteger y promover los derechos de la infancia y adolescencia.

La labor de la Institución se extiende hacia todos los campos relacionados con la infancia, supervisando las actuaciones de los sujetos comprendidos en el art. 13 de la Ley 6/2008, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que presten servicios a los menores con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses.

Al mismo tiempo la Institución se encarga de recibir y tramitar las quejas que supongan una amenaza o vulneración de los derechos de los menores; proponiendo en su caso reformas de procedimientos, reglamentos o leyes que hagan más eficaz la defensa de los derechos de los menores.

El objetivo que se persigue es doble: por un lado, se trabaja en dar a conocer su actividad cotidiana y la importancia de esta Institución en la atención de las necesidades y demandas de los menores; y por otro, se busca acercar la realidad de los menores más necesitados al resto de los ciudadanos.

Desde que esta Institución se creó, en los días finales de noviembre de 2008, hasta el pasado 31 de diciembre de 2009, se han ido recibiendo diversas quejas ciudadanas relativas al ámbito del menor, que en algunas circunstancias se han comprendido, por la complejidad de la materia y las distintas administraciones afectadas, en las áreas de educación o servicios sociales**,** por ejemplo, y que han sido explicadas debidamente en sus correspondientes apartados dentro del presente capítulo.

En esta área se han querido destacar quejas motivadas por situaciones de diversa índole, tales como casos de menores que han sido objeto maltrato físico y/o psicológico en el interior del ámbito familiar; casos de niños y adolescentes que sufren *bullying*, es decir, acoso por parte de sus propios compañeros y compañeras en el ámbito escolar; y otras quejas relativas a menores con necesidades especiales que no han sido correctamente subsanadas por los servicios correspondientes.

En lo referente a las necesidades especiales de menores, destacamos la Q-179/2009, promovida por el pariente de un menor de siete meses de edad con síndrome de Down y problemas motrices que requieren de tratamiento completo en un centro especializado del que no obtienen respuesta. Finalmente y por mediación telefónica con la asociación ASSIDO, el menor pudo inscribirse en el centro.

Por otro lado, la Institución recibió dos casos de malos tratos, comprendidos por las quejas 142/2009 y 207/2009. En el caso del expediente Q-142/2009, la queja es interpuesta por la madre de una menor, divorciada, y que solicita se acelere el juicio que anteriormente interpuso contra su exmarido por malos tratos ejercidos sobre la hija que tienen en común. En este caso el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia puso el asunto en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y en el caso del expediente Q-207/2009, la queja interpuesta por la madre una menor, alega una vulneración de la protección de datos de carácter personal por parte de los medios de comunicación, en el que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, orienta a la ciudadana en los mecanismos de defensa que puede ejercitar ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal.

Finalmente, tenemos el expediente Q-45/2009 corresponde a la queja iniciada por una madre de un menor de trece años , donde manifiesta que su hijo está siendo acosado en el colegio sin que por parte del centro se dé respuesta a la situación. En este caso el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, orienta a la ciudadana en los trámites de denuncia que debe de seguir atendiendo a lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Ordenación Académica de 4 de abril de 2006.

III.14. Procedimiento Administrativo

Bajo esta rúbrica hemos incluido todos los expedientes de queja en los que el incumplimiento de la administración se podría cifrar en un posible incumplimiento de las normas que regulan el procedimiento administrativo, independientemente del ámbito material en que se produzca esa circunstancia.

Como veremos, se comprueba el sometimiento de la administración, con carácter general, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con carácter especial a las respectivas normas reguladoras de los ámbitos sectoriales concretos, constituidas, a título meramente de ejemplo, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; por la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región de Murcia; por el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, o por la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia.

En concreto, se han registrado 26 quejas, lo que supone un 4,03% del total. Estos expedientes podrían clasificarse básicamente en cinco subapartados: el primero, referido a expedientes sancionadores, donde las quejas ponen de manifiesto la disconformidad sobre la sanción impuesta; el segundo, relativo a expropiaciones forzosas; el tercero, en materia de subvenciones; el cuarto, en materia de responsabilidad patrimonial, y el quinto, relativo al deber de responder a las consultas que los ciudadanos formulen a la administración, tal como

dispone el artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el primer apartado, merece llamar la atención sobre el expediente 10/2008, donde el interesado denunciaba la infracción de la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal en los boletines de denuncia de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia y de la Guardia Civil de Tráfico. Consultada la administración local implicada y la Delegación del Gobierno de Murcia, se obtuvo el compromiso de la primera de incluir –en el futuro– la leyenda exigida por el artículo 5 de la citada norma en los boletines de denuncia. Por su parte, la Delegación del Gobierno de Murcia demostró –aportando copia de los boletines–, la asunción del contenido de la ley en sus actas de infracción.

Unos meses después de haber resuelto la queja por resolución satisfactoria para el ciudadano y previo requerimiento al ayuntamiento en cuestión, se aportó por la administración local copia de los boletines de denuncia debidamente modificados.

Dentro del ámbito sancionador son igualmente destacables las quejas 433/2009 y 466/2009. En la primera, ante la denuncia del interesado consistente en que la administración local en cuestión desestimaba las alegaciones de forma genérica, con base en formulario tipo, sin responder individualmente a cada una de las alegaciones formuladas por el presunto responsable –tal como dispone el artículo 54 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común–, se ha pedido información a la administración, por considerarse el deber de motivación esencial en todo procedimiento sancionador, limitativo por tanto de los derechos individuales de los ciudadanos. En la segunda, se solicita también de la administración local, en el ámbito de un procedimiento en materia de tráfico, la comprobación de los requisitos materiales en la realización de las notificaciones, al objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos.

En el apartado de expropiación forzosa, institución recogida en el artículo 33.3 de la Constitución, proclamando que "Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes", regulada por la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y desarrollada por Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las quejas –en número de 3– han denunciado la dilación en el pago del justiprecio (cuestión ésta que al estar asignada al Jurado Provincial de Expropiación, fue diferida para su resolución al Defensor del Pueblo de España), o el incumplimiento de la obligación de inscripción de los bienes adquiridos por este instrumento de transferencia coactiva en el Registro de la Propiedad, a los efectos del ejercicio de los derechos de los ciudadanos (expediente 451/2009, aún en tramitación).

Asimismo, también se ha denunciado la infracción del procedimiento en materia de subvenciones (expediente de queja 290/2009), reguladas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el ámbito territorial autonómico, por la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia. La queja en cuestión se finalizó sin apreciar incumplimiento de la normativa aplicable por parte de la administración.

En materia de responsabilidad patrimonial, destaca la **Resolución de 20 de octubre de 2009, recaída en el expediente 217/2009,** con motivo de los daños sufridos por una señora con ocasión de unas fiestas del municipio de Alcantarilla, donde la corporación pretendía hacer responsable al patronato de festejos. Se recuerda al ayuntamiento la obligación legal de resolver que pesa sobre todas las administraciones públicas, recomendando el

inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial de la corporación, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el causante directo del daño. Además, habida cuenta de la existencia de otros casos semejantes, se recomienda a la entidad local que instrumente medidas correctoras en evitación de daños futuros.

Finalmente, son relativamente frecuentes los casos en los que los ciudadanos se dirigen a esta Institución, rogando ser recibidos por autoridades públicas, u obtener respuesta a sus peticiones. Este derecho de petición se reconoce constitucionalmente en el artículo 29 de la Constitución, siendo desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Estos casos no han dado lugar a la emisión de Resolución, habiendo sido resueltos en el curso del procedimiento satisfactoriamente para los ciudadanos, toda vez que o han sido recibidos por los órganos competentes o han sido atendidas sus peticiones.

III.15. Salud

En materia de salud se han recibido durante el ejercicio 2008 y 2009 un total de 27 quejas, lo cual represente un 4,19% del total.

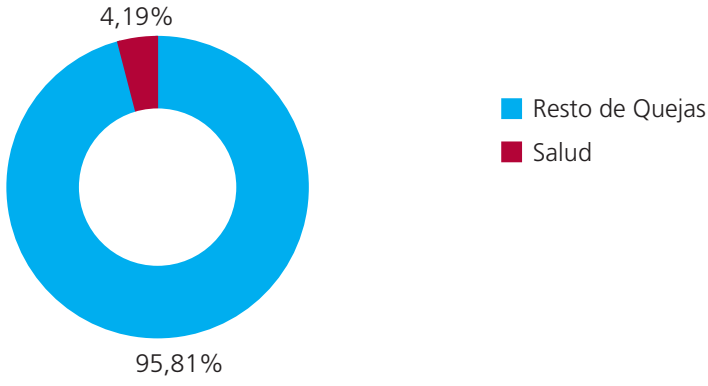
El reconocimiento del derecho a la salud, recogido en el artículo 43 de la Constitución, junto al mandato dirigido a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, constituye uno de los principios fundamentales en cualquier estado moderno, configurándose como un derecho ciudadano a exigir unas prestaciones sanitarias mínimas conforme a la dignidad humana y al desarrollo económico y social alcanzado por cada sociedad. En este sentido se han pronunciado la Declaración de Derechos Humanos (ONU 1948) en su artículo 25.1, el artículo 11 de la Carta Social Europea, del Consejo de Europa (Turín 1961) y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU 1966).

En el ámbito normativo, el nivel prestacional asumido por los poderes públicos se determina con carácter general en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; y específicamente, en el ámbito territorial de la Región de Murcia, en la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia.

Desde un punto de vista sistemático, podemos agrupar las quejas existentes en torno a dos áreas.

La primera, desde un punto de vista procedimental, referida a denuncias sobre la organización o funcionamiento de la administración sanitaria. En esta área, podemos destacar la **Resolución de 27 de octubre de 2009** recaída en el expediente de **queja 84/2009**, donde la interesada ponía de manifiesto su disconformidad con la baja practica-

Quejas de Salud



da en el programa por el equipo de prevención de cáncer de mama. En concreto la interesada había faltado sin justificar a una cita programada y había quedado inactiva en el programa, sin ser avisada para la nueva revisión anual. La interesada justificó su actitud con base a que la cita que se le proporcionó era demasiado dilatada en el tiempo, al habérsele detectado alguna anomalía en una revisión previa, solicitando el reintegro de los gastos derivados de las pruebas practicadas en el centro privado al que acudió.

En la citada resolución, se conminó a la administración sanitaria a advertir de una forma más clara a los pacientes sobre las consecuencias de la falta de asistencia a una cita no programada, aconsejando igualmente a la paciente que en futuras ocasiones avisara sobre su no asistencia, de forma que pudiera ocuparse esta franja horaria con otra usuaria.

Destacable también es la queja 99/2009, en la que su promotor manifestaba que el facultativo de urgencias encargado de atender a su mujer (aquejada de una enfermedad que posteriormente resultó mortal), le había dado el alta sin comprobar antes las pruebas médicas que confirmaban el grave diagnóstico. A los efectos aportaba parte de alta emitido con carácter previo al informe de diagnóstico.

Este caso fue profundamente investigado, advirtiendo que se trataba de una frecuente práctica médica el hecho de ir adelantando el informe de alta en tanto no se recibían las pruebas pertinentes. En este supuesto, el informe de alta no iba firmado, no adquiriendo por tanto carácter oficial, y así se comunicó al interesado.

También se nos han planteado temas de sanidad transfronteriza, así en la queja 192/2009, un familiar del promotor de la queja había caído gravemente enfermo durante un viaje a Israel. El seguro del afectado no se hacía responsable del traslado a España y toda la familia estaba desplazada a aquel país, con los consiguientes perjuicios económicos y molestias personales. Desde esta Defensoría se analizó la situación, poniéndose en contacto con personal de sanidad y con el Defensor del Pueblo de España, comprobando la inexistencia de convenios bilaterales con este país en materia de sanidad, y buscándose otras vías de solución. Desafortunadamente se produjo un rápido agravamiento y fallecimiento del familiar, y sólo se pudo ya proceder a la repatriación del cadáver.

Asimismo se han tramitado quejas relacionadas con alguna disfunción en los centros de salud (no se atienden llamadas, insuficiente personal, etc.) o bien referentes al reintegro de gastos médicos que, por tratarse en este último supuesto de un tema estatal, fue convenientemente direccionado al Defensor del Pueblo de España.

La segunda área sobre la que más frecuentemente se pidió información, fue la referida a las relaciones personales y profesionales del personal facultativo con sus pacientes y posible responsabilidad patrimonial o de otra índole exigible.

Señalar en primer término, la **queja 6/2008**, que dio lugar a la **Resolución de 3 de septiembre de 2009**. En esta queja su promotor argumentaba que tras haber sufrido todos los inconvenientes de los preparatorios para una colonoscopia y de haber firmado un consentimiento informado sobre las posibles consecuencias negativas que pudieran derivarse de la misma y de la sedación correspondiente, en el momento antes de practicar la intervención, el médico del hospital concertado al que había sido derivado le comunicó que la anestesia no iba incluida en la factura.

Estas afirmaciones determinaron que se investigara si el régimen de concierto con hospitales privados podría implicar una disminución en las prestaciones sanitarias, resultando del estudio practicado que, la no utilización de sedación obedecía únicamente al criterio del facultativo en atención a su "lex artis", no pudiendo derivarse por tanto que existiera una discriminación en cuanto a prestacio-

nes sanitarias cuando la atención se dispensara en un centro concertado con la administración.

No obstante lo anterior, se recomendó a la administración que estableciera un protocolo común entre hospitales del servicio murciano de salud y centros concertados, en el que se garantizara en todo momento la plena información de los ciudadanos sobre todos los aspectos de la intervención. Esta resolución fue aceptada por la administración.

También se han recepcionado en esta Oficina, quejas relacionadas con un presunto trato no digno o adecuado a los pacientes por parte de algunos profesionales de la medicina. En este sentido destacar la queja, aún en tramitación, relativa a unos padres que perdieron a su hija recién nacida en un centro hospitalario de Murcia, no recibiendo –según su percepción– el trato debido y el respeto que merecía tan doloroso momento. Esta queja al no estar finalizada será objeto de análisis en el próximo informe anual.

III.16. Seguridad Ciudadana

Tal como señala la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática.

La Constitución establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de seguridad pública (artículo 149.1.29) y, específicamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derecho de reunión.

Sigue señalando el texto legal citado que, desde la promulgación de la Constitución, las Cortes Generales han tratado de mantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la aprobación de Leyes Orgánicas Generales como la de 1 de junio de 1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio; la de 1 de julio de 1985, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, o la de 13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se han aprobado Leyes Especiales, en materia de derecho de reunión, protección civil, o circulación de vehículos a motor.

En esta materia, se han recibido 18 quejas durante el año 2008 y 2009, lo que representa un 2,79% del total.

De entre las quejas recibidas, destacan aquéllas en las que se denuncia un abuso de autoridad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estos son expedientes que, a pesar de no ser muy numerosos, merecen en nuestra opinión especial atención, pues las potestades que se atribuyen a las fuerzas y cuerpos de seguridad son tan exorbitantes, que el respeto a los derechos individuales y a los principios de proporcionalidad y menor limitación de los derechos individuales, han de ser observados con absoluto rigor.

En concreto, la primera de las quejas recibidas en este apartado, versaba sobre un presunto abuso de autoridad de un agente de la policía local sobre un local abierto al público, denunciando su propietario el abuso de celo por parte del agente en cuestión en el cumplimiento de la normativa. Solicitada información a la administración, se pudo comprobar que las denuncias se ponían siempre por el mismo agente porque éste era el encargado de la zona, yendo en ocasiones acompañado por otro policía local, además del dato de que se denunciaban incumplimientos de las ordenanzas de aplicación, respecto de las que el pro-

motor de la queja no disentía. Por todo lo anterior, se concluyó que no existía incumplimiento de la administración.

Cuestión distinta fue la siguiente queja presentada, con **número 37/2009**, en la que un ciudadano se quejaba de una multa impuesta por un agente de la autoridad local por diversos desordenes públicos. En concreto, el dato decisorio radicaba en que en los hechos constatados del expediente sancionador en cuestión, el policía local aseveraba haber "sorprendido" al presunto responsable, sin embargo por la concurrencia de los hechos y otros datos fácticos, el denunciado podía probar que el agente nunca lo vio, sino que se fundamentó en testificales de vecinos. En un momento posterior, el agente reconocería que el presunto infractor no fue sorprendido, sino que se podía deducir que él había sido el responsable.

La posibilidad de haber vulnerado el derecho a la presunción de inocencia reconocido en nuestro texto constitucional, y la naturaleza de presunción "iuris tantum" de veracidad que tiene el contenido de las actas de los agentes de la autoridad, motivó la **Resolución de 16 de octubre de 2009**, en la que se recordó al agente en cuestión el deber legal de fijar las pruebas de cargo con absoluta precisión, recomendando al ayuntamiento la revisión del expediente sancionador, en garantía del principio de legalidad y de presunción de inocencia.

Posteriormente el Ayuntamiento de Bullas nos comunicaba haber sobreseído el correspondiente expediente sancionador.

Otras de las quejas presentadas en la materia atañen a aspectos puntuales relacionados con la seguridad ciudadana, tales como escándalos nocturnos en plazas públicas con molestias a la población (190/2009), botellones en parques y plazas (360/2009 –aún por finalizar–), desperfectos en propiedades privadas por desórdenes públicos (478/2009), etc. La gran mayoría de ellas se han finalizado satisfactoriamente para los ciudadanos, adoptándose por las autoridades competentes medidas reforzadas para evitar estas alteraciones.

Asimismo han sido frecuentes las quejas en las que los interesados manifiestan su disconformidad con las sanciones impuestas. En la gran mayoría de supuestos, como éstas suelen hacer referencia a multas impuestas por la Guardia Civil de Tráfico, han sido remitidas al Defensor del Pueblo de España, por pertenecer éstas a su ámbito competencial.

Finalmente, es necesario destacar la queja de oficio iniciada desde esta Defensoría, con el objeto de esclarecer la posible vulneración del derecho a la libertad de expresión, presuntamente originado en una administración local en la que su Alcalde sancionó a dos vecinas por abuchearle y silbarle. Al haber recibido el informe de la administración en enero de 2010, el análisis de esta queja se realizará de forma más exhaustiva en el informe anual del próximo año.

III.17. Servicios Públicos Locales

Con la excepción de una queja llegada a esta Institución desde Alhama de Murcia, relacionada con unas supuestas deficiencias en el reparto del correo en una zona del aquel municipio, y remitida por ser de su competencia al Defensor del Pueblo de España, el resto de quejas que han tenido entrada en esta Defensoría vinculadas a servicios públicos tienen como administración concernida a la municipal. Obviamos lógicamente las quejas relativas a servicios públicos tan esenciales como los referidos a la educación, la sanidad, etc., toda vez que estos asuntos tienen tratamiento específico en otros apartados de este Informe Anual. Y, cierto es, también hay que advertir que el contenido de algunas de las quejas llegadas a esta Institución, y relacionadas con el transporte público, conciernen asimismo, aunque no de modo absoluto, a la administración regional.

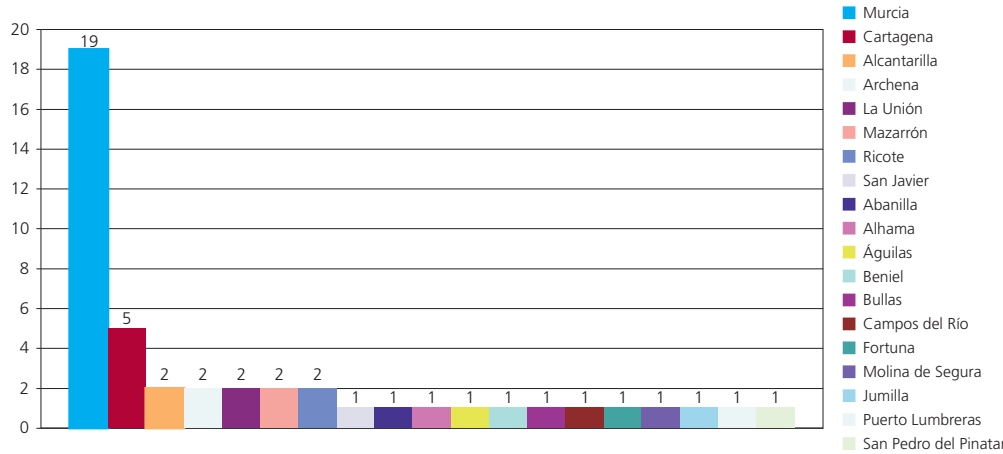
Así pues, tenidas en cuenta estas últimas observaciones, y dejada a un lado la queja en la que se denuncia esa deficiente prestación del servicio postal, han sido cuarenta y seis las quejas relacionadas con la prestación de los más variados servicios públicos municipales: abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, limpieza viaria, alumbrado público, cementerios, parques y jardines, pavimentación de vías públicas, transporte público, etc., y así hasta casi agotar el amplio elenco de servicios públicos municipales, ligados como se sabe en ese ámbito local a los fines o competencias municipales. En efecto, la propia Ley Básica de Régimen Local (art. 85.1) expresa que son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de la competencia de los entes locales. Municipios que además, así lo dice el artículo 25.1 del mismo texto legal, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Por lo demás, y sin salirnos del texto legal referido, el art. 18 del mismo establece como un derecho de todos los vecinos, exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. En la tramitación de las quejas que aquí abordamos han sido abundantes las decisiones adoptadas por esta Defensoría nutridas del fundamento jurídico que aportan los preceptos citados, entre ellas las cinco resoluciones que sobre esta materia se han adoptado por nosotros en este primer año de funcionamiento de la Institución.

Antes de entrar en el contenido sustantivo de las quejas, cuya casuística como veremos es grande, parece oportuno dedicar unas líneas al análisis de su procedencia territorial, del modo en el que son promovidas y de las administraciones locales destinatarias de las críticas y aspiraciones que en ellas se contienen. Las quejas proceden de diecinueve municipios de la región, abarcando la totalidad de sus cinco comarcas. Sólo en el municipio de Murcia se localizan diecinueve quejas, que junto a las cinco procedentes de Cartagena, contabilizan veinticuatro, más de la mitad de las existentes. Alcantarilla, Archena, La Unión, Mazarrón y Ricote suman dos por localidad. Y sólo una por municipio provienen de San Javier, Abanilla, Alhama de Murcia, Águilas, Beniel, Bullas, Campos del Río, Fortuna, Molina de Segura, Jumilla, Puerto Lumbreras y San Pedro del Pinatar.

Conviene advertir además que la gestión de los servicios públicos locales no siempre es directa. Sea sin o con organización especializada, mediante un organismo autónomo local, o por medio de una sociedad de capital íntegramente público, han sido veintinueve las quejas relacionadas con servicios públicos prestados de modo directo por los ayuntamientos. Las diecisiete restantes hasta completar la totalidad tienen como destinatarios a empresas a las que se ha transferido la gestión del servicio público mediante una concesión, circunstancia ésa que, en otro orden de cosas, no genera mayores problemas a esta Institución, habida cuenta de que nuestro ámbito competencial de actuación se extiende también a los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas cuya titularidad competencial corresponda a las administraciones públicas de la Región de Murcia, aunque sea en régimen de concesión administrativa.

Por lo que hace al tipo de promotor de las quejas, de nuevo y como viene sucediendo en otros ámbitos, las deficiencias observadas en la prestación de los servicios públicos municipales son puestas de manifiesto ante esta institución, en su mayoría, por ciudadanos a título individual. Sólo hemos recibido cuatro quejas colectivas, promovidas en tres casos por una asociación vecinal y en el otro restante por una red privada de agua potable. No obstante, y como ya se ha señalado en otros apartados, aunque se promuevan a título individual, en ocasiones se expresa que las realidades de las que traen causa las quejas, y las demandas o soluciones que se piden, inciden en una pluralidad de personas.

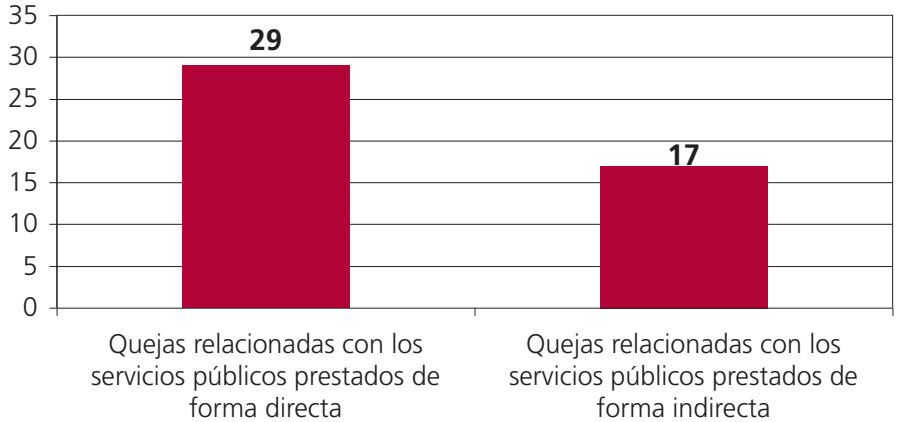
Municipios de procedencia de las quejas



Llegados a este punto procedemos a adentrarnos ya en el análisis material de las quejas. El criterio sistemático elegido para ello, no hemos encontrado otro mejor, ha sido el del propio servicio público.

Hay dos quejas, ambas en tramitación en esta Defensoría, en las que la crítica de los ciudadanos se extiende a las deficiencias existentes en más de un servicio público municipal. Es el caso de una queja llegada desde Alcantarilla en la que su promotor ponía de relieve toda una serie de problemas que afectan a un barrio de aquella localidad, relativos a una deficiente prestación de diversos servicios públicos municipales: limpieza viaria, conservación de vías públicas, carencias en el mobiliario urbano, etc. De características muy similares es la procedente de la pedanía murciana de Javalí Nuevo, en este caso centrada en el alumbrado público, la recogida de basuras, el alcantarillado, la recogida de aguas pluviales, etc.

En otra de las quejas la reclamación precisamente consiste en impugnar la competencia de una entidad local, concretamente el Ayuntamiento de San Javier, que ha regulado mediante una ordenanza el uso y aprovechamiento de sus playas, impidiendo la navegación en determinados tramos litorales, lo que, en opinión del promotor de la queja, contraviene algunas disposiciones de la Ley de Costas. La queja no fue admitida toda vez que no se acredita que su promotor se haya dirigido con carácter previo a la administración concernida. Por la misma



razón también se procedió al archivo de una queja procedente de Molina de Segura en la que se denunciaba el mal estado de una red de saneamiento de aguas residuales y pluviales en una urbanización de aquella localidad.

La falta de alumbrado público en dos urbanizaciones, una de San Javier y otra de Fortuna, sobre las que hemos requerido informe a los respectivos ayuntamientos, tiene dos quejas abiertas en esta Institución.

Cuatro son las quejas derivadas de la prestación del servicio público de transporte. Una planteada por un ciudadano de Murcia con la movilidad reducida por su discapacidad, a quien se informó desde esta Institución de las medidas que se están implementando por parte de las administraciones competentes. Otra procedente de Cartagena, y archivada tras la lectura del informe remitido a esta Defensoría, en la que el ciudadano sugería que se ampliasen los lugares autorizados para el despacho de boletos de transporte. La siguiente, que no se admitió a trámite al no haber acreditado los interesados haberse dirigido con carácter previo a la administración, era una queja promovida colectivamente por varios usuarios de una línea de autobús que cubre el trayecto Sangonera la Verde-Murcia, y en la que se exponían las irregularidades detectadas en el cumplimiento de los horarios establecidos en las paradas. Sí se admitió en cambio una queja, que acabó en la **Resolución de la Q-0308/2009**, en la que una asociación de vecinos de Sangonera La Verde, junto a otros vecinos de Los Garres, manifestaban su disconformidad con la supresión de algunas expediciones en varias líneas de autobús. La medida fue adoptada por la empresa concesionaria alegando la existencia de un déficit económico en esa línea y afirmando que las expediciones suprimidas no formaban parte del título concesional. Finalmente la resolución de esta Institución contenía una recomendación y una sugerencia dirigidas a la Entidad Pública del Transporte de Murcia. La primera consistía en instar a esa Entidad a que se objetivase el derecho ciudadano a la movilidad a través del transporte público, aprovechando el conjunto de medidas que se estaban implementando en materia de transporte público en el municipio de Murcia. También se sugería que se reconsiderase el refuerzo de las líneas suprimidas para minimizar los perjuicios al ciudadano.

En el ámbito del transporte, pero en este caso de mercancías, y por lo tanto más ajeno a la realidad municipal, también hemos de ubicar una queja procedente de Murcia en la que un usuario denuncia que una empresa, no autorizada como "operador de transporte de mercancías", estaba desempeñando esa actividad, lo cual se demostró erróneo tras la comprobación realizada a ese efecto por la Dirección General de Transportes y Puertos de la CARM.

Diversos problemas relacionados con la movilidad ciudadana y la accesibilidad están en el origen de seis de las quejas tramitadas durante este año. La primera, procedente de Beniel y cerrada al no ampliar su promotor la información requerida desde esta Institución, versaba sobre los problema de movilidad y accesibilidad que se derivan de la estrechez de algunas aceras del municipio. La siguiente queja viene promovida por una ciudadana discapacitada que insta al Ayuntamiento de Murcia a que habilite una reserva de plaza de estacionamiento en las inmediaciones de su domicilio y en un concreto punto de la vía pública que el Ayuntamiento no puede habilitar por problemas técnicos. Un problema de falta de accesibilidad en el entorno de un edificio ubicado en La Manga del Mar Menor, y recientemente remodelado sin tener en cuenta la normativa existente, trae a esta Institución otra de las quejas desde Cartagena. El aumento de la densidad del tráfico y los atascos que se producen en algunas vías urbanas de Murcia como consecuencia de las obras que se realizan para dotar a la ciudad de un tranvía, llevan a una ciudadana a plantear una serie de propuestas, que no pueden ser aceptadas, al afectar de lleno a las condiciones de licitación de la citada

obra pública. Otra queja, en tramitación actual, trae causa de un contenedor de basura fijado sobre una acera que dificulta el tránsito peatonal en una calle cercana a un colegio público de Puente Tocinos en Murcia. Por último, una ciudadana de Ricote registró una queja exponiendo que en una de las calles de aquel municipio, y como consecuencia de los estacionamientos sobre las aceras que realizaban camiones de reparto, se obstaculizaba la movilidad peatonal y se producían daños en los inmuebles próximos, demandado la instalación de bolardos para impedir esos estacionamientos. A resultas de la citada reclamación, esta Defensoría formuló una recomendación al Ayuntamiento de Ricote (**Resolución de la Q-0311/2009**) en la que plasmamos la conveniencia de intensificar la vigilancia policial en la zona para prevenir y, llegado el caso sancionar, el incumplimiento de las normas de tráfico y circulación, sugiriendo al mismo tiempo que se habilitasen zonas destinadas a facilitar la carga y descarga.

Los cementerios, materia cuya competencia deben ejercer en todo caso los municipios, han motivado el registro de dos quejas en esta Institución. En una de ellas se constató que el problema no tenía vinculación alguna con la prestación del servicio público; se trataba de un litigio de naturaleza privada relacionado con una disputa en torno a la titularidad dominical de un panteón que, en su caso, tendría que dirimirse en la jurisdicción civil ordinaria. El segundo de los casos está relacionado con la disconformidad del quejoso por el pago de determinados derechos funerarios para la conservación de sepulturas, previsto en la ordenanza municipal correspondiente del Ayuntamiento de Cartagena. Leído el informe de esa administración, se cierra la queja entendiendo que ese Ayuntamiento actuó correctamente.

Tres han sido las quejas recibidas sobre limpieza viaria. La primera de ellas, no tramitada al quedar registrada en su día en la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional, tiene por objeto los efectos en el ambiente próximo que se derivan de la utilización de barredoras mecánicas en el municipio de La Unión. De ese mismo municipio nos llega una queja en la que se pone de manifiesto la existencia de una plaga de garrapatas derivada de la insalubridad de algún solar cercano a un barrio de aquella localidad. Admitida a trámite la queja el problema fue solventado entretanto por la administración local. La tercera queja vinculada a la limpieza viaria, tramitándose a la espera del informe requerido, está relacionada con el desacuerdo de un vecino por la concreta ubicación de un contenedor de basura en la ciudad de Murcia.

Los parques y jardines, otra competencia municipal de prestación obligatoria, han traído a esta Defensoría tres quejas. La primera estuvo promovida por una asociación de vecinos de Alcantarilla, y trataba de una demanda relacionada con las deficiencias que presenta un parque infantil en un barrio de aquella localidad. El Ayuntamiento sostiene en su informe que existen previsiones para atender esas demandas, pero han tenido que darle prioridad a otros problemas urbanísticos detectados en la zona aparcando puntualmente la aspiración vecinal contenida en la queja. Del municipio de Ricote procede la queja relacionada tanto con la insalubridad de un solar cercano a un parque público existente en el centro urbano de esa localidad, como con una fumigación que ha generado molestias al vecindario. En su informe el Ayuntamiento de Ricote sostiene que la fumigación fue una acción puntual y que el solar ya ha sido limpiado por su propietario. Por último, de la pedanía murciana de Espinardo procede una queja en la que se denuncia el mal estado general, y la escasa frecuencia de la limpieza viaria, de un parque ajardinado cercano a un centro educativo. Por su parte el Ayuntamiento de Murcia informa que las obras de adecentamiento de ese parque se han realizado.

Los aparcamientos públicos han traído a esta Defensoría una queja. La concesionaria de un aparcamiento público de Murcia no está cumpliendo las condiciones de la concesión, dando

lugar a que las instalaciones del mismo estén deterioradas y la prestación del servicio sea deficiente. Además el promotor de la queja quiere que se eleve a escritura pública un contrato de cesión de una de las plazas de ese aparcamiento. Finalmente, estudiado el caso y leída la documentación aportada por el ciudadano y el informe remitido la administración local, esta Defensoría adoptó la **Resolución de la Q-0023/2009**, incluyendo una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Murcia en la que se pide a esa Administración que asuma la gestión del aparcamiento hasta tanto no se resuelve el contrato con la concesionaria y se busca a otra empresa que se haga cargo de este servicio, recomendando asimismo que se eleve a escritura pública el contrato de cesión de la plaza de aparcamiento a favor del promotor de la queja.

Han sido ocho las quejas que hemos sistematizado en una amplia categoría que abarca obras e infraestructuras públicas diversas que en algún caso afectan a la seguridad vial de los municipios. La primera nos llega desde la pedanía murciana de Alquerías y tiene por objeto la construcción de una isleta frente a un comercio que, en opinión del promotor de la queja, perjudica sus intereses. El informe del Ayuntamiento determina que la obra, solicitada en su momento por la Junta Vecinal, es técnicamente oportuna y necesaria. Otra queja, que acabó en la **Resolución de la Q-0023/2009**, procede la pedanía murciana de Los Garres, en ella se pide la colocación de ralentizadores de velocidad en un carril de aquel núcleo de población. El Ayuntamiento sostiene que la competencia para atender esa demanda es de la Junta Vecinal, y esta Defensoría, en la citada resolución que adopta la forma de recordatorio de deber legal, pide al Ayuntamiento de Murcia que asuma sus competencias en orden al correcto funcionamiento de los servicios públicos que gestionan las juntas vecinales, y conforme a los informes de los servicios técnicos municipales, adopte las medidas necesarias para incrementar la seguridad vial de la zona en cuestión.

De otra pedanía de Murcia, concretamente de Puebla de Soto, procede una queja, no admitida al no acreditar su promotor haberse dirigido con carácter previo al Ayuntamiento, en la que se pone de relieve la peligrosidad de una acequia al descubierto existente en aquel núcleo de población. La siguiente queja proviene de Abanilla, y fue cerrada asimismo porque su promotor no se dirigió previamente al Ayuntamiento. Su objeto, en este caso, es el supuesto peligro de derrumbamiento de edificaciones en una de las calles de la zona antigua de la localidad. De Murcia procede la queja, aún en tramitación a la espera del informe del Ayuntamiento, derivada de los estacionamientos indebidos y no sancionados de automóviles y motocicletas en una vía urbana del municipio. Con objeto muy similar, y también procedente de Murcia, es otra queja de un ciudadano que tiene dificultades para un correcto uso de un derecho de vado por los estacionamientos realizados en la vía pública cercana. La queja se cierra, otra vez, porque su promotor no acredita que se haya dirigido con carácter previo al Ayuntamiento. De Jumilla procede otra de las quejas, en esta ocasión relacionada con una actuación puntual de reordenación del tráfico en determinadas calles del municipio. La queja acaba cerrándose tras la lectura de los informes técnicos remitidos en los que se avala la actuación municipal. La última queja relacionada con esta materia, en tramitación a la espera del informe municipal requerido, procede de San Pedro del Pinatar. En ella se relatan los perjuicios que se ocasionan a un ciudadano al haber habilitado el Ayuntamiento de aquella localidad una reserva de estacionamiento de vehículos frente a un local propiedad del ciudadano y en favor de un hotel situado frente al citado local.

El servicio público municipal que más quejas ha traído a esta Defensoría es el de abastecimiento de agua potable a las poblaciones. Toda vez que la casuística es grande, hemos decidido sistematizar las once quejas registradas en tres grandes apartados: deficiencias en la correcta prestación del servicio, quejas relacionadas con la gestión económica y facturación del servicio, y redes privadas de agua potable.

La primera queja recibida procede de Cañada Hermosa en Murcia, se trata de un paraje caracterizado por la dispersión de su población y que cuenta con una amplia red de caminos, algunos de los cuales no están convenientemente dotados de las infraestructuras precisas para garantizar el abastecimiento de agua potable. Las actuaciones de esta Institución se cerraron tras la lectura del informe remitido por el Ayuntamiento de Murcia en el que se advertía que estaba previsto atender esas demandas vecinales a lo largo de 2009.

La bajada de presión en la red de agua potable de la ciudad de Cartagena, como consecuencia de la implementación en esa localidad de las acciones contempladas en la *Ley 6/2006 sobre el incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Región de Murcia*, motivó la queja de una ciudadana de Cartagena, que de manera muy acusada comprobaba como en horario nocturno apenas llegaba agua a su vivienda, por otro lado ubicada en un edificio no dotado del correspondiente equipo de presión que hubiese minimizado el impacto de la medida adoptada. Teniendo en cuenta que la bajada de presión en la red, de indudable beneficio social al evitar la pérdida de un ingente volumen de agua, también proporcionaba evidentes beneficios a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en Cartagena, esta Defensoría adoptó la **Resolución de la Q-0097/2009**, en ella recomendábamos al Ayuntamiento de Cartagena que, con el concurso de la empresa concesionaria, estableciera una línea de ayudas económicas para atender las consecuencias negativas que estaban padeciendo algunos usuarios del servicio público, derivadas de la necesaria implementación de la antes citada norma jurídica. Recomendación ésta que finalmente no ha sido atendida por el Ayuntamiento de Cartagena.

Continúa tramitándose, a la espera del informe requerido al Ayuntamiento de Mazarrón, una queja que tiene por objeto los daños producidos por la rotura de un entronque de la red de agua potable de Mazarrón. Asimismo, otra reclamación relacionada con los daños derivados de la prestación del servicio público de agua potable proviene de Campos del Río. La queja se cerró al haber prescrito la posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la administración responsable.

Cinco quejas recogen diversos desacuerdos relacionados con la facturación de los recibos de abastecimiento de agua y la gestión económica del servicio público. La primera procede de Murcia, y ha dado lugar a la **Resolución de la Q-0116/2009,** que ha sido aceptada por la empresa concesionaria del servicio público. En esta queja, su promotor exponía que la empresa concesionaria había procedido a cortar el suministro de agua en una vivienda de su propiedad, sin haber sido convenientemente notificado sobre tal extremo, reclamándole asimismo para hacer efectiva la reposición del suministro, el pago de dos recibos adeudados por el usuario y el abono de ciertas cantidades en concepto de reposición. La resolución adoptada por esta defensoría contendía un recordatorio de deber legal dirigido a la concesionaria para que adecuase los procedimientos relacionados con el corte de suministro a los usuarios abonados a las exigencias previstas en la *Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, modificada por la Ley 1/2008, de 21 de abril*, normativa ésta que contemplando una necesaria acción tutelar de las administraciones públicas hacia los usuarios de determinados servicios públicos, prohíbe que se proceda al corte del suministro en servicios como el que nos ocupa, si no hay una "constancia fehaciente" de la recepción previa por parte del consumidor y usuario de una notificación en la que se le conceda un plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte.

Otra de las quejas en las que se visualiza el desacuerdo de un usuario del servicio público con la facturación procede de Mazarrón. En este caso el

abultado consumo de agua del usuario respondía a una rotura de su propia instalación interior, con lo que tuvimos que cerrar la queja recomendándole que, en su caso, se dirigiera a la compañía de seguros. Parecida reclamación nos llegó desde Águilas por la reclamación de unos recibos de agua que el usuario del servicio creía desproporcionados y que achacaba a un incorrecto funcionamiento del contador de su vivienda. El informe solicitado al Ayuntamiento de aquella localidad constata que el buen funcionamiento del contador ha sido verificado por los servicios técnicos de la Dirección General de Industria, por lo que procedemos al archivo de la queja.

Del municipio de Archena proceden dos quejas similares. En ambos casos se han archivado, la primera por no haber sido formalizada en esta Institución en el plazo concedido, y la segunda por la pendencia del asunto en los tribunales de justicia. Las quejas traen causa de la exigencia de pago realizada a los usuarios reclamantes por la oficina gestora del suministro de agua de aquella localidad, de varios recibos de agua derivados de consumos realizados en el año 1993.

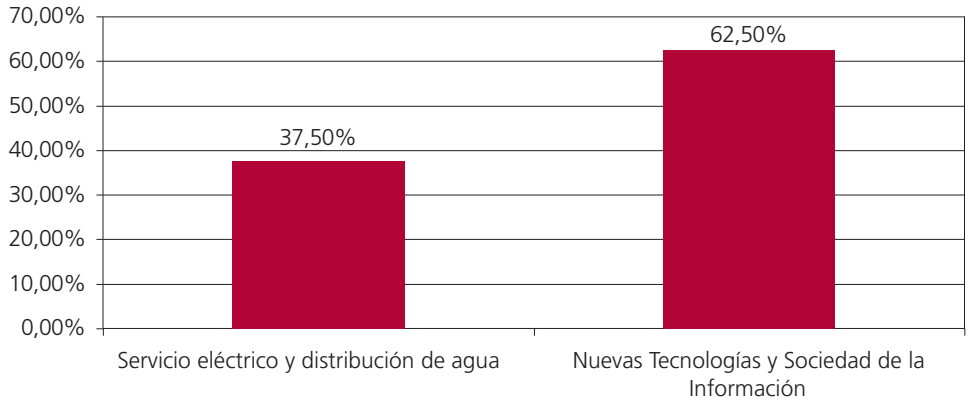
Determinados problemas vinculados al funcionamiento y gestión de dos redes privadas de agua potable, una de Bullas y otra de Alhama de Murcia, completan el análisis de las quejas en materia de servicios públicos. En el caso de Bullas, aún tramitándose en esta Defensoría, el promotor de la queja manifiesta su desacuerdo con los sistemas de lectura de los consumos y con la subsiguiente facturación realizada por la empresa concesionaria del servicio público. El Ayuntamiento de aquella localidad nos remite un informe en el que se sostiene que está procediendo a recabar los datos necesarios para que se llegue a una solución del problema, iniciando, llegado el caso, expediente sancionador contra la empresa concesionaria por la incorrecta aplicación del contrato del servicio. En el caso de Alhama de Murcia la queja está en tramitación en estos momentos. En ella se expone que el Ayuntamiento de aquella localidad ha procedido, sin contar con los integrantes de la red privada de agua potable, a dar servicio a un tercero utilizando las infraestructuras de esa red.

III.18. Servicios Públicos esenciales, universales o de interés general

Bajo esta rúbrica se acogen todas las quejas recibidas con el motivo de presuntas deficiencias en la prestación de servicios públicos o privados de naturaleza esencial, universal o de interés general.

En efecto, la Ley 9/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, introdujo en su ámbito competencial la posibilidad de supervisar no sólo la actuación de la administración en relación con los servicios públicos, entendiendo por tales aquéllos que así hayan sido declarados por norma con rango de ley (v.gr. servicio público de abastecimiento de agua potable) y respecto de los que corresponde asumir a la administración pública su titularidad; sino también a aquéllos que por no considerarse imprescindibles para la sociedad o bien porque en atención al nivel de desarrollo alcanzado pueden ser asumidos por el sector privado, se privatizan, de forma que si bien inicialmente eran públicos (v.gr. suministro eléctrico, abastecimiento gasístico) en la actualidad serán prestados por el sector privado, aunque de forma tutelada por el sector público. De esta manera surge el servicio esencial de suministro eléctrico, así declarado por Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; y la actividad de suministro de gas, como actividad de interés general (Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos).

Por su parte, otros servicios como los postales, Internet, etc., serán declarados "universales" por la Ley 24/1998 de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales y por Ley 33/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Cuestiones todas éstas sobre las que, a partir de la modificación



efectuada por ley de la Asamblea Regional, extenderá su competencia el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Precisamente por la nueva asunción competencial, hay que tener en cuenta un doble tratamiento de las quejas, debiendo ser inadmitidas en primera instancia, todas aquéllas que denunciaban problemas con electricidad, gas, o internet por ser temas que en un primer momento esta Defensoría no podía asumir. Todo lo anterior, sin perjuicio de inadmitir igualmente aquellas quejas en las que el ciudadano no se ha dirigido en una primera instancia a la administración competente, esto es, la oficina de consumo respectiva, industria, etc., puesto que la actuación del Defensor no ha de suplir los canales ordinarios de resolución de conflictos, a través de los respectivos servicios de reclamaciones, sin perjuicio de que si éstos no funcionan adecuadamente y se vulneran los derechos de los ciudadanos, pueda intervenir, en ejercicio de sus competencias.

En este sentido se han recibido 16 quejas, lo que representa un 2,48% del total, de las cuales las quejas relativas al servicio eléctrico y a la distribución del agua representan un 37,5% y las referentes a nuevas tecnologías y sociedad de la información, un 62,5%.

En materia de industria, las quejas se centran en un incorrecto suministro eléctrico, ya sea por deficiencias en la tensión o cortes en suministro. Estos expedientes se encuentran en trámite o han finalizado por una actuación correcta para la administración, al no derivarse incumplimiento de la misma.

En materia del servicio universal de comunicaciones, se registran quejas relacionadas con telefonía móvil, siendo derivadas al servicio competente de consumo, pues no se habían dirigido con carácter previo a éste; otras dos van referidas a tardanzas en el pago de la subvención para la compra de ordenadores del programa de "Internet en casa" siendo solventado de forma telefónica mediante contacto con el personal encargado de gestionar las subvenciones, o bien alguna otra de carácter sectorial relativa a la disconformidad sobre el tratamiento que la televisión hace de determinados asuntos o su ausencia de inclusión en determinadas franjas horarios (cuestión ésta que se zanjó por no apreciar un incumplimiento de la administración).

III.19. Urbanismo

Al objeto de dotar de una cierta sistemática a este epígrafe que facilite la mejor comprensión de las quejas relacionadas con el complejo mundo del urbanismo, hemos optado por clasificar las mismas dentro de las tres áreas principales en las que se suelen dividir las actuaciones públicas en materia urbanística: el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística. Conviene advertir, no obstante, que nos adentramos en una realidad, la urbanística, en

la que la casuística es grande, como de otro lado cabría esperar de materia tan poliédrica, y las singularidades que subyacen tras las quejas relacionadas con esta temática no siempre facilitan la mejor ubicación sistemática de las mismas.

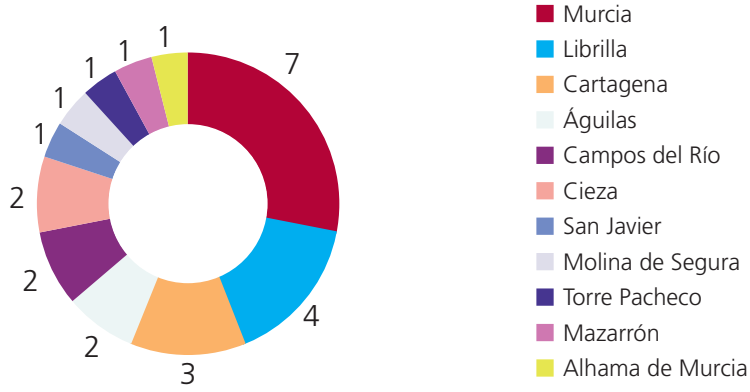
Finalmente, a lo largo de este primer año de la Institución, han sido veinticinco las quejas que podríamos ubicar en la temática urbanística, de ellas tres han sido objeto de sendas resoluciones; dos relacionadas con la gestión urbanística y una que hemos ubicado en el subepígrafe de la disciplina urbanística. Como en otras áreas analizadas en este Informe Anual son muchas las quejas en materia urbanística que aún están en tramitación, a la espera de los informes que preceptivamente deben remitir las administraciones públicas concernidas en cada caso, o, en algunos casos, a la espera de ampliación de información y/o acreditación de trámites previos por parte de los promotores de las quejas. Otras quejas se han cerrado cuando esa información requerida al ciudadano no se ha remitido en los plazos establecidos, y, en fin, otras se han archivado por plantearse cuando aún no ha concluido el expediente administrativo del que traen causa.

El urbanismo, conviene precisarlo desde un primer momento, es una función pública cuyo marco constitucional viene esencialmente delimitado por los artículos 33 y 47 de nuestra Ley Fundamental. Como ha apuntado la doctrina científica, esos dos preceptos acotan esa función con un límite mínimo: la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, legitimando la participación de la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos, y, un límite máximo: el respeto al contenido esencial del derecho de propiedad. Dentro de esos límites debe moverse cualquier política pública relacionada con el urbanismo, que habrá de respetar, además, las directrices básicas que se perfilan en los artículos 45 y 46 de la Constitución. Allí (art. 45) se reconoce el derecho que todos los ciudadanos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales –entre ellos, el suelo– con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Por su parte, el artículo 46 efectúa un mandato a los poderes públicos para que garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. También es preciso traer aquí otros valores y objetivos de nuestra norma fundamental que habrán de ser tenidos en cuenta: el derecho a una vivienda digna y adecuada, con la imposición a los poderes públicos del deber de promover las condiciones para su efectividad (art. 47), o, el mandato que se hace a los poderes públicos para que realicen una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, a los que se debe amparar especialmente para el disfrute de los derechos consagrados en el título I de la Constitución Española (art. 49).

Así pues, todo el ordenamiento urbanístico, y con él toda actuación pública en materia urbanística, debe estar impregnada de estas ideas esenciales contenidas en nuestra Constitución. Y aquí también cabe incluir, como no podría ser de otra manera, las actuaciones de esta Defensoría al abordar el estudio y la tramitación de las quejas de contenido urbanístico llegadas a nuestra Institución.

Antes de entrar en la parte más sustantiva de las quejas, y como hemos hecho en otros apartados, procede ahora realizar un somero análisis territorial y social de las mismas. Las quejas proceden de once municipios de la región: Murcia (7), Librilla (4), Cartagena (3), Águilas (2), Campos del Río (2), Cieza (2) y San Javier, Molina de Segura, Torre Pacheco, Mazarrón y Alhama de Murcia (1 c.u.). Así pues han recurrido a esta Defensoría en la citada materia poblaciones incluidas en tres de las

Municipios de procedencia de las quejas



cinco comarcas (Murcia, Cartagena y Guadalentín) en las que queda dividido el territorio político de la misma. No ha quedado registrada con esta temática queja alguna procedente de las ciudades y pueblos de las comarcas del Noroeste y el Altiplano.

Respecto al promotor de las quejas, lo es mayoritariamente a título individual y sólo en un par de casos se promueven quejas colectivas: una en nombre y representación de una comunidad de regantes y la otra de una comunidad de propietarios. Esta circunstancia también incide, como cabría esperar, en el hecho de que la mayoría de las quejas queden encuadradas sistemáticamente en el ámbito de la gestión y la disciplina urbanísticas, siendo menores las que tienen que ver con el planeamiento, más dado a la reprobación global y colectiva que a la puntual e individual.

La temática urbanística, no hay más que repasar las hemerotecas de los últimos años, ha estado muy presente en la vida social y política de nuestra región: la pugna entre los diversos modelos y alternativas sobre cómo afrontar la ordenación del territorio, el establecimiento de los nuevos sectores urbanizables, los modos de gestión de esos sectores, los niveles y la intensidad de la protección del territorio, la utilización de herramientas urbanísticas en cierto modo ajenas a la "cultura del plan" como los convenios urbanísticos, las revisiones de diversos planeamientos urbanísticos municipales a lo largo de la región, etc., son cuestiones que han formado parte destacada de la agenda política y social de la Región de Murcia. Ello no obstante, los últimos sondeos de opinión y estudios sociológicos realizados sobre nuestra realidad regional, y consultados por esta Institución, concluyen que el urbanismo no tiene un lugar destacado entre las preocupaciones de los murcianos, siendo percibido como problema por un porcentaje muy poco significativo de la sociedad regional. Cuantitativamente veinticinco quejas no es un número pequeño; más aún si tenemos en cuenta además que algunas de las quejas ubicadas sistemáticamente en este informe en áreas como la ambiental o la cultural (patrimonio histórico) tienen también cierto contenido urbanístico. Pero lo cierto es que, salvo excepciones, buena parte de las quejas llegadas a esta Defensoría en materia urbanística son cuestiones muy puntuales que no cabría relacionar con esos grandes temas de la agenda política y social citados atrás, y, por lo tanto, la lectura sociológica que podemos extraer no se aparta mucho de las conclusiones a las que llegan los antes citados estudios de opinión. Es más, abundando en esas conclusiones, pese a las importantes competencias que la administración regional tiene en materia urbanística, la totalidad de las quejas tiene como blanco de sus reclamaciones a las adminis-

traciones locales, bien es verdad que también protagonistas públicos de la facultad de planeamiento y de la ejecución de los planes.

Realizadas las anteriores consideraciones en torno a la sistematización de las quejas, la función pública del urbanismo y el marco constitucional que lo delimita, y esa somera y a vuela pluma reflexión sociológica, es momento de entrar de lleno en el contenido de las quejas siguiendo la sistematización propuesta.

En **materia de planeamiento**, entendiendo por tal todo lo relacionado con ese conjunto de instrumentos –planes– que sirven para la ordenación de un concreto territorio en su perspectiva más estática, hemos decidido incluir tres de las veinticinco quejas. La primera de ellas, especialmente significativa, nos llega de la localidad de Librilla, donde el Presidente de la Comunidad de Regantes Tajo-Segura de aquel municipio nos manifiesta su preocupación por la incidencia que diversos convenios urbanísticos –cuyas determinaciones se pretendían incorporar al planeamiento municipal actualmente en revisión– podrían tener sobre una vasta superficie de cultivo y sobre las obras de mejora y consolidación de regadíos que se llevan a cabo en esa zona. Finalmente, decidimos cerrar la queja tras la lectura de una Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, coincidente con las aspiraciones de la citada comunidad de regantes, mediante la que se procede a la suspensión del otorgamiento de aprobación definitiva del Plan General Municipal de Ordenación de Librilla, hasta tanto no se resuelvan una serie de deficiencias, expresadas en esa Orden, entre las que se encuentra una relacionada con la pretendida reducción de la superficie calificada como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola, por la sensible merma de las posibilidades productivas agrarias que implica y porque compromete la viabilidad de las infraestructuras de riego proyectadas en la zona.

Otra de las quejas que incluimos en esta temática nos llega del municipio de Águilas; su promotor, con la pretensión de realizar una construcción ligada a la actividad agrícola en un paraje natural de aquel municipio, se quejaba de la indefensión que supone una supuesta indeterminación de los límites del espacio natural protegido (por un LIC y una ZEPA) "Sierra de la Almenara". La queja fue archivada, toda vez que aún se esperaba por parte del promotor la respuesta de la administración concernida. Y, por último, otra de las quejas en el ámbito del planeamiento trata de la imposibilidad urbanística de materializar un centro de ocio relacionado con los deportes de aventura en el municipio de Mazarrón, al parecer, y a la espera de que el informe solicitado por esta Institución al Ayuntamiento de Mazarrón llegue y nos saque de dudas, las previsiones del planeamiento urbanístico de esa localidad chocan con esta iniciativa en materia de accesos a un centro de estas características.

De esas veinticinco quejas urbanísticas, buena parte cabe ubicarlas en la **fase de gestión o ejecución del planeamiento**, esto es, en esa parte más dinámica del urbanismo que trata del conjunto de actuaciones precisas para desarrollar e implementar en el territorio las determinaciones del planeamiento urbanístico. Así, una de las primeras quejas llegadas a esta Defensoría tenía relación con la construcción de un vial programado en el planeamiento urbanístico del municipio de Murcia, en la pedanía de Beniaján; su realización implicaba inevitablemente el derribo de una vivienda. Desde esta Defensoría se instó al promotor de la queja a impugnar por vía administrativa o judicial los actos realizados o resoluciones dictadas al respecto, que considerase lesivos a sus derechos. Un caso parecido, que finalmente quedó archivado al no aportar el quejoso los documentos requeridos por esta Institución, tenía por objeto la construcción de un muro y cimbrado de una rambla en El Puntal de Murcia, que, en opinión de su promotor, aumentaba el riesgo de inundación de los inmuebles próximos. O, en este caso con origen en el municipio de Murcia, la discrepancia en la valoración de algunos terrenos que se han expropiado a un ciudadano para posibilitar la realización de las obras de circun-

valación de Murcia, asunto sobre el que esta Defensoría no realizó trámite alguno dado que se trata de un litigio que se está ventilando en la actualidad en los tribunales de justicia.

También en este ámbito hemos incluido la queja, que acabó en resolución de esta Defensoría (**Resolución de la Q-0017/2009**), fundamentada en el mandato constitucional contenido en el antes citado artículo 49 de la Constitución Española, y relacionada con necesidad de dotar de un ascensor a un edificio de viviendas en el que reside una persona mayor con una disminución física muy acentuada. Aún estamos a la espera de que las administraciones a las que nos hemos dirigido nos comuniquen si aceptan o no el contenido de la resolución emitida, consistente en el recordatorio del deber legal de constituir la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, prevista en una Ley de 1995, por la que se establecen normas sobre condiciones de habitabilidad en edificios a minusválidos y de promoción de accesibilidad general a las viviendas, todo ello en la línea del expresado mandato constitucional, y donde se indicaba además que el Ayuntamiento de Murcia, habida cuenta de las circunstancias que concurren en el caso, puede excepcionar aquellos requisitos exigidos en las ordenanzas municipales que impiden la efectiva instalación del ascensor.

Son diversas las quejas que tienen por objeto a las licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad, relacionadas en algún caso con la falta de recepción de obras de urbanización por parte de los ayuntamientos, en ocasiones porque el promotor (en algún caso una Junta de Compensación) no ha finalizado la urbanización del sector que estaba desarrollando, lo que muchas veces acarrea que no funcionen correctamente servicios básicos como el abastecimiento de agua. En otros casos son el alcantarillado o el alumbrado público los servicios que, con más o menos intensidad, acaban resintiéndose. Además de dos quejas provenientes de Librilla, una a la espera del informe solicitado al Ayuntamiento, y otra que acabó archivándose por falta de formalización por parte de su promotor, así como de otra más con origen en Molina de Segura, sobre la que aún esperamos el informe solicitado a la administración. Son especialmente significativas en este específico asunto las dos quejas llegadas a esta Institución y relacionadas con una urbanización en el municipio de Campos del Río, en las que ciudadanos británicos exigen que el Ayuntamiento expida las correspondientes cédulas de habitabilidad para sus viviendas, a las que se cortó el suministro de agua potable –agua de obra– por parte del promotor. El Ayuntamiento inicialmente se negó a recepcionar las obras de urbanización hasta tanto no fuesen terminadas por el promotor de acuerdo a lo prevenido, y por lo tanto difícilmente podría expedir las correspondientes cédulas de habitabilidad. Finalmente, y como respuesta al requerimiento de informe realizado por esta Defensoría, el Ayuntamiento nos ha comunicado que procedería de inmediato a la recepción provisional y parcial del servicio de abastecimiento de agua, dando un plazo al promotor para que acabe el resto de las obras de urbanización, transcurrido el cual, en su caso, procedería a la ejecución subsidiaria de las mismas, con lo que el problema quedaría solventado, y el camino expedito para el otorgamiento de las cédulas reclamadas.

Un ciudadano de Librilla, municipio éste del que provienen cuatro de las veinticinco quejas urbanísticas, nos pone de manifiesto el retraso injustificado de su Ayuntamiento en expedir la licencia de primera ocupación de su vivienda que lleva años solicitando. Según obra en el expediente, el Ayuntamiento sostiene que media una infracción urbanística por un exceso de obra no amparado en la licencia, aunque hasta la fecha no se ha incoado expediente alguno de infracción urbanística. Esta queja acabó en resolución (**Resolución de la Q-0375/2009**) en la que recordamos al Ayuntamiento de Librilla su obligación legal de dictar sin más dilación una resolución tendente a normalizar la situación urbanística de la vivienda, estimando o desestimando, con el fundamento jurídico adecuado, las solicitudes de los administrados.

Otras dos quejas, una proveniente de San Javier, en el polígono de Veneziola de La Manga del Mar Menor, y la segunda con origen y objeto en los nuevos desarrollos urbanos que se han ido ejecutando en el municipio de Alhama de Murcia, tienen como motivación, y por distintas razones, la irregularidad en la prestación de determinados servicios públicos de titularidad municipal ligada a la carencia de infraestructuras urbanísticas básicas. En la primera se denuncia que el Ayuntamiento de San Javier no contesta a quienes ejerciendo su derecho de petición se han dirigido a esta administración local para que normalice la prestación de servicios básicos como la limpieza viaria y la recogida de basuras, a los que se une la falta de alumbrado público y las carencias de pavimento. Tras un segundo requerimiento de información por parte de esta Defensoría al Ayuntamiento de San Javier, aún esperamos la remisión del informe. La otra queja proviene del comprador de una vivienda ubicada en uno de los nuevos desarrollos urbanos de la localidad de Alhama de Murcia. El promotor de la queja expone que el Ayuntamiento de aquel municipio no ha resuelto un recurso de reposición interpuesto contra la aprobación de los estatutos de la entidad urbanística de conservación de aquel sector, unos estatutos que, al parecer, asumen como propia la prestación de determinados servicios públicos municipales que, en puridad, correspondería prestar obligatoriamente al municipio en virtud de lo dispuesto en la legislación de régimen local. La queja aún está tramitándose a la espera del informe requerido al Ayuntamiento de aquel municipio.

La última queja en materia de gestión tiene que ver con la petición de un ciudadano de Cartagena de no formar parte de una Unidad de Actuación dentro de un Plan Especial de Reforma Interior en la zona de El Algar de Cartagena, petición basada en su manifestada carencia de medios para hacer frente a los gastos de urbanización. Solicitado el informe a la administración local, desde esta Defensoría se entendió que esa administración actuó correctamente posibilitando una salida al reclamante.

En materia de **disciplina urbanística** la casuística es variada. Hay quien se queja de la excesiva altura de un edificio de viviendas en construcción en Cabo de Palos que, sospecha, puede suponer una vulneración de las normas urbanísticas. El informe del Ayuntamiento de Cartagena aclara que la construcción se está realizando según licencia y que ésta se otorgó conforme a las determinaciones de su planeamiento urbanístico. La queja venía motivada porque la nueva edificación dificultaba la vista al mar del promotor de la misma desde su vivienda. Muy similar reclamación, en este caso desde Águilas, nos expone el propietario de un inmueble de aquella localidad costera a propósito de las obras de construcción de un auditorio en la bahía de Las Delicias de Águilas. Esta construcción, se sostiene, presenta un impacto visual considerable e interrumpe la contemplación del mar desde otras construcciones. Solicitado al Ayuntamiento de Águilas informe sobre edificabilidad y altura de la citada construcción, se concluye que la obra cumple con la normativa de aplicación.

Son varias las quejas en las que los ciudadanos se refieren a construcciones que estiman ilegales, reprobando en algún caso la inacción por parte de la administración urbanística. Es el supuesto de una queja planteada por un ciudadano de la pedanía murciana de La Arboleja derivada de la construcción de un muro lindante con su propiedad que, pese a que en su opinión vulnera las normas urbanísticas, no ha sido paralizada por el Ayuntamiento. Parecida queja nos llega desde Torre Pacheco por la construcción de obras, supuestamente sin la necesaria licencia municipal, que afectan a un camino público de titularidad municipal. Aunque según parece se dictó por parte de la Alcaldía de aquella localidad un decreto tendente a la paralización de las obras, la infracción se ha consumado sin que se haya solucionado el problema que acarreaba de estrechamiento de ese camino. Esta queja continúa en tramitación a la espera del oportuno informe de la citada administración local. Tampoco está cerrada una queja por la construcción de una piscina en la pedanía mur-

ciana de Algezares, que podría tener efectos sobre la seguridad y los bienes de personas que residen en inmuebles colindantes, y cuya accidentada tramitación urbanística está analizando esta Defensoría en el momento de redacción del presente informe. Igualmente es reciente, y estamos a la espera de una ampliación de información requerida a su promotor, una queja bastante inconcreta relacionada con la realización de unas obras en el entorno inmediato de una Iglesia del municipio de Cieza.

En otros casos, las quejas relacionadas con la disciplina urbanística provienen del lado de los infractores. En una de ellas, el promotor de la queja, vecino de la pedanía de Los Dolores, reclama que el Ayuntamiento de Murcia responda a una solicitud, formulada por él hace un año, de legalización de una vivienda ilegal. De momento estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Murcia nos aclare en su informe, además del contenido más sustantivo que está detrás de esta petición, los motivos de esta demora tan dilatada para responder a un ciudadano. Por último, también en ese otro lado de la disciplina urbanística cabe situar al promotor de una queja, procedente del municipio de Cieza, que fue sancionado por las obras de construcción y ampliación de una caseta agrícola en un paraje natural protegido por el planeamiento de aquel municipio. De esta queja trae causa la **Resolución de la Q-289/2009** en la que básicamente instábamos al Ayuntamiento de Cieza a adecuar las sanciones urbanísticas al principio de proporcionalidad, habida cuenta de la escasa entidad y efectos de la obra realizada y de la finalidad agrícola de la misma, acorde con los usos del suelo permitidos en la zona en cuestión.

Para finalizar creemos oportuno compartir una última reflexión con las administraciones locales de nuestra región. De todo el conjunto de quejas tramitadas, y sin ánimo de restar importancia a ninguna de ellas, destacan por su significación, alcance y diversa localización en varios municipios, las que tienen que ver con los problemas derivados de la recepción de obras de urbanización y de la expedición de cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación. Creemos a ese respecto que las administraciones locales deben extremar su diligencia en la gestión pública de las citadas materias, y ello, y fundamentalmente, dada la amplitud de ciudadanos que podrían verse afectados en aspectos determinantes para el correcto disfrute de un derecho constitucional tan básico como el de la vivienda digna y adecuada, si la gestión al respecto no es la más eficiente.

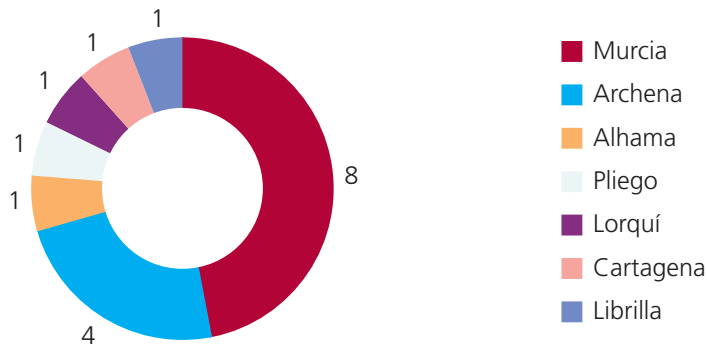
III.20. Vivienda

El derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo, que nuestra Ley Fundamental consagra en su artículo 47, han sido el fundamento de diecisiete de las quejas llegadas a nuestras dependencias durante el primer año de funcionamiento de esta Institución, y, lógicamente también, de la respuesta que en cada caso hemos dado a las mismas.

Una parte importante de las quejas, ocho de las diecisiete, tienen origen en el municipio de Murcia. Habida cuenta de la entidad demográfica del municipio de Archena, parecen excesivas las cuatro quejas llegadas desde esa localidad, aunque, como veremos, dos son exactamente iguales y las otras dos responden a la misma cuestión relacionada con un retraso en el cobro de la denominada renta básica de emancipación. El resto de quejas, una por localidad, hasta completar la totalidad de las tramitadas, proceden de los siguientes municipios: Alhama de Murcia, Pliego, Lorquí, Cartagena y Librilla. Todas menos una, promovida por una comunidad de vecinos, llegan suscritas por ciudadanos a título individual.

Dada la singularidad que acompaña a cada queja, la casuística es importante en este tema y la administración concernida, como por otro lado sucede en muchos otros ámbitos abordados en este infor-

Municipios de procedencia de las quejas



me anual, ya no es sólo la municipal. Las importantes competencias de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda se ponen de relieve cuando prácticamente la mitad de las quejas traen su causa de la gestión de los órganos de la Comunidad Autónoma relacionados con esta materia. Así pues en el caso que nos ocupa, la administración concernida puede ser un buen criterio para el análisis sistemático de las distintas quejas llegadas a esta Defensoría.

Una advertencia previa antes de entrar de lleno en el contenido más sustantivo de las quejas. Como cabría esperar algunas de las quejas que hemos dejado residenciadas en este apartado bien podrían haber sido analizadas, sin ningún problema, en el epígrafe que este Informe dedica al urbanismo. No obstante, pese a que efectivamente alguna de ellas presenta elementos que podrían haberlas llevado allí, finalmente hemos optado por esta ubicación sistemática en el entendimiento de que las mismas tienen una vinculación muy acusada con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Una de las dieciséis quejas fue derivada al Defensor del Pueblo de España. Pese a estar relacionada con la conocida renta básica de emancipación que gestiona la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la ayuda al alquiler solicitada por un joven de Archena fue denegada como consecuencia de que la normativa que regula este tipo de ayudas, de carácter estatal, exige que los beneficiarios no tengan deudas previas con la Hacienda Pública, circunstancia ésa que concurría en el caso que nos ocupa.

Cuatro quejas tienen relación con distintos aspectos de la gestión de la denominada renta básica de inserción. La primera procede de Cartagena, y en ella su promotor expone que se le ha reconocido el derecho a obtener una ayuda al alquiler de una vivienda, pero que ese derecho no se hace efectivo pasado el tiempo. Recabado el informe de la administración, esta Defensoría asesora al ciudadano sobre los trámites que debe seguir para hacer efectivo su derecho, cerrando así la queja. La siguiente, con origen en el municipio de Murcia, pone de relieve el excesivo tiempo que el Instituto de Vivienda y Suelo tarda en dar respuesta a una solicitud de ayuda al alquiler realizada por el ciudadano. La queja acabó cerrándose a petición del propio reclamante, dado que cuando se estaba tramitando recibió una respuesta favorable de la administración concernida. La siguiente queja, ahora procedente de Archena y cerrada por esta Institución al no aportar el reclamante la documentación requerida, también ponía de relieve el retraso de la administración resolviendo sobre una petición de ayuda para el alquiler. De Murcia procede otra de las quejas relacionadas con la renta básica de emancipación. En esta ocasión el ciudadano

denuncia que se ha producido una interrupción en el cobro de esa ayuda derivada al parecer de la no admisión de algunos de los recibos de pago de alquiler presentados para su justificación. Esta queja sigue tramitándose a la espera del informe requerido a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma también son destinatarios de otras quejas. Así, un joven de Alhama de Murcia nos exponía en su escrito las consecuencias derivadas de los defectos constructivos que padecía la vivienda de protección oficial que había adquirido con ocasión del Plan de Vivienda Joven de la CARM, concretamente unas filtraciones pluviales ocasionadas por el aislamiento deficiente de la construcción, que estaban deteriorando una plaza de garaje adquirida por él junto a la vivienda. Sobre la base de lo prevenido en el vigente Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, donde se expresa que ante vicios o defectos en la construcción que hagan necesarias obras de reparación podrá imponerse su ejecución al promotor de las mismas o ejecutarlas a su costa, si no han transcurrido, como es el caso, más de cinco años desde la calificación definitiva, esta Defensoría emitió la **Resolución de la Q-0016/2009**. En la misma se recordaba a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la CARM, su deber legal de proceder a la ejecución subsidiaria de las citadas obras por cuenta y a costa del obligado, procediendo, si así lo estimaba conveniente, a la exacción cautelar y anticipada a reserva de la liquidación definitiva del importe de los gastos, daños y perjuicios causados.

Otra de las quejas tramitadas que tenía como destinatario al Instituto de Vivienda y Suelo (IVS) de la CARM, y que acabó en la **Resolución de la Q-0153/2009**, procede ahora de un vecino de Murcia disconforme con la adjudicación de una vivienda del conocido Polígono de La Paz a un familiar que no reside en ella de modo habitual. Examinados los criterios de adjudicación de las citadas viviendas remitidos a nuestro requerimiento por la IVS, concluimos en la resolución citada recordando a ese organismo que es un requisito previo a la adjudicación de viviendas acogidas al régimen de regularización de situaciones de ocupación de viviendas de promoción pública, el de ostentar la condición de usuario real de las mismas, lo que implica una comprobación real que en el caso que nos ocupa se ha obviado. De otro lado también recomendábamos al citado IVS que se introduzca una disposición complementaria al Decreto 74/1997, de regulación de las situaciones de ocupación de viviendas de promoción pública, que recoja los criterios a tener en cuenta, y su orden de prioridad, para dar solución a los conflictos de intereses que puedan surgir en la adjudicación de este tipo de viviendas.

La fiscalidad que grava la transmisión de las viviendas originó otra de las quejas llegadas a esta Defensoría desde el municipio de Murcia. Nuestras gestiones al respecto se limitaron a requerir de la Dirección General de Tributos de la CARM la información atinente al caso, que fue oportunamente trasladada al promotor de la queja, cerrando la misma.

Los destinatarios de las críticas contenidas en el resto de quejas tramitadas relacionadas con la vivienda son los ayuntamientos. La primera de ellas, muy relacionada con la gestión urbanística, es tramitada la petición de un vecino de Murcia, residente en la pedanía de Torreagüera, que advierte de la tardanza en obtener una resolución expresa y motivada por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia que debe resolver sobre una solicitud de licencia de rehabilitación de vivienda realizada por el promotor de la queja. Han sido tres los requerimientos de información instados al Ayuntamiento de Murcia, estando a la espera de respuesta. Un ciudadano de Pliego plantea ante esta Institución cómo su vivienda recientemente adquirida, y que cuenta con la oportuna licencia de primera edificación, continúa con la luz de obra y con la imposibilidad de obtener suministro eléctrico desde la red general, cir-

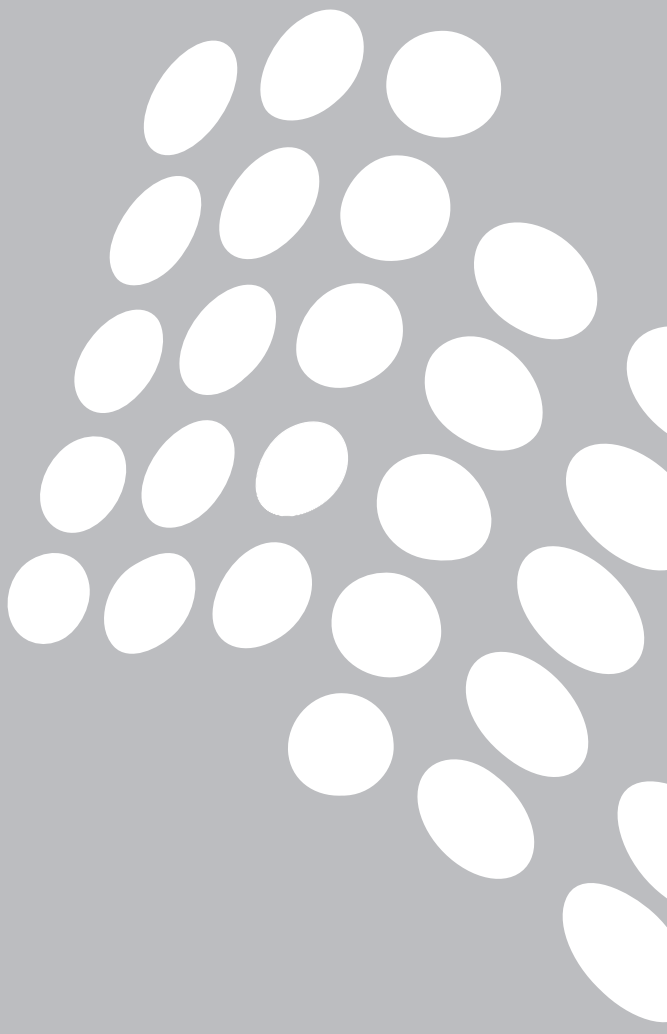
cunstancia que no podrá resolverse hasta tanto no se proceda a la instalación de un transformador eléctrico. Además el ciudadano exponía que el inmueble también carecía de las necesarias rampas destinadas a garantizar la accesibilidad de los discapacitados. De esta queja deriva la **Resolución de la Q-0104/2009**, en la que recordamos al Ayuntamiento la obligación de comprobar, antes de expedir la licencia de primera ocupación, la correcta disposición de los servicios esenciales y las condiciones de accesibilidad de las viviendas para los minusválidos en los términos dispuestos en la normativa urbanística y de promoción de la autonomía personal en vigor. De otro lado la resolución también contenía una recomendación dirigida a ese Ayuntamiento. Habida cuenta de que éste había expedido la licencia de primera ocupación sin la verificación citada, el Ayuntamiento de Pliego debería buscar la solución más adecuada para asumir los costes derivados de la subsanación de las deficiencias comentadas.

Se tramita en la actualidad una queja muy parecida a la anterior, ahora procedente del municipio de Librilla, en la que el presidente de una comunidad de propietarios de un edificio de viviendas, que contando con las respectivas licencias de primera ocupación, aún utilizan luz de obra, denuncia la insuficiencia de las instalaciones eléctricas para atender la demanda energética de todos los residentes, responsabilizando al Ayuntamiento por haber expedido las licencias de primera ocupación sin la oportuna comprobación de los extremos citados.

Un tema muy distinto pero también con efectos sobre el derecho a la vivienda, en este caso a una cueva habilitada como tal, procede del municipio de Lorquí. El ciudadano nos pone de relieve que la Alcaldía de la localidad ha dictado una resolución cuyo contenido habilita y permite el tráfico rodado en un camino que está justo encima de la cueva de su propiedad. En el informe de la administración, requerido por esta Defensoría, se acredita que la carretera existente no sólo no tiene efectos negativos sobre la cueva, sino que además contribuye a su estabilidad, argumentando que la misma evita en parte las filtraciones de agua que podrían acabar afectándole.

Dos quejas procedentes de Archena tienen su origen en una operación urbanística realizada por el Ayuntamiento de aquella localidad. Al parecer esa administración local negoció con algunos ciudadanos la adquisición en su favor de viviendas compradas al Instituto de Vivienda y Suelo (IVS) a cambio de otras de su propiedad, cuyo suelo era necesario para crear una zona verde en el municipio. Según se desprende de la lectura de las quejas llegadas a esta Institución, estos ciudadanos creyeron entender que el cambio de viviendas se producía sin más contraprestaciones a su cargo, y posteriormente se les reclama la diferencia de valor entre ambas viviendas. Esta Defensoría adoptó la decisión de cerrar las quejas, no sin antes informar a sus promotores de que el alcance y los efectos del error que pudo mediar en la prestación de los respectivos consentimientos, es una cuestión que correspondería determinar, llegado el caso, a los tribunales de justicia.

Las tres últimas quejas en materia de vivienda que analizamos, con contenidos muy distintos, han llegado recientemente a nuestra Institución con origen en los municipios de Murcia y Cartagena. La primera, tramitándose en la actualidad en espera del informe requerido al Ayuntamiento de Murcia, versa sobre la denegación de una ayuda al alquiler de viviendas solicitada por una persona discapacitada. Otra, aún en fase de estudio preliminar, tiene relación con el dinero aportado por un ciudadano a una mercantil inmobiliaria que en la actualidad no está cumpliendo con sus obligaciones. Por último, los problemas de accesibilidad a una vivienda ubicada en un inmueble cuyos accesos han sido recientemente remodelados sin ajustarse a la normativa de accesibilidad, centra la queja de un ciudadano con residencia en La Manga del Mar Menor en Cartagena.



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo IV OTRAS ACTUACIONES

IV.1. Quejas No Admitidas a Trámite

El artículo 34.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, determina que el informe anual que se remitirá a la Asamblea Regional, expondrá las quejas que no fueron admitidas, así como las causas que motivaron su inadmisión.

En consonancia con lo anterior, de las 645 quejas que han tenido entrada en la Institución no han sido admitidas a trámite el 24,65% de ellas, lo que constituye un total de 159 quejas, siendo los motivos de su inadmisión los siguientes:

a) Por no aportar los promotores de la queja los datos solicitados.

De las 159 quejas no admitidas a trámite, en el 22,64% de ellas, principalmente, relacionadas con Medio Ambiente, Urbanismo, Educación o Justicia, los ciudadanos no aportaron aquella documentación que le fue requerida por la Institución, en unos casos para aclarar los hechos contenidos en su escrito de queja y en otros para acreditar, tanto la existencia de los mismos, como el hecho de haberse dirigido previamente a la Administración afectada, con el fin de obtener respuesta a su pretensión.

En estos supuestos se efectuaba un primer requerimiento al interesado concediéndole el plazo de diez días, desde el momento de su recepción, para presentar dicha documentación, transcurrido el cual se realizaba un segundo requerimiento, apercibiendo al interesado de que si en el plazo de tres meses no se aportaba la documentación, se procedería al archivo por caducidad de las actuaciones.

b) Por no existir actuación irregular de la Administración.

La inadmisión inicial por este motivo, aconteció en un único supuesto en el que el interesado manifestaba su disconformidad por no conocer la obligatoriedad de la realización de un examen, para ser incluido en la bolsa de trabajo de Función Pública de la Región de Murcia, a pesar de que a dicho examen le fue dada la correspondiente publicidad.

c) Por plantearse conflicto jurídico-privado.

El 9,43% de las quejas afectaban a cuestiones jurídico-privadas, enmarcadas, por tanto, fuera del ámbito competencial de la Institución.

De entre ellas destacan las relacionadas con entidades bancarias, empresas destinadas a la promoción y venta de viviendas, o bien, cuestiones suscitadas entre particulares, tanto en el ámbito familiar, comunidad vecinal e incluso algunas relacionadas con la redacción y cumplimiento de determinados cláusulas contractuales, relativas a compraventas o arrendamientos de viviendas.

d) Por no vulnerarse derechos fundamentales de los afectados.

De las quejas inadmitidas, el 10,69% lo fueron por considerar que no existía vulneración de derechos fundamentales, ya que el objetivo perseguido por los promotores de la queja no era sino modificar el contenido de actos o resoluciones administrativas, potestad de la que carece el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, tal y como preceptúa el apartado segundo del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, lo cual no impidió que, en determinados supuestos, se instara a la Administración a modificar en el futuro los criterios utilizados para la producción de aquellos.

e) Por no haberse dirigido el interesado a la Administración competente para obtener respuesta a su pretensión, o bien, por transcurrir poco tiempo desde que se dirigió a la misma y no haberse agotado el plazo de que dispone para resolver.

En la consideración de que los ciudadanos han de dirigirse con carácter preferente a la Administración competente para resolver su pro-

blemática, el 6,92% de las quejas planteadas, no fueron admitidas por no haberse dirigido el ciudadano a ésta con dicho fin, y el 5,66% por haber tenido entrada en la Institución antes de haber transcurrido el tiempo máximo de que dispone la Administración para resolver.

f) Por estar pendiente el objeto de la queja de obtener un pronunciamiento jurisdiccional o tener la consideración de cosa juzgada.

En base a la limitación establecida en el artículo 21.2 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, así como en el respeto a la independencia del Poder Judicial consagrada constitucionalmente, según el cual ningún otro poder o autoridad distinta de los órganos judiciales puede pronunciarse sobre cuestiones sometidas a los mismos, el 16,35% de las quejas no fueron admitidas por este motivo.

g) Por desistimiento del interesado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se produjo en el 1,89% de las quejas la solicitud de desistimiento efectuada por los interesados.

h) Por no existir pretensión concreta.

Solo una de las quejas fue inadmitida por este motivo, habida cuenta que el contenido planteado en la misma no contenía pretensión concreta, sino que planteaba una sugerencia a tener en cuenta por las correspondientes administraciones competentes, según la cual se valorara en el procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico, las circunstancias económicas de la persona sancionada y, por tanto, la posibilidad de sustituir las sanciones pecuniarias por trabajos en beneficio de la comunidad a quienes, por motivos económicos, no pudiesen afrontar aquéllas.

i) Por solución favorable.

Tras la presentación de la correspondiente queja, en el 3,14% de los casos el ciudadano contactó con la Institución, para informar que la cuestión planteada en su escrito de queja había sido solucionada durante la correspondiente tramitación.

j) Por enmarcarse fuera del ámbito competencial.

De las 159 quejas no admitidas a trámite por alguna de las causas anteriormente señaladas, el 21,38% de ellas no lo fueron por enmarcarse fuera del ámbito competencial atribuido a la Institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, sin embargo, a pesar de ello, ésta ha intentado en todo momento hacer de valedora de los derechos constitucionales de los ciudadanos, informándoles sobre las vías o cauces más adecuados para resolver su pretensión.

En la mayor parte de dichas quejas, los ciudadanos se dirigían a esta Institución ante el desconocimiento sobre los trámites a seguir o la entidad pública competente para resolver la problemática que les afectaba. Por tanto, estudiada la misma se informaba al ciudadano de las conclusiones alcanzadas, así como el organismo competente para atender su petición que, en algunos casos, era la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Servicios Sociales de la corporación local correspondiente, Colegios de Abogados o Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, entre otras.

IV.2. Quejas derivadas

Tal y como exige el artículo 21.4.d) de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, así como el Convenio de Colaboración suscrito entre éste y el Defensor del Pueblo del Estado, todas aquellas quejas relacionadas con su ámbito de competencias le han sido remitidas de oficio, concretamente el 11,94%.

En cuanto al ámbito material de las mismas, destacan las referidas a Extranjería (tramitación de permi-

so de trabajo y residencia, reagrupación familiar u órdenes de expulsión), Seguridad Social (compatibilidad entre prestaciones, tramitación y resolución de expediente de incapacidad, pensiones ordinarias de jubilación y cotizaciones), funcionamiento del Registro Civil, Dirección General del Catastro, Confederación Hidrográfica del Segura, o Ministerio de Justicia, en cuanto a tramitación de indultos.

Asimismo hay que tener en cuenta en este apartado que, en función de la competencia territorial atribuida a cada uno de los Comisionados Autonómicos de los respectivos Parlamentos en el ejercicio de sus competencias, tuvieron entrada en esta Institución tres quejas en las que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se inhibió en favor del Defensor del Pueblo Andaluz, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, y del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, por producirse los hechos expuestos en las mismas en el territorio en el que éstos ejercen sus competencias.

IV.3. Cumplimiento de las Resoluciones

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en el ejercicio de las potestades que le son atribuidas en el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, ha emitido una serie de Resoluciones que han reconocido la existencia de lesiones o menoscabos de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Tal y como se encuentra regulado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución, aprobado por la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, a propuesta del Defensor del Pueblo el día 10 de diciembre de 2009, sus Resoluciones pueden adoptar cualquiera de las siguientes formas:

1. Advertencias: Son aquéllas a través de las cuales se comunica a una Administración, autoridad o funcionario, la necesidad de modificar un comportamiento entorpecedor de las facultades de investigación que ostenta la Institución, haciéndole saber las medidas que pueden adoptarse en contra de quien persiste en dicha actitud.

2. Recomendaciones: Son las dirigidas a manifestar a una Administración, autoridad o funcionario, la conveniencia de efectuar determinadas actuaciones para rectificar un defecto o irregularidad.

3. Recordatorios de deberes legales: Tienen como fin recordar a una Administración la obligación de ajustarse a un determinado precepto legal o disposición administrativa de carácter general.

4. Sugerencias: A través de ellas se aconseja a una Administración, agente o autoridad la iniciación de alguna actividad o toma de alguna medida o la corrección de algún tipo de actuación o norma, en el marco de las funciones legalmente encomendadas a la Institución.

5. Decisiones: Son aquellas resoluciones por las que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia acuerda la realización de un acto de trámite o bien de un acto sobre el fondo del asunto que pone fin al procedimiento, pero de contenido distinto a los reseñados anteriormente.

En consonancia con ello, a continuación expondremos todas aquellas resoluciones emitidas hasta el día 31 de diciembre de 2009, incluidas las correspondientes a expedientes del año 2008, cuya terminación ha tenido lugar durante el 2009. Por tanto, existen expedientes de queja que, si bien se iniciaron en 2009, su tramitación y posible resolución tendrá lugar en el año 2010, debiendo ser, por tanto, incluidos en el Informe correspondiente a dicho año.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 3 de septiembre de 2009, dirigida al Servicio Murciano de Salud en exp. 6/2008

Contenido de la queja: Falta de contestación por parte de los responsables del Servicio Murciano de

Salud, a la denuncia formulada por el interesado ante la Gerencia de ese organismo por una actuación sanitaria que le fue practicada, consistente en una exploración endoscópica del intestino, sin haber sido informado previamente que la misma se llevaría a cabo sin la correspondiente sedación.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Servicio Murciano de Salud:

Recordatorio de deber legal: La administración sanitaria tiene la obligación de atender el derecho de todo ciudadano a obtener una respuesta frente a las peticiones, reclamaciones, quejas, etc., que los administrados realizan. Este derecho está reconocido tanto en el ámbito del procedimiento administrativo común, como en el más específico ámbito de los derechos de los usuarios de la sanidad pública.

Recomendación: Que por parte del la Dirección del Servicio Murciano de Salud se proceda a la homogeneización, mediante la elaboración de un protocolo común para todos los hospitales del Servicio Murciano de Salud y los centros concertados que realizan exploraciones digestivas, que reconozcan el derecho de los usuarios a obtener información tanto sobre los diferentes medios anestésicos susceptibles de ser utilizados en esas pruebas, como sobre la posibilidad de su no administración cuando así se determine de forma motivada por el facultativo.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 1 de julio de 2009, dirigida a la Consejería de Agricultura y Agua en exp. 11/2008

Contenido de la queja: Dilación de procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado ante la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Consejería de Agricultura y Agua:

Recordatorio de deber legal: El ordenamiento jurídico configura el silencio como instrumento de garantía de los derechos de los ciudadanos ante una actitud silente de la administración. El artículo 42 de de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, impone el deber legal de resolver expresamente en los plazos establecidos por la normativa aplicable.

Recomendación: Que el silencio negativo no se configure como una forma habitual de finalización de los procedimientos, constituyendo un mala práctica su utilización como argumento inicial en una resolución expresa, con el acuerdo de incoación de responsabilidad patrimonial, para a continuación exigir la subsanación de documentación en el plazo de diez días legalmente establecido. En primer lugar porque el silencio negativo no tiene naturaleza vinculante y, en segundo lugar, por la incoherencia que supone que la Administración reconozca no cumplir las mimas normas cuya observancia exige a los administrados.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA PARCIALMENTE.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 12 de mayo de 2009, dirigida a la Consejería de Educación, Formación y Empleo y al Centro de Educación Infantil y Primaria "Virgen de Begoña" de Cartagena en exp. 18/2008

Contenido de la queja: Negativa del Centro de Educación Infantil y Primaria "Virgen de Begoña" en Cartagena, a que la hija de la promotora de la

queja –que cursa estudios en el citado centro– lleve la comida preparada desde casa, a pesar del informe médico presentado relativo a su intolerancia a la leche de vaca y a la carne de ternera, así como la conveniencia de preparación de la comida sin conservantes ni colorantes, preferentemente en el domicilio familiar.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Consejería de Educación, Formación y Empleo:

Sugerencia: Que, en cumplimiento del artículo 80.3. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de de mayo, de Educación, se elabore y apruebe un Decreto Regional regulador de los comedores escolares en los centros docentes públicos y privados no universitarios, y, en concreto, comprensivo de las situaciones particulares en las que sea necesario individualizar los menús ofrecidos, con la finalidad de homogeneizar el tratamiento otorgado por los centros docentes no universitarios en el ámbito de la Región de Murcia, que evite situaciones discriminatorias o limitativas del derecho de todas las personas a recibir el servicio educativo en condiciones de igualdad.

Asimismo se formuló al Centro de Educación Infantil y Primaria "Virgen de Begoña" de Cartagena:

Recomendación: Sería conveniente que por los órganos competentes se asuman las recomendaciones efectuadas por el responsable de la administración educativa en el informe emitido al efecto y, en todo caso, que en el ejercicio de sus competencias, garanticen a la escolar la posibilidad de un menú sano y equilibrado, bien preparado en el domicilio familiar, bien por la empresa encargada del comedor escolar, pero en este último caso, siempre en coordinación y con conformidad del facultativo responsable del tratamiento.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 14 de octubre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Cartagena en exp. 8/2009

Contenido de la queja: Disconformidad por el lanzamiento de artefactos pirotécnicos en la Diputación de Alumbres, habida cuenta las alteraciones que el ruido ocasionado por los mismos, causa en el comportamiento del hijo del promotor de la queja afectado por una discapacidad psíquica.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Cartagena:

Recomendación: Contemplar en su Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones, una regulación específica sobre la utilización de la pirotecnia en ese término municipal, para evitar el uso indiscriminado de la misma, estableciendo en estos casos y cuando así se solicite, un sistema de apoyo especial por parte del Área de Atención Social de ese Ayuntamiento, encaminado a atender, auxiliar y reforzar la labor familiar en situaciones como la descrita.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA PARCIALMENTE, NO ACEPTADA LA REGULACIÓN ESPECÍFICA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 15 de julio de 2009, dirigida a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en exp. 16/2009

Contenido de la queja: Dilación en la realización de unas obras de reparación, por daños ocasionados en el garaje de una vivienda de protección oficial debido a las filtraciones de las lluvias en un muro medianero.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló

a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura:

Recordatorio de deber legal: El ordenamiento jurídico impone –en los términos del artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 168 Reglamento de las Viviendas de Protección Oficial– el deber legal de proceder a la ejecución subsidiaria de la orden de obras, por cuenta y a costa del obligado, pudiendo proceder a la exacción cautelar y anticipada a reserva de la liquidación definitiva del importe de los gastos, daños y perjuicios causados.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 16 de julio de 2009, dirigida a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en exp. 17/2009

Contenido de la queja: Negativa del Ayuntamiento de Murcia a conceder licencia a la colocación de un ascensor en un edificio de viviendas antiguo, pues la escalera quedaría reducida a 0,70 metros, contraviniendo así lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de aplicación que exige un ancho de escalera de 1 metro.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura:

Recordatorio de deber legal: La constitución y cumplimiento de funciones de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, es una exigencia que no debe ser dilatada por más tiempo, pues la Ley 5/1995, de 7 de abril, de normas sobre condiciones de habitabilidad en edificios a minusválidos y de promoción de accesibilidad general a las viviendas, por la que se creó hace más de catorce años, y el régimen jurídico de general aplicación a los órganos consultivos permite su funcionamiento, sin necesidad de esperar a un desarrollo reglamentario.

Asimismo, la emisión del informe vinculante sobre la instalación de un ascensor en un edificio donde reside una persona con discapacidad tiene carácter preceptivo y vinculante, siendo requisito legal imprescindible para que el Ayuntamiento pueda excepcionar los requisitos exigidos en la correspondiente Ordenanza.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN AUNQUE HA CONVOCADO A LA COMISIÓN REGIONAL.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 26 de junio de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia en exp. 23/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia, por no proceder a elevar a escritura pública una plaza de garaje sita en el aparcamiento subterráneo de C/ Huerto de las Bombas, en el barrio de San Antonio de Murcia.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recomendación: Con fundamento en el apartado cuarto del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 8 de marzo de 2006, en cuya virtud se faculta al Excmo. Sr. Alcalde para "la firma de cuanta documentación sea necesaria tendente a dar efectividad al presente acuerdo", y en tanto no se normalice la gestión del servicio, sería conveniente que por el titular habilitado o persona que éste designe, se proceda a materializar la elevación de la correspondiente escritura pública de contrato de cesión de la plaza de garaje nº 176 del referido

aparcamiento, evitando así posibles perjuicios en los usuarios derivados de la tardanza en la finalización del procedimiento de resolución del contrato y nueva adjudicación, en su caso, seguidos al efecto.

La adecuada gestión del servicio municipal de aparcamiento subterráneo sito en la C/ Huerto de las Bombas, barrio de San Antonio, aconseja adoptar a la mayor brevedad las medidas establecidas en el ordenamiento jurídico y en los correspondientes pliegos por extinción de la personalidad jurídica del concesionario, tales como la caducidad del contrato de concesión, asumiendo directamente la prestación del servicio en tanto no se adjudica, en su caso, el nuevo contrato de gestión.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 16 de octubre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Bullas en exp. 37/2009

Contenido de la queja: Presunta indefensión causada al promotor de la queja, en expediente instruido en materia de seguridad ciudadana por el Ayuntamiento de Bullas.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Bullas:

Recordatorio de deber legal: La presunción de inocencia que inspira el procedimiento sancionador exige al agente de la autoridad un exquisito rigor en la fijación de pruebas de cargo en el procedimiento sancionador, sin que sea aceptable la imposición de sanciones fundamentadas en suposiciones o declaraciones de terceras personas no ratificadas en legal forma.

Recomendación: La concurrencia de múltiples defectos formales en el expediente sancionador, objeto de la queja, y la falta de rigor en la acreditación de la veracidad de los hechos objeto de sanción, aconsejan revisar el expediente de referencia en garantía del principio de legalidad y al principio de presunción de inocencia ínsito al de tutela judicial efectiva consagrado en nuestra Constitución.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 1 de junio de 2009, dirigida al Instituto Murciano de Acción Social y a la Residencia de Personas Mayores "San Basilio" en exp. 39/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la negativa de la Residencia de Personas Mayores "San Basilio", donde se encuentra el interesado, a cambiarle su condición de "asistido" a "válido".

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Instituto Murciano de Acción Social y a la Residencia de Personas Mayores "San Basilio":

Recomendación: La normativa aplicable permite volver a valorar los expedientes de los residentes cuando circunstancias sobrevenidas modifiquen su capacidad, por lo que procede revisar el expediente del promotor de la queja para comprobar si reúne los requisitos para ocupar una plaza "válida" no necesitada de asistencia para las actividades normales de la vida diaria, sin que esto suponga cambio de centro, en idénticas condiciones a los residentes válidos que permanecen en el mismo.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 23 de noviembre de 2009, dirigida a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración en exp. 40/2009, 55/2009 y 204/2009

Contenido de la queja: Los interesados solicitan la compatibilidad entre los servicios de tipo asistencial (en la mayoría de casos residencia pública o centro de día) y la prestación económica denominada "cuidados en el entorno familiar", ligada al horario en el que el dependiente no se encuentra en el centro público o concertado correspondiente.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración:

Recomendación: Las expectativas generadas en los colectivos afectados en torno a la aprobación de un decreto autonómico que regule la compatibilidad de las prestaciones y servicios establecidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aconseja que por parte de las administraciones y organismos implicados en la elaboración e informe del texto correspondiente, se cumplan de forma escrupulosa los trámites establecidos en la normativa vigente para la aprobación de disposiciones de carácter general, sin dilaciones injustificadas que puedan suponer un perjuicio para las personas dependientes y sus familias.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN AUNQUE LA CONSEJERÍA HA ANUNCIADO SU TRAMITACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 7 de mayo de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Molina de Segura en exp. 51/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la existencia de una cuadra ilegal con suciedad y basuras en el municipio de Molina de Segura. El promotor de la queja denunciaba que, a pesar de los expedientes sancionadores incoados y las multas impuestas, el infractor no cumplía con la legalidad.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Molina de Segura:

Recordatorio de deber legal: El ordenamiento jurídico impone el deber legal de hacer cumplir las órdenes de demolición y ejecutarlas subsidiariamente a costa del obligado, una vez transcurridos los plazos señalados, de conformidad con el artículo 228 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA PARCIALMENTE.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 20 de julio de 2009, dirigida al Servicio Murciano de Salud y a la Dirección General de Empleo Público en exp. 58/2009 y 62/2009

Contenido de la queja: Se solicita el cumplimiento de la exigencia legal de reserva a personas con discapacidad en las bolsas de trabajo de empleo público del Servicio Murciano de Salud.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Servicio Murciano de Salud y a la Dirección General de Empleo Público:

Recomendación: La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y con las leyes autonómicas 1/2001, de 26 de enero y 5/2001, de 5 de diciembre, del Persona Estatutario del Servicio Murciano de Salud, impone a las Administraciones Públicas el

deber de reservar en las convocatorias para la selección de personal estatutario un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de cada servicio de salud, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

La integración efectiva de las personas con discapacidad en la vida laboral aconseja la actualización de la normativa de acceso y provisión de puestos de trabajo de las personas con minusvalía constituida por el Decreto 153/1993, de 30 de diciembre, adecuando los porcentajes de reserva a los ratios previstos por la ley; y actualización asimismo de la normativa de selección de personal temporal integrada por la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, de selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional y por la Orden de 12 de noviembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la selección del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud, de forma que se respeten los cupos de reserva establecidos en la moderna legislación para personas con discapacidad también en la selección de personal temporal.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA. PENDIENTE DE DECRETO REGULADOR.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 26 de octubre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Abarán en exp. 63/2009

Contenido de la queja: Contaminación acústica que los vecinos de un inmueble sito en la localidad de Abarán, vienen padeciendo como consecuencia de la actividad desarrollada en el café-bar ubicado en los locales comerciales de dicho inmueble, así como dificultades de los interesados en el acceso a la información ambiental de que dispone el Ayuntamiento.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Abarán:

Recordatorio de deber legal: Esa Administración Local, en cumplimiento de las previsiones normativas anteriormente enunciadas, contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, así como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, debe adoptar todas aquellas medidas necesarias encaminadas a facilitar a los ciudadanos el acceso a la información ambiental que obre en su poder.

Recomendaciones: 1ª) Resulta necesario que ese Ayuntamiento proceda a realizar medición de los niveles de ruido ocasionados por dicho local, respetando las previsiones contenidas en el artículo 18 del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido, concretamente las referidas en su apartado tercero, en cuanto a las medidas que se deben llevar a cabo para medir los niveles de ruido en el interior de los edificios, especificando que se deben realizar en el momento y la situación en que las molestias sean más acusadas, obligando al local, en caso de que los niveles de ruido sean superiores a los permitidos, a ejecutar aquellas obras que resulten necesarias para lograr la efectiva insonorización del mismo, incoando, en caso contrario, expediente sancionador correspondiente. 2ª) Es conveniente que ese Ayuntamiento lleve a cabo la elaboración de una Ordenanza dedicada a la protección del medio ambiente frente a la emisión de ruidos, encaminada a dotar a ese Municipio de una regulación más detallada al respecto.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 19 de agosto de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Cieza en exp. 66/2009

Contenido de la queja: Contaminación acústica sufrida en vivienda de nueva construcción, derivada de los ruidos ocasionados por los vehículos que circulan por la zona.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Cieza:

Recordatorio de deber legal: En virtud de lo establecido en la normativa examinada sobre ruido, edificación, suelo, medio ambiente, etc., así como de lo que se desprende del informe sobre contaminación acústica realizada por el Defensor del Pueblo de España, y del contenido de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Cieza, cabe recordar al Ayuntamiento de Cieza su deber legal de supeditar la expedición de cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación a la efectiva acreditación de que los inmuebles objeto de las mismas reúnen las condiciones técnicas pertinentes, incluidas las encaminadas a la protección frente al ruido.

Recomendación: Que dado el evidente retraso que ha acumulado el proceso calibrado al que se somete al sonómetro del Ayuntamiento de Cieza y dado asimismo que la medición efectuada mediante ese aparato podría no ser exhaustiva, el gobierno municipal de aquella localidad debería contratar con una Entidad Colaboradora de la Administración (ECA) en materia de calidad ambiental para realizar el oportuno ensayo acústico, y, a resultas de éste, y en el caso de que sobrepasen los límites establecidos, que se adopten por ese Ayuntamiento los acuerdos que se estimen pertinentes para la subsanación de las deficiencias comprobadas.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 1 de octubre de 2009, dirigida a la Junta de Hacendados de la Región de Murcia en exp. 69/2009

Contenido de la queja: Exigencia para proceder al entubamiento de la acequia de Bendamé a su paso por el linde de una finca propiedad del promotor de la queja, de unos requisitos de retranqueos que, según manifiesta, no han sido exigidos al resto de los colindantes.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Junta de Hacendados de la Región de Murcia:

Recordatorio de deber legal: El artículo 9.3 de la Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, siendo fiscalizable por el Defensor del Pueblo la actuación de la Corporación de derecho público de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, en cuanto al sometimiento a las normas de derecho público que la regulan.

En el caso que nos ocupa, las autorizaciones sobre obras en conducciones e instalaciones de la comunidad de usuarios de agua corresponden al Juntamento, el cual ya tiene establecido un canon igual para todos aquellos que deseen cimbrar, entubar u ocupar la acequia de Bendamé Mayor, tal y como debe cumplirse con el promotor de la queja.

Las funciones de policía y vigilancia de los cauces atribuidas por la normativa vigente a la

Comunidad de usuarios de agua de la Junta de Hacendados de la Región de Murcia son de naturaleza indisponible, no constituyendo la naturaleza privada de los cauces y quijeros un eximente para su ejercicio.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 21 de mayo de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia en exp. 80/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la denuncia que, contra el promotor de la queja, formuló el Ayuntamiento de Murcia por ruidos ocasionados en su vivienda, que ocasionaban molestias en el vecino del piso inferior, principalmente, porque ni en el momento de la inspección y medición de ruidos en el piso inferior, ni en un momento inmediatamente posterior se le comunicó la existencia del acta, ni se le proporcionó copia de la misma, impidiéndole así la realización de posibles alegaciones.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recordatorio de deber legal: Las actas de inspección realizadas por el personal al servicio de la Administración pública en el marco de un procedimiento sancionador, deberán ser puestas en conocimiento del denunciado, en cumplimiento del artículo 52 de la Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, siempre que no se justifique en el expediente, la imposibilidad de su puesta en conocimiento o la necesidad de su carácter reservado, en orden a evitar la frustración de los fines perseguidos por el procedimiento.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 14 de julio de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia en exp. 81/2009

Contenido de la queja: Existencia de pintadas xenófobas y racistas en Beniaján, en lugares de tránsito de niños, por tratarse de calles principales cercanas a colegios o establecimientos comerciales.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recordatorio de deber legal: La Ordenanza de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia, le atribuye a la Corporación Local la responsabilidad del mantenimiento de la limpieza de los terrenos y construcciones sitos en el ámbito municipal, bien directamente cuando sean de titularidad municipal, bien indirectamente, cuando los bienes pertenezcan a otro sujeto público o privado, competiéndole al ente local exigir su cumplimiento, obligando al causante del deterioro a la reparación de la afección causada, sin perjuicio de las sanciones o responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar, pudiendo acordar la ejecución subsidiaria a costa de los causantes del daño.

Sugerencia: Sería conveniente que se procediera a la aprobación de una Ordenanza, similar a otras que existen en el panorama nacional apuntadas en la presente Resolución, dirigida a evitar la degradación visual del entorno urbano en el municipio, y a fomentar y a garantizar la convivencia ciudadana y el civismo, de forma que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 27 de octubre de 2009, dirigida a la Consejería de Sanidad y Consumo en exp. 84/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con el hecho de que la Consejería de Sanidad y Consumo procediera a dar de baja a la promotora de la queja en el programa de prevención de cáncer de mama, sin su consentimiento, por la inasistencia voluntaria y sin previo aviso a una prueba concertada.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Consejería de Sanidad y Consumo:

Sugerencia: Sería conveniente que los pacientes participantes del programa de prevención del cáncer de mama y otros semejantes, fueran informados en su totalidad de las exigencias de los programas en los que participan, entre ellos si la ausencia a una cita determina la inactividad de su expediente. En todo caso, cualquier actuación de la administración actuante, que pueda afectar a los usuarios deberá ser comunicada a los mismos.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 23 de julio de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Cartagena en exp. 97/2009

Contenido de la queja: Deficiencia en el suministro de agua potable en el domicilio del interesado.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Cartagena:

Recomendación: Sería conveniente que el Ayuntamiento de Cartagena, requiriendo en su caso el concurso de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, estableciera una línea de ayudas económicas para los ciudadanos afectados por las consecuencias de la necesaria implementación de la Ley 6/2006, sobre el incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Región de Murcia, que cubra, en todo o en parte, los costes derivados de la ejecución de obras o instalación de infraestructuras precisas para la solución del problema, en aquellos casos en los que se haya autorizado el suministro de agua potable sin haber planteado reparos sobre las instalaciones particulares de los abonados.

Posicionamiento de la Administración: NO ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 26 de agosto de 2009, dirigida al Ayuntamiento de San Javier en exp. 98/2009 y 107/2009

Contenido de la queja: Instalación de antenas, de radioaficionado y telefonía móvil, en inmuebles de la localidad de San Javier colindantes y cercanos al domicilio de la promotora de la queja.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de San Javier:

Recordatorio de deber legal: Dado el preceptivo mandato expresado en el artículo 49.1 y 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de las Infraestructuras Radioeléctricas del Municipio de San Javier, así como las similares disposiciones que se contienen tanto en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, como, y para el caso de las antenas de telefonía móvil, en el art. 70. de la Ley 1/95, de 8 de

marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia; teniendo en cuenta además la doctrina sentada por el Defensor del Pueblo de España en casos parecidos al que nos ocupa, hemos de recordar al Ayuntamiento de San Javier la obligación legal que tiene de ordenar la suspensión inmediata del funcionamiento de las referidas infraestructuras, accionando, hasta tanto no concluyan los procedimientos sancionadores en tramitación, cualesquiera otras medidas de carácter provisional que se estimen oportunas.

Posicionamiento de la Administración: NO ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 29 de mayo de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia en exp. 100/2009

Contenido de la queja: Embargo de pensión por parte del Ayuntamiento de Murcia, en los meses de junio y diciembre, correspondientes a la paga extraordinaria, a pesar de ser ésta –en cómputo anual– inferior al salario mínimo interprofesional.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recordatorio de deber legal: El ordenamiento jurídico impide el embargo de bienes cuando su cuantía sea inferior al salario mínimo interprofesional, independientemente de cómo se compute éste, ya sea diario, mensual o anual, en función de las cuantías mínimas aprobadas cada año por el gobierno en virtud del real decreto correspondiente.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 3 de noviembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Pliego en exp. 104/2009

Contenido de la queja: Negativa de la compañía suministradora a la contratación definitiva de suministro eléctrico a un edificio ubicado en el municipio de Pliego, y falta de instalación de rampa de acceso al mismo, a pesar de que estaba prevista en el proyecto correspondiente, teniendo dos de los familiares del reclamante la condición de minusválidos.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Pliego:

Recordatorio de deber legal: Corresponde a los Ayuntamientos la comprobación de que los nuevos edificios disponen de todos los servicios esenciales y cumplen con las condiciones de accesibilidad para minusválidos, en los términos establecidos por la normativa urbanística y de promoción de la autonomía personal en vigor.

Recomendación: Habida cuenta de que en este caso el Ayuntamiento de Pliego había emitido la licencia de primera ocupación de las viviendas del edificio en cuestión, le corresponde buscar la solución adecuada dirigida a la asunción de los costes económicos derivados de la subsanación de las deficiencias en materia de seguridad, salubridad y accesibilidad del edificio por cuya inexistencia debiera haber velado.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 15 de junio de 2009, dirigida a la Universidad de Murcia en exp. 110/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la actuación de la Universidad de Murcia en el proceso de matriculación 2008-2009 en lo referente al ingreso de estudiantes procedentes de universidades extranjeras. En concreto, pone en conocimiento de la Institución, falta de información y publicidad de las listas referentes a estudiantes procedentes de universidades extranjeras, deficiente interpretación de la normativa aplicable en lo referente a la reserva de plazas para extranjeros, incumplimiento de los plazos establecidos para la resolución de solicitudes, con evidente perjuicio para los alumnos y derivación de plazas "sobrantes" al primer curso, antes de cerrar el proceso y al margen de lo establecido en la ley.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Universidad de Murcia:

Recordatorio de deber legal: El ordenamiento jurídico impone el deber legal de resolver en los plazos legalmente establecidos para ello, especialmente, tal como ha señalado la Jurisprudencia, en el ámbito educativo, donde debieran haberse adoptado medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

El ordenamiento jurídico impone el deber de motivar y notificar los actos administrativos –en este caso el de convalidación– por afectar a los derechos e intereses de los alumnos, permitiendo así presentar los recursos pertinentes. El procedimiento de convalidación de estudios seguidos a la interesada debería retrotraerse al momento procedimental oportuno, notificando su finalización y concediendo los plazos para interponer los correspondientes recursos.

La reserva de plazas previstas para traslados de expedientes de estudios extranjeros o españoles, habrá de operar de forma que se oferten las plazas adjudicadas y no ocupadas efectivamente a los siguientes demandantes por orden de prelación en la relación de admisión, sin dejar vacantes.

Cuando queden plazas vacantes, el número de créditos convalidados exigibles para el traslado de expedientes, será el de 15 o una asignatura aprobada, por aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 16 de julio de 2002, de Normativa sobre admisión de alumnos con estudios iniciados en otras universidades para continuar los mismos estudios en la Universidad de Murcia.

Recomendación: Las dilaciones, actitud silente y demás circunstancias presentes en este caso aconsejan reconsiderar la inadmisión de la promotora de esta queja, en atención a las plazas que no hayan sido efectivamente cubiertas por matriculaciones definitivas, debiendo arbitrarse, en ausencia de plazas, los procedimientos necesarios para que pueda realizar los exámenes correspondientes a esta anualidad con toda normalidad con reserva de nota y con independencia de que la matrícula pudiera formalizarse en septiembre, con la finalidad de no perjudicar a otras personas que pudieran resultar afectadas por la presente resolución.

Posicionamiento de la Administración: NO ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 1 de junio de 2009, dirigida a la Dirección General de Empleo Público en exp. 114/2009

Contenido de la queja: Presunta discriminación en el complemento específico atribuido al puesto de trabajo del promotor de la queja, como inter-

ventor delegado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, grupo B por desempeñar idénticas funciones a las de los interventores delegados del grupo A.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Dirección General de Empleo Público:

Recordatorio de deber legal: El Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, residencia la naturaleza del complemento específico en la retribución de las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, medidas en circunstancias de dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligro o penosidad, por lo que no es posible encubrir discriminaciones salariales por este concepto con fundamento en el grupo de pertenencia, circunstancia ésta a la que ya atienden otros elementos del salario como son el sueldo o el complemento de destino en función de los niveles incluidos dentro de cada grupo de clasificación.

Sugerencia: Es conveniente que se reconsidere la exigencia reglamentaria de que un puesto de trabajo sólo pueda estar adscrito a un cuerpo, pues de conformidad con las normativa de rango legal aplicable en materia de función pública (v.gr. Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre cit) es perfectamente posible que dos cuerpos distintos pertenecientes a distintos grupos de clasificación puedan realizar idénticas tareas, pues precisamente, el solapamiento de niveles entre los distintos grupos permite que los niveles más altos para un grupo de clasificación puedan constituir un nivel base o de primer destino o de aprendizaje para el grupo inmediatamente superior, cuestión ésta que se soluciona satisfactoriamente desde un punto de vista salarial mediante el juego de las diferentes retribuciones básicas y complementarias.

Posicionamiento de la Administración: NO ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 6 de agosto de 2009, dirigida a EMUASA en exp. 116/2009

Contenido de la queja: Corte del suministro de agua en una vivienda llevado a cabo por la empresa actualmente concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Murcia, EMUASA, la cual reclamaba al usuario el pago de dos recibos adeudados por éste, así como el abono de ciertas cantidades de dinero para que se procediese a la reposición del suministro.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a EMUASA:

Recordatorio de deber legal: La empresa EMUASA, concesionaria del servicio público de abastecimiento de agua potable de Murcia, tiene el deber legal de adecuar los procedimientos relacionados con el corte de suministro a los usuarios abonados, contenidos en su Reglamento de Abastecimiento Domiciliario, a las exigencias de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, modificada por la Ley 1/2008, de 21 de abril.

Recomendación: Que la empresa EMUASA, estudie la oportunidad y conveniencia de reintegrar las cantidades abonadas por el usuario promotor de esta queja, tanto en concepto de reposición del suministro de agua potable en su domicilio, como de cualesquiera otras exacciones exigidas al mismo.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 18 de mayo de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia en exp. 117/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la instalación de dos antenas de telefonía móvil, así como con la falta de información de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, la cual alegaba no estar obligada a notificar a la parte interesada el trámite del expediente.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recordatorio de deber legal: El ordenamiento jurídico impone –en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre– el deber legal de resolver expresamente, otorgando o denegando, en este caso, las licencias urbanísticas en los plazos establecidos por la normativa aplicable.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 29 de septiembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Cartagena en exp. 136/2009

Contenido de la queja: Problemas de acceso y seguridad de los que adolece el centro escolar de cuya comunidad educativa forma parte el promotor de la queja, como representante del AMPA.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Cartagena:

Sugerencia: Dada la legítima y razonable aspiración de la comunidad educativa del Colegio Público "Virgen de Begoña" de Cartagena, el Ayuntamiento de esta localidad debería impulsar un acuerdo entre las administraciones concernidas en la solución del problema descrito: administración educativa de la CARM, Ministerio de Defensa y la propia administración local de Cartagena, tendente a la adquisición de los terrenos necesarios y la realización de las obras oportunas para dotar de la máxima seguridad posible a los accesos del referido centro escolar.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 8 de octubre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Jumilla en exp. 146/2009

Contenido de la queja: Peligrosidad, falta de seguridad, de movilidad en el entorno y de accesibilidad a las viviendas, como consecuencia del mal estado de conservación arquitectónica en el que se encuentra un caserón ubicado en el corazón histórico de Jumilla.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Jumilla:

Recordatorio de deber legal: Dada la prioridad que en todos los órdenes deben tener la seguridad e integridad de personas y bienes, y la movilidad y accesibilidad de todo el entorno, el Ayuntamiento de Jumilla, de no haberlo hecho ya la propiedad, y comunicándolo a la administración cultural de la Comunidad Autónoma, debería ejecutar con carácter subsidiario y de manera inmediata las medidas de consolidación arquitectónica que impidan el desplome de la "Casa de los Molina", procediendo posteriormente a la retirada de la valla de protección que limita la accesibilidad y movilidad de aquel lugar. Asimismo, el Ayuntamiento de Jumilla, dando cumplimiento al mandato establecido en el art. 20 de la Ley 16/1985, de 25 de

junio, de Patrimonio Histórico Español, debería dotarse de un Plan Especial de Protección de su Conjunto Histórico-Artístico.

Recomendación: El Ayuntamiento de Jumilla, en solitario o con el concurso de otras administraciones públicas, utilizando las prerrogativas que confiere a la administración pública la legislación protectora del patrimonio histórico, entre ellas la expropiación, debería promover la adquisición pública del inmueble referido, dotándolo posteriormente de alguna utilidad de carácter público.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 29 de julio de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia y a la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural en exp. 148/2009

Contenido de la queja: Solicitud de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de Murcia, de obras de conservación y rehabilitación del edificio en el que residía, catalogado bien de interés cultural dentro del conjunto histórico artístico de la ciudad de Murcia.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recordatorio de deber legal: La ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ordenanza reguladora del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia impone a las entidades locales el deber legal de conservar, proteger y promover la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia que se ubiquen en su ámbito territorial, exigiendo a los propietarios el mantenimiento de los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.

La demora de los propietarios en el cumplimiento de sus obligaciones habilita a la Corporación Local, según jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a ejecutar subsidiariamente la obligación a costa de los propietarios.

Sugerencia: En aras de la preservación y promoción del patrimonio cultural de la Región de Murcia, sería conveniente que desde las diversas instancias públicas se instrumentaran los cauces para proporcionar asistencia técnica o económica a los propietarios en la realización de las obras de rehabilitación de los bienes catalogados de interés cultural.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA PARCIALMENTE.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 17 de septiembre de 2009, dirigida al Instituto de Vivienda y Suelo en exp. 153/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la adjudicación por parte de Instituto de Vivienda y Suelo de una vivienda de promoción pública de titularidad autonómica en la que reside habitualmente el promotor de la queja, a un familiar de éste.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Instituto de Vivienda y Suelo:

Recordatorio de deber legal: El Decreto nº 74/1997, de 4 de diciembre, de Regularización de las situaciones de ocupación de la viviendas de promoción pública, exige como requisito primero para la adjudicación de un vivienda acogida a dicho régimen, ostentar la condición de usuario real de la misma. Cualquier adjudicación ha de ir

precedida de una comprobación real de dicho extremo, debiendo considerarse este criterio en el presente caso.

Recomendación: Sería conveniente que se aprobara una disposición complementaria al Decreto 74/1997, de 4 de diciembre, relativa a los criterios a tener en cuenta en la adjudicación de una vivienda de promoción pública, y priorización de los mismos en supuestos de conflictos de intereses jurídicos dignos de protección.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 18 de septiembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia en exp. 157/2009

Contenido de la queja: Contaminación acústica que el reclamante, su familia y los vecinos de su entorno, padecen como consecuencia de la actividad de un café-bar ubicado en los bajos del inmueble en el que residen.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recordatorio de deber legal: En virtud de lo establecido en la normativa examinada sobre ruido y medio ambiente y del contenido de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Murcia, este Ayuntamiento debería emitir una resolución que obligue a los infractores a ejecutar las obras necesarias para una efectiva insonorización de su local de negocios, supervisando con posterioridad la efectividad de las mismas; aplicando así de manera más decidida y con más rigor el régimen de infracciones y sanciones del que se ha dotado en la citada ordenanza, y no permitiendo la puesta en funcionamiento de este café-bar hasta tanto no quede absolutamente acreditada la sujeción a la norma del mismo.

En cumplimiento de la prevenido tanto en la 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, esa administración local viene obligada a facilitar el acceso a los ciudadanos a la información de naturaleza ambiental que obre en su poder.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 19 de noviembre de 2009, dirigida a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural en exp. 159/2009

Contenido de la queja: Problemas generados por el dilatado, accidentado y aún no concluido proceso de concentración parcelaria iniciado, hace más de 23 años, en los regadíos del Trasvase Tajo-Segura del Campo de Cartagena.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural:

Recomendación: Los errores evidenciados en el procedimiento de concentración parcelaria, agravados por la excesiva dilación en la subsanación del mismo, exigen que de manera inmediata se proceda a incoar el oportuno expediente de responsabilidad patrimonial para la indemnización de los daños y perjuicios causados al promotor de la queja.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 6 de agosto de 2009, dirigida al Ayuntamiento de San Javier en exp. 166/2009

Contenido de la queja: Deficiencias de las infraestructuras destinadas a fútbol sala de un club deportivo que desarrolla su labor en El Mirador, perteneciente al término municipal de San Javier.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de San Javier:

Recomendación: Que el Ayuntamiento de San Javier, en el menor espacio de tiempo posible y recabando, en su caso, la ayuda de otras administraciones públicas, proceda a habilitar unas pistas deportivas para la práctica del fútbol sala en El Mirador. Asimismo esta Corporación Municipal debería estudiar de modo urgente la viabilidad y oportunidad de ofrecer a la administración regional, suelo de titularidad municipal destinado a la construcción de un pabellón polideportivo en esa pedanía.

Entre tanto, y dado que la actividad deportiva del club continúa, se recomienda asimismo que se intensifiquen las labores de limpieza de las pistas deportivas de uso público de El Mirador, de modo tal que la práctica deportiva en las mismas pueda desarrollarse del modo más digno posible.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 9 de septiembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Fortuna en exp. 182/2009

Contenido de la queja: Mal estado en el que se encuentra un camino público de titularidad municipal, mediante el que el promotor de la queja accede a una vivienda de su propiedad.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Fortuna:

Recordatorio de deber legal: En cumplimiento de lo prevenido tanto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, que regula el Derecho de Petición, como en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, esa administración local viene obligada a contestar y notificar en tiempo y forma a los administrados sobre aquellos escritos y peticiones dirigidas a la misma.

Recomendación: El Ayuntamiento de Fortuna, dando cumplimiento al compromiso adquirido con el promotor de la queja recogido en el informe remitido a esta Defensoría, procederá en el más corto espacio de tiempo posible a ejecutar los acuerdos en él contenidos sobre acceso a la propiedad del reclamante y eliminación del peligro del talud. Del mismo modo, dentro del orden de prioridades que aquella Corporación estime oportuno y conforme a su disponibilidad presupuestaria, el Ayuntamiento de Fortuna debería proceder al acondicionamiento del camino público Ajuaque-Pozo de la Villa.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 31 de julio de 2009, dirigida al Ayuntamiento de San Javier en exp. 211/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con el lugar elegido por el Ayuntamiento de dicha localidad, para la celebración del denominado "IV Festival Leyendas del Rock", organizado por una empresa privada y patrocinado, entre otros, por el Ayuntamiento de San Javier.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de San Javier:

Recomendación: Dado el conflicto de derechos y bienes jurídicos suscitado, dada asimismo la prevalencia de los derechos ciudadanos a la salud, al medio ambiente y a la intimidad personal y familiar, y con el ánimo de compatibilizar los derechos en conflicto, cuya coexistencia no es imposible, sería conveniente que el gobierno municipal de San Javier procediera a la búsqueda y habilitación de un lugar alternativo, suficientemente alejado de los núcleos residenciales, para la celebración del IV Festival Leyendas del Rock.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 7 de octubre de 2009, dirigida a la Oficina para la Dependencia de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración en exp. 212/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la tramitación seguida en expediente sobre reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia, en el que se consideró que la interesada había renunciado al derecho que le había sido reconocido de acceso a dichas prestaciones.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Oficina para la Dependencia de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración:

Recomendación: Atendiendo al contenido del artículo 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual requiere que la renuncia a un derecho se haga por cualquier medio que permita su constancia, y entendiendo esta Defensoría, en base a las anteriores manifestaciones, que dicha constancia no ha quedado acreditada, se proceda por parte de la Oficina para la Dependencia de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración a reconsiderar la Resolución emitida por la misma, en la que se acepta la renuncia de Dª. M.A.H.H, en nombre y representación de su madre, al derecho que le había sido reconocido de atención residencial, procediendo, en consecuencia, a rehabilitar la plaza que le había sido asignada en la Residencia Santa Isabel en Villanueva del Río Segura.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 11 de agosto de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Lorca en exp. 214/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la reclamación que el Ayuntamiento de Lorca realizó a la interesada por el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, ya que, según afirmó la promotora de la queja, había experimentado una subida que multiplicó por cuatro las cantidades que había abonado por dicho concepto en el ejercicio anterior.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Lorca:

Recomendación: Que el Ayuntamiento de Lorca estudie la oportunidad, conveniencia, idoneidad y viabilidad, de introducir en la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles de su municipio una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los propietarios de bienes

inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 27 de noviembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Totana en exp. 216/2009

Contenido de la queja: Contaminación acústica sufrida por el reclamante como consecuencia de la actividad de una cafetería ubicada en un inmueble contiguo al de su residencia.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Totana:

Recomendación: En virtud de lo establecido en la normativa citada sobre ruido y medio ambiente y del contenido de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Totana, este Ayuntamiento debería adoptar como medida provisional en los expedientes sancionadores incoados al efecto, la clausura temporal de la actividad en tanto en cuanto no se adoptan las medidas correctoras pertinentes.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 20 de octubre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Alcantarilla en exp. 217/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la inactividad y falta de respuesta del Ayuntamiento de Alcantarilla ante una instancia dirigida frente a esa administración local, en la que se reclamaba la responsabilidad patrimonial de la misma, derivada de unas lesiones producidas con ocasión de un incidente ocurrido en las fiestas patronales.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Alcantarilla:

Recomendación: El órgano competente de ese Ayuntamiento debería adoptar los acuerdos precisos para la iniciación de oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial en el caso que nos ocupa.

Sugerencia: Habida cuenta de la reiteración de sucesos como el que origina la presente Resolución, sería aconsejable que por el Ayuntamiento de Alcantarilla se dictaran instrucciones a los responsables de los festejos, encaminadas a evitar lanzamientos de objetos dañosos u otros comportamientos que pudieran producir perjuicios en las personas o los bienes vecinales, con la consiguiente detracción de recursos públicos.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 29 de octubre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Murcia en exp. 223/2009

Contenido de la queja: Existencia de riesgos en materia de seguridad vial producidos en un carril de Los Garres que, según manifiesta el promotor

de la queja, podrían venir solucionados por la colocación estratégica de ralentizadores de velocidad.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Murcia:

Recordatorio de deber legal: Esa administración debe asumir sus competencias en orden al correcto funcionamiento de los servicios públicos que gestionan las Juntas Vecinales, procediendo, conforme a las determinaciones de los informes técnicos elaborados al efecto, a adoptar las medidas necesarias para el incremento de la seguridad vial en el Carril de Los Sauras de la pedanía de Los Garres.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 17 de noviembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Jumilla en exp. 241/2009

Contenido de la queja: Actitud pasiva del Ayuntamiento de Jumilla al no hacer efectivo un acuerdo municipal, por el que se conminaba a un vecino a eliminar los obstáculos que impedían al promotor de la queja el paso por un camino declarado demanial.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Jumilla:

Recordatorio de deber legal: Compete al Ayuntamiento de Jumilla la potestad de recuperación posesoria de sus bienes de dominio público frente a ocupaciones indebidas y no amparadas por el título autorizatorio correspondiente. En el caso que nos ocupa, deberá proceder, en caso de no cumplimiento voluntario del usurpador, a la ejecución subsidiaria de las medidas necesarias para posibilitar el tránsito por el terreno público en toda su extensión, a costa del obligado.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 22 de octubre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Cieza en exp. 289/2009

Contenido de la queja: Desacuerdo con la tramitación y conclusión de un expediente de infracción urbanística promovido contra el promotor de la queja por el Ayuntamiento de Cieza, y que deriva de la realización de unos actos de edificación y uso al parecer, sin la necesaria licencia u orden de ejecución, incompatibles con el planeamiento urbanístico y contrarios a la normativa urbanística de aplicación.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Cieza:

Recomendación: Constatado en el presente caso que no se ha realizado un adecuado ejercicio de subsunción de los hechos concretos en el tipo legal, las resoluciones recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora de ese Ayuntamiento, deberán contener en el futuro una correcta delimitación de las concretas conductas infractoras y de su alcance sancionador, garantizando la adecuación de las sanciones al principio de proporcionalidad.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 26 de noviembre de 2009, dirigida a la Dirección General de Transportes y Puertos en exp. 308/2009

Contenido de la queja: Supresión por parte de la empresa concesionaria del servicio público de

transporte urbano en el municipio de Murcia, de cuatro líneas que cubren las necesidades de transporte público de varios barrios y pedanías del sur de dicho municipio.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Dirección General de Transportes y Puertos:

Recomendación: La Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia, junto a las administraciones con competencias en la prestación del servicio público de transporte urbano, que en la actualidad trabajan en la elaboración del Plan de Movilidad Urbano Sostenible y en el Estudio de Reordenación del Transporte Público en el municipio de Murcia, deberían tratar de objetivar el derecho de los ciudadanos a la movilidad a través del transporte público, tanto en esos instrumentos de estudio y planificación citados, como en su posterior implementación a través de normas jurídicas.

Sugerencia: Hasta tanto no sea atendida la anterior recomendación, en atención a las expectativas generadas y en función del perfil de los usuarios de las líneas afectadas por la supresión de expediciones, sería aconsejable que por la administración competente se reconsiderara el refuerzo de las mismas con la finalidad de minimizar los perjuicios ocasionados.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 11 de noviembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Ricote en exp. 311/2009

Contenido de la queja: Operaciones de carga y descarga que se vienen efectuando a diario ante la fachada del edificio de la interesada, en zona no habilitada para ello, por vehículos destinados al transporte de mercancías.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Ricote:

Recomendación: Es conveniente que dicho Ayuntamiento proceda a intensificar la vigilancia policial en la referida zona, para prevenir y sancionar, en su caso, aquellas conductas, como las descritas, que puedan vulnerar la normativa existente en materia de circulación, habilitando asimismo zonas especiales debidamente señalizadas destinadas a realizar las operaciones de carga y descarga de los transportes de mercancías, en las que se disponga de espacio suficiente para evitar causación de daños materiales, o molestias innecesarias a los vecinos u otros usuarios de la vía.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 22 de septiembre de 2009, dirigida a la Consejería de Educación, Formación y Empleo en exp. 336/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Dirección General de Centros, por la que se dictan instrucciones y se establece el calendario del proceso ordinario y extraordinario de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria para el curso 2009-2010, por la reducción del número de plazas reglamentariamente establecida para los cursos de segundo ciclo de educación infantil.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Consejería de Educación, Formación y Empleo:

Recomendación: El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia considera que la incorporación de un alumno más a una unidad educativa por

considerar una instrucción de rango normativo insuficiente o una publicación inadecuada de la misma, no es preferente a la atención requerida por los alumnos de dicha unidad cuando, en la misma, exista algún alumno con necesidades educativas especiales y quede completada la ratio establecida para esos casos.

No obstante, se recomienda a la Consejería de Educación, Formación y Empleo que cuando sus disposiciones excedan de la mera ordenación interna, deberán adoptar un rango reglamentario más claro y proceder a su publicación en un diario oficial a los efectos del general conocimiento de los ciudadanos y su oportuno cumplimiento.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 11 de diciembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Librilla en exp. 375/2009

Contenido de la queja: Perjuicios ocasionados por un retraso injustificado del Ayuntamiento de Librilla en la expedición de una licencia de primera ocupación de una vivienda.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Librilla:

Recordatorio de deber legal: Para el más efectivo cumplimiento del deber legal de resolver el correspondiente expediente urbanístico, sería aconsejable que esa administración local se comprometiera a dictar, sin más dilaciones, aquellas resoluciones dirigidas a normalizar la situación urbanística de la vivienda objeto de la queja, estimando o desestimando, con el fundamento jurídico adecuado, las solicitudes realizadas por el promotor de la queja.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 17 de septiembre de 2009, dirigida a la Consejería de Educación, Formación y Empleo en exp. 395/2009

Contenido de la queja: Situación atravesada por un niño de 9 años, que cursando cuarto de primaria y no habiendo superado dos áreas, matemáticas e inglés, no puede promocionar al curso próximo según el criterio del centro educativo. Su padre, como promotor de la queja, argumenta que no pasar de curso podía agravar en su hijo los problemas psicológicos de dificultades de relación y baja autoestima que en ese momento atravesaba, de forma que si se daba tiempo a que el tratamiento psicoterapéutico surtiera efecto, con refuerzo educativo podrían superarse los obstáculos académicos.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Consejería de Educación, Formación y Empleo:

Recordatorio de deber legal: De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, la Educación Primaria tiene como finalidad proporcionar una educación que permita afianzar el desarrollo personal y bienestar de los niños y niñas. Para ello se atenderá a los alumnos de forma individualizada, mediante una evaluación global y continua, poniendo en práctica mecanismos de refuerzos tan pronto como se detecten dificultades.

En el caso que nos ocupa, el centro escolar ha obviado todos estos deberes, sin que por la Inspección Educativa, encargada de su supervisión, se haya concluido la inadecuación a la normativa vigente, no siendo admisible la decisión de no promoción de un alumno en 4º de primaria, cuando la misma hubiera sido posible de haber observado una conducta diligente por parte de los órganos competentes.

Posicionamiento de la Administración: NO ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 14 de diciembre de 2009, dirigida a la Consejería de Educación, Formación y Empleo en exp. 407/2009

Contenido de la queja: Disconformidad con la negativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, para acceder al programa de Gratuidad de Materiales Curriculares del curso 2008-09, debido a que el traslado a un centro escolar de la Región de Murcia, tuvo lugar una vez había finalizado el plazo para solicitar dicha ayuda, motivo por el que el interesado solicitaba se tuviera en cuenta la solicitud que efectuó, en tiempo y forma, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, lugar en donde el menor venía cursando sus estudios hasta ese momento.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló a la Consejería de Educación, Formación y Empleo:

Sugerencia: Sería conveniente que, por parte de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, se procediera a incluir en las bases reguladoras de las próximas convocatorias de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto, la posibilidad de admitir solicitudes fuera del plazo establecido con carácter general, para atender aquellos supuestos en los que, por circunstancias excepcionales, no se hubiese podido realizar la solicitud dentro de dicho plazo, y ello en consonancia con el objetivo fundamental perseguido en la concesión de este tipo de ayudas que no es otro que el de compensar las desigualdades personales y sociales como principio básico de calidad del sistema educativo.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 11 de diciembre de 2009, dirigida al Ayuntamiento de Santomera en exp. 436/2009

Contenido de la queja: Contaminación acústica sufrida por el reclamante, su familia y los vecinos que residen en su entorno, como consecuencia de la actividad de una cafetería con música ubicada en los bajos del inmueble en el que reside.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Ayuntamiento de Santomera:

Recomendación: En virtud de lo establecido en la normativa citada sobre ruido y medio ambiente, este Ayuntamiento debería adoptar como medida provisional en los expedientes sancionadores incoados al efecto, la clausura temporal de la actividad en tanto en cuanto no se adoptan las medidas correctoras pertinentes.

Posicionamiento de la Administración: NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU ACEPTACIÓN.

Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 10 de diciembre de 2009, dirigida al Servicio Murciano de Salud en exp. 490/2009 y 507/2009

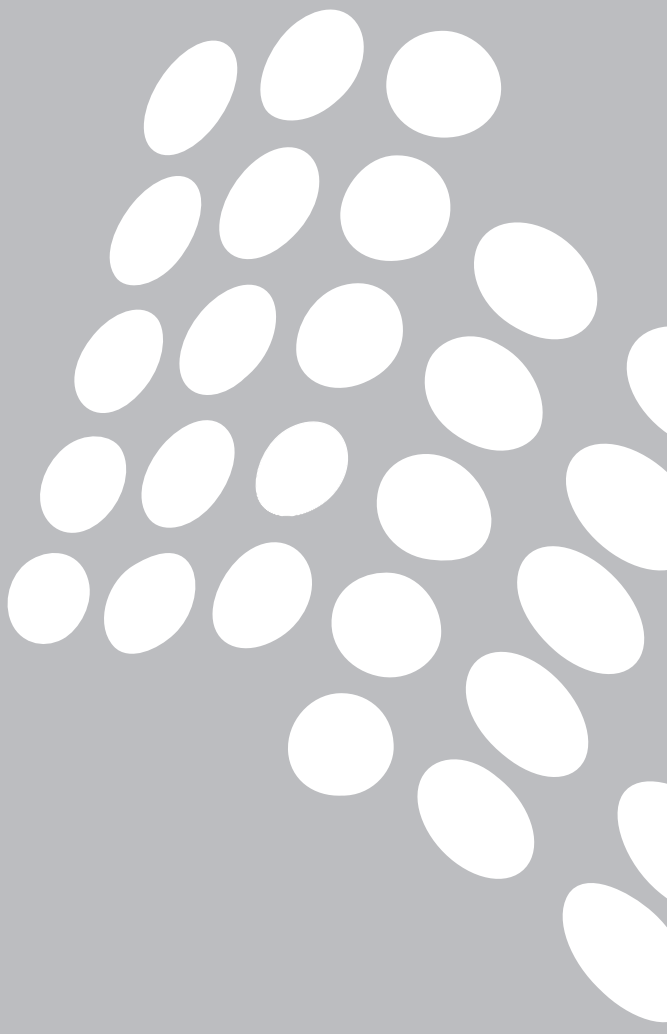
Contenido de la queja: Dificultades para acudir a las pruebas selectivas convocadas por el Servicio Murciano de Salud, para cubrir plaza de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Enfermería, por estar prevista la fecha de alumbramiento de los hijos de las promotoras de las respectivas quejas sobre esa fecha.

Analizado jurídicamente el contenido de la queja, se emitió Resolución en la que se formuló al Servicio Murciano de Salud:

Sugerencia: Sería conveniente que, por parte del Servicio Murciano de Salud, se procediera a objeti-

var, mediante disposición de carácter general, para futuros procesos selectivos y con el fin de dotar de efectividad a las disposiciones normativas contenidas en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en caso de que la aspirante a dicho proceso selectivo tenga prescrito por su facultativo el deber de guardar reposo en su domicilio, o bien, se encuentre hospitalizada con motivo de su embarazo y/o parto el día de celebración de la prueba selectiva en la que vaya a participar, el tribunal deba desplazarse necesariamente a su domicilio o centro hospitalario en que se encuentre, o bien, en caso de que ello no sea posible, se establezca un segundo llamamiento excepcional para estos casos.

Posicionamiento de la Administración: ACEPTADA.



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo V

ADMINISTRACIONES HOSTILES, ENTORPECEDORAS O NO COLABORADORAS



V.1. Introducción

Para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, recogidos en el Título I de la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, el Defensor del Pueblo podrá, en el ejercicio de su función de supervisión e investigación sobre la actividad de las administraciones públicas y demás sujetos relacionados en el artículo 13 de su ley reguladora, requerir información a la entidad afectada sobre los hechos denunciados en el escrito de queja, para lo cual concederá un plazo de un mes, que podrá ser ampliado o reducido, cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen, a juicio del Defensor (vid. artículo 23 ley 6/2008, de 20 de noviembre, cohonestado con el artículo 25 del Reglamento de 4 de diciembre de 2009, de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia).

Cuando los responsables de las entidades a los que se soliciten información, ya sean autoridades o funcionarios, incumplan el deber de aportar la misma en los plazos requeridos, obstaculizando por tanto el ejercicio de las funciones de esta Institución, podrán ser dados a conocer, haciéndose público por el defensor sus nombres, pudiendo destacarse este hecho en el informe anual a presentar ante la Asamblea Regional de Murcia y, en el caso de que persistan en su actitud hostil o entorpecedora, podrán ser objeto de un informe especial.

Al respecto, ni la ley ni el reglamento arrojan luz sobre qué ha de entenderse por actitud hostil o entorpecedora. En este sentido en la Junta de Coordinación y Régimen Interior de 26 de enero de 2010, se acordó distinguir entre administraciones hostiles, entendiendo por tales aquéllas que se nieguen frontalmente a colaborar con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, poniéndolo de manifiesto a través de comportamientos expresos y reiterados en el tiempo; administraciones entorpecedoras, calificándose así a todas aquéllas que en algún momento hayan dilatado, o dificultado la tarea atribuida al Defensor; y finalmente, administraciones no colaboradoras, incluyendo a las que o bien no contestan a las resoluciones del Defensor del Pueblo, o bien no motivan la no aceptación de las mismas.

V.2. Administraciones Hostiles y Entorpecedoras

Durante el año 2009 todos los sujetos sometidos a la supervisión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, han contestado a sus requerimientos, sin que pueda afirmarse que exista en nuestra Región alguna administración que observe un comportamiento hostil ante la Institución del Defensor del Pueblo.

Sí que se han observado dilaciones indebidas en la contestación a los requerimientos de información del Defensor del Pueblo, pero que al contar con el compromiso personal de sus responsables o bien por existir dificultades de diversa índole, no permiten incardinar estas administraciones dentro de este apartado.

En este sentido cabe recordar que, en aquellos casos en que una administración o sus autoridades o funcionarios se negara a atender las peticiones de información del Defensor del Pueblo, éste podrá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, siendo constitutiva esta conducta de delito penal tipificado y sancionado en el artículo 502 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal.

V.3. Administraciones no colaboradoras

En este apartado tal como se acordó en la Junta de Coordinación y Régimen Interior antes referida, se incluyen aquellas administraciones que no contestan a las Resoluciones emitidas por el Defensor del

Pueblo de la Región de Murcia en relación con su actuación en una determinada materia de su competencia.

El motivo de incluir estas administraciones en la categoría de "no colaboradoras" intenta evitar que la actitud silente de la administración desvirtúe las competencias de supervisión y vigilancia atribuidas a esta Institución, fácilmente soslayables de no existir la obligatoriedad legal de la entidad afectada de aceptar la resolución, comprometiéndose por tanto a su cumplimiento, o bien, no aceptarla justificando los motivos que lo impiden. Es por esta última circunstancia que se comprenderán también en este epígrafe a aquellas administraciones que no aceptan la resolución emitida por el Defensor sin fundamentación alguna o arguyendo justificaciones inadmisibles.

Asimismo, serán objeto de inclusión aquellos sujetos supervisados que si bien en un principio aceptaron la resolución del Defensor, bien inequívocamente o con una fórmula ambigua, posteriormente –en seguimiento que al efecto se lleva a cabo en cada una de las quejas aceptadas– se demuestra que no cumplen con los compromisos adquiridos.

V.3.1. Administraciones a las que les es exigible una mejor colaboración en la contestación a las resoluciones de la Institución

A. Administración Autonómica y Organismos Públicos

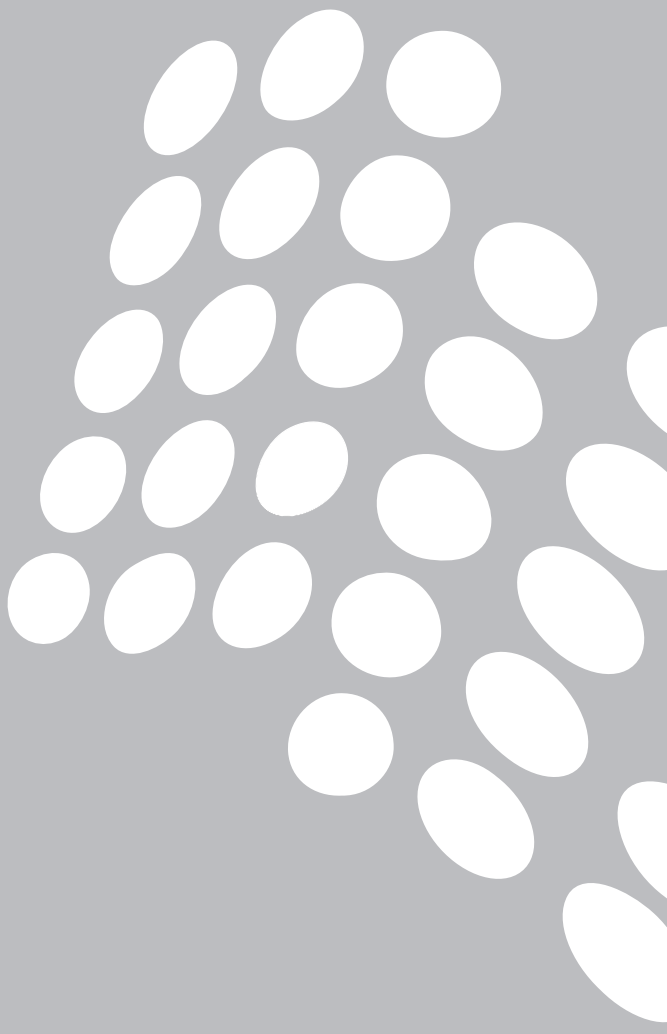
- Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
- Universidad de Murcia

B. Administración Local

- Ayuntamiento de Librilla
- Ayuntamiento de San Javier

V.3.2. Administraciones que no motivan adecuadamente lo no aceptación de nuestra resolución

- Consejería de Educación, Formación y Empleo
- Universidad de Murcia



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo VI

DIFUSIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS CIUDADANOS

VI.1. Medios de Comunicación

La Comunicación Estratégica que planificó y ha desarrollado el Defensor del Pueblo a lo largo del presente año ha de ser objeto de análisis desde dos vertientes o aspectos diferentes:

– **Vertiente externa**, con un enfoque marcadamente expansivo, ya que se establecieron dos objetivos fundamentales: Darnos a conocer a las instituciones y a la opinión pública, y de otra parte, conseguir una mayor proximidad al ciudadano, canalizando la recepción de quejas y reclamaciones.

– En cuanto a la **vertiente interna de la Comunicación,** se trataba de dar una orientación práctica que respondiese a las necesidades de trabajo de los técnicos que integran la Defensoría del Pueblo.

Para dar a conocer la Institución del Defensor del Pueblo, en el primer mes de funcionamiento se enviaron más de ciento cincuenta comunicaciones distintas a organismos de la Comunidad Autónoma, Administración del Estado, Ayuntamientos, Tribunales, Universidades, organizaciones políticas, sindicales y empresariales, medios de comunicación y colegios profesionales, sobre la creación de la Oficina del Defensor del Pueblo, su ubicación y datos de contacto.

Por lo que respecta a las visitas a los distintos municipios de la Región, además de las entrevistas con el Alcalde y su equipo municipal, se ha procedido a una toma de contacto con los medios locales en formato de rueda de prensa o entrevista en profundidad con el Defensor del Pueblo. En el ánimo de acercar la Institución a todos los ciudadanos de la Región, estos encuentros han resultado ser muy eficaces, ya que en los días consecutivos a la emisión de las entrevistas en las televisiones y radios locales se incrementaba la llegada de quejas y reclamaciones procedentes de ese mismo término municipal.

Con este mismo ánimo divulgativo se han impreso folletos y trípticos, poniéndose a disposición de diferentes establecimientos públicos, asociaciones, oficinas de consumo, etc., acercando así la figura del Defensor del Pueblo a los distintos municipios de la Región. De esta forma, se han impreso más de 10.000 folletos informativos, que la Federación de Municipios de la Región de Murcia ha distribuido entre sus integrantes en función del criterio de población.

Según detalla la ley de creación, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, para el ejercicio de sus funciones, tendrá entre otras la competencia de divulgar a través de todos los medios a su alcance y, en particular, a través de los medios de comunicación pública, la naturaleza de su trabajo, sus investigaciones y el informe anual. A tal efecto, los medios de comunicación de titularidad de la Comunidad Autónoma deberán facilitar espacios al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia cuando éste lo estime conveniente para el mejor desarrollo de sus funciones y el conocimiento público de su actividad. Dentro de esta labor de Comunicación, ha mantenido más de 50 entrevistas en los distintos medios de la Región, que a continuación se relacionan:

VI.1.1. Entrevistas con Medios de Comunicación

1. Canal 7. Sergio García. 26/11/2008
2. La Opinión. Jesús Viartola. 26/11/2008
3. El Faro. Eduardo Ribelles. 26/11/2008
4. Cadena SER. Programa "La Redonda". 26/11/2008
5. Canal 7. Antonio Peñarrubia. 28/11/2008
6. Onda Cero. Verónica González. 2/12/2008
7. Canal 7. Joaquín Azparren. 4/12/2008
8. Radio Nacional. 5/12/2008
9. La Opinión. 5/12/2008
10. La Verdad. Julián Mollejo. 15/12/2008
11. Onda Regional. Marta Ferrero. 30/12/2008
12. Europa Press. Demelsa Peñaranda. 8/1/2009

13. Punto Radio. Paco Gómez. 27/1/2009
14. Onda Regional de Lorca. 28/1/2009
15. Thader Televisión. 2/2/2009
16. La Opinión de Cartagena, Pedro García. 6/2/2009
17. Cadena Cope de Lorca. 12/2/2009
18. Tribuna La Muralla. 14/2/2009
19. La Razón. 9/2/2009
20. Canal 7. Carmen Castelo. 8/2/2008
21. La Verdad. Entrevista Impertinente de García Martínez. 26/2/2009
22. Onda Cero Cartagena. Damaris Ojeda. 4/3/2009
23. 20 Minutos. Antonio Santos. 10/3/2009
24. Murcia.com. 12/03/2009
25. Televisión Murciana. Pepe Pérez. 22/4/2009
26. RNE. José Alfonso Pérez. 27/4/2009
27. Emisora local de S. Javier. Fernando Cler. 27/4/2009
28. Radio Compañía. Manuel Rojas. 5/5/2009
29. Thader Televisión. Beatriz Rivera. 5/5/2009
30. Tele Satélite de Mazarrón. 14/5/2009
31. La Voz del Guadalentín. 14/5/2009
32. Días Alcantarilla. 21/05/2009
33. Televisión local de Jumilla. 4/6/2009
34. El Faro, Ana Lacasa. 07/06/2009
35. Rueda de prensa de presentación de la Web. 3/07/2009
36. La Verdad. Reunión con Director. 1/07/2009
37. Opinión. Reunión con Directora. 1/07/2009
38. Más FM Begastri en Cehegín. 18/09/2009
39. Televisión local de Totana. 3/11/2009
40. La Opinión. Manuel Tallón. 4/11/2009
41. Onda Regional del Valle en Blanca. 9/11/2009
42. SER de Cieza. 9/11/2009
43. Canal 7. B. Romero, programa Hemiciclo. 10/11/2009
44. La Verdad. Manuel Buitrago. 11/11/2009
45. La Opinión. María José Gil. 11/11/2009
46. Onda Regional, María José Martínez. 13/11/2009
47. Televisión Local de Totana. 17/11/2009
48. Semanario Siete Días de Yecla. 16/11/2009
49. Radio Local de Caravaca de la Cruz. 23/11/2009
50. Televisión de Caravaca de la Cruz. 23/11/2009
51. SER de Cieza. 26/11/2009
52. Televisión Local de Cieza. 26/11/2009
53. La Razón. 8/12/2009
54. Revista ANPE. 13/12/2009
55. La Razón. Miriam García. 16/12/2009

VI.1.2. Página WEB

En cumplimiento de lo que recoge la propia Ley, la Institución del Defensor del Pueblo cuenta con una Web actualizada que sirve como canal de información y comunicación. El 3 de julio de 2009 se presentó en rueda de prensa la Web de la Institución.



En el dominio www.defensor-rm.es los ciudadanos pueden contactar y dirigir sus quejas/consultas al Defensor.

En el momento actual de la evolución de la Sociedad de la Información, se hace imprescindible acudir a las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a nuestra Institución. De esta manera, hemos puesto a disposición del ciudadano un formulario sencillo de petición de información, para que nos remita todos los detalles sobre la queja que quiere tramitar.

La Administración electrónica es una oportunidad para mejorar el funcionamiento del sector público y para satisfacer con mayor eficacia las necesidades de la ciudadanía. El interesado en interponer una queja, al iniciar el procedimiento desde cual-

quier ordenador, obtiene una serie de beneficios tales como la reducción del coste burocrático, el ahorro del tiempo de desplazamiento, la promoción de la participación pública y el aumento de calidad de los servicios.

La nueva página Web también sirve para impulsar la difusión de la Institución del Defensor del Pueblo, para facilitar a los ciudadanos su conocimiento y el acceso a la misma. Para lo cual se ha diseñado un menú que da respuesta a preguntas del tipo: ¿Qué es el Defensor del Pueblo?, ¿quién es?, ¿qué hace el Defensor?, ¿cuándo interviene? o ¿cómo contactar con él?, entre otras. De esta manera, los contenidos de la Web se dividen en dos grandes apartados: el relativo a la Atención Ciudadana (Contacta con el Defensor) y a la Información sobre la Institución (Agenda del Defensor del Pueblo, notas de Prensa y titulares de actualidad). Esta área dedicada al Dossier Informativo incluye los titulares de prensa referentes a denuncias de los ciudadanos, que si bien no han generado una reclamación ante el Defensor, son asuntos susceptibles de hacerlo o de inicio de una investigación de oficio por su interés social. Como ejemplos citaremos varios titulares:

Día 16 de junio

EL PAIS.com

Expediente a cinco tribunales por dejar datos personales en la basura

laverdad.es

Denuncian a un colegio por excluir de la graduación a su hijo

Se trata de una Web en la que se puede navegar de manera fácil y sencilla, tratándose de primar en la misma los principios de cercanía al ciudadano y accesibilidad.

Como página principal se lanza un mensaje de bienvenida, porque el ciudadano debe conocer y percibir como próxima la figura del Defensor del Pueblo. Es necesario que el afectado perjudicado en alguno de sus derechos conozca a la persona que le puede ayudar a solucionar su problema con la Administración.

De otra parte, se ha optado por la utilización de un diseño sencillo para primar la accesibilidad y facilidad de navegación, de tal forma que cualquier ciudadano sin diferencia de edad, sexo o nacionalidad se pueda dirigir al Defensor del Pueblo, con las menores dificultades posibles.

El trabajo principal del Defensor del Pueblo debe ir encaminado a investigar aquellas denuncias de los ciudadanos relativas a actuaciones de las administraciones, y más concretamente a irregularidades, omisiones administrativas, negligencias, trato injusto, abuso de poder o denegación de información. Tras lo cual dirigirá las recomendaciones o sugerencias a los organismos que puedan solucionar la denuncia y en su caso para lograr una mejora de los servicios de la Administración.

Estas recomendaciones se incluyen en la Web como Resoluciones, en las que cualquier ciudadano puede conocer: el asunto que originó una queja, el procedimiento que se ha llevado a cabo de petición de información sobre el caso y las recomendaciones que el Defensor del Pueblo hace a las administraciones implicadas.

Atendiendo al contenido de los expedientes que tramita el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, debe contemplarse, de manera preferente, todo lo referente a la protección de datos de carácter personal atendiendo a lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La labor de comunicación institucional ha estado ligada continuamente a la agenda del Defensor. De esta forma se ha informado puntualmente mediante nota de prensa y envío de imágenes, de los contactos que éste ha mantenido con diversos colectivos, interesados en solicitar el amparo de la Institución o en dar a conocer su actividad y objetivos.

A modo de ejemplo señalar, el encuentro con representantes diplomáticos extranjeros en la Región de Murcia, acompañadas del Decano del Cuerpo Consular; con el Comité Provincial del Ministerio de Medio Ambiente, con el Comité Inter Hospitales de los Testigos de Jehová o con los miembros del Foro de la Familia.

En este mismo sentido, hay que mencionar las reuniones que se han mantenido con los presidentes de distintos colegios profesionales de la Región, de las que también se ha enviado a los medios de comunicación cumplida información. En la relación de este tipo de encuentros podemos mencionar la reunión con decano Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, presidente del Colegio Oficial de ATS y el decano del Colegio de Abogados de la Región de Murcia.

De otra parte, también se ha mandado a los medios de comunicación información regular de las visitas que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha realizado a Instituciones y Organismos de fuera de la Región. Como ejemplo, la visita a la sede del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, realizada el 14 de octubre de 2009.

En cuanto a la Información que ha generado la Oficina de Prensa, se han enviado un total de 90 comunicados, que incluyen, convocatorias y notas de prensa. Por su notoriedad hay que mencionar aquéllas que hacen referencia a la tramitación de las resoluciones. La temática de diversos asuntos abordados en la resolución de quejas y el número de reclamaciones recibidas ha sido el tema que con más interés han demandado los Medios de Comunicación.

VI.2. Colaboraciones con colectivos, asociaciones y agentes sociales

VI.2.1. Reuniones con colectivos sociales

En este punto de la exposición no podemos perder de vista que la figura del Defensor del Pueblo tiene como objetivo prioritario garantizar la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, intensificar el control de las instituciones y multiplicar las garantías. Pues bien, en cumplimiento de esta tarea, se ha dedicado una especial atención a dar a conocer estos objetivos de protección entre los colectivos más desfavorecidos, instrumentando esta Institución como canal de transmisión de la voz y ayuda del eslabón más débil de la sociedad.

De este modo, en este primer año de funcionamiento, una de las preocupaciones fundamentales ha sido la protección de la infancia, los colectivos de discapacitados, minorías, víctimas de delitos o personas afectadas de trastornos mentales, entre otros.

El Defensor del Pueblo se entrevistó con el presidente de UNICEF en Murcia, Francisco Artés Calero. Tras la reunión, Ruiz Abellán declaró que "los dos organismos colaborarán a partir de ahora en los asuntos que les son comunes". El portavoz de UNICEF ha solicitado que, "dentro de las competencias del Defensor, se tenga una especial dedicación a la protección de los derechos de los menores no acompañados y que se profundice en la problemática de la infancia en la Región".

En este ánimo de aproximar la labor del Defensor del Pueblo a los colectivos más sensibles se incluye la conferencia que el Defensor del Pueblo pronunció ante las entidades que integran la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica o la reunión con la presidenta de Famdif, Carmen Gil, y la participación como ponente, el pasado mes de julio, de la presentación del "Mapa de vivienda y comunidad gitana, en España y en la Región de Murcia 2007". En su intervención recordó que una de las primeras reuniones que mantuvo como Defensor del Pueblo de la Región de Murcia fue con el Responsable Territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Jesús Salmerón, y reiteró su compromiso personal y también institucional con

las demandas y con los objetivos de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana desde el reconocimiento de su identidad cultural, avanzando en el modelo establecido de crear una base social más amplia, involucrando a sectores comprometidos y solidarios con la comunidad gitana, y abriendo la entidad a otros agentes sociales.

Al mismo tiempo tuvo encuentros con el presidente del Secretariado Gitano, o con la Junta de CEIS Integra, que aglutina a Columbares, La Huertecica, Fundown, Rascasa y Asprosocu y con la Asociación de Personas con Enfermedad Mental AFESMO.

En la relación de asuntos que fueron prioritarios en su agenda también está la asistencia a la inauguración del Centro de Día para la Atención de Personas con Anorexia Nerviosa y Bulimia de ADAMER, su visita al Centro Penitenciario de Sangonera La Verde o la reunión con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las visitas a los pisos de acogida de la Fundación "Mundo Nuevo", dedicada a la atención de menores con problemas en su entorno familiar, o su encuentro con los miembros de la Fundación de Victimología.

También se ha interesado por las demandas de la Fundación Regional Murciana de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de Personalidad ARMAI-TLP. Intervino como ponente en la inauguración de las jornadas de portadores de VIH y asistió a la inauguración del V Congreso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Con este interés por distintas problemáticas sociales se entrevistó con los miembros de la Fundación Diagrama y mantuvo reuniones con los miembros de AMUVITE, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia.

Por la importancia de la situación de crisis económica que atraviesa el sector agrícola, mantuvo una reunión con secretarios generales de las Agrupaciones Agrarias, quienes vinieron a solicitar el amparo del Defensor del Pueblo ante el peligro de caducidad del trasvase Tajo-Segura.

En cuanto a la supervisión de los servicios locales, Ruiz Abellán ha mostrado su preocupación por los problemas que afectan a la Federaciones Vecinales, sobre todo en aquellos casos en que la problemática está relacionada con temas tan recurrentes como urbanismo o contaminación acústica. Por este motivo se reunió con la Asociación de Vecinos de San Lorenzo y con la Junta Directiva de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia (CAVERMUR).

VI.2.2. Reuniones con patronal y sindicatos

En cuanto a las relaciones con patronal y sindicatos, el Defensor del Pueblo asistió a congresos, encuentros y participó en distintas reuniones y foros de trabajo de ámbito económico y laboral. En el mes de enero de 2009 asistió al Congreso regional de Comisiones Obreras (CC.OO.), semanas más tarde se reunió con su secretario general, Daniel Bueno.

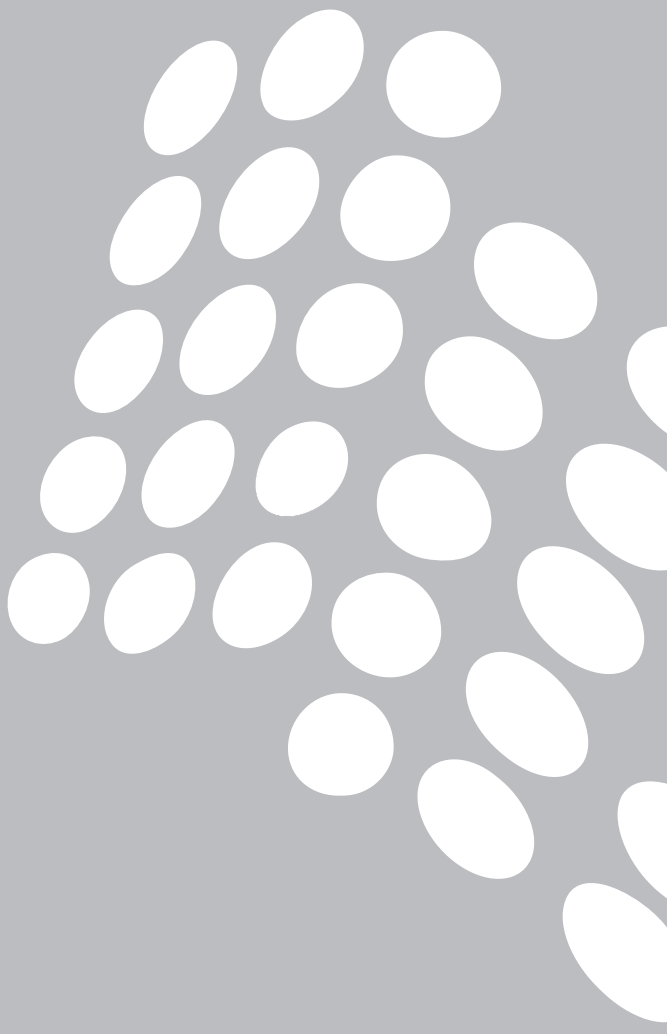
Mantuvo un almuerzo de trabajo con la Junta Directiva del Círculo de Economía y asistió a la entrega de los Premios Mercurio 2009. También se entrevistó con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel del Toro Soto, y posteriormente con el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, Pedro García-Balibrea. En el mes de octubre, Ruiz Abellán asistió a la apertura del XII Congreso Regional de UGT Región de Murcia, con el lema "UGT Garantía de Progreso Social", también se entrevistó con el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), Juan Antonio Muñoz.

VI.3. Resoluciones del Defensor del Pueblo publicadas en prensa

– Pintadas y Grafittis en la ciudad de Murcia. Publicado el 8 de diciembre de

2009 en: La Verdad, La Opinión, El Faro, La Razón.

– Problemas de parcelación en Torre Pacheco. Publicado el 8 de diciembre de 2009 en La Razón.
– Supresión de las líneas de autobús. Publicado el 4 de diciembre de 2009 en La Opinión.
– Programa de prevención de cáncer de mama. Publicado el 14 de noviembre de 2009 en Europa Press.
– Queja de Oficio sobre el Colegio Piripao de Cartagena. Publicado en La Opinión el 12 de noviembre de 2009.
– Queja de Oficio por las actuaciones del alcalde de Mazarrón contra los vecinos que le pitaron. Publicado en La Opinión el 12 de noviembre de 2009.



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo VII RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

VII.1. Introducción

Desde que tomara posesión de su cargo, el pasado 2 de diciembre de 2008, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia inició una intensa actividad institucional. El desglose de las reuniones que Ruiz Abellán ha mantenido para dar a conocer la Institución y establecer una colaboración con los distintos organismos oficiales incluye más de 200 entrevistas con miembros de: **Asamblea Regional, Comunidad Autónoma, Delegación del Gobierno y órganos dependientes de la Administración Estatal, organismos judiciales, Federación de Municipios de la Región de Murcia, Ayuntamientos, Defensor del Pueblo de España y otros comisionados autonómicos, Órganos consultivos de la Comunidad Autónoma, Universidades e instituciones académicas, colectivos sociales, medios de Comunicación, patronal y sindicatos,** en muchas ocasiones acompañado por el Adjunto, Raimundo Benzal Román y, en su caso, por los demás componentes de la Junta de Coordinación: el Secretario General Joaquín Rocamora Manteca y la Asesora Jefe Esther Arce Olmos.

VII.2. Asamblea Regional

Tal y como detalla el artículo 38 de la Ley, "las relaciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia con la Asamblea Regional se producirán a través de su Presidente", el 16 de diciembre de 2008 se celebró la reunión con el presidente de Cámara Legislativa, Francisco Celdrán Vidal. El 22 de diciembre de 2008 el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se reunió con el presidente de la Comisión Parlamentaria de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional, Martín Quiñonero. Tras la reunión, Ruiz Abellán declaró que "los dos organismos colaborarán a partir de ahora en la tramitación y resolución de las quejas, nuestra intención es responder con rapidez a las peticiones realizadas".

Siguiendo el detalle de las relaciones con la Cámara Parlamentaria, el 30 de marzo de 2009, el Defensor del Pueblo compareció, a petición propia, ante la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. En su intervención, Ruiz Abellán detalló los cien primeros días de funcionamiento de la Institución. Esta labor se había centrado en tres áreas de trabajo muy distintas: crear la infraestructura de la Oficina, atender las quejas de los ciudadanos e iniciar una red de relaciones institucionales con organismos y colectivos sociales, proyectando la Institución, así como participar en las actividades de otras Defensorías españolas.

En su intervención, informó que en los tres primeros meses de funcionamiento de la Institución se había recibido un total de 154 peticiones, solicitudes de información y quejas. En cuanto a la distribución porcentual por materias de las solicitudes recibidas, explicó que "el 18% correspondía a asuntos municipales, el 13% se referían a prestaciones sociales y un 11% tienen que ver con Educación". En cuanto a la tramitación de las mismas, un 48% del total se habían finalizado, mientras que las demás estaban en distintas fases de su procedimiento.

Para terminar este bloque, hay que mencionar que el pasado 1 de junio, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia firmó en la Asamblea Regional un convenio de colaboración con el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica Herzog. Como Alto Comisionado de la Cámara, el marco de la rúbrica tenía que ser la Asamblea Regional, en presencia de su presidente, D. Francisco Celdrán Vidal.

Tras la firma, Ruiz Abellán declaró que el acuerdo serviría para coordinar la actuación de las dos instituciones, es el marco legal para formalizar el intercambio de información entre las dos Defensorías del Pueblo y coordinar las competencias de cada una de ellas. El convenio nació con la voluntad de reforzar al máximo el principio constitucional de eficacia en la gestión de las quejas, en beneficio de los ciudadanos que acuden a ambas Instituciones, evitando al mismo tiempo una even-

tual duplicidad de actuaciones que dificulte la protección efectiva de los derechos.

VII.3. Comunidad Autónoma

Tal y como detalla el artículo 39 de la Ley, las relaciones del Defensor del Pueblo con el Consejo de Gobierno y su Presidente se llevan a cabo a través de este último.

En cumplimiento de este articulado, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se entrevistó el 5 de diciembre de 2008 con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en lo que fue su primera visita institucional. Este primer encuentro sería determinante para marcar la tónica de estrecha colaboración que ha mantenido en toda su andadura la Institución del Defensor del Pueblo y el Gobierno Regional.

Asimismo, el apartado 2 del citado artículo 39, detalla que "las relaciones del Defensor del Pueblo con el resto de la Administración de la Región de Murcia se llevarán a cabo por conducto de quien ostente la titularidad de las distintas consejerías". A lo largo de todo el primer año de funcionamiento, las relaciones con el Ejecutivo Autonómico han sido constantes y fluidas, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el papel de supervisión que el Defensor desempeña sobre la Administración Regional. Aquí hay que destacar la colaboración que el Ejecutivo ha prestado en todo momento en el desempeño del trabajo del Defensor del Pueblo.

El 12 de enero, Ruiz Abellán se entrevistó con la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García Martínez. Dentro de esta ronda de contactos con las distintas Consejerías del Gobierno regional, el 20 de enero se reunía con la consejera de Sanidad y Consumo, María Ángeles Palacios Sánchez.

Unos días después, el 2 de febrero, se entrevistó con la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte García. El Defensor del Pueblo adelantó en su comparecencia ante los medios de comunicación que dentro de sus objetivos de trabajo resultaba prioritario aproximar la institución a todos los ciudadanos, "para lo que se están redactando y se firmarán próximamente los convenios de colaboración que servirán para aprovechar todos los instrumentos con los que actualmente cuenta la administración para la recepción de documentos, como la ventanilla única, el registro de entrada de los ayuntamientos, las OMIC, sistemas de video-conferencia etc., para facilitar también al ciudadano todas las posibilidades de comunicación con la oficina de la Institución".

Dentro de lo que sería un objetivo estratégico, se acordó firmar con la Consejería de Presidencia un convenio de colaboración para que los ciudadanos puedan utilizar las 49 ventanillas únicas, presentando en las mismas para su registro, la documentación correspondiente a la queja a tramitar. Este convenio se firmó unos meses después, concretamente el 23 de abril.

Las relaciones institucionales del Defensor del Pueblo con el Ejecutivo Regional, se completan con la reunión que mantuvo el 18 de febrero de 2009 con el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana García. Las relaciones con este organismo también han sido frecuentes, sobre todo por ser competente en materias que han ocasionado distintas solicitudes por parte de los ciudadanos. A propósito de esta área de trabajo, el 4 de junio se entrevistó con la directora general de Familia y Menor, Laura Muñoz, y a lo largo de todo el año ha visitado distintas residencias de personas mayores de Murcia, Lorca y El Palmar, acompañado por la directora general de Personas Mayores, Paloma Recio. Así mismo, en el último mes del año, acompañado de Laura Muñoz, Ruiz Abellán visitó el Módulo de Media y Larga Estancia para Menores y el centro de protección de menores Cardenal Belluga.

VII.4. Órganos consultivos de la Comunidad Autónoma

Por lo que respecta a las reuniones mantenidas con los distintos órganos consultivos de la Comunidad Autónoma, el 26 de enero de 2009 el Defensor del Pueblo se reunió con el presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Mariano García Canales. En la relación que mantiene con la institución, asistió a la presentación de la Memoria de Actividades correspondiente al año 2008 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y a la inauguración de su nueva sede, celebrada el 25 de noviembre de 2009.

La relación con otros órganos consultivos también se extiende a los encuentros mantenidos con el presidente de Consejo de la Juventud y con el presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Antonio Reverte Navarro.

VII.5. Delegación del Gobierno y órganos dependientes de la Administración Estatal

Las relaciones del Defensor de Pueblo con los órganos representantes de la Administración Estatal se iniciaron con el encuentro con el Delegado del Gobierno en la Región, Rafael González Tovar, con el que se reunió el 8 de enero de 2009, a los pocos días de haber tomado posesión.

En cuanto al resto de instituciones dependientes de la Administración Central, también habría que mencionar las relaciones con la Administración de Justicia. La Ley especifica que cuando el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia reciba quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en la Región de Murcia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de hacer referencia expresa a ellas en el informe anual que deberá elevar a la Asamblea Regional de Murcia.

Las relaciones con los órganos judiciales se iniciaron el 22 de abril de 2009. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se entrevistó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, y el secretario de Gobierno, Javier Parra García. Tras el encuentro, el Defensor declaró que se había acordado redactar un protocolo de actuación conjunta de ambas Instituciones, que servirá para aumentar la eficacia y agilizar los trámites en los casos en los que los ciudadanos inicien consultas sobre la Administración de Justicia. El plan de actuación detallará de manera reglada los trámites del procedimiento.

Por su parte, el presidente del TSJ también mostró su satisfacción por la reunión, que consideró positiva y en este sentido declaró que "teníamos la necesidad de establecer un cauce de comunicación entre las dos instituciones. Este tipo de encuentros protocolarios tiene que servir para encontrar nuevas fórmulas de protección de los derechos y libertades de los administrados". En este sentido se refirió a medidas concretas, como analizar el tratamiento documental que se le da a cada una de las consultas sobre Justicia de los ciudadanos que se dirigen a la Oficina del Defensor del Pueblo.

En esta línea de colaboración también se enmarca el encuentro con el fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel López Bernal. El 28 de septiembre, Ruiz Abellán asistió al acto solemne de inauguración del Año Judicial.

VII.6. Federación de Municipios de la Región de Murcia

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia pretendió desde el inicio de su labor aproximar la Institución a todos los ciudadanos, dándola a conocer, detallando cuáles son sus competencias y cuál es el funcionamiento de la misma. En este sentido, ha sido fundamental la colaboración que se ha mantenido con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, para aproximar su labor a todos los puntos de la Región.

La labor divulgativa ha sido enormemente expansiva hacia todos los municipios de la Región, para tratar de explicar de manera sencilla cómo es el procedimiento para interponer una queja y las situaciones en las que se puede intervenir para defender los derechos de los ciudadanos.

Esta estrategia se inicia con la firma con el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Miguel Ángel Cámara, de un convenio de colaboración en materia de atención ciudadana. En virtud del acuerdo, los ciudadanos de cualquier municipio de la Región podrán acceder a la Institución a través de los distintos sistemas técnicos y de gestión administrativa existentes en los ayuntamientos, que permitirán la recogida y envío de sus quejas/sugerencias con destino al Defensor del Pueblo.

Según explicó en rueda de prensa el Defensor, "nos hemos propuesto aprovechar todos los recursos e instrumentos posibles, optimizar los canales que ya tiene en marcha la Administración y que se han demostrado eficaces como cauce de tramitación, y en este caso se trata de recepcionar las consultas y reclamaciones a través del registro municipal de los ayuntamientos".

El articulado del convenio especifica que se proporcionará al personal de los Registros Generales y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) la formación necesaria para el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Ayuntamientos.

Este acuerdo aporta ventajas de cara al administrado, tales como agilizar el trámite de inicio de expediente y computar los plazos para la tramitación de las quejas y demás escritos presentados en los Registros Generales municipales con destino al Defensor del Pueblo, desde la fecha de la entrada en el Registro de esta Institución.

En el marco de colaboración, la Federación de Municipios también impulsará la difusión de la Institución del Defensor del Pueblo, para facilitar a los ciudadanos su conocimiento y el acceso a la misma. Para lo cual se distribuirá más de 10.000 folletos informativos que dan respuesta a preguntas del tipo: ¿Qué es el Defensor del Pueblo?, ¿quién es?, ¿qué hace el Defensor?, ¿cuándo interviene? o ¿cómo contactar con él?, entre otras.

Al margen del convenio marco, al que se han ido adhiriendo los distintos municipios, el Defensor del Pueblo ha iniciado un recorrido personal por todos los municipios de la Región. En esta ronda de encuentros se ha propuesto dar a conocer las competencias de la Institución que representa. Hasta la fecha de terminación de este informe, la relación de Municipios visitados es la siguiente:

1. Murcia - 8/1/2009
2. Lorca - 28/1/2009
3. Cartagena - 6/2/2009
4. La Unión - 12/2/2009
5. Archena - 16/3/2009
6. Águilas - 25/3/2009
7. San Pedro - 2/4/2009
8. Puerto Lumbreras - 20/4/2009
9. San Javier - 27/4/2009
10. Molina de Segura - 6/5/2009
11. Mazarrón - 14/5/2009
12. Alcantarilla - 21/5/2009
13. Jumilla - 4/6/2009
14. Cehegín - 18/9/2009
15. Torre Pacheco - 9/10/2009
16. Totana - 3/11/2009
17. Blanca - 9/11/2009
18. Yecla - 16/11/2009
19. Caravaca de la Cruz - 23/11/2009
20. Cieza - 26/11/2009
21. Fuente Álamo - 17/12/2009

VII.7. Universidades y Órganos Académicos

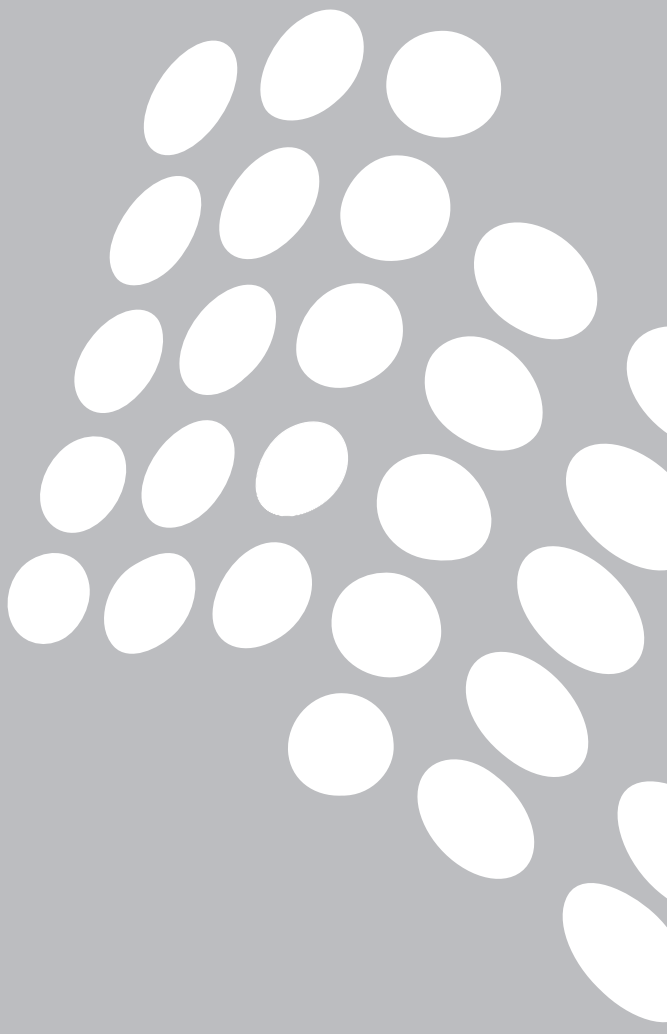
Especial mención merece la labor divulgativa del Defensor del Pueblo en las distintas Universidades de la Región de Murcia.

El 7 de enero de 2009 se reunió con el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho. Éste sería el primero de una larga serie de encuentros que ha mantenido en el desempeño de su cargo. En el mes de diciembre, la Universidad de Murcia y la institución del Defensor del Pueblo de la Región firmaron, en la sede del Rectorado, un acuerdo para colaborar en materias de carácter académico, asistencial, cultural y de investigación que sean de interés para la sociedad murciana. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia explicó en el acto de la firma, que "se cooperará en todas las materias relacionadas con la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales".

El 12 de marzo se entrevistó con el presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza. En esta misma universidad, el Defensor pronunció la conferencia inaugural de la reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios. La especial atención que merece el sector de la Enseñanza, dentro de las competencias del Defensor, también le ha llevado a otros foros académicos, pronunciando conferencias en la Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad de Murcia o a los Alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia.

La vigilancia de los derechos fundamentales en el ámbito educativo ha motivado reuniones con los miembros del Observatorio para la Convivencia Escolar, con el presidente de la Asociación Regional Empresarial para la Defensa de la Enseñanza Privada, su asistencia a la reunión anual de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y a la firma del Pacto Social por la Educación. Así como a mantener distintas entrevistas con Juntas directivas de centros, preocupados por temáticas específicas, como la Junta Directiva del IES Almirante Bastarreche de Cartagena o la Junta Directiva del Colegio Antonio Nebrija, de Murcia.

Por otra parte, su afán por dar a conocer la figura del Defensor también le ha llevado hasta los Institutos de Educación Secundaria. Con motivo del Día de la Constitución Española, una delegación que encabezó el Defensor del Pueblo explicó en distintos Institutos de Educación Secundaria el papel de la Institución en la protección de los derechos recogidos en la Carta Magna de 1978. Ruiz Abellán puso en marcha esta iniciativa, pronunciando en el IES J. Martínez Ruiz "Azorín", de Yecla, y en el IES "Licenciado Cascales" de Murcia sendas conferencias, tituladas "El Defensor del Pueblo en la Constitución Española: Funciones y Competencias".



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo VIII RELACIONES INSTITUCIONALES CON OTRAS INSTITUCIONES AFINES

VIII.1. Relaciones con el Defensor del Pueblo del Estado y Comisionados análogos de otras Comunidades Autónomas

En cumplimiento de las previsiones de su ley reguladora, en cuya virtud, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia "cooperará con el Defensor del Pueblo del Estado y coordinará con él sus funciones", el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha mantenido, desde su inicio, una relación muy estrecha con el Defensor del Pueblo de España.

El día 21 de enero asistió a la imposición de la Insignia Oficial de la Legión de Honor de Francia al Defensor del Pueblo de España. Antes de la recepción, Ruiz Abellán se reunió con sus homólogos de La Rioja y Navarra, para analizar los asuntos comunes a las tres instituciones.

Cómo se ha explicado en el apartado anterior (De las relaciones con la Asamblea Regional), el día 1 de junio se firmaba el acuerdo con el Defensor del Pueblo de España para coordinar la actuación de las dos instituciones. Éste es pues el marco legal para formalizar el intercambio de información entre las dos Defensorías del Pueblo y las competencias de cada una de ellas. No se puede perder de vista que estas figuras afines no están sujetas al principio de jerarquía, la legislación es extremadamente respetuosa en este sentido y estipula una fórmula de cooperación que, a nuestros efectos, quedó establecida por la Ley de 6 de noviembre de 1985, reguladora de estas relaciones. Una cooperación que se refiere a todo aquello que afecte a materias sobre las cuales se atribuyan competencias a cada Comunidad Autónoma en la Constitución y en el respectivo Estatuto de Autonomía.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de acuerdo a su Ley de creación y en cumplimiento de la misión que tiene encomendada, "podrá dirigirse a toda clase de autoridades, organismos, funcionarios y dependencias de cualquier clase de Administración con sede en la Comunidad Autónoma, a efectos de solicitar de ellas la información o ayuda que puedan resultar necesarias para el desempeño de las funciones que le atribuye su ley reguladora".

En el ámbito de esta cooperación, Ruiz Abellán "dará traslado al Defensor del Pueblo de España de las quejas que se reciban sobre la actuación de la Administración Pública del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia. Así mismo, el Defensor del Pueblo de España podrá solicitar la cooperación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia para la investigación de las quejas que reciba relativas a órganos periféricos de la Administración General del Estado con sede en Murcia, de la Administración de la Región de Murcia y de las Administraciones locales".

El articulado del convenio especifica otras formas de colaboración, entre las que destacan que "el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia podrá proponer al Defensor del Pueblo de España la presentación de recursos de inconstitucionalidad y amparo respecto de las materias que haya conocido en el uso de sus competencias".

De igual forma, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia también "podrá solicitar del Defensor del Pueblo de España que, sugiera la creación o modificación de aquellas normas que pudieran tener una incidencia especial en la mejora de la protección y defensa de los derechos constitucionales".

El convenio fija su duración, las materias concretas a las que afectan, las facultades que podrá ejercer el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y el régimen de la relación con el Defensor del Pueblo del Estado.

En su primer viaje como Defensor del Pueblo de la Región de Murcia participó en Barcelona, en la lectura conjunta de la Declaración por el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, el 9

de diciembre. Al día siguiente asistiría a la reunión de titulares de Defensoría del Pueblo de toda España, con motivo de los actos de Aniversario del Sindic.

El día 23 de diciembre de 2008, cuando hacía tan solo 20 días que Ruiz Abellán había tomado posesión de su cargo, se entrevistó con el Sindic de Greugues de la Comunidad Valenciana, Carlos Morenilla, quien cedió el programa y soporte de Software necesario para la tramitación de las quejas.

Por otra parte, son numerosas las jornadas en las que ha participado el Defensor del Pueblo con el resto de Comisionados autonómicos. Las ponencias y mesas redondas celebradas a lo largo del año han servido para debatir el papel de los ombudsman en la escena institucional, su capacidad de investigación y acceso a los documentos administrativos; así como la promoción de la democracia y los derechos humanos.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia participa en las actividades que permanentemente realizan conjuntamente todas las Defensorías españolas tanto en presencia de actos oficiales, como de intercambio de información y experiencias. Como muestra, es de reseñar que el 22 de enero de 2009 se entrevistó con su homólogo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano. El 6 de marzo asistió a la toma de posesión de José Cholbi Diego como Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y a primeros del mes de abril se reuniría de nuevo con él. Según explicó "la reunión de los equipos jurídicos y las secretarías generales de la dos instituciones servirá para establecer cauces de colaboración, coordinación e intercambio de información. Este trabajo conjunto repercutirá en la mejora de nuestro sistema de atención al público. Nuestra intención es poner en común con otras Defensorías conocimientos teóricos y experiencias prácticas para la mejora permanente del funcionamiento de nuestra Institución que contribuya a la mejor atención y ayuda de los ciudadanos".

El Defensor también participó en Vitoria en los actos conmemorativos del XX Aniversario de creación del la institución del Ararteko y los actos conmemorativos del XXV Aniversario de la creación del Valedor do Pobo, celebrados en el mes de junio de 2009 en Santiago de Compostela.

En cuanto a la participación en seminarios y jornadas específicas de comisionados autonómicos: Ruiz Abellán asistió, el 7 de octubre de 2009 a las jornadas sobre "La tutela del Derecho a la Protección de Datos de Carácter personal", que organizó el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.

VIII.2. Jornadas de Coordinación de Defensores: Sevilla

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia participó, así mismo, en las XXIV jornadas de coordinación de los catorce defensores del Pueblo que hay en España, que se celebraron en Sevilla bajo el título: "La protección de los derechos de la ciudadanía derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías (TICs)". Cuyas principales conclusiones se adjuntan:

Conclusiones de las Jornadas

El siglo XXI ha puesto en evidencia el valor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Su capacidad de expansión e influencia ha acuñado el término de la "Sociedad de la Información y del Conocimiento" para hacer referencia a la importancia que ostenta en nuestro sistema económico y cultural la creación, distribución y uso de la información.

A la vez, las TIC se han convertido en un instrumento esencial para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y en un medio a través del cual los poderes públicos deben mejorar notablemente la eficacia de su actuación dirigida a garantizar la efectividad de los mismos.

La misma importancia de estas tecnologías y su empleo generalizado las ha transformado en obje-

to de derechos de la ciudadanía que ocupan un papel creciente en las demandas de todas las personas ante los poderes públicos.

El acceso y pleno disfrute de las TIC va a definir la evolución, en diversos aspectos, de las sociedades y a condicionar las relaciones de las personas con las organizaciones administrativas y políticas. Su carácter de herramienta para el acceso a servicios esenciales hace imprescindible su utilización en la interrelación pública.

Conscientes de esta realidad, las instituciones de los Defensores del Pueblo han reflexionado conjuntamente con distintos agentes sociales sobre la incidencia que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la esfera de derechos de la ciudadanía, desde la perspectiva de acceso a éstas en condiciones de igualdad, el grado de desarrollo de la e-administración en sus relaciones con los ciudadanos y ciudadanas, así como la oferta prestacional que se realiza por parte de las administraciones públicas a través de las TIC para avanzar en la plena efectividad de los derechos de contenido social.

A la vez, como integrantes del sector público, las Defensorías del Pueblo han tratado de la aplicación de las nuevas tecnologías en su ámbito de actuación a fin de ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio público y, al mismo tiempo, alcanzar mayores cotas de eficiencia en su funcionamiento interno.
Después de las aportaciones de las Instituciones participantes y de los debates celebrados en las sesiones de trabajo, se han elaborado las siguientes conclusiones:

1. Los derechos de la ciudadanía en el acceso y uso de las TIC.

1.1. El acceso y utilización de las nuevas tecnologías constituye, a nuestro juicio, un derecho en sí mismo considerado, que como tal debe ser reconocido y garantizado de manera efectiva por los poderes públicos –como de hecho lo está en distintos Estatutos de Autonomía–, ya que representa, además, un medio imprescindible para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y su incorporación a la vida social, económica y cultural. Toda limitación en el acceso y utilización de las nuevas tecnologías condiciona gravemente el efectivo disfrute de los derechos ciudadanos y su plena participación en la sociedad; de ahí que nos preocupe, muy seriamente, la brecha digital que ya afecta, de manera importante, a distintos colectivos a la hora de acceder en condiciones de igualdad a la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

En este sentido, hay que señalar el reciente anuncio por parte del Gobierno de incluir el acceso a Internet de 1 megabit por segundo, como uno de los servicios universales que deben prestar las telecos a precio asequible.

"A partir del 1 de enero de 2011 cualquier ciudadano que lo solicite, independientemente de su lugar de residencia, tendrá derecho a contar con un acceso a Internet con una velocidad mínima de 1 megabit por segundo (Mbps). El Gobierno ha decidido convertir la banda ancha en un derecho, incluyéndola dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones, el conjunto de prestaciones básicas que tienen que ser aseguradas en todo el territorio, que ahora sólo contempla tener una línea fija, derecho a la guía telefónica, cabinas públicas y acceso para discapacitados".

1.2. Los poderes públicos, en todo caso, deben velar porque las innovaciones tecnológicas puedan ser disfrutadas por toda la ciudadanía y evitar la creación de nuevas brechas digitales por una desigual incorporación de sectores de la sociedad a su disponibilidad. En particular, el proceso de implantación de la TDT, como acceso a vías de comunicación e interacción de las personas será un indicador del grado de compromiso y respuesta efectiva a los valores de igualad en el disfrute universal y generalizado de esta tecnología de uso doméstico.

1.3. Con el dinamismo y exigencias funcionales que demandan las nuevas tecnologías, se deben regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a las TIC, por lo que se precisa una definición actualizada del "servicio universal de telecomunicaciones". Las autoridades nacionales pueden garantizar un contenido mayor de derechos que el previsto en la norma europea. En este sentido, las Defensorías del Pueblo consideran imprescindible que el acceso universal a la banda ancha a un precio asequible se considere como un requisito imprescindible para atender las necesidades funcionales de los usuarios de las TIC.

1.4. El reciente proceso de reformas de los distintos Estatutos de Autonomía, evidencia que las Comunidades Autónomas van a desempeñar un papel muy importante en la protección de los derechos de la ciudadanía relacionados con la Sociedad de la Información y del Conocimiento y la protección de los derechos de consumidores y usuarios. En coherencia con ello, sin perjuicio de las competencias estatales, se deben arbitrar las medidas legales y técnicas para que, en el marco de las Comunidades Autónomas, las Defensorías puedan ejercer la defensa de los derechos de los usuarios de las TIC en su ámbito territorial.

1.5. La intervención de operadoras de servicios es imprescindible para acceder e interactuar en el seno de la Sociedad de la Información. Ahora bien, de manera compatible con el principio de libre competencia y el respeto a los acuerdos contractuales, los poderes públicos no pueden obviar la posición de superioridad de hecho en la que se encuentran tales operadoras en sus relaciones con los usuarios. Por ello, la importancia adquirida de las TIC debe ir pareja a la respuesta de los poderes públicos mediante mecanismos públicos de auditoría y supervisión eficaces para la evaluación de la idoneidad de los servicios que ofertan los operadores. Del mismo modo, será esencial potenciar la función de inspección y tutela de los derechos de los consumidores y usuarios frente a las entidades prestadores de estos servicios, disponiendo de medidas ágiles de mediación y solución de conflictos, a la vez que estableciendo un régimen sancionador efectivo que disuada a las operadoras de determinadas prácticas que utilizan de manera reiterada vulnerando los derechos de los usuarios de sus servicios.

1.6. Los poderes públicos deberán garantizar la ciber-seguridad y velar por la defensa de los derechos de las personas a su privacidad e intimidad, y dotarse de los medios necesarios para perseguir penalmente aquellas conductas en la red tipificadas como delito.

1.7. Los poderes públicos tienen el deber de liderar un modelo prestacional de servicios públicos a través de las TIC, además de impulsar la incorporación de la sociedad civil a la información y el conocimiento en un escenario irreversiblemente global

2. Las TIC como instrumentos de garantía y efectividad de los derechos sociales.

El desarrollo que están alcanzando las TIC y la potencialidad real que tiene su aplicación práctica para favorecer el ejercicio de los derechos sociales, les confiere un papel destacado en este ámbito constituyendo un instrumento decisivo para la extensión del Estado del Bienestar. Las nuevas tecnologías contribuyen de modo decisivo a la efectividad de los derechos sociales incidiendo de manera directa en la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables de nuestra sociedad a la vez que permiten un grado de participación social más amplio e igualitario.

2.1. Con respecto a la aplicación de las TIC en el ámbito educativo:

2.1.1. La Administración debe ser el verdadero agente de cambio en la actualización del nuevo modelo educativo, realizando las acciones de formación y alfabetización digital que permitan a los potenciales usuarios conocer la utilidad de los

desarrollos alcanzados, compartir conocimientos, y dándoles participación a nivel de crítica y propuesta, en pos de una mejor adaptación de los contenidos por vía participativa. Las Administraciones educativas deben fomentar la creación de órganos responsables en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que sirvan de referencia, lideren el cambio tecnológico, y a los que se pueda acudir para proponer, asesorarse y solicitar medios en este ámbito. Una de las funciones de estos órganos debe ser la de arbitrar un sistema de evaluación y estudio continuo del avance y resultados del proceso de implantación de las TIC en este ámbito.

2.1.2. Es necesario formar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías desde el principio de su preparación, y también de forma permanente, para que conozcan los nuevos avances y puedan liderar el proceso de implantación en la enseñanza. Los sistemas de formación que se arbitren han de ser complementados con métodos de valoración de los conocimientos adquiridos a la hora de puntuar los méritos de cada profesor, en la carrera administrativa y la promoción profesional.

2.1.3. Es esencial impulsar la producción de contenidos educativos TIC para las educaciones primaria, secundaria y de formación profesional, introduciéndolos en profundidad en los currículums de ambas, y en las pruebas de conocimientos de los alumnos.

2.1.4. Los contenidos de las páginas Web y servicios digitales de intercambio de información entre la comunidad educativa deben ser de utilidad para alumnos, profesores y para madres y padres, como incentivo para que se produzca la necesaria alfabetización digital de toda esta comunidad, y un intercambio fluido de información entre todos ellos de forma ordinaria y continua.

2.1.5. Es esencial impulsar la producción de contenidos educativos TIC para las educaciones primaria, secundaria y de formación profesional, introduciéndolos en profundidad en los currículum de ambas, y en las pruebas de conocimientos.

2.2. En cuanto a la aplicación de las TIC al ámbito del sistema sanitario:

2.2.1. El compromiso y el liderazgo de las autoridades sanitarias, en particular en lo que se refiere a las cuestiones financieras y organizativas, constituye un elemento esencial para que el despliegue de la salud electrónica tenga éxito. Los avances que se aprecian en este ámbito han de completarse hasta alcanzar el mismo grado de implantación en todas las Comunidades autónomas, atendiendo especialmente a las zonas aisladas.

2.2.2. La correcta difusión de las prestaciones de e-sanidad requiere una política de comunicación e información adecuada y suficiente a los usuarios, determinando un Catálogo de e-prestaciones y servicios bien definidos y explicados; aglutinando en una única página Web las políticas y las acciones el marco de la asistencia sanitaria y proporcionando un marco de comunicación tangible y comprensible.

2.2.3. Se considera necesario avanzar en el grado de implantación de la Historia Clínica Digital, así como de la tele-cita de consultas médicas y especialidades y la tele-medicina. La introducción a nivel territorial de estos recursos es muy heterogénea, y es de esperar que la extensión de las redes de telecomunicaciones permita progresar su efectiva implantación a mayor ritmo en el futuro. Asimismo, se considera conveniente avanzar desde la prescripción informatizada de medicamentos a los sistemas de receta electrónica y la prescripción automatizada.

2.2.4. Es preciso avanzar más en la interoperabilidad entre los sistemas sanitarios a todos los niveles para asegurar la seguridad y la movilidad de los pacientes, y entre servicios sanitarios y sociales por la especial confluencia de ambos en la atención de la salud de la población.

2.2.5. Consideramos que los avances tecnológicos deben alcanzar un elevado nivel de participación de los usuarios en el conocimiento de información relacionada con su estado de salud, su dolencia y su capacidad asociativa y de implicación aliada con el sistema sanitario.

2.3. Por cuanto respecta al ámbito de los servicios sociales:

2.3.1. Las TIC se han convertido en un instrumento de vital importancia para aquellos sectores de población afectados por una discapacidad o dependencia que precisan de diferentes ayudas técnicas complementarias para vivir y participar plenamente en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía. La accesibilidad universal que se predica de las nuevas tecnologías requiere que estas incorporen los ajustes necesarios y razonables para garantizar el acceso de este colectivo a las mismas ("diseño para todos"), especialmente en aquellas tecnologías relacionadas con los servicios públicos esenciales. Desde esta perspectiva las Administraciones Públicas deberán arbitrar los medios necesarios para que las TIC actúen como un instrumento que, más allá de la integración sin más, favorezcan la inclusión en el diseño de una sociedad conformada para hacer frente a las necesidades de todos.

2.3.2. Las TIC son herramientas valiosas no sólo como una solución a los problemas considerados básicos de estos colectivos, sino también como un instrumento para garantizar la inclusión en los ámbitos culturales, artísticos, deportivos o de ocio. Hay que garantizar, en definitiva, la igualdad de oportunidades para que las personas con discapacidad o dependencia ejerzan todos sus derechos y libertades en el entorno de estas nuevas tecnologías de forma que les permita la plena participación en las actividades de la sociedad en general.

2.3.3. Dado el papel relevante que las nuevas tecnologías pueden jugar para garantizar a toda la ciudadanía el acceso efectivo a los derechos de contenido social, los poderes públicos promoverán la incorporación de las TIC en los catálogos de prestaciones y servicios del sistema de servicios sociales en orden a favorecer la e-accesibilidad y la e-inclusión de todos los ciudadanos, especialmente la de aquellos que presenten mayor vulnerabilidad por razón de sus discapacidades y dependencias.

2.3.4. Las TIC ofrecen una extraordinaria oportunidad para sistematizar la gestión y evaluar el grado de eficacia y posibles disfuncionalidades de las prestaciones sociales que se ofertan. Ello por cuanto una de las carencias más importantes que, sin lugar a dudas, han tenido los programas de las políticas públicas sociales ha sido la dificultad de convertir un modelo de información-gestión integrado, que permite conocer y evaluar, en todo momento, la eficiencia, desviaciones y lagunas de la ejecución de los programas.

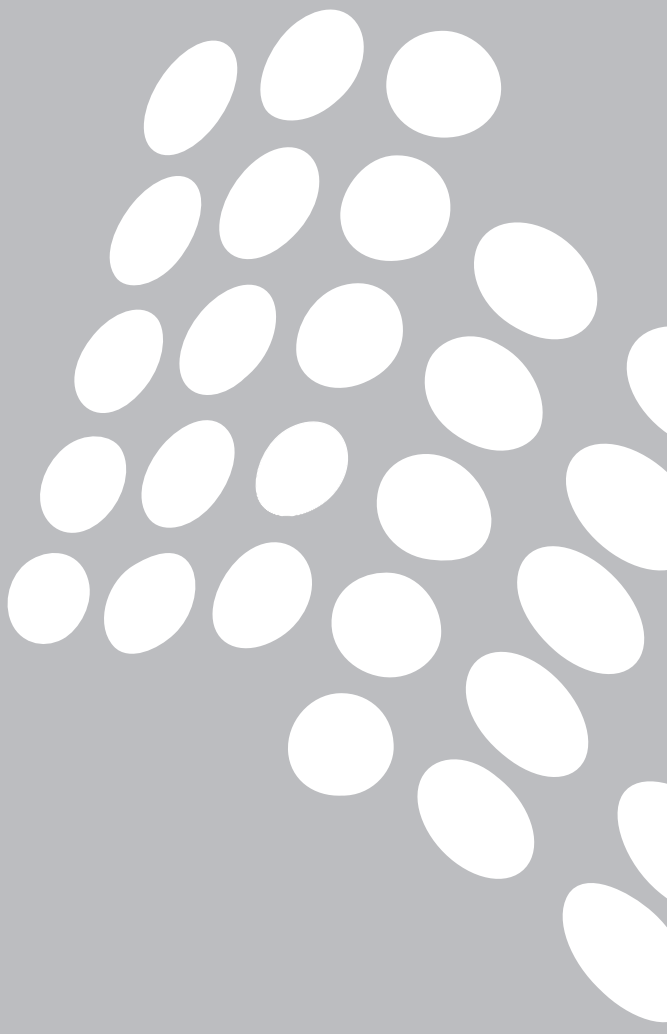
VIII.3. Relaciones Internacionales

Ruiz Abellán asistió en Madrid al XIV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). La sesión solemne del encuentro fue presidida por SS.AA.RR los Príncipes de Asturias el 28 de octubre.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia también participó en la reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo del Mediterráneo, que se celebró en Atenas. Los ombudsman de un total de 27 países, como Francia, Italia, Israel, Egipto y Portugal, entre otros, además de observadores de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Liga de Estados Árabes se reunieron bajo el título "Transparencia en los servicios públicos", para analizar su papel como defensores de los derechos fundamentales. En la ceremonia de apertura participó el ministro griego de Interior, Ioannis Ragkousis, el ombudsman de Grecia, Yorgos Kaminis, y el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica. Esta sesión también contó con la conferencia de Álvaro Gil-Robles, ex-

comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que versó sobre "La Crisis de Valores".

En este encuentro se fijó un conjunto de objetivos que encuentran su esencia en la voluntad común de consolidar los lazos de amistad y de cooperación entre las instituciones mediterráneas y de contribuir a la difusión de la cultura de los Derechos Humanos, a la consagración de los principios de justicia y de equidad y a la divulgación de los valores de la ciudadanía y de buena gobernanza.



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo IX

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ACTIVIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA REGIÓN DE MURCIA



IX.1. Datos generales

En primer lugar, hay que señalar que este Informe también recoge las quejas de 2008 ya que su tramitación se llevó a cabo en 2009. Así, el número total de quejas registradas en la Oficina del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia hasta diciembre de 2009 ha sido de **645.**

Dichas quejas se **distribuyen mensualmente durante el año 2009** de acuerdo con el gráfico 2. Destaca como dato más significativo el repunte de los meses de julio, noviembre y diciembre, aunque la entrada de quejas ha sido constante a lo largo de todo el año.

Gráfico 1

Nº de quejas acumulado

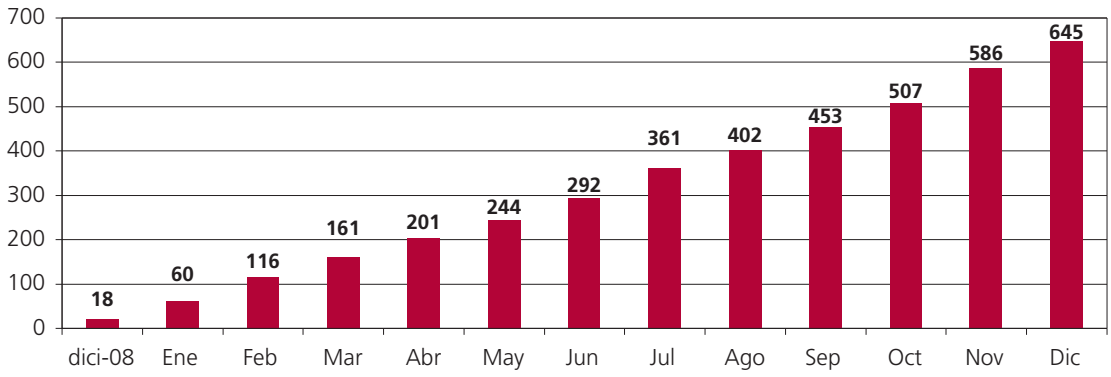


Gráfico 2

Distribución mensual de quejas

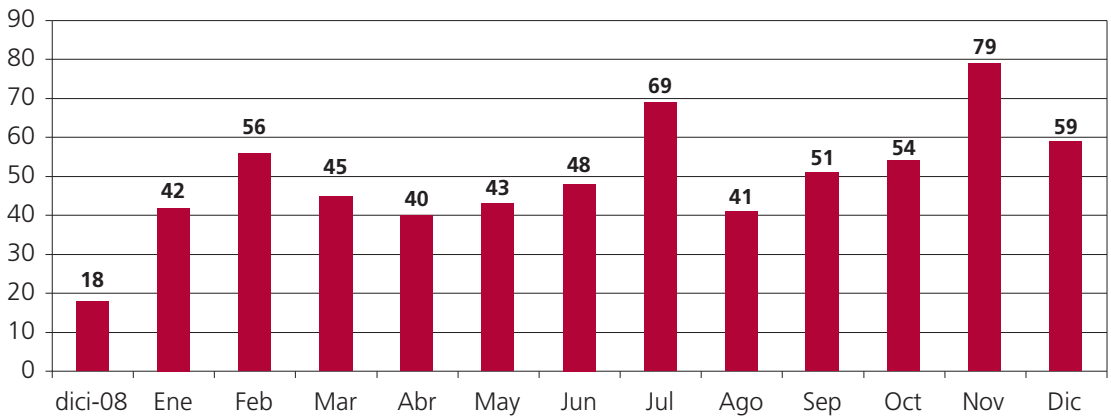
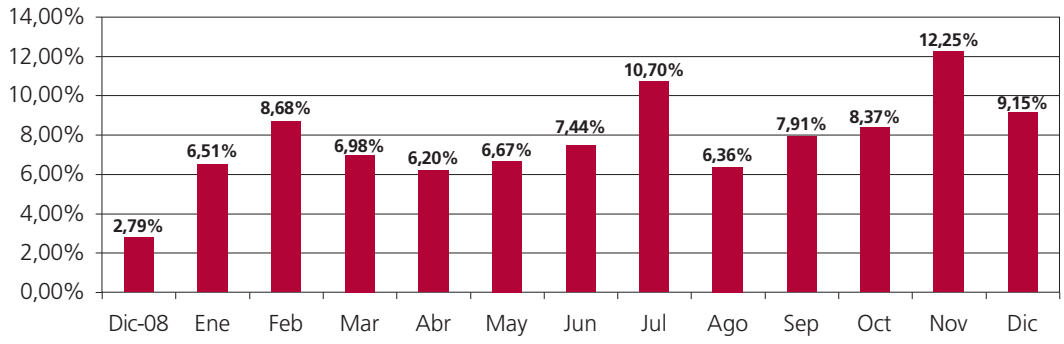


Gráfico 3

Porcentaje de quejas



En cuanto al **medio de presentación** de las quejas, la vía más utilizada por los ciudadanos ha sido la presencial con un porcentaje del 43%, seguido por el correo común con un porcentaje del 20%.

Es de destacar la utilización de la página web como medio de presentación de quejas que se puso en funcionamiento en julio de 2009 y ha alcanzado un importante porcentaje (18%).

Gráfico 4

Porcentaje de medio de presentación

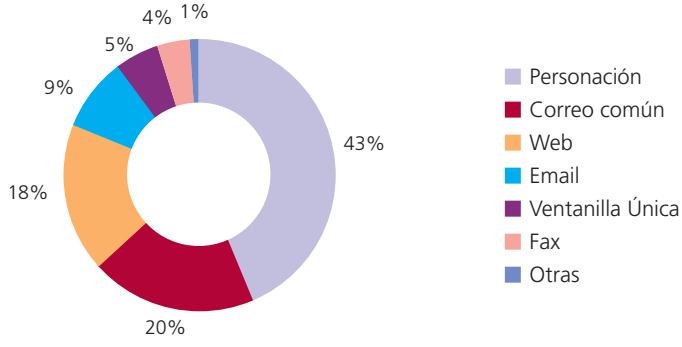
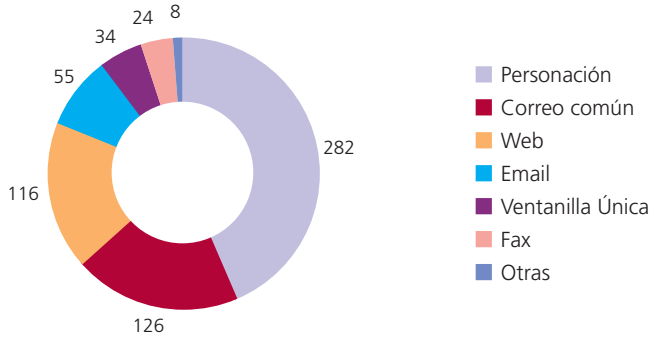


Gráfico 5

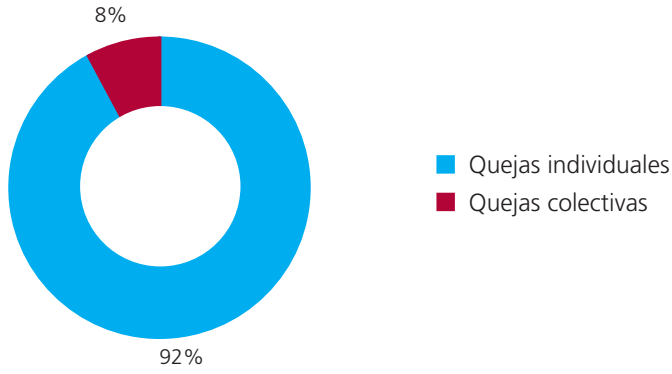
Medio de presentación de las quejas



Asimismo, como podemos observar en el gráfico 6, un 92% de las quejas han sido **individuales** mientras que el 8% restante han sido planteadas por **asociaciones o colectivos**.

Gráfico 6

Quejas individuales/colectivas



En cuanto a las **personas físicas y jurídicas promotores de las quejas**, desde la creación de la Institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia en noviembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009, los ciudadanos han presentado un total de 645 quejas de las que 412 fueron presentadas por hombres, 197 por mujeres y 36 por personas jurídicas. Es decir, el 63% de las quejas fueron promovidas por hombres, el 31% por mujeres y el 6% por personas jurídicas.

Gráfico 7

Personas físicas y jurídicas promotores de las quejas

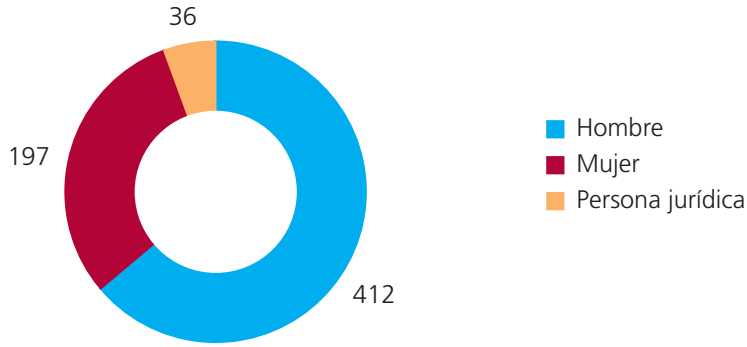
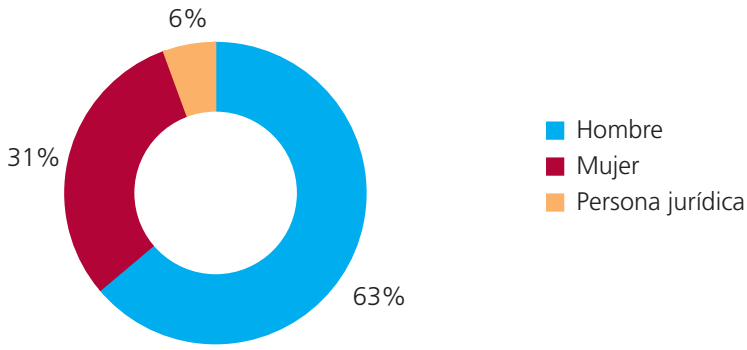


Gráfico 8

Personas físicas y jurídicas promotores de las quejas en %

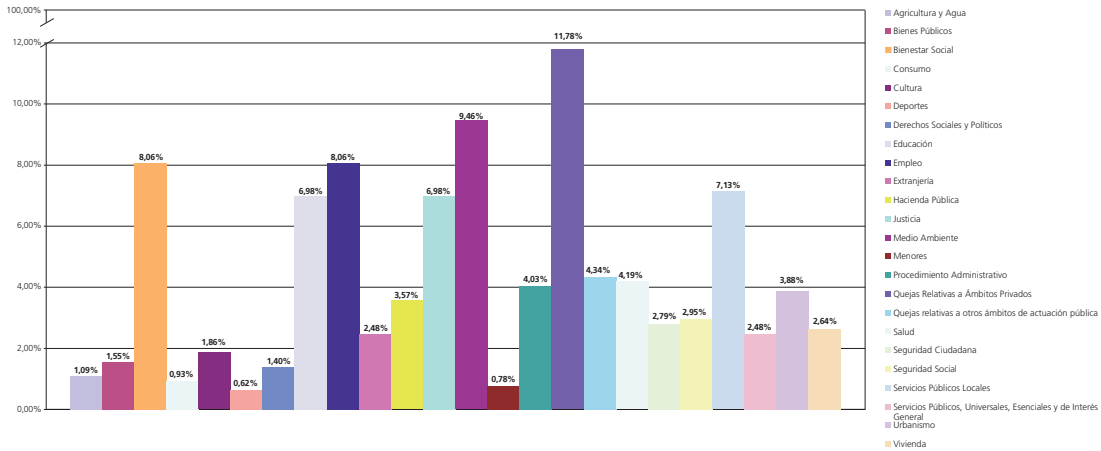


IX.2. Estadísticas de las Quejas

Por **áreas temáticas**, las quejas se distribuyen de acuerdo con el gráfico 9, en el que podemos apreciar que las "Quejas Relativas a Ámbitos Privados" han sido las más numerosas con un 11,78%, seguidas de las quejas de "Medio Ambiente" con un 9,46%, las de "Empleo" con un 8,06% y las de "Bienestar Social" con otro 8,06%.

Gráfico 9

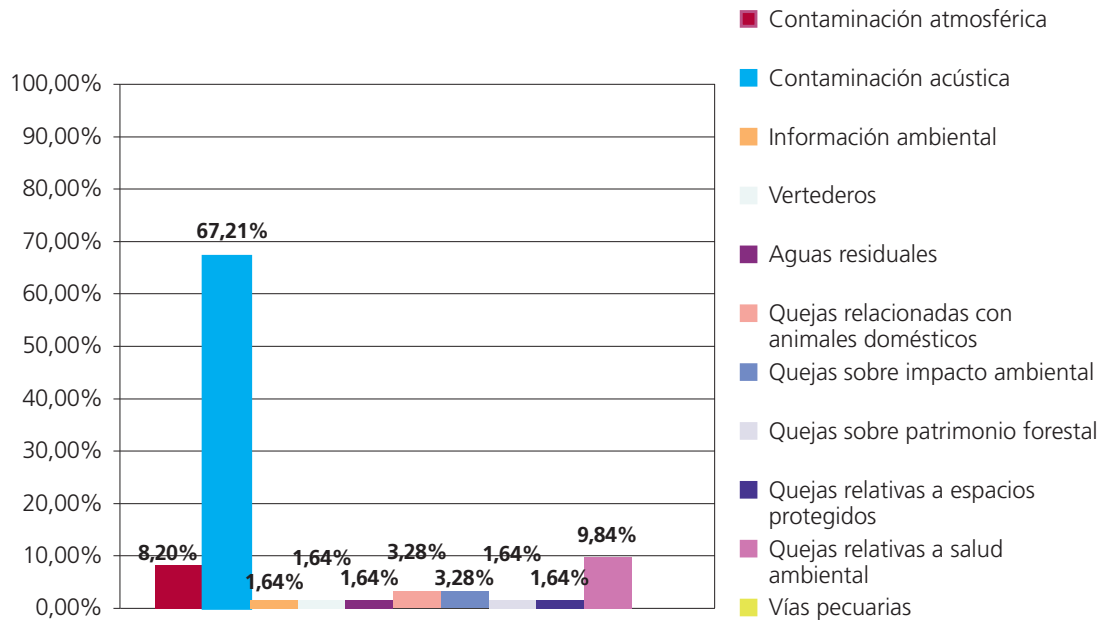
Distribución de quejas por materias



El siguiente gráfico muestra un mayor detalle de las **quejas relativas a medio ambiente**, de las que destacan las quejas referidas a la materia "Contaminación acústica" con un porcentaje del 66,10% del total de las quejas de medio ambiente.

Gráfico 10

Quejas de Medio Ambiente



Es también especialmente significativo el desglose de otras materias que por su volumen e interés detallamos a continuación.

Gráfico 11

Quejas de Bienestar Social

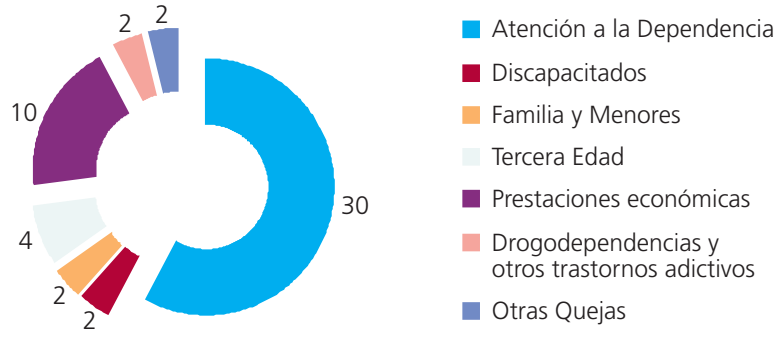


Gráfico 12

Quejas de Justicia

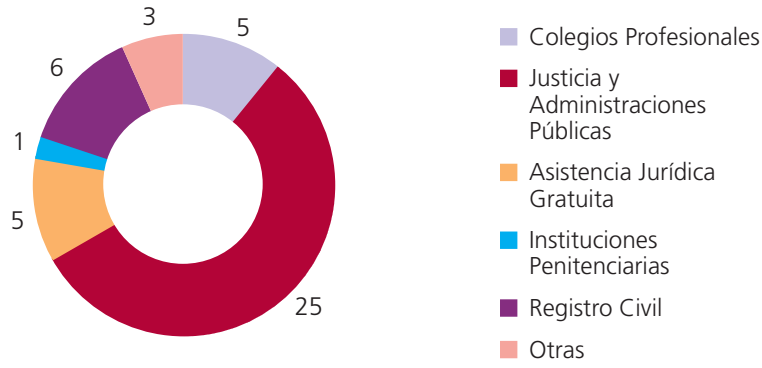
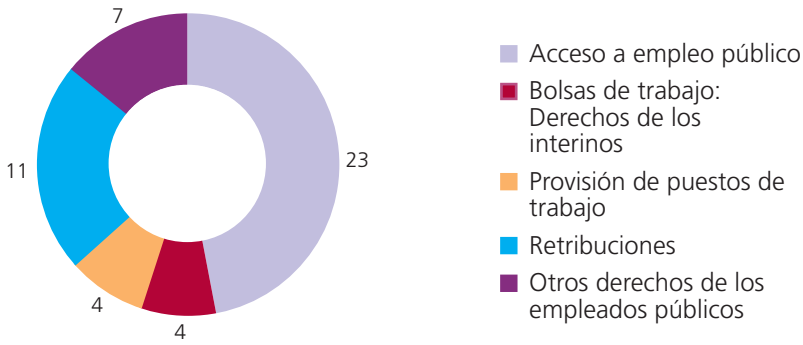


Gráfico 13

Quejas de Empleo Público



IX.3. Estadísticas del procedimiento

Una vez que las quejas son presentadas ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, comienza la fase de admisión, que consiste en el estudio del contenido de la queja y concluye con la admisión o no admisión a trámite del expediente; en este último caso, motivando el rechazo e informando al ciudadano de los cauces más pertinentes para hacer valer sus derechos.

Las cifras recogidas en el gráfico 14 demuestran que se han **admitido a trámite** un 63,41% del total de las quejas, se han **inadmitido** un 24,65% y se **han remitido a otras Defensorías** un 11,94%.

Gráfico 14

Tramitación de las quejas en %

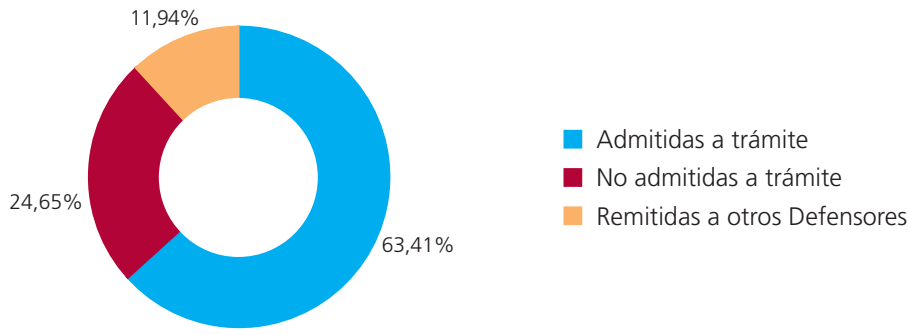
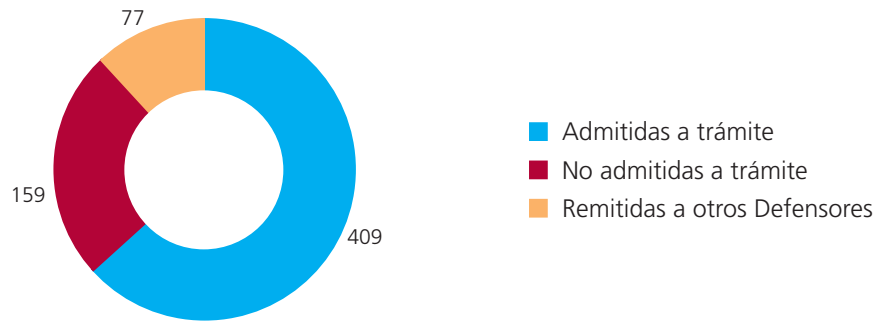


Gráfico 15

Tramitación de las quejas



Entre las principales causas de no admisión a trámite (159 quejas) destaca la inadmisión por falta de aportación por los ciudadanos de aquella documentación que le fue requerida por esta Institución (36 quejas) o la no admisión por enmarcarse fuera del ámbito competencial atribuido al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, pero en las que se ha orientado al ciudadano sobre los trámites a seguir o la entidad pública competente para resolver su queja (34 quejas). Un total de 26 quejas no fueron admitidas por estar pendiente el objeto de la queja de obtener pronunciamiento jurisdiccional o tener la consideración de cosa juzgada.

Gráfico 16

Causas de la NO Admisión a Trámite

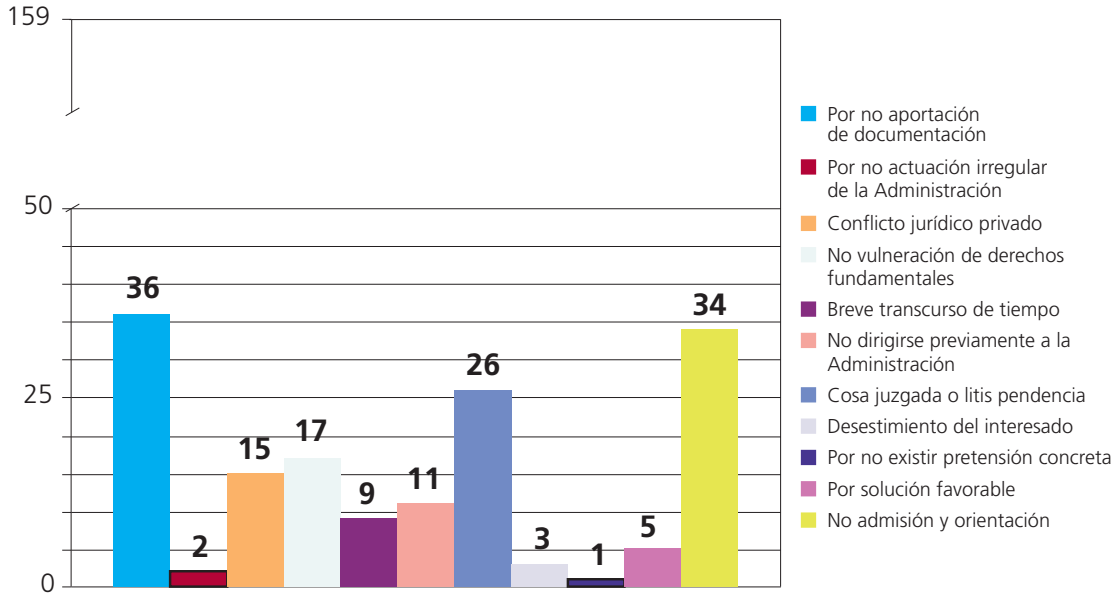
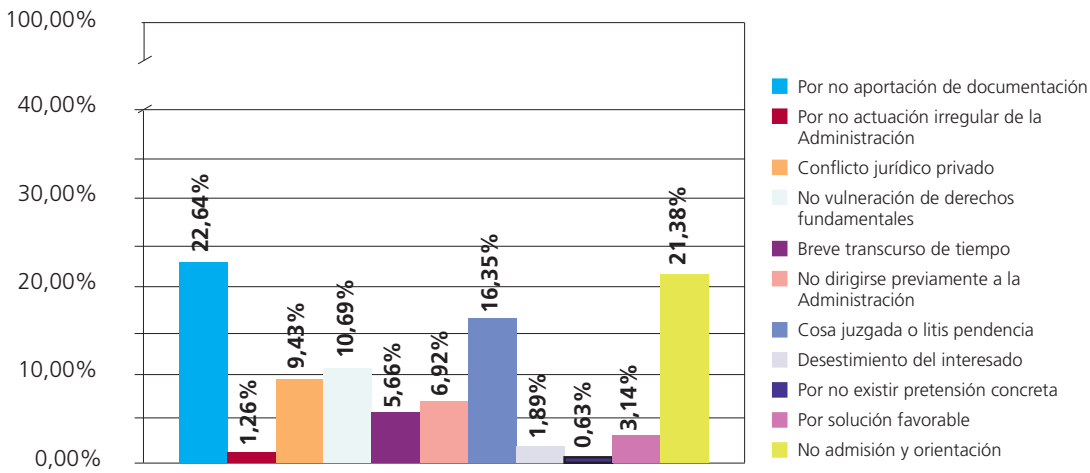


Gráfico 17

Causas de la NO Admisión a Trámite



En cuanto a las quejas remitidas a otros Defensores, 75 expedientes se han derivado al Defensor del Pueblo del Estado para su tramitación, 1 expediente al Defensor del Pueblo Andaluz y otro al Sindic de Greuges de Valencia.

En este punto pasamos a analizar las **Administraciones afectadas** por las quejas de los ciudadanos, de las que podemos señalar que la Administración Autonómica representa el 30% del total, la Administración Local el 39% y los órganos de la Administración del Estado el 4%.

El 27% restante corresponde a otros organismos no incluidos en la clasificación anterior, como el Defensor del Pueblo de España, colegios profesionales, universidades, defensores autonómicos, etc…

Gráfico 18

Administraciones afectadas

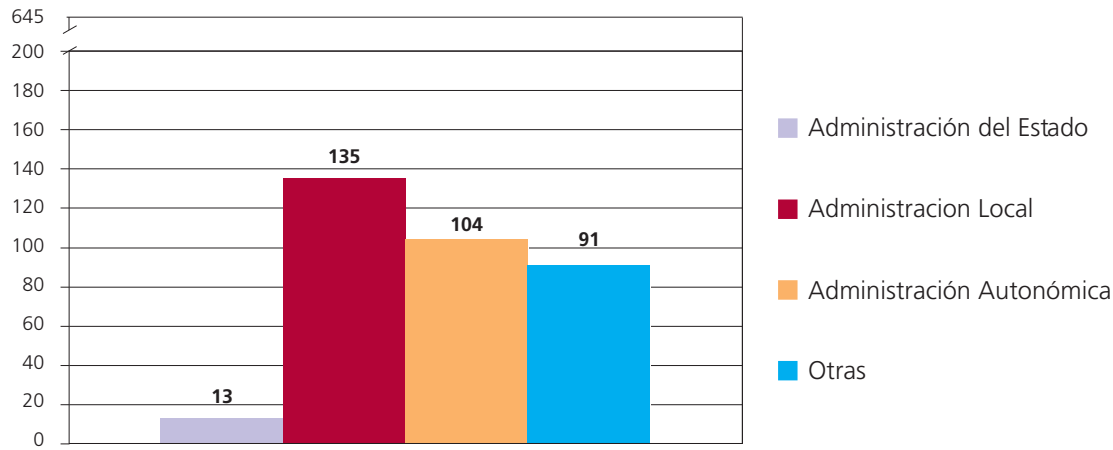
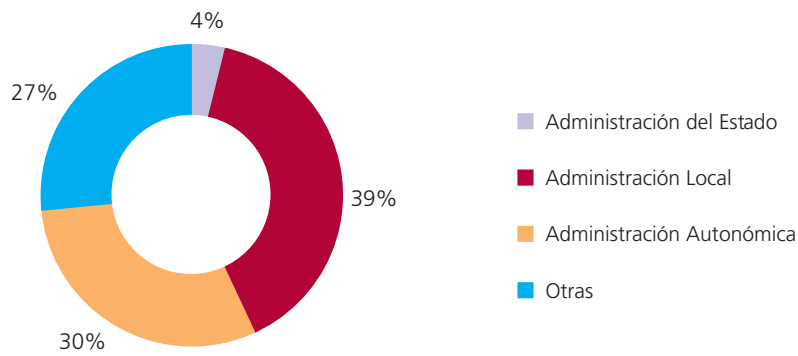


Gráfico 19

Administraciones afectadas por porcentaje

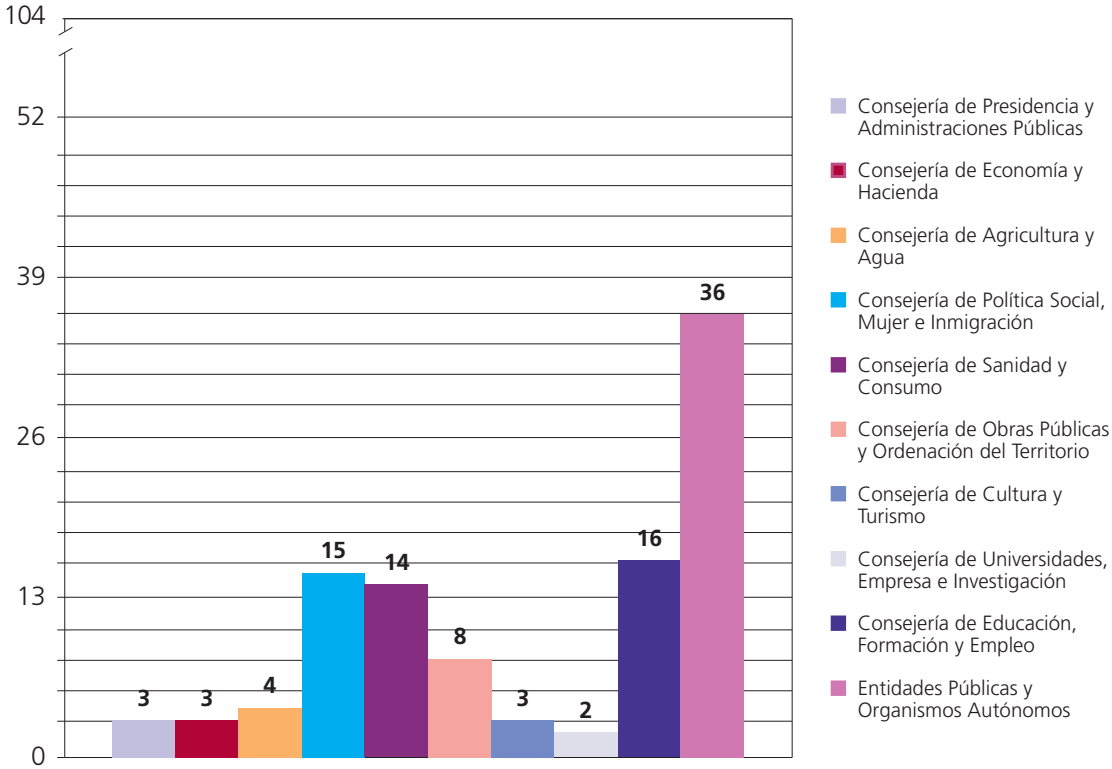


De acuerdo con el Gráfico 18, se han dirigido 104 requerimientos de información a la **Administración Autonómica** de los cuales 36 se han dirigido a Entidades Públicas y Organismos Autónomos y los 68 restantes a las diferentes Consejerías.

Todas las Consejerías integradas en el Gobierno de la Región de Murcia han sido destinatarias de requerimientos de información, destacando las peticiones de información dirigidas a las Entidades Públicas y Organismos Autónomos con un total de 36 peticiones, seguido por la Consejería de Educación, Formación y Empleo con 16 y la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración 15.

Gráfico 20

Administración Autonómica



En el siguiente gráfico se desglosan las peticiones de información realizadas a las diferentes **Entidades Públicas y Organismos Autónomos**, destacando por su gran volumen las dirigidas al Instituto Murciano de Acción Social.

Gráfico 21

Desglose de las Entidades Públicas y Organismos Autónomos

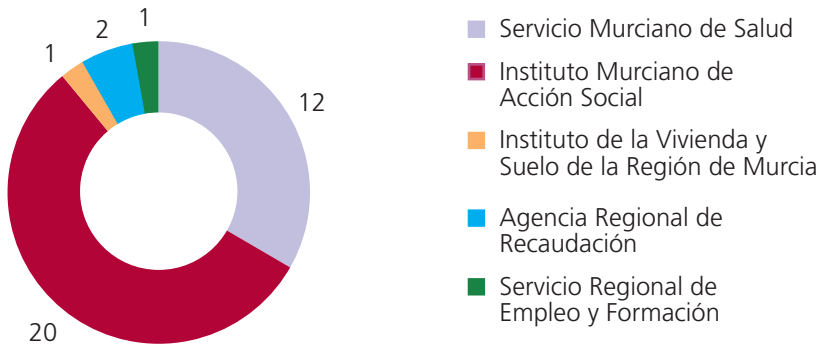
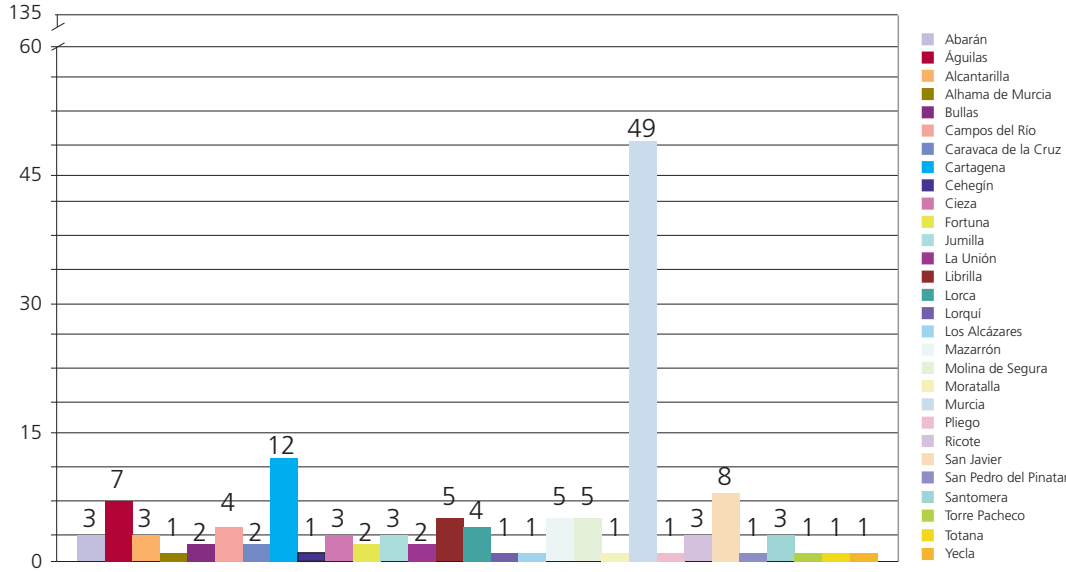


Gráfico 22

Administración Local



Los requerimiento de información dirigidos a las **Entidades Locales** durante 2009 han sido 135, de los cuales destaca los requerimientos realizados al Ayuntamiento de Murcia con un total de 49, seguido del Ayuntamiento de Cartagena con 12 requerimientos y el Ayuntamiento de San Javier con 8.

IX.4. Estadísticas de las Resoluciones

En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia puede formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las Administraciones afectadas, **advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios** relativos a sus deberes legales.

En los gráficos que se muestran a continuación se detallan las Resoluciones dictadas por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, así como la respuesta por parte de las Administraciones afectadas.

Gráfico 23

Resoluciones del Defensor del Pueblo

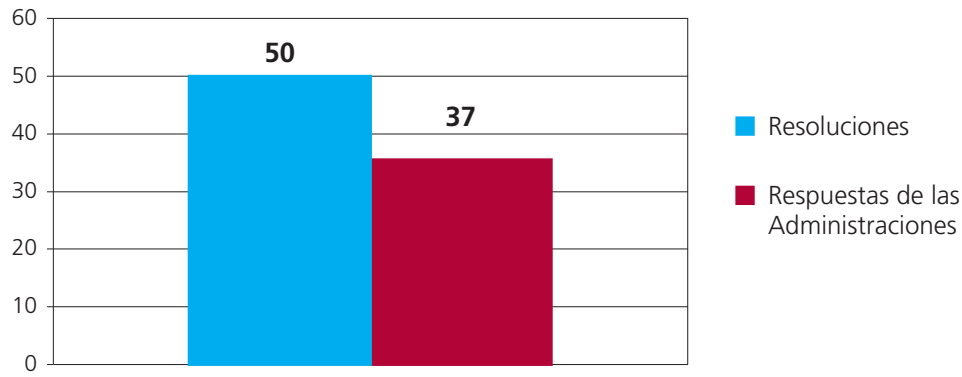
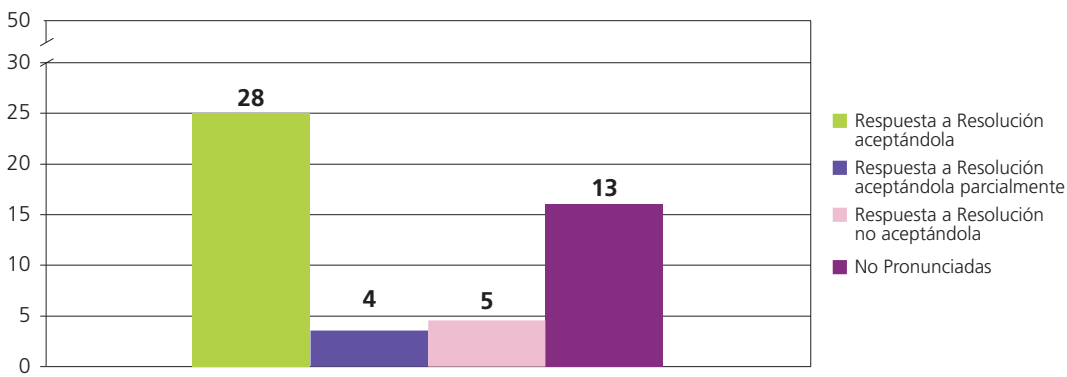


Gráfico 24

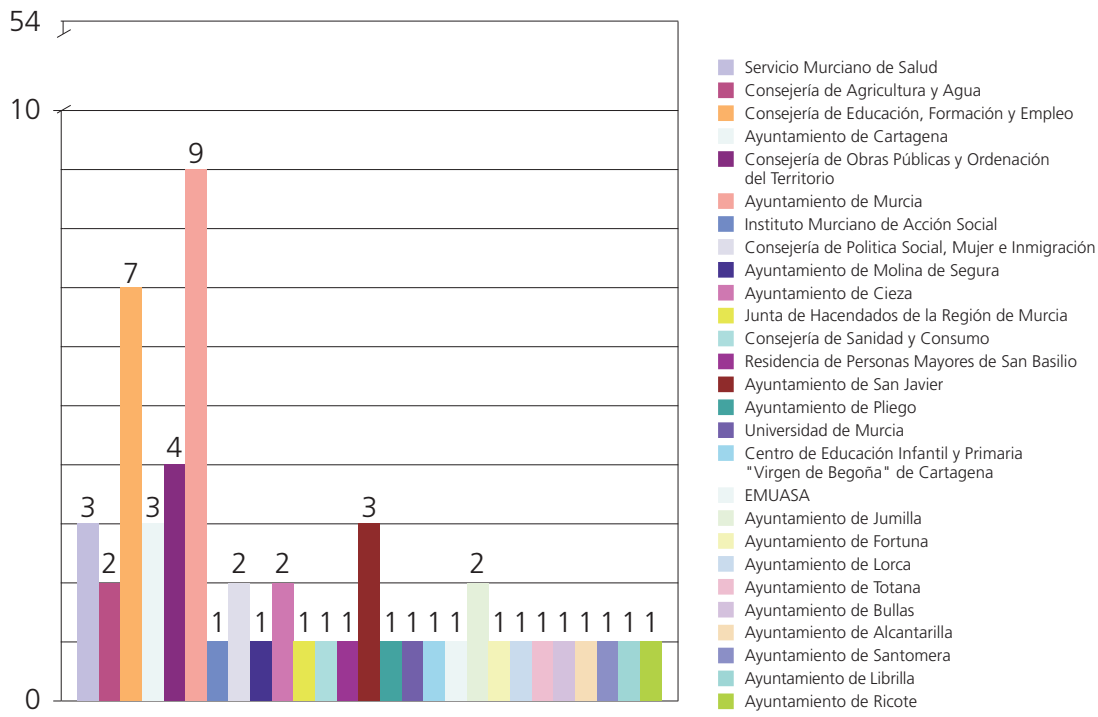
Respuestas de la Administración



El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha formulado, hasta el 31 de diciembre de 2009, 50 Resoluciones de las cuales 28 han sido aceptadas por la Administración, 4 aceptadas parcialmente y otras 5 no aceptadas..

Gráfico 25

Administraciones a las que se dirigen las resoluciones

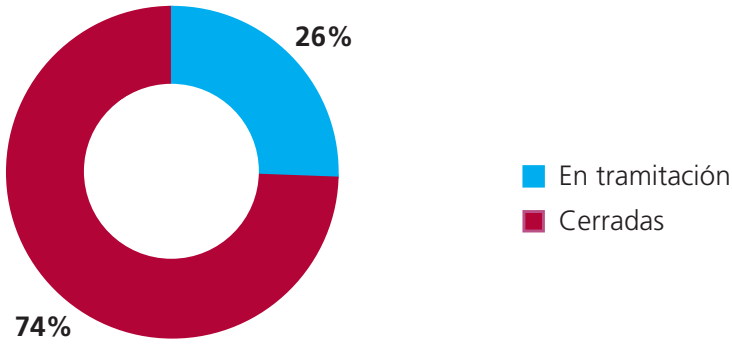


En cuanto a las Administraciones a las que se les ha dirigido las Resoluciones, destaca el Ayuntamiento de Murcia con 9 Resoluciones, seguido por la Consejería de Educación, Formación y Empleo con 7 Resoluciones y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio con 4.

Para finalizar con la estadística, haremos referencia al estado de tramitación de los expedientes y las causas de cierre de los mismos.

Gráfico 26

Situación actual de las quejas

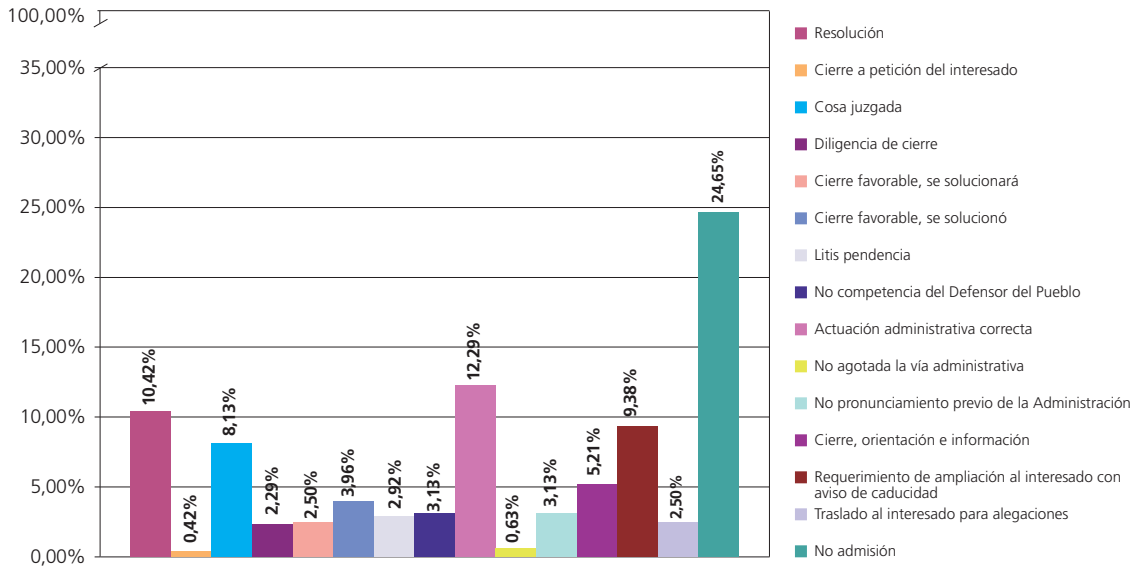


Como muestra el gráfico 26, del total de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se han cerrado 480, es decir, el 74%, mientras que el 26% restante (165 quejas) están pendientes de resolución a fecha de presentación de este informe. Hay que señalar que los expedientes de 2008 se han incluido en este informe ya que su tramitación ha tenido lugar durante el año 2009.

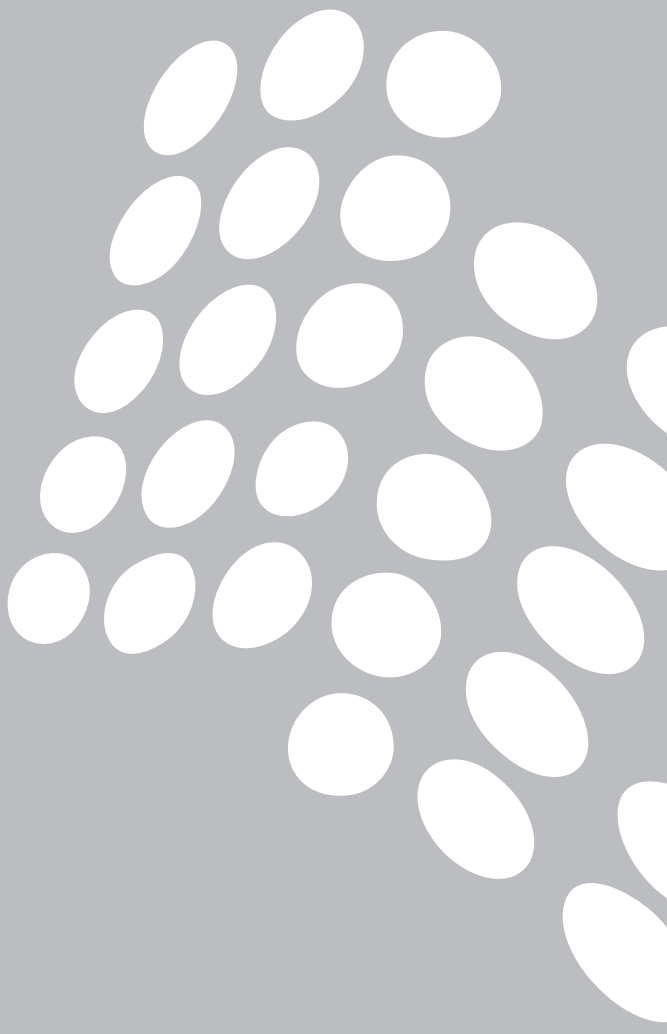
Entre las caudas de cierre de las quejas, destacan los señalados en es siguiente gráfico:

Gráfico 27

Causas de cierre de las quejas



Incluimos en esta clasificación las quejas no admitidas que suponen un 24,65% del total de los cierres, ya que de 480 quejas cerradas, 159 han sido inadmitidas (ver gráfico 15). Entre las demás causas de cierre, destaca los cierres de quejas por considerar que ha habido una actuación correcta de la Administración con un 12,29% seguido de los cierres tras requerir a los interesados que amplien la información aportada avisándoles de la caducidad de expediente si no la aportan en un plazo de 3 meses (9,38%) y de los cierres por considerar el asunto como cosa juzgada con un 8,13%.



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

Capítulo X RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS



X.1. Agricultura y Agua

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA A LA JUNTA DE HACENDADOS, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 69/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 17 de febrero de 2009, D. XXX presentó queja en esta Institución relativa a la actuación de la Junta de Hacendados de Murcia. En concreto, el promotor de la queja considera injusto que se le apliquen a la solicitud de entubamiento de la acequia de Bendamé a su paso por el linde de una finca de su propiedad, unos requisitos de retranqueos no exigidos al resto de los colindantes, tal como se constata en reportaje fotográfico aéreo aportado al efecto.

Segundo. Con fecha 19 de febrero de 2009 se acusó recibo de la queja interpuesta, admitiéndola a trámite en reunión de la Comisión de Coordinación y Régimen Interior constituida al efecto con fecha 27 de febrero de 2009 y requiriendo con dicha fecha información a la Junta de Hacendados de la Región de Murcia.

Tercero. Con fecha 15 de abril de 2009 se mantuvo conversación telefónica y posteriormente entrevista personal con la letrada de la Junta de Hacendados sobre la naturaleza de la queja, recibiendo en esta Defensoría informe de 27 de abril de 2008, en el que se describen los cauces de las acequias "cajeros o quijeros" como de propiedad privada de los heredamientos, sometida por tanto a la autonomía de la voluntad, previo informe de los Procuradores correspondientes, de conformidad con los descrito en las Ordenanzas y Costumbres de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia. En cuanto a los posibles agravios comparativos expuestos por el promotor de la queja, señalan que la autorización de entubamiento y vallado depende del fin previsto por la ocupación, autorizándose en supuestos de interés social, y no haciéndolo en supuestos de interés particular.

Cuarto. Con fecha de registro de entrada 6 de mayo de 2009, el promotor de la queja presentó escrito ampliatorio, para hacer constar el comportamiento errático de la Junta, en el que señalaba que con anterioridad a la comunicación descrita en el antecedente primero, el procurador de la acequia –en el año 2005– le comentó la posibilidad de entubar y vallar sin respetar los quijeros. Posteriormente, en el año 2007, en otra reunión mantenida en la Junta de Hacendados se ofreció la posibilidad de entubar a su costa y vallar, desde el inicio de los quijeros a razón de 10.000 pesetas por metro ocupado. Posteriormente, sin argumentar razones adicionales, se niega el entubado y vallado.

Quinto. Con fecha 11 de junio de 2009 y tras una entrevista personal del Defensor del Pueblo con el promotor de la queja, se requirió de nuevo información a la Junta de Hacendados de Murcia sobre "resoluciones acordadas en Juntamento o autorizaciones en general relacionadas con ocupaciones en la acequia de Bendamé en los últimos 6 años".

Sexto. Con fecha de registro de entrada en esta Defensoría 1 de julio de 2009 se aportó por la Junta de Hacendados de Murcia la información requerida en el antecedente anterior, "recordando" e insistiendo en la incompetencia de esta Defensoría en las cuestiones de "Derecho Privado" atinentes a los cauces o márgenes de las acequias.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Ámbito competencial

En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones,

sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Fundamento constitucional

El fundamento constitucional legitimador de la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, reside en el principio interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, proclamado en el artículo 9 de la Constitución Española, y en el principio de igualdad formal consagrado por el 14 de texto constitucional, en cuya virtud "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Tercera. Régimen Jurídico

La normativa de aplicación a la cuestión objeto de análisis está constituida por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su redacción otorgada por R.D. 9/2008, de 11 de enero, por el Código Civil y por las Ordenanzas y Costumbres de la Comunidad General de Regantes denominada "Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia".

Cuarta. Naturaleza de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia

Tal como dispone el Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (art. 82), el R.D. 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (art. 199), o las propias Ordenanzas y Costumbres de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia (art. 1), la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, tiene el carácter de Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica y administrativa propia, y plena capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines, para adquirir y poseer todo aquello que constituya su patrimonio.

En cuanto a sus funciones, realiza por mandato de la ley y con la autonomía que en ella se le reconoce, las funciones de policía, distribución y administración de las aguas que tengan concedidas o reconocidas por la Administración, tanto para el riego de las fincas de sus hacendados, como para el uso común de otros usuarios integrados en dicha Comunidad de Regantes.

Sobre estas Corporaciones de Derecho Público, García de Enterría ha afirmado que la problemática de las corporaciones sectoriales de base privada radica en que "bajo una forma pública de personificación, concebida como un cauce asociativo necesario, se hacen valer intereses privados de sus miembros, (…) no como intereses individuales de cada uno de ellos, sino como intereses objetivos del conjunto del colectivo que todos ellos forman, en cuya representación frente al Estado hay que reconocer una no despreciable cuota de interés público, como no dudó en reconocer el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 19 de junio de 1996 (…).

Pues, en efecto, –sigo citando al prestigioso profesor–, una identificación plena entre Corporaciones de base privada que tienen atribuidas funciones publicas y Administraciones Públicas resultaría profundamente equívoca. Ni los fondos de estas Corporaciones constituyen dinero público, ni sus cuotas o derramas, exacciones públicas regidas por el principio de legalidad tributaria, ni sus empleados funcionarios, ni sus contratos son en ningún caso contratos administrativos, ni sus bienes nunca demaniales, ni sus actos son actos administrativos fuera del caso específico de que se produzcan en ejercicio de funciones delegadas. Más simplemente, y en forma positiva, sólo en la actividad referente a la constitución de sus órganos, por lo mismo que la organización es pública, y en los limitados aspectos en que actúan funciones administrativas atribuidas por la Ley o delegadas, la actuación de

las Corporaciones de base privada puede calificarse de administrativa a los efectos de su régimen jurídico y de su eventual enjuiciamiento jurisdiccional…".

Quinta. Naturaleza jurídica y características de la servidumbre de acueducto

Dispone el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2001, de la Ley de Aguas que "Los organismos de cuenca podrán imponer, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en el Reglamento de la Ley, la servidumbre forzosa de acueducto, si el aprovechamiento del recurso o su evacuación lo exigiera". Esta servidumbre, entenderá implícita la servidumbre de paso, tal como de otro lado ha señalado el Tribunal Supremo (vid. Sentencia 28 de noviembre de 1955).

Constituye la citada servidumbre –sigue citando el referido artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2001– no solamente el cauce sino también los cajeros y las márgenes, que serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que vayan destinadas las aguas o, en caso de evacuación, de los que procedieran.

En cuanto a la extensión de éstos, y para el caso que nos ocupa, señalan las Ordenanzas y Costumbres de la Junta de Hacendados, que el "quijero" (cajero) de las acequias mayores ha de tener quince palmos, diez el de las menores y tres palmos para las regaderas, lo que para los profanos en lo que a palmos se refiere, supone –en el caso que nos ocupa– 3,15 metros desde el centro del cauce de la acequia.

Por su parte, el Reglamento del dominio público hidráulico abunda en el concepto de esta servidumbre estableciendo la obligación del titular de la servidumbre de realizar las obras de construcción, conservación y limpieza (art. 26), debiendo reponer las cosas a su estado antiguo una vez extinguida la servidumbre (art. 31) y el derecho del titular del predio sirviente (art. 29) a cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el acueducto mismo de manera que no experimente perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 560 del Código Civil.

Sexta. Sobre el fondo de la problemática planteada

En ejercicio de las facultades de cerramiento concedidas por el artículo 29 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, D. XXX solicitó para el vallado de su finca el entubamiento y ocupación de los márgenes de la acequia que discurre por los lindes de la misma.

La respuesta de la Junta de Hacendados a esta solicitud en un primer informe requerido al efecto, es denegatoria, alegando intereses particulares del promotor de la queja en la ocupación frente a los presuntamente autorizados por la Corporación. Posteriormente y ante nuestro requerimiento de autorizaciones de ocupación concedidas en los últimos 6 años por el órgano competente, la Junta nos señala que las autorizaciones que concede sobre sus acueductos son de estricta naturaleza privada y por tanto ajenas a esta Institución.

Al respecto, esta Institución ha de discrepar necesariamente con la actitud mantenida por la Junta, y es que si bien es cierto no se pone en duda que los cauces y márgenes de las acequias (acueductos en la terminología del Código Civil y normativa en materia de aguas) pertenecen a la heredad a la que sirven, no es menos cierto que la Junta de Hacendados, en tanto Comunidad de Usuarios de Agua, es titular de estas facultades exorbitantes en virtud de concretos apoderamientos legales, que legitiman su intervención. No en vano, la servidumbre de acueductos de que es titular una comunidad de usuarios de agua, se extingue por pérdida del derecho a la disposición del agua, lo que explica que la titularidad en concepto de dueño sobre los cauces y márgenes de las acequias deriva única y exclusivamente de la finalidad ontológica que justifica la existencia misma de la corpo-

ración, no habilitando comportamientos arbitrarios ajenos a la citada razón de ser de la servidumbre.

Es por ello que la Junta de Hacendados rige su actuar, en lo que hace a la policía, administración y aprovechamiento de los cauces, conforme a normas de derecho público, en las que con fundamento en el artículo 9.3 de la Constitución Española se garantiza la interdicción de la arbitrariedad. Así lo pone de manifiesto el artículo 30 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en cuanto que remite para el "aprovechamiento de las corrientes, cauces y márgenes, a lo prescrito en la Ley de aguas, el reglamento y las propias Ordenanzas".

Séptima. Del funcionamiento de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia

Sentado el hecho de que el funcionamiento de la Junta de Hacendados de Murcia, como Comunidad de Usuarios de Aguas, se rige por normas de Derecho Público en cuanto órgano competente en materia de aguas, habrá que estar a lo dispuesto por sus Ordenanzas, como dispone el artículo 30 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en lo referente al aprovechamiento de las "corrientes, cauces y márgenes".

A este respecto, el artículo 89 de las Ordenanzas, atribuye al Juntamento General, Asamblea o Junta General constituida por todos los Hacendados de la huerta, como órgano soberano de la misma, "La adquisición y enajenación de bienes…" (letra e) o "la autorización previa, (…) para realizar obras en las conducciones e instalaciones de la Comunidad, con el fin de una mejor utilización de las aguas" (letra i).

En el ejercicio de las citadas competencias, por Acta del Juntamento del Heredamiento de la Acequia de Bendamé Mayor del día 14 de enero de 2004 se acordó por unanimidad en el punto sexto del primer asunto del orden del día "Cobrar un canon de ocupación de cauces y quijeros de 60 euros por metro cuadrado en caso de cimbrado y entubado y de 90 euros cuando se trate de ocupación" sin exigencia de concurrencia de justificación alguna en cuanto al motivo de la ocupación, tal como argumenta la Junta de Hacendados en su informe.

No es pues de recibo admitir la denegación del cimbrado y entubado y en su caso ocupación, por ser ésta una decisión carente de fundamento, no acordada por el órgano competente y conculcadora de los acuerdos adoptados por el Juntamento de la Acequia de Bendamé Mayor según el Acta de 14 de enero de 2004 antes referenciada.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA JUNTA DE HACENDADOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, siendo fiscalizable por el Defensor del Pueblo la actuación de la Corporación de derecho público de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia en cuanto al sometimiento a las normas de derecho público que la regulan.

En el caso que nos ocupa, las autorizaciones sobre obras en conducciones e instalaciones de la comunidad de usuarios de agua corresponden al Juntamento, el cual ya tiene establecido un canon igual para todos aquellos que deseen cimbrar, entubar u ocupar la acequia de Bendamé Mayor, tal y como debe cumplirse con el promotor de la queja.

Las funciones de policía y vigilancia de los cauces atribuidas por la normativa vigente a la Comunidad de usuarios de agua de la Junta de Hacendados de la Región de Murcia son de naturaleza indisponible no

constituyendo la naturaleza privada de los cauces y quijeros un eximente para su ejercicio.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de siete días –en evitación de mayores perjuicios para el escolar–, nos informe sobre la aceptación de las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos informe sobre las razones que lo impidan y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 159/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El día 6 de abril del presente año quedaba registrada la entrada en esta Defensoría de una queja promovida por D. XXX, vecino del municipio de Torre Pacheco, en la que ponía de manifiesto los problemas que le ha generado el dilatado, accidentado y aún no concluido proceso de concentración parcelaria iniciado hace más de 23 años en los regadíos del Trasvase Tajo-Segura del campo de Cartagena.

Según expresa el promotor de la queja, una vez iniciado el proceso de concentración parcelaria en el que sus propiedades se vieron afectadas, y llevadas a la concentración sus parcelas de aportación, se le cedió en precario la superficie de una "masa común" equivalente a la aportada por él en los mismos sectores hidráulicos (X y XI) en los que tenía su propiedad inicial. Toda vez que en esta primera fase no logró que se le adjudicara de manera definitiva y a título de dueño ninguna finca de reemplazo, sufrió sucesivos traslados dentro de esos mismos sectores, adjudicándosele de manera provisional unas parcelas que en su momento, y por aplicación de la legalidad, fueron cedidas al Ayuntamiento de Cartagena, procediendo esa administración local, por un error, a enajenarlas en pública subasta a un tercero. Finalmente, la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, consciente del error, cedió en precario al Ayuntamiento de Cartagena dos fincas calificadas como de "desconocidos", para que a su vez fuesen cedidas –asimismo en precario– al reclamante. En la actualidad, esas fincas de "propietario desconocido" ocupadas por el promotor de la queja son reclamadas por la Hacienda Pública a través de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, que ha dado un plazo de cuatro meses a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para que las entregue al Estado, libres de la ocupación del reclamante y promotor de esta queja.

Segundo. Con fecha 27 de abril, esta Institución acusa recibo de la queja requiriendo al promotor de la misma que aporte la oportuna información complementaria que acredite los hechos que relata en ella. Tras un segundo requerimiento, llega a esta Institución con fecha 22 de junio una nueva comunicación del reclamante a la que anexa copia de dos clarificadores documentos. El primero de ellos es una Resolución del Director General de Estructuras e Industrias Agroalimentarias, fechada en diciembre de 1997, por la que se cedían en precario al Ayuntamiento de Cartagena dos fincas resultantes del proceso de concentración parcelaria de los referidos sectores hidráulicos X y XI, con una autorización para que esas fincas fuesen asimismo cedidas –en precario– al reclamante. El segundo

documento es copia de un informe del Servicio de Patrimonio del Estado, firmado el 29 de enero de 2009 por el Delegado Provincial de Economía y Hacienda en Murcia, en el que se reseñan algunos pormenores del procedimiento de concentración parcelaria referido, y se emplaza a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para que en cuatro meses entregue a esa Delegación los dos títulos de desconocido a favor del Estado, con la entrega de las referidas parcelas libres de la ocupación del reclamante.

En este segundo escrito el promotor de la queja nos informa que ha remitido una comunicación (que adjunta) a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, pidiendo de esa administración una "indemnización justa" y renunciando implícitamente a la adjudicación de terrenos equivalentes a los de su propiedad aportada al procedimiento, dado que, así se afirma de modo expreso: "ya han pasado 23 años intentando la opción de agrupación de mis propiedades en un mismo sector, lo cual ya no parece posible…".

Tercero. Con fecha 7 de julio, y una vez examinada la documentación remitida por el promotor de la queja, esta Institución adopta la decisión de admitirla a trámite, y con esa misma fecha comunica tal circunstancia a su promotor y practica el oportuno requerimiento de información a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Agua.

Con fecha 28 de agosto se registra la entrada en esta Defensoría de un informe firmado por el Asesor Jurídico de la citada Dirección General. En ese informe se realizan una serie de consideraciones en torno al proceso de concentración y a los perjuicios generados al reclamante y se adjuntan hasta once copias de otros tantos documentos a través de cuya lectura se facilita la comprensión y alcance del problema objeto de la queja.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La cuestión objeto de queja tiene soporte constitucional en el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, que, como es sabido, reconoce el derecho a la propiedad privada; un derecho, cierto es, cuyo contenido queda delimitado de acuerdo a la función social que debe cumplir. Es más que evidente también la necesidad de traer a colación el artículo 103 de nuestra Ley Fundamental, allí se advierte que la administración pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Por último, dada la especificidad del asunto que abordamos, parece asimismo oportuno reproducir lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Española, que afirma que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. El instituto jurídico objeto de la presente queja tiene por finalidad, como se sabe, la constitución de explotaciones agrarias de estructura y dimensiones adecuadas, ante la ineficiencia económica del cultivo en parcelaciones de dimensiones excesivamente reducidas que, entre otras zonas de España, ha caracterizado históricamente la morfología agraria de nuestra región. En definitiva se trata de una reparcelación del suelo rústico que atiende a criterios exclusivamente agrarios.

Tercera. La normativa aplicable a la cuestión objeto de la queja está constituida fundamentalmente

por una norma preconstitucional: el Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (LRDA). Se trata de un texto refundido que nació con el afán de codificar todo el "derecho agrario" existente hasta la fecha en nuestro país, y es el Título VI del libro III de esa norma el llamado a regular este instituto jurídico. Aprobada la Constitución Española de 1978, y con ella el nuevo modelo territorial del Estado, las tareas de concentración parcelaria fueron transferidas a las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales se han ido dotando de leyes propias de concentración parcelaria. No es el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde los procedimientos para hacer efectivo este complejo instituto jurídico se siguen regulando según lo dispuesto en la referida LRDA.

Además de la precitada norma, también es de aplicación al caso que nos ocupa la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, corolario en buena medida, como es sabido, del mandato que la Constitución Española acoge en su artículo 103.1, cuando predica que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Deben ser por ello traídos a este caso algunos de estos principios que, prácticamente del mismo tenor literal que el referido precepto constitucional, reproduce el artículo 3 de la citada LRJPAC, que incluye además de los anteriores el criterio de eficiencia y servicio a los ciudadanos que debe regir la actuación de las administraciones públicas.

Cuarta. La concentración parcelaria objeto de la queja que resolvemos trae causa del Decreto 693 (BOE 29-03-1972) por el que se declaran de alto interés nacional las actuaciones del IRYDA en el campo de Cartagena; del Decreto 1631, de 24 de mayo de 1974, por el que se aprueba el Plan Especial de Transformación de la Zona Regable del Campo de Cartagena; y de las Órdenes Ministeriales de mayo de 1973 (BOE 29-05-1973 y BOE 2-06-1973) por las que se declara la utilidad pública y *urgente ejecución* de la concentración parcelaria en dos zonas regables y cinco sectores de concentración del campo de Cartagena.

Quinta. Iniciada la concentración parcelaria, obra en el expediente documento firmado por el Jefe de Servicio de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, constando el traslado de una determinada superficie propiedad del reclamante desde los sectores X y XI al XV, y un acta de comparecencia del reclamante ante la Dirección General de Desarrollo Agrario, donde se le comunica que debido a un error material no le han sido adjudicadas las oportunas parcelas en los sectores hidráulicos X y XI, y resto en el XIV, y que no obstante dicha superficie le será adjudicada –en su día– en el sector XIV. Mientras tanto –expresa el citado documento– se le cede en precario una finca (de "masas comunes") en los sectores hidráulicos X y XI que habrá de abandonar cuando sea requerido para ello por la Consejería de Agricultura o por cualquier organismo que tuviera competencias sobre la finca.

En otro de los documentos obrantes en el procedimiento, suscrito por el a la sazón Concejal Delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Cartagena en noviembre de 1997, se expresa que esas masas comunes cedidas en precario al reclamante fueron adjudicadas posteriormente al Ayuntamiento de Cartagena en aplicación del artículo 206 de la LRDA, y que esa administración local, sin tener conocimiento de la adjudicación en precario al reclamante, procedió a enajenarlas; después de lo cual, con el ánimo de solucionar el problema y sobre la base de lo prevenido en el artículo 205.4 de la LRDA, solicitan a la Dirección General de Estructuras e Industrias Agroalimentarias que ceda en precario al Ayuntamiento de Cartagena dos fincas sin dueño conocido que nadie posea, autorizando asimismo su posterior

cesión en precario al reclamante, hasta que éste sea compensado definitivamente en los sectores hidráulicos de concentración XIV y XV.

La citada Dirección General resuelve la petición del Ayuntamiento de Cartagena el 10 de diciembre de 1997, estimándola en todos sus términos. Ello no obstante, consta en esa Resolución que en las superficies cedidas no se podrá implantar ningún tipo de cultivo permanente, ni realizar mejoras sin la expresa autorización de la Dirección General. Limitaciones ésas que, en cierto modo, contradicen lo afirmado en el informe remitido a esta Defensoría por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural cuando sostiene que "en todo momento, a través de los distintos actos administrativos realizados por esta Dirección General, se ha tratado de evitar perjuicio económico al reclamante, puesto que ha estado ocupando parcelas y cultivando tierras ininterrumpidamente".

Sexta. Con el reclamante ocupando fincas en precario el procedimiento de concentración sigue su marcha, y de conformidad con el artículo 205 de la LRDA, con fecha 15 de junio de 2004, y una vez que han transcurrido 5 años de la aprobación del Acta de Reorganización de la Propiedad que incluye los varias veces citados sectores hidráulicos X y XI, la administración regional se ve obligada a remitir al Ministerio de Hacienda la relación de bienes cuyo dueño no fuera conocido. Y así se hace, manifestando en la oportuna comunicación girada al efecto a la Delegación de Hacienda de Murcia que algunas de esas tierras fueron cedidas en precario al Ayuntamiento de Cartagena, autorizando su posterior cesión en precario por parte de esa administración local al reclamante. Ese escrito tiene contestación el 19 de enero de 2005, cuando el Delegado Provincial de Economía y Hacienda advierte al Director General de Regadíos y Desarrollo Rural que el artículo 205.4 de la citada LRDA sólo permite la cesión al Ayuntamiento de Cartagena, no a un particular. Por su parte, y contestando a lo anterior, la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural remite comunicación a la Delegación de Hacienda afirmando que ellos no han cedido nada al reclamante sino al Ayuntamiento de Cartagena, y que la autorización a ese Ayuntamiento para que a su vez pudiese ceder en precario al reclamante fue excepcional y para "evitar problemas de difícil solución", y que además –así se afirma expresamente el 3 de febrero de 2005– "actualmente se encuentra en su última fase la terminación de los sectores hidráulicos XIV y XV, momento en que se hará efectivo la adjudicación en propiedad al reclamante, de la superficie que éste cedió en los sectores hidráulicos X y XI hace más de 15 años".

Casi cinco años después de ese cruce epistolar entre ambas administraciones, no sólo no se ha solucionado nada sino que, con fecha 29 de enero de 2009, se produce una nueva comunicación, en este caso de la Delegación de Hacienda al reclamante. En ella la Hacienda Pública responsabiliza a la DGRDR de "haber usado como tapadera al Ayuntamiento de Cartagena", de "cometer diversos errores que soluciona trasladando al reclamante de una parcela a otra", de "estar haciendo un uso impropio e irregular del artículo 205.4 de la LRDA" y de "tener al reclamante en una situación de precarista durante más de 20 años que es claramente injusta y difícilmente explicable"… Se sostiene además que "la Consejería de Agricultura deberá hacer efectivos los derechos del reclamante con otras fincas de reemplazo que sean análogas y de valor proporcionado, o en su caso mediante la indemnización que corresponda" (artículo 234 de la LRDA). Definitivamente, en esa comunicación se termina emplazando a la DGRDR a que en cuatro meses proceda a la entrega a la Hacienda Pública de las parcelas referidas libres de la ocupación del reclamante, advirtiendo que de no hacerlo en el plazo indicado propondrán a la Dirección General del Patrimonio del Estado el ejercicio de las acciones legales que correspondan para obtener judicialmente la entrega de los citados títulos.

Séptima. Esta Defensoría, en lo que afecta al reclamante y promotor de la queja, cree inoportuno adentrarse en la consideración que le merece el trabajo desarrollado por la administración promotora de la concentración parcelaria a lo largo de estos largos veinte años. Consta expresamente que esa administración pública admite la existencia de errores y reconoce, asimismo y por ello, la existencia de los derechos del reclamante. Ambas cosas son evidentes. La Ley de aplicación establece un procedimiento de concentración que de haberse seguido con la debida diligencia, pese a lo complejo del mismo, se habrían evitado errores como los acaecidos en este caso. Así, ese procedimiento incluye trabajos de investigación previa sobre las parcelas afectadas y requerimiento de títulos a los participantes en la concentración (art. 190), publicidad de la concentración a través de las oportunas comunicaciones y notificaciones (art. 192), fincas de reemplazo de titular desconocido durante la investigación, período de cinco años para reconocer el dominio y posibilidad de ceder en precario al Ayuntamiento que corresponda el cultivo de las fincas sin dueño conocido que nadie posea, mientras el Ministerio de Hacienda no resuelva lo pertinente sobre el destino de tales fincas (art. 205), competencias de registradores y notarios (art. 207).

Octava. Pero además de los errores que están en la base de la reclamación planteada por el promotor de la queja, más reprochable si cabe es la indebida dilación con la que se ha acometido un procedimiento aún no concluido después de más de dos décadas. Los años transcurridos desde el inicio de este procedimiento de concentración exceden de todo plazo razonable y nos hablan de un funcionamiento anormal de la administración que no ha sujetado su actuación a principios básicos como los de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos que se recogen en nuestro ordenamiento jurídico administrativo. Se trata de una dilación indebida en la resolución de un procedimiento que, por lo que hace al reclamante y habida cuenta de lo relatado, le ha causado graves perjuicios. La jurisprudencia se ha ocupado de casos que guardan cierta relación con el que abordamos; así en la Sentencia del TSJ de Aragón 84/2003, de 18 de enero, se sostiene en su fundamento de derecho tercero que: "*el procedimiento de concentración parcelaria se inicia con el Decreto declarando de utilidad pública la concentración de una concreta zona, el cual produce determinados efectos, entre ellos el que las mejoras que los propietarios realicen en los terrenos comprendidos dentro del perímetro a concentrar después de la aprobación del Decreto no serán tenidos en cuenta al efecto de clasificar y valorar las tierras, a menos que la realización de tales mejoras haya sido autorizada por el Instituto*". Como ya se ha dicho, el promotor de esta queja, con las parcelas adjudicadas en precario, no estaba autorizado para hacer mejoras en las mismas. Y, abundando en ello, en ese mismo fundamento tercero de la resolución judicial citada se expresa que: "*desde que se inicia el procedimiento de concentración parcelaria con el Decreto que la declara de utilidad pública hasta que se recibe la posesión de la finca o fincas de reemplazo adjudicadas en sustitución de las aportadas se produce una situación de pendencia, con la consiguiente carga de incertidumbre sobre cuáles serán las nuevas parcelas, lo que incide sobre las obras de mejora, que prácticamente no se realizan durante el mentado período*". Y, de aplicación plena al caso que nos ocupa, se dice en esa sentencia que: "*Es llano que los particulares afectados por la concentración parcelaria ostentan* ***un interés legítimo en que aquélla se realice en un plazo razonable****, y por lo se refiere a la Administración, una vez iniciado el procedimiento de* ***concentración pesa sobre ella el deber de no incurrir en dilaciones indebidas****".*

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que puedan sustanciarse responsabilidades de otra índole en otros ámbitos distintos al de esta Institución; habida cuenta del reconocimiento de los errores que se han cometido por la administración actuante, de su expresada disponibilidad para dar una solución a este problema y del a

todas luces razonable escepticismo del reclamante manifestado en su legítima opción por la vía de la indemnización antes que por la de una adjudicación de fincas de reemplazo que lleva décadas esperando, creemos que la solución que se debe instar desde esta Defensoría debe ir en esa misma línea.

Como viene sosteniendo parte de la doctrina científica que se ha adentrado en el estudio de este instituto jurídico, en materia de concentración parcelaria nuestros tribunales han venido imponiendo la tesis del equilibrio entre lo aportado al procedimiento de concentración y lo que, tras el mismo, la administración devuelve al propietario, de lo contrario estaríamos ante una más que evidente incautación de bienes que, curiosamente, no revierte en el interés público, sino en el de otro particular. De ahí que, con ese criterio como guía, sin más dilaciones, la administración pública responsable de este proceso de concentración, de sus errores y de sus retrasos, debe iniciar los trámites para hacer efectiva en el más reducido plazo de tiempo que le sea posible la indemnización reclamada por el promotor de esta queja, atendiendo de ese modo la expresa petición cursada por el mismo a esa Dirección General. Indemnización que, sobre la base de lo prevenido en el artículo 234 de la LRDA, también es una de las vías expresamente sugeridas por la Delegación de Hacienda de Murcia para dar una solución definitiva a este asunto.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL

Los errores evidenciados en el procedimiento de concentración parcelaria, agravados por la excesiva dilación en la subsanación del mismo, exigen que de manera inmediata se proceda a incoar el oportuno expediente de responsabilidad patrimonial para la indemnización de los daños y perjuicios causados al promotor de la queja.

X.2. Bienes Públicos

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 182/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El día 29 de abril del presente año quedaba registrada la entrada en esta Defensoría de una queja de D. XXX, vecino del municipio de Fortuna, en la que ponía de manifiesto el mal estado en el que se encuentra un camino público de titularidad municipal, denominado "Ajauque-Pozo de la Villa", mediante el que el promotor de esta queja accede a una vivienda de su propiedad. Según expone el reclamante, son varios los años transcurridos desde que los usuarios de ese camino público registraron por primera vez ante el Ayuntamiento de Fortuna las oportunas reclamaciones dirigidas a que esa corporación municipal atendiese la necesaria reparación y acondicionamiento del citado camino, sin que hasta la fecha se haya procedido a ello.

El promotor de la queja sostiene que el deterioro de ese camino se ha agravado sustancialmente desde la construcción, hace más de un año, de unas obras para el desvío de la circulación de vehículos en la población de Fortuna, así como por la ejecución, a medio realizar y en la actualidad paralizada, de una urbanización denominada "Las Lamparillas". Con estas obras, se afirma en la queja, el camino público de acceso a la propiedad del reclamante se cortó, habilitando para el paso en su defecto una especie de túnel mal acondicionado, y de dimensiones insuficientes para el tránsito de determinados vehículos, atravesado el cual se vuelve a conectar con el camino público.

Segundo. El reclamante adjunta a su queja el último de los escritos que dirigió a la Alcaldía de Fortuna, con registro de entrada en el Ayuntamiento de esa localidad el pasado 8 de enero de 2009. Este escrito abunda en lo arriba expresado: confirma que desde el año 2001 el promotor de la queja está registrando escritos en el Ayuntamiento de Fortuna para denunciar esa situación, y pone de relieve que tanto la circunvalación como la urbanización han afectado negativamente a un conjunto importante de vías de comunicación existente en ese entorno. En ese escrito se expresa asimismo que han sido varias las ocasiones en las que el estado del camino ha generado diversos daños en su vehículo, y, por último, también reseña que la citada urbanización "Las Lamparillas" ha afectado al camino público por los desniveles existentes entre éste y los colindantes viales interiores de esa urbanización, con la existencia de una pendiente acentuada, peligrosa y desprovista de elementos de seguridad.

A esa denuncia acompaña diverso material fotográfico en el que se constata la evidencia de algunos de los extremos denunciados por el promotor de la queja.

Tercero. Admitida a trámite la queja el pasado 18 de mayo de 2009, y comunicada tal circunstancia a su promotor, esta Institución practicó en esa misma fecha el oportuno requerimiento al Ayuntamiento de Fortuna al objeto de que informase sobre la cuestión planteada y, en su caso, aportase la documentación necesaria para aclarar los diversos extremos que se suscitan en el escrito de queja.

A resultas de ese requerimiento, el pasado 11 de junio tuvo entrada en esta Institución un informe suscrito el 29 de mayo de este mismo año por el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Fortuna. En ese informe, de cuyo encabezamiento se desprende que es respuesta al antes citado escrito de reclamación de 8 de enero de 2009 promovido por el reclamante, se reproduce básicamente el contenido de lo abordado en una reunión mantenida en noviembre de 2008 para tratar sobre esta problemática. A esa reunión asistieron: el reclamante y su cónyuge, el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Fortuna, un representante de la Junta de Compensación del Plan Parcial de la antes citada urbanización "Las Lamparillas" –que en ese mismo acto representaba a la empresa urbanizadora–, dos técnicos más de la empresa, y el arquitecto técnico municipal que firma el informe.

Según se expresa en el escrito citado, en esa reunión se abordan diversas cuestiones relacionadas con el mencionado camino, algunas de las cuales también se suscitan en la queja: el corte del camino y la apertura de una vía de comunicación que sirve de salida de aguas y de paso de vehículos pequeños que conecta, ya superadas las obras circunvalación, con el antiguo camino; la impracticabilidad de ese paso en días lluviosos; la colocación de estacas en la ejecución del citado plan parcial que invaden la propiedad del reclamante; y la creación de una pendiente muy pronunciada, peligrosa y sin elementos de seguridad, justo en el límite entre el camino público y los viales interiores del plan parcial.

Sobre las cuestiones abordadas en esa reunión, que no agotan las planteadas en la queja dirigida a esta Defensoría por el reclamante, se llegaron –tal y como se expresa en el informe– a diversos acuerdos entre todos los asistentes. Acuerdos ésos que salvarían tanto los problemas de acceso, como el derivado de los desniveles del terreno; no entrando a hacer apreciación alguna sobre el estado general del camino público de referencia y su necesario acondicionamiento, que es el objeto esencial de la queja.

Por último en el informe del arquitecto técnico del Ayuntamiento se sostiene que, pasado el tiempo, no sólo no se ha ejecutado ninguno de los acuerdos adoptados en aquella reunión, sino que además el Plan Parcial de "Las Lamparillas" está para-

lizado, por lo que este técnico que suscribe propone una serie de actuaciones a realizar directamente por el Ayuntamiento, tendentes a solventar los problemas del acceso y del desnivel, pero no así los del estado del camino público.

Cuarto. Recibido el informe, se da traslado del mismo al promotor de la queja para que, en un plazo de 10 días, nos remita las consideraciones que crea oportunas tras su lectura. Entretanto, y con anterioridad a la recepción de esas consideraciones, se recibe en esta Institución un nuevo escrito del promotor de la queja, con entrada registrada el pasado 3 de julio, que adjunta copia de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de Fortuna y copia de un recurso potestativo de reposición interpuesto por el reclamante contra el citado acuerdo. El acuerdo adoptado en el seno de la Junta de Gobierno Local consiste en requerir de la Junta de Compensación del Plan Parcial de "Las Lamparillas" la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar el acceso a la propiedad del reclamante, concediendo a esos efectos un plazo de 15 días, transcurrido el cual –se advierte en el acuerdo– será el Ayuntamiento el que subsidiariamente ejecute esas actuaciones a costa de la entidad obligada. La razón fundamental que esgrime el reclamante para interponer recurso de reposición contra ese acuerdo es que en el mismo sólo se hacen consideraciones relativas al acceso, pero ninguna relativa al arreglo del camino, ni, tampoco, a la corrección de los ya aludidos desniveles.

Quinto. Ya por último, el 7 de julio, recibimos en esta Defensoría la contestación que da el promotor de la queja al informe municipal que le fue oportunamente remitido. En ella se rechaza expresamente el contenido de ese informe del Ayuntamiento de Fortuna, y se vuelve a constatar que la reivindicación fundamental del reclamante es el acondicionamiento del camino público que, por lo que parece desprenderse de este último escrito, pasaría por el asfaltado de unos 800 metros.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La cuestión objeto de queja tiene soporte constitucional en el art. 33.1 de la Constitución Española de 1978 que, como es sabido, reconoce el derecho a la propiedad privada. Es de aplicación distinta normativa de régimen local, y, en concreto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Tercero. Dado que la queja no sólo tiene por objeto ese aspecto más sustantivo que se deriva de la lectura de los antecedentes fácticos, y que tiene que ver con el estado del camino público, sino que además el reclamante también realiza consideraciones en torno a la falta de respuesta de la administración local de Fortuna a diversos escritos relativos a este asunto, que fueron elevados en distintas fechas por el reclamante a esa administración, también hemos de citar aquella normativa que sustentaría el derecho de los administrados a obtener una respuesta de la administración, y en concreto lo expresado a ese respecto tanto por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, que regula el Derecho de Petición como por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. El citado Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto

Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL), establece en su artículo 74.1 que: "Son bienes de uso público local los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local". A mayor abundamiento, casi del mismo tenor literal al del precitado artículo 74 del TRRL es el contenido del artículo 3.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; allí se afirma que: "son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local. En ese mismo Reglamento de Bienes, sus artículos 74, 75 y 76 vienen a establecer que la utilización de los bienes de dominio y uso público se regirá por las disposiciones contenidas en esa primera sección del Capítulo IV de este Reglamento.

Dada la naturaleza del camino público objeto de esta queja estamos ante lo que el citado reglamento clasifica como bien de dominio público de uso común y general, un uso que corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impide el de los demás interesados. El uso común general de este tipo de bienes, se afirma en el artículo 76, se ejercerá libremente, con arreglo a la naturaleza de los mismos.

Quinto. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo 25.2.d) que el municipio ejercerá en todo caso competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. Esta misma Ley, en su artículo 26.1.a) expresa que todos los municipios, por sí o asociados, deberán prestar, en todo caso, servicios de acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Pero además de esa obligación "ex lege" que se impone a todos los ayuntamientos por los precitados artículos de la Ley 7/1985, esta misma norma establece en su artículo 18.1.g) el derecho de todo vecino a exigir la prestación, y, en su caso el establecimiento del correspondiente servicio público, en todos aquellos supuestos que constituyen competencia municipal propia de carácter obligatorio.

Sexto. Por último, y aunque no sea parte esencial de la queja promovida por este ciudadano, esta Defensoría también cree oportuno realizar alguna consideración en torno a la posible responsabilidad patrimonial de la administración que podría derivarse de los daños y perjuicios que un camino público en mal estado de mantenimiento y conservación podría ocasionar en bienes y personas. El artículo 106 de la Constitución Española consagra el principio de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las administraciones públicas por las lesiones que reciban los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Se trata de un precepto constitucional desarrollado por el título X de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En el artículo 139 de esta Ley se expresa con claridad que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; siendo así reiterada la jurisprudencia que estima las reclamaciones indemnizatorias por daños y perjuicios derivados del mal estado de las vías públicas.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE FORTUNA

En cumplimiento de la prevenido tanto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, que regula el Derecho de Petición, como en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, esa administración local viene obligada a contestar y notificar en tiempo y forma a los administrados sobre aquellos escritos y peticiones dirigidas a la misma.

RECOMENDACIÓN

El Ayuntamiento de Fortuna, dando cumplimiento al compromiso adquirido con el promotor de la queja recogido en el informe remitido a esta Defensoría, procederá en el más corto espacio de tiempo posible a ejecutar los acuerdos en él contenidos sobre acceso a la propiedad del reclamante y eliminación del peligro del talud. Del mismo modo, dentro del orden de prioridades que aquella Corporación estime oportuno y conforme a su disponibilidad presupuestaria, el Ayuntamiento de Fortuna debería proceder al acondicionamiento del camino público Ajauque-Pozo de la Villa.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 241/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El día 12 de junio de 2009 (registro de entrada nº 433, de 12 de junio de 2009), D. XXX presentó queja en esta Institución en la que denunciaba la actitud pasiva del Ayuntamiento de Jumilla al no hacer efectivo el acuerdo municipal de fecha 30 de junio de 2008 por el que conminaba a un vecino a eliminar los obstáculos que impedían al promotor de la queja el paso por un camino declarado demanial, por tener constancia de su uso común y general durante más de cuarenta años, tras expediente de investigación promovido al efecto.

El interesado aporta al expediente documentación acreditativa de la inexistencia de autorización urbanística para el corte del camino por el vecino apremiado.

Asimismo se aporta, nuevo acuerdo municipal, de fecha 24 de noviembre de 2008, por el que se requiere al citado vecino para que proceda a realizar "los trabajos de limpieza y desbroce que sean precisos para mantener el camino en adecuadas condiciones de salubridad, seguridad y ornato público, evitando con ello el riesgo de incendio" concediéndole un plazo de diez días para su ejecución, procediendo en caso contrario el Ayuntamiento a su ejecución subsidiaria, a costa del obligado.

Segundo. Con fecha 24 de julio de 2009, se admitió a trámite la queja, solicitándose informa-

ción al Ayuntamiento afectado que, tras nuevo requerimiento con fecha 23 de septiembre de 2009, por haber transcurrido el plazo concedido para aportar el preceptivo informe, procedió a su envío con fecha 1 de octubre de 2009, ratificando la naturaleza demanial del citado camino, así declarada previo expediente de investigación en virtud de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de junio de 2008.

En cuanto a la transitabilidad del camino, nos indican que se encuentra expedito sólo en parte, estando ocupado el resto siendo imposible acceder por el mismo a otro vial denominado "pista de colonización".

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de reclamación está constituida con carácter básico por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; y en el ámbito local, por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en su desarrollo, por el R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Es asimismo de aplicación, en lo que al procedimiento de ejecución subsidiaria se refiere, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la cuestión objeto de análisis, no existe duda en cuanto a la naturaleza pública o demanial del camino en particular, declarada en virtud de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de 30 de junio de 2008 celebrada al efecto, previa comprobación de su adscripción a un uso común o vecinal durante más de cuarenta años. Este acuerdo además es firme, pues no se tiene constancia que se haya producido a su impugnación por ninguna de las partes en el orden jurisdiccional correspondiente.

Además y para corroborar este dato, la petición de información de esta Defensoría se ha dirigido expresamente a clarificar este extremo, siendo definitivo el informe aportado por la Corporación donde de forma gráfica mediante línea roja, en un principio continua y posteriormente discontinua en la zona obstaculizada, se marca el camino público, que "se inicia en la esquina noroeste de la parcela 625 y termina en la pista de Colonización donde confluyen las subparcelas a y b de la parcela 191, todo ello en el polígono 139".

Sin embargo, llama la atención que se corrobore la obstaculización del camino público en la confluencia entre las parcelas catastrales 534 y subparcela 191 b, con la 191 a, sin que desde el Ayuntamiento se haya adoptado ninguna medida efectiva de ejecución material para poner remedio a la citada usurpación, dando así cumplimiento al acuerdo municipal de 30 de junio de 2008.

En este sentido, la ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, proclama en su artículo 55 –con carácter básico– la potestad de las mismas de recuperar, en cualquier momento, la posesión indebidamente perdida de sus bienes de dominio público, conforme al procedimiento que cada administración establezca al respecto.

Esta prerrogativa, de recuperación posesoria –pues la adquisición de la titularidad de los bienes de dominio público está vedada por el privilegio de la imprescriptibilidad–, se recoge asimismo en la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen local, debiendo acudir para su desarrollo al R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

En el citado reglamento, previa incardinación de los caminos junto a las plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general, entre los bienes de uso público local y por tanto de dominio público (artículos 2 y 3), y atribuirles las características propias de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad (artículo 5), autoriza que se lleve a cabo un uso privativo de los mismos siempre que este uso esté amparado en el correspondiente Título concesional (artículo 75).

En el presente caso, consta certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Jumilla, de fecha 4 de junio de 2007, donde se confirma que por parte del obstaculizante no se ha solicitado autorización para cortar el camino público, siendo coherente las medidas acordadas por el Pleno en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2008, antes citado, donde se insta al usurpador a la eliminación del camino de los obstáculos que impidan su tránsito, con apercibimiento de ejecución subsidiaria, en coherencia con la previsión final del artículo 53 del reglamento de bienes de las entidades locales donde se señala que las Corporaciones harán efectivos los derechos de recuperación de sus bienes de dominio público, utilizando al efecto los medios compulsorios legalmente admitidos, sin perjuicio de que si los hechos usurpatorios tienen apariencia de delito se pongan en conocimiento de la autoridad judicial (art. 71.3).

Finalmente en cuanto a los medios coercitivos propuestos por el Consistorio en el acuerdo citado en el párrafo anterior, señala el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que procederá la ejecución subsidiaria, cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, en cuyo caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado, pudiendo exigir el importe de los gastos, daños y perjuicios ocasionados antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Compete al ayuntamiento de Jumilla la potestad de recuperación posesoria de sus bienes de dominio público frente a ocupaciones indebidas y no amparadas por el título autorizatorio correspondiente.

En el caso que nos ocupa, deberá proceder, en caso de no cumplimiento voluntario del usurpador, a la ejecución subsidiaria de las medidas necesarias para posibilitar el tránsito por el terreno público en toda su extensión, a costa del obligado.

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V.E. concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

X.3. Bienestar Social

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 39/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 27 de enero de 2009, D. XXX presentó queja relativa a sendas actuaciones de la Residencia de Personas Mayores de San Basilio de Murcia. En concreto, muestra su disconformidad con la subida de la cuota exigida, en la que toman como base una nueva pensión descubierta proveniente del extranjero; y en segundo lugar, con la negativa de la residencia de su cambio de condición de "asistido" a "válido", situación primera en la que se encontraba –según su versión–, no por su condición física, sino por estar junto a su pareja que sí se encontraba en situación de "asistida".

Segundo. Consta en el expediente aportado por el reclamante, justificante de pensión por incapacidad permanente total, revalorizada para 2009, por importe de 561,55 euros; y comunicación de nuevo recibo mensual girado por la residencia para la anualidad 2009, en la que se adiciona a la pensión española, otra procedente del extranjero –también revalorizada– por importe de 200 euros.

Tercero. Con fecha 3 de marzo de 2009 (registro de entrada en la Residencia de Personas Mayores "San Basilio" de 9 de marzo de 2009) se admitió a trámite la queja, requiriendo con esa fecha información al citado centro sobre las razones del incremento de cuota a pagar y fuentes de las que se ha obtenido la individualización de dicha cantidad, así como la posibilidad de que el interesado pueda sustituir su plaza de residente asistido por la de residente válido.

Cuarto. Habiendo transcurrido en exceso el plazo de un mes conferido al centro sin la emisión del correspondiente informe, el 20 de abril de 2009 (acuse de recibo de 28 de abril de 2009) se reiteró la solicitud del citado informe, procediendo a emitirse con la citada fecha (registro de entrada en esta Institución de 29 de abril de 2009).

Quinto. Consta en el expediente asimismo, informe médico 25 de abril de 2003 y Resolución de 3 de junio de 2003 de la Dirección del ISSORM (por suplencia, de la Secretaria Sectorial de Acción Social, Menor y Familia) de adjudicación de plaza de "asistido", y Resolución de 18 de mayo de 2006 de la Directora del ISSORM por la que se paraliza provisionalmente la cobertura de plazas para personas válidas en la residencia "San Basilio" en tanto permanezcan las obras de remodelación previstas para ajustar al centro a los requerimientos exigidos a la normativa actual.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida por el Decreto 31/1994, de 25 de febrero, sobre procedimiento para ingreso y traslado de usuarios en centros residenciales de la Administración para personas mayores, modificado por Decreto 60/2002, de 22 de febrero, y por el Decreto 45/1996, de 19 de junio, que regula los precios públicos por utilización de centros y servicios sociales gestionados por el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Tercera. Respecto a la primera cuestión planteada por el reclamante en su queja sobre el régimen económico de su estancia en la residencia, hay que poner de manifiesto que, si bien es cierto que su

ingreso en la residencia se produjo calculando el porcentaje reglamentariamente establecido sobre su pensión española, también es cierto que con el afloramiento de nuevas pensiones ha de verse incrementada su aportación pues también ha aumentado la base imponible. Así lo establece el artículo 4 letra a del Decreto 45/1996, de 16 de junio, incluyendo todos los ingresos, por cualquier concepto y procedencia –pública o privada– a lo que el interesado habrá de descontar aquellas cargas económicas que deba soportar –impuestas en forma legal– por razones familiares o análogas.

Cuarta. Sentado lo anterior, la disquisición se circunscribe a si es posible el cambio de situación del residente de "asistido" a "válido".

Al respecto, es cierto que el Decreto 31/1994, de 25 de febrero –antes mencionado–, en su redacción otorgada por el Decreto 60/2002, no contempla esta situación, sino la inversa, a saber, el cambio de "válido" a "asistido" pues en buena lógica del legislador y de forma natural, lo más frecuente es que los residentes cada vez necesiten de una mayor atención en los quehaceres de su vida diaria. Sin embargo, el supuesto que nos ocupa es precisamente el contrario, esto es, que el reclamante solicita su pase a "válido" con la consiguiente reducción económica de sus aportaciones al centro, alegando no requerir ningún tipo de asistencia, correspondiendo a esta Defensoría salvaguardar también en este ámbito los derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Centrándonos en la regulación normativa, el artículo 3 del Decreto citado clasifica las residencias en "válidas", destinadas a personas mayores autónomas para la realización de actividades normales de la vida diaria; en "asistidas", destinadas a personas mayores que no pueden realizar las actividades normales de la vida diaria, precisando para ello la asistencia de terceras personas; y en "mixtas", destinadas a personas mayores autónomas para la realización de actividades normales de la vida diaria y a personas que precisen para ello de la asistencia de terceras personas.

Pues bien, en este caso, la Residencia de personas mayores "San Basilio" es un residencia mixta, por acoger personas tanto necesitadas de asistencia, como autónomas, si bien en la actualidad y por Resolución de la Directora del ISSORM de 18 de mayo de 2006, se paralizó provisionalmente la cobertura de plazas para personas mayores "válidas" en tanto se finalizaban unas obras de remodelación.

Continuando con el articulado del texto reglamentario, el artículo 5 "requisitos generales" (de los usuarios de los centros residenciales para personas mayores) exige para solicitar la plaza de válido "poder valerse por sí mismo para la realización de actividades normales de la vida diaria" (letra c); y para solicitar plaza asistida "que el solicitante no pueda realizar las actividades normales de la vida diaria, precisando para ello de asistencia de terceras personas" (letra d).

Por Resolución de la Dirección del ISSORM (por suplencia, de la Secretaría sectorial de Acción social, Menor y Familia) de 3 de junio de 2003, se acordó adjudicar una vacante producida en la Unidad Asistida de la residencia al reclamante, que hasta la fecha ocupaba la plaza de válido. La resolución se emitió a la vista del expediente G-108/1997, previa solicitud del interesado, y con fundamento en el informe médico de fecha 25 de abril de 2003, respecto del que esta Defensoría no se puede pronunciar: en primer lugar, por ser ilegible (tanto por la letra, como porque se obtuvo por fax); y en segundo lugar, porque no procede entrar a valorar si de la lectura del mismo se infiere la necesidad del cambio a una plaza asistida.

No obstante lo anterior, puesto que el artículo 35 del Decreto analizado contempla como causa de reasignación de plaza "aquellas que supongan una modificación en capacidad del residente de forma permanente para el desempleo de las actividades

normales de la vida diaria…" (recordemos que siempre en el sentido de "válido" a "asistido"), previo informe médico en modelo normalizado (art. 36); esta Defensoría entiende que en igual sentido, nada debería impedir la posibilidad de un cambio de "asistido" a "válido" si un informe médico adecuado al efecto así lo ratificara, con la consiguiente reducción de las retribuciones correspondientes.

Sobre la inexistencia de plazas válidas en el centro, se efectuó visita al Centro comprobando la permanencia de residentes en su condición de válidos, sin que las obras anunciadas en la resolución de 18 de mayo de 2006, pudiera justificar de forma razonable un cambio de centro en el caso de que se comprobara la mejoría del residente en virtud del informe reseñado en el párrafo anterior.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente,

RECOMENDACIÓN AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL Y A LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES "SAN BASILIO" DE MURCIA

La normativa aplicable permite volver a valorar los expedientes de los residentes cuando circunstancias sobrevenidas modifiquen su capacidad, por lo que procede revisar el expediente de D. XXX para comprobar si reúne los requisitos para ocupar una plaza "válida" no necesitada de asistencia para las actividades normales de la vida diaria, sin que esto suponga cambio de centro, en idénticas condiciones a los residentes válidos que permanecen en el mismo.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA A LA CONSEJERÍA DE POLITICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN, DE LAS QUEJAS Nº 40/2009, 55/2009 Y 204/2009, SOBRE COMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES

I. ANTECEDENTES

Primero. En diversos expedientes de queja que, a los efectos de la presente resolución, son objeto de acumulación (Q40/2009, 55/2009 y 204/2009), los interesados solicitan la compatibilidad entre los servicios de tipo asistencial (en la mayoría de casos residencia pública o centro de día) y la prestación económica denominada "cuidados en el entorno familiar", ligada al horario en el que el dependiente no se encuentra en el centro público o concertado correspondiente.

Segundo. Estos expedientes fueron admitidos a trámite, solicitándose información a la administración pública implicada, la cual emite informe en el que nos transmite que la intención de la administración regional es la de dar respuesta a estas situaciones cuando se apruebe el correspondiente decreto de compatibilidad.

Tercero. De diversas reuniones mantenidas con personal de la Consejería y del Instituto Murciano de Acción Social, se desprende que la normativa correspondiente se demorará en el tiempo más de lo inicialmente previsto, pues apenas se ha avanzado en los trámites necesarios para su aprobación.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, tiene por objeto tal como reza su artículo primero *"regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español".*

Este sistema de prestaciones se articula en torno a un triple nivel: un nivel de protección "mínimo" establecido por la Administración General, un nivel de protección "intermedio" que se acuerda entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las comunidades autónomas a través de los convenios correspondientes, y un nivel "adicional" de protección, que podrá establecer cada comunidad autónoma (artículo 7).

En cuanto a la naturaleza de las prestaciones, podrán tener la condición de "prestaciones de naturaleza económica", o de "servicios", teniendo estos últimos un carácter preferente, pudiendo concederse al beneficiario excepcionalmente, una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den la condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.

Son por tanto, servicios de concesión preferente, los enumerados en el artículo 15 de la ley:

- Servicio de Teleasistencia.
- Servicio de Ayuda a domicilio.
- Atención de las necesidades del hogar.
- Cuidados personales.
- Servicio de Centro de Día y de Noche.
- Centro de Día para mayores.
- Centro de Día para menores de 65 años.
- Centro de Día de atención especializada.
- Centro de Noche.
- Servicio de Atención Residencial.
- Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
- Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.

Y sólo excepcionalmente la ley prevé las ayudas de carácter económico, cuando no sean oportunas las anteriores, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.

Tercera. Sentado lo anterior, el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, tras fijar los criterios para determinar la intensidad de cada

unos de los servicios del catálogo del articulo 15 de la citada ley, la compatibilidad e incompatibilidad de los mismos y la cuantía de las prestaciones económicas, remite a la normativa autonómica que en su caso se establezca para determinar las intensidades de algunos servicios y las compatibilidades entre los mismos (vid. artículo 11).

En desarrollo de esta previsión legal, las comunidades autónomas de Andalucía, por Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de prestación de los servicios, el régimen de compatibilidad de las prestaciones y la Gestión de las Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía; de Cataluña, en virtud de Orden 55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD) y las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de Cataluña; y finalmente la de Madrid, en virtud de la Orden 2386/2008, de 17 de diciembre, por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, para la elaboración del programa individual de atención, las prestaciones económicas y servicios y el régimen de incompatibilidades y demás normativa de desarrollo, han abordado una completa regulación que abarca tanto el régimen de compatibilidades e incompatibilidades, las intensidades de los servicios prestados y el procedimiento general para solicitar y obtener la prestación, dotando en suma de mayor seguridad jurídica al sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia prácticamente recién estrenado en el ámbito nacional.

Cuarta. Desde un punto de vista procedimental, la ley regional 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, contempla en su artículo 53 el procedimiento previsto para la aprobación de disposiciones de carácter general, en concreto:

"*La iniciación del procedimiento se llevará a cabo, a través de la oportuna propuesta dirigida al Consejero, por el órgano directivo de su departamento competente por razón de la materia, mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, al que se acompañarán la exposición de motivos y una memoria que justifique su oportunidad, y que incluya la motivación técnica y jurídica, con el grado de detalle suficiente que requiera el caso, de las concretas determinaciones normativas propuestas; de los estudios o informes que se estimen precisos para justificar su necesidad, así como de una relación de las disposiciones cuya vigencia resulte afectada.*

También irá acompañado por un estudio económico de la norma, con referencia al coste y financiación de los nuevos servicios, si los hubiere.

En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en los mismos.

A lo largo del proceso de elaboración del proyecto deberán recabarse el informe jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería proponente y los informes, consultas y aprobaciones previas que tengan carácter preceptivo.

Elaborado el texto de un proyecto de disposición general que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, el órgano directivo impulsor lo someterá al trámite de audiencia, bien directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición, en los términos que a continuación se exponen:

Dicho trámite deberá concederse por un plazo no inferior a quince días, salvo razones de urgencia, debidamente acreditadas en el expediente, en cuyo caso el plazo podrá reducirse a siete días.

La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados deberá ser motivada por el órgano que acuerde la apertura de dicho trámite.

(..)

Podrá también prescindirse del trámite anterior, si las organizaciones o asociaciones que agrupen o representen a los ciudadanos, hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración indicado en el apartado 2 de este artículo.

Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, sólo podrá excluirse este trámite cuando la materia lo requiera, por graves razones de interés público, acreditadas expresamente en el expediente.

Cuando así lo exija la naturaleza de la disposición, o por decisión expresa del Consejo de Gobierno o del Consejero competente por razón de la materia, el proyecto será sometido a información pública, durante el plazo establecido en el apartado 3.a de este artículo".

Dentro de los informes preceptivos, y de conformidad con la normativa reguladora de los distintos organismos, hemos de citar la necesidad de emisión del informe de los Servicios Jurídicos, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y del Consejo Económico y Social.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente,

RECOMENDACIÓN A LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN

Las expectativas generadas en los colectivos afectados en torno a la aprobación de un Decreto autonómico que regule la compatibilidad de las prestaciones y servicios establecidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aconseja que por parte de las administraciones y organismos implicados en la elaboración e informe del texto correspondiente, se cumplan de forma escrupulosa los trámites establecidos en la normativa vigente para la aprobación de disposiciones de carácter general, sin dilaciones injustificadas que puedan suponer un perjuicio para las personas dependientes y sus familias.

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V.E. concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. En fecha 19 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Defensoría queja presentada por Dª XXX, en nombre y representación de su madre, Dª XXX, en la que, si bien expone de forma sucinta el contenido de la misma, acompaña un gran número de documentación aclarativa de la misma.

Segundo. Dicha queja, en la que la interesada manifiesta su disconformidad con la tramitación seguida en el expediente de su madre sobre reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia, es admitida a trámite el pasado 8 de junio, requiriendo en esa misma fecha al Instituto Murciano de Acción Social para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informase por escrito en el plazo de un mes, sobre la problemática expuesta por Dª XXX.

Tercero. Dicho informe tiene entrada en esta Institución el día 27 de julio de 2009, pudiendo deducir de su contenido, así como de la documentación aportada por la promotora de la queja, que la tramitación seguida en el expediente de Dª XXX, se circunscribe a los siguientes aspectos:

A) En fecha 9 de julio de 2007, se emite Resolución del Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, en la que se reconoce a Dª XXX. en situación de dependencia grado III y nivel 2, por tener reconocido el complemento de necesidad del concurso de otra persona, determinado en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, con una puntuación igual o superior a 45 puntos, y se le informa, asimismo, de los servicios o prestaciones que podrían corresponderle, de conformidad con dicho grado y nivel de dependencia reconocido.

B) El día 2 de noviembre de 2007, tiene entrada en la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, solicitud de reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia, en la que la interesada concreta su elección en la prestación económica vinculada al servicio.

C) El 21 de febrero de 2008, se dicta Resolución por el Director de la Oficina para la Dependencia en la que se le reconoce el derecho a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, con efectos del 15 de mayo de 2007 al 29 de febrero de 2008, al quedar acreditado que desde esa fecha de inicio ya venía recibiendo atención en la Residencia Santa Isabel de Villanueva del Río Segura, reconociéndole asimismo el derecho al servicio de atención residencial en dicho centro, e instándole a que un plazo de diez días ingresara en el mismo.

D) Recibida dicha Resolución por la interesada en fecha 27 de marzo de 2008, el día 1 de abril del mismo presenta escrito ante la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, en el que solicita el mantenimiento de la ayuda económica vinculada al servicio de atención residencial, exponiendo, el deseo de su familia de que la ocupación de la plaza de su madre en la Residencia Santa Isabel de Villanueva del Río Segura, sea mantenida en régimen privado, tal y como lo venía siendo *"por continuar teniendo la libertad de si lo estima conveniente, por razones asistenciales, de proximidad, etc, de cambio de centro"*.

E) En fecha 18 de abril de 2008, la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social, dicta Resolución con el siguiente contenido:

"Considerar decaída en los derechos de admisión y de ingreso en Centros del IMAS derivados del expediente DR-014/08, de Dª XXX, por no haberse personado en el Centro en el plazo que le fue concedido para ello".

F) Con fecha 29 de mayo de 2008, se informa a la interesada, por parte del Director de la Oficina para la Dependencia, que el no ingreso en la citada Residencia puede suponer la renuncia o extinción al recurso concedido, otorgándole, en consecuencia, un plazo de diez días para formular las alegaciones que estimase oportunas sobre las causas que impidieron dicho ingreso, lo cual hace el 25 de junio de 2008, aportando copia del escrito que

presentó ante la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, el día 1 de abril.

G) Finalmente, se dicta Resolución por el Director de la Oficina para la Dependencia, respecto a la cual cabe señalar ciertas dudas existentes en cuanto a la fecha de su emisión, ya que si bien, en el informe remitido a esta Institución por parte de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, se indica que dicha fecha corresponde al 15 de diciembre de 2008, en la documentación aportada por la interesada, se incluye copia de dicha Resolución que según consta es de 30 de enero de 2009.

No obstante, y con independencia de esta cuestión de índole temporal, dicha Resolución concluye con el siguiente contenido:

"Aceptar la renuncia de Dª XXX, en nombre y representación de su madre Dª XXX, a su derecho reconocido a las prestaciones del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia, declarando concluido dicho procedimiento, procediéndose al archivo de las actuaciones".

Contra dicha Resolución se concede a la interesada el plazo de un mes, desde su recepción, para interponer Recurso de Alzada ante el Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, lo que hace en fecha 25 de marzo de 2009, manifestando, finalmente, que en ningún caso su intención era renunciar a ese derecho, sino que estaba a la espera de que sus alegaciones fueran contestadas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se configura como el Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por ésta para supervisar la actividad de las Administraciones Públicas de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, la cual se encarga de definir las funciones que le son encomendadas, puede iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, omisiones y resoluciones de éstas, quienes han de actuar a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española, es decir, sirviendo con objetividad los intereses generales y actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Segunda. Respecto a la queja que nos ocupa, debemos hacer mención especial a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuyo objeto se centra en la creación de un sistema destinado a promocionar la autonomía personal y atender las situaciones de dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las competencias de reconocimiento de la situación de dependencia se atribuyen, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 305/2006, 22 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión de dicho Instituto.

Por otro lado, el Decreto 284/2009, de 11 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, incluye como órgano directivo de la misma a la Oficina para la Dependencia, que se encargará de asumir, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 6, *"las competencias y funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de reconocimiento del derecho a las prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en*

situación de dependencia; su seguimiento y control, así como la formación en la materia de dependencia".

No obstante, debemos puntualizar que la Resolución de 21 de septiembre, del Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, al amparo de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, delega en el titular de la Dirección de la Oficina para la Dependencia, la competencia de reconocimiento del grado de dependencia a todos los efectos previstos en la legislación vigente, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que tuvo lugar el día 30 de septiembre del presente año.

Tercera. Aclarado este reparto competencial, cuyo reflejo se ha visto en el relato fáctico anteriormente enunciado, debemos advertir que la cuestión principal suscitada en la queja presentada por Dª M.A.H.H, no viene referida a la valoración del grado de dependencia realizada por la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, ni al servicio de atención residencial que le es reconocido por la Oficina para la Dependencia, aspectos ambos en los que la interesada se muestra conforme. Concretamente, el objeto de su queja se centra en su falta de acuerdo con el hecho de que dicha Oficina entienda que ha renunciado a ese derecho, dando por concluido el expediente y procediendo, en consecuencia, al archivo de las actuaciones.

De los hechos expuestos, se observa que la Oficina para la Dependencia entiende que la interesada ha renunciado a su derecho por no haber ingresado en la Residencia Santa Isabel de Villanueva del Río Segura, en el plazo de diez días que se le concedía en la Resolución de 21 de febrero de 2008, dictada por el Director de esa Oficina.

Sin embargo, respecto a esta cuestión es necesario destacar que, según refiere la promotora de la presente queja, su madre, Dª. XXX ya se encontraba ingresada en dicha Residencia de forma previa al reconocimiento de dicho derecho de atención residencial en régimen privado, motivo por el que llama la atención que se fundamente la renuncia a ese derecho, precisamente, en el no ingreso en el centro en ese plazo de diez días.

En este orden de cosas, resulta igualmente indispensable recordar que la renuncia a un derecho por parte del titular del mismo, se configura doctrinalmente como un modo muy excepcional de dar por extinguida la relación jurídico administrativa, debido al carácter público de la misma. De ahí que el artículo 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exija que se lleve a cabo por cualquier medio que permita su constancia.

Por ello, y atendiendo a esta consideración se puede afirmar que en ningún caso ha quedado constancia verbal o escrita de dicha intención por parte de Dª XXX tal y como se exige. Como bien es sabido, si la renuncia hubiese sido verbal hubiera sido necesario que ésta se formalizase mediante comparecencia del interesado, algo que no ha ocurrido. En cuanto a la renuncia por escrito, podemos confirmar que tampoco ha quedado constancia de ella, ni en la comunicación de fecha 1 de abril de 2008 dirigida a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, ni en las alegaciones formuladas el 25 de junio ante la Oficina para la Dependencia, solicitando textualmente, en el recurso de alzada de 25 de marzo de 2009 dirigido a dicha Consejería, al que a día de hoy no ha recibido contestación:

"La rehabilitación de la plaza residencial concedida, a la que no se había renunciado, por estar a la espera de que nuestras alegaciones fueran contestadas".

En relación a esta cuestión, no se debe pasar por alto las previsiones contenidas en el apartado E) del artículo 35, así como en el artículo 79.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no hacen sino poner de manifiesto el derecho de los ciudadanos a formular alegaciones y a que éstas sean tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, previsiones que, observando la tramitación seguida en el expediente de Dª. XXX, no han sido valoradas, ya que la Oficina para la Dependencia sólo se pronuncia respecto a ellas en la Resolución final, en la que considerando que no procedía la estimación de las mismas, concluye aceptando la renuncia de Dª XXX.

Por tanto, y aún considerando procedente que la Oficina para la Dependencia no atendiera a lo solicitado por la interesada, tanto en su escrito de fecha 1 de abril de 2008, como en las alegaciones formuladas el 25 de junio, desde esta Defensoría se entiende que ello no debía haber llevado a la conclusión de que Dª XXX renuncia, en nombre y representación de su madre, al derecho que le fue reconocido de atención residencial, y ello porque, tal y como se ha expuesto anteriormente, no hay constancia de que esa fuera su intención.

Así pues, en base a las prescripciones normativas y consideraciones formuladas anteriormente, a propuesta de la Asesoría Jurídica y en uso de las facultades que a esta Institución atribuye el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se considera necesario formular la siguiente,

RECOMENDACIÓN A LA OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN

Atendiendo al contenido del artículo 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual requiere que la renuncia a un derecho se haga por cualquier medio que permita su constancia, y entendiendo esta Defensoría, en base a las anteriores manifestaciones, que dicha constancia no ha quedado acreditada, se proceda por parte de la Oficina para la Dependencia de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración a reconsiderar la Resolución emitida por la misma, en la que se acepta la renuncia de Dª XXX, en nombre y representación de su madre, al derecho que le había sido reconocido de atención residencial, procediendo, en consecuencia, a rehabilitar la plaza que le había sido asignada en la Residencia Santa Isabel en Villanueva del Río Segura.

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V.E. concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

X.4. Cultura

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 146/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El 1 de abril de 2009 se registraba la entrada en esta Institución de una queja promovi-

da por D. XXX, vecino del municipio de Jumilla, en la que relata un problema que afecta de manera directa a una docena de familias de aquella localidad, incluida la suya. Estos ciudadanos están preocupados por la peligrosidad y falta de seguridad y perjudicados por las limitaciones a la movilidad en el entorno y a la accesibilidad de sus viviendas, ocasionadas por el mal estado de conservación arquitectónica en el que se encuentra un caserón ubicado en el corazón histórico de Jumilla. El inmueble en cuestión, denominado "Casa de los Molina", está localizado dentro del perímetro de delimitación del Conjunto Histórico Artístico de aquel municipio, declarado como tal en noviembre de 1981.

En el texto inicial de la queja se expresa que el citado inmueble sufre un proceso de grave deterioro que se ha manifestado en la caída a la vía pública de algunos elementos de su construcción que, por fortuna, no han ocasionado hasta la fecha daños en las personas, aunque sí a vehículos estacionados en sus proximidades. Ya en este escrito inicial, el promotor de la queja describe que la actuación de las dos administraciones concernidas en este asunto en torno a la situación del citado inmueble les provoca cierta indefensión.

De un lado el Ayuntamiento de Jumilla, en uso de sus competencias en la materia que nos ocupa, ha procedido, a costa del propietario del inmueble, a la colocación de una valla de seguridad; medida ésta no ausente de consecuencias dado que no sólo restringe la accesibilidad de la zona tanto para peatones como para vehículos, sino que además inhabilita el uso de algunos espacios e infraestructuras públicos como un jardín y un museo municipal. Además, el Ayuntamiento, haciendo uso de sus competencias urbanísticas, aprueba un decreto de incoación de declaración de ruina del inmueble, que no tiene como lógica culminación la demolición del mismo, dado que el necesario concurso de la administración cultural de la región de Murcia, legitimada para intervenir por la ubicación del inmueble de referencia dentro de un conjunto histórico, se salda, como veremos, con una negativa a esa demolición.

Segundo. Antes de decidir sobre la admisibilidad de la queja, esta Defensoría adopta la decisión, comunicada a su promotor el pasado 7 de mayo, de requerir del mismo aquella documentación que acredite que se ha dirigido previamente a la administración pública correspondiente para plantear el problema relatado. Unas semanas después, el 21 de mayo, esa documentación es efectivamente aportada al expediente. Analizada ésta, pocos días después, el 2 de junio, el Defensor del Pueblo adopta tres decisiones: la admisión a trámite de la queja, que se comunica a su promotor, y el envío de dos requerimientos de información, a través de sendas comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Jumilla y a la Consejería de Cultura y Turismo de la CARM, tendentes a que esas administraciones aporten los informes llamados a arrojar luz sobre la actuación de las mismas en el caso que nos ocupa.

Tercero. Fruto de las comunicaciones practicadas, descritas en el antecedente anterior, llegan a esta institución los informes requeridos. Por su parte, el Ayuntamiento de Jumilla subraya en su escrito la titularidad privada y no municipal del inmueble, residenciando en la administración regional las competencias para efectuar cualquier reparación o demolición del mismo, *al estar catalogado y dentro del Conjunto Histórico Artístico*, se afirma de manera literal. En esa comunicación el Ayuntamiento jumillano adjunta copia de diversos informes municipales emitidos sobre ese inmueble y sobre la problemática en torno al mismo, así como de las respuestas y resoluciones de la Consejería de Cultura, aclarando que tras la última resolución de la Dirección General de Cultura, que no autoriza la demolición, ese Ayuntamiento ha procedido a requerir a los propietarios a que adopten medidas urgentes de consolidación de la fachada del inmueble, para poder eliminar el perímetro de seguridad colocado sin que exista ningún peligro para los transeúntes.

De los informes que se adjuntan a esta comunicación de la administración local de Jumilla, cabe resaltar en este momento el suscrito el 6 de junio de 2006 por el Jefe del Servicio Técnico de Obras y Urbanismo, en él se significa que concurren circunstancias suficientes para proceder a la incoación de un expediente de declaración de ruina, por presentar los elementos de la fachada *peligro para los usuarios de la vía pública*. También se sostiene que la patología del inmueble *puede causar la demolición incontrolada de parte del edificio con peligro igualmente para los usuarios de la vía pública*. Estas circunstancias llevan al Ayuntamiento de Jumilla a decretar la incoación de un expediente de declaración de ruina, que culmina con la declaración, en agosto de 2006, de la "ruina inminente" del inmueble. Entre tanto, dando cumplimiento al ordenamiento jurídico protector del patrimonio histórico, los extremos anteriores se comunican al Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Cultura de la CARM, también conminado por los propietarios del inmueble a dar una respuesta satisfactoria a esta problemática. Esa Dirección General responde básicamente poniendo de relieve su falta de competencias respeto de la "ruina", y manifestando que en cualquier caso "se deberá encargar por la propiedad la realización de un proyecto para intervenir en las zonas en mal estado, y una vez realizado pedir autorización previa a la concesión de la licencia a la Dirección General de Cultura".

Cuarto. Por su parte, la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, remite a esta Defensoría su informe en los primeros días de julio. En él se incluye una detallada relación de antecedentes, parte de los cuales ya han sido expuestos con anterioridad, una serie de consideraciones de naturaleza jurídica, y unas conclusiones. Nos interesa destacar aquí que una vez aprobado el decreto municipal que declara la ruina del inmueble, dada la ubicación del mismo y en aplicación de lo establecido en las leyes de protección del patrimonio histórico, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales solicita, para ver si es procedente autorizar o no la demolición total o parcial del inmueble, el informe de tres instituciones consultivas en materia de patrimonio histórico. Dos de ellas: la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca y la Universidad de Murcia, a través de su Departamento de Historia del Arte, apuestan por la conservación y rehabilitación del inmueble.

En este informe de la citada Dirección General de Bellas Artes también se reseña el incumplimiento de alguna obligación legal por parte de la administración local de Jumilla: es el caso de la no aprobación hasta la fecha de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico; así como las obligaciones y deberes que pesan sobre los propietarios de bienes integrantes del patrimonio cultural en orden a su conservación y a sus condiciones de seguridad; concluyendo que la actuación de la administración regional competente en el caso que nos ocupa ha sido ajustada a derecho, no pudiendo autorizar la demolición toda vez que lo impiden los citados informes desfavorables de dos de las instituciones consultivas.

Quinto. Por último, el pasado 7 de agosto se recibe en esta Institución nuevo escrito de la Secretaría General del Ayuntamiento de Jumilla. Mediante el mismo se nos da traslado de un acuerdo adoptado el pasado 3 de agosto por la Junta de Gobierno Local de aquella Corporación, acuerdo que se sustenta en un informe emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo de ese Ayuntamiento, que se adjunta. Básicamente el acuerdo del gobierno municipal de Jumilla consiste en instar a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la CARM a que, a su vez, inste a la propiedad de inmueble referido a que adopte medidas de urgencia que impidan la caída de la fachada y poder restablecer así el paso seguro por la zona, dejando de ocasionar de este modo problemas a los vecinos colindantes y al Museo Municipal; y ello en tanto las medidas adoptadas hasta ese momento eran sólo provisionales y a la espera de que se autorizase la demolición del inmueble, circunstancia ésa que no se ha produci-

do toda vez que la administración cultural de la CARM, en uso de sus atribuciones, ha denegado la autorización de demolición del inmueble, requiriendo de los propietarios que presenten un proyecto de rehabilitación y conservación.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. En el ámbito de los principios rectores de la política social y económica que recoge la Constitución Española en el Título III del Capítulo I, en el artículo 46 se establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

Tercera. la normativa aplicable a las diversas cuestiones que son objeto de la queja está constituida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español; por la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Cuarta. En atención a lo expresado en la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, que dispone que los bienes que con anterioridad a la aprobación de la misma hayan sido declarados histórico-artísticos pasan a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural, quedando sometidos al régimen jurídico que para esos bienes se establece en esa Ley, y toda vez que el municipio de Jumilla está declarado Conjunto Histórico Artístico, por el Real Decreto 3382/1981, de 27 de noviembre, quedaría por lo tanto sujeto a las disposiciones de esa Ley.

Fijado lo anterior, el artículo 20 de esta misma norma establece un deber general de carácter vinculante para los ayuntamientos, incumplido hasta la fecha por el Ayuntamiento de Jumilla, cuando dispone que:

"1. La declaración de un **Conjunto Histórico**, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como **Bienes de Interés Cultural**, determinará **la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección** del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.

2. El Plan a que se refiere el apartado anterior **establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello**. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas.

3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las

otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.

4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las responsabilidades por infracciones".

Quinta. Toda vez que, como decimos, el Ayuntamiento de Jumilla no se ha dotado a día de hoy de esa obligada herramienta, y tal y como se expresa en el informe remitido por el Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, cualquier intervención en el perímetro de protección del Conjunto Histórico-Artístico de aquella localidad, y el inmueble objeto de la queja lo está, requeriría la autorización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la CARM, autorización que, tal y como ha quedado dicho en lo antecedentes fácticos, no procede a tenor de los informes evacuados al efecto por las instituciones consultivas, toda vez que el artículo 36.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dispone que:

"1. La dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural podrá autorizar la demolición total o parcial de un bien de interés cultural sobre el que haya recaído declaración de ruina técnica, previo informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 7.2 de esta Ley y previa audiencia al propietario del bien, de sus moradores y del ayuntamiento correspondiente durante el plazo de quince días.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, no podrá procederse a la demolición de ningún bien inmueble de interés cultural cuando la declaración de ruina sea consecuencia del incumplimiento de los deberes de conservación a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley.

3. En ningún caso la demolición de un bien de interés cultural podrá dar lugar a un mayor aprovechamiento urbanístico".

Sexta. El artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local expresa que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en diversas materias, entre ellas en: a) seguridad en lugares públicos, d) ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, y e) patrimonio histórico-artístico. Por su parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, de general aplicación al caso que nos ocupa, delimita y perfila esas competencias de las administraciones locales al establecer en su artículo 7 que: "*Los Ayuntamientos* ***cooperarán*** *con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal****, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción****. **Notificarán a la Administración competente** cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de*

estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley". Queda evidenciado, por lo tanto que, en efecto, los ayuntamientos son sólo órganos cooperadores, con pocas facultades decisorias en esta materia, circunstancia ésta expresada recurrentemente por el Ayuntamiento de Jumilla en algunos de los informes y documentos que obran en el expediente.

No obstante lo anterior, del precepto reproducido cabe señalar ahora que uno de los principales mandatos dirigidos a los ayuntamientos que se contiene en el mismo es el de comunicar a la administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación del patrimonio histórico; comunicación ésa retrasada con creces, toda vez que el deterioro del que adolece el inmueble en cuestión ha sido progresivo, y la comunicación de esas incidencias a la administración regional sólo se produce cuando empieza a tramitarse el expediente de declaración de ruina del mismo.

Séptima. De otro lado, el artículo 36 de la Ley 16/85 dispone que los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. En ese precepto se expresa además que si los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural no ejecutan las actuaciones exigidas en el cumplimiento de sus obligaciones, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su **ejecución subsidiaria**. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes.

Por último, ese precepto establece que será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración competente el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ese artículo. Interés social que también estará justificado para la expropiación, según se establece en el artículo siguiente, cuando exista peligro de destrucción o deterioro del BIC, o un uso incompatible con sus valores. Los Municipios, dispone ese mismo artículo 37, podrán acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.

Octava. Si bien es cierto que, por lo que parece, hay un incumplimiento por parte de la propiedad de sus obligaciones –tanto de las derivadas de la catalogación como BIC de su inmueble que se establecen en el reproducido art. 36 de la Ley 16/85, o ya en el caso de la Región de Murcia en el art. 8 de la Ley 4/2007, como de las más generales de mantenimiento de las construcciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, que establece el art. 92.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia– lo cierto es que tal y como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, así se expresa textualmente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1988: "la obligación de conservar impuesta por la legislación del Patrimonio Artístico se detiene allí donde se detiene la obligación de conservar en general, es decir, en el hecho de encontrarse un edificio en estado físico de ruina, a partir de cuyo momento sólo por intereses comunitarios debe prevalecer la subsistencia del inmueble, siendo por lo tanto la comunidad la que tiene que subvenir esta necesidad, y puede, por ello, expropiar el bien… y, en cuanto la Administración del Patrimonio Histórico-Artístico pretenda conservar un edificio en estado de ruina física en sus partes estructurales esenciales, –como ocurre en el supuesto que nos ocupa–, contra la voluntad de su propietario, puede utilizar a tal fin el mecanismo de la expropiación y demás medios

que le brinda la normativa aplicable… pues, no se debe de olvidar que su conservación es aconsejada por un interés de la comunidad –e incluso en algunos casos universal–, a favor de la cultura, más no sería justo que su carga económica sólo se produjera sobre una persona cual es el propietario del edificio, sino más bien debe ser compartida por todos los beneficiarios del mencionado acervo cultural del cual el edificio en cuestión forma parte".

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes

RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES AL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Dada la prioridad que en todos los órdenes deben tener la seguridad e integridad de personas y bienes, y la movilidad y accesibilidad de todo el entorno, el Ayuntamiento de Jumilla, de no haberlo hecho ya la propiedad, y comunicándolo a la administración cultural de la Comunidad Autónoma, debería ejecutar con carácter subsidiario y de manera inmediata las medidas de consolidación arquitectónica que impidan el desplome de la "Casa de los Molina", procediendo posteriormente a la retirada de la valla de protección que limita la accesibilidad y movilidad de aquel lugar.

Asimismo, el Ayuntamiento de Jumilla, dando cumplimiento al mandato establecido en el art. 20 de la precitada Ley, debería dotarse de un Plan Especial de Protección de su Conjunto Histórico-Artístico.

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

El Ayuntamiento de Jumilla, en solitario o con el concurso de otras administraciones públicas, utilizando las prerrogativas que confiere a la administración pública la legislación protectora del patrimonio histórico, entre ellas la expropiación, debería promover la adquisición pública del inmueble referido, dotándolo posteriormente de alguna utilidad de carácter público.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, DE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 148/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 1 de abril de 2009, don XXX presentó queja relativa a solicitud de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de Murcia, de obras de conservación y rehabilitación del edificio en el que residía, catalogado bien de interés cultural dentro del conjunto histórico artístico de la ciudad de Murcia.

Segundo. Consta en el expediente aportado por la reclamante un dossier completo del edificio en cuestión calificado como bien de interés cultural protegido con grado 2. En él se integran los escritos de los vecinos del edificio al Ayuntamiento de

Murcia, unos solicitando la declaración de ruina, otros solicitando su rehabilitación, expediente nº 189/2002 de rehabilitación-ruinas, expediente de descatalogación nº 1237/2005, informe del colegio oficial de arquitectos de Murcia a encargo de la parte que solicita la ruina del edificio, informe de una profesora de la facultad de bellas artes sobre los valores artísticos y arquitectónicos de la edificación, informe sobre daños en forjado y otro sobre defectos, ambos emitidos por arquitecto técnico.

Destaca dentro del expediente 189/2002, sendos Decretos urbanísticos, el primero de fecha 14 de mayo de 2002, por el que se requiere a la Comunidad de Propietarios a reparar en el plazo de 48 horas las deficiencias consistentes en "mal estado del dintel del primer piso, con peligro de caída de materiales a la vía pública, la cornisa de todo el edificio presenta diferentes grietas y las dos bajantes en su encuentro con dicha cornisa presenta manchas de humedad, la bajante derecha a la altura del segundo izquierdo se encuentra sin entroncar, dejando verter el agua a la calle, desprendimiento del forjado en el segundo piso, y desprendimiento de parte de las paredes de los patios…", con apercibimiento de ejecución subsidiaria de conformidad con el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El segundo decreto, de fecha 21 de septiembre de 2005, reconoce en virtud de visitas de inspección la existencia de humedades en el techo del tercero izquierda y mal estado de parte del forjado de planta baja que sigue apuntalado y sin reparar, requiriendo de nuevo a los propietarios para la reparación de estos daños en el plazo de un mes, con nuevo apercibimiento de ejecución subsidiaria en los términos del artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Se aporta asimismo informe del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura, de 20 de mayo de 2004 emitido en relación con el expediente 189/2002, e informe del mismo servicio emitido en el expediente de descatalogación nº 1237/2005, en ambos con el mismo contenido se concluye la inexistencia de ruina física o económica, aconsejando la conservación de la fachada, los elementos estructurales que definen el inmueble volumétricamente y la cubierta, además de los elementos de cerrajería y carpintería, pudiéndose sustituirse la tabiquería, las cubriciones con elementos prefabricados y otros elementos no originales, además de poder mejorar o renovar las instalaciones que se estimen necesarias, conservando el inmueble todos los valores que llevaron a su catalogación.

Se incluye en la documentación, expediente nº 1362/2005, de la Concejalía de Sanidad, en relación a la adopción en el edificio de medidas de carácter higiénico-sanitarias, que fueron corregidas por los responsables.

Finalmente se acompañan todas las actas de la Comunidad de Propietarios del edificio en cuestión, de las que destacan el acta de 22 de noviembre de 2005 en el que se acuerda solicitar la ejecución subsidiaria al Ayuntamiento, y el acta de 18 de febrero de 2009 donde parece se procede a acordar la contratación de técnico competente para acometer la realización de las obras legalmente exigidas por el Ayuntamiento para garantizar la habitabilidad del edificio.

Tercero. Con fecha 7 de mayo de 2009 se admitió a trámite la queja, requiriendo con esa misma fecha información al Ayuntamiento de Murcia (acuse de recibo de 15 de mayo de 2009).

Cuarto. Con fecha 17 de junio de 2009 (registro de entrada en esta Oficina de 18 de junio de 2009) se recibió informe del Ayuntamiento de Murcia, en el que en resumen se indica que el Servicio Técnico de Disciplina Urbanística informó el 17 de enero de 2003 que se había procedido al apuntalamiento, debiendo permanecer en esa situación mientras se mantenga la situación; que la Dirección General de Cultura informó que el edificio se encontraba en condiciones de habita-

bilidad, sin que se detectara lesión que haga suponer ruina técnica o económica, siendo pequeño el coste de las reparaciones; y en cuanto a la vía pública, no existe peligro de caída de elementos de la fachada a la misma.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. El grupo normativo aplicable a esta cuestión está constituido con carácter general por la ley 4/2007, de 16 de marzo, sobre normas reguladoras del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, supletoriamente por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, por el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo en la Región de Murcia y en el ámbito Local, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y normativa reglamentaria de desarrollo, y con carácter particular por el Texto Refundido de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia, aprobado el 23 de enero de 1995, supletoriamente por la Ordenanza de Edificación y Uso de Suelo del Ayuntamiento de Murcia, y finalmente por las normas urbanísticas para la protección del patrimonio histórico-cultural y natural del Ayuntamiento de Murcia.

Tercera. Ante este ingente acervo normativo, hemos de circunscribir la naturaleza del problema a la temática principal presentada en la queja, a saber, la existencia de un edificio catalogado de bien de interés cultural con grado 2 de protección, integrado en suma en la legislación protectora en materia de patrimonio histórico, que se encuentra deteriorado cuanto menos en sus valores artísticos o arquitectónicos a la fecha de hoy, sin que concurran circunstancias que determinen su ruina técnica o económica, y sin que aparentemente concurran circunstancias que puedan suponer un peligro para las personas.

Al respecto, la ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dispone en su artículo 6.2. que: "Las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia que se ubiquen en su ámbito territorial. Los ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural cualquier hecho o situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad o perturbar la función social de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia, adoptando, en su caso, las medidas cautelares necesarias para su defensa y conservación, sin perjuicio de las competencias que expresamente se les atribuya por la presente Ley y de lo establecido en la normativa urbanística, medioambiental y demás normas que resulten de aplicación en materia de protección del patrimonio cultural".

Este precepto contiene una doble previsión merecedora de especial interés, en primer lugar, que la obligación de conservación y protección no estará ligada únicamente a cuestiones de seguridad de las personas y los bienes, sino a la protección en sí mismo de nuestro patrimonio cultural. En segundo lugar, la plenitud de esta medida estará condicionada a las competencias atribuidas por la normativa urbanística y medioambiental.

En este sentido, resulta necesario acudir al plan especial o instrumento de planeamiento de protección del área afectada, que para el Ayuntamiento de Murcia, estará constituido por el Texto Refundido de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia

(en adelante P.E.C.H.A), que en su artículo sexto atribuye a los propietarios de los edificios la obligación de mantenerlos en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, de acuerdo con la normativa vigente, correspondiendo al Ayuntamiento exigir, en su caso, el mantenimiento de tales condiciones.

Asimismo, –sigue señalando en su apartado segundo–, en los edificios con catalogación, como es el del caso que nos ocupa, (declarado como bien de interés cultural con grado de protección estructural nivel 2), el mal estado de conservación implicará tomar las medidas necesarias para su recuperación de conformidad con el nivel de catalogación del edificio.

En definitiva, es claro el derecho y obligación del Ayuntamiento de exigir el mantenimiento de las condiciones no sólo de seguridad, sino de salubridad y ornato, poniéndolo en conocimiento de la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, sin embargo todavía es posible discutir el alcance de la obligación de exigencia del mantenimiento de estas condiciones.

En efecto, si bien es verdad que la Ordenanza de Edificación y Uso de Suelo del Ayuntamiento de Murcia, que es de aplicación con carácter supletorio a la P.E.C.H.A. por mandato del artículo 1.2. de esta última, constriñe la obligación municipal de ejecución subsidiaria en obras de conservación cuando exista peligro para los moradores o vía pública (artículo 35.2), en nuestra opinión este requisito debe ceder cuando se trata del Patrimonio Cultural por mandato del artículo sexto de la ley 4/2007, de 16 de marzo, de patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, compartiendo la exigencia impuesta en el ámbito nacional por la ley 16/1985, del patrimonio histórico español, en cuyo artículo 7 se atribuye a los ayuntamientos el deber de cooperar con los organismos competentes para la ejecución de la Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Además se prevé en su artículo 36.3 y 4 que: "3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes incluidos en el inventario general no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1 de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria.

Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes.

Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad.

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural por la Administración competente".

Al alcance general de ese deber de colaboración o protección, se ha referido el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en Sentencia nº 700/2000, de 29 de septiembre (RJCA/2000/2213), atendiendo al hecho de cuánto ha de esperar la Administración antes de proceder a la ejecución subsidiaria, afirmando que

"La situación de abandono podría prolongarse indefinidamente, por lo que resulta razonable que la demandada se dirija de nuevo al Ministerio de Defensa a fin de que en el plazo que le señale en el escrito de requerimiento se adopten por aquél las medidas oportunas tendentes a la conservación

y custodia de los bienes, con apercibimiento de que caso de incumplimiento, esto es, de inejecución de actuaciones por parte del requerido tendentes al cumplimiento de dichas obligaciones, la Comunidad Autónoma ordenará la ejecución subsidiaria; ejecución esta última a la que habrá de acudir la demandada en el supuesto de que el requerido incumpla el plazo que se le fije, pues el artículo 36.3 de la Ley 16/1985 no faculta a la demandada a mantener indefinidamente una inactividad material ante la situación. La tesis que sustenta la Administración demandada, contraria, según se desprende del contexto de la contestación, a la fijación del citado plazo, choca con la virtualidad y carácter operativo que hay que dar al artículo 8º de la Ley 16/1985. La actitud de los particulares no se limita al cumplimiento del deber de poner en conocimiento de la Administración competente los peligros de destrucción de los bienes de interés cultural del Patrimonio, sino que se instrumenta también en dicho precepto una acción pública para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en la Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, exigencia que comporta un correlativo deber de respuesta por los órganos jurisdiccionales que signifique, incluso, una condena a la Administración competente a que actúe realmente poniendo fin a su inactividad material".

Con mayor vehemencia se pronuncia la Sentencia de 7 de junio de 2004 del Tribunal Supremo (RJ/2005/6), que extiende en el caso de autos la posibilidad de ejecución subsidiaria no sólo a costa del obligado, sino con cargo a las consignaciones presupuestarias de la Administración implicada.

No en vano, el Ayuntamiento de Murcia, consciente de su responsabilidad en materia de patrimonio histórico artístico, en sendos Decretos de 14 de mayo de 2002 y 21 de septiembre de 2005, apercibe a los propietarios de ejecución subsidiaria para el supuesto de incumplimiento voluntario de las obras de conservación y reparación reseñadas en el mismo.

Finalmente, el artículo 17 del P.E.C.H.A. conmina al Ayuntamiento a prestar la cooperación necesaria para el mantenimiento de edificios que así lo requieran, para lo que con cargo a los Fondos de Ayuda u otras intervenciones municipales, se establecerán cuadros de subvenciones en los que en función del presupuesto de ejecución, tipo de actuación, grado de protección y ubicación del inmueble, se determinará la cuantía a recibir.

Por lo expuesto, vistos los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, se emite el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ordenanza reguladora del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia impone a las entidades locales el deber legal de conservar, proteger y promover la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia que se ubiquen en su ámbito territorial, exigiendo a los propietarios el mantenimiento de los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.

La demora de los propietarios en el cumplimiento de sus obligaciones habilita a la Corporación Local, según jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a ejecutar subsidiariamente la obligación a costa de los propietarios.

SUGERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL

En aras de la preservación y promoción del patrimonio cultural de la Región de Murcia, sería conveniente que desde las diversas ins-

tancias públicas se instrumentaran los cauces para proporcionar asistencia técnica o económica a los propietarios en la realización de las obras de rehabilitación de los bienes catalogados de interés cultural.

X.5. Deportes

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 166/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. En el mes de abril del año en curso quedó registrada la entrada en esta Defensoría de una queja promovida de D. XXX, vecino del municipio de San Javier, en representación del "Club El Mirador Fútbol Sala", entidad inscrita tanto en el Registro de Entidades Deportivas de la Región de Murcia, como en el Patronato Deportivo Municipal del citado Ayuntamiento. Se trata de un club deportivo que desarrolla su labor en El Mirador, un núcleo de población con cerca de dos mil habitantes dentro del término municipal de San Javier. El citado club –queda constancia de ello en la amplia documentación que se adjunta a esta queja– realiza una importante labor de fomento de la práctica deportiva entre niños y jóvenes de ese núcleo poblacional y de otros próximos, organizando en cinco equipos federados de diversas categorías: alevines, infantiles, cadetes y juveniles a cerca de 80 niños y jóvenes. Pero además, en su labor de promoción deportiva, también organiza actividades extraescolares de fútbol sala en un colegio público de la mencionada pedanía.

Segundo. La actividad deportiva de esta entidad (entrenamientos, competiciones, etc.) se desarrolla en unas instalaciones que son propiedad del Ayuntamiento de San Javier. Como consecuencia de ello, la responsabilidad de su conservación, reparación y administración, recae, a tenor de lo expresado en el art. 1 de sus estatutos, en el Patronato Deportivo Municipal de San Javier; constituido en su día, así se expresa en los citados estatutos, como una fundación pública de servicio de las corporaciones locales, con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional, dependiente del Ayuntamiento de San Javier.

Tercero. El objeto de la queja, muy documentado y con amplio soporte fotográfico, viene constituido por las deficiencias que presentan las escasas infraestructuras precisas para el desarrollo del fútbol sala en ese núcleo de población, habida cuenta además del importante número de niños y jóvenes que hacen uso de las mismas. Unas infraestructuras que, en opinión del promotor de la queja, adolecen de un progresivo deterioro que se ha hecho muy ostensible desde el año 2003 a esta parte.

Dentro de esas infraestructuras, el promotor de la queja hace alusión a tres de ellas. De un lado y muy fundamentalmente, a unas instalaciones deportivas de uso público y abiertas a cualquier persona ubicadas en la calle La Rambla, s/n de El Mirador. Esas instalaciones fueron rehabilitadas recientemente, pero su deterioro ha sido constante desde el primer momento. En las pistas es bien visible la existencia de grandes grietas, que han provocado ya algunas caídas de deportistas, y el desperfecto generalizado de la pintura de las pistas, así como el deterioro de elementos tales como redes, porterías, vallas, etc. Hay que destacar asimismo que en esas instalaciones se desarrollan durante los fines de semana actividades poco compatibles con la práctica deportiva y ligadas al fenómeno del "botellón", generando, así se aprecia en el material gráfico remitido, basuras, cristales rotos, etc., que hacen poco gratificante y bastante insegura la práctica deportiva posterior por parte de niños y jóvenes. Otra deficiencia ligada a estas instalaciones y puesta de manifiesto por el promotor de la queja consiste en la carencia de los elementos de información al usuario sobre esta infraestructura deportiva pública que se exigen en la Ley 2/2002, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia:

titularidad, características, actividades físico-deportivas, normas de uso y funcionamiento, etc.

En segundo lugar, para abundar en las carencias de la infraestructura precisa para la práctica deportiva de este club, se trae a colación la situación de las pistas deportivas del colegio público de aquella pedanía, unas pistas que han quedado afectadas por las obras de ampliación de ese centro educativo. Por ultimo, se hacen consideraciones de diversa índole en torno a la situación de las obras del Pabellón Deportivo de El Mirador en aquel núcleo de población, una infraestructura hoy paralizada en una fase constructiva muy inicial, cuyas obras han sido financiadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dentro del Plan Regional de Instalaciones Deportivas II (2005-2008) y afectada por una tramitación ciertamente peculiar por cuanto comenzó a construirse sin la correspondiente acta de replanteo. En su queja el promotor de la misma se muestra partidario de ubicar ese pabellón deportivo en un solar de aquella pedanía, de uso dotacional, y propiedad del Ayuntamiento de San Javier.

Cuarto. En estos antecedentes fácticos resulta también preciso destacar que se adjunta a la queja por parte de su promotor una amplia documentación que da fe de la importante actividad deportiva del club que representa, de la multitud de escritos remitidos al Ayuntamiento de San Javier y a su Patronato Deportivo sobre la situación de las infraestructuras objeto de su queja, de algunos escritos que asimismo se han remitido a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, y de otros dirigidos a la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los que, tras describir la situación de las infraestructuras de El Mirador para la práctica del fútbol sala, insta a la administración regional a buscar soluciones a esa realidad descrita e incluso a incoar un expediente sancionador frente al Ayuntamiento de su localidad, por lo que él entiende como un incumplimiento de algunos de los preceptos de la antes citada Ley 2/2002, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia, aún necesitada de un preciso desarrollo reglamentario para afrontar convenientemente algunas de las cuestiones planteadas en esta queja.

Quinto. La queja fue admitida a trámite el pasado 28 de abril. Comunicada tal circunstancia a su promotor y requerida la administración afectada para informar por escrito sobre los extremos planteados en la misma, se recibieron con posterioridad en esta Defensoría dos comunicaciones. La primera del propio promotor de la queja, con precisiones, puntualizaciones y nuevos documentos adjuntos relacionados con el objeto de su queja que abundan en la defensa de sus pretensiones. La segunda de las comunicaciones es un informe firmado por la Alcaldesa de la localidad y a su vez Presidenta del Patronato Deportivo Municipal de San Javier, donde, tras hacer una serie de consideraciones en torno a la relevancia que el deporte tiene en su municipio, sostiene que las instalaciones deportivas objeto de la queja fueron rehabilitadas según el proyecto redactado por los servicios técnicos municipales y visado por los servicios técnicos de la Dirección General de Deportes; que en cualquier caso esa rehabilitación es transitoria, y que los resultados son insatisfactorios habida cuanta del deterioro que se ha producido en breve período de tiempo, dada la ubicación de las instalaciones "en medio de una rambla". A ello, añade la Alcaldesa, hay que sumar la imposibilidad de una eficaz custodia, ya que se trata de una instalación de "uso libre", y que por ello sería conveniente "reubicar unas instalaciones nuevas en otra parcela donde se pueda optimizar mejor el uso y mantenimiento de las mismas", algo que se está valorando. De otro lado afirma que respecto a la pista polideportiva del Colegio Público, tras conversaciones mantenidas con la Consejería de Educación, se va a proceder a la construcción, este año, de una nueva pista en el centro educativo. Por último, se refiere a la paralización de las obras del pabellón polideportivo del El Mirador, afirmando que tanto el club representado por el promotor de esta queja, como la

Dirección General de Deportes, están al tanto de los motivos de la paralización, vinculados a *"la no existencia de acta de retranqueo, no estando ubicado en suelo municipal.*

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida en el ámbito de nuestra Ley Fundamental por el art. 43.3 de la Constitución Española de 1978, que, entre los principios rectores de la política social y económica, realiza una explícita mención al deporte como objetivo de la acción pública, y establece un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educación física y el deporte y faciliten la adecuada utilización del ocio.

Tercera. Son asimismo de aplicación el art. 25. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que el municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: m) *Actividades* o instalaciones culturales y *deportivas;* ocupación del tiempo libre; turismo. Para reforzar lo anterior, el siguiente precepto de la citada Ley (art. 26.1 c)) establece que los municipios por sí o asociados, deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes cuando tengan una población superior a 20.000 habitantes: Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e *instalaciones deportivas de uso público.*

Los anteriores preceptos, puestos en relación con el art 18.1. g) de la misma norma, otorgan el derecho a cualquier vecino para exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir, como es el caso, una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

Cuarta. También resulta aplicable al caso que nos ocupa el artículo 9 de la ley 2/2002, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia, que establece que de conformidad con la presente Ley y con lo establecido en la Legislación del Estado sobre Régimen Local, los ayuntamientos ejercerán en sus respectivos términos municipales las siguientes competencias:

a) Promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito territorial.

b) *La construcción, ampliación y mejora de las instalaciones y equipamientos deportivos municipales, así como su gestión y mantenimiento.*

c) Asegurar el cumplimiento de las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la práctica del deporte y el emplazamiento de infraestructuras deportivas.

d) La promoción del asociacionismo deportivo local en coordinación con la Administración Regional.

e) La ejecución de los programas de deporte escolar.

f) La elaboración y actualización de un censo de instalaciones deportivas del municipio en coordinación con la Administración regional.

g) La cooperación en la elaboración del Plan Regional de Instalaciones Deportivas en lo referente a las instalaciones deportivas a construir en su término municipal.

h) La cooperación con entidades públicas y privadas para el cumplimiento de las finalidades previstas en esta Ley, a cuyo efecto podrá suscribir los acuerdos o convenios que resulten necesarios.

i) La puesta en marcha de programas de actividades físico-deportivas destinada a ciudadanos que padecen minusvalías, prestando especial atención a la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso de minusválidos a las instalaciones o servicios deportivos del municipio.

j) Cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que contribuya a la realización de los fines y objetivos fijados en la presente Ley.

Quinta. En sede municipal, los propios estatutos de los que se ha dotado el Patronato Deportivo Municipal de San Javier establecen entre los objetivos del mismo, en su primer artículo, la promoción de toda clase de instalaciones deportivas, así como la conservación, reparación y administración de las propiedades municipales.

Sexta. Por último, y habida cuenta de que en parte es objeto de esta queja la falta de limpieza de las pistas deportivas de El Mirador, también resulta de aplicación la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de San Javier, que en su art. 8, en relación con los arts. 10 y 11, configura como un derecho ciudadano la exigencia de la prestación del servicio público de "limpieza y barrido de los bienes de uso y dominio público".

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN

Que el Ayuntamiento de San Javier, en el menor espacio de tiempo posible y recabando en su caso la ayuda de otras administraciones públicas, proceda a habilitar unas pistas deportivas para la práctica del fútbol sala en El Mirador. Asimismo esta Corporación Municipal debería estudiar de modo urgente la viabilidad y oportunidad de ofrecer a la administración regional suelo de titularidad municipal destinado a la construcción de un pabellón polideportivo en esa pedanía.

Entre tanto, y dado que la actividad deportiva del club continúa, se recomienda asimismo que se intensifiquen las labores de limpieza de las pistas deportivas de uso público de El Mirador, de modo tal que la práctica deportiva en las mismas pueda desarrollarse del modo más digno posible.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

X.6. Educación

X.6.1. Enseñanza no Universitaria

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA INCOADA POR Dª XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE Q-18/2008

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 18 de diciembre de 2008, la reclamante D.ª XXX. presentó queja ante la nega-

tiva del Centro de Educación Infantil y Primaria "Virgen de Begoña" en Cartagena, a que su hija –que cursa estudios en el citado colegio– lleve la comida preparada desde casa, a pesar del informe médico presentado relativo a su intolerancia a la leche de vaca y a la carne de ternera, así como a la conveniencia de preparación de la comida sin conservantes ni colorantes, preferentemente en el domicilio familiar.

La reclamante alega que a pesar de que el año anterior ejerció esta posibilidad, el centro educativo la niega este año por infringir presuntamente normas sanitarias.

Segundo. Consta en el expediente, informe solicitado por la reclamante de 23 de octubre de 2008 del Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección General de Salud Pública, en el que se determina la inexistencia de normativa que prohíba llevar al centro la comida elaborada desde el domicilio, quedando la decisión a exclusiva responsabilidad de la familia y del centro educativo.

Asimismo, se pone de manifiesto la existencia de un proyecto de Real Decreto y de un borrador de Decreto Regional en el que se habilita la posibilidad de traer el menú elaborado desde el domicilio familiar en determinados supuestos.

Tercero. Con fecha 2 de diciembre de 2008, el Centro Virgen de Begoña solicitó a la Consejería de Educación, escrito indicando el procedimiento para atender a la menor y definición de asunción de responsabilidades, en su caso.

Cuarto. Con fecha 29 de enero de 2009, por el Defensor del Pueblo de la Región se procedió a solicitar información a la Consejería de Educación, Formación y Empleo, admitiendo a trámite la queja presentada.

Quinto. Con fecha 13 de marzo de 2009 la Consejería de Educación, Formación y Empleo, aportó contestación comprensiva de documentación remitida al centro educativo, donde somete la decisión final al Consejo Escolar, habida cuenta de la falta de regulación y de que está en trámite un Decreto regulador de la cuestión, si bien sugiriendo que por el centro se permita a la persona adulta que acompañe a la alumna, que deposite el recipiente con la comida preparada en cualquier lugar del armario frigorífico de la cocina que se habilite para ello, asumiendo el resto de las tareas necesarias el personal de cocina, durante el horario en que preste ordinariamente su servicio.

Sexto. Consta en el expediente diligencia telefónica realizada el 27 de marzo de 2009 por la Coordinadora de Atención al Ciudadano de la Oficina del Defensor del Pueblo de Murcia, donde se refleja conversación telefónica mantenida con la Jefa de Estudios del centro, en la que se indica que el Consejo Escolar ha acordado que se personalice el menú para la escolar por el catering, no permitiendo que se traiga la comida desde el domicilio familiar.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. El derecho a la educación, acogido constitucionalmente en el artículo 27 de la Carta Magna, se ha visto tradicionalmente complementado con el servicio de comedor escolar, inicialmente configurado como instrumento de compensación de desigualdades, especialmente en el medio rural, y además en la actualidad, como un mecanismo de adaptación a los cambios económicos y sociales experimentados en el entorno familiar.

En estos términos, la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en su artículo 80.1.

que *"las Administraciones Públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación a las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y apoyos precisos para ello."*, correspondiendo al "*Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia fijar sus objetivos de educación compensatoria".*

Tercera. En ejercicio de la competencia referida en el apartado anterior, el marco normativo regulador de los comedores escolares, se integra en el ámbito autonómico, por la Orden de 17 de julio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se regula el Servicio de Comedor Escolar de los Colegios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, atribuyendo en su artículo 14 letra g) al Consejo Escolar *"Velar por que los menús que se sirvan en el comedor escolar sean adecuados para una alimentación sana y equilibrada del alumno, conforme a las recomendaciones derivadas de las actividades de control y seguimiento que realice la autoridad sanitaria competente y bajo la supervisión y asesoramiento de los servicios de la Consejería de Educación".*

En similares términos, en el ámbito estatal, el artículo decimosexto de la Orden de 24 de noviembre de 1992, por la que se regulan los Comedores Escolares, atribuye al Consejo Escolar la competencia de *"Aprobar los menús, de acuerdo con las necesidades dietéticas de los alumnos".*

Cuarta. A mayor abundamiento, existe un proyecto de Real Decreto que atiende expresamente la cuestión, disponiendo en su articulo 4.3. que

"Se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos, creencias religiosas u otras circunstancias debidamente justificadas requiera un menú especial. En particular se atenderán las necesidades alimentarias de celiacos, alérgicos y que sufran otras patologías nutricionales o metabólicas. Cuando no sea posible, se facilitarán los medios de conservación adecuada para que los escolares depositen comida preparada en su casa, hasta el momento del consumo. Asimismo, se facilitará a los escolares los medios necesarios para el calentamiento de comidas previamente preparadas en casa".

Quinta. De los referentes normativos se infiere que para la efectividad del derecho a la educación y para el soslayamiento de cualquier tipo de condicionante económico, geográfico o social que impida su plenitud, será necesario atender a las peculiaridades de cada caso en concreto que, en el supuesto que nos ocupa supone –siguiendo la reglamentación autonómica– que el menú sea adaptado y equilibrado para el alumno, con una doble limitación:

a) Actividades de control y seguimiento que realice la autoridad sanitaria competente

En este sentido, la Dirección General de Salud Pública remite al Real Decreto 3481/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, que con carácter general no impide la posibilidad planteada por la reclamante, y sí, en su artículo 6.10 autoriza el uso de aditivos colorantes y edulcorantes aptos para consumo humano, desaconsejados en el informe médico de 18 de agosto de 2008, emitido por la doctora Dª. XXX (Nº Col. 30/06612-0), que recomienda la dieta preparada en casa, carente de aditivos y conservantes, y sin lácteos, ni ternera.

b) Bajo la supervisión y asesoramiento de los servicios de la Consejería de Educación

A este respecto, el informe del Jefe de Servicio de Promoción educativa de la Dirección General de Promoción Educativa e Innovación, es explícito al señalar, que si bien "por parte de los órga-

nos competentes de esta Consejería no es posible dictar instrucciones concretas que obliguen a ese centro educativo a prestar el servicio (…) dado que entre las funciones y competencias del personal docente y no docente dependiente de esta Consejería no se encuentra el realizar las tareas que llevaría consigo la aceptación de dicha solicitud (…) por parte de este Servicio se considera conveniente que adopten por ese centro las medidas necesarias para hacerlo posible, sometiendo a la decisión del Consejo Escolar que se permita a la persona adulta que cada día acompaña a la alumna, deposite el recipiente con la comida preparada en el lugar del armario frigorífico de la cocina que se habilite para ello (o cualquier otra medida similar que a juicio del Consejo Escolar pueda resolver la situación)…".

En suma, ha de entenderse que en ausencia de regulación autonómica sobre la materia, compete al Consejo Escolar velar por que el menú proporcionado a la alumna en cuestión sea "sano y equilibrado" lo cual en principio –y en caso de enfermedad– sólo se puede determinar por el profesional médico que trata a la menor, asumiendo el asesoramiento que al respecto apunta el representante de la administración educativa, habilitando los medios necesarios para permitir satisfacer el interés de la menor.

Por lo expuesto por esta Defensoría se emite la siguiente,

SUGERENCIA A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Que en cumplimiento del artículo 80.3. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de de mayo, de Educación, se elabore y apruebe un Decreto Regional regulador de los comedores escolares en los centros docentes públicos y privados no universitarios, y en concreto, comprensivo de las situaciones particulares en las que sea necesario individualizar los menús ofrecidos, con la finalidad de homogeneizar el tratamiento otorgado por los centros docentes no universitarios en el ámbito de la Región de Murcia, que evite situaciones discriminatorias o limitativas del derecho de todas las personas a recibir el servicio educativo en condiciones de igualdad.

RECOMENDACIÓN AL C.E.I.P. VIRGEN DE BEGOÑA DE CARTAGENA

Sería conveniente que por los órganos competentes se asuman las recomendaciones efectuadas por el responsable de la administración educativa en el informe emitido al efecto, y en todo caso que, en el ejercicio de sus competencias, garanticen a la escolar la posibilidad de un menú sano y equilibrado, bien preparado en el domicilio familiar, bien por la empresa encargada del comedor escolar, pero en este último caso, siempre en coordinación y con conformidad del facultativo responsable del tratamiento.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 136/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El pasado 26 de marzo de 2009 se registraba la entrada en esta Defensoría de una queja promovida por Dª. XXX, vecina del municipio de Cartagena, en representación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria "Virgen de Begoña" de Tentegorra (Cartagena).

En la queja, a la que acompaña diversa documentación y numerosas fotografías relacionadas con los hechos que plantea, la reclamante pone de manifiesto los problemas de acceso y seguridad de los que adolece el centro escolar de cuya comunidad forma parte como representante del AMPA. Esos problemas traen causa de las inadecuadas infraestructuras viales que dan acceso al mismo: un camino estrecho carente de aceras por el que cada día, en horario de entrada y salida, transita una comunidad educativa de 450 alumnos, las madres y los padres que los acompañan, una treintena de profesores y el resto del personal no docente. Además, la reclamante expone en su escrito que la situación se ha agravado a causa del progresivo aumento de alumnos matriculados en el centro, que se ha triplicado, según afirma, en los últimos años. También expresa que como consecuencia de todo ello, en septiembre del pasado año se produjo el atropello de la madre de un alumno con resultado de graves lesiones para la misma.

Segundo. En el escrito de queja y en la documentación que se acompaña se constata que el AMPA representada por la reclamante está instando desde 2006 a la administración local de Cartagena a que solucione los problemas planteados. Esta asociación, apelando a la "utilidad pública" del objeto de sus reivindicaciones, insta al Ayuntamiento de Cartagena a que realice las oportunas labores de coordinación y colaboración entre todas las instancias implicadas para dar solución al problema. Ya en aquel año 2006, en un informe emitido por la Policía Local de Cartagena, se sostiene que bastaría con los trabajos de una excavadora para allanar los terrenos y adecuarlos al estacionamiento de los vehículos.

No obstante, desde un primer momento se plantea la existencia de un problema que singulariza hasta cierto punto este asunto, y es el relativo a la titularidad de los terrenos necesarios para dar solución a las demandas de aquella comunidad educativa. Así, consta que los terrenos llamados a solventar los problemas de acceso planteados están clasificados en el planeamiento urbanístico municipal como suelo urbano, que se incluyen en el ámbito de una Unidad de Actuación Urbanística, y que están calificados dentro de la misma como "viales y aparcamientos".

Pero también se desprende de la documentación obrante en el expediente que si bien el Colegio pertenece al Ministerio de Defensa, y que fue cedido en su día a la administración educativa regional mediante la suscripción de un convenio de cesión de uso firmado entre el citado Ministerio y la Consejería de Educación de la CARM, no obstante los terrenos colindantes al Colegio que podrían ayudar a solucionar el problema planteado, según se expresa en un documentado aportado por la reclamante, y firmado por el Sr. Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena, no son públicos, toda vez que fueron desafectados en su día, puestos a disposición de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa, y revertidos a sus anteriores propietarios, por lo que en la actualidad esos terrenos son de titularidad privada.

Tercero. El pasado 27 de mayo, y una vez que quedó debidamente acreditada la representación de la reclamante para actuar ante esta Institución en nombre de la AMPA del Colegio, esta Defensoría adoptó la decisión de admitir a trámite

la queja y comunicar tal circunstancia a su promotora. Ese mismo día se practica el oportuno requerimiento de información al Ayuntamiento de Cartagena, que ante el transcurso del plazo habilitado al efecto para la recepción del informe hubo de ser reiterado en los primeros días del pasado mes de agosto. Finalmente, el 26 de agosto se recibe en esta Defensoría una comunicación de la Sra. Alcaldesa de Cartagena, a la que se acompaña un informe de la Gerencia de Urbanismo de aquel Ayuntamiento, suscrito por el Secretario de la misma en octubre de 2008, que básicamente describe la situación urbanística de los viales de acceso al Colegio y su aparcamiento anexo, su clasificación y calificación urbanísticas y el régimen aplicable a los mismos, dejando claro en cualquier caso que no son propiedad del municipio.

En la comunicación de la Sra. Alcaldesa de Cartagena, apoyada en el precitado informe, se expresa que han sido diversos los encuentros habidos entre la administración local y la comunidad educativa implicada con la finalidad de mejorar la seguridad de los accesos al centro escolar, pero que la capacidad de actuación municipal en ese asunto está limitada al no ser de propiedad municipal los viales de acceso al centro educativo, y que en tal sentido la única medida adoptada ha sido la de reforzar la presencia de la Policía Local en los horarios de entrada y salida al colegio público.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. En el ámbito de los principios rectores de la política social y económica que recoge la Constitución Española en el Título III del Capítulo I, en el artículo 39.4 se establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Con esa remisión constitucional es obligado traer a colación el artículo 3 de la **Convención Sobre los Derechos del Niño** de 20 de noviembre de 1989, de la que España es parte. Allí se expresa que:

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada".

Tercera. En el ámbito estrictamente educativo, el Capítulo I del Título Preliminar de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación, establece en su artículo 2.2 que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la

orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

De otro lado el artículo 8 de la misma Ley expresa que las Administraciones educativas y las Corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta Ley.

Cuarta. A los efectos de residenciar en el Ayuntamiento de Cartagena el impulso de las medidas contenidas en la presente resolución, es oportuno incluir en estos considerandos jurídicos lo expresado en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. Allí se establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Pero además, esta misma ley básica establece en su artículo 25.2 que el municipio ejercerá en todo caso competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de (a) seguridad en lugares públicos, (b) ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, y (d) pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

Cabe afirmar por otro lado que además de esa obligación "ex lege" que se impone a todos los ayuntamientos por los precitados artículos de la Ley 7/1985, esta misma norma establece en su artículo 18.1.g) el derecho de todo vecino a exigir la prestación, y, en su caso el establecimiento del correspondiente servicio público, en todos aquellos supuestos que constituyen competencia municipal propia de carácter obligatorio.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

SUGERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Dada la legítima y razonable aspiración de la comunidad educativa del Colegio Público "Virgen de Begoña" de Cartagena, el Ayuntamiento de esta localidad debería impulsar un acuerdo entre las administraciones concernidas en la solución del problema descrito: administración educativa de la CARM, Ministerio de Defensa y la propia administración local de Cartagena, tendente a la adquisición de los terrenos necesarios y la realización de las obras oportunas para dotar de la máxima seguridad posible a los accesos del referido centro escolar.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 336/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 30 de julio de 2009, D. XXX presentó queja ante esta Defensoría, denunciando

los efectos ilegales de la Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Dirección General de Centros, por la que se dictan instrucciones y se establece el calendario del proceso ordinario y extraordinario de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria para el curso 2009-2010, en cuanto se produce una reducción del número de plazas reglamentariamente establecida para los cursos de segundo ciclo de educación infantil, al señalar en su Instrucción Décima apartado cuarto, que los alumnos que opten a reserva de plaza en los niveles de acceso a las etapas de infantil y primaria ocuparán dos vacantes siempre que los centros educativos del municipio o localidad cuenten con los espacios adecuados para asumir la escolarización.

En suma, el Centro escolar en cuestión, siguiendo la citada Instrucción ha ofertado 24 plazas en una de las líneas, por contar con un alumno con necesidades educativas especiales que ocupa dos plazas. Se alega por el promotor del expediente la incapacidad de esta resolución para vulnerar lo establecido por el Consejero mediante Orden, así como la ausencia de publicidad de la misma.

Segundo. Con fecha 14 de agosto de 2008 se admitió a trámite la queja, procediendo con esa misma fecha a solicitar información a la Consejería de Educación, Formación y Empleo que, procedió a emitir informe con fecha de registro de entrada en esta Defensoría de 21 de agosto de 2009, posteriormente ampliado por informe de la Inspección de Educación, enviado por fax a esta Defensoría el 10 de septiembre de 2009.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Ámbito competencial

En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Fundamento constitucional

El fundamento constitucional legitimador de la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, reside en el artículo 27 de la Constitución Española, en cuya virtud,

"1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

(…)

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

(…)

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

(…)"

Este artículo se encuentra incardinado en la sección primera del Capítulo segundo del Título Primero, encontrándose entre los principios a los que nuestro constituyente ha dotado de un nivel máximo de garantías para su defensa, entre los que se encuentra su conocimiento por el Defensor del Pueblo.

Tercera. Régimen Jurídico aplicable

La normativa aplicación a la cuestión objeto de análisis está constituida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; y en el ámbito regional, por el Decreto 369/2007, de 30 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo

de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Murcia y por la Orden de 16 de enero de 2009, por la que se regula el procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Programas de cualificación profesional inicial en la Región de Murcia.

Con carácter general, en cuanto a la naturaleza de las instrucciones, resulta de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Normativa vigente en cuanto al número de plazas ordinarias y plazas reservadas por unidad escolar

La ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación, dispone en su artículo 87 con la rúbrica "Equilibrio en la admisión de alumnos" lo siguiente: "1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello, establecerán la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo".

En cuanto al número de plazas por unidad escolar, objeto de discusión por el promotor de la queja, y descendiendo al ámbito autonómico, el artículo 5 del Decreto 369/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la Consejería con competencias en materia de educación la competencia para determinar la oferta anual de plazas escolares en cada centro docente sostenido con fondos públicos, así como la reserva del número de plazas que se determinen en segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación básica, para alumnos con necesidades de apoyo educativo.

En ejercicio de la citada habilitación, la Consejería de Educación, Formación y Empleo, dictó la Orden de 16 de enero de 2009, estableciendo en su artículo cuarto un ratio de 25 alumnos por unidad escolar para el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, y una reserva de hasta un quince por ciento para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, reseñando que de esta reserva, al menos dos plazas irán destinadas para alumnos con necesidades educativas especiales.

Este número de alumnos por unidad escolar, sigue preceptuando el apartado cuarto del citado artículo, podrá ser modificado previa autorización de la consejería de Educación, Formación y Empleo, a través de la Dirección General de Centros, no incrementándose el número de alumnos por encima de la ratio establecida mientras existan plazas vacantes del mismo curso en otros centros sostenidos con fondos públicos de la misma área de influencia, salvo que exista causa razonable que, a juicio de la Dirección General de Centros, lo justifique; comunicándose en todo caso, a los órganos implicados las razones que aconsejan el aumento de ratio.

En sede de "alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", dispone el artículo 12.3 que la Dirección General de Centros podrá considerar la conveniencia de ajustar las plazas reservadas a este alumnado en el centro en el que se propone su escolarización, con el fin de que no supere la media del área de influencia de la zona escolar y evitar la concentración de alumnado con estas necesidades en un mismo centro, respetando la libre elección de éste".

La cuestión que aquí se dilucida es si el número de plazas puede ser reducido en virtud de una Resolución de la Dirección General de Centros, o si

por el contrario, esta Resolución excede de la habilitación reglamentaria. Estos aspectos se tratarán en las consideraciones siguientes.

Quinta. Sobre la naturaleza jurídica de la Instrucción y efectos de la misma

Dispone el artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, referida en la Consideración anterior que "Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda".

Siendo inicialmente discutida la naturaleza jurídica de las instrucciones, circulares u órdenes de servicio, la doctrina es hoy pacífica al señalar su carácter no normativo, circunscribiéndola como señala el Profesor García de Enterría a "un poder doméstico, restringido en su alcance aún más (que el reglamentario interno o administrativo ejercido por los Ministros) al ámbito estrictamente organizativo o de un poder derivado y estrictamente ejecutivo que se ejerce, en virtud de habilitaciones legales concretas. (…) Cuando como es frecuente, estas Circulares, Resoluciones o Instrucciones incluyan "normas interpretativas o aclaratorias, u otras que pretendan tener contenido normativo, vincularán por razón de la obediencia jerárquica a los órganos de gestión de la Administración Pública dependientes de la Dirección General de que se trate, pero carecerán de valor normativo propio para los ciudadanos o los tribunales. (…) Queda claro así que son simples órdenes jerárquicas que, aunque vinculen a los agentes, no constituyen Derecho objetivo afectante a los ciudadanos…".

En el mismo sentido, se ha pronunciado la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (vid. STC de 19 de febrero de 1986, 20 y 28 de marzo de 1990) y Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1989 y de 19 de noviembre de 2007, al recordar que las Instrucciones no pueden innovar el ordenamiento jurídico.

Centrándonos en la Resolución objeto de queja, ésta tiene por objeto establecer el calendario del proceso ordinario y extraordinario de admisión de alumnos en centros sostenidos para fondos públicos de educación infantil y primaria durante el curso 2009-2010.

En lo que hace a su publicidad, considera esta Defensoría que hubiera sido conveniente proceder a la misma a los efectos de su general conocimiento, si bien, en tanto sus anexos son objeto de publicación en la página web, y habiendo sido publicada en el tablón de anuncios del colegio correspondiente –según comunicación remitida por el Directo General de Centros– podemos entender suplida esta deficiencia.

En cuanto a la cobertura reglamentaria de esta Resolución, es cierto que las instrucciones no podrán incluir contenido normativo pues recordemos, según doctrina consolidada del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, la potestad reglamentaria la ostenta el Consejo de Gobierno y los Consejeros cuando así se lo atribuya una norma con rango de ley.

Sentado lo anterior, parece que la citada resolución –en un intento de interpretación favorable– podría encontrar amparo legal en la habilitación del Consejero para "ajustar" o "modificar el número de plazas", con lo cual, si bien de forma jurídicamente reprochable, parece que la Dirección General de Centros no ha hecho otra cosa que plasmar en una instrucción lo que de otra parte ha sido una tradición seguida en el ámbito educativo, y es que cuando concurren alumnos con necesidades educativas especiales, requieren de una mayor atención por lo que ocupan dos plazas vacantes.

En suma, es necesario valorar la concurrencia de dos bienes jurídicos en conflicto como son el posi-

ble derecho del promotor de la queja a que su hijo entre en el centro elegido en primera instancia por carecer la instrucción de la Dirección General de Centros de rango normativo suficiente y no estar publicada de forma adecuada, y el hecho de que los restantes alumnos de la unidad escolar pudieran verse perjudicados por una deficiente atención al tener que acoger un alumno más.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente,

RESOLUCIÓN

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia considera que la incorporación de un alumno más a una unidad educativa por considerar una instrucción de rango normativo insuficiente o una publicación inadecuada de la misma, no es preferente a la atención requerida por los alumnos de dicha unidad cuando, en la misma, exista algún alumno con necesidades educativas especiales y quede completada la ratio establecida para esos casos.

RECOMENDACIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

No obstante se recomienda a la Consejería de Educación, Formación y Empleo que cuando sus disposiciones excedan de la mera ordenación interna, deberán adoptar un rango reglamentario más claro y proceder a su publicación en un diario oficial a los efectos del general conocimiento de los ciudadanos y su oportuno cumplimiento.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de siete días –en atención al tiempo que lleva iniciado el curso escolar–, nos informe sobre la aceptación de las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos informe sobre las razones que lo impidan y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 395/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 4 de septiembre de 2009, D. XXX, presentó queja expresiva de la situación atravesada por su hijo de 9 años, que cursando cuarto de primaria y no habiendo superado dos áreas, matemáticas e inglés, no podría promocionar al curso próximo según el criterio del centro educativo. El padre, argumenta que no pasar de curso podría agravar en su hijo los problemas psicológicos de dificultades de relación y baja autoestima que en ese momento estaba atravesando, de forma que si se daba tiempo a que el tratamiento psicoterapéutico surtiera su efectos, con refuerzo educativo podrían superarse los obstáculos académicos.

El promotor de la queja aporta informe de orientación educativa y/o sociofamiliar del equipo de orientación educativa psicopedagógica, fechado el 15 de diciembre de 2008, en el que sin pretensión de exhaustividad, y citando textualmente, destaca la opinión de su tutora en la que "a su juicio (…) su nivel de competencia curricular se encuentra en el curso que está realizando (4º E.P. sin manifestar desfase), y "a nivel lector, su fluidez, exactitud,

entonación y comprensión son aceptables para su edad".

Como características más significativas a nivel personal del alumno –prosigue el informe, **destacamos** (se señala sólo lo que pudiera ser relevante a los efectos de la presente resolución: "(…), timidez, inseguridad, baja autoestima, sentimiento de inferioridad, exceso de vergüenza al ridículo a nivel social, miedos, desorientación (…)".

Se acompaña asimismo, el informe final de logopedia de junio de 2009, donde en resumen se indica que el niño ha trabajado bien en las sesiones, y boletín informativo de los resultados de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación y final, destacando que sólo el inglés se suspendió en las tres evaluaciones, y las matemáticas en las dos últimas.

Segundo. Por parte de esta Defensoría, se han mantenido conversaciones telefónicas con personal directivo y funcionario de la Dirección General de Ordenación educativa, aportando ésta informe 7 de julio de 2009 de la inspección de educación, comprensiva de las actuaciones y comprobaciones realizadas, concluyendo que "el centro ha actuado, en relación a la no promoción del alumno XXX de 4º de Educación Primaria, conforme a la normativa vigente". "No obstante, de la información recogida se ha observado que por parte del centro no se han unificado criterios sobre organización de apoyos al alumno por el profesorado, tampoco se recogen orientaciones por escrito en ninguna acta del orientador (…) sobre pautas a seguir con el alumno, al profesorado del colegio (…)".

Finalmente con fecha 30 de julio de 2009, se emite informe por el Servicio de Ordenación Académica, en el que previo análisis de la normativa aplicable, remite al informe de la Inspección de Educación, donde concluye que el centro ha actuado en todo momento conforme a la normativa vigente.

Tercero. Desde esta Defensoría se entiende esencial trasladar la sensación de impotencia e injusticia, que pone de manifiesto el progenitor, denunciando que la autoridad educativa atienda a criterios exclusivamente académicos, sin que haya puesto todos los instrumentos a su disposición para salvar los escollos académicos existentes, y sin valorar los efectos dañosos que un fracaso escolar manifestado en una ausencia de promoción, pudieran causar en este niño, con problemas de tipo psicológico (tal como se concluye tanto en el informe psicopedagógico, como del psicólogo clínico) y en tratamiento para su curación.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Ámbito competencial

En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Fundamento constitucional

El fundamento constitucional legitimador de la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, reside en el artículo 27 de la Constitución Española, en cuya virtud, "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

(…)

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

(…)

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

(…)"

Este artículo se encuentra incardinado en la sección primera del Capítulo segundo del Título Primero, encontrándose entre los principios a los que nuestro constituyente ha dotado de un nivel máximo de garantías para su defensa, entre los que se encuentra su conocimiento por el Defensor del Pueblo.

Tercera. Régimen Jurídico

La normativa aplicación a la cuestión objeto de análisis está constituida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; por la normativa estatal aplicable con carácter mínimo en cuanto a contenidos curriculares, y en la Región de Murcia, por el Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la Orden de 13 de septiembre de 2007, por la que se regula para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la implantación y desarrollo de la Educación Primaria; por la Orden de 10 de diciembre de 2007, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria, y por la Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones para el final de curso 2008-2009 y comienzo del 2009-2010, en materia de ordenación académica, evaluación y calidad, en los centros que imparten educación infantil, primaria y educación especial.

Cuarta. Sobre la finalidad de la educación primaria, su evaluación y criterios de promoción

Toda la normativa expresada en la consideración anterior está orientada o dirigida a dar cumplimiento a la finalidad que se pretende conseguir de la etapa de la educación primaria, esto es, "proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquiriendo las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad". La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo" (art. 16.2 y 3 L.O. 2/2006, en similares términos art. 2.5 Decreto 286/2007, de 5 de octubre).

Para la consecución de este objetivo, la evaluación del proceso de aprendizaje será "continua y global" (art. 20 L.O. 2/2006, art. 8 Decreto 286/2007 y art. 4 de la Orden de 10 de diciembre de 2007), poniéndose especial énfasis en la atención a la diversidad de los alumnos, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades (art. 2.5 Decreto 286/2007, cohonestado con el artículo 19.1 de la L.O. 2/2006).

Finalmente, una vez terminado cada ciclo, y como consecuencia de la evaluación continua y global antes referida, procederá valorar la promoción al siguiente ciclo, en los que se tendrá en especial consideración la información y criterio del maestro tutor, quien ponderará de manera muy especial la adquisición de competencias básicas en las áreas instrumentales de lengua castellana y literatura y matemáticas. Compete al tutor la elaboración de las actas de las sesiones de evaluación y el informe individualizado de evaluación al final del ciclo.

Procederá a la promoción al siguiente ciclo quien haya alcanzado el desarrollo correspondiente de

las competencias básicas, o bien sin haberlas alcanzado siempre que los aprendizajes alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo (vid. art. 6 Orden de 10 de diciembre de 2007).

En desarrollo de la Orden de 10 de diciembre de 2007, la Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones para el final del curso 2008-2009 y comienzo del 2009-2010, en materia de ordenación académica, evaluación y calidad, en los centros que imparten educación infantil, primaria y educación especial, dispone en su apartado octavo que serán criterios de promoción de primer y segundo ciclo de educación primaria:

"1. El nivel de desarrollo alcanzado por el alumnado en la adquisición de competencias básicas.

2. La consecución de los objetivos, el dominio de los contenidos y aprendizajes de ciclo necesario para una evaluación positiva, mediante la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en las programaciones docentes.

3. La consideración especial del área de lengua castellana y literatura y del área de Matemáticas por su valor instrumental.

4. La actitud positiva del alumno y el esfuerzo por progresar en sus aprendizajes, la asistencia regular y la disposición para superar las dificultades y corregir los errores.

5. El progreso individual respecto de la evaluación inicial del alumno.

6. La oportunidad de permanecer un curso más en el ciclo para lograr una mayor solidez en los aprendizajes instrumentales y las competencias básicas, teniendo en cuenta la madurez o momento evolutivo del alumno, así como el hecho de que la permanencia de un año más en un mismo ciclo puede darse un sola vez a lo largo de la etapa".

Quinta. Del informe de la inspección educativa

Para el cumplimiento de todas estas previsiones, la disposición adicional segunda de la Orden de 10 de diciembre de 2007 por la que se regula la evaluación en la Educación Primaria, atribuye a la Inspección de Educación "asesorar y supervisar el desarrollo del proceso de evaluación y proponer la adopción de medidas que contribuyan a mejorarlo…".

Al respecto, el informe de la Inspección de Educación previa enumeración de la documentación de que dispone y de las actuaciones practicadas concluye que, a pesar de que se ha observado que por parte del centro no se han unificado criterios en cuanto a la organización de apoyos del alumno, ni orientaciones por escrito en ningún acta del orientador dirigida al profesorado del colegio, el centro ha actuado, en relación a la no promoción, conforme a la normativa vigente.

Pues bien, desde esta Defensoría se disiente tanto de algunos datos señalados en el informe de inspección, como en la relevancia de las deficiencias observadas, como a continuación se expondrá.

El informe de la inspección forma su juicio en primer lugar según el criterio del Director, del Jefe de Estudios y Tutora quienes manifiestan que el retraso presentado por el alumno "proviene de 2º de Educación Primaria, que no consideraron la repetición en 2º de Educación Primaria por entender que aunque presentaba ya un retraso podría superarlo en el segundo ciclo, con la mayor madurez del alumno y los apoyos que el alumno pueda necesitar, en función de las disponibilidades del centro".

Llama la atención a esta Defensoría la discordancia de dichas declaraciones con las del informe del equipo de orientación psicopedagógica de 15 de diciembre de 2008 donde en su página 4 se indica "Su nivel de competencia curricular a juicio

de la tutora se encuentra en el curso que está realizando (4º E.P., sin manifestar desfase)". Esta contradicción invalida severamente el juicio manifestado por la tutora –máxima responsable de la evaluación del alumno– al inspector, o en su defecto, al informe del equipo psicopedagógico, orientador en la decisión sobre la promoción o no del alumno.

Otro elemento a tener en cuenta en el informe psicopedagógico es que se emite a petición del psicólogo clínico, y no como consecuencia de una preocupación del centro directivo sobre la situación del alumno. Asimismo, resulta incomprensible cómo las deficiencias detectadas entre las que se encuentran: "dificultades de memoria a largo plazo, timidez, inseguridad, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, excesiva vergüenza al ridículo a nivel social, miedos, desorientación, despiste, dificultad para la comprensión de órdenes e instrucciones, disfemia a nivel lingüístico. Sospecho que presenta algún problema a nivel de procesamiento de la información y el lenguaje tanto oral como escrito", no hayan originado instrucciones al equipo de profesores sobre como tratar a este alumno en cuestión.

A mayor abundamiento, tampoco el alumno recibe apoyo por parte del centro en el nivel académico, sino únicamente en logopedia, así a pesar de que el inglés se suspendió en todas las evaluaciones y las matemáticas en la segunda y tercera evaluación, no se creyó oportuno prestar refuerzo educativo (resulta vago e inadmisible el comentario del director que consta en el informe del inspección de que "algunos apoyos tuvo"), ni mereció comentario especial o individualizado en ninguna de las evaluaciones por parte de su tutora, tal como se acredita –según el informe de inspección– en las actas correspondientes.

En suma, se decide no promocionar a un alumno en 4º de primaria y a sabiendas de que no podrá volver a repetir en esta etapa, cuando según los datos de que se dispone presuntamente era un niño normal para su edad según criterio de la tutora en el primer trimestre del curso, suspende matemáticas e inglés casi desde principios de curso sin ningún tipo de refuerzo educativo, aparentemente ni mejora ni empeora pues no es objeto de comentario por su tutora en ninguna de las evaluaciones, y presenta problemas psicológicos graves constatados tanto por el psicólogo clínico como por el equipo psicoterapéutico, sin que los profesores tengan instrucciones sobre especial atención al respecto, y como colofón de esta falta de diligencia se concluye por el inspector de educación que "el centro ha actuado, conforme a la normativa vigente".

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Y AL CENTRO ESCOLAR

De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, la Educación Primaria tiene como finalidad proporcionar una educación que permita afianzar el desarrollo personal y bienestar de los niños y niñas. Para ello se atenderá a los alumnos de forma individualizada, mediante una evaluación global y continua, poniendo en práctica mecanismos de refuerzos tan pronto como se detecten dificultades.

En el caso que nos ocupa, el centro escolar ha obviado todos estos deberes, sin que por la Inspección Educativa, encargada de su supervisión, se haya concluido la inadecuación a la normativa vigente, no siendo admisible la decisión de no promoción de un alumno en 4º de primaria, cuando la misma hubiera sido posible de haber observado una conducta diligente por parte de los órganos competentes.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de siete días –en evitación de mayores perjuicios para el escolar–, nos informe sobre la aceptación de las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos informe sobre las razones que lo impidan y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE Q-0407/2009

En fecha 14 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Defensoría queja presentada por D. XXX con número de expediente Q-407/2009, en la que manifestaba ante esta Institución haber solicitado ante la Consejería de Educación, Formación y Empleo el acceso al programa de Gratuidad de Materiales Curriculares del curso 2008-09.

La peculiaridad de la cuestión que el interesado planteaba versaba en que la matriculación de su hijo en el C.E.I.P "San Pablo" de Abarán tuvo lugar, por motivos personales, el 1 de septiembre de 2008, mediante traslado de su anterior Centro Escolar "Santa María de la Expectación" en Cuenca y, por tanto, una vez había transcurrido el plazo que, para efectuar la solicitud de acceso a dicho programa, estaba previsto en la *Orden de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan Ayudas Económicas para la adquisición de Libros de Texto para el alumnado de los niveles 1º, 2º o 3º de Educación Primaria y de 1º o 2º de Educación Secundaria Obligatoria Escolarizado en Centros sostenidos con Fondos Públicos durante el curso 2008-09* (B.O.R.M. de 30 de mayo de 2008). A pesar de ello, D.J.C.S formalizó dicha solicitud, si bien en la misma pedía textualmente *"la aceptación de traslado de solicitud efectuada en plazo y forma en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha"*.

Recibido informe de la Consejería de Educación, Formación y Empleo en el mismo se pone de manifiesto que, efectivamente, D. XXX formuló dicha solicitud, en fecha 15 de septiembre de 2008, ante esa Consejería y, en fecha 16 de septiembre de 2008, ante el C.E.I.P "San Pablo" de Abarán, la cual fue denegada a través de propuesta de resolución provisional formulada por el Director General de Promoción Educativa e Innovación, de fecha 17 de octubre de 2008, por ser presentada fuera de plazo y no existir previsión sobre la aceptación de solicitudes efectuadas en otras Comunidades Autónomas en la Orden de 22 de mayo de 2008, propuesta que fue elevada a definitiva por Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 5 de diciembre de 2008.

Por tanto, y aún compartiendo la consideración de que la solicitud efectuada por D. XXX no pudo ser atendida, al no estar previsto dicho supuesto en la Orden de 22 de mayo de 2008, la cual se encargaba de regular las bases de dicha convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto, esta Defensoría, en el convencimiento de que este tipo de situaciones se podrían evitar en el futuro, garantizando así el objetivo principal perseguido en la concesión de este tipo de ayudas que, tal y como dispone el Pacto Social por la Educación en la Región de Murcia, acorde con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Educación en materia de política

compensatoria, no es sino compensar las desigualdades personales y sociales como principio básico de calidad del sistema educativo, a propuesta de la Asesoría Jurídica y en uso de las facultades que le atribuye el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, ha considerado necesario formular la siguiente,

SUGERENCIA A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Sería conveniente que, por parte de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, se procediera a incluir en las bases reguladoras de las próximas convocatorias de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto, la posibilidad de admitir solicitudes fuera del plazo establecido con carácter general, para atender aquellos supuestos en los que, por circunstancias excepcionales, no se hubiese podido realizar la solicitud dentro de dicho plazo, y ello en consonancia con el objetivo fundamental perseguido en la concesión de este tipo de ayudas que no es otro que el de compensar las desigualdades personales y sociales como principio básico de calidad del sistema educativo.

Es cuanto tengo el honor de comunicarle concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Sugerencia o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

X.6.2. Enseñanza Universitaria

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA INCOADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 10 de marzo de 2009, D. XXX presentó queja sobre la actuación de la Universidad de Murcia en el proceso de matriculación 2008-2009 en lo referente al ingreso de estudiantes procedentes de universidades extranjeras. En concreto se alega falta de información por inexistencia o falta de publicidad de las listas referentes a estudiantes procedentes de universidades extranjeras; deficiente interpretación de la normativa aplicable en lo referente a la reserva de plazas para extranjeros, incumplimiento de los plazos establecidos para la resolución de solicitudes con evidente perjuicio para los alumnos y derivación de plazas "sobrantes" al primer curso, antes de cerrar el proceso y al margen de lo establecido en la ley.

Segundo. Consta en el expediente aportado por la reclamante, lista de 14 de octubre de 2008 sobre resolución definitiva de solicitudes de traslados de expedientes correspondientes a estudios españoles; petición de información de 16 de enero de 2009 sobre alumnos matriculados por traslado de expediente; se aporta asimismo Resolución del Rector (P.D. de firma, del Decano de la Facultad de Medicina) de 8 de enero de 2009, sobre denegación de la admisión para continuar con los estudios de medicina; recurso de 20 de enero de 2009 de la interesada contra la denegación en la resolución anterior; acta de requerimiento notarial a la Universidad de Murcia de D. Antonio Yago Ortega, de fecha 4 de febrero de 2009, solicitando información sobre alumnos españoles trasladados y matriculados, así como recursos presentados en caso de inadmisión.

Con fecha 29 de mayo de 2009, la interesada presenta por fax en esta Defensoría Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 20 de mayo de 2009 (salida de 27 de mayo de 2009) de desestimación del recurso presentado con fecha 20 de enero de 2009, en el que se indica que la denegación del traslado obedece en primer lugar a que la interesada no ha obtenido la convalidación del mínimo de 60 créditos exigidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 16 de julio de 2002 en su redacción otorgada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2008, y en segundo lugar en que, aún en el supuesto de que hubiera obtenido los sesenta créditos, no se habría accedido al traslado puesto que no existían plazas disponibles.

Tercero. Con fecha 18 de marzo de 2009 se admitió a trámite la queja, requiriendo con fecha 1 de abril de 2009 información a la Universidad de Murcia (registro de entrada 14 de abril de 2009) sobre "condiciones en que se han adjudicado las plazas ofertadas para alumnos de otras universidades, aclarando si existen plazas de las ofertadas que no fueron efectivamente ocupadas, y si éstas se han utilizado para aumentar otras matrículas de otros cursos en vez de ir dirigidas a aquéllas que quedaron sin plaza asignado como alumnos procedentes de universidades extranjeras".

Cuarto. Con fecha 5 de junio de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 11 de junio de 2009) se recibió informe de la Universidad de Murcia, en la que se ratifica la resolución del recurso de reposición de 20 de mayo de 2009, en los términos de que la interesada no dispone de los 60 créditos exigibles por la normativa de aplicación y así se reflejó en la propuesta definitiva 18 de noviembre de 2008 de traslado de alumnos extranjeros a la titulación de licenciado en medicina curso 2008-2009; y en segundo lugar, entendiendo que todas las plazas previstas para el cupo de extranjeros han sido cubiertas, de forma que a pesar de haber obtenido la homologación de los 60 créditos, no hubiera obtenido el traslado igualmente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Competencia

En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Régimen Jurídico Aplicable

La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida, con carácter general, por La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su redacción otorgada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; por la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia; y sustantivamente por el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, y en aplicación de la disposición transitoria única de este último, por el R.D. 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial; en materia de convalidaciones por el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y en lo que resulte aplicable por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; y con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Asimismo ha de considerarse el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 16 de julio de 2002, por el que se aprueba la normativa sobre admisión de alumnos iniciados en otras universidades para continuar con los mismos estudios en la Universidad de Murcia, modificado –para la licenciatura de medicina– por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2008.

Tercera. Autonomía Universitaria

Adentrándonos en el análisis de la queja expuesta, esta Defensoría es consciente del respeto debido al principio de autonomía universitaria, consagrado como principio basilar de su actuación en el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril, abarcando entre otros, las ámbitos correspondientes a la "admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes", y fundamentándose en "el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio" según reza el apartado tercero de este artículo.

Sentado lo anterior, no es menos cierto que la citada autonomía ha de conciliarse con principios constitucionalmente consagrados como son el de igualdad formal recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el derecho a la educación del artículo 27 o el del artículo 103 en cuanto al sometimiento debido de la Administración Pública a la Ley y al Derecho.

En estos términos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en Sentencia 26/1987, de 27 de febrero (ref. Aranzadi RTC 1987/26) al señalar respecto al derecho fundamental de la autonomía universitaria que *"Naturalmente que esta conceptuación como derecho fundamental con que se configura la autonomía universitaria, no excluye las limitaciones que al mismo imponen otros derechos fundamentales (como es el de igualdad de acceso al estudio, a la docencia y a la investigación) o la existencia de un sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras; ni tampoco las limitaciones propias del servicio público que desempeña y que pone de relieve el legislador en las primeras palabras del art. 1 del L.R.U. …".*

Cuarta. Régimen transitorio de la normativa aplicable

Este sometimiento al ordenamiento jurídico se hace patente ya en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades, consagrando el estudio en la Universidad como un "derecho de todos los españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico (apartado primero), correspondiendo "al Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer las normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Pues bien estas normas básicas están constituidas en la actualidad por el R.D. 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial, que si bien es cierto ha sido derogado por el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, no entrará plenamente en vigor en lo que hace a la regulación de esta materia (Capítulo VI) hasta el curso 2009-2010.

Asimismo, el primero deja sin vigor en su disposición derogatoria única el R.D. 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad,

salvo en su Capítulo V –que por hacer referencia al segundo ciclo de estudios universitarios– no es aplicable a esta queja.

Quinta. Procedimiento de admisión en universidades españolas de alumnos con estudios universitarios cursados conforme a sistemas educativos extranjeros

Siguiendo con el contenido normativo anterior, el R.D. 1742/2003, de 13 de diciembre, dedica un único artículo a los estudiantes universitarios con estudios universitarios cursados conforme a sistemas educativos extranjeros, en el mismo se determina que "Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros susceptibles de convalidación parcial, a los efectos de continuar las mismas enseñanzas o equivalentes en universidades españolas, deberán presentar su solicitud de admisión y convalidación ante el rector de la universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta, en todo caso, las calificaciones del expediente universitario" (artículo 13.1).

Pues bien, en el ámbito de la Universidad de Murcia, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 16 de julio de 2002, por el que se aprueba la Normativa sobre admisión de alumnos con estudios en otras universidades para continuar los mismos estudios en la Universidad de Murcia modificado por Acuerdo de 12 de febrero de 2008, sobre normativa de traslados de expediente para la titulación de licenciado en Medicina, regula en su ámbito de aplicación el supuesto que nos ocupa, esto es, "la admisión de un estudiante con estudios universitarios extranjeros parciales (…) indicando expresamente la posibilidad de convalidación parcial a los efectos de continuar las mismas enseñanzas o equivalentes en la universidad que reúnan el siguiente requisito:

Que le sea convalidado el primer curso completo o un mínimo de 60 créditos.

Si la solicitud es para estudios en los que la demanda de plazas resulte inferior a la oferta, bastará con que los estudiantes haya convalidado un mínimo de 15 créditos o, en su caso, una asignatura" (disposición primera apartado segundo del Acuerdo de 16 de julio de 2002).

Sexta. Sobre la convalidación

En el caso que nos ocupa, en la resolución del recurso de reposición de 20 de mayo de 2009, se señala que "en el presente caso, la interesada no cumple con este requisito, toda vez que en base a la resolución de traslados de la universidad de medicina, citada en el apartado 2 de los hechos, a la interesada no le son convalidados 60 (de) créditos de primer curso, de acuerdo con la propuesta realizada por la comisión de convalidaciones del centro".

En este sentido, el informe de la Universidad de Murcia de 5 de junio de 2005, emitido ante el requerimiento de esta Defensoría, ratifica este extremo, añadiendo que "En fase de recurso el Excmo. Sr. Rector Magnífico, al analizar la conformidad legal del acto administrativo de convalidación, siguiendo la reiterada jurisprudencia en este sentido, se ha limitado a examinar los elementos externos, es decir, si se ha cumplido o no, debidamente, con las formas y trámites necesarios para una convalidación o para una denegación. (STSJ de Madrid, nº 254/1998, de 18 de marzo). Convalidar es… Este proceso de valoración técnica corresponde a los expertos nombrados por la propia administración. En nuestro caso, el artículo 99 de los Estatutos atribuye esta potestad a una comisión de valoración que se constituirá en cada centro y estará compuesta por expertos en la materia. Composición por la que, precisamente, gozan de discrecionalidad técnica a la hora de examinar y valorar los distintos programas y la equivalencia de sus contenidos y la carga lectiva, la cual no puede ser sustituida por el criterio de ningún otro órgano administrativo o judicial (STSJ de Murcia nº 954/2007, de 30 de octubre)".

Sin embargo, y siguiendo también la doctrina jurisprudencial, esta discrecionalidad técnica no ha de confundirse con arbitrariedad, pues el proceso de convalidación habrá de seguir las pautas establecidas con carácter particular por el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y en lo que resulte aplicable por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; y con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Como señalábamos, existen diversos pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, así, a modo de ejemplo y en idénticos términos a los señalados por el informante, la Sentencia 1206/1998, de 21 de septiembre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, reseña que *"Efectivamente, convalidar no es otra cosa que dar validez, corroborar, confirmar en definitiva que los conocimientos que se certifican como superados y, por tanto, adquiridos, son aplicables a las mismas materias de otra asignatura o incluso a otras materias de contenidos idénticos o similares. Este proceso de valoración técnica corresponde a los expertos nombrados por la propia Administración. Por tanto, lo supuestamente ya conocido es aplicable reiteradamente a cualquier campo del saber donde se exija ese conocimiento, precisamente por entenderse superada esa materia. Naturalmente, la valoración que se lleve a cabo ha de ser suficientemente motivada, al menos sucintamente, consignando, como mínimo, las razones, motivos o causas por las que no procede convalidar determinada asignatura, para excluir cualquier sospecha de arbitrariedad…"*.

En igual sentido, la STJ de Madrid nº 18/2001, de 14 de mayo (ref. Aranzadi JUR/2002/11104*): "La Administración alega, por último, que las decisiones acordadas han de considerarse correctas por haber hecho uso en definitiva la Administración de una facultad discrecional. Pues bien, a este respecto, conviene recordar que si bien las potestades discrecionales no permiten que, en su ejercicio correcto, se sustituya la valoración del órgano que la tiene atribuida por ninguna otra, también, las exigencias a las que en un Estado de Derecho debe responder la actuación de dichas potestades no las excluye, en su totalidad, del control Jurisdiccional. En este sentido es claramente ilustrativa la Sentencia de la Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1991, nº de Rep. Ar. 4.874/1991, en la que el Alto Tribunal resume la doctrina existente al respecto del control Jurisdiccional de la actuación Administrativa, consagrado en el artículo 106.1 de nuestra Carta Magna, control que se extiende incluso a los aspectos discrecionales de las potestades administrativas, y que viene siendo aplicada por los Tribunales, a través de varias pautas que, como expresa la Sentencia citada, son: 1. El control de los hechos determinantes que en su existencia y características escapan a toda discrecionalidad; 2. La contemplación o enjuiciamiento de la actividad discrecional a la luz de los Principios Generales del Derecho, que informan todo el Ordenamiento Jurídico y por tanto también la norma habilitante que atribuye la potestad discrecional, de donde se deriva que la actuación de esta potestad ha de ajustarse a las exigencias de aquéllos; y, en fin, 3. El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogido en el articulo 9.3 de nuestra Norma Fundamental, que aspira a que la actuación de la Administración sirva con racionalidad los intereses generales (artículo 103.1 de la Constitución).*

De lo expuesto se deriva que la actuación de una potestad discrecional, que en el caso que nos ocupa se refiere a la de la autorización o no de un traslado de expediente académico, se legitimaría explicitando las razones que determinan la decisión con criterios de racionalidad. En definitiva, lo discre-

cional se halla o debe hallarse sustentado por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no puede identificarse con una calidad o cualidad que determine la inatacabilidad. Y en el caso que nos ocupa, como hemos puesto de relieve, aunque tanto en la resolución que resolvió la solicitud del Sr. C. como en la que resolvió la solicitud del Sr. C. se contiene una sucinta motivación, lo cierto es que, por los argumentos expuestos anteriormente, esas motivaciones no pueden aceptarse como justificativas de la diferencia de trato recibida entre ambos solicitantes".

Sentado ya el hecho de que la discrecionalidad no ha de amparar situaciones en las que se coloca al interesado en un situación de indefensión por desconocer los elementos determinantes de la resolución, y descendiendo al caso que nos ocupa, Dª. XXX y la Defensoría misma no solamente desconoce la puntuación obtenida o créditos convalidados, sino que la primera alega desconocer el hecho mismo de haberse denegado los 60 créditos en la convalidación, puesto que en la Resolución del Rector (P.D. de firma, del Decano de la Facultad de Medicina) de 8 de enero de 2009, sobre denegación de la admisión para continuar con los estudios de medicina, se fundamenta la inadmisión en "no quedar plazas vacantes para su distribución", dirigiendo la interesada sus esfuerzos impugnatorios contra este extremo, desconociendo hasta el 29 de mayo de 2009 (fecha de notificación del recurso de reposición contra la resolución denegatoria de la admisión) que carecía de los créditos suficientes en la convalidación.

En efecto, de las visitas y reuniones mantenidas con la interesada desde la presentación de la queja (10 de marzo de 2009) hasta la notificación de la resolución del recurso de reposición (29 de mayo de 2009) la interesada desconocía la existencia de la lista de traslado de universitarios con estudios extranjeros a la Universidad de Murcia, de hecho, afirmaba que a pesar de haberla solicitada repetidas veces al personal de la administración universitaria, se le contestaba que esa lista no existía.

Puesto que esta Defensoría tuvo acceso a la misma, de fecha 18 de noviembre de 2008 y con registro de entrada en la Universidad de Murcia, Área de Gestión Académica nº 3.763 y fecha 28 de noviembre de 2008, y ante el estupor de la parte cuando se le comunicó su existencia, se nos propuso una prueba: buscar en Google la citada lista tecleando alguno de los nombres de los alumnos que aparecían admitidos y/o excluidos en la misma, y repetir idéntica operación con los nombres de la lista de traslado de universidades españolas de 14 de octubre de 2008. El resultado fue que mientras la primera búsqueda no rescataba ningún resultado, en la segunda, aparecía la lista publicada entre las primeras entradas.

Dejando la relevancia de esta prueba al debate de expertos en la materia, lo cierto es que nos encontramos ante un acto (la convalidación) no notificado como motivación a la denegación, no pudiendo producir efectos en los términos del artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 58 en cuya virtud, "La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior" (art. 57.2) y "Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses" (art. 58.1).

En suma, es exigible la notificación del acto de convalidación concediendo a la interesada los recursos correspondientes contra la misma, bajo sanción de nulidad ex-artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, frente a los actos "que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional" (letra a) o frente a aquéllos "dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados" (letra e).

Séptima. Sobre la inexistencia de plazas sobrantes para su distribución

Como señalábamos en la consideración anterior, la resolución del recurso de reposición de 20 de mayo de 2009 y el propio informe de la Administración emitido a solicitud de esta Defensoría, afirmaban que aunque se hubiera obtenido por la interesada la correspondiente convalidación, no hubiera sido posible acceder al traslado por haberse cubierto las plazas destinadas a extranjeros, consistentes a la sazón en un total de 5 repartidas entre todos los cursos a partir de segundo, adjudicadas a las personas que se indicaban en la propuesta definitiva de traslados de alumnos extranjeros a la titulación de licenciado en medicina curso 2008/2009.

Tampoco es posible por la Defensoría compartir este criterio, pero con carácter previo a su argumentación, volvamos a las alegaciones realizadas por la interesada en su queja.

Dª XXX, entendió que puesto que no se había publicado la lista de extranjeros, posiblemente se debía a que su solicitud perteneciente a una universidad del entorno europeo (Pecs, Hungría) había tenido el tratamiento de universidad española, desconociendo si había habido algún solicitante del entorno no comunitario que hubiera solicitado el traslado y por tanto, motivado la existencia de una lista aparte a la de los traslados procedentes de universidades españolas. Por ello, como se le comunicó que no se le otorgaba el traslado por "inexistencia de plazas para su distribución", centró todos sus esfuerzos en investigar si todos los alumnos admitidos en la lista de traslados de universidades españolas se habían matriculado efectivamente.

Para obtener este resultado y ante la actitud silente de la Administración universitaria a su solicitud de información de 16 de enero de 2009, reiteró su solicitud mediante requerimiento notarial de fecha 4 de febrero de 2009, efectuado por el notario D. Antonio Yago Ortega ante el Secretario General de la Universidad de Murcia, pero tampoco éste obtuvo respuesta.

Finalmente, y tras diversas pesquisas consistentes en comprobar vía Internet las listas de los alumnos que habían superado pruebas o realizado prácticas en segundo curso de otras universidades españolas, pudo comprobar que, al menos once de los traslados de expedientes admitidos de universitarios españoles se habían matriculado definitivamente en otras universidades españolas. Y es que la cuestión no era baladí, pues se trataba de "demostrar" que sí existían plazas vacantes, desmontando así el argumento de la Universidad para denegar el traslado.

De igual forma, una vez aportada la listas de expedientes de extranjeros en el informe de la Administración, la reclamante aporta correo electrónico en el que una de las personas admitidas en el cupo de universidades extranjeras declara no estar matriculada en el 2º curso de medicina de la Universidad de Murcia, sin que conste en el informe emitido por la Administración que se haya ofrecido esta plaza a los siguientes alumnos pendientes de admisión.

En realidad no encontramos aquí ante una "prueba diabólica", así se ha puesto de manifiesto en numerosas sentencias de nuestra jurisprudencia, v.gr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1999 (ref. Aranzadi RJ/1999/6190) en su Fundamento de Derecho Segundo cuando señala que *"El acto administrativo originario del Decano de la Universidad de Barcelona, de fecha 15 de septiembre de 1988, es a todas luces inmotivado, pues se limita a rechazar su petición de traslado sin dar ni la menor explicación de la razón de tal negativa. Ello ya lleva consigo la imposibilidad absoluta de defenderse en vía de reposición, pues desconoce los motivos por los que se le deniega su petición y aunque el acto dictado en reposición por el Rector de la Universidad de Barcelona el 18 de noviembre de*

1988 contiene como motivación, las necesidades de la Facultad de Medicina y su limitada capacidad para evitar masificaciones, ello de ningún modo puede considerarse como motivación suficiente para fundamentar el acto administrativo de denegación, pues la motivación del acto administrativo, es aquella que permite conocer al interesado la razón del acto a efectos de posibles impugnaciones, en cuanto constituye la manifestación declarada de la voluntad administrativa, lo cual permitirá realizar el control jurisdiccional del acto administrativo por la jurisdicción contencioso-administrativa, y una cosa son los motivos del acto y otra muy distinta la motivación, pues lo primero es la causa por la que decide, pero lo segundo constituye la exigencia formal de que se expresen las razones que sirvan de fundamento a la decisión, y ello no se produce en el caso de autos, pues como con todo acierto razona el recurrente, el 4º curso de una Facultad de Medicina supone llegar a él después de una fuerte selección a la que concurren solamente un mínimo selectivo de los que iniciaron la carrera y no se puede hablar de masificación como pretexto sin dar unos datos lógicos y veraces que le permitan al solicitante comprobar que se le deniega el traslado por falta de espacio ante el número de alumnos matriculados y la capacidad de las aulas, lo que no ha sucedido en el caso de autos y en cambio en la sentencia apelada se pretende exigir al recurrente la prueba de que no es cierta la masificación alegada por la Administración, prueba diabólica para él, cuando para la Universidad hubiese sido facilísimo aportar una certificación que acreditase el número de alumnos matriculados o la cabida de sus aulas y laboratorios, con lo cual hubiese justificado la razón de su negativa sin obligar al interesado a proporcionar al Tribunal unas pruebas dificilísimas de obtener si no le son facilitadas por la Universidad. Por todo lo expuesto y estimando que los actos administrativos impugnados son insuficientemente motivados, y que producen indefensión al interesado, procede anularlos y en consecuencia la revocación de la sentencia apelada".

Octava. Sobre la reserva de plazas a extranjeros

Íntimamente ligado con lo anterior, y también con fundamento en la resolución del recurso de 20 de mayo e informe de 5 de junio de 2009 citados, está el hecho que la Universidad de Murcia haya respetado el sistema de reserva de plazas previstas en la normativa sectorial de aplicación, y en particular, en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2002, en su redacción otorgada por modificación de 12 de febrero de 2008.

Haciendo un pequeño excurso en este punto, es necesario entender que según Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2008 de modificación de la Normativa de Traslado de expediente para la titulación de Licenciado en Medicina, corresponde a la Junta de Facultad acordar el límite máximo de alumnos a admitir por traslado, que será teniendo en cuenta las cifras de admisión del primer curso del 5% de la matrícula de primer curso, para cada uno de los cursos a partir de segundo curso.

De esta forma consideramos que los 42 alumnos admitidos procedentes de universidades españolas corresponden, al menos, al 5% del total de alumnos matriculados en primer curso.

Asimismo, y según Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 16 de julio de 2002 antes citado, en su disposición cuarta se dispone que "Del total de plazas asignadas a cada curso ser reservará un cupo para estudiantes con estudios extranjeros, el porcentaje aplicable coincidirá con el previsto para alumnos extranjeros en el régimen general de adjudicación de plazas de la Universidad de Murcia".

En este sentido, el informe de 5 de junio de 2009 nos informa que en la Orden de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se aprueban las normas de gestión del proceso de admisión a las Universidades Públicas del Distrito Único Universitario de la Región de Murcia y se

establecen los cupos de reserva para los distintos colectivos para el curso 2008/2009 se determina un porcentaje del 2 por 100, y aquí la Universidad de Murcia, haciendo una interpretación extensa de la Normativa y redondeando al alza, reserva 1 plaza para cada curso a partir de segundo, lo que nos da un total de 5 plazas. (…) Con el fin de favorecer el mayor número de traslados posibles, si no concurren peticionarios para alguno de los cursos de la Licenciatura se cumulan a 2º curso que es aquél en el que hay mayor número de solicitudes".

De esta forma, y tal como se indica con posterioridad, resultan 5 plazas para extranjeros, las cuales han sido adjudicadas según la Universidad.

De nuevo aquí, es conveniente introducir una matización, y es que, en nuestra opinión cualquier cupo o reserva tiene su razón de ser en aquellos supuestos en que la demanda es superior a la oferta (entendidos éstos tanto en el momento inicial de confrontación de solicitudes y adjudicaciones, como en un momento posterior del proceso en el que existan plazas vacantes como consecuencia de renuncias a matriculaciones definitivas), y en aras del principio de discriminación positiva se asegure la presencia de estudiantes procedentes de otras universidades españolas o extranjeras, o bien mayores de 25 años, deportistas de alto nivel, minusválidos … o cualquiera de los supuestos para los que se prevé la reserva. Sin embargo, tal como apuntábamos, la reserva no tiene sentido cuando quedan plazas vacantes (recordemos la "prueba diabólica" y las comprobaciones realizadas por nuestra reclamante), en cuyo caso, habrá de dar pleno cumplimiento a las previsiones generales del artículo 5 del R.D. 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica par a el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial en los que se supedita "el derecho de admisión en enseñanzas universitarias al número de plazas que hayan sido ofertadas" (ap. 5º), debiendo tener en cuenta que las "universidades públicas no podrán dejar vacantes previamente ofrecidas, siempre que existan solicitudes para la titulación de que se trate, presentadas dentro del plazo determinado y que cumplan los requisitos generales de acceso…" (ap. 6).

Asimismo, es importante poner de manifiesto que la existencia de plazas vacantes permite entrar en juego la disposición primera apartado segundo letra b) del Acuerdo de 16 de julio de 2002 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de Normativa sobre admisión de alumnos con estudios iniciados en otras universidades para continuar los mismas estudios en la Universidad de Murcia en cuya virtud "Si la solicitud es para estudios en los que la demanda de plazas resulte inferior a la oferta, bastará con que los estudiantes haya convalidado un mínimo de 15 créditos o, en su caso, una asignatura", situación ésta que muy seguramente cumpla la reclamante, no siendo necesario la convalidación de los 60 créditos esgrimidos como causa de denegación por la Administración.

Novena. Sobre la actitud silente de la Administración Universitaria

Todos las circunstancias expresadas: falta de notificación de la convalidación, no contestación al escrito de 16 de enero de 2009, ni al requerimiento notarial de 4 de febrero de 2009, ha de aderezarse con la resolución del recurso de reposición en el plazo de cuatro meses desde su interposición (20 de enero a 29 de mayo de 2009) extralimitándose en tres meses respecto de plazo general previsto en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuestión ésta especialmente gravosa en un caso en el que la falta de celeridad de la Administración es especialmente reprobable, determinando que la interesada pierda de hecho y de derecho un año lectivo, en espera legítima de que el órgano competente estime o desestime su solicitud.

En estos términos se ha pronunciado la Sentencia de 22 de mayo de 2000 del Juzgado Central de lo

Contencioso Administrativo nº 5 (ref. Aranzadi RJCA/2000/1870) al señalar: *"Frente al primero de los motivos de impugnación esgrimidos por el actor debe señalarse que, dada la naturaleza propia del acto anulado en vía administrativa por el Decanato de la Facultad de Derecho de la UNED, la resolución de admisión o matrícula para cursar estudios en el curso académico 1998/1999 en la Facultad de Derecho referida, como acto condicionado que sólo surte efectos en tanto y cuanto cumple con todos los requisitos previstos legalmente a tal fin, no cabe exigir a la Administración autora del mismo el sometimiento a los procedimientos de revisión de actos administrativos previstos en los arts. 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para su anulación.*

El propio texto de la resolución de 13 de octubre de 1998 del Vicerrectorado de Coordinación de la UNED de concesión de plaza para cursar los estudios requeridos por el interesado, advierte con claridad el condicionamiento de la efectividad de la admisión del nuevo alumno a que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Lo expuesto resulta plenamente acorde con las especiales características del procedimiento de acceso a la enseñanza universitaria, sea cual sea la modalidad de solicitud de plaza que se emplee, que requiere una agilidad tal en su resolución, al menos provisional, que permita la participación del alumno en el curso, incompatible con un procedimiento que contemplara los necesarios trámites de aportación de documentación al expediente y comprobación de la información ofrecida por el interesado, para constatar con certeza el cumplimiento por aquél de los requisitos previstos legalmente para ser admitido como alumno del Centro Universitario en el que pretende cursar estudios, con carácter previo a su admisión provisional, máxime cuando de supuestos de traslado de expedientes académicos se trata, como ocurre en el caso que nos ocupa. Provisionalidad ésta de la admisión del nuevo alumno que posibilita, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, anular la matrícula con tal interinidad interesada si el interesado no cumplía todos los requisitos previstos legalmente para ser admitido".

Por lo expuesto, vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

El ordenamiento jurídico impone el deber legal de resolver en los plazos legalmente establecidos para ello, especialmente, tal como ha señalado la Jurisprudencia, en el ámbito educativo, donde debieran haberse adoptado medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

El ordenamiento jurídico impone el deber de motivar y notificar los actos administrativos –en este caso el de convalidación– por afectar a los derechos e intereses de los alumnos, permitiendo así presentar los recursos pertinentes. El procedimiento de convalidación de estudios seguidos a D. XXX, debería retrotraerse al momento procedimental oportuno, notificando su finalización y concediendo los plazos para interponer los correspondientes recursos.

La reserva de plazas previstas para traslados de expedientes de estudios extranjeros o españoles, habrá de operar de forma que se oferten las plazas adjudicadas y no ocupadas efectivamente a los siguientes demandantes por orden de prelación en la relación de admisión, sin dejar vacantes.

Cuando queden plazas vacantes, el número de créditos convalidados exigibles para el traslado de expedientes será el de 15 o una asignatura aprobada, por aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la

Universidad de Murcia de 16 de julio de 2002, de Normativa sobre admisión de alumnos con estudios iniciados en otras universidades para continuar los mismos estudios en la Universidad de Murcia.

RECOMENDACIÓN A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Las dilaciones, actitud silente y demás circunstancias presentes en este caso aconsejan reconsiderar la inadmisión de Dª. XXX, en atención a las plazas que no hayan sido efectivamente cubiertas por matriculaciones definitivas, debiendo arbitrarse, en ausencia de plazas, los procedimientos necesarios para que pueda realizar los exámenes correspondientes a esta anualidad con toda normalidad con reserva de nota y con independencia de que la matrícula pudiera formalizarse en septiembre con la finalidad de no perjudicar a otras personas que pudieran resultar afectadas por la presente resolución.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

X.7. Empleo

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL SMS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 58/2009, A LA QUE SE ACUMULA EL EXPEDIENTE Q-62/2009, INCOADO A INSTANCIAS DE D. XXX

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 9 de febrero de 2009, D. XXX presentó queja solicitando el cumplimiento de la exigencia legal de reserva a personas con discapacidad en las bolsas de trabajo de empleo público del Servicio Murciano de Salud.

Segundo. Con fecha 11 de febrero de 2009, D. XXX presentó queja solicitando aplicación del artículo 6.1 del R.D. 2271/2004 en convocatorias de empleo público temporal cuando se oferten 20 o más plazas de forma no simultánea.

Consta en el expediente escrito de solicitud de información del interesado de fecha 2 de mayo de 2005, dirigido al Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en el sentido expresado en la queja, así como respuestas al mismo del Director General de Recursos Humanos del SMS y del Director General de Función Pública, en los que básicamente se muestra la sensibilidad social con la cuestión planteada y la futura realización de estudios o negociaciones para mejorar el acceso de los minusválidos a la administración regional.

Tercero. Con fecha 20 de febrero de 2009 se acumularon los expedientes de queja relacionados en el antecedente primero y segundo por guardar entre sí íntima conexión, admitiéndolos a trámite y solicitando información, con esa misma fecha, al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

Cuarto. Con fecha 13 de abril de 2009, se reiteró la petición de informe a la administración afectada, contestando ésta con fecha 8 de mayo de 2009 (registro de entrada 14 de mayo de 2009), que el citado informe había tenido salida el día 23 de abril de 2009 y entrada en esta institución el 6 de mayo de 2009.

En el mismo se nos indica que la previsión del R.D. 2271/2004, de 3 de diciembre, de reserva de plazas del 5% para personal temporal en la cobertura de plazas por personal temporal está previsto únicamente en los procesos que incluyan oposición, "por el contrario, el proceso de selección de personal estatutario temporal en el Servicio Murciano de Salud se realiza mediante convocatoria pública por el sistema de concurso de méritos, a través de la cual se constituye una bolsa de trabajo de carácter permanente con los aspirantes seleccionados".

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Ámbito competencial.

En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Marco normativo constitucional e internacional

La Constitución Española de 1978 en su artículo 49 establece que los poderes públicos realizarán una política de integración social de los ciudadanos con discapacidad "para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos". Entre estos derechos se hallan los derechos laborales contenidos en el artículo 35.1 –derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo– así como los principios rectores de la política social y económica recogidos en el artículo 40, entre los que destaca especialmente la obligación de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo y de fomentar una política que garantice la formación y readaptación profesionales.

A mayor abundamiento, los derechos de las personas con discapacidad han de vincularse no sólo a la mención contenida en el artículo 49 de la Constitución, sino también al artículo 1.1, que establece que la igualdad es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España; al artículo 9.2, en virtud del cual corresponde a los poderes públicos promover las condiciones "para que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", y al artículo 14, que dispone que todos los españoles son iguales ante la ley, "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

En igual sentido al señalado en la consideración anterior se pronuncia la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en la ONU; el día 13 de diciembre de 2006, proclamando el respeto, a los derechos civiles y políticos, a la accesibilidad, a la participación y la inclusión, el derecho a la educación, la salud, el trabajo y el empleo, y la protección social. Esta Convención, fue suscrita por España en el año 2007.

En el ámbito de la Unión Europea es de singular relevancia al Plan de Acción europeo en materia de

discapacidad 2004-2010, que subraya tres objetivos operativos: plena aplicación de la Directiva 2000/78/CE relativa a la igualdad de trato en el empleo, integrar adecuadamente las cuestiones de discapacidad en las políticas comunitarias, y potenciar la accesibilidad para todos, y a la Comunicación de la Comisión sobre la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea: Plan de Acción europeo 2008-2009, que plasma el compromiso europeo de garantizar que las personas con discapacidad sean tratadas como ciudadanos y agentes socioeconómicos activos que contribuyen a la construcción de una Europa sostenible y solidaria que ofrece iguales oportunidades para todos.

Tercera. Marco estratégico y normativa de aplicación básica en materia de empleo público

En el panorama nacional la Estrategia Global de Acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, recoge previo diagnóstico de la situación existente en España, los objetivos generales y operativos y las líneas de actuación en orden a paliar posibles discriminaciones de las personas que sufren discapacidad en cuanto al pleno ejercicio de sus derechos.

Desde un punto de vista legislativo, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, es pionera en el apoyo a la discapacidad estableciendo la igualdad de acceso para las personas con discapacidad a las pruebas de selección, si bien exigiendo una acreditación de aptitud previa a las pruebas selectivas;

Asimismo, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos la adopción de medidas de acción positiva suplementarias para aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor grado de discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, como son las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad severamente afectadas, las personas con discapacidad que no pueden representarse a sí mismas o las que padecen una más acusada exclusión social por razón de su discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural.

Debiendo entenderse como acción positiva "aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad" (art. 8).

Los contenidos de la acción positiva se cifran en "apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables. Los apoyos complementarios podrán ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación.

Dichas medidas tendrán naturaleza de mínimos, sin perjuicio de las medidas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias" (art. 9.1).

Haciendo un pequeño excurso sobre la tipología de acción positiva acogida por nuestro legislador, el sector mayoritario de la doctrina, encabezado por José Joaquín Fernández Alles (vid. La igualdad en la función pública: Actualidad jurídica Aranzadi nº 635 y El empleo público y su protección jurídica en la última doctrina del Tribunal Constitucional: Repertorio de jurisprudencia Aranzadi nº 12/2004) distingue, en la elección de las técnicas de diferenciación admisible, entre acción positiva y discriminación inversa, de forma que cuando la diferencia de trato beneficia teleológicamente a unos grupos sociales, ofreciéndoles ventajas o incentivos más favorables, estamos ante la «acción afirmativa», conocida en España como «discriminación positiva», que ofrece dos posibilidades: la acción positiva, que consiste en aprobar un trato a favor de un

determinado grupo, que no perjudica a nadie (igualdad en la línea de salida); y la discriminación inversa, que sin embargo, discrimina favorablemente a los integrantes de un grupo, excluyendo de ella a los que no pertenezcan a él (igualdad en la línea de meta, en el podio).

Pues bien, acogiendo nuestro legislador este último tipo de acción afirmativa, la doctrina constitucional se ha pronunciado sobre la posibilidad de que existan discriminaciones inversas para los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales en algunos ámbitos: En el acceso a la Universidad pública: tienen reservadas (una vez que aprueben la selectividad y/o los demás criterios de ingreso) un 3 por 100 de las plazas de acceso a cada Centro. b) En relación con el acceso a la función pública: «en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5 por 100 de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, del modo que progresivamente se alcance el 2 por 100 de los efectivos totales de la Administración del Estado, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, según se determine reglamentariamente» (disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984 de 2 de agosto) confirmado por el Tribunal Constitucional, que sostuvo la constitucionalidad de este tipo de cuota (imitada en casi todas las administraciones autonómicas) en su sentencia 264/1994.

Dando un paso más, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, modifica la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de la función pública, determinando que "En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento, de modo que, progresivamente, se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado"(disposición adicional decimonovena).

Esta previsión se amplía en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, y en la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud al disponer que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública" (artículos 59 y 30.6 respectivamente).

Cuarta. Sobre la aplicación del Real Decreto 2271/2004

Centrándonos ya en el objeto de las quejas presentadas, señala la nº 62/2009, que tanto la Dirección General de Empleo Público, como el Servicio Murciano de Salud, debieran respetar la regla establecida por el artículo 6 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad, en cuya virtud "En las convocatorias para la cobertura de plazas por personal temporal que incluyan fase de oposición y en las que se convoquen 20 plazas o más en un mismo ámbito de participación, se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas en dichos ámbitos para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior a 33%. Las plazas del cupo reservado que queden vacantes se acumularán a las libres".

Consultado sobre la aplicación de esta norma en el Servicio Murciano de Salud, éste nos contesta que este Real Decreto no es aplicable en cuanto

que el ámbito de aplicación de la norma se refiere a procesos de selección que incluya una fase de oposición, mientras que en el Servicio Murciano de Salud se realiza mediante convocatoria pública por el sistema de concurso de méritos, a través de la cual se constituye una bolsa de trabajo de carácter permanente con los aspirantes seleccionados.

En nuestra opinión la no aplicabilidad del reglamento estatal debería obedecer, no tanto a que su ámbito de aplicación se refiere a una fase de oposición, sino a su carácter no supletorio en la Región de Murcia, puesto que ésta dispone de su propia normativa en materia de selección temporal de personal, constituida por la Orden de 27 de julio de 2001 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección del personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional, en coordinación con el Decreto de 30 de diciembre de 1993, por el que se regula el acceso y provisión de puestos de trabajo de las personas con minusvalía en Administración Pública de la Región de Murcia y por la Orden de 12 de noviembre de 2002 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la selección del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud. No obstante, esta cuestión será objeto de mayor atención en la consideración sexta.

Quinta. Régimen Jurídico del acceso de discapacitados a la administración regional

En el ámbito autonómico encontramos idénticas previsiones a las referidas con carácter básico en el derecho estatal. Así, la disposición adicional primera del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, y el artículo 21.3. de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud preceptúan "En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 3 por 100 (5 por 100 en la ley de personal estatutario) de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, de modo que, progresivamente, se alcance el 2 por 100 de los efectivos totales de la Administración Pública de la Región de Murcia/del Servicio Murciano de Salud, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, …".

Esta normativa de rango legal, ha de complementarse, en lo que hace a la específica regulación para los discapacitados por el Decreto de 30 de diciembre de 1993, por el que se regula el acceso y provisión de puestos de trabajo de las personas con minusvalía en Administración Pública de la Región de Murcia, y en lo que hace al empleo temporal por la Orden de 27 de julio de 2001 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional y con el mismo tenor literal la Orden de 12 de noviembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la selección del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud en cuya virtud "de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, serán admitidas todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes" (art. 4.2).

La explicación que subyace a la ausencia de mayor desarrollo legal en este ámbito seguramente obedece a que los textos descritos aún referencian la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, pionera en su momento, pero hoy superada por la moderna legislación sin que se haya procedido a la actualización de esta normativa reglamentaria, a diferencia de los textos legales en materia de empleo público que sí se han ido adaptando a las nuevas regulaciones en materia de discapacidad.

De esta forma, no es posible justificar la ausencia de una discriminación positiva en el acceso de minusválidos a los puestos de trabajo de carácter temporal, en atención a la regulación infralegal vigente, puesto que ha quedado argumentado que la misma se ampara en una normativa legal (la ley 13/1982), hoy claramente superada por las disposiciones vigentes en materia de atención a la discapacidad.

Tampoco es posible asumir el argumento del Servicio Murciano de Salud relativo a la contratación de personal temporal mediante convocatoria pública por el sistema de concurso de méritos, y ello en base a los argumentos explicitados en la siguiente consideración.

Sexta. Sobre la aplicabilidad de la reserva de minusválidos al sistema de concurso

Comprobada reiteradamente la reserva del cinco por ciento de plazas convocadas en el proceso selectivo hasta alcanzar el dos por cierto del total de efectivos que prestan servicios a la Administración, entendemos que no es posible excluir de esta discriminación inversa los procesos de selección de personal en los que no concurra una fase de oposición, y ello en base a un tradicional principio del derecho consistente en que "donde el legislador no distingue, el intérprete no debe distinguir" o en que "en lo claro no cabe interpretación" y es que desde esta Defensoría no se encuentra ningún precepto, salvo el reglamento estatal –que entendemos no es de aplicación siquiera supletoria– donde se indique que la reserva de plazas haya de circunscribirse a los procesos selectivos en los que concurra la fase de oposición. No en vano, la Ley 7/2007, por la que se aprueba el Estatuto Básico de la Función Pública dispone en su articulo 61.6 que "los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

Sólo en virtud de Ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos".

Pues bien tanto en el ámbito de la función pública, como para el personal estatutario, el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y la Ley 5/2001, prevén específicamente el concurso como sistema de selección "cuando se trate de proveer puestos de trabajo de carácter singular que, por sus características y tecnificación especial, necesiten ser cubiertos por personal de experiencia o méritos muy especiales" o "cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de cualificación requerida así lo aconsejen", (vid. art. 30 y 33 respectivamente).

De lo expuesto se deduce que el cupo de reserva será aplicable a todos los procesos de selección, entendiendo por tales, la oposición, el concurso-oposición, o simplemente el concurso cuando así se autorice, sin que el tipo de procedimiento selectivo elegido pueda obstar la plena aplicabilidad del mandato legal.

Séptima. Informes de otras Defensorías

Los aspectos anteriormente descritos han sido estudiados con profundidad en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz de noviembre de 2004 "Discapacitados y acceso al empleo en las Administraciones Públicas recomendando en su punto 9.2.2.". Prever la reserva para personas con discapacidad, (10%) en las Bolsas de Trabajo que se constituyan para contrataciones de personal laboral no permanente y/o nombramientos de funcionarios interinos en las Administraciones Públicas objeto de este Informe. Asimismo, constituir una bolsa específica de personas con discapacidad mental moderada o límite o con sordera profunda, severa o media prelocutiva".

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO

La ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y con las leyes autonómicas 1/2001, de 26 de enero y 5/2001, de 5 de diciembre, del Persona Estatutario del Servicio Murciano de Salud, impone a las Administraciones Públicas el deber de reservar en las convocatorias para la selección de personal estatutario un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de cada servicio de salud, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

La integración efectiva de las personas con discapacidad en la vida laboral aconseja la actualización de la normativa de acceso y provisión de puestos de trabajo de las personas con minusvalía constituida por el Decreto 153/1993, de 30 de diciembre, adecuando los porcentajes de reserva a los ratios previstos por la ley; y actualización asimismo de la normativa de selección de personal temporal integrada por la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, de selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional y por la Orden de 12 de noviembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la selección del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud, de forma que se respeten los cupos de reserva establecidos en la moderna legislación para personas con discapacidad también en la selección de personal temporal.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del citado escrito, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 114/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 12 de marzo de 2009, D. XXX presentó queja por discriminación en el complemento específico atribuido a su puesto de trabajo de interventor delegado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, grupo B; puesto que desempeña idénticas funciones a las propias de los interventores delegados del grupo A.

Segundo. Consta en el expediente aportado por el reclamante, solicitud a la Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas de 5 de diciembre de 2008, de equiparación de complemento específico, reseñando que ya se había hecho efectiva con anterioridad de la homologación con el Servicio Murciano de Salud.

Tercero. Con fecha 20 de marzo de 2009 se admitió a trámite la queja, requiriendo con esa fecha misma información a la Consejera de Presidencia y Administración Pública, relativa a la diferencia de funciones entre cada grupo y justificando así las diferencias retributivas en el complemento específico.

Cuarto. Con fecha 16 de abril de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 6 de mayo de 2009) se recibió informe de la Consejería afectada, pudiendo resumirse éste en tres puntos fundamentales: en primer lugar, se niega la competencia de esta Defensoría para conocer de una relación de puestos de trabajo (r.p.t.) por su condición de disposición de carácter general, ajenas éstas al ámbito de atribuciones propias de esta Institución; en segundo lugar, se afirma que el interesado debió acudir a la vía jurisdiccional en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados por la Orden de 17 de noviembre de 2008 de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas (BORM de 22 de noviembre de 2008); y finalmente y entrando ya en el contenido propio del informe solicitado, se asevera la existencia de funciones distintas asignadas al cuerpo de interventores y auditores y al cuerpo de gestión, por lo que el complemento específico correspondiente ha de ser necesariamente distinto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La primera cuestión que se plantea por la administración afectada es la falta de competencia del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia para conocer disposiciones de carácter general, debiendo ceñirse ésta a "actos y resoluciones como a la omisión de los mismos realizados por los siguientes sujetos (…)".

Al respecto, señalar que la Ley 10/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia (BORM nº 273, de 24 de noviembre de 2008), otorga a éste la condición de Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por ésta para la protección de los derechos fundamentales y libertades reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Con esta finalidad "podrá supervisar la actuación de la Administración, sus entes, organismos, empresas públicas y autoridades y personal que de ellas dependan o estén afectos a un servicio público…".

De esta forma, la protección de los derechos fundamentales y libertades reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, constituye según la citada ley el fundamento último de su actuación que se extenderá no sólo a actos y resoluciones (art. 13), sino también a los "criterios utilizados para la producción de aquéllos" (artículo 28 párrafo segundo), a textos normativos pudiendo "recomendar o sugerir a la institución, al departamento o a la entidad competente las medidas o los criterios que considere adecuados (…) o las modificaciones que le parezca oportuno introducir en los textos normativos" (art. 29) y a la legislación "pudiendo señalar sus deficiencia y formulando recomendaciones al órgano correspondiente, a fin de dotar a la actuación administrativa y a los servicios públicos de la necesaria objetividad y eficacia en garantía de los derechos de los administrados (art. 14.c).

Para facilitar el ejercicio de estas competencias, se impone en la ley 6/2008, un deber de auxilio a todos los órganos y entes sujetos a la supervisión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, con carácter preferente y urgente; de forma que si alguna autoridad, funcionario o personal laboral

contratado incumpliera esta labor de auxilio el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico de los mismos y, si procediere, del Ministerio Fiscal. Asimismo, se incluirá estas actuaciones en su informe anual a la Asamblea Regional (vid. art. 10).

Tercera. El segundo argumento que se esgrime en el informe de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, se centra en el "deber de recurrir en vía contencioso-administrativa la orden de 17 de noviembre de 2008 de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública Regional".

Al respecto incidir que la vía jurisdiccional no es el único cauce procedimental para la defensa de los derechos de los ciudadanos, habilitando el ordenamiento jurídico otros medios, como es la tutela por el Defensor del Pueblo cuando se trate de derechos fundamentales y libertades públicas, a cuya tutela puede acudir cualquier persona, sin impedimentos por nacionalidad, residencia, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o reclusión, o cualquier relación de sujeción especial de una administración o de un poder público, y que por tanto no es posible cercenar.

Cuarta. Centrándonos en la cuestión objeto de queja, a saber, la discriminación salarial otorgando un complemento específico para la realización de tareas idénticas, entiende la administración que las funciones de los Interventores de los grupos A y B no son las mismas por cuanto pertenecen a cuerpos distintos, cada uno con sus propias funciones y con niveles de responsabilidad: el Cuerpo de Gestión Administrativa (Grupo B) y el Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia (Grupo A).

En este sentido –señala el informe– el Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia, establece en su artículo 4, que son funciones del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia, las de (…) control financiero y auditoria del sector público autonómico, función interventora y contabilidad pública". Por el contrario, son funciones del Cuerpo de Gestión Administrativa, las de "apoyo y colaboración con los de nivel superior, en las tareas de gestión, inspección, control, asesoramiento y estudio, ejecución y cualquier otra de índole similar".

Apoya asimismo su teoría, el hecho de que la Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, "ha supuesto la adscripción de los puestos a un único grupo de clasificación profesional, lo que impide tratar de forma igual a los integrantes de un grupo A para cuyo acceso se exigen unas titulaciones específicas y de superior nivel, que a los integrantes de un cuerpo del grupo B para cuyo acceso se exigen titulaciones genéricas de inferior nivel".

En este punto esta Defensoría coincide con el informe descrito, pues precisamente el complemento específico retribuye en términos del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de ley de Función Pública de la Región de Murcia "las condiciones particulares de algunos de ellos (de los puestos de trabajo) en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidades, peligro o penosidad" (art. 68.1b), o en palabras del Estatuto Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley7/2007, de 12 de abril, "La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo" (art. 24.b).

Sin embargo, llevado a la práctica se observa que el funcionario del Cuerpo de Gestión

Administrativa D. XXX, desarrolla en su puesto de trabajo idénticas funciones a las desempeña el Cuerpo de Interventores y Auditores del Región de Murcia. Así lo acredita en su último nombramiento de "Interventor Delegado" de fecha 17 de octubre de 2008, resolución por la que se le autoriza a desempeñar las funciones de intervención de la gestión económica de la Administración Regional, sin que se advierta ningún matiz de apoyo o colaboración con un nivel superior, tal como se refleja en la norma.

Una vez sentado lo anterior, el apartado séptimo de la disposición adicional sexta del Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, preceptúa que "Los funcionarios que, no perteneciendo al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sean titulares, con carácter definitivo, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, de un puesto de trabajo de Interventor Delegado o Jefe de Servicio de los existentes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Intervención General, que no reúnan las condiciones establecidas en el número 3 anterior, quedan habilitados para ejercer las funciones atribuidas al Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en tanto permanezcan en los referidos puestos". Esta situación es precisamente en la que se encuentra, D. XXX que ocupa el puesto de trabajo de la Administración Regional ID00004 "Interventor Delegado", con carácter definitivo desde 8 de febrero de 1988.

Por lo expuesto, este texto legal ha de prevalecer sobre la Orden de 17 de noviembre de 2008, de homologación retributiva, poniéndose de manifiesto que diferentes cuerpos y grupos de titulación pueden realizar idénticas funciones, obteniendo en suma, los mismos complementos específicos.

Para concluir, e invocando precisamente la doctrina del Tribunal Constitucional aportada por los informantes, "el principio de igualdad se refiere a los ciudadanos y no a los títulos que son categorías de creación legal", de forma que no es posible retribuir funciones idénticas de forma diferente amparándose en que lo ejercen personas pertenecientes a grupos distintos, pues estos es sin duda alguna causa de discriminación y objeto de tutela por esta Defensoría.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO

El Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, residencia la naturaleza del complemento específico en la retribución de las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, medidas en circunstancias de dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligro o penosidad, por lo que no es posible encubrir discriminaciones salariales por este concepto con fundamento en el grupo de pertenencia, circunstancia ésta a la que ya atienden otros elementos del salario como son el sueldo o el complemento de destino en función de los niveles incluidos dentro de cada grupo de clasificación.

SUGERENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO

Es conveniente que se reconsidere la exigencia reglamentaria de que un puesto de trabajo sólo pueda estar adscrito a un cuerpo, pues de conformidad con las normativa de rango legal aplicable en materia de función pública (v.gr. Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre cit) es perfectamente posible que dos cuerpos distintos pertenecientes a distintos grupos de clasificación puedan realizar idénticas tareas, pues precisamente, el solapamiento de niveles entre los distintos gru-

pos permite que los niveles más altos para un grupo de clasificación puedan constituir un nivel base o de primer destino o de aprendizaje para el grupo inmediatamente superior, cuestión ésta que se soluciona satisfactoriamente desde un punto de vista salarial mediante el juego de las diferentes retribuciones básicas y complementarias.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª XXX y Dª YYY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE Q-0490/2009 Y Q-507/2009

En fecha 2 y 9 de noviembre de 2009, tuvieron entrada en esta Defensoría quejas presentadas por Dª XXX y Dª YYY, con número de expediente Q-490/2009 y 507/2009, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, fueron acumuladas por guardar entre sí identidad sustancial o íntima conexión.

En dichas quejas las interesadas manifestaban ante esta Institución, las dificultades que podrían presentar para acudir a las pruebas selectivas convocadas por el Servicio Murciano de Salud, para cubrir plaza de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Enfermería, el próximo día 13 de diciembre, por estar prevista la fecha de alumbramiento de su hijo sobre esa fecha.

Requerido el Servicio Murciano de Salud, en fecha 10 de noviembre de 2009, para informar a esta Defensoría sobre la posibilidad de atender la situación descrita por las interesadas, se recibe el citado informe el día 4 de diciembre de 2009, en el cual dicho organismo manifiesta que, en relación a las pruebas selectivas convocadas, han recibido varias peticiones de opositoras embarazadas de diferentes categorías, respecto de las cuales y atendiendo a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se han adoptado las medidas oportunas para permitir que pudieran realizar el examen.

En consonancia con ello y respecto al examen previsto para el próximo 13 de diciembre, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, confirma en su informe a esta Institución, haber dado traslado al tribunal correspondiente de la existencia de tales incidencias, con el objeto de que se adopten las medidas especiales necesarias, que permitan que las interesadas puedan realizar el ejercicio en la misma fecha que el resto de opositores.

No obstante, y a pesar de que en el supuesto que nos ocupa se pueda atender la situación descrita a través de dichas medidas especiales, esta Defensoría, en base a las prescripciones normativas contenidas en la citada Ley 3/2007, de 22 de marzo, que viene a configurar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-

bres como principio informador del ordenamiento jurídico, dispensando una protección especial a aquellas situaciones que se puedan ver afectadas por la maternidad, a propuesta de la Asesoría Jurídica y en uso de las facultades que a esta Institución atribuye el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se considera necesario formular la siguiente,

SUGERENCIA AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Sería conveniente que, por parte del Servicio Murciano de Salud, se procediera a objetivar, mediante disposición de carácter general, para futuros procesos selectivos y con el fin de dotar de efectividad a las disposiciones normativas contenidas en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en caso de que la aspirante a dicho proceso selectivo tenga prescrito por su facultativo el deber de guardar reposo en su domicilio, o bien, se encuentre hospitalizada con motivo de su embarazo y/o parto el día de celebración de la prueba selectiva en la que vaya a participar, el tribunal deba desplazarse necesariamente a su domicilio o centro hospitalario en que se encuentre, o bien, en caso de que ello no sea posible, se establezca un segundo llamamiento excepcional para estos casos.

Es cuanto tengo el honor de comunicarle concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Sugerencia o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

X.8. Hacienda Pública

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 100/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 3 de marzo de 2009, don XXX presentó queja por embargo de su pensión por el Ayuntamiento de Murcia, en los meses de junio y diciembre (paga extraordinaria), a pesar de ser ésta –en cómputo anual– inferior al salario mínimo interprofesional (s.m.i).

Segundo. Consta en el expediente aportado por el reclamante, extractos bancarios justificativos de las pensiones devengadas y los embargos efectuados, certificado de la seguridad social con el importe de la pensión de jubilación y solicitud al Ayuntamiento de Murcia de anulación de los embargos efectuados.

Tercero. Con fecha 16 de marzo de 2009 se admitió a trámite la queja, requiriendo con esa misma fecha información al Ayuntamiento de Murcia (acuse de recibo de 1 de abril de 2009).

Cuarto. Con fecha 4 de mayo de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 6 de mayo de 2009) se recibió informe del Ayuntamiento de Murcia, en el que en resumen se indica que existe un expediente, que es el 17.768/2008 abierto por esta causa, habiendo solicitado y aportado por interesado con fecha 29 de abril de 2009 fotocopia de los cargos y abonos desde junio a diciembre de 2008, por si hubieran de operar las limitaciones establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida, básicamente por la Ley 1/2000, de 7 de enero de enjuiciamiento civil, por el Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre y Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008 y 2009 respectivamente, y por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Tercera. En efecto, el artículo 607 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, dispone con carácter general en su artículo 60.7.1 que "Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional", para a continuación establecer una serie de porcentajes a embargar sobre distintos tramos en lo que excedan del s.m.i., así para "la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%; para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50%; para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional el 60%; para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75%, y finalmente, para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%.

En este sentido, el Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008, establece en su artículo 1 que "el salario mínimo interprofesional para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 20 euros día o 600 euros mes, según que el salario esté fijado por días o meses. (…) Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo, se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que establecen los artículos siguientes". De esta forma, el artículo 3.1.párrafo segundo dispone que "… a tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario minino fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 8.400 euros".

En similares términos, el Real Decreto2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2009, eleva la cuantía del s.m.i para esta anualidad a 20,80 euros/día, 624 euros/mes o 8.736 euros/año.

En el supuesto que nos ocupa, el reclamante alega percibir como único ingreso una pensión de jubilación por importe de 7.541,94 euros/año, lo cuál es notablemente inferior al s.m.i. fijado para 2008 y para 2009.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El ordenamiento jurídico impide el embargo de bienes cuando su cuantía sea inferior al salario mínimo interprofesional, independientemente de cómo se compute éste, ya sea diario, mensual o anual, en función de las cuantías mínimas aprobadas cada año por el gobierno.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 214/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El pasado 20 de mayo quedó registrada en esta institución una queja remitida por Dª XXX, vecina de Lorca, que tiene por objeto de reclamación el giro que el Ayuntamiento de esta localidad le realizó del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Urbana del ejercicio 2008, por importe de 834,13 euros.

Según afirma la promotora de la queja, este impuesto ha experimentado una subida que, en su caso, multiplica por cuatro las cantidades por ella abonadas en concepto de IBI en el ejercicio anterior. Esto obedece, en opinión de esta ciudadana, a que la propiedad gravada por el IBI que se le exige está incluida en uno de los nuevos sectores urbanizables que, desde su revisión aprobada definitivamente en 2004, contempla el planeamiento urbanístico de Lorca. Una revisión del planeamiento que, en virtud de lo establecido en la normativa reguladora del Catastro Inmobiliario, originó asimismo una posterior revisión de los valores catastrales de los inmuebles en el municipio referido; valores que, como es sabido, conforman la base imponible del **IBI.**

Segundo. La propiedad sobre la que recae este tributo se encuentra ubicada en un sector de suelo urbanizable (denominado Sector 7 por el Plan General Municipal de Ordenación de Lorca), cercano a la ciudad consolidada, en la conocida diputación de Tiata en la huerta lorquina, que carece, según la promotora de la queja, de caminos asfaltados, alumbrado público, recogida de basuras, alcantarillado, etc. En definitiva de un conjunto de servicios, infraestructuras y equipamientos colectivos que son propios de las zonas urbanas consolidadas.

Tercero. En su escrito, la promotora de la queja pone de manifiesto a esta Defensoría toda una serie de circunstancias laborales, sociales y familiares que concurren en ella: desempleada, perceptora de un pequeño subsidio mensual, minusválida, y temporalmente con necesidad de atender a uno de sus ascendientes. Pese a que esta ciudadana logró de la Tesorería del Ayuntamiento de Lorca un aplazamiento-fraccionamiento de su deuda tributaria, ello no impide que más de una cuarta parte de sus ingresos, según afirma, los deba destinar al pago del **IBI,** con lo que, en el mismo texto de la queja, se pregunta si se tendrá que ver obligada a vender su vivienda para poder pagar los impuestos que pesan sobre la misma. Tras poner de relieve que sus gestiones para solucionar este problema ante los responsables de Urbanismo y Hacienda del gobierno municipal de Lorca han sido infructuosas, y manifestar que su economía le impide recurrir a abogados, ruega a esta Defensoría que estudie su caso e intente buscar una solución a su problema.

Cuarto. Admitida a trámite la queja, a la que se asigna el nº de expediente Q-0214/2009, comunicada tal circunstancia a su promotora y practicado

el oportuno requerimiento de información al Ayuntamiento de Lorca para que informe sobre los extremos planteados en la misma, el día 29 de junio tuvo entrada en esta Institución un informe elaborado por el Servicio de Gestión Tributaria del ayuntamiento lorquino y suscrito por su tesorero accidental, en el que se viene a concluir que: *"el suelo clasificado como urbanizable en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Lorca, tiene naturaleza de suelo urbano (siempre que esté incluido en sectores) de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y en consecuencia tiene la naturaleza de suelo urbano a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*".

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de la queja está constituida en el ámbito de nuestra Ley Fundamental por el art. 47 de la Constitución Española de 1978, que, en sede de los principios rectores de la política social y económica, reconoce el derecho que tienen todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y establece un mandato a los poderes públicos para que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La relación de esta queja con el referido derecho constitucional la analizaremos posteriormente a través de las consideraciones que realiza el Defensor del Pueblo de España, con ocasión de una queja de oficio en la que aborda la necesidad de dotar de mayor justicia tributaria al Impuesto de Bienes Inmuebles.

Tercera. Consultado el vigente Plan General Municipal de Ordenación de Lorca, cuya revisión fue aprobada en 2004 (BORM nº 141, de 21 de junio), y con el ánimo de singularizar en lo posible las características de la propiedad gravada con el IBI objeto de esta queja, debemos hacer expresa mención de su memoria de ordenación, de su normativa, de sus fichas y de su programa de actuación.

En la página 136 de su Memoria de Ordenación se afirma que *"Se clasifican como suelo urbanizable sectorizado aquellos terrenos que se consideran idóneos para ser incorporados a la ciudad a corto y medio plazo, y que permitan satisfacer la demanda que pueda surgir como consecuencia del desarrollo social y económico del municipio"*. Seguidamente se expresa que: *"se mantienen con esta clasificación los sectores de suelo urbanizable, procedentes del planeamiento que se revisa, que no han sido desarrollados (situados a ambos lados del ferrocarril), y que son: Sector S-7, correspondiente al UNP…"*.

En la normativa de PGMO de Lorca, Capítulo 10, que regula el Suelo Urbanizable, constatamos que el Sector 7 en cuestión (art. 133.2) forma parte de un conjunto de 19 sectores urbanizables residenciales que se ubican en los entornos más próximos a la ciudad de Lorca, de momento sólo delimitados como tales en el Plan General, a los que habría que sumar un más amplio conjunto de sectores urbanizables residenciales ubicados en diversas pedanías del norte y sur del municipio y de algunas diputaciones del campo de Lorca.

El art. 134 de esa misma normativa, aplicable al Sector 7 que nos ocupa, establece el régimen transitorio de edificación en el suelo urbanizable sectorizado, afirmando que hasta tanto no se apruebe el Plan Parcial, en suelo urbanizable sectorizado no

podrán realizarse obras o instalaciones salvo las correspondientes a sistemas generales previstos por el Plan General, y que asimismo podrán autorizarse usos, obras o instalaciones de carácter provisional que no sean incompatibles con el uso previsto para el sector ni puedan dificultar su ejecución.

Por último, de la ficha que contempla las determinaciones del plan, la programación y gestión, y las condiciones particulares de la ordenación, referidas al Sector 7, extraemos que para el desarrollo de este sector será necesario redactar y aprobar el Plan Parcial y el Programa de Actuación, que la iniciativa de planeamiento es privada, que el sistema de actuación elegido es el de compensación, y que la programación de este sector debe culminarse en el primer cuatrienio de vigencia del PGMO de Lorca.

En definitiva, de todo lo anterior, podríamos concluir que la propiedad gravada con el IBI urbana a la promotora de la queja forma parte de un sector urbanizable del planeamiento urbanístico de Lorca, que ya tenía esa misma clasificación en el planeamiento anterior a la revisión de 2004, que en el momento de elaboración del PGMO –en plena fase expansiva de la construcción de viviendas– este sector podría contribuir a satisfacer la demanda que pudiera surgir como consecuencia del desarrollo social y económico del municipio de Lorca, hoy, como tantos otros municipios, afectado por la crisis económica y la que particularmente incide en el hasta hace muy poco dinámico sector de la construcción. Del igual modo se concluye que la iniciativa para poner en marcha el planeamiento de desarrollo es privada, y que el sistema de actuación es el de compensación, esto es, un sistema típico de autoadministración en el que los propietarios, por sí mismos y agrupados, asumen la gestión del proceso entero de ejecución del planeamiento en todas sus facetas posibles.

Todo este conjunto de determinaciones y de circunstancias arriba expuestas, tal vez expliquen que no hayan podido cumplirse en plazo las previsiones de desarrollo de este sector, programadas –tanto en la ficha concreta de Sector 7, como en el programa de actuación– para el primer cuatrienio de vigencia del PGMO de Lorca, que, recordemos, fue definitivamente aprobado en 2004.

Cuarta. Es asimismo de aplicación al caso que nos ocupa el art. 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Allí, tras describir el hecho imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles, se afirma en su punto 3 que *"a los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de* ***bienes inmuebles urbanos*** *y de bienes inmuebles de características especiales* ***los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario".*** **Ello nos remite al** artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que establece que el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo, **entendiendo por suelo de naturaleza urbana:**

El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables *o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que* ***estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados,*** *así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico* ***que*** *establezca las determinaciones para su desarrollo.*

Quinta. Como ya adelantamos en el considerando segundo, a los efectos de establecer la vinculación de la queja con el referido derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada, traemos a

colación la **Recomendación 2/2008, de 14 de enero, sobre propuesta de regulación de medidas correctoras de la repercusión del aumento del valor inmobiliario para la tercera edad y colectivos en situaciones de especial protección** *(BOCG, Cortes Generales. IX Legislatura. Serie A. Núm. 146)* realizada por el Defensor del Pueblo de España y dirigida al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda. Esta Recomendación es la culminación de una queja, iniciada de oficio por el Defensor del Pueblo, en cuyo cuerpo expositivo, además de hacer consideraciones sobre los límites de cualquier revalorización de inmuebles para cumplir los fines constitucionales de progresividad y justicia tributaria, así como de igualdad y equidad fiscal, también sostiene que: *"…en las viviendas habituales de los sujetos pasivos, viviendas dignas que están garantizadas constitucionalmente… la regulación del artículo 47 de la Constitución Española, se configura, en opinión, una* vez *más, del Tribunal Constitucional en Sentencia 152/1988, como un mandato a los poderes públicos, en cuanto que éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo aquel derecho, configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes. Por tanto la necesidad de abordar la política social en materia de vivienda o fórmula para que importantes sectores de la población, con recursos económicos limitados, puedan acceder a una vivienda digna, tiene su continuidad en la capacidad para mantenerlo, especialmente en situaciones de especial debilidad o necesidad, como en la tercera edad, minusvalías o percepción de rentas mínimas. Ya que* ***el mandato constitucional quedaría cercenado si, obtenida una vivienda digna, los impuestos que pesan sobre ella, influidos por la inflación y la revalorización del mercado inmobiliario, obligan a prescindir de la misma".***

En esa misma Recomendación el Defensor del Pueblo de España trae a colación otra sentencia de este alto tribunal (STC 150/1990), en la que se establece que: *"la prohibición de confiscatoriedad del artículo 31.1 de la Constitución obliga a no agotar la riqueza imponible en el sustrato, base o exigencia de toda imposición, so pretexto del deber de contribuir. El sistema fiscal tendría dicho efecto si mediante la aplicación de diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas o propiedades".*

Por último, sostiene el Defensor del Pueblo de España, que en el IBI, como tributo objetivo, se han ido introduciendo algunas diferencias de tratamiento fiscal a los sujetos pasivos, incluyendo diversas exenciones y bonificaciones con fines extrafiscales: familias numerosas, viviendas con energía solar, etc.

Tras todo ese conjunto de consideraciones de naturaleza constitucional, la recomendación que dirige a la antes citada Secretaría de Estado es clara: *"Que se incluya en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales una modificación legislativa que establezca una bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles para sujetos pasivos, cuyo único inmueble en propiedad sea su vivienda habitual y sus rentas no superen determinados ingresos anuales, que fijará el ministerio de acuerdo con su política en materia de protección a las rentas más bajas y procedan, exclusivamente, de pensiones por jubilación o minusvalías o incapacidades".*

Sexta. Entre tanto la recomendación del Defensor del Pueblo de España, que reproducimos en el considerando anterior, es tomada en cuenta y, llegado el caso, se producen las oportunas modificaciones legislativas planteadas, que habrán de llegar asimismo al articulado de las distintas ordenanzas fiscales que anualmente revisan los ayuntamientos españoles, es cierto que la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Lorca, en sus arts. 5, 6 y 7, establece un régimen de bonificaciones sobre la cuota integra de este impuesto, que afecta a los sujetos pasivos titulares de familias numerosas, a los titula-

res de viviendas de protección oficial y a constructores y promotores inmobiliarios sobre aquellos inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de sus empresas, siempre que no figuren entre los bienes de su inmovilizado. Se trata de un conjunto de bonificaciones sobre el IBI, potestativas unas y obligatorias otras, que traen causa de los arts. 73 y 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dado que estamos ante un impuesto que, al gravar la propiedad de los inmuebles, ha experimentado en los últimos años unos incrementos extraordinarios como consecuencia del aumento de los precios del sector y la revisión de los valores catastrales, y teniendo en cuenta además el conjunto de circunstancias que concurren en los considerandos anteriores, cabría, para el caso que nos ocupa, estudiar la oportunidad y conveniencia de hacer efectivo en sus Ordenanzas Fiscales, lo que también en sede de bonificaciones potestativas posibilita el art. 74.1 de esa misma Ley Reguladora de las Haciendas Locales: *"Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en* ***áreas o zonas del municipio que,*** *conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos,* ***correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola,*** *ganadero, forestal, pesquero o análogas y* ***que dispongan*** *de un* ***nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio,*** *siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección.*

Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal.

Se trataría, en definitiva, de estudiar si el sector 7 del Plan General Municipal de Ordenación de Lorca, por sus especiales características, reúne la doble perspectiva que demanda la bonificación potestativa que se contiene en el antes reproducido art. 74.1 del precitado texto legal, de modo tal que pudiendo ser entendido como una área o zona de Lorca que se corresponde con un asentamiento de población singularizado por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, y que dispone de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras y equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del mismo, el Ayuntamiento podría establecer y regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota del IBI a favor de los propietarios de esos inmuebles.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN

Que el Ayuntamiento de Lorca estudie la oportunidad, conveniencia, idoneidad y viabilidad, de introducir en la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles de su municipio una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los propietarios de bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus

características económicas aconsejen una especial protección.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

X.9. Medio Ambiente

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDO AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 8/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. En fecha 9 de enero de 2009, tuvo entrada en esta Defensoría queja presentada por D. XXX, vecino de la diputación de Alumbres, en la que manifestaba su disconformidad por el lanzamiento de artefactos pirotécnicos, habida cuenta las alteraciones que el ruido ocasionado por los mismos, causa en el comportamiento de su hijo, afectado por una discapacidad psíquica. Según refiere el interesado en su escrito de queja, viene a ser muy habitual en esa diputación, el lanzamiento de estos artefactos para celebración de un gran número de eventos, lo que deviene en una actitud especialmente agresiva de su hijo, proyectada en el lanzamiento de todo tipo de objetos que encuentra a su alcance, llegando incluso a agredir físicamente a sus progenitores, de avanzada edad, y encargados de su atención y cuidado.

Segundo. Acusado recibo de la queja a su promotor, en fecha 13 de enero de 2009, es requerido el día 16 del mismo, para aportar aquella documentación que acreditase haber dirigido su petición previamente a la Administración, lo que hace el 5 de febrero, acompañando un total de 12 documentos que, no hacen sino poner de manifiesto los distintos intentos que, desde el año 2000, viene llevando a cabo ante diversos organismos públicos, encaminados a solucionar la problemática expuesta en su escrito de queja.

Tercero. Presentada dicha documentación por parte del promotor de la queja, se le comunica la admisión a trámite de la misma el pasado 16 de febrero. Este mismo día se procede a requerir al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para que informase por escrito sobre la cuestión planteada. Sin embargo, y tras la no obtención del informe solicitado en el plazo concedido al efecto, se le requiere nuevamente, el 3 de abril, siendo comunicado tal extremo al interesado, en esta misma fecha.

Cuarto. Aportado el citado informe, el día 2 de junio de 2009, en el mismo se pone de manifiesto que varios meses atrás, D. XXX había acudido a esa Alcaldía, con el fin de alcanzar alguna solución respecto a los efectos que la utilización de esos materiales pirotécnicos, considerados de baja intensidad, según se expone en dicho informe, originaban en el estado anímico de su hijo.

Dicho informe refiere asimismo que, tras las conversaciones mantenidas por el promotor de la queja con los Concejales de Seguridad Ciudadana, Relaciones Vecinales y Festejos, y, debido a que la normativa vigente no prohíbe el lanzamiento de este tipo de material, se contacta desde el Ayuntamiento con la Junta Vecinal de Alumbres y la Asociación de Vecinos, con el fin de evitar su utilización en las proximidades del domicilio del afectado, a través de la colaboración vecinal.

Sin embargo, y a pesar de ello, el informe concluye afirmando que, hasta la fecha, no ha sido posible alcanzar ese entendimiento, teniendo en cuenta además que en muchas ocasiones el lanzamiento de cohetes o petardos tiene lugar para celebrar acontecimientos, tales como enlaces matrimoniales, y, por tanto, que sin el apoyo y predisposición del vecindario, el Ayuntamiento de Cartagena se ve imposibilitado de solucionar este problema, que tan gravemente afecta a D. XXX y a su familia.

Quinto. En fecha 17 de junio de 2009, se da traslado del informe emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a D. XXX, con el fin de que formulase al mismo las alegaciones o consideraciones que estimase oportunas. Aprovechando esta ocasión, el interesado refiere la periodicidad semanal respecto al uso de estos artefactos, y no únicamente para la celebración de determinados eventos, así como su disconformidad en relación a la intensidad de los mismos, que el Ayuntamiento indica en su informe, ya que según manifiesta D. XXX son de gran potencia.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se configura como el Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por ésta para supervisar la actividad de las Administraciones Públicas de la Región de Murcia, en defensa y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y libertades reconocidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Esta previsión aparece contenida en el artículo 1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, la cual se encarga de definir las funciones que le son encomendadas.

En el supuesto planteado por D. XXX en su escrito de queja, se pueden ver afectados, en el ámbito de nuestra Ley Fundamental, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como a la calidad de vida, contemplado en su artículo 45, no debiendo olvidar la protección dispensada en el artículo 43 a la salud.

Ahora bien, a partir de las sentencias dictadas en los años 90 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 1990, 9 de diciembre de 1994 y 19 de febrero de 1998, ha habido un cambio cualitativo respecto a la delimitación del derecho afectado, considerando que estas inmisiones cuando afectan a la persona en su domicilio, constituyen un atentado a su derecho a la intimidad, protegido en el artículo 18 de nuestra Norma Suprema.

El Tribunal Constitucional, garante de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, y máximo intérprete de la misma, siguiendo la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, ha afirmado en STC 119/2001, de 24 de mayo que:

"Debe entenderse por domicilio inviolable el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima. Por lo que el objeto específico de protección en este derecho fundamental, es tanto el espacio físico en sí mismo, como lo que hay en él de emanación de la persona que lo habita".

Por otro lado, y dada la peculiaridad del problema expuesto por D. XXX, no solo han de valorarse las molestias que de por sí causan estos ruidos, sino las consecuencias especialmente dañinas que los mismos tienen sobre su hijo, dada su discapacidad, motivo por el que igualmente esta problemática tiene especial repercusión sobre la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración que, de los disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales han de llevar a cabo los poderes públicos, tal y como contempla la Constitución en su artículo 49, dentro de los principios rectores de la política social y económica.

Por tanto, y sin pretender en ningún caso abordar un análisis doctrinal de la delimitación de los dere-

chos anteriormente enunciados, resulta necesario subrayar que se ven afectados derechos fundamentales de la persona, protegidos por nuestra Constitución de 27 de diciembre de 1978, y dotados, por tanto, de una protección máxima o reforzada, lo que acredita suficientemente la legitimación de esta Defensoría para intervenir en el asunto planteado por D. XXX.

Segunda. En relación a los ruidos ocasionados por la utilización de estos artefactos pirotécnicos, y teniendo en cuenta la competencia que el artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos en materia de protección medioambiental, así como el mandato legal contenido en el artículo 54 de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, según el cual serán las ordenanzas municipales las encargadas de recoger los niveles de ruido permitido, debemos acudir a lo previsto en la Ordenanza Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena sobre Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones.

En su artículo 2.1 dicha Ordenanza incluye dentro de su ámbito de aplicación:

"Toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructuras, medios de transporte y todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recreativas, musicales, de espectáculos o servicios, así como cualquier aparato, elemento, acto o comportamiento susceptible de producir ruidos o vibraciones que puedan ocasionar molestias o riesgos para la salud o que modifiquen el estado natural del ambiente circundante, cualquiera que sea su titular, promotor o responsable y lugar público o privado, abierto o cerrado en el que esté situado".

En esta línea, el artículo 29.1 señala que:

"La producción de ruidos o vibraciones en la vía pública y espacios libres públicos tales como plazas, parques y jardines públicos o en el interior de edificaciones, deberá ser mantenida dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y de acuerdo con los límites establecidos en la presente Ordenanza".

Sin embargo, y siguiendo el contenido de dicho artículo, esta limitación se excepciona *"en los supuestos de tradicional consenso de la población",* tal y como parece es lo que ocurre en este caso, lo que se deduce del contenido del informe emitido por el citado Ayuntamiento, en contestación al requerimiento efectuado desde esta Institución, así como de la inactividad de la Junta Vecinal y Asociación de Vecinos de Alumbres, a pesar de los distintos intentos de llegar a un entendimiento, tanto por parte del Ayuntamiento, como, en reiteradas ocasiones, por D. FPM.

No obstante, y aún aceptando esta consideración, entendemos que ello ha de ser conjugado con la situación particular que nos ocupa, en la convicción de que los poderes públicos han de adoptar todas las medidas necesaria encaminadas a lograr una correcta atención, promoción y mejora de aquellas personas que, como el hijo de D. FPM, presenta especiales dificultades para desarrollar su vida, máxime cuando existen estos factores externos que complican la realidad cotidiana en la que conviven tanto él como su familia.

Así pues, en base a las prescripciones normativas y consideraciones formuladas anteriormente, a propuesta de la Asesoría Jurídica y en uso de las facultades que a esta Institución atribuye el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se considera necesario formular la siguiente,

RECOMENDACIÓN AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Contemplar en su Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones, una regulación específica sobre la utilización de la pirotecnia en ese término

municipal, para evitar el uso indiscriminado de la misma, estableciendo en estos casos y cuando así se solicite, un sistema de apoyo especial por parte del Área de Atención Social de ese Ayuntamiento, encaminado a atender, auxiliar y reforzar la labor familiar en situaciones como la descrita.

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V.E. concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA INCOADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 11/2008

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 19 de diciembre de 2008, D. XXX presentó queja sobre dilación de procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado ante la Consejería con competencias en materia de medio ambiente desde abril de 2006, no habiendo finalizado su tramitación al día de la fecha.

Segundo. Consta en el expediente aportado por la reclamante, escrito de solicitud de responsabilidad patrimonial de 16 de abril de 2006 (registro de entrada de fecha 3 de mayo de 2006) acompañado de informe de parte sobre daños causados, presupuesto de ejecución, informe de gastos, etc. Se adjunta asimismo, escrito de 29 de noviembre de 2006 dirigido al Consejero de Industria y Medio Ambiente, y escrito de 26 de septiembre de 2007, de aportación de documentación solicitada.

Se aporta también, escrito de 2 de octubre de 2007 sobre reiteración de haber aportado la documentación requerida, ante una nueva notificación del mismo acuerdo de incoación de expediente de responsabilidad patrimonial.

Tercero. Con fecha 23 de enero de 2009 (registro de entrada en la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad) se requirió información a la administración afectada sobre la demora en el expediente de responsabilidad patrimonial que consta en el acuerdo de incoación de responsabilidad patrimonial, guardando confidencialidad sobre el titular de la queja, tal como disponen los artículos 21.7 y 26 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Cuarto. Con fecha 20 de marzo de 2009 (registro de entrada en la citada Dirección General) se reiteró el informe a la administración afectada, al haber transcurrido en exceso el plazo del mes conferido sin que se hubiera aportado el informe solicitado.

Quinto. Con fecha 11 de mayo de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 15 de mayo de 2009), se recibió escrito de la administración, constatándose en esta Defensoría que el número de expediente citado, recabado del acuerdo de incoación de responsabilidad patrimonial aportado por el reclamante, no coincidía con el titular de la queja, y en suma con el expediente de responsabilidad patrimonial correcto.

Realizadas comprobaciones telefónicas por la auxiliar de atención al ciudadano de esta oficina, con fecha 8 de junio de 2009 (registro de entrada de 10 de junio de 2009) se aportó informe solicitado, ahora sí, correspondiente al titular de la queja.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, y desde un punto de vista sectorial, por la Ley 2/1997, de 19 de mayo, por la que se aprueban las Normas Reguladoras del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Tercera. El R.D. 429/1993, de 26 de marzo, tradicionalmente denominado "de responsabilidad patrimonial", establece un procedimiento muy tasado, concediendo al efecto un plazo de seis meses para su resolución, transcurrido el citado plazo podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que recuerda a las administraciones públicas el deber de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

De esta forma, son comprensible las quejas del ciudadano, que tuvo que esperar más de dieciséis meses para obtener la primera notificación de la administración del acuerdo de incoación, datado éste de 30 de julio de 2007, y notificado por error en dos ocasiones, la primera de ellas el 20 de septiembre de 2007 y la segunda, el 1 de octubre de 2007, en ambos casos con una dilación de más de dos meses.

A mayor abundamiento, la citada resolución de acuerdo de incoación señala un número de expediente erróneo, que incluso induce a confusión a esta Defensoría en la petición de información, y argumentando en su inicio y como si de un reproche al interesado se tratara, que el reclamante debía haber entendido desestimada su solicitud por haber transcurrido más de seis meses desde la iniciación del procedimiento, no obstante, dando cumplimiento al deber de resolver de forma expresa dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un plazo de diez días hábiles para subsanar ciertas deficiencias, la última de ellas incomprensible para esta Defensoría ("nº 10: documentación acreditativa de los hechos relatados, en concreto, aquella que justifique la demora entre el inicio del expediente y el otorgamiento de la autorización") lo que nos induce a pensar que esta cláusula no pertenece a este expediente.

Siguiendo con el cumplimiento de plazos, a lo largo del procedimiento se aprecian grandes dilaciones, la más relevante la relativa a la emisión de informe técnico más de un año después a su solicitud, plazo francamente superior al de diez días previsto en el artículo 10 del reglamento del procedimiento, y que seguramente excede de cualquier justificación razonable de carga de trabajo o acumulación de tareas.

Cuarta. Concluye el informe de la administración, indicando que con fecha 28 de abril se remitió al Consejo Jurídico, de forma que "el expediente se encuentra muy avanzado (…) estando únicamente pendiente del Consejo Jurídico".

Al respecto, el artículo 12 del R.D. 429/1993, concede el plazo de dos meses para emisión del informe, plazo que se minora en un mes, por aplicación

de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas reguladoras del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (vid. art. 10).

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA

El ordenamiento jurídico configura el silencio como instrumento de garantía de los derechos de los ciudadanos ante una actitud silente de la administración. El artículo 42 de de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, impone el deber legal de resolver expresamente en los plazos establecidos por la normativa aplicable

RECOMENDACIÓN A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA

Esta Defensoría recomienda que el silencio negativo no se configure como una forma habitual de finalización de los procedimientos, constituyendo un mala práctica su utilización como argumento inicial en una resolución expresa, como acontece –en este caso–, con el acuerdo de incoación de responsabilidad patrimonial, para a continuación exigir la subsanación de documentación en el plazo de diez días legalmente establecido. En primer lugar porque el silencio negativo no tiene naturaleza vinculante, y en segundo lugar, por la incoherencia que supone que la Administración reconozca no cumplir las mimas normas cuya observancia exige a los administrados.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA INCOADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 51/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 5 de febrero de 2009, el reclamante D. XXX y otros presentaron queja sobre la existencia de una cuadra ilegal con suciedad y basuras en el municipio de Molina del Segura. Se denunciaba que a pesar de los expedientes sancionadores incoados y las multas impuestas el infractor no cumplía con la legalidad.

Segundo. Con fecha 9 de febrero de 2009 (registro de salida 13 de febrero de 2009) se acusó recibo de la misma, admitiéndose a trámite en Junta de Coordinación y Régimen Interior celebrada al efecto y acordando esperar un plazo prudencial para que el titular de la cuadra ilegal pueda ejercer su derecho al recurso contra la Resolución del Concejal de Urbanismo por la que se decreta la ejecución subsidiaria de la Resolución de la Junta de Gobierno Local de 5 de octubre de 2007 por la que se ordena la restitución de los terrenos a su estado anterior a la infracción, adjudicando dicho trabajo a Demoliciones y Movimientos Vega Media, S.L.

Tercero. Con fecha 20 de febrero de 2009 se dirigió escrito al interesado en el que se suspendía el expediente administrativo en tanto finalizaban los plazos de recurso contra la orden de ejecución subsidiaria. Este escrito no fue recibido por el interesado por desconocer correos la dirección indicada.

Cuarto. Con fecha 20 de abril de 2009, comparece el reclamante ante las Oficinas del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, señalando que el dueño de la cuadra ilegal no ha realizado ninguna actuación, ni se tiene constancia de que contra la orden de ejecución subsidiaria se haya interpuesto recurso alguno.

Quinto. Por esta Defensoría se desconoce si por el propietario de la cuadra ilegal se ha impedido la entrada para el cumplimiento de la resolución municipal a la empresa encargada de la ejecución subsidiaria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de reclamación está constituida por el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y por Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Molina de Segura (BORM nº 173, de 28 de julio de 2006).

Es asimismo de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la cuestión objeto de estudio, es claro la existencia de una actuación contraria a derecho consistente en la realización de una construcción en suelo no apto para la misma, causando graves perjuicios a los vecinos, traducidos en malos olores, suciedad, animales, etc…

En base a esa actuación ilegal, el Ayuntamiento de Molina del Segura ha ordenado el restablecimiento de la legalidad y su ejecución subsidiaria para el caso de no cumplimiento no voluntario del causante de la infracción.

Desde un punto de vista sectorial, el artículo 228.3 y 4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, preceptúa que "una vez recaída resolución o acuerdo determinando la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del suelo realizados, se procederá a dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las hubiera de ejecutar subsidiariamente. (…) La vulneración de cualquiera de los plazos fijados o la paralización de los trabajos comenzados dará lugar a la ejecución subsidiaria por la Administración actuante, a costa del infractor.

Una vez comenzada la ejecución subsidiaria no habrá opción para el infractor de continuarla por sí mismo".

La Ley 30/1992 en su artículo 12 dispone la irrenunciabilidad de la competencia por los órganos que la tienen atribuida, estableciendo en su artículo 57 que los actos administrativos son validos y surten efectos desde el momento en que se dictan, salvo que estén supeditados a su notificación, publicación o aprobación por órgano superior.

En el presente expediente no concurre ninguna de las circunstancias referidas en el párrafo ante-

rior, sin que conste a esta Defensoría que por el interesado se haya interpuesto recurso administrativo o se haya impedido la entrada a su propiedad evitando así el cumplimiento de la orden administrativa.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DEL SEGURA

El ordenamiento jurídico impone el deber legal de hacer cumplir las órdenes de demolición, y ejecutarlas subsidiariamente a costa del obligado una vez transcurridos los plazos señalados, de conformidad con el artículo 228 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Notifíquese la presente Resolución al interesado y a la administración afectada, debiendo ésta comunicar a esta Defensoría en el plazo de un mes si la acepta o la rechaza –motivando las razones en este último caso–. La no contestación en el plazo reseñado podrá ser considerado hostil, con los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley 6/2008 de 20 de noviembre del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX Y OTROS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 0063/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. En fecha 12 de febrero de 2009, tuvo entrada en esta Defensoría queja presentada por vecinos del inmueble sito en la calle Molino de la Encomienda, nº 17 de la localidad de Abarán, en la que se exponía la contaminación acústica que, desde septiembre de 2008, vienen padeciendo como consecuencia de la actividad desarrollada en el café-bar ubicado en los locales comerciales del citado inmueble.

Junto con dicha queja, se aportó copia de los siguientes escritos dirigidos al Ayuntamiento de Abarán:

1) Escrito de fecha 1 de diciembre de 2008, en el que tras manifestar las molestias que dicho local causa a los vecinos, denunciadas en distintas ocasiones vía telefónica y por escrito, el 24 de octubre de 2008 (núm. registro de entrada 5607), se solicita que, al amparo de lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente, se facilite información detallada sobre distintos aspectos.

2) Escrito de 5 de enero de 2009, en el que se expone el incumplimiento por parte de dicha Corporación de los plazos previstos en el artículo 10.2.c) de la citada Ley para facilitar la información ambiental solicitada.

3) Escrito de fecha 21 de enero de 2009, en el que se manifiesta que la falta de contestación a estas peticiones motivó la visita a ese Ayuntamiento, el día 16 de enero de 2009, en la que se les facilitó copia del Exp. núm 1345/2007, correspondiente al local, que motivó la presentación de la presente queja. En el análisis de dicho expediente, los interesados pudieron constatar presuntas irregularidades que trasladaron al Ayuntamiento de Abarán a través de dicho escrito.

Segundo. Acusado recibo de la queja, el día 17 de febrero de 2009, se comunica la admisión a trámite de la misma el 27 de febrero. Ese mismo día se requiere al Ayuntamiento de Abarán para que informase por escrito sobre la cuestión planteada en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región

de Murcia. Sin embargo, y tras no enviar el informe solicitado en el plazo concedido al efecto, se le requiere nuevamente el 20 de abril.

Tercero. Finalmente, dicho informe tiene entrada en esta Defensoría el día 4 de agosto de 2009. En el mismo se declara que el local tiene concedida:

Licencia de Apertura de café bar con Música, otorgada en Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2008, para cuya concesión se adjuntó: *"Certificado Final de Obra del Ingeniero Director de Obra que confirma con ese documento que las medidas correctoras del proyecto y anexos se han llevado a cabo, y Certificado OCA, con mediciones de ruidos, con resultado favorable según exige el Decreto 48/98".*

Licencia de Obras de fecha 26 de mayo de 2008 (Decreto de la Alcaldía nº 538/08) a partir de informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal.

Acta de puesta en marcha, tras girar visita de inspección correspondiente el 3 de junio de 2009.

Asimismo el Ayuntamiento de Abarán aporta informe emitido con fecha 27 de julio de 2009, por parte de la Jefatura de la Policía Local, a petición de esa Alcaldía, sobre el funcionamiento de dicho café-bar en el cual se pone de manifiesto que durante los días 24, 25 y 26 del mes de julio se efectuó vigilancia sobre el mismo, concretamente sobre horario de cierre, salida de humos, ruidos, consumo de bebidas en la vía pública, o vehículos mal estacionados en las proximidades del local, concluyendo dicho informe que no se pudo constatar actividad irregular respecto a dichos extremos.

Cuarto. En fecha 14 de agosto de 2009, se da traslado de dicho informe a los interesados con el fin de que formulasen al mismo las alegaciones o consideraciones que estimasen oportunas, lo que hacen el 27 de agosto aportando copia del escrito que en esa misma fecha presentan al Ayuntamiento de Abarán, en el que hacen referencia, entre otros, a los siguientes extremos:

Las reiteradas denuncias de los vecinos ponen de manifiesto el presunto incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó la licencia de actividad.

Las mediciones de ruido que refiere dicho informe no se realizaron observando las prescripciones normativas vigentes.

La inexistencia de una Ordenanza específica dedicada a la protección del medio ambiente contra ruidos, denota que dicho municipio dispone de una regulación claramente insuficiente respecto a la contaminación acústica.

Quinto. El día 19 de octubre de 2009, el representante de los interesados se persona en esta Institución informando que, el 23 de septiembre de 2009, tuvo lugar en esa Corporación reunión con los vecinos afectados, en la que se llegó a acordar una serie de actuaciones municipales de comprobación y vigilancia de los niveles de ruido causados por dicho local, de cuyo resultado se les daría traslado en los primeros días de la semana siguiente, traslado que, sin embargo, en dicha fecha, aún no se había producido.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se configura como el Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por ésta para supervisar la actividad de las Administraciones Públicas de la Región de Murcia, en defensa y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y libertades reconocidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, previsión que aparece contenida en el artículo 1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, la cual se encarga de definir las funciones que le son encomendadas.

En base a ello, y teniendo en cuenta que en esta queja se incide principalmente en las molestias que sufren los vecinos que residen en el edificio donde se ubica el café-bar, como consecuencia del ruido ocasionado por el funcionamiento del mismo, podemos afirmar que, en el ámbito de nuestra Ley Fundamental, se pueden ver afectados inicialmente el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como a la calidad de vida, contemplados en su artículo 45, no debiendo olvidar la protección dispensada en el artículo 43 a la salud.

Ahora bien, a partir de las sentencias dictadas en los años 90 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 1990, 9 de diciembre de 1994 y 19 de febrero de 1998, ha habido un cambio cualitativo respecto a la delimitación del derecho afectado, considerando que estas inmisiones cuando afectan a la persona en su domicilio, constituyen un atentado a su derecho a la intimidad, protegido en el artículo 18 de nuestra Norma Suprema.

En esta línea, el Tribunal Constitucional, garante de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución y máximo intérprete de la misma, siguiendo la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, en STC 119/2001, de 24 de mayo ha incidido en los siguientes aspectos:

1) Que como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos convencionales sociales y donde ejerce su libertad más íntima, por lo que el objeto específico de protección en ese derecho fundamental, es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita.

2) Que este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad.

3) Que habida cuenta que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho fundamental del que se viene hablando, no sólo frente a las injerencias de terceras personas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada.

4) Que el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos, tal y como acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental.

5) Que ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.

6) Que debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables o insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en STS de 29 de mayo de 2003.

Por tanto, y en base a lo anteriormente manifestado, queda suficientemente acreditada la legitimación de esta Defensoría, para intervenir en el supuesto planteado por D. XXX, y otros, habida cuenta que se ven afectados derechos fundamentales de la persona, protegidos por nuestra Constitución de 1978, y dotados, por tanto, de una protección máxima o reforzada.

Segunda. Visto lo anterior, y centrándonos en el ruido, como principal motivo de preocupación para los ciudadanos que suscriben esta queja, debemos acudir, desde el punto de vista normativo, a las disposiciones contenidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en la Ley 1/1995, de de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, así como en el Decreto 48/1998, de 30 de julio, encargado de su desarrollo y ejecución en el ámbito de la lucha contra el ruido ambiental.

No obstante, en este aspecto que analizamos, una de las cuestiones más llamativas es que dentro del catálogo de Ordenanzas del Ayuntamiento de Abarán no hallamos una que, de forma específica, se dedique a la protección del medio ambiente frente a la emisión de ruidos, a pesar de la competencia municipal existente al respecto. Ello queda reflejado en el artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de protección medioambiental.

En esta línea, el artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, señala que corresponderá a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de esta Ley, indicando asimismo la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, en su artículo 54, y el Decreto 48/1998, de 30 de julio, en su artículo 12, que serán las ordenanzas municipales las encargadas de recoger los niveles de ruido permitido.

Sin embargo, y a pesar de ello, la única previsión medioambiental existente en ese Ayuntamiento se encuentra en la Ordenanza Reguladora de Convivencia Ciudadana, que de forma muy sucinta, en el apartado dedicado a Medio Ambiente, señala que: "En los locales en que se disponga de equipos de reproducción musical o audiovisual se instalará un equipo limitador-controlador que permita asegurar que las emisiones del equipo superen los límites admisibles de nivel sonoro".

Tercera. Puesta de manifiesto esta cuestión, debemos acudir, en primer lugar, al contenido de lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, norma general de ámbito estatal, que surge como consecuencia del mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de proteger la salud (artículo 43 CE) y el medio ambiente (artículo 45 CE), englobando en su alcance la protección contra la contaminación acústica.

Dicha Ley dispone en su artículo 18.1.b), en relación con la contaminación acústica producida o susceptible de producirse por los emisores acústicos, la vinculación de las Administraciones Públicas respecto a la aplicación de las previsiones contenidas en la misma y en sus normas de desarrollo, particularmente, en las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación ambiental previstas en la normativa autonómica, indicando, posteriormente, en el apartado cuarto del citado artículo que: "Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la Administración competente, si se incumple lo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo en materia de contaminación acústica".

Cuarta. Teniendo en cuenta estas previsiones, la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, de conformidad con lo previsto en el artículo 23, recoge en su Anexo II cuáles son las actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental, enmarcándose en ellas, tal y como se desprende del epígrafe 32 de dicho Anexo, los cafés, cafeterías y bares.

Pues bien, ello determina que haya de ser escrupulosamente observado el contenido del Capítulo III de dicha Ley, dedicado a regular el procedimiento a seguir para autorizar aquellas actividades sometidas a calificación ambiental, así como el Capítulo IV relativo a los requisitos que se han de reunir para la obtención de la correspondiente acta de puesta en marcha de la actividad.

No obstante, sin pretender llevar a cabo un análisis exhaustivo de dicho procedimiento, que entendemos el Ayuntamiento de Abarán conoce detalladamente, y comprobado que la finalidad última perseguida por los vecinos que suscriben la presente queja, es dejar de padecer la contaminación acústica ocasionada por el funcionamiento del local, esta Defensoría considera que no se pueden obviar sus reiteradas denuncias al respecto, máxime cuando el artículo 8 del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, establece la necesidad de intensificar las medidas preventivas en la concepción, diseño y montaje de amortiguadores de vibración, sistemas de reducción de ruidos de impacto, etc, en los locales lindantes con edificios de vivienda, así como en los edificios de uso mixto de vivienda y otras actividades, como es el caso que nos ocupa.

De hecho, el artículo 18.3 del citado Decreto, señala determinadas previsiones específicas que se han de observar, cuando se proceda a la medición de los niveles de ruido en el interior de los edificios, destacando, entre otras, que dicha medición ha de llevarse a cabo en el momento y situación en que las molestias sean mas acusadas, previsión que según se indica en la presente queja, no ha sido observada.

Quinta. Teniendo en cuenta lo anterior, observamos como en el supuesto que analizamos nos encontramos ante el permanente conflicto entre el derecho al descanso y a un medio ambiente adecuado (artículo 45 CE), y el derecho al ejercicio de la actividad empresarial (artículo 38 CE) conflicto que ha sido objeto de distintos pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo, el cual se refiere a la conciliación de esos derechos y libertades a partir del principio general de que "la libertad de cada uno termina donde comienza la del otro", considerando este Tribunal que, como poder público que es, está conminado constitucionalmente a velar por ese medio ambiente, lo que supone velar también por la salud (artículo 43 CE), entendiendo que la contaminación acústica no sólo impide el descanso a los que habitan en las viviendas cercanas, sino que perjudica la salud de todos los que se ven sometidos a la incidencia de un número excesivo de decibelios (vid. SSTS de 11 de mayo de 1989, 7 de noviembre de 1990, 20 de septiembre de 1994, 6 de febrero de 1996).

Sexta. Por otro lado, y a pesar de que el informe emitido por el Ayuntamiento de Abarán indica que este establecimiento dispone de Licencia de Apertura, otorgada en Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2008, ello ha de interpretarse a la luz de la doctrina jurisprudencial existente al respecto. Concretamente, el Tribunal Supremo considera que el otorgamiento de una licencia no se convierte en un derecho adquirido e inmutable, sino que por el contrario, presenta una naturaleza dinámica. En consecuencia, puede calificarse como una "autorización administrativa de tracto continuo, que da lugar a una relación permanente entre el titular y el municipio, pues éste último puede ejercer actividades de inspección y corrección de las condiciones en que se ejerce la actividad" (vid. STS 14 de diciembre de 1992).

En esta línea se pronuncia en STS de 3 de diciembre de 2003, al que señalar que:

"El otorgamiento de una licencia de tracto continuado impone a su titular la necesidad de someterse a una relación continuada con el Ente otorgante de la misma, que se halla facultado para vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas y también para adoptar medidas correctoras puntuales en cuanto al disfrute de la misma que demande la normativa vigente, cuando resulte necesario para garantizar el cumplimiento de los límites racionales que su otorgamiento comporta".

Séptima. En otro orden de cuestiones, el promotor de la presente queja, alude a las dificultades a las que se han visto sometidos por parte de ese Ayuntamiento, para acceder a la información ambiental obrante en el expediente del café-bar que nos ocupa.

Al respecto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reconoce en su artículo 35.a) el derecho de los ciudadanos a conocer en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, así como a obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

No obstante, en lo que a la contaminación acústica se refiere deviene indispensable recordar lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido que, en su artículo 5, expresa el deber de las Administraciones Públicas de informar al público sobre la contaminación acústica y, en particular, sobre los mapas de ruido y los planes de acción en materia de contaminación acústica, remitiendo de forma específica a la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, remisión que se entiende efectuada a la Ley 27/2006, de 18 de julio, encargada de regular los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, habida cuenta que ésta viene a derogar a aquella.

Así pues, en base a las prescripciones normativas y consideraciones formuladas anteriormente, a propuesta de la Asesoría Jurídica y en uso de las facultades que a esta Institución atribuye el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se considera necesario formular el siguiente:

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE ABARÁN

Esa Administración Local en cumplimiento de las previsiones normativas anteriormente enunciadas, contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, así como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, debe adoptar todas aquellas medidas necesarias encaminadas a facilitar a los ciudadanos el acceso a la información ambiental que obre en su poder.

Asimismo, se formulan las siguientes:

RECOMENDACIONES AL AYUNTAMIENTO DE ABARÁN

1ª. Resulta necesario que ese Ayuntamiento proceda a realizar medición de los niveles de ruido ocasionados por dicho local, respetando las previsiones contenidas en el artículo 18 del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido, concretamente las referidas en su apartado tercero, en cuanto a las medidas que se deben llevar a cabo para medir los niveles de ruido en el interior de los edificios, especificando que se deben realizar en el momento y la situación en que las molestias sean más acusadas, obligando al local, en caso de que los niveles de ruido sean superiores a los permitidos, a ejecutar aquellas obras que resulten necesarias para lograr la efectiva insonorización del mismo, incoando, en caso contrario, expediente sancionador correspondiente.

2ª. Es conveniente que ese Ayuntamiento lleve a cabo la elaboración de una Ordenanza dedicada a la protección del medio ambiente frente a la emisión de ruidos, encaminada a dotar a ese Municipio de una regulación más detallada al respecto.

Es cuanto tengo el honor de comunicarle, concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la

fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA INCOADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 66/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 16 de febrero de 2009, D. XXX presentó queja sobre presunta contaminación acústica sufrida en su vivienda de nueva construcción, derivada de los ruidos ocasionada por los vehículos que circulan por la zona.

Segundo. Se acompaña a la queja solicitud de medición al ayuntamiento de Cieza de fecha 5 de agosto de 2008 e informe del mismo de 4 de febrero de 2009, en el que se expone que "se procederá a realizar la medición en cuanto el sonómetro de este Ayuntamiento se encuentre calibrado, que se encuentra en este proceso. Se le informa que esta medición tiene carácter informativo, (…)".

Se adjunta asimismo, cédula de habitabilidad de la vivienda expedida por el Ayuntamiento, certificado de empadronamiento, contrato de compraventa y escritura y plano de la vivienda y plano de situación.

Tercero. Con fecha 19 de febrero se acusó recibo de la solicitud, procediéndose a la admisión a trámite y petición de información al Ayuntamiento de Cieza con fecha 26 de febrero de 2009 (registro de entrada en el Ayuntamiento de Cieza de 16 de marzo de 2009).

Cuarto. Con fecha 7 de abril de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 16 de abril de 2009) se recibió informe del Ayuntamiento de Cieza, en el que se reitera informe emitido por el técnico municipal sobre falta de calibración del sonómetro municipal, especificándose que la calibración aún se encuentra en proceso, aportándose copia del expediente, para facilitar la comprensión de lo expuesto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida, en primer lugar por laLey 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y en su desarrollo, por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el R.D. Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre.

El artículo 20 de la Ley 37/2003, del Ruido, establece que "No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean aplicables.

Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior.

En este sentido la disposición adicional cuarta de la citada ley, apunta que el Código técnico de la edificación, previsto en la ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, deberá incluir un sistema de verificación acústica de las edificaciones. Lo cuál se hizo efectivo en virtud del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación.

Es de necesaria referencia a la cuestión objeto de análisis, el prolijo informe especial sobre contaminación acústica realizada por el Defensor del Pueblo de España en 2005. En el mismo se afirma en consonancia con la regulación anterior, que la regulación jurídica del aislamiento de edificios es una fuente distinta de normas sobre contaminación acústica, pues el interés protegido es también, e incluso primordialmente, el buen orden de las edificaciones, y actualmente la calidad de la educación.

Es por ello que la sujeción a la normativa sobre contaminación acústica es en primer término un problema profesional y colegial sobre normativa en materia de edificación y de la Administración pública en los casos en que la supervisión del ajuste entre el proyecto técnico de edificación y la normativa correspondiente resulte defectuoso.

Así la actuación de las Defensorías ha de ir dirigida a constatar si la cédula de habitabilidad (documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos de habitabilidad, solidez y aptitud para la residencia humana de la vivienda) concedida por el ayuntamiento cumple la normativa en materia de ruido. Y en segundo lugar si la licencia de primera ocupación que se haya otorgado era correcta en función de si la promotora aportó los certificados de idoneidad, independientemente de la veracidad de los mismos.

No obstante, toda esta disquisición se relativiza por el hecho de acreditar con carácter previo las condiciones acústicas actuales de la edificación receptora del ruido, en las que se ha de incluir las condiciones externas de ruido exterior, como internas o de ruido interior.

Cuestión ésta no comprobable pues el Ayuntamiento no dispone de sonómetro adecuado capaz de realizar las correspondientes mediciones, ni parece que muestre voluntad de realizarlas pues desde el 4 febrero de 2009 y hasta la fecha actual no ha puesto los medios para hacer efectivo el derecho del ciudadano a la protección contra el ruido.

En lo que hace a las antenas de telefonía móvil, por la Ordenanza reguladora de las Condiciones Urbanísticas para la instalación y funcionamiento de sistemas de telecomunicación en el término municipal de Murcia; por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas; por el Decreto Legislativo 1/2005, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia; y con carácter general, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. La queja presentada tiene en su origen la inseguridad jurídica ocasionada por las administraciones responsables al emitir o denegar la correspondiente licencia fuera del plazo previsto, que en el ámbito municipal y autonómico, competencia de esta Defensoría, viene establecido por el artícu-

lo 217.4 del Decreto Legislativo 1/2005, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Región de Murcia, en cuya virtud:

"El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia para obras menores será de un mes desde su solicitud ante el Ayuntamiento y para las restantes será de tres meses. Transcurridos dichos plazos sin haberse notificado acto alguno, se entenderán otorgadas las licencias por silencio administrativo, salvo si afectaran a bienes de dominio público o declarados de interés cultural (BIC), así como a los espacios naturales protegidos por la legislación sectorial correspondiente, en cuyo caso se entenderán denegadas.

En los supuestos en que se precise autorización de otra Administración, previa a la licencia municipal, el cómputo del plazo para el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la acreditación ante el Ayuntamiento de la resolución que ponga fin al expediente tramitado por dicha Administración".

En el caso que nos ocupa, la administración sectorial competente por razón de la materia, en concreto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, emitió el informe de autorización de puesta en servicio el 7 de octubre de 2008, lo cual determina que a falta de cualquier otro trámite procedimental, hace más de cuatro meses que debería haber sido otorgada o denegada la correspondiente licencia por la administración local, sin que el silencio positivo pueda liberar a la administración de la obligación de resolver en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este sentido se ha pronunciado reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así a modo de ejemplo, la Sentencia de 22 de marzo de 1987 (RJ 1987/7745) recuerda "El deber de resolver –deber es y no obligación, puesto que nace directamente de la Ley: la de Procedimiento Administrativo, art. 94 de la Administración– ha quedado incumplido en la misma medida en que lo ha sido el derecho del particular a obtener resolución en un plazo razonable. Y esto es de todo punto inaceptable en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro, donde la Administración ha de procurar con su actuación ganarse el respeto y la confianza del ciudadano…".

Cuarta. En cuanto a la segunda cuestión planteada en la queja, relativa a la falta de información denegada por el Ayuntamiento, se desconoce si se hace referencia al expediente sancionador o al de legalización de la estación de telefonía móvil. En cuanto a aquél, el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, dispone en sus artículos 11 y 13 segundo párrafo, que el acuerdo de iniciación será notificado al denunciante, debiendo entenderse en un sentido restrictivo, que sólo deberá comunicarse este acto, configurándose a partir de este momento el expediente sancionador como una acción de oficio de la administración que en nada afecta a quien presentó denuncia, (en estos términos vid. STS STS de 12 de diciembre de 1992 (RJ 9662) o STS de 7 de mayo de 1998 (RJ 4911) Sin embargo, es importante la corriente doctrinal y jurisprudencial que entiende que cuando el denunciante ostente asimismo la condición de interesado, como es el caso –en opinión de la que suscribe– nos encontramos ante un supuesto de "denunciante cualificado" en el que por concurrir un interés económico, patrimonial o de otra especie, el tratamiento otorgado habrá de ser el previsto en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (concepto de interesado) cohonestado con la letra A) del artículo 35 del mismo texto legal (derechos de los interesados).

En lo que hace al expediente de licencia, sería plenamente aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, ampliado en los términos de la ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y

de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (por la que se incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), donde siquiera habría que acreditar la condición de interesado.

No obstante, en tanto en cuanto obra parte del expediente en nuestro poder, se entiende que finalmente la información fue aportada por el Ayuntamiento si bien no quedando el ciudadano satisfecho en algún aspecto no concretado en la queja.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El ordenamiento jurídico impone –en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre– el deber legal de resolver expresamente, otorgando o denegando, en este caso, las licencias urbanísticas en los plazos establecidos por la normativa aplicable.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 80/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 19 de febrero de 2009, D. XXX presentó queja contra el Ayuntamiento de Murcia relativo a una denuncia contra su persona por ruidos ocasionados en su vivienda que ocasionaban molestias en el vecino del piso inferior.

La reclamante no entiende que en el momento de la inspección y medición de ruidos en el piso inferior o en un momento inmediatamente posterior no se le comunicara la existencia del acta, no se le proporcionara copia de la misma, ni se le permitiera realizar alegaciones.

También muestra disconformidad con la sanción propuesta en el expediente sancionador incoado, pues considera tiene su origen en un acta inválida.

Segundo. Consta en el expediente aportado por la reclamante, documentación acreditativa de la queja planteada, integrada por denuncia de fecha 29 de enero de 2008, acta de infracción de fecha 5 de marzo de 2008, informe al acta de 17 de marzo, audiencia previa a medidas correctoras de 17 de marzo y acuerdo de incoación de expediente sancionador por infracción leve de 28 de marzo de 2008.

Asimismo se aportan alegaciones al sancionador de 16, 25 de abril y 5 de mayo de 2008, actas de comparecencia en la administración local, y otros documentos que por su menor relevancia para la resolución de este caso concreto no se especifican.

Tercero. Con fecha 23 de marzo de 2009 se admitió a trámite la queja, requiriendo con esa fecha información al Ayuntamiento de Murcia (registro de entrada en el Ayuntamiento de Murcia, de 1 de abril de 2009).

Cuarto. Con fecha 21 de abril de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 23 de abril de 2009) se recibió informe del Jefe del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, en la que se refleja la tramitación seguida en el Ayuntamiento y que como consecuencia de la misma se incoó el oportuno expediente sancionador que ha caducado por transcurrir el plazo máximo establecido para su resolución.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La queja en cuestión ha de analizarse a la luz de la Ordenanza del Ayuntamiento de Murcia sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, que en su artículo 52 no deja lugar a dudas de la obligación de dar al interesado copia del acta redactada por el inspector, así como los extremos que se han de contener en la misma:

Art. 52.1. "1. Una vez comprobado por los agentes municipales que el funcionamiento de la actividad o instalación se realiza con incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, levantarán acta en la que se describirá con detalle en qué consiste el incumplimiento, ajustándose en la que proceda a lo previsto en el Título X. De dicha acta se dará en el acto copia al interesado".

En definitiva, con las actuaciones previas o información previa, se pretender dar a conocer las circunstancias del caso de las personas presuntamente infractoras, así como posibilitar la conveniencia o no de iniciar el expediente sancionador, permitiendo así verificar hasta qué punto existe base racional para estimar cometida una infracción y su imputabilidad a un sujeto de derecho y evitando la tramitación de un procedimiento sancionador con los correspondientes efectos desagradables para el administrado si es manifiesta la inexistencia de infracción.

Cuestión distinta es la información reservada cuya práctica se pudiera acordar dentro del trámite de actuaciones previas, en la que si bien es cierto que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la inexistencia de indefensión cuando no se da publicidad a la información reservada, no es menos cierto que también se reconoce que la información reservada se dirige a evitar la frustración de los fines perseguidos por el procedimiento, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa, ya que nada impidió al inspector –o al menos, no se deriva lo contrario del expediente–, subir al piso de arriba e informar a la denunciada de la actuación que se acababa de realizar, entregándole copia del acta levantada y permitiéndole realizar las alegaciones que convinieran en su descargo (v.gr. circunstancias excepcionales tales como mudanzas, reparación de algún mueble ect…).

En este sentido, la contestación del Ayuntamiento de que el expediente sancionador ha caducado, tranquiliza a esta Defensoría, por cuanto a pesar de que cualquier expediente caducado es susceptible de ser reiniciado en tanto no haya prescrito la infracción, en aplicación del artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, confirmado por diversas sentencias del Tribunal Supremo (vid. STS de 24 de septiembre de 2001 o de 20 de febrero de 2002), y de que hubiera sido más correcto, promover la anulación del expediente ex artículo 102 o 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por haberse producido indefensión de la interesada, a la que se privó de la oportunidad de alegar en su descargo una vez rea-

lizada la medición correspondiente (nulidad de pleno derecho) o por contravenir, en cualquier caso, la propia normativa municipal recogida en la correspondiente Ordenanza (anulabilidad), es cierto que por el tiempo transcurrido se ha producido también la prescripción y por tanto no existe la posibilidad de reiniciar el procedimiento para imponer nueva sanción.

Por lo expuesto, vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha adoptado el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Las actas de inspección realizada por el personal al servicio de la Administración pública en el marco de un procedimiento sancionador deberán ser puestas en conocimiento del denunciado en cumplimiento del artículo 52 de la Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, siempre que no se justifique en el expediente la imposibilidad de su puesta en conocimiento o la necesidad de su carácter reservado en orden a evitar la frustración de los fines perseguidos por el procedimiento.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 81/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 20 de febrero de 2009, D. XXX presentó queja por Internet relativa a la existencia de pintadas xenófobas y racistas en Beniaján, en lugares de tránsito de niños por tratarse de calles principales, cercanas al colegio o a establecimientos comerciales. Denuncia que las pintadas se encuentran incluso en edificios públicos, como es el Centro de Salud.

Para intentar solventar este problema, el ciudadano puso estos hechos en conocimiento –en primera instancia– de la policía local, la cual le señaló que no podían hacer nada si no descubrían a los infractores en el momento de los hechos; en segundo lugar, de ingeniería urbana, que les señaló que sólo acudían cuando recibían órdenes al respecto, y en todo caso, en edificios de titularidad pública; y finalmente de la Alcaldía que señaló su competencia únicamente en edificios públicos.

Segundo. Consta en el expediente aportado por el reclamante decenas de fotos acreditativas de las circunstancias que se denuncian, no siendo objeto de reproducción en esta resolución, por razones obvias, pero que sin duda alguna reflejan contenidos racistas, xenófobos y conculcadores de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.

Tercero. Con fecha 20 de febrero de 2009 (notificado al ciudadano con fecha 11 de marzo de

2009, se acusó recibo de la queja, admitiéndose a trámite con fecha 5 de marzo (acuse de recibo de 21 de marzo), procediéndose a solicitar con esa misma fecha información al Excmo. Ayuntamiento de Murcia (entrada de 18 de marzo de 2009).

Cuarto. Con fecha 19 de mayo de 2009 (registro de entrada de 21 de mayo de 2009) se remitió informe por el Ayuntamiento de Murcia a esta Defensoría, que por su extensión procede a reproducirse en su tenor literal:

"En lo referente a las pintadas realizadas en los edificios municipales de la pedanía de Beniaján, se encuentran todas limpias, en cuanto a las medidas adoptadas a los edificios privados, no es competencia de este Servicio.

El procedimiento a seguir sería ponerse en contacto con los Presidentes de las Comunidades de vecinos afectadas, a través de la policía local u otros medios y hacerles cumplir el art. 23 de las Ordenanzas de Limpieza Viaria y Gestión de los Residuos Urbanos Municipales, donde se hace constar que, "Los propietarios de toda clase de terrenos, edificaciones, y en especial, aquellos que sean objeto de una especial protección histórico-artístico o cultural, así como los titulares de kioskos o cualquier otro puesto o espacio, destinado a comercio situado en la vía pública, tendrá al obligación de mantener las paredes y fachadas limpias de cualquier tipo de anuncios, que no sea el específico de una actividad profesional o mercantil, tiempo que en estos casos estén amparados por la correspondiente licencia".

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida, básicamente por la Ordenanza de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 12 de marzo de 2002, sin que conste la existencia de normativa autonómica de general aplicación al territorio regional.

Tercera. Procede señalar, siquiera someramente, que en el ámbito nacional, el Código Penal en su artículo 626 del Código Penal sanciona con pena de localización permanente de dos a seis días o tres a nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad a quienes de "deslucieren bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios".

En el ámbito autonómico, sólo la Comunidad Autónoma de Madrid, dedica un atención especial a esta problemática. Así, el artículo 20 de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, bajo la rúbrica del Capítulo III "Medidas para el embellecimiento, limpieza y calidad de vida de nuestras ciudades" dispone que con el fin de proteger el paisaje urbano y evitar la degradación arquitectónica, así como contribuir al embellecimiento de las ciudades, se prohíbe la realización de graffitis o pintadas en la vía pública, monumentos, estatuas, mobiliario urbano, arbolado, cierres de obras, espacios publicitarios, así como en la fachada de los edificios y construcciones. Excepcionalmente, los Ayuntamientos podrán ceder espacios públicos para la realización de los murales y graffitis de valor artístico, siempre que no perjudiquen al entorno urbano ni a la calidad de vida de los vecinos. Estos espacios deberán estar periódicamente sometidos a control y limpieza.

Asimismo se tipifica como infracción leve sancionada como multa de 300 a 3.000 euros y

posibilidad de sustitución de la multa con trabajos de limpieza de pintadas, a quienes infrinjan todas estas obligaciones, sin perjuicio de la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, así como reponer las cosas a su estado anterior.

Finalmente, atribuye a los municipios la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores y de reparación e indemnización de los daños causados.

Por su parte, en el ámbito municipal, destaca por su incidencia expresa en la regulación del tema que nos ocupa, la Ordenanza de 23 de diciembre de 2005 de Barcelona, de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Barcelona, prácticamente reproducida por el Ayuntamiento de Zaragoza, en su Ordenanza sobre protección de Espacio Urbano de 22 de octubre de 2008, en cuya virtud, se prohíbe la realización de todo tipo de "grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica o similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general y el resto de elementos descritos en el artículo 3 de esta Ordenanza (léase, también "espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo en los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados anteriores, o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento de los mismos por parte de sus propietarios o propietarias, arrendatarios o arrendatarias o usuarios o usuarias pueda implicar igualmente consecuencias negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público").

Cuarta. Desde un punto de vista normativo, como apuntábamos no existe normativa de alcance general que regule esta cuestión para toda la región, por la que habrá que atender a las diversas regulaciones –cuando éstas existan– de cada una de los Ayuntamientos en cuestión.

Circunscribiéndose los hechos a la pedanía de Beniaján, el Ayuntamiento de Murcia, contiene una referencia algo escueta en la Ordenanza de Limpieza Viaria antes descrita, en cuyo artículo 23 bajo la rúbrica "anuncios en inmuebles" señala que "Los propietarios de toda clase de terrenos y edificaciones y, en especial, aquello que sean objeto de una especial protección histórico-artística o cultural, así como los titulares de quioscos o cualquier otro puesto o espacio destinado al comercio y situado en la vía pública, tendrán la obligación de mantener las paredes y fachadas limpias de cualquier tipo de anuncio que no sea el específico de una actividad profesional o mercantil, siempre que estos casos estén amparados por la correspondiente licencia".

En este sentido, es encomiable la intención del técnico municipal de intentar dar cobertura a los hechos denunciados en este único artículo dedicado a "anuncios en inmuebles". El principal inconveniente pudiera estar constituido fundamentalmente por la falta de tipicidad de la infracción, que sin embargo, se salva al contenerse reflejada expresamente como infracción leve "la realización de pintadas o graffitis en la vía pública, oficios, mobiliario urbano, u otros elementos públicos".

El problema se plantea cuando en el informe emitido a esta Defensoría se parece inferir que, cuando se produzcan pintadas, serán los propios ciudadanos los que deberán dirigirse a la policía local para que los pongan en contacto

con los presidentes de las Comunidades de propietarios en orden al cumplimiento de esta Ordenanza.

En efecto, resultaría llamativo que el Ayuntamiento desplace la carga del cumplimiento de la legalidad a los propios ciudadanos, responsabilizándose exclusivamente de la limpieza de los edificios de titularidad local.

No en vano, a esta interpretación es contraria la propia Ordenanza Municipal, cuando en su Título I "Disposiciones Generales" dirige su ámbito de aplicación entre otros al "mantenimiento de la limpieza de los espacios públicos y privados", recordando en su artículo sexto el carácter obligatorio de la Ordenanza, que vinculará "a los ciudadanos y a los poderes públicos" (apartado primero), disponiendo que la "Autoridad municipal exigirá ("exigiría") su cumplimiento, obligando al causante del deterioro a la reparación de la afección causada, sin perjuicio de las sanciones (que) puedan corresponder o de las responsabilidades civiles o penales a las que hubiera lugar". (apartado 2) En caso de incumplimiento, –sigue preceptuando el apartado tercero–, el Ayuntamiento podrá acordar la ejecución subsidiaria, por sí o a través de las personas que se determinen, a costa de los obligados".

Por lo expuesto, ha de inferirse que el Ayuntamiento de Murcia es responsable del mantenimiento.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La Ordenanza de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia, le atribuye a la Corporación Local la responsabilidad del mantenimiento de la limpieza de los terrenos y construcciones sitos en el ámbito municipal, bien directamente cuando sean de titularidad municipal, bien indirectamente, cuando los bienes pertenezcan a otro sujeto público o privado, competiéndole al ente local exigir su cumplimiento, obligando al causante del deterioro a la reparación de la afección causada sin perjuicio de las sanciones o responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar, pudiendo acordar la ejecución subsidiaria a costa de los causantes del daño.

SUGERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Sería conveniente que se procediera a la aprobación de una Ordenanza, similar a otras que existen en el panorama nacional apuntadas en la presente Resolución, dirigida a evitar la degradación visual del entorno urbano en el municipio, y a fomentar y a garantizar la convivencia ciudadana y el civismo, de forma que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe sobre la aceptación de las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos informe sobre las razones que impidan ésta y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 98/2009 Y LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 107/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El día 2 de marzo del presente año tuvo entrada en esta Defensoría una queja de D. XXX, propietaria de una vivienda en el municipio de San Javier, relativa a la proliferación de antenas, una de radioaficionado y otras de telefonía móvil, que desde hace un par de años a esta parte se han ido instalando en inmuebles de aquella localidad colindantes y cercanos a su domicilio. Sobre ambos tipos de antenas la promotora de la queja advierte en su escrito un anormal funcionamiento de la administración local que se materializa, según los casos, en la falta de contestación de ésta a sus escritos de denuncia, en la pasividad y en el retraso de la tramitación administrativa y sancionadora desplegadas al efecto por el Ayuntamiento de San Javier.

Segundo. Por lo que hace a la antena de radioaficionado, ubicada en una vivienda colindante a la de la promotora de la queja, se trata de una instalación que, según afirma la reclamante, produce interferencias en receptores de televisión y radio de su domicilio, llegándose a escuchar en ocasiones a través de su teléfono móvil conversaciones privadas de algunos vecinos. Establece asimismo la reclamante cierta relación causa-efecto entre la proximidad de esta instalación y algunos problemas que padece en un ojo: picor, escozor, enrojecimiento, del que fue intervenida por un tumor el pasado año. Si abundamos en este último extremo, obra en el expediente un informe médico, aportado por la promotora de la queja y suscrito por un facultativo del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena, en el que se sostiene la probabilidad de que si el radio y la potencia de emisión de esa antena superasen los niveles considerados seguros para la salud, se podrían producir determinados efectos nocivos para la patología que sufre la reclamante, recomendándole por ello que no resida en su domicilio de San Javier.

Tercero. El pasado 11 de marzo la queja fue admitida a trámite por esta Defensoría. Comunicada tal circunstancia a su promotora, quedan ese mismo día practicados los necesarios requerimientos de información a la administración local de San Javier, que se completaron, tras una primera recepción de información, con la llegada a esta Defensoría, después de su requerimiento, de la copia del expediente de restauración de la legalidad urbanística y sancionador nº 2/09, iniciado por el Ayuntamiento de San Javier frente el propietario de la antena de radioaficionado, con fecha 19 de enero de 2009.

Cuarto. De la documentación aportada asimismo por la promotora de la queja, y que ya obra en el expediente 2/09 citado, se desprende que la primera denuncia de ésta ante el Ayuntamiento de San Javier se produce el 19 de julio de 2007, y, pasado con creces más de un año sin que conste ninguna intervención municipal, la denuncia es reiterada por la reclamante ante esa misma administración local el 26 de diciembre de 2008.

A resultas de esa segunda denuncia, el 19 de enero de 2009 un inspector urbanístico del ayuntamiento gira visita al lugar en el que se encuentra instalada la antena, levantando la oportuna acta de inspección en la que se hace constar que esa instalación de radioaficionado no posee licencia. Un día después, el 20 de enero de 2009, se producen sendas comunicaciones interiores desde la sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Javier tanto al letrado municipal como al arquitecto técnico municipal, recabando de ambos los oportunos informes.

En el informe del letrado municipal, emitido el 21 de enero de 2009, se concluye que no existe concedida, ni en tramitación, ninguna licencia de instalación de antena de radioaficionado por parte del vecino infractor y dueño de la misma, lo que

vulnera las disposiciones de aplicación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas del municipio de San Javier. Procede por ello, según sostiene este letrado en su informe, la inmediata incoación de un expediente sancionador.

Por su parte, el arquitecto técnico municipal evacúa informe el 12 de marzo de 2009; en él se expresa que los actos no disponen de la reglamentaria licencia municipal, y en tanto que incumplen lo establecido en el art. 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas, las obras "no son legalizables".

Quinto. La última actuación municipal relacionada con el referido expediente de la que se tiene constancia en esta Defensoría se produce el pasado 3 de julio de 2009, con la firma por parte del Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de San Javier del Decreto nº 1729/2009, en el que, sobre la base de los informes antes citados, se determina incoar procedimiento sancionador por infracción urbanística frente al propietario de la instalación de una antena de radioaficionado, comunicando al infractor que los hechos que motivan la incoación del procedimiento pueden ser calificados como infracción urbanística grave en virtud del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y como infracción muy grave conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de las Infraestructuras Radioeléctricas. Por lo demás, se concede al interesado un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de esa Resolución, para presentar alegaciones si así lo estima oportuno.

Sexto. Por lo que hace a las antenas de telefonía móvil, que asimismo son objeto de queja al estar ubicadas en las inmediaciones del domicilio de la reclamante en la localidad de San Javier, de lo aportado al expediente por la promotora de la queja se deduce que son tres las instalaciones de esta naturaleza existentes en ese entorno urbano, promovidas además por tres mercantiles distintas. Entre la documentación obrante en el expediente, consta la inspección girada el 26 de junio de 2007 por un funcionario del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento de San Javier a la misma calle en la que se encuentra el domicilio de la reclamante, de la que se levanta acta en la que se constata la existencia de la instalación de un centro emisor radioeléctrico que carece de solicitud y de licencia, y que se encuentra ubicado en una azotea comunitaria junto a una guardería infantil situada en la planta baja del edificio.

Es asimismo aportado por la reclamante un escrito dirigido al gobierno municipal de San Javier por el presidente de una comunidad de propietarios de un edificio próximo al de la promotora de la queja, denunciado la proliferación de antenas repetidoras de telefonía en las inmediaciones de su inmueble, sin los pertinentes permisos y licencias y junto a zonas sensibles. Este escrito denuncia básicamente que la apertura de los procedimientos sancionadores contra los promotores de las antenas, no viene aparejada de la inmediata paralización de las obras. Asimismo pone de manifiesto evidentes retrasos tanto en la notificación de las decisiones que adopta el Ayuntamiento al respecto, como en el tiempo para resolver sobre la concesión de licencias, instando al Ayuntamiento a que garantice y supervise que esas antenas ilegales estén debidamente precintadas y no tengan actividad alguna hasta tanto no concluyan los pertinentes expedientes sancionadores.

Por lo demás, es numerosa la documentación administrativa relativa a las tres citadas antenas de telefonía, que viene suscrita por inspectores urbanísticos, técnicos de administración general, ingenieros técnicos e incluso hasta por el propio Concejal de Urbanismo de aquella Corporación

municipal, de la que se desprende que las citadas instalaciones de telefonía no cumplen con lo previsto en la Ordenanza Municipal que las regula, que carecen de las necesarias licencias, y que pese a la apertura de procedimientos sancionadores muy dilatados en su tramitación, las mismas siguen en funcionamiento y prestando servicio, con los efectos que de ello podrían derivarse para la calidad de vida de los vecinos del entorno.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a las cuestiones objeto de queja está constituida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y en su desarrollo y para el caso que nos ocupa por el Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Es asimismo de aplicación el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia y, por último, la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas del Municipio de San Javier (BORM de 2 de junio de 2007), aprobada y vigente en aquel municipio como manifestación de su autonomía local. Traemos también a colación para fundamentar esta resolución y los recordatorios de deberes legales que incluye, lo expresado por el Defensor del Pueblo de España en alguna de sus recomendaciones recientes relativas a similares problemáticas a la que ahora abordamos, así como unas reflexiones realizadas por este Alto Comisionado de las Cortes Generales en su último informe anual de 2008 relativas a la pasividad de algunas administraciones locales frente a la proliferación de este tipo de infraestructuras en los municipios españoles.

Tercera. En lo referido a la antena de radioaficionado, y como ya quedó expresado en los antecedentes fácticos, el pasado 3 de julio de 2009, el Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de San Javier firmaba el Decreto n° 1729/2009, en el que, sobre la base de los informes técnicos emitidos por el letrado municipal y por el arquitecto técnico municipal –éste último calificando la instalación de la antena de radioaficionado como acto "no legalizable"–, se determinaba incoar procedimiento sancionador por infracción urbanística frente al propietario de la instalación, hecho que puede ser calificado como infracción urbanística grave en virtud del art. 237.2 e) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y como infracción muy grave conforme a lo dispuesto en el art. 51.1.1.1 a) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de las Infraestructuras Radioeléctricas del Municipio de San Javier. Una infracción que, de conformidad con lo expresado en ambas normas, puede llevar aparejada una sanción de multa equivalente al 50% del valor de lo realizado. Además, se concedía al interesado un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de esa Resolución, para presentar alegaciones si así lo estimaba oportuno.

El citado decreto determina la apertura de una pieza separada de restablecimiento del orden infringido, requiriendo al promotor de las obras para que en un plazo de dos meses, siempre a partir de la notificación al infractor de este decreto, solicite la oportuna licencia para la ejecución de las obras que ha realizado, advirtiéndole que si en ese plazo no solicita licencia, no ajusta las obras a las condiciones de la misma, o no procediera su otorgamiento, se dictará orden de ejecución de las

operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su estado anterior a la infracción.

Cuarta. Pero más allá de que el procedimiento sancionador, con la pieza separada de restauración de la legalidad urbanística, continúe su tramitación hasta que culmine con una resolución que le ponga fin, teniendo en cuenta además la tajante afirmación del Arquitecto Técnico Municipal que en su informe sostiene que estamos ante "obras no legalizables", y dado que estamos ante unas instalaciones sobre las que existe denuncia desde hace más de dos años, esta Defensoría cree que el Ayuntamiento de San Javier debería haber dado aplicación, tanto en el caso de la antena de radioaficionado, como también en los supuestos de instalación de antenas de telefonía móvil sin las oportunas licencias, al artículo 49.1 y 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de las Infraestructuras Radioeléctricas, que regula la protección de la legalidad. Allí se expresa lo siguiente:

Cuando una instalación o equipo de telecomunicación se haya establecido sin disponer de licencia municipal o sin sujetarse a sus condiciones, se incoará expediente sancionador único que contará con piezas separadas de suspensión y restablecimiento de la legalidad urbanística.

***Incoado el expediente sancionador se ordenará la suspensión inmediata del funcionamiento de la instalación o equipo de telecomunicación**, pudiendo dictarse el resto de las previsiones contenidas en el art. 227 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.*

Cabe recordar asimismo lo expresado por ese artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia:

1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo se efectuasen sin licencia u orden de ejecución o incumpliendo las condiciones de las mismas se dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos como pieza separada del correspondiente expediente sancionador y sin perjuicio de la formalización de la pieza separada de restablecimiento del orden infringido regulado en esta Ley.

2. Una vez comprobada la carencia de licencia o el incumplimiento de sus condiciones, la suspensión será ordenada al infractor por el Ayuntamiento y, si éste no lo hiciera, en el plazo de 15 días, una vez requerido para ello por el Director General con competencias en materia de urbanismo, éste se subrogará en el ejercicio de dicha facultad, dando cuenta de la orden de suspensión al Ayuntamiento correspondiente.

3. Simultáneamente, se podrá ordenar al infractor, entre otras medidas tendentes a la efectiva paralización de las obras, la retirada de materiales, útiles y maquinaria, y el precinto de los accesos al local. Si en el plazo de cuatro días no lo hiciere el interesado, la autoridad que ordenó la suspensión podrá retirar dichos materiales, útiles o maquinaria, o proceder al precintado de los accesos. En este caso, los elementos retirados quedarán a disposición del infractor, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia.

Si el infractor no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Quinta. En efecto, y para el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de San Javier contaba con un soporte jurídico preciso para la adopción de esas medidas, teniendo también apoyatura en el Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Allí, en su artículo 15, se recogen una serie de medidas de carácter previsional, afirmando que:

"1. De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el órgano competente para iniciar el procedimiento o el órgano instructor podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.

2. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión temporal de actividades y la prestación de fianzas, así como en la retirada de productos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y en las demás previstas en las correspondientes normas específicas.

3. Las medidas provisionales deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto".

Sexta. Por lo que hace a las antenas de telefonía móvil, además de los considerandos anteriores, y a pesar de no ser pacífica la doctrina existente al respecto, la instalación de este tipo de antenas está sujeta igualmente a licencia de actividad. A ese respecto, y para lo que nos ocupa, debemos traer a colación lo afirmado en la Sentencia núm. 73/2007, de 31 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª). Allí se sostiene que:

"*…Respecto de la intervención del Ayuntamiento en los procedimientos ambientales relacionados con la actividad de telefonía móvil hemos señalado que se trata de una actividad sometida a la necesidad de obtención de* ***licencia de actividad,*** *ya que la instalación forma parte de una red de telecomunicaciones mediante la cual la empresa de telecomunicación ejerce la actividad propia de operador del mercado de telecomunicaciones por onda. A través de la antena de telefonía móvil se producen emisiones de ondas electromagnéticas sometidas a los límites de emisión fijados en la normativa estatal, sin perjuicio de las medidas adicionales de protección medioambiental que, en su caso, pudiera adoptar la Comunidad Autónoma.*

En el caso de Murcia, para definir el campo de actividades sometidas a calificación ambiental la Ley 1/95, en su artículo 22, utiliza un triple criterio que va a conducir a que la enumeración de actividades sometidas a calificación ambiental sea meramente indicativa:

- *Positivo: se someten las actividades enumeradas en su Anexo II.*
- *Negativo: no se someten las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, que son las enumeradas en el Anexo I; así como las exentas, que se enumeran en el Anexo III.*
- *Residual: se someten todas aquellas actividades que no están explícitamente exentas (Anexo III).*

Por consiguiente, no estando la actividad comprendida entre las excluidas en el Anexo III, estaría sometida a calificación ambiental. Desde el punto de vista procedimiental debe tenerse en cuenta que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no tiene legislación propia en materia de comunicación por ondas. Sí dispone, en cambio, de normativa medioambiental propia que sustituye el régimen autorizatorio del R.A.M.I.N.P. por el indicado trámite de calificación ambiental, previo al otorgamiento de licencia de apertura".

En definitiva, a las antenas de telefonía, sometidas a licencia de actividad, les es de aplicación la referida Ley 1/95, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. Y en ella, en el Título V que regula la disciplina ambiental, en su art. 70, se expresa que: "*1. El órgano al que corresponda realizar la declaración o calificación* ***suspenderá,*** *salvo casos especialmente justificados, la ejecución de obras, industrias o* ***actividades*** *sometidas al régimen de control ambiental, cuando concurriera alguna de las circunstancias siguientes:*

a) Que comenzara a ejecutarse la obra o iniciarse la industria o actividad sin la correspondiente autorización o licencia municipal.

b) Que comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento del trámite de evaluación o calificación ambiental.

1. Que exista ocultación o falseamiento de datos o manipulación dolosa en el procedimiento ambiental correspondiente.

Que se produzca incumplimiento o transgresión de las condiciones de índole ambiental impuestas para la ejecución del proyecto por la calificación o evaluación ambiental.

2. La Consejería de Medio Ambiente podrá requerir, en su caso, al ayuntamiento, para que proceda a la suspensión en los supuestos de los apartados anteriores.

3. Si el órgano competente no efectuara la suspensión, ni lo hiciera a instancias de la Consejería de Medio Ambiente en el plazo que se le indique, que no será inferior a quince días, ésta adoptará las medidas oportunas para preservar los valores ambientales, pudiendo, al efecto, disponer la paralización de las actividades que supongan riesgos o lesión ambiental".

Séptima. De otro lado, y a mayor abundamiento, esta Defensoría suscribe lo que ya dejó dicho el Defensor del Pueblo de España en la Recomendación 99/2007, respecto de un municipio en el que existía un evidente despliegue de instalaciones relacionadas con la telefonía móvil, precisadas de licencia y carentes de ella: *"Que una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver está apoderado y debe considerar la adopción de las medidas preventivas necesarias que aseguren el cumplimiento de la resolución, con paralización de obras, suspensión de actividad, precintado de aparatos o equipos, exigencia de fianzas e imposición de medidas de seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o el daño".*

Recomendación ésta que, sin duda, trae causa de una situación muy repetida en muchos municipios españoles y que es descrita como sigue en el Informe Anual del Defensor del Pueblo de España de 2008: *"…Merecen una mención específica las quejas que se han formulado y admitido a trámite a lo largo del 2008 en las que se denunciaban la instalación y el funcionamiento de antenas de telefonía móvil sin contar con las preceptivas licencias urbanísticas o el incumplimiento de los decretos municipales que ordenaban el cese de ese funcionamiento ilegal y el desmantelamiento o demolición de esas estaciones base de telefonía. Como ha sucedido con otras infracciones urbanísticas, también en estas situaciones se han repetido las mismas prácticas administrativas anteriormente censuradas: pasividad municipal en comprobar los hechos denunciados por los particulares; falta de diligencia en ejercer las potestades de policía atribuidas; demora en la tramitación de los expedientes de restablecimiento del orden urbanístico vulnerado; no incoación de expedientes sancionadores por las infracciones cometidas; no ejecución subsidiaria de las órdenes de demolición impartidas, etc. Se debe significar en este punto que en algunos municipios hay una situación generalizada de ilegalidad de estas instalaciones, por existir una moratoria en su otorgamiento hasta la entrada en vigor de la ordenanza municipal que regule la*

materia y haberse retrasado más de lo previsto su aprobación".

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Dado el preceptivo mandato expresado en el art. 49.1 y 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de las Infraestructuras Radioeléctricas del Municipio de San Javier, así como las similares disposiciones que se contienen tanto en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, como, y para el caso de las antenas de telefonía móvil, en el art. 70 de la Ley 1/95, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia; teniendo en cuenta además la doctrina sentada por el Defensor del Pueblo de España en casos parecidos al que nos ocupa, hemos de recordar al Ayuntamiento de San Javier la obligación legal que tiene de ordenar la suspensión inmediata del funcionamiento de las referidas infraestructuras, accionando, hasta tanto no concluyan los procedimientos sancionadores en tramitación, cualesquiera otras medidas de carácter provisional que se estimen oportunas.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA INCOADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 117/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 12 de marzo de 2009, D. XXX presentó queja sobre la instalación de dos antenas de telefonía móvil, denunciando asimismo la falta de información de la Gerencia de Urbanismo, alegando no estar obligada a notificar a la parte interesada el trámite del expediente.

Segundo. Consta en el expediente aportado por la reclamante, Auto del Juzgado contencioso administrativo nº 5 de Murcia, denegando al Ayuntamiento la entrada en el domicilio de situación de la antena de telefonía móvil, con fundamento en que se trata de una medida cautelar en el marco de un expediente sancionador, que ha concluido por sanción por no solicitar licencia urbanística antes de la instalación, pero en el que existe informe de técnico municipal que reseña que la estación de telefonía cumple con la normativa urbanística establecida por las antenas municipales.

Asimismo consta resolución de expediente sancionador incoado en el servicio administrativo de disciplina urbanística, con número 227/2007, que impone a la titular de la antena una sanción de 1.101,66 euros, por la comisión de una infracción urbanística grave por instalación de una estación base de telefonía móvil sin licencia.

Tercero. Con fecha 20 de marzo de 2009 (registro de entrada en el Ayuntamiento de Murcia, de 1 de abril de 2009) se admitió a trámite la queja, requiriendo con esa fecha información al Ayuntamiento de Murcia sobre situación legal de las mencionadas antenas, así como informe sobre la legalización y justificación de plazos para la tramitación del mismo.

Cuarto. Con fecha 20 de abril de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 22 de abril de 2009) se recibió informe del Ayuntamiento de Murcia, en la que se expresa que la licencia se solicitó con fecha 4 de enero de 2007, procediéndose por la titular a la subsanación de ciertas deficiencias, y obteniendo con fechas abril y octubre de 2008, autorización de la memoria técnica e instalación y autorización de puesta en servicio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida, en lo que hace a las antenas de telefonía móvil, por la Ordenanza reguladora de las Condiciones Urbanísticas para la instalación y funcionamiento de sistemas de telecomunicación en el término municipal de Murcia; por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas; por el Decreto Legislativo 1/2005, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia; y con carácter general, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. La queja presentada tiene en su origen la inseguridad jurídica ocasionada por las administraciones responsables al emitir o denegar la correspondiente licencia fuera del plazo previsto, que en el ámbito municipal y autonómico, competencia de esta Defensoría, viene establecido por el artículo 217.4 del Decreto Legislativo 1/2005, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en cuya virtud:

"El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia para obras menores será de un mes desde su solicitud ante el Ayuntamiento y para las restantes será de tres meses. Transcurridos dichos plazos sin haberse notificado acto alguno, se entenderán otorgadas las licencias por silencio administrativo, salvo si afectaran a bienes de dominio público o declarados de interés cultural (BIC), así como a los espacios naturales protegidos por la legislación sectorial correspondiente, en cuyo caso se entenderán denegadas.

En los supuestos en que se precise autorización de otra Administración, previa a la licencia municipal, el cómputo del plazo para el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la acreditación ante el Ayuntamiento de la resolución que ponga fin al expediente tramitado por dicha Administración".

En el caso que nos ocupa, la administración sectorial competente por razón de la materia, en concreto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, emitió el informe de autorización de puesta en servicio el 7 de octubre de 2008, lo cual determina que a falta de cualquier otro trámite procedimental, hace más de cuatro meses que debería haber sido otorgada o denegada la correspondiente licencia por la administración local, sin que el silencio positivo pueda liberar a la adminis-

tración de la obligación de resolver en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este sentido se ha pronunciado reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así a modo de ejemplo, la Sentencia de 22 de marzo de 1987 (RJ 1987/7745) recuerda "El deber de resolver –deber es y no obligación, puesto que nace directamente de la Ley: la de Procedimiento Administrativo, art. 94 de la Administración– ha quedado incumplido en la misma medida en que lo ha sido el derecho del particular a obtener resolución en un plazo razonable. Y esto es de todo punto inaceptable en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro, donde la Administración ha de procurar con su actuación ganarse el respeto y la confianza del ciudadano…".

Cuarta. En cuanto a la segunda cuestión planteada en la queja, relativa a la falta de información denegada por el Ayuntamiento, se desconoce si se hace referencia al expediente sancionador o al de legalización de la estación de telefonía móvil. En cuanto a aquél, el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, dispone en sus artículos 11 y 13 segundo párrafo, que el acuerdo de iniciación será notificado al denunciante, debiendo entenderse en un sentido restrictivo, que sólo deberá comunicarse este acto, configurándose a partir de este momento el expediente sancionador como una acción de oficio de la administración que en nada afecta a quien presentó denuncia. (en estos términos vid. STS STS de 12 de diciembre de 1992 (RJ 9662) o STS de 7 de mayo de 1998 (RJ 4911). Sin embargo, es importante la corriente doctrinal y jurisprudencial que entiende que cuando el denunciante ostente asimismo la condición de interesado, como es el caso –en opinión de la que suscribe– nos encontramos ante un supuesto de "denunciante cualificado" en el que por concurrir un interés económico, patrimonial o de otra especie, el tratamiento otorgado habrá de ser el previsto en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (concepto de interesado) cohonestado con la letra A) del artículo 35 del mismo texto legal (derechos de los interesados).

En lo que hace al expediente de licencia, sería plenamente aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, ampliado en los términos de la ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (por la que se incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), donde siquiera habría que acreditar la condición de interesado.

No obstante, en tanto en cuanto obra parte del expediente en nuestro poder, se entiende que finalmente la información fue aportada por el Ayuntamiento si bien no quedando el ciudadano satisfecho en algún aspecto no concretado en la queja.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El ordenamiento jurídico impone –en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre– el deber legal de resolver expresamente, otorgando o denegando, en este caso, las licencias urbanísticas en los plazos establecidos por la normativa aplicable.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, o con anterioridad, una vez se reciba la contestación señalada en el párrafo anterior, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 157/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 3 de abril de 2009 se registraba la entrada en esta Defensoría de una queja promovida por D. XXX, vecino de la ciudad de Murcia, que tiene por objeto el ruido que el reclamante, su familia y los vecinos de su entorno, llevan soportando durante cerca de dos años como consecuencia de la actividad de un café-bar ubicado en los bajos del inmueble en el que el promotor de la queja reside.

Además de solicitar de esta Institución las oportunas acciones para que cese la lesión a sus derechos fundamentales originada por el ruido, el promotor de la queja también solicita que una vez investigada por esta Defensoría la acción administrativa desplegada por el Ayuntamiento de Murcia al caso que nos ocupa, y descubiertas en su caso irregularidades en el funcionamiento de esa administración local, ponga las mismas en conocimiento del órgano competente o lo haga saber al Ministerio Fiscal. Su tercera y última petición, expresada en el escrito de queja dirigido a esta Institución, es la de accionar, llegado el caso, la exigencia de responsabilidades que prevé el artículo 33.1 de la Ley 6/2008 del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Segundo. Se acompañan a la queja varios anexos documentales con una prolija descripción de hechos y de posibles incumplimientos de la administración actuante, que el promotor de la queja sustenta en diversos documentos administrativos y de orden técnico.

Muy resumidamente, los hechos descritos en la queja son los siguientes: en septiembre de 2007 se produce la apertura en los bajos del edificio en el que tiene su vivienda el reclamante, de un café-bar regentado por una comunidad de bienes. Este café-bar está ubicado en pleno centro urbano de la capital murciana y en una zona designada por el Ayuntamiento de esta localidad como Zona de Especial Protección Medioambiental (ZEPM). Pese a que inicialmente la licencia de apertura se solicita "sin música", hubo un reiterado incumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones por la utilización en el citado local de una instalación musical carente de autorización y precisada de ella, con emisión de ruidos que incluso superaban los niveles permitidos a locales con licencia para música. Ese incumplimiento se constata no sólo con la lectura de los reiterados escritos de denuncia del reclamante, sino también del contenido de diversas denuncias-informes de la Policía Local de Murcia, de informes de una Empresa Colaboradora de la Administración (ECA) contratada al efecto por el reclamante, y de informes de la propia Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; documentación toda ella obrante en el expediente.

Esta situación se prolongó durante cerca de ocho meses, desde la apertura del local hasta su cierre temporal producido en junio de 2008; período de tiempo durante el cual se incoaron contra los infractores diversos expedientes sancionadores que, según el promotor de la queja, no han dado lugar hasta la fecha a la efectiva imposición y ejecución de ninguna resolución sancionadora por parte de la administración local. Tiempo ése en el que, además, el reclamante ha venido sufriendo

una actuación administrativa que, si nos atenemos a lo expresado en su queja, adolece de graves defectos y podría suponer una manifiesta vulneración de algunos de los principios constitucionales básicos que deben presidir la actuación de las administraciones públicas como el de interdicción de la arbitrariedad y el de eficacia administrativa. Se sostiene por el reclamante en ese sentido que se le ha negado el derecho de acceso a la información obrante en procedimientos en los que su condición de interesado resultaba incontestable, que el Ayuntamiento no ha accionado debidamente las consecuencias jurídicas previstas en la Ordenanza municipal ya citada ante los reiterados incumplimientos de quienes regentan el negocio, y que la notificación de los procedimientos sancionadores a los infractores ha sufrido dilaciones indebidas.

Con fecha 20 de febrero de 2009 el local vuelve a abrir sus puertas al público, ahora ya con la oportuna licencia para la instalación musical, pese a la oposición expresada por el reclamante y su comunidad de propietarios con la interposición del oportuno recurso administrativo contra ese acto de la administración local. Ello no obstante, el reclamante expone en su queja que desde la citada fecha, al frecuente incumplimiento de los horarios de cierre hay que sumar la superación de los límites de ruido establecidos en la antes citada ordenanza municipal, superación de la que de nuevo queda constancia en sendos informes emitidos por una ECA, tras las correspondientes mediciones realizadas a instancia del reclamante en dos días distintos del pasado mes de marzo.

Tercero. El día 4 de mayo de 2009 se acusó recibo de la queja, adoptando por esta Institución la decisión de admitirla a trámite. Comunicada esa circunstancia al reclamante, fue practicado en esa misma fecha el necesario requerimiento de información al Ayuntamiento de Murcia.

Antes de la llegada del informe municipal a esta Institución, el promotor de la queja remite un nuevo escrito, al que adjunta un acta notarial de presencia que incorpora un informe técnico de medida de inmisión de ruidos elaborado por una ECA. Este documento notarial con su informe incorporado es remitido al Ayuntamiento de Murcia como complemento al anterior requerimiento de información realizado por esta Defensoría.

Con fecha 17 de junio de 2009 el Ayuntamiento remite su informe. En el mismo se reconoce expresamente que son diversos los informes de la Policía Local y de la Inspección municipal en los que se constata la infracción reiterada por parte del café-bar al incumplir las condiciones de su licencia, lo que dio lugar a la incoación de diversos expedientes sancionadores, alguno de los cuales caduca "al resultar infructuosos los intentos de notificación de la propuesta de sanción" y "no poderse efectuar la notificación de la resolución dentro del plazo máximo previsto legalmente". Esa circunstancia, según expresa el informe del Ayuntamiento de Murcia, llevó a esta administración a la incoación de un nuevo procedimiento sancionador que, así se afirma, se ha resuelto con la imposición de una multa de 3.000 euros a los infractores.

El informe del Ayuntamiento alude además en su parte final a la efectiva concesión de la licencia para la instalación de la actividad con música (11 de diciembre de 2008) y al otorgamiento de licencia de apertura e inicio de funcionamiento de la actividad de café-bar con música (19 de febrero de 2009); licencias ésas que determinaron la reapertura del local y la nueva formulación de diversas denuncias vecinales que de nuevo tienen por objeto el ruido generado en aquel café-bar. El informe expresa asimismo que tras esas denuncias se han iniciado nuevos expedientes de disciplina ambiental y nuevas inspecciones de los servicios municipales en las que se ha puesto de manifiesto el efectivo cumplimiento de la normativa de ruido, pero que, dada la existencia y el contenido de diversos informes aportados por los vecinos que fueron realizados por una ECA con posterioridad a la concesión de la licencia, han decido supeditar cualquier

decisión sobre los extremos debatidos al resultado de un nuevo informe que debería elaborar la Sección de Inspección de Actividades de aquel Ayuntamiento, con el que se debe acreditar el incumplimiento –o no– de la normativa de ruido.

Cuarto. El citado informe municipal es trasladado al promotor de la queja, que vuelve a registrar nuevo escrito en esta Institución (28 de julio de 2009) manifestando que aquel contiene manifestaciones falsas, inexactitudes y omisiones. El reclamante afirma que el informe municipal no sólo no contradice nada de lo expresado en su queja registrada en esta Defensoría, sino que además no ofrece explicaciones que fundamenten la actuación del Ayuntamiento en todo este asunto y que la única información nueva y relevante que aporta no hace más que evidenciar nuevos incumplimientos de la administración local.

Quinto. Por último, y ya para acabar con este relato de los hechos, con fecha 11 de septiembre de 2009 el promotor de la queja aporta a este expediente el informe emitido por la antes aludida Sección Técnica de Actividades, que adjunta el estudio de una ECA contratada por el Ayuntamiento de Murcia, en el que se confirma que, efectivamente, los niveles de ruido transmitidos a la vivienda del reclamante por el café-bar colindante superan los niveles máximos permitidos por la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Murcia, y que el aislamiento de ese local respecto a la vivienda del reclamante incumple asimismo los valores de transmisión de los niveles de ruido fijados en la precitada Ordenanza.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Como ya hemos expresado con ocasión de la tramitación y resolución de otras quejas ciudadanas en las que el ruido era el objeto esencial de reclamación, si bien es cierto que en nuestro texto constitucional no existe un título competencial específico sobre el ruido, el soporte constitucional de estas quejas es amplio y está constituido por diversos preceptos. El ruido puede afectar a derechos fundamentales como los consagrados en los artículos 10 (libre desarrollo de la personalidad), 15 (integridad física y moral), 18 (intimidad personal y familiar e inviolabilidad domiciliaria), 19 (libertad de elección de residencia) y 33 (propiedad privada). Ya dentro de los principios rectores de la política social y económica, también cabe citar en este punto el artículo 45 de nuestra Constitución que al establecer el derecho de todos a un medio ambiente adecuado, implica en el asunto que nos ocupa el derecho a gozar de un medio ambiente acústicamente no contaminado, tal y como ha sido puesto de relieve por la jurisprudencia. El artículo 43 aborda el derecho a la salud, que puede asimismo verse seriamente afectada por el ruido, y que es una de las mayores preocupaciones expuestas por el promotor de la queja en los diversos escritos que obran en el expediente. Finalmente, la contaminación acústica puede incidir en el derecho a una vivienda digna y adecuada que consagra en el artículo 47 de la Constitución Española. En definitiva, en mayor o menor grado y con más o menos determinación, todos esos derechos constitucionales que acaban de citarse han sido traídos a colación por el reclamante para legitimar y fundamentar su queja.

Tercera. Como puede deducirse de la lectura de los antecedentes fácticos, en la queja se contienen aspectos más sustantivos, relacionados con la incidencia del ruido en los derechos fundamentales del reclamante, combinados con otros de naturaleza más formal. La normativa aplicable a

la cuestión más sustantiva objeto de queja está constituida por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; por la Ley 1/95, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, por el Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido y por la Ordenanza Municipal de sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de Murcia. Como hemos dicho, la queja también pone de relieve determinados incumplimientos por parte de la administración local actuante que, pese a tener una naturaleza más formal que sustantiva, son asimismo importantes por cuanto afectan a relevantes derechos fundamentales. A ese respecto, por lo tanto, será de general aplicación la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que, como es sabido, dedica parte de su articulado a establecer y regular los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas; es importante también, ya en un plano más específico, aludir a la necesaria aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente.

Cuarta. El artículo 18 de la Ley 37/2003, del Ruido, que versa sobre la intervención administrativa en torno a los emisores acústicos, expresa que:

1. Las *Administraciones públicas competentes aplicarán, en relación con la contaminación acústica producida o susceptible de producirse por los emisores acústicos, las previsiones contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo* en cualesquiera actuaciones previstas en la normativa ambiental aplicable y, en particular, en las siguientes:

a) En las actuaciones relativas al otorgamiento de la autorización ambiental integrada.

b) En las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación ambiental previstas en la normativa autonómica.

c) *En las actuaciones relativas a la licencia municipal de actividades clasificadas regulada en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o en la normativa autonómica que resulte de aplicación.*

d) En el resto de autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles de producir contaminación acústica.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones públicas competentes asegurarán que:

a) *Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las tecnologías menos contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables, tomando en consideración las características propias del emisor acústico de que se trate.*

b) No se supere ningún valor límite aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en materia de servidumbres acústicas.

3. El contenido de las autorizaciones, licencias u otras figuras de intervención aludidas en los apartados precedentes podrá revisarse por las Administraciones públicas competentes, sin que la revisión entrañe derecho indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de adaptarlas a las reducciones de los valores límite acordadas conforme a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 12.1.

4. *Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de*

emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la Administración competente, si se incumple lo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo en materia de contaminación acústica.

Quinta. El artículo 6 de esa mencionada Ley 37/2003, del Ruido, afirma que "*corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de esta Ley. Asimismo, los ayuntamientos deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta Ley y de sus normas de desarrollo*".

Parecido mandato a las administraciones locales se deriva del contenido del artículo 54 de la vigente Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. Allí se establece que: "*Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones, el Consejo de Gobierno establecerá reglamentariamente para los residuos,* ***ruidos****, vertidos y emisiones, aquellos niveles máximos y niveles guía, que en emisión e inmisión, sean pertinentes para las condiciones ambientales regionales y la calidad de vida de los ciudadanos, así como las exigencias mínimas para la reutilización de las aguas depuradas. En cualquier caso, dichos niveles serán recogidos en las distintas normativas y* ***ordenanzas municipales****".* Y, en efecto, en desarrollo y ejecución de esta ley ambiental se aprueba el Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido, que entre otras actividades somete a sus disposiciones a los establecimientos de bares con música.

Para dar cumplimiento a esos mandatos legales, el Ayuntamiento de Murcia elabora y aprueba la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones (BORM 19/05/2000).

El art. 2 de esta Ordenanza contempla su ámbito de aplicación, expresando que: "*Quedan sometidas a las prescripciones de esta Ordenanza toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructuras, medios de transporte y todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recreativas, musicales, de espectáculos o servicios, así como cualquier aparato, elemento, acto o comportamiento susceptible de producir ruidos o vibraciones que pueda ocasionar molestias o riesgos para la salud o que modifiquen el estado natural del ambiente circundante, cualquiera que sea su titular, promotor o responsable y lugar público o privado, abierto o cerrado en el que esté situado".*

Y, el artículo 4 expresa que: "*las normas de la presente Ordenanza son de obligado cumplimiento, sin necesidad de un previo acto de requerimiento de sujeción individual, para toda actividad que se encuentre en funcionamiento, ejercicio o uso, y comporte la producción de ruidos y vibraciones molestos y peligrosos.*

Esta normativa habrá de ser exigida al momento del otorgamiento de las correspondientes licencias y autorizaciones municipales para toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructuras y todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recreativas, musicales, de espectáculos, servicios y, en general, cuantos se relacionen en la normativa sobre usos admisibles del PGOU, las Ordenanzas de Edificación y normativa ambiental y sectorial que sea de aplicación, así como para su ampliación, reforma o demolición, siempre que se proyecten, ejecuten o realicen a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza.

En todo caso, el incumplimiento o inobservancia de las referidas normas, o de las condiciones señaladas en las licencias o actos o acuerdos basados en esta Ordenanza, quedará sujeta al régimen sancionador que en la misma se establece".

Sexta. El Título II de la citada Ordenanza es el encargado de establecer los niveles de perturbación por ruido, con una completa tabla de valores límite. Y el Título V es específico para discotecas,

bares con música y otras actividades similares. Si nos atenemos a los estudios aportados por las diferentes ECAs que obran en el expediente, alguno de ellos promovido por el propio Ayuntamiento de Murcia, parece a todas luces evidente que el ruido generado por aquel local supera con creces los valores límite. En el Título VIII de esa Ordenanza, encontramos varios preceptos destinados a definir, delimitar y regular las llamadas Zonas de Especial Protección Ambiental, entre las que se encuentra el entorno en el que quedan ubicados la vivienda del reclamante y el local de negocios generador de ruido, estableciendo un tratamiento de protección reforzada frente a las fuentes generadoras de contaminación acústica. Por último, en el Título XII se regula todo el régimen de infracciones y sanciones; allí la tipificación de las infracciones es clara y no resulta difícil realizar un ejercicio de subsunción en los tipos allí recogidos de algunas de las conductas denunciadas por el reclamante. En tal sentido, dado el elevado número de denuncias formuladas, de boletines de denuncia cumplimentados por la Policía Local, de informes de ECAs donde se concluye de manera determinante la superación de los valores límite permitidos, etc., la aplicación por parte del Ayuntamiento del régimen sancionador recogido en esa Ordenanza ha sido, a juicio de esta defensoría, demasiado laxa.

Séptima. Por lo que hace a los aspectos más estrictamente formales de la queja, pero asimismo importantes como ya se dejó dicho, el promotor de la misma sostiene que se le ha denegado, o al menos se ha entorpecido haciéndolo inservible a sus intereses, el derecho de acceso a la información obrante en alguno de los expedientes incoados por la administración en el caso que nos ocupa, cuando su condición de "interesado" en el procedimiento es incontestable a tenor de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Cabe recordar que además del nítido reconocimiento que de ese derecho hace la mencionada ley de procedimiento en su artículo 35, en materia ambiental, e incluso más específicamente en materia de contaminación acústica la propia Ley 37/2003 del ruido, en ese ámbito de la información expresa que: "*Las Administraciones públicas competentes informarán al público sobre la contaminación acústica y, en particular, sobre los mapas de ruido y los planes de acción en materia de contaminación acústica. Será de aplicación a la información a la que se refiere el presente apartado la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el Derecho de Acceso a la Información en Materia de Medio Ambiente".* Una remisión ésta que tras la derogación de la citada Ley 38/1995 habrá que entender hecha a la actualmente en vigor Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente. Ley que en su artículo 3 regula los derechos en materia de medio ambiente en relación con el acceso a la información, y en su artículo 5 establece un conjunto de obligaciones generales de las administraciones públicas en materia de información ambiental. Derechos y obligaciones éstos que el Ayuntamiento de Murcia viene obligado a garantizar y a cumplir.

Octava. Además de la aplicación al caso que nos ocupa de toda la normativa analizada, es de necesaria referencia a la cuestión objeto de análisis el informe especial sobre contaminación acústica realizado por el Defensor del Pueblo de España en 2005. Allí se advierte que, en efecto, son muy comunes las quejas ciudadanas relacionadas con la contaminación acústica, destacando que más de 27% de las quejas por focos de ruido tienen relación con bares y *pubs.* Aunque de ese informe podríamos traer a colación multitud de fundamentadas reflexiones realizadas por el Defensor del Pueblo de España, queremos destacar las siguientes: "*La actividad ruidosa que viene funcionando sin disponer de licencia municipal puede ser clausurada sin más trámite que la previa audiencia al titular de la actividad. Generalmente, en este caso, no es suficiente que una inspección se limite a advertir al titular sobre las molestias, notoriamente cuando han sido denunciadas. Se recomienda, en todo caso,*

levantar acta y cursar formal e inmediatamente un requerimiento con apercibimiento. Pero advertido el titular de que no se le va a otorgar licencia si no adopta las medidas correctoras, si éste sigue desarrollando su actividad en las mismas condiciones entonces se recomienda la clausura sin más trámite, en su caso forzosa". Esta es la reproducción literal de una de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo de España dirige a las administraciones locales en el citado informe.

Otra de sus conclusiones, recogidas en ese informe, es del siguiente tenor*: "Si en un establecimiento ruidoso, público o privado, queda constatada la superación de los niveles máximos de ruido, ha de procederse a decidir sobre la clausura provisional de la actividad ruidosa, ponderada e inmediatamente, entretanto se decide sobre las medidas correctoras y éstas se ejecutan".*

Por último, y dado que es numerosa la doctrina científica y la jurisprudencia que viene a sostener que la problemática del ruido no es otra cosa que un conflicto entre bienes jurídicos protegidos: medio ambiente, salud, intimidad personal y familiar, libertad de empresa, derecho al ocio, etc., conviene destacar la siguiente reflexión: "*Por último, y dado que el Defensor del Pueblo admite la necesidad de compatibilidad o coexistencia entre el ambiente sonoro adecuado y ciertas actividades ruidosas, siempre que éstas sean legítimas. Pero también que la solución a la contaminación acústica debe pasar por la cancelación o suspensión de un evento o actividad como recurso subsidiario de la reducción o eliminación del ruido por otros medios, o como recurso directo en casos extremos. En todo caso, la protección jurídica del evento o actividad no alcanza a la producción de ruido excesivo. El derecho al descanso es fundamental, luego no se da esa deseable compatibilidad si quien nada tiene que ver con el evento o actividad no puede disfrutar de un ambiente silencioso; y no hay ninguna compatibilidad si nada ha sido hecho por los organizadores, promotores, titulares de las instalaciones o por quienes van a beneficiarse de su desarrollo o son simples usuarios, para prever el riesgo ni paliar la contingencia. Estas asimetrías deben ser evitadas por las administraciones públicas".*

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes

RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

En virtud de lo establecido en la normativa examinada sobre ruido y medio ambiente y del contenido de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Murcia, este Ayuntamiento debería emitir una resolución que obligue a los infractores a ejecutar las obras necesarias para una efectiva insonorización de su local de negocios, supervisando con posterioridad la efectividad de las mismas; aplicando así de manera más decidida y con más rigor el régimen de infracciones y sanciones del que se ha dotado en la citada ordenanza, y no permitiendo la puesta en funcionamiento de este café-bar hasta tanto no quede absolutamente acreditada la sujeción a la norma del mismo.

En cumplimiento de la prevenido tanto en la 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, esa administración local viene obligada a facilitar el acceso a los ciudadanos a la información de naturaleza ambiental que obre en su poder.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las

razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 211/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El pasado mes de mayo del presente año tenía entrada en esta Defensoría una queja de Dª. XXX, vecina del municipio de San Javier, en la que manifestaba su disconformidad con el lugar elegido por el Ayuntamiento de dicha localidad para la celebración, durante los días 14 y 15 de agosto, del denominado IV Festival Leyendas del Rock, organizado por una empresa privada y patrocinado, entre otros, por el propio Ayuntamiento de San Javier. Se trata de las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria "*Joaquín Carrión Valverde*", centro educativo ubicado en el núcleo urbano de la referida localidad, y próximo al lugar de residencia de la reclamante.

Segundo. La promotora de la queja viene a afirmar en su escrito que no tiene objeciones que hacer a la celebración en este municipio de ese festival musical, pero que debería haberse habilitado por el Ayuntamiento un emplazamiento más adecuado a las afueras de núcleo urbano de San Javier. Se evitaría de ese modo que una zona cuyo uso urbanístico predominante es el residencial tenga que soportar durante dos días, sin incluir el tiempo propio del montaje y desmontaje de escenarios y equipos precisos para el desarrollo de ese evento, las consecuencias derivadas de una actividad que genera, entre otras molestias, ruidos y vibraciones.

Tercero. Admitida a trámite la queja, a la que se asigna el nº. de expediente Q-0211/2009, comunicada tal circunstancia a la promotora de la misma, y habiendo requerido en esa fecha al Ayuntamiento de San Javier que informase por escrito a esta Defensoría sobre la posibilidad de celebrar el festival de rock en un lugar donde no cause molestias a los vecinos; esta Defensoría recibe dos comunicaciones posteriores relacionadas con el expediente referido. En la primera de ellas, remitida por la propia promotora de la queja, ésta nos hace llegar copia de varios pliegos de firmas que incluyen la petición de cerca de 700 vecinos de San Javier, instando a su Ayuntamiento a que cambie el lugar de celebración del señalado evento por otro ubicado fuera del casco urbano de su municipio. De otro lado, apenas una semana después, el 30 de junio de 2009, se recibe en esta Defensoría una comunicación firmada por la Alcaldesa de la localidad. En la misma se incluyen varias informaciones y algunas consideraciones en torno a la problemática descrita. De un lado, se afirma que en el Ayuntamiento que preside se han recibido dos escritos, uno rechazando y otro apoyando la ubicación del festival musical, que el primero está avalado por 690 firmas, gran parte de ellas de personas que residen en otros barrios y localidades ajenos a la problemática, y el segundo viene suscrito por 1.080 firmas de todo el municipio. También se sostiene que la ubicación elegida es la que desde hace siete años ha viendo siendo utilizada para los conciertos musicales por la Concejalía de Juventud de su Ayuntamiento, siendo la primera vez que le constan quejas vecinales al respecto, que el evento se desarrollará durante un fin de semana festivo donde la mayoría de la gente está de vacaciones, y, por último, que el equipo de gobierno de San

Javier considera que el citado colegio es, entre los lugares disponibles, el más idóneo para realizar este evento y el que menos molestias puede causar al vecindario.

Cuarto. No consta si, dada la utilización de dependencias e infraestructuras educativas públicas para la realización del señalado evento en horario extraescolar y por personas, empresas o entidades ajenas a su ámbito, se han cursado por parte de los organizadores las oportunas solicitudes a la comunidad educativa del centro, y, en su caso, a las autoridades educativas competentes, tal y como exige el Reglamento de Régimen Interno del mencionado centro educativo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida en el ámbito de nuestra Ley Fundamental por el art. 45.2 de la Constitución Española de 1978, que, en sede de los principios rectores de la política social y económica, vincula a los poderes públicos a la defensa del medio ambiente. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado implica el derecho a gozar de un medio ambiente acústicamente no contaminado. Así, tal y como afirma de modo tajante el Auto del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1989 (Aranzadi RJ 1989/3867): "*el sistema jurídico del medio ambiente se integra de diversos subsistemas, entre ellos el de la lucha contra la contaminación de cualquier tipo, incluida la acústica*". La contaminación acústica también tiene asimismo conexión con el art. 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud, aludiendo a las medidas preventivas que deben desplegar los poderes públicos para hacerlo efectivo. Es evidente que están suficientemente demostrados los efectos nocivos que el ruido provoca en la salud de las personas.

Pero además, pese a la carencia de un título competencial específico sobre el ruido en la Constitución Española, son ya numerosas las sentencias (v.g. STC de 24 de mayo de 2001) en las que se argumenta que la exposición a niveles intensos de ruido, al poner en peligro la salud de las personas, pueden implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral garantizado en el art. 15 de la Constitución Española. En esta misma sentencia se sienta una doctrina según la cual los efectos del ruido sobre la convivencia ciudadana pueden constituir fundamento para una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a las administraciones públicas. Y, por último, en esa misma sede de derechos fundamentales, cabe traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el conocido caso López Ostra *vs* Reino de España, donde básicamente se llega a afirmar que los ruidos ilegítimos implican una invasión del ámbito de la privacidad que atacan a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad, dos derechos fundamentales que tiene una reforzada cobertura constitucional en el art. 18 de la nuestra Carta Magna.

Tercera. La aún vigente Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, establece en su artículo 54 que: "*Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones, el Consejo de Gobierno establecerá reglamentariamente para los residuos, ruidos, vertidos y emisiones, aquellos niveles máximos y niveles guía, que en emisión e inmisión, sean pertinentes para las condiciones ambientales regionales y la calidad de vida de los ciudadanos, así como las exigencias mínimas para la reutilización de las aguas depuradas. En cualquier caso, dichos niveles serán recogidos en las distintas normativas y ordenanzas municipales*". En cumplimiento de ese mandato

legal, el Ayuntamiento de San Javier elabora y aprueba la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones (BORM 4/09/07). Esta Ordenanza tiene por objeto, según se especifica en su art. 1: la intervención municipal para la protección de los ciudadanos y del medio ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones en el Término Municipal de San Javier. Su ámbito de aplicación, expresado en el art. 2, se extiende también a cualquier tipo de acto susceptible de producir ruidos o vibraciones que puedan ocasionar molestias o riesgos para la salud o que modifiquen el estado natural del ambiente circundante, cualquiera que sea su titular, promotor o responsable y lugar público o privado, abierto o cerrado en el que esté situado. Se sostiene asimismo (art. 2.3) que en los trabajos de organización de todo tipo de actividades y servicios, deberá contemplarse su incidencia en cuanto a ruidos y vibraciones, para que las soluciones y/o planificaciones adoptadas proporcionen el nivel más elevado de calidad de vida.

El art. 8 de la precitada Ordenanza establece unas limitaciones de los niveles de perturbación por ruido en el ambiente exterior, con exigencias variables en función del uso del suelo, siguiendo así de ese modo las indicaciones sobre calidad acústica contenidas en el Capítulo II de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que en su art. 7 sostiene que las áreas acústicas se clasificarán en atención al uso predominante del suelo: *a)* los sectores del territorio con predominante uso residencial; *b)* los sectores con predominante uso industrial; *c)*los sectores con predominante uso recreativo y de espectáculos; *d)* los sectores con predominante uso terciario distinto del anterior; *e)*los sectores con usos predominantemente sanitario, docente y cultural si se requiere una especial protección contra el ruido; *f)* los sectores afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que lo precisen; y *g)* los espacios naturales que requieran especial protección contra el ruido.

Parece evidente que la Ordenanza de San Javier, como por otro lado es lógico, es bastante exigente con los niveles de ruido permitido cuando el uso del suelo es residencial, no tolerando (art. 8) niveles sonoros por encima de 65 dB (A) durante el día y de 55dB (A) durante la noche. Otro tanto sucede respecto de las vibraciones (art. 11), con unos valores tolerados en áreas de uso residencial bastante exigentes si los comparamos con los permitidos en áreas industriales o comerciales.

A pesar de lo dispuesto en el art. 12 de la referida Ordenanza: "*Ante situaciones especiales, tales como las celebraciones de actos de carácter oficial, cultural, religioso, festivo, etc. que sean objeto de regulación específica o estén exentas del cumplimiento de las limitaciones de los niveles sonoros máximos fijados en esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá adoptar e imponer las medidas necesarias para modificar con carácter temporal en determinadas vías o sectores de la ciudad los niveles señalados en los artículos precedentes*", parece evidente que un concierto de música rock, como el que se desarrollará en los próximos días, no encuentra su mejor ubicación –en la lógica de esta ordenanza– en una zona de San Javier que tiene un uso residencial predominante. Así, el urbanismo, como política pública, es una de las más eficaces herramientas para la prevención del ruido si desde las áreas municipales competentes se implementan medidas de distribución racional de los diferentes usos urbanos.

Cuarta. De otro lado, y como efectivamente se podría deducir de esta queja, es numerosa la doctrina científica y la jurisprudencia que viene a sostener que la problemática del ruido no es otra cosa que un conflicto entre bienes jurídicos protegidos. Ya hemos citado algunos: medio ambiente, salud, intimidad personal y familiar, libertad de empresa, derecho al ocio, etc. A este respecto, y estando básicamente de acuerdo con la afirmación que el Defensor del Pueblo de España realiza en su Informe Especial sobre Contaminación Acústica (Madrid 2005): *"…la solución a la contaminación*

acústica casi nunca debería pasar por la cancelación de un evento ruidoso sino en casos extremos", es cierto no obstante que el interés jurídico prevalente o más digno de protección es el derecho ciudadano al descanso y a la no recepción de ruidos molestos. Y es sobre la lógica de esa prevalencia, y no sobre la comparación de firmas a favor o en contra del evento, donde debiera descansar la decisión del Ayuntamiento de San Javier.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN

Dado el conflicto de derechos y bienes jurídicos suscitado, dada asimismo la prevalencia de los derechos ciudadanos a la salud, al medio ambiente y a la intimidad personal y familiar, y con el ánimo de compatibilizar los derechos en conflicto, cuya coexistencia no es imposible, sería conveniente que el gobierno municipal de San Javier procediera a la búsqueda y habilitación de un lugar alternativo, suficientemente alejado de los núcleos residenciales, para la celebración del IV Festival Leyendas del Rock.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, DIRIGIDA LA AYUNTAMIENTO DE TOTANA, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 216/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 25 de mayo de 2009 se registraba la entrada en esta Defensoría de una queja promovida por D. XXX, vecino del municipio de Totana, que tiene por objeto el ruido que el reclamante lleva soportando durante cerca de seis años como consecuencia de la actividad de una cafetería ubicada en un inmueble contiguo al de su residencia.

A la queja se anexan copias de varios documentos de índole diversa: formularios de queja cumplimentados por el reclamante y dirigidos a la Alcaldía de Totana con una sucinta descripción del problema, varias fotografías que ilustran gráficamente la problemática que padece este ciudadano, oficios dirigidos por la Oficina del Defensor del Vecino de Totana a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente de aquella administración local tendentes a que se adopten por parte de la misma las medidas oportunas para corregir el problema, copia de un documento extraído de un expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento de Totana en la que consta que se concede licencia para "ampliación de cafetería" con la advertencia de que esa actividad "en ningún momento puede tener más música que la ambiental", señalando expresamente que si "se demostrase que el nivel sonoro existente es superior a este tipo de música procedería el cierre inmediato de la actividad", copia de algunas actas de la Policía Local de Totana donde se recogen los resultados de diversas mediciones sonoras realizadas en el domicilio del reclamante, copias de diversos documentos extraídos de un expediente urbanístico en el que se da cuenta de la suspensión de la tramitación de la oportuna licencia de apertura del local referido por incumplimiento de las condiciones urbanísticas recogidas en el planeamiento municipal, y, por últi-

mo, copia de varias historias clínicas en las que se recogen cuadros de ansiedad y otras dolencias padecidos por el reclamante y promotor de esta queja.

Segundo. El día 2 de junio de 2009 se acusó recibo de la queja, adoptando por esta Institución la decisión de admitirla a trámite; circunstancia que se comunica al reclamante, practicando, en esa misma fecha, el necesario requerimiento de información al Ayuntamiento de Totana.

El preceptivo informe de aquella administración local llega a esta Defensoría el día 4 de noviembre, cinco meses después de haber sido requerido por primera vez, y tras haber practicado hasta tres requerimientos; en el último de los cuales se recordaba a aquel ayuntamiento el deber legal de colaboración que tiene toda administración pública respecto a las investigaciones que realiza el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, apercibiéndole de que la persistencia en la no remisión del informe requerido podría calificarse de hostil o entorpecedora, y de que tales circunstancias eran susceptibles de ser reflejadas en el informe anual que esta Institución debe presentar a la Asamblea Regional de Murcia.

Entretanto se esperaba la remisión del informe del Ayuntamiento de Totana, y dado que todo requerimiento girado a aquella administración local era comunicado al promotor de la queja, éste volvió a remitir a esta Defensoría dos nuevos escritos que reiteran el problema planteado y que, asimismo, iban acompañados de nuevos documentos, entre ellos, diversos escritos dirigidos a la Alcaldía de Totana reivindicando una solución urgente a su problema, y la copia de un acta de la Policía Local con fecha de 20 de septiembre del presente año, en la que se recoge una nueva medición sonora realizada en el domicilio del reclamante.

Tercero. El informe remitido por el Ayuntamiento de Totana es escueto, limitándose a señalar que los servicios municipales correspondientes han procedido a realizar varias mediciones de ruidos procedentes de la actividad afectada y a incoar los respectivos expedientes sancionadores. A ese informe se acompañan copia de dos resoluciones de la Alcaldía de Totana, ambas de 22 de octubre de 2009, mediante las que se procede a incoar sendos expedientes sancionadores contra los responsables del local por "sobrepasar en más de 10 dB (A) los límites admisibles de nivel sonoro fijados por la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones", hechos que, así se expresa en ambas resoluciones, están tipificados como infracción grave en el artículo 52 d) de la citada Ordenanza y en el artículo 72.2 de la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. Cabe señalar que ambos expedientes traen causa de dos escritos de la Policía Local de Totana que acompañaban otras tantas actas de medición sonora realizadas en la vivienda del promotor de esta queja con fechas 20/09/09 y 03/10/09.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La entrada de quejas en esta Institución relacionadas con la contaminación acústica y sus negativos efectos sobre una variada gama de importantes derechos constitucionales, algunos ubicados en la sección, título y capítulo de nuestra Ley Fundamental que más reforzadas garantías de protección ofrece, es más abundante de lo que sería deseable. Podría decirse que, hoy por hoy, el ruido es uno de los mayores motivos de queja ciudadana que llegan a esta Institución.

Buena parte de estas quejas traen causa de la actividad, muchas veces carente de las licencias y autorizaciones preceptivas, de bares, cafeterías y otros locales con música, ubicados en el centro de los pueblos y las ciudades de nuestra Región. El ruido, como ya hemos tenido ocasión de manifestar en la resolución de otras quejas, puede afectar a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el libre desarrollo de la personalidad (art. 10), la integridad física y moral (art. 15), la intimidad personal y familiar e inviolabilidad domiciliaria (art. 18), la libertad de elección de residencia (art. 19) y la propiedad privada (art. 33). Ya dentro de los principios rectores de la política social y económica, cabe citar el artículo 45 de nuestra Constitución, que al establecer el derecho de todos a un medio ambiente adecuado, implica, en el asunto que nos ocupa, el derecho a gozar de un medio ambiente acústicamente no contaminado, tal y como ha sido puesto de relieve por la jurisprudencia. El artículo 43 aborda el derecho a la salud, que puede asimismo verse seriamente afectada por el ruido, y que es una de las mayores preocupaciones del promotor de la queja, tal y como se desprende de los escritos y documentos que obran en el expediente. Finalmente, la contaminación acústica puede incidir en el derecho a una vivienda digna y adecuada que consagra en el artículo 47 de la Constitución Española.

Tercero. Como se ha adelantado, esta Defensoría ya ha tenido ocasión de pronunciarse ante casos que guardan, por su similitud, una muy estrecha relación con el asunto que ahora ventilamos; en ellos se vulneran los mismos derechos fundamentales antes citados, suelen ir precedidos de un cúmulo importante de denuncias y escritos de los afectados que, en el mejor de los casos, se saldan con la incoación de expedientes sancionadores que se eternizan en su resolución y que no van acompañados de medidas provisionales que garanticen la cesación del ruido, frecuentemente aparecen ligados a irregularidades de carácter urbanístico, y, casi siempre, les son de aplicación las mismas normas jurídicas: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; Ley 1/95, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia; Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido, y las ordenanzas municipales sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de las que, con parecida factura y a veces con idéntico articulado, se han ido dotando los municipios de nuestra región.

En el caso que nos ocupa, el artículo 47 de la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra el Ruido de Totana tipifica como infracción grave sobrepasar en más de 10 dB (A) los límites admisibles de nivel sonoro fijados en la misma. Cuando ello sucede –y efectivamente ha sucedido en este caso como queda acreditado en las mediciones sonoras realizadas por la Policía Local de Totana– el artículo 49 de esa ordenanza afirma que se podrán imponer al responsable, entre otras sanciones, la de la clausura temporal, total o parcial de la actividad. Asimismo, el artículo 50 de la misma norma dice textualmente que: "*Sin perjuicio de lo previsto anteriormente y de las sanciones que sean pertinentes, podrá ser causa del precintado inmediato de la actividad, instalación o aparato el superar en más de 10 dB (A) los límites de niveles sonoros establecidos en la presente Ordenanza*".

Son las consecuencias jurídicas de una infracción que, como es el caso, no pasan del papel de las ordenanzas y no suelen ser ejecutadas por las administraciones locales llamadas a hacerlo. Unas administraciones que a veces, ante ese conflicto entre diversos bienes jurídicos protegidos: medio ambiente, salud, intimidad personal y familiar, frente a libertad de empresa, y derecho al ocio, suelen decantarse a menudo por estos últimos.

Cuarto. Sobre la base de una doctrina que se va consolidando en esta Institución, y que se apoya en la prevalencia frente a otros derechos del derecho ciudadano al descanso y a la no recepción de ruidos molestos, nuestra Institución ha venido

dando respuesta a las quejas planteadas con ese objeto. Así se hizo con la resolución, a la que ahora nos remitimos en su fundamentación, que esta Defensoría emitió con ocasión de la queja, muy similar a la que ahora nos ocupa, con expediente nº 157/2009. En esa resolución, y en virtud del contenido de la ordenanza municipal sobre ruido vigente en el municipio de Murcia, instábamos al Ayuntamiento de esa localidad a que dictase una resolución obligando a los infractores a ejecutar obras para la efectiva insonorización de su local, no permitiendo el funcionamiento del mismo hasta tanto quedase acreditado su sujeción a la norma.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TOTANA

En virtud de lo establecido en la normativa citada sobre ruido y medio ambiente y del contenido de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Totana, este Ayuntamiento debería adoptar como medida provisional en los expedientes sancionadores incoados al efecto, la clausura temporal de la actividad en tanto en cuanto no se adoptan las medidas correctoras pertinentes.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 436/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 2 de octubre de 2009 se registraba la entrada en esta Defensoría de una queja promovida por D. XXX, vecino del municipio de Santomera, que tiene por objeto el ruido que vienen obligados a soportar el reclamante, su familia y los vecinos que residen en su entorno, como consecuencia de la actividad de una cafetería con música ubicada en los bajos del inmueble en el que reside. Se trata de una queja que guarda mucha similitud con otras ya resueltas por este Defensoría, y donde vuelven a repetirse hechos y circunstancias comunes: existencia de locales musicales con carencias en las oportunas licencias y permisos, extralimitación tanto en niveles de ruido ambiental como en horarios de cierre, cierta laxitud en la aplicación por parte de las autoridades en la aplicación del ordenamiento jurídico protector frente al ruido, y efectos parecidos en todos los casos, toda vez que se repite una merma sensible en el derecho a la salud y en la calidad de vida de quienes residen en esos entornos urbanos en los abundan este tipo de establecimientos hosteleros.

A la queja se anexan copias de varios documentos: diversos escritos de denuncia formulados por el reclamante y registrados en el Ayuntamiento de Santomera dirigidos a la Alcaldía en los que se pone de manifiesto la problemática padecida y se exige la adopción de las medidas oportunas tendentes al cese de las molestias, copia de una diligencia de

comparecencia ante el Puesto Principal de la Guardia Civil de esa localidad en la que básicamente se reproduce la misma argumentación que en los escritos dirigidos al ayuntamiento, con referencias a los efectos que el ruido está ocasionado en los derechos a la salud y al descanso de los vecinos, y, por último, copia de dos informes médicos, uno clínico y otro psiquiátrico, en los que se reflejan determinadas patologías de un familiar del promotor de la queja, que éste asocia a la influencia del ruido.

Segundo. El día 2 de octubre de 2009 se acusó recibo de la queja, adoptando por esta Institución, el día 16 de ese mismo mes, la decisión de admitirla a trámite; circunstancia que se comunica al reclamante, practicando, en esa misma fecha, el necesario requerimiento de información al Ayuntamiento de Santomera.

Tercero. El preceptivo informe de aquella administración local, suscrito por el Alcalde del municipio, llega a esta Defensoría el pasado día 24 de noviembre. En él se señala que, en efecto, y tal y como denuncia el promotor de la queja, el establecimiento hostelero en cuestión cuenta con licencia para el ejercicio de su actividad "sin música", concedida por Decreto en junio de 2008, y que con motivo de las denuncias vecinales se procedió a la apertura de diligencias informativas en noviembre de 2008, de las que resultó el incumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de apertura en lo referente al uso de aparatos musicales y horario de cierre. Como consecuencia de ello –se expresa en el informe– se acuerda en diciembre de ese mismo año la imposición de medidas correctoras con un plazo para su ejecución de tres meses. Transcurrido el plazo, y habida cuenta de que las medidas impuestas no se han llevado a efecto, la Junta de Gobierno Local de aquel municipio, en sesión de 19 de junio de 2009, decidió incoar expediente sancionador medioambiental al citado establecimiento, por incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de apertura, expediente éste que aún está en trámite y pendiente de resolución. Se expresa, por último, que los dueños del citado local solicitan, en abril de 2009, cambio de titularidad del negocio y ampliación de la actividad a cafetería con música, presentando el proyecto de adecuación al efecto aún pendiente de la necesaria calificación ambiental por parte de la administración autonómica.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La entrada de quejas en esta Institución relacionadas con la contaminación acústica y sus negativos efectos sobre una variada gama de importantes derechos constitucionales, algunos ubicados en la sección, título y capítulo de nuestra Ley Fundamental que más reforzadas garantías de protección ofrece, es más abundante de lo que sería deseable. Podría decirse que, hoy por hoy, el ruido es uno de los mayores motivos de queja ciudadana que llegan a esta Institución.

Buena parte de estas quejas traen causa de la actividad, muchas veces carente de las licencias y autorizaciones preceptivas, de bares, cafeterías y otros locales con música, ubicados en el centro de los pueblos y las ciudades de nuestra Región. El ruido, como ya hemos tenido ocasión de manifestar en la resolución de otras quejas, puede afectar a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el libre desarrollo de la personalidad (art. 10), la integridad física y moral (art. 15), la intimidad personal y familiar e inviolabilidad domiciliaria (art. 18), la libertad de elección de residencia (art. 19) y la propiedad privada (art. 33). Ya dentro de los principios rectores de la política social y económica, cabe citar el artículo 45 de nuestra Constitución, que al establecer el derecho

de todos a un medio ambiente adecuado, implica, en el asunto que nos ocupa, el derecho a gozar de un medio ambiente acústicamente no contaminado, tal y como ha sido puesto de relieve por la jurisprudencia. El artículo 43 aborda el derecho a la salud, que puede asimismo verse seriamente afectada por el ruido, y que es una de las mayores preocupaciones del promotor de la queja, tal y como se desprende de los escritos y documentos que obran en el expediente. Finalmente, la contaminación acústica puede incidir en el derecho a una vivienda digna y adecuada que consagra en el artículo 47 de la Constitución Española.

Tercera. Como se ha adelantado, esta Defensoría ya ha tenido ocasión de pronunciarse ante casos que guardan, por su similitud, una muy estrecha relación con el asunto que ahora ventilamos; en ellos se vulneran los mismos derechos fundamentales antes citados, suelen ir precedidos de un cúmulo importante de denuncias y escritos de los afectados que, en el mejor de los casos, se saldan con la incoación de expedientes sancionadores que se eternizan en su resolución y que no van acompañados de medidas provisionales que garanticen la cesación del ruido, frecuentemente aparecen ligados a irregularidades de carácter urbanístico, y, casi siempre, les son de aplicación las mismas normas jurídicas: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; Ley 1/95, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia; Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido, y las ordenanzas municipales sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de las que, con parecida factura y a veces con idéntico articulado, se han ido dotando los municipios de nuestra región.

Cuarta. Sobre la base de una doctrina que se va consolidando en esta Institución, y que se apoya en la prevalencia frente a otros derechos del derecho ciudadano al descanso y a la no recepción de ruidos molestos, nuestra Institución ha venido dando respuesta a las quejas planteadas con ese objeto. Así se hizo con la resolución, a la que ahora nos remitimos en su fundamentación, que esta Defensoría emitió con ocasión de la queja, muy similar a la que ahora nos ocupa, con expediente nº 157/2009. Otro tanto cabría decir de la resolución del expediente nº 216/2009. En ambas resoluciones, y en virtud del contenido de sus respectivas ordenanzas municipales sobre ruido y otras normas de aplicación, instábamos a los ayuntamientos de esas localidades a que dictasen sendas resoluciones obligando a los infractores a ejecutar obras para la efectiva insonorización de su local, no permitiendo el funcionamiento del mismo hasta tanto quedase acreditado su sujeción a la norma.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

En virtud de lo establecido en la normativa citada sobre ruido y medio ambiente, este Ayuntamiento debería adoptar como medida provisional en los expedientes sancionadores incoados al efecto, la clausura temporal de la actividad en tanto en cuanto no se adoptan las medidas correctoras pertinentes.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

X.10. Procedimiento Administrativo

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 217/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 27 de mayo de 2009 quedó registrada la entrada en esta Institución de una queja promovida por Dª. XXX, vecina de la pedanía murciana de San Ginés, en la que básicamente manifiesta su disconformidad con la inactividad y falta de respuesta del Ayuntamiento de Alcantarilla ante una instancia dirigida frente a esa administración local. En la misma, la promotora de la queja reclamaba la responsabilidad patrimonial de esa administración local derivada de unas lesiones producidas en su persona con ocasión de un incidente ocurrido en las fiestas patronales de Alcantarilla del pasado año.

Según expone la reclamante, el 24 de mayo de 2008 asistía al tradicional desfile de carrozas que cada año, programado por su Ayuntamiento dentro de los actos culturales de las fiestas patronales, se desarrolla en Alcantarilla, cuando fue alcanzada en el rostro por un objeto lanzado por una de las carrozas participantes en el citado evento festero. Como consecuencia de ello se le ocasionaron lesiones en la frente y en la nariz que requirieron varios puntos de sutura, siendo atendida de manera inmediata por el servicio preventivo instalado al efecto por la Asamblea Local de Alcantarilla de la Cruz Roja Española, con posterior derivación a un centro de urgencias sanitarias.

Después de dirigir escrito reclamando responsabilidad tanto al Ayuntamiento de aquella localidad, como a la Federación de Peñas Festeras y Culturales de Alcantarilla, e incluso a la compañía aseguradora del citado evento, la promotora de la queja afirma que nadie se hace responsable de las consecuencias de aquel incidente.

Segundo. Se adjuntan a la queja varios documentos: la instancia formalizada que dirige al Alcalde de la citada localidad el pasado 27 de mayo de 2008, con una sucinta exposición de los hechos descritos y en la que solicita que le sean resarcidos los daños sufridos; una comunicación, fechada el 4 de junio de 2008, dirigida al Presidente de la Federación de Peñas Festeras y Culturales de Alcantarilla, con parecida descripción de hechos, y copia de otra carta, remitida a una conocida compañía de seguros el 24 de julio de 2008 con la que, según se desprende del expediente, la citada Federación de Peñas tiene suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil. También se acompaña a la queja una certificación del coordinador local de socorros y emergencias de la Cruz Roja Española en Alcantarilla, donde se pone de relieve la atención que dispensó a la reclamante el servicio preventivo de la Cruz Roja con ocasión de las lesiones sufridas por el objeto que le impactó en el rostro; otra instancia dirigida, el pasado 12 de diciembre de 2008, al Ayuntamiento de Alcantarilla a través de la que la reclamante pone de relieve que nadie se quiere hacer cargo de la responsabilidad civil; y, por último, copia de una breve y concisa comunicación que la empresa de seguros remite a la reclamante, en la que se le informa textualmente que: "la responsabilidad civil que pudiera derivarse del caso que nos ocupa, no queda cubierta en la póliza contratada con esta compañía, por lo que no procede que nos hagamos cargo de la reclamación presentada".

Tercero. El día 18 de junio de 2009 se acusó recibo de la queja, adoptando por esta Institución la decisión de admitirla a trámite. Comunicada esa circunstancia al reclamante, fue practicado en esa misma fecha el necesario requerimiento de información al Ayuntamiento de Alcantarilla.

Superado en exceso el plazo de un mes concedido al efecto para que el Ayuntamiento remitiese el preceptivo informe, se reitera a esa administración local el oportuno requerimiento de información en comunicación remitida el pasado 14 de agosto de 2009. Finalmente, el 7 de septiembre de este año se registra la entrada en esta Defensoría de una breve comunicación suscrita por la Secretaria General del Ayuntamiento de Alcantarilla, en la que, con cierta confusión, nos viene a decir que el Servicio de Cultura, Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Alcantarilla ya remitió "al adjunto segundo del Defensor del Pueblo de España" el oportuno informe, que ahora nos adjunta en ese escrito.

En ese escueto y poco fundamentado informe –de apenas tres párrafos– el Ayuntamiento de Alcantarilla expone que "el desfile de carrozas es un acto que organiza la Federación de Peñas Festeras y Culturales de Alcantarilla, siendo el Ayuntamiento colaborador en el mismo en materia de infraestructura y corte de calles para el buen funcionamiento del mismo". También se manifiesta textualmente que: "…supongo que a esta Sra. se le informaría en su momento de que debe presentar su reclamación ante la Sede de la Federación de Peñas Festeras y Culturales de Alcantarilla. No obstante, la federación de Peñas cuenta con un seguro de responsabilidad civil para estos casos, por lo que sería conveniente acudir a ellos".

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. El artículo 106 de la Constitución Española consagra el principio de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las administraciones públicas por las lesiones que reciban los particulares en sus bienes y derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Allí se afirma textualmente que: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

Se trata de un precepto constitucional desarrollado, con carácter general, por el Título X de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común; norma ésa desarrollada a su vez en esta materia por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial.

Ya en el específico ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, también es de aplicación al caso que nos ocupa, tanto en el aspecto de atribución de competencias conectadas con el supuesto de hecho que analizamos, como por lo que hace al específico ámbito de la responsabilidad extracontractual derivada del funcionamiento de los servicios públicos.

Tercera. En el artículo 139 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se expresa con claridad que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, sigue afirmando el mencionado artículo, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. El artículo 141 de la misma norma se expresa que: "sólo serán indem-

nizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos…".

De otro lado, esa misma Ley 30/92 dispone en su artículo 35 todo un conjunto de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, y, ya en el artículo 42, establece la obligación de la administración de resolver mediante resoluciones expresas en todos los procedimientos, notificando las mismas cualquiera que sea su forma de iniciación. Desde luego esta Defensoría no ve colmado ese derecho ciudadano en el caso de la queja que ahora resolvemos. Y ello a tenor de la documentación obrante en el expediente y, sobre todo, si nos detenemos en el análisis de la respuesta que nos ofrece aquella administración local mediante el preceptivo informe que deben remitir a esta Institución en el que, carente de la más mínima fundamentación jurídica, textualmente se afirma que "… supongo que a esta Sra. se le informaría en su momento de que debe presentar su reclamación ante la Federación de Peñas Festeras…".

Cuarta. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que tanto la seguridad en lugares públicos (art. 25.2 a), como la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas vías públicas (art. 25.2 b), como las actividades culturales y la ocupación del tiempo libre (art. 25.2 m), son materias sobre las que, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, los municipios deben ejercer competencias en todo caso.

El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que "*las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa*".

Quinta. Al objeto determinar si el supuesto de hecho que tenemos planteado podría ser subsumido en los preceptos antes reseñados, despejando así las dudas en torno a la responsabilidad del Ayuntamiento de Alcantarilla por el incidente que examinamos, traemos a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1995, en la que abordando un asunto de responsabilidad patrimonial extracontractual de una administración local se afirma: "*… tampoco puede plantearse duda alguna de que nos encontramos ante un supuesto de funcionamiento normal o anormal de un servicio público, puesto que por tal ha de entenderse el ejercicio de una competencia funcional cual es el ejercicio de actividades encaminadas al fomento turístico, tal era la finalidad del festejo organizado por el Ayuntamiento, habida cuenta que el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que* ***son servicios públicos locales cuantos tiendan a la consecución de los fines señalados como de la competencia de las Entidades Locales****, precepto que ha de ponerse en relación con el 25.2. m) del mismo Cuerpo Legal en el que se prevé como una de las* ***competencias del Municipio*** *la correspondiente a Turismo,* ***actividades culturales y tiempo libre****, no existiendo duda que la organización de los festejos en cuestión se incardinan claramente dentro de tal contexto*".

Sexta. Pero si el tenor literal de lo antes reproducido fuese insuficiente para residenciar de manera inequívoca la responsabilidad en esa administración local, el Ayuntamiento de Alcantarilla debe ser plenamente conocedor de la Sentencia número 331/2002, de 27 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictada en un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administra-

ción pública en el que ése ayuntamiento –el de Alcantarilla– era parte demandada. En él se reclamaba a esta administración pública una indemnización por los daños causados a un niño en un ojo, sufridos como consecuencia del lanzamiento de un objeto desde una carroza integrante de la Cabalgata organizada por el Ayuntamiento de Alcantarilla, como motivo de las fiestas patronales.

En esa sentencia, en su fundamento jurídico cuarto, se puede leer: "*Concurren en el presente caso los requisitos precisos para exigir responsabilidad patrimonial, teniendo en cuenta que la lesión se produjo como consecuencia del funcionamiento del servicio público, que en el caso es el de las vías públicas, materia encomendada a los Ayuntamientos por así atribuírsela el artículo 25.2 d) de la LRL (Ley 7/85 de 2 de abril), así como las actividades o instalaciones culturales y deportivas, y ocupación del tiempo libre (art. 25 m). La jurisprudencia es clara sobre el tema, pues viene diciendo reiteradamente que se integra en el ámbito del funcionamiento de los servicios públicos, a efectos de la determinación de los daños causados por su celebración, el supuesto de fiestas populares organizadas por los Ayuntamientos o patrocinadas por éstos, aun cuando la gestión de las mismas se haya realizado por comisiones o incluso por entidades con personalidad jurídica independiente incardinadas en la organización municipal (SSTS 23/2/95, 15/12/97, 4/5/98, 19/6/98 y 17/11/98)*".

El sentido del fallo es claro: el TSJ de Murcia reconoce el derecho de los actores a ser satisfechos por el Ayuntamiento de Alcantarilla con una indemnización, en concepto de daños y perjuicios, por los daños sufridos, cantidad que deberá ser incrementada con los intereses legales correspondientes, contados desde la fecha de la reclamación hasta la fecha de esta sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que, a su vez, puedan devengarse hasta el completo pago.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

En cumplimiento de la prevenido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, esa administración local viene obligada a contestar y notificar en tiempo y forma a los administrados sobre aquellos escritos y peticiones dirigidas a la misma.

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

El órgano competente de ese Ayuntamiento debería adoptar los acuerdos precisos para la iniciación de oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial en el caso que nos ocupa.

SUGERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

Habida cuenta de la reiteración de sucesos como el que origina la presente Resolución, sería aconsejable que por el Ayuntamiento de Alcantarilla se dictaran instrucciones a los responsables de los festejos, encaminadas a evitar lanzamientos de objetos dañosos u otros comportamientos que pudieran producir perjuicios en las personas o los bienes vecinales, con la consiguiente detracción de recursos públicos.

X.11. Salud

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 0006/2008

I. ANTECEDENTES

Primero. El día 12 de diciembre del pasado año quedaba registrada la entrada en esta Defensoría

de una queja de D. XXX, vecino de la ciudad de Murcia y usuario de la sanidad pública de nuestra región, en la que manifestaba que los responsables del Servicio Murciano de Salud (SMS) no habían dado ningún tipo de respuesta a una denuncia formulada por él ante la Gerencia de ese Servicio por una actuación sanitaria de la que fue objeto el reclamante. El precitado escrito de denuncia ante el SMS, que obra en el expediente, tuvo entrada en el Registro General de la Consejería de Sanidad el 7 de mayo de 2008. Siete meses después, según sostiene el promotor de la queja, la administración sigue sin responderle. Ante esa falta de respuesta se dirige a esta Defensoría denunciando esa inactividad de la administración y solicitando que, tras recabar la información pertinente de los órganos administrativos concernidos, se les intime a que den respuesta a las peticiones formuladas en su denuncia.

Segundo. La actuación sanitaria de la que trae causa la denuncia y, en consecuencia, la posterior queja de este ciudadano ante esta Institución, consistió en la práctica de una exploración endoscópica del intestino –colonoscopia– a la que fue sometido el promotor de la queja en el Hospital San Carlos de Murcia (centro de titularidad privada que realiza actividades por cuenta del sistema sanitario murciano a través de la figura del concierto) por derivación del Hospital General Universitario Reina Sofía de esta misma ciudad. La práctica de esta prueba diagnóstica fue realizada sin sedación previa, circunstancia ésta que le fue comunicada momentos antes de proceder a la misma, según afirma el promotor de la queja.

El reclamante expresa en su denuncia que si no se opuso en ese momento a la realización de la colonoscopia sin sedación, fue sólo por no volver a sufrir las molestias que conlleva la preparación de esta prueba diagnóstica en los días previos a su realización. En cualquier caso el promotor de la queja dice que acudió a la realización de esa prueba sin ninguna duda respecto a que la misma se realizaría con la necesaria sedación, circunstancia éste que cabría deducir tanto del "documento *de consentimiento informado para la realización de recto colonoscopia-ileoscopiá"* que tuvo que cumplimentar y firmar antes de la prueba, como de las *"normas generales y de preparación para exploraciones endoscópicas"* que los centros del SMS donde se llevan a cabo estos tipos de pruebas disponen y facilitan al paciente para su oportuna y efectiva información. En efecto, obran en el expediente ambos documentos de los que cabe extraer esa conclusión. El primero de ellos es un modelo elaborado por el Hospital General Universitario Reina Sofía en el que se explica qué es, en qué consiste y qué riegos tiene para el paciente la práctica de una colonoscopia, expresando en este último caso y entre otros riegos: "los derivados de la sedación". Por su parte, en las citadas *"normas generales y de preparación para exploraciones endoscópicas"* se destaca expresamente que "es aconsejable venir acompañado ya que durante la exploración se le realizará una ligera sedación".

Tercero. Admitida a trámite la queja el pasado 13 de febrero de 2009 y comunicada tal circunstancia a su promotor, fue requerido a la Gerencia del SMS el oportuno informe sobre el protocolo de actuación previsto para la práctica de colonoscopias y, posteriormente, se requirieron asimismo de esa Gerencia las citadas "normas generales y de preparación para exploraciones endoscópicas". Del informe remitido por la Gerencia del SMS se desprende que no existe un protocolo común a seguir por todos los hospitales del SMS para la realización de las citadas pruebas diagnósticas, y que cada centro en el que se llevan a cabo este tipo de pruebas dispone de documentos de recomendación general que se aportan al paciente para la preparación de la pruebas, cuyo seguimiento garantiza la mejor realización de las mismas. Del mismo modo, esos centros disponen de documentos de "consentimiento informado". Pero en lo referente a la sedación, según se apunta en el informe, no existe protocolo regional alguno, por lo que ésta se realizará –o no– atendiendo a la situación clí-

nica de cada paciente, a la modalidad de la prueba a realizar, y a la concurrencia de otros factores.

Cuarto. Toda vez que esta Defensoría consideró oportuno ampliar la información necesaria para la adopción de una mejor y más completa y fundamentada resolución, se requirió asimismo de la Dirección General de Régimen Económico y Prestaciones del SMS un informe relativo a si en los conciertos sanitarios que se realizan con el Hospital San Carlos de Murcia (u otros de la Región) se cubre la sedación. Esa Dirección General despachó el requerimiento de esta Defensoría adjuntando a unas escuetas notas un informe firmado por la Directora Médico del Hospital San Carlos de Murcia en el que se sostiene que el concierto suscrito entre el hospital que dirige y el SMS *"se incluye la opción de sedación/anestesia para la realización de endoscopias digestivas, siempre a criterio e indicación del facultativo que las realiza"*. Asimismo, en ese informe se manifiesta que: *"la práctica de sedación/anestesia durante las endoscopias digestivas puede ser solicitada por el paciente para atenuar las molestias inherentes a la exploración, pero su indicación siempre se establecerá en función del criterio médico, según situación basal del paciente, patologías concomitantes u otros riesgos potenciales"*.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de la queja está constituida en el ámbito de nuestra Ley Fundamental por el art. 43 de la Constitución Española de 1978, que, en sede de los principios rectores de la política social y económica, reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, y por lo que hace al recordatorio del deber legal que se incluye en esta resolución, la queja tiene soporte constitucional en el art. 103 CE, en tanto que la administración pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo a determinados principios entre los que se incluye el de eficacia, conectado directamente con la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Tercera. Es asimismo aplicable a las cuestiones objeto de queja la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que en su art. 3 reproduce el art. 103 de la Constitución Española con los principios que informan la actuación general de la administración. De otro lado la Ley 30/92 establece en su artículo 35 todo un conjunto de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, y, en el art. 42 de esa misma norma, se establece la obligación de la administración para resolver mediante resoluciones expresas en todos los procedimientos, notificando las mismas cualquiera que sea su forma de iniciación. Esta misma Ley, en su disposición adicional duodécima, que regula la responsabilidad en materia de asistencia sanitaria, expresa que "la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los *centros sanitarios concertados* con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, *seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley,* correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso".

Cuarta. Ya en el específico ámbito de la sanidad, y en lo que afecta a la obligación de responder que tiene la administración sanitaria, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula en su artícu-

lo 10 los derechos frente a las distintas administraciones públicas sanitarias, estableciendo en su apartado 12 el derecho a utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro caso, se expresa en este artículo, el reclamante deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.

Son asimismo de aplicación los arts. 4 y 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente. El primero de ellos regula el derecho de información asistencial, expresando que:

1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, *se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.*

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. *Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.*

Por su parte en al at. 8 de la precitada ley se sostiene que:

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el *consentimiento libre y voluntario del afectado,* una vez que, *recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.*

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

Ya en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, con posterioridad a los hechos que dieron lugar a la denuncia del reclamante y a la queja promovida por el mismo ante esta Institución, entró en vigor la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia. Se trata de una norma que viene a reforzar tanto los derechos de opinión y queja de los usuarios de la sanidad pública en nuestra región, como la obligación de la administración sanitaria de dar respuesta a los administrados en este ámbito específico. Así, en el art. 40 de esa ley se expresa que:

1. Los usuarios del sistema sanitario tienen *derecho a mostrar, con ocasión de la asistencia sanita-*

ria recibida, su opinión sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, mediante la formulación de sugerencias, reclamaciones, quejas, y agradecimientos, cuando consideren que tienen motivo justificado para hacerlo.

2. En el sistema sanitario público, éstas se podrán realizar en modelo normalizado que estará a disposición de los usuarios en las unidades y servicios de información y atención al ciudadano, mencionados en el artículo 37 de esta Ley. *Las opiniones presentadas serán evaluadas y se contestarán por escrito por los órganos competentes, en un plazo adecuado.* En el ámbito privado también se podrá ejercer este derecho de opinión y queja. En ambos casos, de conformidad con los procedimientos reglamentarios que, respectivamente, se establezcan por Orden de la Consejería competente.

Quinta. Por lo que hace al aspecto más sustantivo de la queja, la realización de la prueba diagnóstica referida sin sedación, esta Institución no puede entrar en modo alguno, dado nuestro desconocimiento de la ciencia médica, a realizar valoraciones sobre la praxis profesional desplegada por los médicos que atendieron al denunciante y promotor de la queja. Estamos, sin duda, ante un servicio público, el de la asistencia sanitaria, que por su naturaleza y peculiaridades presenta una gran discrecionalidad técnica en cuanto a su prestación. Ello no obstante, y dado que otras defensorías de distintas comunidades autónomas españolas ya se han ocupado de casos similares al que ahora abordamos en este resolución, cabe reseñar que alguna de ellas ha llegado a la conclusión de que las quejas promovidas por usuarios de la sanidad ante la realización de endoscopias sin sedación o anestesia no deben situarse tanto en el ámbito de esa discrecionalidad, cuanto en el de las deficiencias de medios; circunstancia ésta en la que si cabe entrar desde esta Institución por cuanto la misma afectaría a un componente básico del derecho a la protección de la salud como es el de garantizar a todos los ciudadanos, sin ninguna barrera económica o de otra índole, los servicios asistenciales que ofrece la medicina moderna. En definitiva, si las motivaciones para la no aplicación de la sedación al caso que nos ocupa son ajenas a los criterios médicos, se podría estar vulnerando el elemental derecho al acceso y a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva que proclama el art. 3.2 de la precitada Ley General de Sanidad.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes.

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

La administración sanitaria tiene la obligación de atender el derecho de todo ciudadano a obtener una respuesta frente a las peticiones, reclamaciones, quejas, etc., que los administrados realizan. Este derecho está reconocido tanto en el ámbito del procedimiento administrativo común como en el más específico ámbito de los derechos de los usuarios de la sanidad pública.

RECOMENDACIÓN

Que por parte de la Dirección del SMS se proceda a la homogeneización, mediante la elaboración de un protocolo común para todos los hospitales del SMS y los centros concertados que realizan exploraciones digestivas, que reconozca el derecho de los usuarios a obtener información tanto sobre los diferentes medios anestésicos susceptibles de ser utilizados en esas pruebas, como sobre la posibilidad de su no administración cuando así se determine de forma motivada por el facultativo.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo preve-

nido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que pasados siete días a partir de la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 84/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El día 22 de febrero de 2009 (registro de entrada de 23 de febrero de 2009), D. XXX presentó queja en esta Institución en la que denunciaba que la Consejería de Sanidad y Consumo le había dado de baja en el programa de prevención de cáncer de mama, sin su consentimiento. En concreto, los hechos relatados se inician el 12 octubre de 2007, cuando desde el Centro Radiológico Ramón y Cajal de Cartagena, se llamó a la promotora de la queja comunicándole haber detectado una anomalía en la exploración rutinaria incardinada dentro del programa de prevención de cáncer de mama, dándole cita para una exploración más profunda 13 días después, por estar ausente el radiólogo hasta la citada fecha.

No pudiendo esperar el tiempo establecido, debido a su estado anímico –de fácil comprensión–, la interesada se dirigió a un centro privado, donde tras las pruebas pertinentes se le diagnosticó finalmente de forma satisfactoria.

Al año siguiente, la promotora de la queja no es llamada a la revisión anual, averiguando ésta, previa comunicación telefónica con el centro, que ha sido dada de baja en el programa, por lo que decide realizarse la exploración anual en el centro privado señalado en el apartado anterior.

En septiembre de 2008 la interesada dirigió escrito al Director General de Salud Pública exigiendo aclaraciones, escrito que fue reiterado en enero de 2009, con idéntico resultado silente, según la promotora de la queja.

Por todo lo expuesto, D. XXX solicita investigación de los hechos y reintegros de los gastos por las exploraciones realizadas en los centros privados.

Segundo. Con fecha 12 de marzo de 2009 se requirió a la interesada la subsanación de algunos defectos formales en su solicitud, admitiéndose a trámite la queja y solicitando información a la Consejería de Sanidad y Consumo el 1 de abril de 2009.

Tercero. La Consejería competente en materia de sanidad emitió el oportuno informe que, recibido con fecha 3 de julio en esta Defensoría, señala que la Dirección General de Salud Pública contestó a las pretensiones de la interesada con fecha 25 de marzo de 2009, y en cuanto a la baja en el programa, ésta sólo se produce en casos de defunciones o duplicidad de expedientes, encontrándonos en este caso en un supuesto de inactividad de expediente ocasionado por la inasistencia voluntaria y sin aviso previo a una prueba concertada.

Cuarto. Con fecha 21 de agosto de 2009 se envió el informe referido a la promotora de la queja, que manifiesta su disconformidad con la inactividad en su expediente y con la ausencia de personal necesario para realizar las pruebas necesarias, causa ésta que determinó su inasistencia a la prueba concertada y la asistencia a un centro privado, adelantando así la fecha prevista.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Ámbito competencial

En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Fundamento constitucional

El fundamento constitucional legitimador de la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, reside en el artículo 43 de la Constitución Española, en cuya virtud: *"Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".*

Este artículo se encuentra incardinado en el Capítulo III del Título I que lleva por rúbrica "principios rectores de la política social y económica" cuyo respeto y protección informará la *"legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos".*

Tercera. Sobre la obligación de resolver

La primera cuestión que plantea la promotora de la queja es la falta de contestación del Director General de Salud Pública a la queja expuesta, al respecto, el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es terminante al establecer la obligación de resolver de todas las Administraciones Públicas en el plazo establecido, que con carácter general será de tres meses, pudiendo elevarse a seis meses cuando así lo establezca una disposición de rango reglamentario, o a más de un año, si así lo establece una norma con rango de ley o derecho comunitario europeo.

En los mismos términos, ya en el específico ámbito de sanidad y en lo que afecta a la obligación de resolver que tiene la administración sanitaria, la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula en su artículo 10 los derechos frente a las distintas administraciones públicas sanitarias, estableciendo en su apartado 12 el derecho a utilizar las vías de reclamación y de propuesta y de sugerencias en los plazos previstos, en uno y otro caso –se expresa en este artículo– el reclamante deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.

En el caso que nos ocupa, si bien el órgano competente ha dilatado su obligación de responder, ésta contestación se produjo –según la administración informante–, con lo cuál podremos considerar subsanada, al menos en parte, esta deficiencia.

Cuarta. Sobre la naturaleza del programa de prevención del cáncer de mama y la falta de información sobre el mismo

Cuestión distinta es si la administración actuó bien pasando a inactivo el expediente de la promotora de la queja al no asistir ésta sin causa justificada y sin previo aviso a una cita concertada. En este sentido la interesada alega su derecho a la protección de la salud, a través de las medidas preventivas que al respecto establezcan los poderes públicos, tal como proclama el texto constitucional en el artículo 43 antes referenciado.

Sin embargo, en opinión de esta Defensoría es necesario atender a la naturaleza del programa de prevención en el que participaba la interesada. Éste tiene un carácter voluntario, tal como se desprende en múltiples referencias del mismo (vid. Programa de prevención del cáncer de mama de la Región de Murcia: Mujeres con riesgo incrementado), a modo de ejemplo en la página 7, apartado

primero "Captación" se puede leer: *"cualquier mujer empadronada en la Región de Murcia que cumpla los requisitos de edad y de antecedentes familiares o personales del protocolo de captación puede incorporarse al programa. Los profesionales sanitarios de los equipos que identifiquen mujeres susceptibles de participar en el programa informarán de las características del mismo (anexo 1). A las mujeres que acepten se les proporcionará un folleto explicativo (anexo 2) y se les informará la forma de entrar en contacto con la unidad de mama",* o en la página 17 "Evaluación y mejora de la calidad" se aclara: *"Se considera paciente en programa aquél que acepta participar en el mismo y asiste a todas las actividades previstas en el protocolo correspondientes a su nivel de riesgo, salvo por motivos justificados".*

Esto es, este programa se incardina dentro de la política de prevención de la enfermedad de la Consejería de Sanidad y Consumo, pero en ningún momento su seguimiento podrá imponerse a ninguna usuaria.

Señalado lo anterior, es cierto que posiblemente no se ha dado suficiente información a la promotora de la queja, en el sentido de que si bien se indica específicamente en la página 17 antes citada, que será paciente "*aquél que acepta participar en el mismo y asiste a todas las actividades previstas en el protocolo correspondientes a su nivel de riesgo, salvo por motivos justificados*", en ningún punto del programa se indica expresamente que aquellos usuarios incluidos en el programa perderán la condición de pacientes activos si se ausentan de alguna prueba sin causa justificada. Circunstancia además que no se notificó en ningún momento a la parte afectada.

Finalmente, en cuanto a la ausencia del personal, aún entendiendo la angustia de la promotora por la tardanza en el conocimiento de una cuestión para ella vital, y siendo aconsejable que las citas en las que se detecten deficiencias se agilicen lo máximo posible en función de los recursos disponibles, no es menos cierto que desconocemos si durante los días de espera de la promotora de la queja, fueron atendidas otras personas citadas con anterioridad con igual o mayor gravedad que la promotora de la queja, sin que ello justifique el reintegro de los gastos producidos por la realización de la prueba con anterioridad en un centro privado.

Es más, la ausencia injustificada de la interesada, posiblemente ocupó una franja horaria que tal vez pudiera haber sido aprovechada por otra usuaria del programa.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente,

SUGERENCIA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

Sería conveniente que los pacientes participantes del programa de prevención del cáncer de mama y otros semejantes, fueran informados en su totalidad de las exigencias de los programas en los que participan, entre ellos si la ausencia a una cita determina la inactividad de su expediente.

En todo caso, cualquier actuación de la administración actuante, que pueda afectar a los usuarios deberá ser comunicada a los mismos.

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V.E. concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

X.12. Seguridad Ciudadana

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDO AL AYUNTAMIENTO DE BULLAS, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 37/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 26 de enero de 2009, D. XXX, presentó queja en esta Institución relativa a la indefensión sufrida en el marco de un expediente sancionador iniciado con fundamento en un informe policial donde se afirmaba haber sorprendido al responsable en la comisión de una serie de infracciones, modificándose posteriormente para aclarar que si bien no se sorprendió, "por gestiones practicadas, similitud de los hechos, itinerario seguido y realizadas las correspondientes preguntas a otro grupo de gente que caminaba por las inmediaciones se llega a la conclusión de que habían sido las mismas personas, aunque no fueron sorprendidos "in fraganti".

Segundo. El promotor de la queja aporta copia del expediente, integrado por incoación del expediente, informe de ratificación del agente de policía, alegaciones del interesado, propuesta de resolución, nuevas alegaciones y resolución final. Se acompaña igualmente providencia de apremio del pago de la deuda por importe de 330 euros y diligencia de embargo de cuentas bancarias, por importe e 375,17 euros.

Tercero. Con fecha 29 de enero de 2009, se acusó recibo, solicitándose información el 11 de marzo de 2009 al Ayuntamiento implicado (registro de entrada en ese Ayuntamiento de 17 de marzo de 2009).

Cuarto. En cumplimiento del primer requerimiento, el Ayuntamiento de Bullas aportó copia completa del expediente; sin embargo, a esta Defensoría le pareció pertinente conocer su opinión sobre la imposición de una sanción en base a una mera prueba indiciaria no constatada, así como sobre la competencia del Alcalde para imponer sanciones de cuantía superior a 150 euros, por lo que se requirió ampliación a la información aportada con fechas de registro de salida 7 de mayo, 25 de junio y 7 de agosto de 2009, así como por contacto telefónico con el Ayuntamiento, no siendo al día de hoy aportada.

Quinto. En evitación de mayores dilaciones en el expediente, y a pesar de no contar aún con una explicación oficial del Ayuntamiento, esta Defensoría cuenta con los elementos suficientes para abordar la resolución del presente expediente de queja.

En concreto, y como mera constatación de los defectos formales observados en el expediente, prestaremos especial atención a dos aspectos: en primer lugar a las fechas de las diferentes resoluciones integrantes en el expediente, y en segundo lugar a las cuantías impuestas.

Así, obra en el expediente un boletín de denuncia nº 68/2007, de fecha 9 de septiembre de 2007; un acuerdo de incoación con nº de resolución 1933 y fecha 1 de octubre, con intento de notificación los días 1, 16 y 17 de octubre; una propuesta de resolución de fecha 29 de noviembre de 2007 y notificada el 5 de diciembre de 2007 y una resolución final de la Alcaldía con nº 466, de fecha 3 de marzo de 2008, notificada el 12 de marzo del mismo año.

No conseguimos incardinar por el contrario, la copia del acuse de recibo aportado de 11 de junio de 2007, pues es anterior a la denuncia misma, ni el nuevo acuerdo de incoación de fecha 2 de octubre de 2008, de la resolución nº 1933 antes citada, que podría hacer referencia a una reinicia-

ción por caducidad, pero tampoco, pues hace referencia al mismo número de resolución de iniciación.

En cuanto a la competencia para imponer la sanción –en este caso de 300 euros–, en el mismo acuerdo de incoación se atribuye la competencia del Alcalde, cuando la cuantía no exceda de 150 euros, por ser Bullas un municipio con una población inferior a 20.000 habitantes.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. El fundamento constitucional legitimador de la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, reside en el artículo 24 de la Constitución Española, en cuya virtud, *"Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.*

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".

Este artículo se ubica en la sección primera del Capítulo segundo del Título primero, calificado como un derecho fundamental y libertad pública, incardinado entre los derechos que configuran la autonomía individual de la persona y para cuya garantía se articula el más amplio elenco de mecanismos de protección, entre los que se encuentran el proceso especial preferente y sumario regulado en la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa; el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la posibilidad de acudir en queja ante el propio Defensor del Pueblo.

Tercera. En el caso que nos ocupa son varias las problemáticas a tratar: En primer lugar, las de aspecto formal, ya referenciadas en los antecedentes, donde se aprecia una caducidad del procedimiento inicial, por haber excedido del plazo de seis meses previsto en la normativa general de aplicación, a salvo de una normativa específica que establezca otro superior; la incompetencia del órgano para imponer la sanción por razón de la cuantía que, por exceder de 150 euros por infracción leve, compete al Delegado del Gobierno; la ausencia de notificación del acuerdo de incoación en legal forma, sin constancia de la identidad del agente notificador y de las circunstancias por las que no se pudo practicar la notificación, el error posterior en la fecha del acuse de recibo de la notificación, la ausencia de la notificación edictal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento… Todas estas cuestiones implican un procedimiento plagado de defectos que puede determinar alternativamente, bien la caducidad del procedimiento, bien la anulabilidad ex artículo 63 de la ley 30/1992, por haberse dictado la sanción, entre otras circunstancias, por órgano incompetente por razón de la cuantía.

Independientemente de las causas formales que pueden determinar la invalidez de la sanción impuesta, preocupa a esta Defensoría el respeto al principio de presunción de inocencia y consecuente tutela judicial efectiva en este procedimiento.

En este sentido, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, *"en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad".*

Esta condición de agente de autoridad confiere presunción de veracidad a las denuncias practicadas por estos órganos en el ejercicio de sus competencias; así, el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dispone que *"en los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieran presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles".*

En el presente supuesto, en el informe de ratificación y en contradicción con lo descrito en el boletín de denuncia, los agentes han declarado no haber presenciado los hechos, fundamentando la presunción de la certeza de la denuncia, no ya en su propia percepción ocular, sino en "gestiones practicadas, similitud de los hechos, itinerario seguido y realizadas las correspondientes preguntas a otro tipo de gente…".

Sobre el principio de presunción de inocencia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde la STC 31/1981, de 28 de julio (RTC 1981, 31), ha manifestado que *"este derecho, en su vertiente de regla de juicio, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado» (STC 189/1998, de 28 de septiembre [RTC 1998, 189], F. 2 y citándola, entre otras muchas, SSTC 120/1999, de 28 de junio [RTC 1999, 120], F. 2; 249/2000, de 30 de octubre [RTC 2000, 249], F. 3; 155/2002, de 22 de julio [RTC 2002, 155], F. 7; 209/2002, de 11 de noviembre [2002, 209], F. 3).*

Por otra parte, desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre (RTC 1985, 174), hemos sostenido que, a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: a) que parta de hechos plenamente probados, y b) que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la Sentencia condenatoria (SSTC 174/1985 y 175/1985 [RTC 1985, 175], ambas de 17 de diciembre; 24/1997, de 11 de febrero [RTC 1997, 24], F. 2; 189/1998, de 28 de septiembre [RTC 1998, 189], F. 3; 220/1998, de 16 de noviembre [RTC 1998, 220], F. 4; 44/2000, de 14 de febrero [RTC 2000, 44], F. 2; 124/2001, de 4 de junio [RTC 2001, 124], F. 12; 17/2002, de 28 de enero [RTC 2002, 17], F. 3)".

En los mismos términos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2000, o de 18 de diciembre de 2000, en cuya virtud: "*Es ya una doctrina consolidada desde la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, de 28 de julio (RTC 1981, 31), hasta las más recientes 33/2000, de 14 de febrero (RTC 2000, 33), y 44/2000, de 14 de febrero (RTC 2000, 44), que la presunción de inocencia debe entenderse como un derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas. Ello implica que en la sentencia condenatoria deben expresarse las pruebas de cargo que sustentan la declaración de responsabilidad, las cuales, a su vez, han de proceder de verdaderos actos de prueba obtenidos con todas las garantías que exigen la Ley y la Constitución (STC 81/1998, de 2 de abril [RTC*

1998, 81], F. 3). Asimismo se ha sostenido que la de inocencia se trata de una presunción «iuris tantum», cuya destrucción requiere la existencia de una actividad probatoria.

Ahora bien, esa propia doctrina señala que, cuando se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ha de tenerse en cuenta que el artículo 24.2 de la Constitución no cuestiona la específica función judicial de calificación y subsunción de los hechos probados en las normas jurídicas aplicables. Como dice la STC 189/1998, de 28 de septiembre (RTC 1998, 189) (y en igual sentido, entre otras, las SSTC 220/1998, de 16 de noviembre [RTC 1998, 220], y 120/1999, de 28 de junio [RTC 1999, 120]), «sólo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el "iter" discursivo que conduce de la prueba al hecho probado» (STC 185/2000, de 10 de julio [RTC 2000, 185]).

Así pues, el derecho a ser presumido inocente, que no a ser declarado inocente, que como tal no integra el contenido del artículo 24.2 CE (STC 40/1988, de 10 de marzo [RTC 1988, 40], F. 4), demanda que toda condena venga precedida por una suficiente actividad probatoria de cargo (STC 109/1986, de 24 de septiembre [RTC 1986, 109]) o, en otros términos, que toda sentencia condenatoria aparezca sustentada en pruebas de cargo válidas (SSTC 127/1990, de 5 de julio [RTC 1990, 127]; 81/1998, de 2 de abril [RTC 1998, 81]; 44/2000, de 14 de febrero [RTC 2000, 44], por otras) o verdaderos actos de prueba (SSTC 41/1998, de 24 de febrero [RTC 1998, 41]; 68/1998, de 30 de marzo [RTC 1998, 68], por otras)".

En definitiva, y descendiendo al caso que nos ocupa, no es de recibo que la prueba de cargo consistente en la percepción ocular de los agentes de la autoridad, haya sido sustituida en el informe de ratificación por pruebas tan difusas como "gestiones realizadas, declaraciones de un grupo de gente (sin identificar)…", en las que no concurre ninguno de los elementos de certeza señalados en la doctrina jurisprudencial precedente.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE BULLAS

La presunción de inocencia que inspira el procedimiento sancionador exige al agente de la autoridad un exquisito rigor en la fijación de pruebas de cargo en el procedimiento sancionador, sin que sea aceptable la imposición de sanciones fundamentadas en suposiciones o declaraciones de terceras personas no ratificadas en legal forma.

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BULLAS

La concurrencia de múltiples defectos formales en el expediente sancionador objeto de queja y la falta de rigor en acreditación de la veracidad de los hechos objeto de sanción, aconsejan revisar el expediente de referencia en garantía del principio de legalidad y al principio de presunción de inocencia ínsito al de tutela judicial efectiva consagrado en nuestra Constitución.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe sobre la aceptación de las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos informe sobre las razones que lo impidan y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

X.13. Servicios Públicos Locales

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 23/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 15 de enero de 2009, D. XXX, presentó queja sobre desatención del Ayuntamiento de Murcia de su obligación consistente en elevar a escritura pública una plaza de garaje sita en el aparcamiento subterráneo de C/ Huerto de las Bombas, en el barrio de San Antonio de Murcia.

Segundo. Consta en el expediente aportado por el reclamante, contrato de cesión de 18 de agosto de 1992 de uso de plaza de garaje señalada con el número 176 en el citado parking, conforme a plano que se adjunta. Se acompaña también solicitud al Ayuntamiento de Murcia de 16 de diciembre de 2002, de modificación de división horizontal; Acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2006, de modificación de división horizontal, traslado a la concesionaria del acuerdo, modificación del inventario municipal y otorgamiento de facultades al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Murcia para la firma de cuanta documentación sea necesaria para dar plena eficacia al acuerdo.

Tercero. Con fecha 16 de enero de 2009 se acusó recibo de la queja, admitiéndose a trámite con fecha 10 de febrero y requiriendo con esa misma fecha información al Ayuntamiento de Murcia (registro de entrada 20 de febrero de 2009).

Cuarto. Con fecha 24 de febrero de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 25 de febrero de 2009) se recibió informe del Ayuntamiento de Murcia, en el que se añade a la información ya disponible en esta Defensoría, que el Acuerdo de la Junta de Gobierno antes citado fue publicado en el BORM de 20 de junio de 2006 ante el desconocimiento del domicilio del concesionario.

Asimismo, por conversación telefónica con personal del Ayuntamiento se nos indica que la sociedad concesionaria se ha extinguido, de forma que nos es posible realizar con ella actuación alguna.

Con fecha 11 de marzo de 2009 (registro de entrada de 17 de marzo), se puso en nuestro conocimiento el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2009, por el que se acuerda requerir a la empresa concesionaria para que en el plazo de un mes inicie las obras necesarias para corregir los desperfectos existentes en el aparcamiento, bajo sanción de ejecución subsidiaria municipal con cargo a las fianzas prestadas.

Quinto. Con fecha 30 de marzo de 2009, por entenderlo necesario para resolver esta queja, se solicitó al Ayuntamiento de Murcia, los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que rigieron la concesión administrativa del aparcamiento subterráneo sito en C/ Huerto de las Bombas. Esta documentación se aportó con fecha 6 de mayo de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de 7 de mayo de 2009).

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, reco-

mendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. A modo clarificador, conviene recordar la noción de servicio público como actividad de prestación de la Administración Pública que legalmente asume, por sí o por medio de persona interpuesta, a fin de satisfacer de modo concreto necesidades de interés general, conforme a un régimen especial, exclusiva o predominantemente de Derecho Público.

Son de esta forma tres los elementos concurrentes en el servicio público; la titularidad declarada así por una norma con rango de ley, el destino de satisfacción de un interés general o público y finalmente, un régimen jurídico público "prevalente y exorbitante del derecho privado" que concede a la Administración Pública una posición de supremacía frente a los administrados.

Este régimen jurídico especial de derecho público se fundamenta en las condiciones que deben asegurarse en la prestación del servicio, a saber, exigencias de generalidad, igualdad, continuidad y regularidad de la prestación que se constituyen en garantías y derechos jurídicos de los usuarios.

Para asegurar el cumplimiento de las condiciones anteriormente referidas, la administración deberá arbitrar el modo más idóneo de prestación del servicio, que bien podrá ser "directamente", a través de los propios medios personales y materiales de la administración –lo cual acontecerá necesariamente en los servicios que impliquen ejercicio de autoridad–; o bien "indirectamente", a través de una persona o entidad, normalmente privada, en virtud del correspondiente contrato administrativo de gestión.

Esta última fórmula de gestión indirecta es especialmente aconsejada para los servicios de contenido económico o "susceptibles de explotación por empresarios particulares", pudiendo adoptar tres modalidades: concesión, concierto, y en el régimen local, el arrendamiento. En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una concesión de un aparcamiento subterráneo otorgada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 28 de noviembre de 1991.

Pues bien, los derechos de los usuarios del servicio público deberán estar garantizados independientemente de la forma elegida por la administración para su prestación, cifrándose éstos tradicionalmente en el acceso al servicio en condiciones de igualdad, en su prestación, funcionamiento y utilización en la forma legalmente establecida; y todo ello, previo pago de la correspondiente "tarifa".

Tercera. El régimen jurídico de la concesión está constituido, en primer lugar, por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, en lo que no haya sido modificado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local.

Asimismo, habrá de tenerse en cuenta el Pliego de condiciones jurídicas, técnicas y económico-administrativas que ha de regir el concurso para la concesión de redacción de proyecto, construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo en el barrio de San Antonio de Murcia, y el proyecto presentado por el concesionario y formalizado en escritura pública el 12 de marzo de 1992.

En la actualidad, rige además de las disposiciones y pliegos anteriormente reseñados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuarta. Descendiendo a las circunstancias del caso concreto, la cuestión de fondo subyace en que el concesionario no continúa con la prestación del servicio, siendo el concesionario incluso ilocalizable para las notificaciones de los acuerdos municipales, manifestándose esta situación en múltiples quejas de los usuarios del servicio.

En opinión de esta Defensoría, los usuarios no pueden verse perjudicados por una circunstancia a ellos ajena, como es la extinción de personalidad del concesionario.

En este sentido, son muy claros los pliegos en su apartado 11 cuando determinan como causa de extinción de la concesión, en su modalidad de caducidad "la inatención a la conservación del estacionamiento o a la prestación del servicio o incumplimiento de las instrucciones dictadas por la autoridad municipal sobre dichos particulares" (en cuyo caso declarada la caducidad la obra quedará en propiedad del Ayuntamiento sin derecho a indemnización a favor del concesionario) o en su letra f) "la quiebra o extinción de la persona jurídica gestora", en ambos casos se declarará la extinción de la concesión, dando audiencia al interesado de acuerdo con la legislación aplicable en la materia".

De esta forma, se configura como obligación de la Corporación tal como se trasluce en múltiples referencias del pliego, la inspección y control de la buena prestación del servicio. A modo de ejemplo, el punto 7.2.3. del pliego, por el que "El Ayuntamiento, por mediación de sus servicios técnicos, inspeccionará la gestión y conservación del estacionamiento, atendiendo de modo especial en el último período de la concesión, al aspecto de la conservación de las obras e instalaciones …", o el punto 9.1., en el que se determina que "El Ayuntamiento fiscalizará la gestión de la contrata, pudiendo realizar a través del servicio correspondiente cuantas operaciones estime pertinentes al efecto"; calificándose como falta muy grave "Cualquier conducta que suponga abandono o deterioro culposo o negligente de las instalaciones que integran el servicio" (apartado 10.1.3. e), pudiendo acordar el Ayuntamiento "El Secuestro temporal o la caducidad de la concesión, en los supuestos y forma previstos en la vigente legislación de régimen local".

En este sentido, el artículo 136 del Reglamento de Servicios de Corporaciones locales autoriza a declarar la caducidad de la concesión en los supuestos previstos en el pliego de condiciones y en todo caso, (…) si el concesionario incurriera en infracción gravísima de sus obligaciones esenciales).

En idénticos términos se pronuncia artículo 206.a de la Ley 30/2007, de Contratos del sector público, en relación con los artículos 110 y 112 del R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos del Sector público, determinando la posibilidad de resolución del contrato por "La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista".

Por lo expuesto, vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha adoptado la siguiente,

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Con fundamento en el apartado cuarto del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 8 de marzo de 2006, en cuya virtud se faculta al Excmo. Sr. Alcalde para "la firma de cuanta documentación sea necesaria tendente a dar efectividad al presente acuerdo", y en tanto no se normalice la gestión del servicio, sería conveniente que por el titular habilitado o persona que éste designe, se proceda a materializar la elevación de la correspondiente escritura pública de contrato de cesión de la plaza de garaje nº 176 del referido aparcamiento, evitando así posibles perjuicios en los usuarios derivados de la tardanza en la finalización del procedimiento de resolución del contrato y nueva adjudicación, en su caso, seguidos al efecto.

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La adecuada gestión del servicio municipal de aparcamiento subterráneo sito en la calle

Huerto de las Bombas, barrio de San Antonio, aconseja adoptar a la mayor brevedad las medidas establecidas en el ordenamiento jurídico y en los correspondientes pliegos por extinción de la personalidad jurídica del concesionario, tales como la caducidad del contrato de concesión, asumiendo directamente la prestación del servicio en tanto no se adjudica, en su caso, el nuevo contrato de gestión.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarlos, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 97/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El pasado mes de febrero del año en curso tenía entrada en esta Defensoría una queja de Dª XXX, ciudadana de Cartagena, relativa a una deficiencia en el suministro de agua potable que afecta a su domicilio. Tras su admisión a trámite y practicados los necesarios requerimientos de información a la administración afectada, se produjo la remisión a esta Defensoría de un informe de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en la referida ciudad. Entre tanto, llegaba a esta Defensoría un segundo escrito dirigido por la promotora de la queja, que completaba los argumentos del primero e incluía copia de una serie de documentos en los que sustentaba su argumentación.

Segundo. La queja presentada, de manera muy resumida, describe la siguiente problemática: la propietaria de una vivienda ubicada en el centro de la ciudad de Cartagena lleva sufriendo cerca de dos años y medio las consecuencias de una bajada de presión en la red de distribución de agua potable de aquella ciudad. Se trata de una medida adoptada por la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, AQUAGEST, con efectos particularmente graves en algunas viviendas situadas en las plantas superiores de algunos edificios de la ciudad. Esta bajada de presión que, tal y como se desprende del informe remitido por AQUAGEST, se produce en horario nocturno (entre las 24:00 h y las 6:00 h), deja sin suministro de agua al domicilio de la promotora de la queja durante esas horas, con los inconvenientes y limitaciones que ello implica para el normal desenvolvimiento de tareas domésticas básicas: limpieza, aseo personal, etc.

Tercero. Esta reducción de la presión en la red de abastecimiento de agua en la ciudad de Cartagena trae causa, según se desprende del informe de AQUAGEST, de la implementación en esa localidad de alguna de las medidas que se recogen en la *Ley 6/2006, sobre el incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la región de Murcia*, y de un acuerdo relacionado con esa Ley adoptado en el seno del comité ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), sobre reducción de pérdidas de agua en las redes. Medidas y acuerdo éstos de evidente interés social dado el déficit del recurso agua existente en la región de Murcia y la subsiguiente necesidad de realizar un uso racional, eficiente y sostenible del mismo. Pero además, si tenemos en cuenta que, tal y como reconoce la empresa AQUAGEST

Región de Murcia en su informe, las bajadas de presión implican una disminución de las pérdidas en la red de la ciudad estimadas en 365.000 m^3 al año, obviamente, además del lógico e indiscutido beneficio social derivado del incremento de la eficiencia de la red, también estas medidas tienen evidentes efectos positivos en el orden económico para la propia concesionaria.

Cuarto. Al margen de la incidencia que la aplicación de la Ley (en su art. 9.2) y el acuerdo precitados en el antecedente tercero tienen en la regularidad y continuidad del suministro de agua potable en la vivienda afectada y en otras de la misma ciudad de Cartagena, la empresa AQUAGEST-Región de Murcia, en el momento actual concesionaria del servicio público de abastecimiento de agua potable en el municipio de Cartagena, sostiene en su informe que, con independencia de la antigüedad del edificio en el que se encuentra la vivienda de la promotora de la queja, y siendo esa antigüedad, en relación con la entrada en vigor en el año 1987 del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, la que determinaría la aplicación al caso que nos ocupa de unas u otras normas, es en cualquiera de los casos el promotor inmobiliario del edificio quien debería haber instalado en su día un equipo de presión para elevar el agua a las viviendas situadas a mayor altura; infraestructura ésta que de estar instalada impediría o minimizaría los problemas descritos por la promotora de la queja.

Quinto. Hay que hacer constar que la promotora de la queja, según la documentación que obra en el expediente, antes de acudir a esta Defensoría intentó infructuosamente lograr un acuerdo de la comunidad de propietarios de su edificio, para que ésta se hiciese cargo de los costes que se derivarían de la instalación de las infraestructuras precisas para resolver el citado problema. Pero realizada la votación sobre ese extremo en la Junta de Propietarios convocada al efecto, la propuesta no obtuvo el voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios exigido por el art. 17.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, para adoptar válidamente el acuerdo referido.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Obra en el expediente que la escritura de propiedad del edificio el que se encuentra la vivienda afectada fue otorgada a finales de los años setenta del pasado siglo. Así pues, el hecho de residenciar en el promotor del inmueble la responsabilidad de esa no instalación, tal y como hace el informe de AQUAGEST, cuando se han sobrepasado con creces los plazos de caducidad para ejercer cualquier tipo de acciones por parte de los compradores, no aporta ninguna posibilidad de reclamación efectiva a la promotora de la queja.

Segunda. Parece necesario señalar que quien prestaba el servicio público en las fechas referidas –sea el propio Ayuntamiento de Cartagena mediante una gestión directa, sea, en su caso, una empresa concesionaria de manera indirecta– debería haber comprobado, antes de autorizar y dar de alta en el suministro de agua potable a los propietarios de la vivienda en cuestión, si las instalaciones particulares del abonado cumplían o no las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (Orden de 9 de diciembre de 1975), tal y como, por otro lado, aún sigue expresando el art. 21 de la vigente Ordenanza de Agua Potable del Ayuntamiento de Cartagena.

Tercera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales. Además, el artículo 13 de la misma Ley extiende el ámbito compe-

tencial de supervisión de esta Defensoría a los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas cuya titularidad competencial corresponda a las administraciones públicas de la Región de Murcia, aunque sean en régimen de concesión administrativa.

Cuarta. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que en su art. 26.1. a) establece la obligación de los municipios de prestar el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, y en su art. 18.1. g) establece como derecho de todo vecino el de exigir la prestación, y, en su caso el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Nos encontramos pues ante un servicio público que, no lo olvidemos, no sólo es de obligada prestación por parte del Ayuntamiento, teniendo los vecinos el derecho subjetivo a exigir al municipio su correcta prestación, sino también de obligada recepción por parte de los administrados, y que en cualquier caso debe prestarse con estricta sujeción a los principios básicos de continuidad y regularidad.

Otra norma de aplicación es la propia Ordenanza de Suministro de Agua Potable del Ayuntamiento de Cartagena, en cuyos artículos 1,13 y 34 se sostiene respectivamente la obligación del Ayuntamiento de Cartagena, por medio del servicio municipal de aguas, de suministrar agua potable a los habitantes del término municipal en las zonas en las que existe instalada la red general de conducción de dichas aguas, la exigibilidad del suministro y la responsabilidad por su interrupción. Asimismo, el art. 21 de la misma Ordenanza afirma expresamente que se podrá no autorizar el suministro de agua potable, cuando las instalaciones particulares del abonado no cumplan las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. (Orden del 9 de diciembre de 1975), dando cuenta inmediatamente a la Dirección General de Industria.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría emite la siguiente

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Sería conveniente que el Ayuntamiento de Cartagena, requiriendo en su caso el concurso de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, estableciera una línea de ayudas económicas para los ciudadanos afectados por las consecuencias de la necesaria implementación de la *Ley 6/2006, sobre el incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Región de Murcia*, que cubra, en todo o en parte, los costes derivados de la ejecución de obras o instalación de infraestructuras precisas para la solución del problema, en aquellos casos en los que se haya autorizado el suministro de agua potable sin haber planteado reparos sobre las instalaciones particulares de los abonados.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 116/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El pasado 12 de marzo del año en curso tenía entrada en esta Defensoría una queja de D. XXX, vecino de la capital murciana, en la que denunciaba que EMUASA, empresa actualmente concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Murcia, había procedido a cortar el suministro de agua en su vivienda, reclamando al usuario el pago de dos recibos adeudados por éste, así como el abono de ciertas cantidades de dinero para que la empresa concesionaria procediese a la reposición del suministro, como así hizo tras el pago de ambos conceptos realizado por el usuario.

Segundo. La queja fue admitida a trámite el pasado 20 de marzo. Ese mismo día es comunicada tal circunstancia a su promotor y se realiza un requerimiento a la empresa concesionaria para informar por escrito sobre los extremos planteados en la misma. No habiendo obtenido la respuesta en el plazo oportuno, se reitera el requerimiento a la concesionaria con fecha 29 de mayo, constando la entrada en esta Defensoría, con fecha 16 de junio, del oportuno informe.

Tercero. Por lo que se extrae de los documentos que obran en el expediente, fundamentalmente la propia queja y el informe remitido a instancia de esta Defensoría por EMUASA, el corte del suministro de agua potable obedece efectivamente al impago de dos recibos por parte del usuario del servicio y promotor de esta queja, lo que en estricta aplicación del art. 40.1 del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable de Murcia, se entiende como "renuncia al servicio", circunstancia ésta que facultaría a EMUASA, siempre según el precepto citado, a suprimirlo.

Cuarto. El promotor de la queja sustenta su reclamación, en la que básicamente viene a pretender el reintegro de las cantidades que él entiende indebidamente abonadas para la reposición del suministro de agua, en el tenor literal del art. 2. uno g) de la Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. Efectivamente, este precepto adiciona al artículo 8 de la vigente Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, varios extremos que tratan de desplegar una más correcta acción tutelar de las administraciones públicas hacia los usuarios de determinados servicios públicos.

Así, este nuevo precepto supone un mandato a los poderes públicos para promover acciones que aseguren el respeto de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, y en particular las encaminadas a garantizar, entre otras cosas, la prohibición del corte del suministro de servicios como el que nos ocupa, si no hay **"constancia fehaciente"** de la recepción previa por parte del consumidor y usuario de una notificación en la que se conceda plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte.

Quinto. Frente a la argumentación anterior, del informe remitido por EMUASA se desprende que efectivamente esta concesionaria intentó, en sucesivas ocasiones y de formas diversas, notificar al usuario deudor un aviso de corte de suministro si no eran convenientemente liquidadas en plazo sus deudas pendientes. Cabe manifestar a este respecto que los intentos de notificación por parte de EMUASA se producen el 20 de febrero del presente año, el día 24 del mismo mes, depositando la notificación en el buzón del usuario, y tres días después, el 27 de febrero, depositando el aviso de suspensión en la oficina de correos de Murcia, para su posterior envío mediante carta certificada. El corte del suministro se produce el

9 de marzo, pero no consta fehacientemente que para esa fecha, el usuario haya recibido la oportuna notificación. Es más, el usuario aporta a esta Defensoría una segunda comunicación, adjuntando copia de la carta a él remitida por EMUASA y copia de la certificación de la misma en las oficinas de Correos, donde se expresa que la recepción de la misma se produce el pasado 16 de marzo, transcurridos 7 días desde el corte del suministro, y una vez que éste ya había sido repuesto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales. Además, el artículo 13 de la misma Ley extiende el ámbito competencial de supervisión de esta Defensoría a los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas cuya titularidad competencial corresponda a las administraciones públicas de la Región de Murcia, aunque sean en régimen de concesión administrativa.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida por el art. 51 de la Constitución Española de 1978, que en sede de los principios rectores de la política social y económica realiza un mandato a los poderes públicos para que éstos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Tercera. Otra norma de aplicación es la ya citada Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, modificada por la Ley 1/2008, de 21 de abril, que, igualmente, realiza un mandato a los poderes públicos para que éstos garanticen la prohibición del corte del suministro de servicios públicos o de interés económico general de prestación continua, cuando no exista constancia fehaciente de recepción previa por el consumidor y usuario de una notificación concediéndole plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que, en su caso, puedan proceder. La citada prohibición incluye, en particular, los servicios de agua potable, electricidad, teléfono y gas, y no estará referida a los cortes de suministro de carácter general por averías, reparaciones u otros análogos.

Pero resulta que, además, abundando en ese extremo, el art. 26 de la precitada norma legal tipifica como infracción en materia de transacciones comerciales y condiciones técnicas de venta y en materia de precios, "el corte del suministro al abonado de servicios públicos o de interés económico general sin respetar lo dispuesto en el artículo 8.g)".

Cuarta. Pese a que si bien es cierto, y así se expresa –como hemos dicho– en el informe remitido por EMUASA, que esta concesionaria intentó, en sucesivas ocasiones y de formas diversas, notificar al usuario deudor un aviso de corte de suministro si no eran convenientemente liquidadas en plazo sus deudas pendientes, esos intentos no parecen colman sin embargo las determinaciones del antes citado art. 8 de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, en relación con el art. 26 del mismo texto legal, toda vez que no hay "constancia fehaciente" de que el usuario ha recibido la oportuna notificación.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA EMPRESA CONCESIONARIA EMUASA:

La empresa EMUASA, concesionaria del servicio público de abastecimiento de agua potable de Murcia, tiene el deber legal de adecuar los procedimientos relacionados con el corte de suministro a los usuarios abonados, contenidos en su Reglamento de Abastecimiento Domiciliario, a las exigencias de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, modificada por la Ley 1/2008, de 21 de abril.

Y RECOMENDACIÓN

Que la empresa EMUASA estudie la oportunidad y conveniencia de reintegrar las cantidades abonadas por el usuario promotor de esta queja, tanto en concepto de reposición del suministro de agua potable en su domicilio, como de cualesquiera otras exacciones exigidas al mismo.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 223/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 29 de mayo de 2009 quedó registrada la entrada en esta Institución de una queja promovida por D. XXX, vecino de la pedanía murciana de Los Garres, en la que pone de manifiesto un problema de inseguridad vial que se produce en el denominado Carril Los Sauras de aquella pedanía. Problema éste que, en más de una ocasión y desde el año 2004, ha sido expuesto para que procediesen a su corrección tanto al gobierno local del municipio de Murcia como al pedáneo de Los Garres y Presidente de su Junta Municipal.

Según manifiesta el reclamante en su queja, el carril en cuestión se encuentra ubicado en una zona residencial de aquella pedanía, presenta un trazado viario rectilíneo, y, pese a contar con señales verticales de limitación de la velocidad a 30 km/h, no son extraños los episodios de automóviles que son conducidos a gran velocidad o de carreras –ilegales– de motocicletas. Todo ello con el consiguiente peligro que genera para los viandantes del lugar, entre los que –afirma el reclamante– se encuentra un elevado número de niños.

Segundo. El promotor de la queja confía en que la solución del problema puede venir de la colocación estratégica a lo largo del citado carril de lo que los técnicos de seguridad vial denominan "ralentizadores de velocidad". Y ésa fue la reivindicación que trasladó en mayo de 2004 tanto al Ayuntamiento de Murcia como al pedáneo de Los Garres, petición que además fue reiterada por dos veces a lo largo de 2005, y otras tantas en este año 2009. Hasta la fecha, y según se desprende de los documentos aportados al expediente tramitado en esta Defensoría, la administración pública llamada

a resolver el problema se ha movido entre la falta de contestación a esas reivindicaciones vecinales y las contestaciones carentes de compromisos cerrados y convenientemente calendados.

Tercero. Se adjuntan a la queja varios documentos. El primero de ellos consiste en una comunicación, de 2 de junio de 2005, remitida al reclamante por el Ayuntamiento de Murcia y suscrita por el a la sazón Concejal de Descentralización, Participación Ciudadana y Mercados. En ella se sostiene textualmente que: "*el establecimiento de la prioridad de las obras a realizar, entre otras muchas competencias, de las distintas pedanías del término municipal es competencia de las respectivas Juntas Municipales según establece el artículo 57 y siguientes del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos*". También se afirma que en aquellas pedanías en las que se han instalado ralentizadores, se ha hecho con cargo al presupuesto de las mismas, utilizando además como criterio común el que tengan prioridad las vías principales que soportan más tráfico de vehículos. Por último –se informa al reclamante en esta comunicación– las obras que demanda "*están consideradas dentro de las obras a realizar en la pedanía de Los Garres en función de las prioridades que establezca la Junta Municipal y las disponibilidades presupuestarias con que cuentan, no teniendo el concejal que suscribe capacidad para imponer ningún tipo de obra a realizar en el ámbito de las competencias de las Juntas Municipales*".

El segundo documento adjunto a la queja es un informe suscrito el 12 de enero de 2005 por el Presidente de la Junta de Vecinos de Los Garres, en él se expresa textualmente que: "*Esta Junta de Vecinos tendrá en consideración las peticiones de este vecino, según las prioridades de obras de la pedanía y cuando la dotación presupuestaria para su financiación sea viable se ejecutarán a la mayor brevedad*".

Por último el reclamante también anexa a la queja tres de los escritos dirigidos al Ayuntamiento de Murcia, y a través de esa institución al Alcalde Pedáneo de Los Garres, con fechas 9 de mayo de 2005, 21 de enero de 2009 y 19 de mayo de 2009. En todos ellos se reitera la peligrosidad del carril mencionado y la necesidad de proceder a la instalación de los resaltes aludidos sobre la calzada del mismo.

Cuarto. El día 18 de junio de 2009 se acusó recibo de la queja, adoptando por esta Institución la decisión de admitirla a trámite. Comunicada esa circunstancia al reclamante, fue practicado en esa misma fecha el necesario requerimiento de informe al Ayuntamiento de Murcia, pidiéndole expresamente que se pronunciará por escrito sobre la posibilidad de atender la queja planteada por el interesado, procediendo a la colocación de dichos ralentizadores de velocidad en la zona indicada.

Transcurrido algo más de un mes, el 28 de julio, se registra la entrada en esta Defensoría del informe del Ayuntamiento de Murcia, antecedido de un breve oficio suscrito por el Alcalde de la capital murciana. El informe está firmado por el Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico, Transportes y Limpieza Viaria, el 5 de junio de 2009, 19 días antes de ser requerido para ello por esta Defensoría. Este informe vuelve a reiterar argumentos ya expuestos, sosteniendo que la tramitación de este tipo de peticiones debe realizarse a través de la Junta Municipal, "*ya que a ella compete el coste de su ejecución y por lo tanto el llevarla a cabo (si procediese) dependiendo del número de resaltos solicitados y de la disponibilidad presupuestaria*". Además de especificar desde el punto de vista técnico qué tipo de resaltos serían los más adecuados al lugar de referencia, y, en el caso de que la Junta Vecinal aceptase la propuesta de instalación de los mismos, sería el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia –sigue expresando ese informe– el que procedería al replanteo de los resaltos (no al pago de los mismos) y a la colocación de la señalización vertical oportuna (no la compra de señales).

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. El artículo 137 de la Constitución Española dispone que los municipios gozan de "*autonomía para la gestión de sus respectivos intereses*". Nuestra Ley Fundamental no especifica cuales son estos intereses, siendo el legislador estatal a través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) el que establece en el artículo 2 de esta norma que: *"para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del estado y la de las CCAA, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios … su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de las actividad pública de que se trate y a la capacidad de la gestión de la entidad local".*

Es pues norma aplicable a la cuestión objeto de la queja la antes citada Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Asimismo debemos traer a colación lo dispuesto sobre responsabilidad de los titulares de las vías públicas en materia de instalación y conservación de señales y marcas viales, tanto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como en el Reglamento General de Circulación de 2003 (Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre). Ya en el ámbito autonómico, y a tenor de lo argumentado en el informe remitido por el Ayuntamiento de Murcia a esta Defensoría, conviene realizar alguna consideración sobre lo dispuesto en la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de Murcia, prácticamente inaplicada en lo que afecta a la creación de entidades locales de ámbito territorial superior o inferior al municipio. Por último, y abundando en la necesidad de precisar la titularidad de las competencias para la instalación de los ralentizadores de velocidad objeto de esta queja, conviene asimismo detenernos en el análisis y alcance de lo dispuesto a los efectos que aquí nos interesan en el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Murcia (BORM nº 139, de 20 de junio de 2005) del que, como manifestación de su autonomía local, se dotó esa administración municipal hace ahora 15 años.

Tercera. Como decíamos, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local ha concretado una serie de materias en las que los municipios ejercerán en todo caso competencias. Así, el artículo 25.2. b) de la citada norma establece entre ellas: "*la ordenación del trafico de vehículos y personas en* ***las vías urbanas***"; debiendo entender por tales –así las define el Reglamento General de Circulación en su Disposición Final Primera, tres– todas las vías públicas situadas dentro de poblado, excepto travesías. En muy parecido sentido se expresa el anexo del Reglamento General de Carreteras, al entender por vía urbana "*cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones de una población, siempre que no se traten de travesías ni formen parte de una red arterial*".

Cuarta. El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que "***corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales***

y marcas viales. *También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación*". Prácticamente idéntico, y obviamos por ello su reproducción, es el tenor de lo expresado en el artículo 139 del Reglamento General de Circulación de 2003, que regula la responsabilidad en la señalización de las vías.

Quinta. Aclarado en los anteriores considerandos qué es una vía urbana, residenciadas en el municipio las competencias sobre las mismas y sentada la responsabilidad municipal en la instalación de señales y marcas viales, debemos proceder en este punto a abordar si, como dice el Ayuntamiento de Murcia, ellos son incompetentes en el caso que nos ocupa o, por el contrario, el Ayuntamiento no puede desinhibirse a ese respecto.

El artículo 24 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que: "para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio".

La Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de Murcia, dedica sus artículos 39 a 42 a regular las denominadas Juntas de Vecinos, a las que define como "órganos territoriales de gestión desconcentrada", estableciendo en el artículo 40 una serie de facultades (no se utiliza el término competencias) muy limitadas, que **habrán de especificarse en el acuerdo de creación de cada Junta Vecinal**.

Por su parte, el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Murcia, en su artículo 57 dispone que las Juntas Municipales, en su demarcación territorial y con carácter general, ejercerán las competencias conferidas por el Alcalde y/o la Junta de Gobierno, en materia de mantenimiento, conservación, reparación o reposición, en diversas infraestructuras, entre las que se relacionan los viales, caminos, carriles, plazas, calles, y en cualquier infraestructura general.

Ahora bien, esta Defensoría desconoce con la precisión que sería deseable la naturaleza jurídica de esas competencias, e incluso la de las propias juntas municipales. Y ello dado que ni el informe remitido por el Ayuntamiento a esta Defensoría, ni la comunicación suscrita por el Concejal de Descentralización, a la que antes hicimos referencia, contienen la necesaria fundamentación para ubicar en la Junta Municipal de Los Garres la competencia para la instalación de la referida señalización. Así, no se hace alusión en ninguno de esos dos documentos, ni a los acuerdos de creación de las juntas vecinales, ni al acto por el que el Alcalde de Murcia o la Junta de Gobierno del Ayuntamiento murciano –en virtud de lo establecido en el precitado artículo 57– confiere a esa Junta Municipal el ejercicio de la competencia en la materia que nos ocupa.

No obstante lo anterior, en el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, en el que el Ayuntamiento de Murcia fundamenta la competencia de la Junta Vecinal, en su artículo 60 se afirma que la asignación de competencias… facultará a la Alcaldía-Presidencia para dirigir la administración desconcentrada mediante instrucciones y circulares a propuesta del Concejal Presidente del Distrito. Y, en el artículo 61, que el Alcalde y el Pleno del Ayuntamiento velarán por la observancia de la legislación vigente… y el correcto funcionamiento de los servicios públicos gestionados por las juntas.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Esa administración debe asumir sus competencias en orden al correcto funcionamiento de los servicios públicos que gestionan las Juntas Vecinales, procediendo, conforme a las determinaciones de los informes técnicos elaborados al efecto, a adoptar las medidas necesarias para el incremento de la seguridad vial en el Carril de Los Sauras de la pedanía de Los Garres.

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR Dª XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 0311/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. En fecha 20 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Defensoría queja presentada por Dª XXX, a través de la cual denuncia ante esta Institución una situación que los vecinos del edificio donde reside, en la C/ Balsa de Paco, nº 1 de Ricote, se ven obligados a soportar, cual es la constante operación de carga y descarga que se viene efectuando a diario ante la fachada de su edificio, en zona no habilitada para ello, por vehículos destinados al transporte de mercancías. Refiere la interesada que esta situación se ha venido poniendo en conocimiento del Ayuntamiento de Ricote, en reiteradas ocasiones desde el año 2006, sin que hasta el momento se les haya ofrecido solución alguna.

Dichas operaciones de carga y descarga han ocasionado, según se ha podido comprobar en reportaje fotográfico aportado por la interesada, daños materiales en la fachada, entre ellos la caída de una farola sobre el edificio con el consiguiente rompimiento de tejas que cubren parte del tejado, así como otro tipo de desperfectos.

A ello añade la interesada que durante el tiempo en que el transporte de mercancía se encuentra realizando tales operaciones, se dificulta la entrada y salida de los vecinos del edificio. En este aspecto incide en que dos de estos vecinos son personas discapacitadas, una de ellas invidente y otra con problemas de locomoción o movilidad reducida, obligada a desplazarse en silla de ruedas, quienes ven incrementadas dichas dificultades, especialmente en este último caso, habida cuenta que una vez que dicho transporte se encuentra estacionado, no queda espacio disponible para que la silla de rueda pueda transitar, y por tanto, entrar o salir del edificio.

Segundo. Acusado recibo de la queja a su promotora, y admitida a trámite el día 29 de julio de 2009, se requiere en esa misma fecha al Ayuntamiento de Ricote para que informase por escrito sobre la queja planteada, lo que hace el 22 de septiembre limitándose a expresar que *"realizadas las oportunas averiguaciones, los problemas descritos en la queja han sido totalmente solucionados"*, pero sin especificar las medidas que se han adoptado para ello o los resultados alcanzados.

Tercero. Habiendo mantenido contacto telefónico esta Defensoría con la interesada el 28 de septiembre de 2009, nos informa de que realmente no ha habido solución respecto a la problemática expuesta, detallando en escrito presentado ante esta Institución, el día 16 de octubre de 2009, que la única actuación llevada a cabo desde ese Ayuntamiento ha sido la restitución de la farola que, según se indicó anteriormente, había sufrido daños como consecuencia de las operaciones de carga y descarga.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se configura como el Alto Comisionado de la Asamblea Regional designado por ésta para

supervisar la actividad de las Administraciones Públicas de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, la cual se encarga de definir las funciones que le son encomendadas, puede iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, omisiones y resoluciones de éstas, quienes han de actuar a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española, es decir, sirviendo con objetividad los intereses generales y actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Segunda. Del relato fáctico anteriormente indicado, se infiere que la pretensión perseguida por Dª XXX es lograr que se adopten por parte de la autoridad competente, aquellas medidas necesarias encaminadas a evitar las operaciones de carga y descarga en la fachada de su edificio, evitando así las daños y molestias descritos con anterioridad.

En relación a ello, es clara la competencia municipal al respecto, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuya dicción literal señala:

"1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

2. El Municipio, ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias:

……

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas".

En esta línea, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que:

"Se atribuyen a los municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias:

a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometen en dichas vías y la sanción de las mismas cuanto no esté expresamente atribuida a otra Administración".

Puesta de manifiesto esta atribución competencial, como poder público competente, el Ayuntamiento de Ricote considera que la problemática ha sido solucionada, tal y como expone en su informe. Sin embargo, las posteriores manifestaciones vertidas por Dª XXX, en su escrito de fecha 16 de octubre de 2009, así como el hecho de que dicho informe, carente de fundamentación, no indique las medidas que se han adoptado, hacen que esta Defensoría considere que, si bien se pudieron llevar a cabo cierto actos por parte de ese Ayuntamiento, como fue la restitución de la farola dañada, la problemática expuesta en la presente queja requiere un mayor nivel de atención y protección por parte de esa Corporación Local.

Tercera. En consonancia con lo anterior, queda patente que no se ha ofrecido solución alguna para controlar las operaciones de carga y descarga, con el fin de evitar que se puedan causar daños en la fachada del edificio, tal y como ha venido ocurriendo, y garantizar la libertad deambulatoria de los vecinos y demás usuarios de la vía, principalmente la de aquellos que por su especial situación deben desplazarse en silla de ruedas.

Para ofrecer una solución a esta cuestión debe invocarse el contenido del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado según el cual:

"1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones:

……

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación".

Por tanto, y en lo que respecta a dichas normas de circulación, deviene imprescindible hacer referencia al artículo 16 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, el cual además de establecer que las operaciones de carga y descarga deben realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios, señala que en todo caso estas operaciones respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos.

Teniendo en cuenta esta previsión, debemos acudir a lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título II de dicho Real Decreto, destinado a regular las normas generales y especiales de paradas y estacionamientos. Concretamente dicho Capítulo en el apartado primero de su artículo 91, señala que la parada y estacionamiento debe efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo.

Posteriormente, en su apartado segundo considera que las paradas o estacionamientos constituyen un riesgo para la circulación cuando se obstaculiza el tráfico de peatones o la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales.

Pues bien, lo cierto es que teniendo en cuenta los hechos descritos en la presente queja, esta Defensoría considera que no se está respetando las disposiciones normativas más elementales existentes en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, y seguridad vial. Por ello, en base a las prescripciones normativas y consideraciones formuladas anteriormente, a propuesta de la Asesoría Jurídica y en uso de las facultades que a esta Institución atribuye el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se considera necesario formular la siguiente,

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE RICOTE

Es conveniente que dicho Ayuntamiento proceda a intensificar la vigilancia policial en la referida zona, para prevenir y sancionar, en su caso, aquellas conductas, como las descritas, que puedan vulnerar la normativa existente en materia de circulación, habilitando asimismo zonas especiales debidamente señalizadas destinadas a realizar las operaciones de carga y descarga de los transportes de mercancías, en las que se disponga de espacio suficiente para evitar causación de daños materiales, o molestias innecesarias a los vecinos u otros usuarios de la vía.

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V.E. concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

X.14. Servicios Públicos, Universales, Esenciales y de Interés General

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y PUERTOS, SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 308/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 17 de julio de 2009 se registraba la entrada en esta Institución de una queja promovida por la Asociación de Vecinos XXX y varios vecinos de la pedanía murciana de Los Garres. En ella se expone que la empresa concesionaria del servicio público de transporte urbano en el municipio de Murcia procedió el pasado mes de abril a suprimir diversas expediciones de autobús en cuatro líneas (7, 27, 12 y 30) que cubren las necesidades de transporte público de varios barrios y pedanías del sur del municipio de Murcia. Esa supresión fue contestada por los usuarios de las mismas con movilizaciones sociales y vecinales y diversos escritos de protesta dirigidos tanto al Ayuntamiento de Murcia como a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio; escritos que –se afirma en la queja– se han saldado con el silencio y la pasividad por parte de esas administraciones.

La queja hace especial hincapié en la línea 12, que comunica Santiago y Zaraiche con Santiago el Mayor y Los Garres, y que de contar con dos autobuses que aseguraban la prestación del servicio cada cuarenta minutos, se ha reducido a un único autobús que precisa para ello setenta minutos. Esta reducción ha tenido una negativa incidencia en el derecho a la movilidad de los residentes de estas pedanías y usuarios de este servicio público.

Los promotores de la queja sostienen que esa supresión de expediciones incrementa la desigualdad e injusticia que supone que el Ayuntamiento de Murcia subvencione las líneas urbanas denominadas "rayos", olvidándose de las líneas que garantizan la movilidad de las pedanías.

Segundo. El escrito de queja de esta asociación va acompañado de otra serie de escritos de vecinos, con problemáticas específicas, que abundan en las consecuencias negativas de la supresión de estas expediciones: personas con movilidad limitada, mayores sin permiso de conducir dependientes del transporte público, jóvenes que acuden a centros de enseñanza de otras zonas del municipio de Murcia, usuarios y profesionales de hospitales, responsables de asociaciones ubicadas en la zona, etc.

Se acredita además que estos vecinos han acudido al Ayuntamiento de Murcia, administración que, a través del Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico, Transportes y Limpieza Viaria, emite un informe el 12 de mayo de 2009 con relación a una de las líneas de autobús citadas por los reclamantes. En ese informe se dice textualmente que: "*el horario, itinerario y explotación general de la línea 12 es competencia de la Dirección General de Transportes y Puertos de la Comunidad Autónoma, por lo que entendemos debe remitirse dicha queja a este organismo a los efectos oportunos*".

Tercero. Analizados la queja y sus documentos adjuntos, con fecha 27 de julio esta Defensoría adopta de la decisión de admitirla a trámite, comunicando en esa misma fecha tal circunstancia a sus promotores y requiriendo asimismo el preceptivo informe de la Dirección General de Transportes y Puertos de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Con fecha 8 de septiembre de 2009 se registra la entrada en esta Defensoría del informe remitido por la administración concernida y firmado por la Directora General de Transportes y Puertos de la citada Consejería. En ese informe se sostiene que el pasado 19 de enero del año en curso, y justificándolo en la crítica situación económica actual, la

empresa concesionaria del transporte urbano en el municipio de Murcia presentó escrito en esa Dirección General manifestando su decisión de reducir todas las expediciones no rentables que no forman parte de las aprobadas en el pliego de condiciones que rige la concesión, comunicando en ese mismo escrito los nuevos horarios que se pretendían implantar.

El informe hace alusión a la normativa de aplicación, y concretamente a lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Allí se sostiene que la reducción del número de expediciones que suponga una disminución de lo establecido en el título concesional deberá ser previamente autorizada por la administración. De lo contrario –cuando no está establecido en ese título– basta con que se comunique por los concesionarios a la administración con una determinada antelación, aportando una memoria justificativa y anunciándolo al público siete días antes de poner en práctica la medida. Según se afirma, en ninguna de las líneas señaladas por los promotores de la queja se produce disminución en el número de expediciones respecto de lo señalado en el título concesional. Además, se ha comprobado que esas medidas se han comunicado a la administración e informado a los usuarios, respetando las formalidades y los plazos establecidos.

En este informe de la Dirección General de Transportes también se expresa que dos de las líneas objeto de la queja (la 27 y la 30) tuvieron ampliación de expediciones por una petición del Ayuntamiento de Murcia, quien, según la concesionaria, se comprometió a sufragar el gasto de ese incremento de expediciones, y que, "en la actualidad, habiendo cesado dicha ayuda, la empresa no puede mantener las expediciones". Respecto de las líneas 7 y 12 se afirma que se está a la espera de que la empresa concesionaria remita sendos informes sobre los tiempos de espera de los usuarios en las distintas paradas.

También se recoge en el informe remitido por la administración que todas las líneas de referencia son coordinadas con el Ayuntamiento de Murcia, administración con la que se mantienen reuniones frecuentes para solucionar los problemas que se van planteando en torno al transporte urbano del municipio, y que se podría exigir a la empresa concesionaria la reposición de las expediciones suprimidas, o prohibir su supresión, si hay razones de "interés general" debidamente justificadas.

Por último, se sostiene que esa Dirección General está estudiando una propuesta de reorganización de todas las líneas presentada por la empresa concesionaria, que podría solucionar alguno de los problemas planteados en la queja.

Cuarto. Analizada por esta Defensoría la configuración de las distintas líneas de autobús objeto de la queja, y constatado que son numerosos los barrios y pedanías de Murcia a las que dan servicio, parece evidente que la reducción de expediciones realizada por la empresa concesionaria tiene efectos sobre un potencial de usuarios de este servicio público bastante elevado. Y ello hasta el punto de que la problemática ha sido abordada recientemente en el seno de un pleno municipal ordinario del Ayuntamiento de Murcia, celebrado el pasado 29 de octubre. Consultada el acta de la citada sesión plenaria se constata que en la actualidad el gobierno municipal de Murcia, de manera conjunta con la administración regional, y a través de la Entidad Pública del Transporte creada en 2006 para coordinar las actuaciones en materia de transporte en la región, están trabajando tanto en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, como en un Estudio de Reordenación del Transporte Público.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del

Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. En virtud de lo establecido en el artículo 149.1.29ª de la Constitución Española y de lo prevenido en el artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma tiene atribuidas competencias exclusivas respecto del transporte que no exceda de su ámbito territorial. Así ha quedado también establecido por el Tribunal Constitucional en la importante Sentencia 118/1996, de 27 de junio, declarando inconstitucionales y nulos los preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que suponían una invasión del Estado en las competencias de las Comunidades Autónomas.

Tercera. No obstante lo anterior, es norma aplicable a la cuestión objeto de la queja la antes citada Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, así como su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Debemos asimismo traer al caso las disposiciones de aplicación en materia de competencias municipales contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Por último, también hemos de hacer mención a la Ley 3/2006, de 8 de mayo, de Creación de la Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia, que su exposición de motivos define como un órgano de concentración de competencias que va a permitir la progresiva implantación de soluciones racionales y eficientes a los problemas de transporte en áreas de gran dinamismo demográfico, económico y social, como es el caso de Murcia.

Cuarta. Al objeto de despejar desde un primer momento las dudas en torno a la administración competente en la materia que nos ocupa, como ya quedó dicho, y en virtud de lo establecido tanto en la Constitución Española (149.1.29ª) como en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (10.1.4), la competencia sobre los transportes que discurran íntegra y exclusivamente por el territorio de una comunidad autónoma es exclusiva de la misma. Ahora bien –y así lo podemos deducir de una lectura conjunta de la STS de 17 de abril de 2000 y de la STC 118/1996 de 27 de junio– en la regulación de los transportes pueden incidir otros títulos competenciales que correspondan al Estado en virtud de las respectivas atribuciones constitucionales. Entre esos títulos se encuentran las bases del régimen jurídico de la administración local (artículo 149.1.18 de la Constitución Española), que no pueden ser desconocidas por la legislación autonómica en la materia.

Así, la Ley de Bases del Régimen Local dispone en su artículo 25.2 que "el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: … El Transporte público de viajeros"; añadiendo en el artículo 26.1 que "los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: … d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes: Transporte colectivo, urbano de viajeros". Y concluye el artículo 86.3 señalando que "Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: … transporte público y de viajeros".

En la jurisprudencia señalada se pone de relieve la dificultad que entraña concretar el interés respectivo en relación a cada materia de cada una de las administraciones implicadas, habida cuenta de que sobre esa materia pueden incidir varios poderes autónomos. En estos casos, sigue afirmando la jurisprudencia, la distribución de competencias se hará en función del interés predominante, o bien creando fórmulas

de coordinación entre los distintos poderes concurrentes. Básicamente es la solución por la se ha apostado en nuestra comunidad autónoma con la creación de la citada Entidad Pública del Transporte de Murcia, de la que forman parte nuestra Comunidad Autónoma y los municipios que en ella decidan integrarse, como ha sido el caso de Murcia. En el artículo 5 de su Ley de creación se afirma que: "La Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia ejercerá dentro de su ámbito territorial limitado a los municipios que se integren en la misma, las competencias que, en materia de servicios regulares de transporte de viajeros interurbanos y urbanos, correspondan a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a los municipios que se hayan integrado y hayan delegado competencias en la misma a través del correspondiente convenio".

Quinta. En el artículo 4.1 de la citada Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que recoge los principios que han de regir el transporte de los ciudadanos, se afirma que los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las **personas con capacidad reducida**, así como a las **zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso**.

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 67 de la citada norma, las líneas objeto de la queja y afectadas por la reducción de expediciones, forman parte de un servicio de transporte público regular, permanente y de uso general.

En el artículo 20 de esa misma ley se afirma que la administración, cuando existan motivos sociales que lo justifiquen, podrá imponer a las empresas titulares de servicios regulares de viajeros obligaciones de servicio público, entendiéndose por tales aquellas que la empresa no asumiría, o no lo haría en la misma medida y condiciones, si considerase exclusivamente su propio interés comercial. Cuando se realice la imposición de obligaciones de servicio público, ya consistan las mismas en reducciones o bonificaciones tarifarias o en la prestación de servicios o realización de actividades económicamente no justificados, la administración vendrá obligada a compensar a las empresas del coste de la obligación, a no ser que la misma venga impuesta expresamente en el título habilitante con el carácter de no indemnizable con cargo a aportaciones económicas distintas de las tarifarias. Algo similar se dispone en el artículo 77 del reglamento que desarrolla la norma que comentamos, cuando expresa que la administración, de oficio o a instancia de los usuarios, podrá acordar, justificando el interés general y previa audiencia del concesionario, aquellas modificaciones de las condiciones de prestación previstas en el título concesional que resulten necesarias o convenientes para mejorar el servicio. Ahora bien, la modificación del título concesional deberá mantener el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación de la concesión.

Como ya quedó expuesto en los antecedentes fácticos, el título concesional del servicio de transporte público del municipio de Murcia no incluía las expediciones de las líneas objeto de esta queja, por lo que no cabe obligar, sin más, a la empresa concesionaria a su mantenimiento. Abundando en ello, el artículo 82.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres previene que salvo que en el título concesional esté expresamente previsto un régimen diferente, las modificaciones del calendario, número de expediciones u horario realizadas por el concesionario se ajustarán a las siguientes reglas:

Las modificaciones de calendario u horarios, así como el aumento permanente del número de expediciones inicialmente establecidas en el título concesional, deberán ser comunicadas por los concesionarios a la Administración con una antelación mínima de quince días, pudiendo ésta prohibirlas o limitarlas en cualquier momento por razones de interés general debidamente justificadas, que deberán explicitarse.

Por su parte, y en lo que nos ocupa, la reducción del número de expediciones que suponga una disminución de lo establecido en el título concesional deberá ser previamente autorizada por la Administración, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 77. En cualquier otro supuesto dicha reducción podrá realizarse conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Esto es, la administración competente podría prohibir o limitar esa reducción de expediciones.

Sexta. De otro lado, y sin contradicción alguna con lo anterior, también cabe reproducir lo expresado en el primer punto de ese artículo 82 del mismo Reglamento. Allí se afirma que "la administración, cuando existan razones objetivas que lo justifiquen, podrá, oído el concesionario, introducir modificaciones obligatorias en el calendario, número de expediciones y horario del servicio". En efecto, entre las facultades de la administración respecto a esta forma de gestión indirecta del servicio público está la del "*ius variandi*" para introducir aquellas modificaciones que exija la realización de un mejor servicio, pero siempre con la obligación de mantener el equilibrio económico financiero de la concesión. Lo que, definitivamente, nos deja residenciado el problema que abordamos en el más puro ámbito de la voluntad y oportunidad políticas, en cuya sede se habrá de decidir sobre el asunto que se ventila.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y PUERTOS DE LA CARM

La Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia, junto a las administraciones con competencias en la prestación del servicio público de transporte urbano que en la actualidad trabajan en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y en el Estudio de Reordenación del Transporte Público en el municipio de Murcia, deberían tratar de objetivar el derecho de los ciudadanos a la movilidad a través del transporte público, tanto en esos instrumentos de estudio y planificación citados, como en su posterior implementación a través de normas jurídicas.

SUGERENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y PUERTOS DE LA CARM

Hasta tanto no sea atendida la anterior recomendación, en atención a las expectativas generadas y en función del perfil de los usuarios de las líneas afectadas por la supresión de expediciones, sería aconsejable que por la administración competente se reconsiderara el refuerzo de las mismas con la finalidad de minimizar los perjuicios ocasionados.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

X.15. Urbanismo

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA, DE LA QUEJA INCOADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 16/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 14 de enero de 2009, D. XXX presentó queja sobre dilación en la realización de unas obras de reparación por daños ocasionada en el garaje de su vivienda de protección oficial por las filtraciones de las lluvias en un muro medianero. Esta vivienda y garaje fueron adquiridas a la empresa XXX en enero de 2006.

A lo largo del expediente se constata que la empresa XXX ha intentado poner solución al problema mediante colocación de tela asfáltica o instalación de desagües en el suelo de la plaza de garaje o realización de canaletas de canalización en las bases de los muros afectados, pero sin dar cumplimento a la orden de obras de los servicios técnicos de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de 23 de julio de 2007, consistente en que "bajo dirección técnica competente, se procederá a adecuar la coronación del muro medianero, de forma que sea capaz de evacuar todas las aguas que reciba del exterior, de forma eficiente, impermeabilizando adecuadamente el contacto del mismo con la obra nueva realizada. Con posterioridad se procederá a igualar paramentos de sótano aparcamiento con pintura. Plazo de ejecución: 30 días".

Consta asimismo en el expediente de queja, el expediente S.A.V. 00057/2006, incoado a la mercantil como consecuencia de las deficiencias e incumplimientos mencionados.

Segundo. El 25 de marzo de 2009 el interesado nos aporta nueva resolución de 26 de enero de 2009 dictada por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que reitera la orden de obras expresada en su día por los servicios técnicos del Centro Directivo, concediendo un plazo de 30 días para la ejecución y apercibiéndole de ejecución forzosa si transcurrido este plazo no procediera al cumplimiento.

Contra la citada resolución concede recurso de alzada, que no consta se haya interpuesto.

Asimismo pone en nuestro conocimiento que la mercantil en cuestión ha enviado personal para poner nuevos remedios a las filtraciones, pero sin dar cumplimiento de nuevo a las medidas establecidas por el Director General de Vivienda y Arquitectura, avaladas por sus servicios técnicos.

Tercero. Con fecha 31 de marzo de 2009 se recibe informe de la Jefe de Sección de Régimen Sancionador de Vivienda en la que se informa sobre los hechos acaecidos, dándonos a conocer la orden de obras de 26 de enero de 2009, señalando que de no cumplirse por la promotora se iniciará un procedimiento sancionador.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida por la Ley

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, por el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968, y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. El origen de la queja radica en unos defectos constructivos en una vivienda de protección oficial, consistentes en síntesis en filtraciones pluviales por un aislamiento deficiente.

En este sentido es evidente la responsabilidad "decenal" de la constructora, reconocida en el artículo 17.1.a) de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, respecto de vicios que afecten a "la cimentación, soportes, vigas, muros de carga o elementos estructurales que comprometan la resistencia mecánica o estabilidad del edificio". Por su parte, el artículo 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968 dispone que "Si en el transcurso de cinco años, desde la calificación definitiva, se manifestasen vicios o defectos de la construcción que hiciesen necesarias obras de reparación, podrá imponerse su ejecución al promotor o realizarlas a costa de éste", instrumentándose al efecto un catálogo de medidas de ejecución forzosa, entre los que se encuentra la multa coercitiva ex artículo 166 o la ejecución subsidiaria por mor del artículo 168 del citado reglamento.

Sin duda alguna, la realización de la obra de coronación e impermeabilización del muro medianero son actuaciones susceptibles de ejecución subsidiaria por ser un acto no personalísimo susceptible de realización por sujeto distinto del obligado (artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Finalmente, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda nos manifiesta en su informe de 31 de marzo de 2009 su intención de iniciar un procedimiento sancionador, pudiendo encontrar su tipificación en el artículo 153.C) número 6, sin perjuicio de las sanciones complementarias de la letra c) del artículo 155, ambos del Reglamento de 24 de julio de 1968, de Viviendas de Protección Oficial.

Sin embargo, desde esta Defensoría se entiende que con independencia de que las medidas de carácter sancionador fueran procedentes por su carácter ejemplificante para evitar futuros incumplimientos, es claro que éstas en nada solucionan las quejas del reclamante, que desde el 20 de octubre de 2006, fecha en la que presentó la primera denuncia ante la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, se ha visto involucrado en una vorágine de escritos, quejas y reclamaciones, a merced de los progresivos "arreglos de la promotora" que incumpliendo sistemáticamente la orden de obras dado por la administración ha dilatado su obligación de cumplimiento.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

El ordenamiento jurídico impone –en los términos del artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 168 Reglamento de las Viviendas de Protección Oficial– el deber legal de proceder a la ejecución subsidiaria de la orden de obras, por cuenta y a costa del obligado, pudiendo proceder a la exacción cautelar y anticipada a reserva de la liquidación definitiva del importe de los gastos, daños y perjuicios causados.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que la impidan, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA, DE LA QUEJA INCOADA POR Dª. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 17/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 14 de enero de 2009, Dª. XXX de 75 años de edad, y minusvalía del 66%, presentó queja sobre negativa del Ayuntamiento de Murcia a conceder licencia a la colocación de un ascensor en un edificio de viviendas antiguo, pues la escalera quedaría reducida a 0,70 metros, contraviniendo así lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de aplicación que exige un ancho de escalera de 1 metro.

La interesada aporta al expediente, acta de Junta General Extraordinaria de la comunidad de vecinos de su edificio de 15 de octubre de 2007 aprobando por mayoría la instalación del ascensor, informe de 23 de junio de 2008 del servicio de protección civil del Ayuntamiento de Murcia sobre incumplimiento de la normativa vigente salvo que se adopte "un criterio puntual para este tipo de situaciones", así como documentación acreditativa del 66% de minusvalía.

Segundo. Con fecha 16 de enero de 2009 se acusó recibo de la presentación de la queja, procediéndose previo sometimiento a la Junta de Coordinación y Régimen Interior a su admisión a trámite con fecha 17 de febrero de 2009 (notificación de 26 de febrero de 2009), solicitándose con esta misma fecha información al Ayuntamiento de Murcia (registro de entrada de 25 de febrero).

Tercero. Con fecha 6 de marzo de 2009, el Ayuntamiento de Murcia aportó informe explicativo, en el que se hace constar que con fecha 30 de enero de 2009, se había solicitado informe de excepción de cumplimiento de la ordenanza municipal a la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, estando aún pendiente de informe.

Cuarto. Con fecha 16 de abril de 2009, la Asesoría de esta Oficina contactó con personal de la citada Consejería, manifestándole este último que ya se había contestado al informe solicitado por el Ayuntamiento. No obstante, se requirió a esta Oficina una petición de información oficial, por lo que el 26 de abril de 2009 (registro de entrada en la Dirección General competente en materia de vivienda de 8 de mayo de 2009) se solicitó informe al respecto, satisfaciéndose dicho requerimiento con fecha 25 de mayo de 2009, indicándose efectivamente que el informe se había enviado al Ayuntamiento, indicando que la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, prevista en la Ley 5/1995, de 7 de abril, no está constituida, al no haberse procedido a su desarrollo reglamentario para la regulación de su composición y régimen de funcionamiento.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida básicamente por

la Ley 5/1995, de 7 de abril, por la que se establecen normas sobre condiciones de habitabilidad en edificios a minusválidos y de promoción de accesibilidad general a las viviendas.

En la citada ley se señala en su artículo 12.3 que "Los proyectos de reforma, rehabilitación o restauración de edificios, instalaciones y servicios de uso público existentes habrán de cumplir los requisitos exigidos a los de nueva construcción, salvo que la adaptación requiera medios técnicos o económicos desproporcionados respecto del costo total de la obra, en cuyo caso los itinerarios podrán ser, como mínimo, practicables.

En los supuestos excepciones de edificios existentes de características singulares que impidan el cumplimiento mínimo indicado en el párrafo anterior, los proyectos para poder ser autorizados por la Administración competente habrán de ser sometidos previamente al informe preceptivo y vinculante de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad".

En el caso que nos ocupa, la Administración competente está constituida por el Ayuntamiento de Murcia, que en cumplimiento del citado precepto legal, solicitó informe de excepción a la Dirección con competencias en materia de vivienda.

En este sentido, si bien sería posible que por parte del Ayuntamiento se aplicara directamente la ley en aplicación de su disposición transitoria segunda, en cuya virtud "Las prescripciones contenidas en la presente Ley prevalecerán sobre las eventuales determinaciones que se le opusieren contenidas en los planes urbanísticos y demás instrumentos de planeamiento, así como las ordenanzas municipales vigentes a su entrada en vigor", ello no legitima la declinación de la responsabilidad de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, al amparo de la falta de constitución de la citada Comisión por ausencia de desarrollo reglamentario, transmitiendo al Ayuntamiento que resuelva conforme a la Ley, Ordenanzas y normativa de aplicación.

Esta determinación no debe ser admitida por diversas razones: en primer lugar, la naturaleza del informe no es facultativa, en el sentido de que el Ayuntamiento pueda elegir entre solicitarlo o no, sino que por mandato legal es preceptivo y vinculante, es decir obligatorio en cuanto a su solicitud y su contenido, y en suma, determinante para la resolución del procedimiento.

Tampoco debe ser óbice para el cumplimiento del mandato legal, el hecho de que la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad no haya sido objeto de desarrollo complementario, pues la propia ley 5/1995, la define en su artículo 33.2 como órgano superior de carácter consultivo en materia de habitabilidad y accesibilidad, estableciendo sus funciones principales (entre ellas, la emisión de informes establecidos en la ley), presidencia y composición en su artículo 34, otorgando a la Dirección General competente en materia de vivienda la condición de órgano permanente encargado de los asuntos de la Comisión Regional de Habitabilidad y Accesibilidad.

Por lo expuesto, puesto que ya ha sido estatuida por la norma legal la existencia de la Comisión, sus competencias y su composición, su régimen legal vendrá constituido por la ley 9/1985, de 10 de diciembre, de órganos consultivos de la administración regional y supletoriamente por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto órgano colegiado. En suma no es imprescindible el desarrollo reglamento para el funcionamiento de la Comisión y el cumplimiento de las funciones que le son propias.

A mayor abundamiento, no parece razonable alegar la no constitución de la Comisión por

falta de desarrollo reglamentario, después de catorce años de vigencia de la norma de aplicación.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

La constitución y cumplimiento de funciones de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad es una exigencia que no debe ser dilatada por más tiempo, pues la Ley 5/1995, de 7 de abril, de normas sobre condiciones de habitabilidad en edificios a minusválidos y de promoción de accesibilidad general a las viviendas, por la que se creó hace más de catorce años, y el régimen jurídico de general aplicación a los órganos consultivos permite su funcionamiento, sin necesidad de esperar a un desarrollo reglamentario.

Asimismo, la emisión del informe vinculante sobre la instalación de un ascensor en un edificio donde reside una persona con discapacidad tiene carácter preceptivo y vinculante, siendo requisito legal imprescindible para que el Ayuntamiento pueda excepcionar los requisitos exigidos en la correspondiente Ordenanza.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 289/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 8 de julio de 2009 quedó registrada la entrada en esta Institución de una queja promovida por D. XXX, vecino del municipio de Cieza, en la que básicamente viene a manifestar su desacuerdo con la tramitación y conclusión de un expediente de infracción urbanística promovido contra él por el ayuntamiento de su localidad, y que deriva de la realización de unos actos de edificación y uso del suelo realizados, al parecer, sin la necesaria licencia u orden de ejecución, incompatibles con el planeamiento urbanístico y contrarios a la normativa urbanística de aplicación.

Muy resumidamente, el promotor de la queja describe que es propietario de una parcela en un paraje natural de la citada localidad, donde se asienta una sencilla y pequeña construcción de casi 40 años que ha venido utilizando como caseta agrícola, que hasta 2004 tenía una superficie de 25 metros cuadrados, construida con muros de ladrillo y techos de uralita. En el citado año 2004, y con la correspondiente licencia, realizó obras menores que amplió, ya sin licencia, en 2007, con una nueva construcción de 25 metros cuadrados que tenía por objeto poder albergar con garantías la maquinaria y herramienta propias de la labor agrícola. Como consecuencia de estas últimas obras el Ayuntamiento abrió expediente de infracción urbanística por el volumen total de la edificación (50 metros cuadrados), que concluye con la imposición de una sanción, que sumada al preceptivo pago del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y al interés practicado como consecuencia de la opción del infractor por el pago fraccionado de la sanción pecuniaria, arroja una cantidad a pagar de 7.593 euros.

Segundo. Se anexan a la queja varios documentos: la liquidación, validada por el Ayuntamiento, de la citada licencia de obras y pago del ICIO de 2004; una cédula de notificación, dirigida al infractor y suscrita por el Secretario General del Ayuntamiento de Cieza el 30 de octubre de 2008, que incorpora la última resolución del procedimiento sancionador que pone fin a la vía administrativa, con unos detallados antecedentes fácticos, la oportuna fundamentación jurídica y la imposición de las correspondientes sanciones al infractor, que consisten en una sanción pecuniaria y en la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su estado anterior a la infracción. También se adjuntan a la queja un plano de situación del inmueble y un par de fotografías del mismo.

Tercero. El día 23 de julio de 2009 se acusó recibo de la queja, adoptando por esta Institución la decisión de admitirla a trámite. Comunicada esa circunstancia al reclamante, fue practicado en esa misma fecha el necesario requerimiento de información al Ayuntamiento de Cieza.

Con fecha 13 de agosto de 2009 el Ayuntamiento de Cieza remite el preceptivo informe requerido por esta Defensoría. En él se contienen los antecedentes del procedimiento sancionador, una serie de consideraciones de orden jurídico y una conclusión. En los antecedentes se pone de manifiesto que la incoación del expediente sancionador se produce en noviembre de 2007 a raíz de una inspección realizada al paraje donde se ubica la construcción por los servicios de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Cieza. En un primer escrito de alegaciones contra esa incoación, registrado en diciembre de 2007, el infractor y promotor de esta queja estima que las reformas ejecutadas en su propiedad no son constitutivas de infracción, ya que su uso no es residencial sino compatible con el ya consolidado de "caseta agrícola", y que esa reforma comprende únicamente una superficie de 30 metros cuadrados, teniendo prevista también la supresión y derribo de parte de la caseta agrícola preexistente.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cieza, sobre la base del oportuno informe técnico, dicta resolución declarando la imposibilidad de legalizar los referidos actos de edificación y uso del suelo, sosteniendo que las obras se realizan sobre un edificio declarado "fuera de ordenación". Cabe reseñar además –así obra en el expediente– que el inmueble se encuentra ubicado dentro del ámbito territorial del Plan Especial de Protección de la Sierra de La Atalaya y El Menjú, Plan éste que forma parte del planeamiento urbanístico de Cieza como "Área de Planeamiento Incorporado". La citada resolución se notifica al interesado en marzo de 2008, que responde aportando al expediente un informe suscrito por un arquitecto técnico que no tiene efecto alguno dado que el arquitecto municipal se ratifica en la ilegalidad cometida y la valoración considerada. Así pues, sostenida en este último informe municipal, el Ayuntamiento realiza, ya en septiembre de 2008, una propuesta de resolución que de nuevo recibe alegaciones por parte del infractor, que, nuevamente, son desestimadas mediante una resolución en la que se impone al infractor una sanción que supera los 22.000 euros. Frente a esa resolución se interpone recurso de reposición que se estima parcialmente al considerar que, en efecto, las obras están destinadas a un uso agrícola y no residencial, pero vuelve a imponerse una sanción, sensiblemente más reducida dada la reconsideración municipal en torno al uso, pero en cualquier caso sosteniendo que las obras se han realizado sin licencia y consisten en la ampliación de la edificación, en la supresión y derribo de parte de la caseta preexistente, y en la

consolidación de la edificación tendente a aumentar la supervivencia de esa caseta agrícola declarada fuera de ordenación; lo que en opinión del técnico que suscribe el informe remitido a esta Defensoría conlleva una sanción sobre la totalidad de lo construido.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La normativa aplicable a la cuestión objeto de queja está constituida por el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, así como por el Plan General de Ordenación Urbana de Cieza de 1985, vigente tanto en el momento de la comisión de la infracción urbanística, como en el de la resolución del expediente. Hay que poner de relieve que ese Plan General fue objeto de una revisión y adaptación cuya aprobación definitiva fue publicada en el BORM el 31 de octubre de 2008; un día después de dictarse la última resolución sobre el asunto que nos ocupa y cuyo contenido es, básicamente, objeto de la queja.

Tercera. El artículo 207 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, establece que la legitimidad de la ejecución de los actos de parcelación, urbanización, construcción y edificación, así como de cualquier otro de transformación o uso del suelo y subsuelo presupone como requisitos esenciales: la vigencia de la ordenación conforme a esa Ley, y la obtención de licencia, orden de ejecución o autorización administrativa del correspondiente proyecto técnico cuando sea exigible. Por su parte, el artículo 221 del mismo texto legal reitera que todo acto de edificación y uso del suelo que conlleve su transformación está sujeto a licencia municipal. Es evidente, por tanto, que el promotor de la queja ha contravenido los anteriores mandatos legales.

Cuarta. En el artículo 94 de esa misma Ley del Suelo se regula el régimen de "fuera de ordenación", disponiendo que los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del planeamiento urbanístico que resultaren sustancialmente disconformes con las determinaciones del mismo, serán considerados fuera de ordenación. En ellos no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o que supongan un incremento de su valor de expropiación, **aunque sí las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida**. También se dispone en ese artículo que el planeamiento urbanístico debe señalar aquellos supuestos en que será de aplicación este régimen de fuera de ordenación, fijando los márgenes de tolerancia precisos para ajustar su alcance a las edificaciones incompatibles con la ordenación. Circunstancia esta última que no queda acreditada en el informe remitido a esta Defensoría por el Ayuntamiento de Cieza.

Una regulación similar a la plasmada en el analizado artículo 94 de la Ley del Suelo venía a establecer el –a la sazón vigente– Plan General de Ordenación Urbana de Cieza de 1985, cuando expresaba en su artículo 64 que: "en los edificios fuera de ordenación no podrán realizarse obras de restauración o consolidación, que conduzcan a aumentar su supervivencia, ni se podrán efectuar operaciones que produzcan incrementos de volumen o modernización del inmueble. Si se permitirán, en cambio, aquellas que vayan encaminadas a su conservación, higiene y ornato".

Con relación al régimen de "fuera de ordenación", la jurisprudencia ha declarado reiterada-

mente (STS, 15 de febrero de 1999) que la calificación de un edificio como fuera de ordenación no implica ni su inmediata desaparición, ni su condena como bien económico-social, por lo que la ley permite su uso y aprovechamiento y su conservación para la finalidad con que fue construido a cuyo efecto se permiten realizar en él pequeñas reparaciones que exigiera la higiene, ornato y conservación, considerándose como tales las obras de acondicionamiento de locales para adaptarlos a las nuevas necesidades de sus titulares, siempre naturalmente que la naturaleza del uso no fuera contra lo dispuesto por la normativa urbanística aplicable. Resulta acreditado, y así lo reconoce el Ayuntamiento en su última resolución, que el uso dado por el infractor a la instalación objeto de esas obras es el tolerado de caseta agrícola.

Quinta. El artículo 237 del citado texto refundido de la Ley del Suelo establece una clasificación de las infracciones urbanísticas en función del daño causado a los intereses generales, en muy graves, graves y leves, considerando como infracción urbanística muy grave "el incumplimiento de las normas relativas al uso y a la edificación que afecten a suelo ordenado como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres públicos, viales, equipamientos comunitarios, residencial para vivienda de protección pública y *espacios naturales protegidos*". Como ya quedó dicho, la edificación que origina el procedimiento sancionador afecta a un espacio natural que es objeto de un Plan Especial de Protección incorporado al planeamiento urbanístico de aquel municipio.

El artículo 238 del mismo texto de referencia afirma que las infracciones urbanísticas se sancionarán, en función de la clase de infracción de que se trate, con multa, en relación con el valor de lo realizado objeto de infracción, de acuerdo con los siguientes criterios: a) las infracciones muy graves se sancionarán con multa del 50 al 100 por 100 del valor de lo realizado. Y, a esos efectos, continúa el artículo 239, el cómputo de la valoración de las obras e instalaciones se efectuará de la siguiente manera:

1. En materia de edificaciones se tendrá en cuenta el valor de la obra realizada, salvo en el supuesto de que el promotor no hubiera atendido el requerimiento de suspensión de las obras, en cuyo caso, se tendrá en cuenta la valoración de la obra proyectada. Para la aplicación de los tipos porcentuales correspondientes, dicho valor se calculará para viviendas, mediante la aplicación del precio máximo vigente en el momento de comisión de la infracción para las viviendas de protección oficial; y para otras edificaciones, instalaciones o locales comerciales por el valor fijado para esta clase de inmuebles por la Consejería competente en materia de hacienda a efectos tributarios y, en su defecto, por el fijado por la Administración actuante, previo informe técnico y audiencia al interesado.

2. En materia de parcelaciones, por la diferencia entre el valor anterior y el de venta de los terrenos parcelados. Se calcularán, el primero de conformidad con las determinaciones relativas al valor del suelo de la legislación estatal y, el segundo, en función de los valores de mercado, que se fijarán por la Administración actuante, previo informe técnico motivado y audiencia del interesado.

3. Para otras obras, instalaciones o actuaciones no incluidas en los apartados anteriores, por el valor en venta de otras similares en características y emplazamientos, fijado por la Administración actuante, previo informe técnico y audiencia al interesado.

La Consejería de Economía y Hacienda de la CARM fijó ese módulo a través de la Orden de 19 de diciembre de 2006 por la que se aprueban los precios medios de mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para el 2007 y para superficie destinada a cuadras, cocheras, almacén, etc., y sobre su base

se acabó determinando la sanción pecuniaria impuesta al infractor.

Sexta. Del análisis sobre el ordenamiento que hemos reseñado, el arquitecto municipal y técnico que suscribe el informe remitido a esta Defensoría concluye que estamos ante una obra sin licencia, realizada sobre un edificio fuera de ordenación ubicado en un espacio natural protegido, de imposible legalización, y que constituye una infracción muy grave que se debe sancionar teniendo en cuenta la totalidad de la construcción, toda vez que las obras consisten en ampliación, reforma, supresión y derribo de parte de la antigua edificación, pero también consolidación de la misma para aumentar la supervivencia de una construcción fuera de ordenación.

Hemos de manifestar nuestra conformidad, en muy buena medida, con el procedimiento sancionador que examinamos; pero, a tenor de lo obrante en nuestro expediente, no creemos que esté suficientemente fundamentada en el informe que se remite a esta Defensoría la sanción por la totalidad de la construcción, incluyendo en la misma las obras de reparación amparadas por la licencia concedida en 2004, y en tal sentido debería constar una más precisa delimitación de las infracciones cometidas y de su alcance, todas vez que éstas deben sancionarse –es claro al respecto el precitado artículo 238– "en relación con el valor de lo realizado objeto de infracción".

Séptima. Además de lo anterior, y si bien es cierto que la posible concurrencia en el caso que nos ocupa de alguna de las atenuantes de la responsabilidad en materia de infracciones urbanísticas que recoge el artículo 241 del Texto Refundido de la Ley del Suelo: no intención de causar un daño grave a los intereses públicos, la inexistencia de beneficio económico derivado de la infracción, y la escasa magnitud física y económica del daño producido, ya ha podido fundamentar la imposición de la sanción en su porcentaje más bajo posible, que el artículo 238 de la Ley de referencia fija para las infracciones muy graves en el 50% del valor de lo realizado, creemos que también concurren en el caso circunstancias que deberían haber sido tenidas en cuenta para un más efectivo cumplimiento del principio de proporcionalidad que debe respetar todo procedimiento administrativo sancionador, garantizando, como así se exige en el artículo 131.3 de la LRJAC-PAC, la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.

Así, el artículo 21 del Plan Especial de Protección de la Sierra de La Atalaya y El Menjú dispone que se prohíbe con carácter general cualquier edificio, y en particular los aprovechamientos urbanísticos de carácter residencial, pero establece entre otras excepciones a esta prohibición los edificios aislados con destino a caseta agrícola, que, cierto es, *tendrán una superficie máxima de 16 m^2 y requerirán una parcela mínima de 2.000 m^2* (artículo 42 del Plan).

De otro lado, el artículo 24 de ese Plan zonifica todo su ámbito territorial con hasta cinco distintos niveles de protección: zonas de especial protección (paisajística, rural, arqueológica); zonas de conservación compatible, zonas de restauración ambiental y paisajística, zonas ribereñas y zonas agrarias. Dentro de las últimas –zonas agrarias– se ubica (zona agraria de El Argaz) la edificación objeto de infracción. Para esas zonas agrarias, el artículo 33 del Plan Especial delimita los usos preferentes, compatibles e incompatibles, sosteniendo que es un uso compatible (33.2.c) la creación de infraestructuras para su uso agrícola, cultural o educativo. Son usos incompatibles en esta zona cualquiera que conlleve una alteración grave de los valores agroambientales, el cambio de uso del suelo o transformaciones del mismo que conlleven una pérdida de la cubierta vegetal y las actividades agrícolas que impliquen roturación de nuevas áreas para cultivo. En ninguno de esos tipos cabría subsumir, en nuestra opinión, la conducta del promotor de la queja.

Por último el artículo 39 del Plan establece las condiciones estéticas de las edificaciones, afirmando

que el tipo de cubierta o tejado será de teja árabe o de cañón en barro cocido y color natural, prohibiéndose expresamente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, plástico y demás materiales que desentonen con el conjunto, y afirma que el Ayuntamiento establecerá un programa de subvenciones en colaboración con la Administración Regional para que los edificios existentes adapten su cubierta a estas condiciones estéticas. Cabe destacar que entre las obras objeto de sanción se encuentra la sustitución de un tejado de uralita –material de construcción hecho a base de cemento y fibras, explícitamente prohibido por el citado PEP– por otro de teja árabe.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir la siguiente

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CIEZA

Constatado en el presente caso que no se ha realizado un adecuado ejercicio de subsunción de los hechos concretos en el tipo legal, las resoluciones recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora de ese Ayuntamiento deberán contener en el futuro una correcta delimitación de las concretas conductas infractoras y de su alcance sancionador, garantizando la adecuación de las sanciones al principio de proporcionalidad.

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 0375/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 24 de agosto de 2009 se registraba la entrada en esta Institución de una queja promovida por D. XXX, vecino del municipio de Librilla, en la que denuncia los perjuicios que se le están ocasionando por un retraso injustificado del Ayuntamiento de aquella localidad en la expedición de una licencia de primera ocupación de una vivienda de su propiedad.

El promotor de la queja relata en su escrito las distintas fases por las que, desde 2005, ha atravesado la realización de su vivienda: visado técnico del proyecto, solicitud de licencia de obra mayor y obtención de la misma, pago de los preceptivos impuestos y fianzas, etc.

Con fecha 24 de enero de 2007, una vez construida su vivienda, el reclamante presenta ante el Ayuntamiento de Librilla la solicitud de licencia de primera ocupación de esa vivienda, imprescindible para poder contratar los servicios básicos de la misma: suministro de agua potable, electricidad, etc. Según expone, esa solicitud es atendida seis meses después, cuando en el mes de julio de 2007 los técnicos del Ayuntamiento supervisan la vivienda, momento en el que –así lo afirma el promotor de la queja– les comunica su intención de dividir una buhardilla diáfana existente en la parte superior del inmueble, para lo que los técnicos le sugieren que procediese antes a solicitar a tal fin una licencia de obra menor.

En ese mismo escrito el reclamante expone que procedió, con fecha 12 de julio de 2007, a presentar solicitud de licencia de obra menor, que, pasado el mes, él entendió otorgada por silencio positivo en virtud de lo expresado a ese respecto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Hasta el día de hoy, sostiene el reclamante, no ha recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento de Librilla, ni respecto a la licencia de obra menor, ni respecto a la licencia de primera ocupación. Y ello pese a que en varias ocasiones, tanto en 2008 como en 2009, ha registrado en el Ayuntamiento las oportunas solicitudes a ese fin dirigidas. Pasado el tiempo y por recomendación, según expone, de la Dirección General de

Vivienda y Arquitectura, solicita de esta Defensoría, entre otras cosas, que le sea expedida de una vez por todas la licencia de primera ocupación de su vivienda, que se revise su expediente y otros paralizados sin motivos en el Ayuntamiento de Librilla, que le sean devueltos la fianza y los impuestos pagados, más los intereses indebidamente cobrados por la administración municipal, y que sea indemnizado por los daños ocasionados al no haber podido ocupar su vivienda ante la carencia de los servicios básicos que la hacen habitable.

Segundo. Con fecha 4 de septiembre de 2009 esta Institución adopta la decisión de admitir a trámite la queja, comunicando tal circunstancia a su promotor y procediendo, ese mismo día, a la práctica del oportuno requerimiento de información al Ayuntamiento de Librilla para que explique los motivos de la dilación en el otorgamiento de la mencionada licencia de primera ocupación denunciada por el reclamante, aportando en su caso la documentación necesaria para obtener una aclaración de la queja planteada.

Con fecha 20 de octubre de 2009 tiene entrada en esta Defensoría un oficio remitido por el Alcalde de Librilla, al que se acompaña informe emitido por el Jefe del Área de Urbanismo y Arquitecto Técnico de ese Ayuntamiento.

En el preceptivo informe del Ayuntamiento de Librilla se expresa que, efectivamente, existe solicitud de licencia de primera ocupación tramitada por el reclamante en fecha 24 de enero de 2007, que las obras a las que se refiere esa licencia estaban amparadas en la oportuna licencia de obra mayor, otorgada en noviembre de 2005 y que en julio de 2007, y a fin de comprobar que las obras se ajustaban a la licencia concedida, y así poder conceder licencia de primera ocupación, se comprueba por parte de los técnicos municipales que existe un exceso de obra en la vivienda, ya que la última planta del inmueble, que debía ser diáfana, ha sido dividida por muros y en ella se han ejecutado una cocina y un baño.

También, se sigue expresando en ese informe, en julio de 2007 el interesado fue informado de la obligación que tenía de legalizar el exceso de obra no amparado por la licencia concedida, y se sostiene, en abierta contradicción con lo expresado por el reclamante en su queja, que es con fecha 18 de enero de 2008 –y no en julio de 2007– cuando éste solicita licencia de obra menor para realizar los tabiques interiores con terminación de cocina y baño; presentando, a finales de ese mismo año 2008, un nuevo escrito en el que reclama la resolución del expediente de obra menor.

También se expresa en el informe remitido a instancias de esta Defensoría que el Ayuntamiento de Librilla emite, con fecha 7 de mayo de 2009, un informe técnico manifestando la obligación de legalización de las obras para poder otorgarle la licencia de primera ocupación, a la vista del cual se dicta una providencia de la Alcaldía, requiriendo sea emitido otro informe de los servicios técnicos municipales que verse sobre la legalidad o ilegalidad de las obras ejecutadas para iniciar, en su caso, expediente sancionador. Informes todos ellos que, por lo que se desprende del informe remitido a esta Institución, no acaban en ninguna resolución concreta dirigida al administrado, ni, según parece, fundamentan la incoación de expediente sancionador alguno.

Por último, el informe remitido por el Ayuntamiento de Librilla reconoce que, en el caso que nos ocupa, no se ha actuado con la debida premura, y que la dilación obedece a un exceso de trabajo en el área de urbanismo que ha sobrepasado los medios técnicos y humanos con los que cuenta. Sigue expresando ese informe que, no obstante lo anterior, el interesado ha estado informado en todo momento, aunque sea de manera verbal, del trámite en el que se encontraba su procedimiento, que en ningún momento se le ha causado perjuicio alguno, y que el causante de que

aún no esté concedida la licencia de primera ocupación y se haya visto paralizado el expediente, es el propio interesado al haber ejecutado un exceso de obra.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. La cuestión objeto de la queja tiene cobertura en el ámbito de nuestra Ley Fundamental en el art. 47 de la Constitución Española de 1978, que, en sede de los principios rectores de la política social y económica, reconoce el derecho que tienen todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y establece un mandato a los poderes públicos para que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es evidente también la necesidad de traer a colación el artículo 103 de nuestra Ley Fundamental, allí se advierte que la administración pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Tercera. Es asimismo normativa aplicable a la cuestión objeto de queja el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Además de la precitada norma, también es de aplicación al caso que nos ocupa la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, corolario del antes citado mandato que la Constitución Española acoge en su artículo 103.1.

Cuarta. El Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en su Título sexto, se ocupa de la intervención administrativa y de la disciplina urbanística, regulando la licencia en sus distintas modalidades como un instrumento fundamental para el control de los actos de edificación y usos del suelo. Así, el art. 214 c) expresa que la licencia de primera ocupación se exigirá para el uso de las edificaciones una vez terminada su construcción, rehabilitación o reforma, y que habrá de acreditarse para su otorgamiento que la obra realizada se ajusta a la licencia urbanística concedida**,** así como que reúne las condiciones técnicas de seguridad, salubridad y accesibilidad y que puede habilitarse para el uso al que se destina**.**

No procedería por ello la concesión de la citada licencia sí, como se sostiene en el informe municipal remitido a esta Defensoría, en la visita girada por la Inspección de Obras del Ayuntamiento de Librilla en julio de 2007, se comprobó que existía un exceso de obra no amparado por la licencia. Circunstancia ésta que no cabe deducir del escrito de queja, ya que allí se expresa que en esa visita citada los técnicos se limitaron a supervisar la vivienda, y el promotor de la misma les comunicó la intención –futura– de tabicar la buhardilla diáfana, para lo que se le aconsejó que solicitase licencia de obra menor. Algo que, según expresa, realizó de inmediato, el 12 de julio de 2007, registrando la oportuna solicitud en el Ayuntamiento, procediendo a obrar y dividir la buhardilla pasado un mes, al entender otorgada la licencia por silencio administrativo al amparo de lo expresado en el artículo 217.4 de la misma norma, donde se afirma que: "*El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia para obras menores será de un mes desde su solicitud ante el Ayuntamiento y para las restantes será de tres meses. Transcurridos dichos plazos sin haberse notificado acto alguno, se entenderán otorgadas las licencias por silencio administrativo, salvo si afecta-*

ran a bienes de dominio público o declarados de interés cultural (BIC), así como a los espacios naturales protegidos por la legislación sectorial correspondiente, en cuyo caso se entenderán denegadas". De la lectura del anterior artículo se desprende además que, efectivamente, el Ayuntamiento de Librilla no está adecuando su actuación a los plazos legalmente habilitados.

En los documentos que obran en el expediente, aportados por el promotor de la queja, éste no acredita que, efectivamente, solicitase licencia de obra menor en la referida fecha de 12 de julio de 2007. Es cierto que cuando relaciona la documentación que acompaña a la queja dice expresamente que uno de los documentos que adjunta es una fotocopia compulsada de "solicitud de licencia de obra menor" de fecha 12 de julio de 2007. Supervisado ese extremo por esta Defensoría, se comprueba que el único documento que anexa con esa fecha es un formulario de solicitud cumplimentado a mano y dirigido a la Alcaldía de esa localidad, en el que sólo se lee "adjunto expediente L.P.O. 11/2007", siglas éstas que aluden a una Licencia de Primera Ocupación, y no a una Licencia de Obra Menor (L.O.M.). En cualquier caso, esta circunstancia no infiere en el sentido dado a la presente resolución y a los recordatorios de deberes legales que incluye.

Quinta. De otro lado, pudiendo entender lo expresado en el informe municipal sobre el exceso de trabajo al que se ha visto sometida el área de Urbanismo de aquel municipio; exceso que, se afirma, ha sobrepasado los medios técnicos y humanos con que se cuenta, parece evidente la necesidad de recordar a esa administración local varios deberes legales derivados del ordenamiento jurídico administrativo. De un lado, tal y como se expresa en el reproducido artículo 217.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, el Ayuntamiento debería haber resuelto en un mes sobre la solicitud para el otorgamiento de licencia de obra menor, se pidiese ésta en julio de 2007 o en enero de 2008.

De otro lado, y ante las diversas solicitudes registradas por escrito desde el año 2007 ante ese Ayuntamiento en petición de la licencia de primera ocupación, esa administración local tiene el deber legal de contestarlas, resolviendo lo que sea oportuno. Como es sabido el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común impone a la administración la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Además el artículo 41 de la misma norma expresa que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes

RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES AL AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA

Para el más efectivo cumplimiento del deber legal de resolver el correspondiente expediente urbanístico, sería aconsejable que esa administración local se comprometiera a dictar, sin más dilaciones, aquellas resoluciones dirigidas a normalizar la situación urbanística de la vivienda objeto de la queja, estimando o desestimando, con el fundamento jurídico adecuado, las solicitudes realizadas por el promotor de la queja.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de

deberes legales o nos ponga de manifiesto las razones que lo impidan, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,

X.16. Vivienda

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 104/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. El 5 de marzo de 2009, D. XXX, presentó queja en esta Institución denunciando que la compañía suministradora negaba la contratación definitiva de suministro eléctrico a un edificio ubicado en el municipio de Pliego, de nueva construcción y con cédula de habitabilidad, por carecer el edificio en cuestión de transformador. También denuncia que no existe rampa de acceso, a pesar de que estaba prevista en el proyecto correspondiente, teniendo dos de los familiares del reclamante la condición de minusválidos.

Segundo. Con fecha 16 de marzo de 2009 se acusó recibo de la queja interpuesta, admitiéndola a trámite y requiriendo con dicha fecha información al Ayuntamiento de Pliego.

Tercero. En ausencia de contestación de la Corporación Municipal, y a pesar de haber mantenido conversaciones telefónicas con sus responsables, se volvió a requerir información al Ayuntamiento con fecha 14 de agosto de 2009, atendida en virtud de informe del Arquitecto Técnico Municipal, remitido a esta Defensoría por la Sra. Alcaldesa.

Cuarto. El promotor de la queja aporta documentación acreditativa de las minusvalías anteriormente referidas, certificado de la instalación eléctrica de baja tensión de su vivienda de 9 de enero de 2007 y licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento de Pliego de 8 de mayo de 2007.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Ámbito competencial

En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. Fundamento constitucional

El fundamento constitucional legitimador de la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, reside en el derecho al disfrute de una vivienda digna, consagrado en el artículo 47 de la Constitución, correspondiéndole a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y el establecimiento de las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Asimismo el artículo 49 del texto constitucional presta una especial atención a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos.

Entre estas condiciones necesarias para el disfrute de una vivienda digna, máxime si se trata de disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, se encuentran la garantía de las condiciones de accesibilidad en las mismas y el abastecimiento de las viviendas de los servicios esenciales, cuestiones éstas que determinan la necesidad de intervención desde esta Defensoría.

Tercera. Régimen Jurídico

En el presente caso es necesario cohonestar tres ámbitos sectoriales: En primer lugar el urbanístico, representado entre otros, en la normativa nacional, por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, por el R.D. 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística y en la normativa autonómica, por el Decreto legislativo 1/2005, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo; en el ámbito energético, destaca la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, desarrollada por el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y finalmente, en el ámbito de accesibilidad, resulta de aplicación la ley 5/1995, de 7 de abril, por la que se establecen normas sobre condiciones de habitabilidad en edificios a minusválidos y de promoción de accesibilidad general a las viviendas.

Todo lo anterior ha de enraizarse en los principios de protección y tutela que las leyes 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y 4/1996, de 14 de junio, por la que se establece el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, otorgan a los consumidores y usuarios, condición que también ostenta el promotor de la queja.

Cuarta. Obligaciones del promotor y de las administraciones públicas implicadas

La cuestión suscitada radica en la determinación de la responsabilidad de asunción de los costes de conexión a la red de distribución de energía eléctrica y adaptación del edificio a la normativa vigente en materia de accesibilidad, cuando las viviendas han sido entregadas, la promotora del edificio desaparecida y son los consumidores finales, las auténticas víctimas que soportan las deficiencias existentes en la construcción.

Al respecto, con carácter general, el artículo 16.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, atribuye al agente promotor la responsabilidad de "costear y, en su caso ejecutar (…) las redes generales de servicios (…) sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos establecidos en la legislación aplicable".

En este sentido, la legislación aplicable está constituida por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, dictado en desarrollo de la ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en cuya virtud, se obliga a las empresas distribuidoras (en el caso que nos ocupa, Iberdrola) a atender en condiciones de igualdad las demandas de suministro eléctrico que se les planteen en las zonas en las que operan, pudiendo exigir de los usuarios que sus instalaciones y receptores reúnan las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.

En este supuesto, y según datos ofrecidos por los boletines eléctricos de baja tensión de las instalaciones individuales aportadas al expediente, el edificio proyectado dispone de una instalación general con una potencia prevista de 75, 38 kW, lo cual, teniendo en cuenta que la edificación se ubica en suelo calificado como urbano, –según informe del arquitecto técnico municipal–, determina ex artículo 45.1.b párrafo segundo del R.D. 1955/2000 la

asunción por el solicitante del suministro (promotor) de los costes de las instalaciones de extensionamiento, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, y con las normas particulares de la empresa distribuidora aprobadas por la administración competente.

Por su parte, y en materia ya de accesibilidad, la ley 5/1995, por la que se establecen normas sobre condiciones de habitabilidad en edificios a minusválidos y de promoción de accesibilidad general a las viviendas, dispone en su artículo 14.1 que en los edificios de uso privado de nueva construcción de uso residencial existirá, al menos, un itinerario practicable que comunique cada una de las viviendas o viviendas-apartamento con las dependencias de uso comunitario, con los anejos a la respectiva vivienda, con el exterior de la edificación y en todo caso con la vía pública.

Determinadas las sustantivas exigencias normativas urbanísticas, energéticas y de accesibilidad, en cada municipio corresponde a los Ayuntamientos por mor del artículo 214 c) del decreto legislativo 1/2005, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, la licencia de primera ocupación, que se exigirá para el uso de las edificaciones una vez finalizadas. Mediante la misma, se acreditará que las viviendas reúnen las condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad y que pueden habilitarse para el uso al que se destina y, en su caso, que el constructor ha cumplido el compromiso de realización simultánea de la urbanización.

Corroborando la disposición autonómica, pero en desarrollo de la normativa básica estatal, el R.D. 3288/1978, de 25 de agosto, de Gestión Urbanística, recuerda a los ayuntamientos que "no se permitirá la ocupación de los edificios hasta que (…) estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado".

Asimismo, en el ámbito de la accesibilidad, la ley 5/1995 antes referenciada, residencia la competencia de velar por el cumplimiento de la ley, en los ayuntamientos y consejerías a través de los respectivos "otorgamientos de licencias, autorizaciones, cédulas de habitabilidad, calificaciones de viviendas con algún régimen de protección pública y aprobaciones de instrumentos urbanísticos o medioambientales que fueren preceptivas".

No en vano el R.D. 1955/2000, de autorización de instalaciones de transporte, distribución y comercialización, reconoce este protocolo exigiendo a las compañías suministradoras para la contratación del suministro definitivo la correspondiente licencia de primera ocupación.

Por lo expuesto, constatado la responsabilidad municipal en la garantía en el suministro de los servicios esenciales y en el adecuado cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de las edificaciones, no es de recibo la respuesta emitida por el técnico municipal en el informe remitido al efecto, relativa a que la necesidad de transformador no se derivada del proyecto redactado, no pudiendo apreciarse que el suministro no era en baja tensión a simple vista, pues las conexiones eran subterráneas. En este sentido, consideramos que si el ayuntamiento a través del técnico competente no podía apreciar tales aspectos, sí podía al menos haberse cerciorado de su cumplimiento por otras vías, tales como el requerimiento de informe de la empresa distribuidora sobre la conformidad de las instalaciones, lo cuál de otro lado, según ha podido comprobar esta Defensoría, es práctica habitual en muchos ayuntamientos.

En cuanto al aspecto de la accesibilidad, el artículo 14 de la ley 5/1995 es claro al exigir la accesibilidad entre las viviendas de los edificios residenciales y las zonas comunes del edificio y la vía pública, no permitiendo la dilación en el cumplimiento de estas exigencias.

Finalmente, en atención a la protección que las administraciones públicas han de dispensar a los consumidores y usuarios, tal como dispone el artículo 20.1 de la ley 4/1996, de 14 de junio, por

la que se establece el Estatuto de Los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia en cuya virtud "Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas adecuadas para equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse el consumidor y usuario, individual o colectivamente" y habiéndose constatado la emisión de las correspondientes licencias sin la preceptiva comprobación de las exigencias requeridas para su dictado, entendemos sería procedente la incoación del correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, dirigido a paliar, de oficio, los graves daños ocasionados a los ciudadanos por la desatención de las obligaciones municipales.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir los siguientes,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL AYUNTAMIENTO DE PLIEGO

Corresponde a los Ayuntamientos la comprobación de que los nuevos edificios disponen de todos los servicios esenciales y cumplen con las condiciones de accesibilidad para minusválidos, en los términos establecidos por la normativa urbanística y de promoción de la autonomía personal en vigor.

RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE PLIEGO

Habida cuenta de que en este caso el Ayuntamiento de Pliego había emitido la licencia de primera ocupación de las viviendas del edificio en cuestión, le corresponde buscar la solución adecuada dirigida a la asunción de los costes económicos derivados de la subsanación de las deficiencias en materia de seguridad, salubridad y accesibilidad del edificio por cuya inexistencia debiera haber velado.

Es cuanto tengo el honor de comunicar a V.E. concediéndole expresamente el plazo de un mes, para que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, informe sobre si acepta esta Recomendación o, en caso contrario, manifieste las razones que lo impiden, informándole asimismo que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado, se podrá insertar en la página web de esta Institución.

Agradeciendo muy sinceramente la colaboración prestada hasta el momento, atentamente le saluda,

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRIGIDA AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO, DE LA QUEJA PRESENTADA POR D. XXX CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 153/2009

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 2 de abril de 2009, D. XXX presentó queja en la que se denunciaba la adjudicación por parte de Instituto de Vivienda y Suelo de una vivienda de promoción pública de titularidad autonómica en la que reside habitualmente, a su hermana en base a una documentación falsa. En concreto, se denuncia la presunta presentación de un empadronamiento falso en la citada vivienda, pues su residencia habitual era otra. Se solicita en suma la revocación de la citada adjudicación.

El promotor de la queja aporta volante de empadronamiento y censo electoral como documento justificante de su residencia en la vivienda de promoción pública.

Segundo. Con fecha 27 de abril de 2009, se acusó recibo y admitió a trámite la queja, procediéndose a solicitar con fecha 27 de abril de 2009

información al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia (registro de entrada de 11 de mayo de 2009).

Tercero. Con fecha 12 de junio de 2009 (registro de entrada en esta Defensoría de de 22 de junio de 2009) se remitió informe por el Instituto de Vivienda y Suelo, así como copia completa del expediente. De los mismos se infiere que para la adjudicación de la vivienda se solicitó entre otros documentos fotocopia del documento nacional de identidad, escrito de cesión de los derechos sobre la vivienda de la anterior titular a favor del adquirente, certificado de empadronamiento en la vivienda a regularizar, contrato con aguas de Murcia a nombre del nuevo adquirente y certificado de la Gerencia General del Catastro acreditativo de que el adquirente no dispone de otros bienes inmuebles urbanos o rústicos.

Cuarto. A finales del mes de julio, personal de la oficina del Defensor contactó telefónicamente con personal del Instituto de Vivienda y Suelo para consultar sobre la falta de un documento en el expediente reflejado como susceptible de aportación en la instancia normalizada de presentación relativo al Certificado emitido por el presidente de la Junta de Distrito que acredite el tiempo de ocupación de la vivienda, que pudiera justificar la residencia efectiva y real de la futura adquirente.

Se aprecia en la entrevista las dificultades que afronta el personal del Instituto para poder asegurar la residencia efectiva, evidenciándose la inexistencia de criterios homogéneos que permitan valorar los diferentes aspectos que pueden concurrir en la adjudicación de una vivienda de titularidad pública como puedan ser residencia efectiva o titularidad del documento de cesión de derechos.

Quinto. La razón de ser de la queja objeto de análisis radica en conclusión en que el adquirente de la vivienda no residía –presuntamente– en la vivienda, a diferencia del reclamante, pudiendo discutirse la actuación del organismo público en cuanto a la suficiencia de las pruebas acreditativas para la adjudicación de la vivienda.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. En aplicación del artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, a éste le compete en el ejercicio de sus funciones, formular a los organismos, autoridades y personal al servicio de las administraciones afectadas, advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Segunda. El fundamento constitucional legitimador de la intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, reside en el artículo 47 de la Constitución Española, en cuya virtud, *"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".* Este artículo se encuentra incardinado en el Capítulo III del Título I de la Carta Magna como principio inspirador de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección inspirará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, siendo exigible ante los órganos jurisdiccionales en función de la legislación que lo desarrolle, según reza el artículo 55 del texto constitucional.

Tercera. En cumplimiento del mandato reseñado en el fundamento anterior, el derecho a una vivienda digna ha sido objeto de desarrollo por la Ley de 15 de julio de 1954 sobre protección de vivienda de renta limitada y Reglamento de aplicación de 24 de junio de 1955, por el Real Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado por Decreto 2131/1963, de 24 de julio y 3964/1964, de 3 de diciembre; y, en el ámbito autonómico, además de la normativa citada, rige el Decreto 74/1997, de 4 de diciembre de Regularización de las situaciones de ocupación de las viviendas de promoción Pública, y el Decreto 54/2002, de 8 de febrero, por el que se regula la actuación del Instituto de Vivienda y Suelo en materia de promoción pública de vivienda.

Cuarta. Del análisis de la normativa en cuestión, resulta de especial consideración el Decreto 74/1997, de Regularización de las situaciones de ocupación de viviendas de promoción pública, en cuyo artículo primero s dispone que sólo los usuarios de las viviendas pueden solicitar la regulación jurídica objeto del citado reglamento, precisando en el artículo cuarto que *"… cuando el ocupante usuario real de la vivienda hubiese accedido a la misma por transmisión del adjudicatario o por quienes de aquél trajeren causa, se podrán regularizar las situaciones a las que hace referencia la presente norma sin necesidad de incoarse expediente expropiatorio, adjudicándose la vivienda al mencionado ocupante, siempre que éste acredite (…), la existencia por parte de los transmitentes de la realidad de la enajenación"*.

En el caso que nos ocupa, queda acreditado documentalmente que se produjo una transmisión a favor de Dña. XXX, hermana del promotor de la queja, en virtud de un contrato de cesión de derechos de la anterior titular, constando que la aportación dineraria para hacer efectiva dicha cesión provenía de la madre del reclamante y de la adquirente. Por su parte, se justifica la residencia de la adquirente mediante un certificado de empadronamiento, y recibo de agua.

Hasta ahora lo expuesto, nada perjudica la legalidad de la adjudicación realizada, siempre que por la administración se haya constatado que la adjudicataria es "usuaria real" de la vivienda, mediante cualquier comprobación materia y no meramente documental, como pudieran ser declaraciones de los vecinos, o incluso personación en el domicilio señalado por el reclamante investigando la realidad de la denuncia.

Señalado lo anterior, también es cierto que no se aporta por la norma en cuestión, criterio alguno que facilite la adjudicación en supuestos de conflictos como el aquí presentado, o en los que el título de transmisión aportado para la adjudicación no coincida con la residencia efectiva, o con los requisitos exigidos de renta, patrimonio o cualquier otro para ser beneficiario de una vivienda de promoción pública.

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas, y a propuesta de la Asesoría Jurídica, esta Defensoría ha decidido emitir el siguiente,

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

El Decreto nº 74/1997, de 4 de diciembre, de Regularización de las situaciones de ocupación de la viviendas de promoción pública, exige como requisito primero para la adjudicación de un vivienda acogida a dicho régimen, ostentar la condición de usuario real de la misma. Cualquier adjudicación ha de ir precedida de una comprobación real de dicho extremo, debiendo considerarse este criterio en el presente caso.

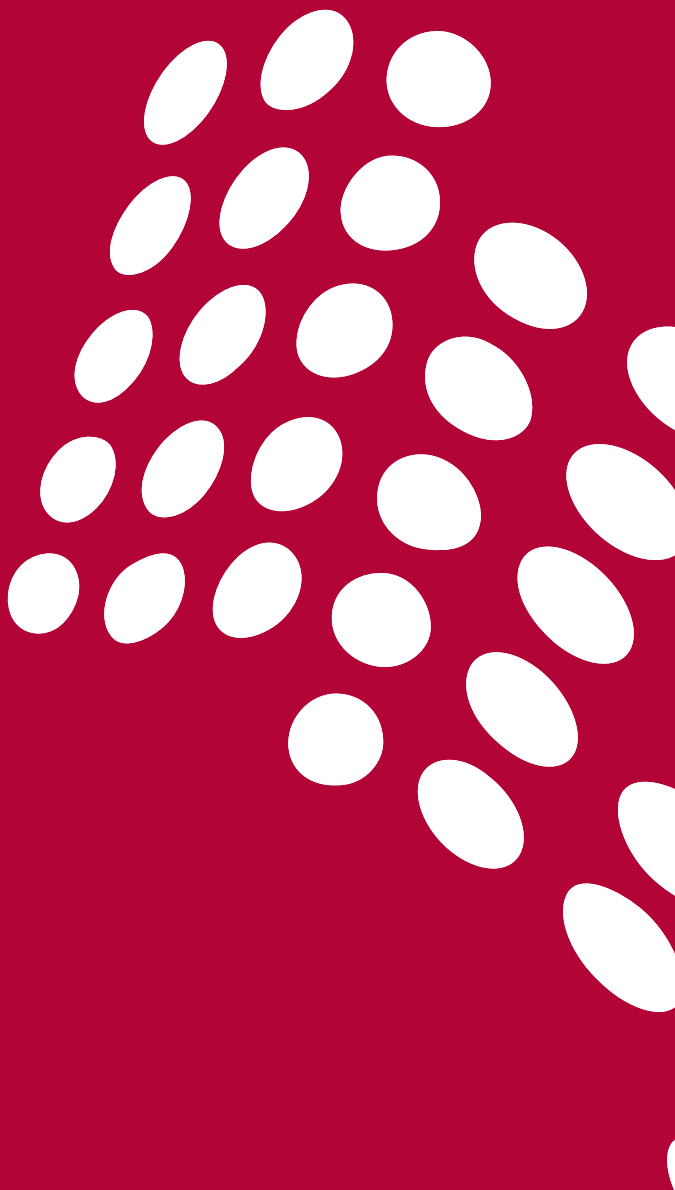
RECOMENDACIÓN AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

Sería conveniente que se aprobara una disposición complementaria al Decreto 74/1997, de 4 de diciembre, relativa a los criterios a tener en cuenta en la adjudicación de una vivienda

de promoción pública, y priorización de los mismos en supuestos de conflictos de intereses jurídicos dignos de protección.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe sobre la aceptación de las citadas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales o nos informe sobre las razones que lo impidan y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 27.1 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, reguladora de la Institución.
Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de los siete días siguientes a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se podrá insertar en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente,



defensordelpueblo
delaregióndemurcia

C/ Calderón de la Barca, 14- 2º 30001 Murcia
Telf.: 968 372544/ Fax 968 375213
www.defensor-rm.es